www.flacsoandes.edu.ec

Robert Austin Henry, Joana Salém Vasconcelos y
Viviana Canibilo Ramírez (compiladores)

LA VÍA CHILENA AL SOCIALISMO

50 AÑOS DESPUÉS

VOL 1. · HISTORIA

OCHOLIBROS

CLACSO

La vía chilena al socialismo 50 años después

Tomo I. Historia

Austin Henry, Robert. *La vía chilena al socialismo: 50 años después* / Robert Austin Henry; Joana Salém Vasconcelos; Viviana Canibilo Ramírez; compilado por Austin Henry, Robert; Joana Salém Vasconcelos; Viviana Canibilo Ramírez. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-722-769-7

1. Historia. 2. Historia de Chile. I. Salém Vasconcelos, Joana. II. Canibilo Ramírez, Viviana. III. Título.

CDD 983

La vía chilena al socialismo: 50 años después Vol. I / Kemy Oyarzún V. ... [*et al.*]; compilado por Robert Austin Henry; Joana Salém Vasconcelos; Viviana Canibilo Ramírez; prefacio de Faride Zerán; Marcelo Arredondo. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : CLACSO, 2020.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-722-770-3

1. Historia. 2. Historia de Chile. I. Oyarzún V., Kemy. II. Austin Henry, Robert, comp. III. Salém Vasconcelos, Joana, comp. IV. Canibilo Ramírez, Viviana, comp. V. Zerán, Faride, pref. VI. Arredondo, Marcelo, pref.

CDD 983

Diseño y diagramación: Eleonora Silva
Arte de tapa: Villy

La vía chilena al socialismo 50 años después

Tomo I. Historia

Robert Austin Henry, Joana Salém Vasconcelos y Viviana Canibilo Ramírez
(compilación)

OCHOLIBROS CLACSO

CLACSO
Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

CLACSO Secretaría Ejecutiva

Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva
Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial

Equipo Editorial

María Fernanda Pampín - Directora Adjunta de Publicaciones
Lucas Sablich - Coordinador Editorial
María Leguizamón - Gestión Editorial
Nicolás Sticotti - Fondo Editorial

LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES
CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE

Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana

La vía chilena al socialismo. 50 años después. Tomo I: Historia (Buenos Aires: CLACSO, noviembre de 2020).
Obra general ISBN 978-987-722-769-7
Tomo I ISBN 978-987-722-770-3

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723.
El contenido de este libro expresa la posición de los autores y autoras y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso previo del editor.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Estados Unidos 1168 | C1023AAB Ciudad de Buenos Aires | Argentina
Tel [54 11] 4304 9145 | Fax [54 11] 4305 0875 | <clacso@clacsoinst.edu.ar> | <www.clacso.org>

Índice

Prefacio. Otra vez el pueblo 11
Faride Zerán

Yo no voy a renunciar 15
Marcelo Arredondo

Agradecimientos 17
Los compiladores

La vía chilena al socialismo. 50 años después 19
Robert Austin Henry, Joana Salém Vasconcelos y Viviana Canibilo Ramírez

Cultura y feminismos

Unidad Popular: genealogías feministas interseccionales 31
Kemy Oyarzún V.

Educación y democratización en tiempos de crisis.
Alcances contemporáneos de la experiencia de la Unidad Popular 63
Leonora Reyes-Jedlicki, Luis Osandón-Millavil
y Fabián Cabaluz-Ducasse

Producción literaria y editorial durante la Unidad Popular 91
Matías Ayala Munita

Tesis sobre educación y cultura del proceso popular chileno (1970-1973) 109
Taeli Gómez Francisco y Juan Rubio González

Mujeres en la Unidad Popular: caminos de liberación 127
Sandra Palestro Contreras

Lucha popular y derechos

Los trabajadores y el sentido del socialismo en democracia 145
Márcia Cury

Voz del "poder popular", voz del aparato estatal.
Dialéctica sociopolítica y tiempos rotos de la "vía chilena
al socialismo" (1970-1973) 161
Franck Gaudichaud

La Historia es nuestra y la hacen los Pueblos 179
Ximena de la Barra

Imperialismo y desarrollo del sistema sanitario chileno desde la UP.
Intervencionismo de Estados Unidos en América Latina:
apuntes para su comprensión 201
Felipe Rodríguez Ulloa y Catalina Ganga-León

"¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!"
La Unidad Popular y el protagonismo de los trabajadores 221
Sandra Castillo Soto

Poder y partidos

Movimiento de Izquierda Revolucionaria y su lectura sobre la
Unidad Popular después del golpe de Estado de 1973 241
María Olga Ruiz

El Grupo de Amigos Personales 263
Patricio Quiroga Z.

Luchas sociales y alianzas políticas.
Actualidad de la epopeya de la Unidad Popular 283
Carlos Ruiz Encina

Diálogos de Fidel Castro y Regis Debray con la vía chilena
al socialismo. Legitimidad revolucionaria para el proyecto
de la Unidad Popular 301
Manuel Fernández Gaete y Roberto Ávila Carrera

La "Vía Chilena al Socialismo". El largo recorrido desde
el Frente de Acción Popular a la Unidad Popular 319
Isabel Torres Dujisin

Economía y reforma agraria

Revolución rural y protagonismo campesino (Chile, 1967-1973) 339
Eugenia Palieraki

Economía y correlación de fuerzas en el gobierno de Allende 1970-1973..... 361
Orlando Caputo y Graciela Galarce

El campesinado y la política agraria de la Unidad Popular (1970-1973).
Las políticas agrarias en los años 1960 y 1970 397
Jacques Chonchol

La "vía marítima" al socialismo. El transporte marítimo
de comercio exterior como límite geoeconómico de la Unidad Popular
en el sistema-mundo capitalista, 1970-1973 415
Luis Garrido Soto

Revolución chilena y batalla de la producción agraria.
Sabotajes patronales y estímulos al trabajo campesino..... 439
Joana Salém Vasconcelos

Luchas indígenas y territorio

¿Revolución campesina o levantamiento mapuche?
Tensiones en La Araucanía durante la revolución socialista 1970-1973 469
Fernando Pairican, Marie Juliette Urrutia y Claudio Alvarado Lincopi

Movimiento Campesino Revolucionario. Luchas mapuche, política de clase y 'proyecto socialista' durante el gobierno de la Unidad Popular (Cautín, 1970-1971) 495
Jaime Navarrete Vergara

De corridas de cerco al control territorial. Panorámica de la resistencia mapuche durante tres décadas, del Movimiento Campesino Revolucionario a la Coordinadora Arauko-Malleko (1970-2002) 521
Filip Escudero Quiroz-Aminao y Paula Malhue Torres

Cambio generacional mapuche y Unidad Popular 539
José Luis Cabrera Llancaqueo y Pedro Canales Tapia

Pueblo mapuche: entre la Unidad Popular y los primeros años de la dictadura cívico-militar (1969-1978) 561
Sergio Caniuqueo Huircapan

Imperialismo y contrarrevolución

Las derechas en la calle: el boicot a la "Vía chilena al socialismo" 601
Aníbal Pérez Contreras

El rol de Estados Unidos en el derrocamiento del presidente Allende, según el Informe Church 619
Luis Corvalán Márquez

Chile, 1970-2020: revolución, golpe, dictadura y... ¿revolución? 635
Xabier Arrizabalo Montoro

Estados Unidos, Escuela de las Américas y la cuestión militar en Chile ... 667
Pablo Ruiz y Robert Austin H.

Sobre los autores, las autoras y compiladores 697

Prefacio
Otra vez el pueblo

Faride Zerán

A 50 años del triunfo de Salvador Allende en las urnas, revisitar ese tiempo de utopías, compromisos colectivos, de épicas, éticas y estéticas construidas en plural, no resulta solo un ejercicio de memoria sino una demanda necesaria de reflexión política a la luz de un presente que en Chile parecía congelado. Pero el estallido social del 18 de octubre del 2019 hizo saltar todos los relatos con que las élites de manera transversal, desde la derecha a la izquierda concertacionista; desde el empresariado hasta la tecnocracia de centro izquierda, habían construido para este "jaguar" de América Latina, para el "campeón del barrio" en materia de estabilidad económica y social. Un campeón que ocultaba las exorbitantes cifras, escandalosos en niveles de exclusión social, concentración de la riqueza e inequidad.

En 1970, miles de hombres, mujeres y niños se volcaron a las calles para celebrar el triunfo electoral del primer Presidente socialista elegido democráticamente, y las calles de Chile se colmaron de pueblo celebrando el triunfo y apostando a un futuro con derechos sociales que históricamente se les había negado. Medio siglo más tarde,

los hijos y nietos de ese mismo pueblo que celebró el 4 de septiembre de 1970, irrumpe en el Chile neoliberal del 2020 para cambiar la constitución de Pinochet y redefinir los términos de un pacto social que ahora realmente los incluya.

Sin dudas hay una simetría entre el Chile del triunfo de Allende y el que emerge hoy, luego del estallido y del plebiscito del 25 de octubre último, en el que votaron más de siete millones y medio de personas, donde más del 78% decidió no solo la urgencia de un cambio constitucional, sino también del modelo económico. Mientras tanto, la élite arrinconada en el 21% que rechazó el cambio constitucional insiste en no escuchar las demandas de salud, educación y pensiones dignas, entre otras que incluyen a los pueblos originarios, y a un Estado que pueda garantizar dichos derechos.

Existe una simetría dada por la irrupción del pueblo como actor fundamental de la gesta de 1970, y del 18 y 25 de octubre recientes, pese a que en el Chile actual, a diferencia de 1970, los partidos de las izquierdas y del progresismo no solo están en crisis de proyectos y de credibilidad sino, además, están muy lejos de representar las demandas de los amplios sectores de la sociedad chilena. En 1970, al contrario, los partidos políticos estaban legitimados.

En las páginas siguientes están los contextos y análisis de los distintos sectores sociales que hicieron posible y luego protagonizaron la épica de los 1000 días de Gobierno Popular. Es un relato coral de un tiempo de pasiones y de esperanzas, de trabajo incesante, de debates ásperos entre las distintas visiones de las izquierdas a la sombra de los modelos que proyectaban el bloque de la ex Unión Soviética, y la Revolución Cubana con Fidel y el Che. Entre medio, Salvador Allende y su revolución con empanadas y vino tinto, se proponía a una revolución democrática que abrió las conciencias y las compuertas participativas del pueblo. Sin necesidad de que lo empujaran, el pueblo chileno hace 50 años se organizó no solo en las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) y los Comités de la UP (CUP), sino en los cordones industriales, en las organizaciones de campesinos y pobladores , creando un poder popular que, más allá de las consignas y de

los estereotipos, reflejó a un pueblo con sentido de clase, organizado, reflexivo, a veces crítico con el proceso del "Compañero Presidente", pero capaz de dar la vida por defender esos 1000 días de dignidad.

Pero al hablar de la alegría del triunfo no podemos eludir el dolor de la derrota. Ambos a veces plasmados en un mismo rostro.

¿Qué será de Margarita Paillal, campesina mapuche de Cautín cuya fotografía era la portada de la revista *Chile Hoy* que colgaba en los kioscos de diarios y revistas aquel 11 de septiembre de 1973?

Margarita Paillal tenía 30 años, era madre de siete hijos, y había viajado a Santiago, junto a otros dos dirigentes mapuche, para denunciar ante el presidente Allende los allanamientos, detenciones y torturas en contra de campesinos de la zona cercana a Temuco, cometidos por un grupo de las Fuerzas Armadas a cargo del coronel Pablo Iturriaga, y del comandante de la Fuerza Aérea Rigoberto Pacheco, quienes durante cuatro días habían ocupado a fines de agosto de 1973, la ex casa patronal del Centro de Producción "Jorge Fernández", en la provincia de Cautín , al sur de Chile, en un operativo que se enmarcaba en la "Ley de Control de Armas".

Qué será de ella, me preguntaba esa mañana del 11 de septiembre, cuando recorría las calles del centro de Santiago en dirección a la sede de la revista *Chile Hoy*, donde trabajaba, mientras en cada esquina Margarita Paillal me devolvía la mirada triste y desafiante, como interpelándome por la frase con la que había titulado la entrevista: "estamos más bravos que nunca". A medida que avanzaba el día, y luego de los bandos militares, del discurso del Presidente y del bombardeo a La Moneda, aquella frase resultaba una provocación que la exponía a la intemperie ante la represión golpista.

Margarita Paillal había vivido intensa y comprometidamente esos mil días; había sacado adelante a sus hijos, se había transformado en una dirigente campesina y como tantos, pensaba que había tocado el cielo con la mano. Busco el recorte con su entrevista y la cito: "Soy dirigente del Comando Comunal, y por el motivo de ser combativa yo exijo y peleo con los compañeros, y exijo y ordeno que la mujer debe tener el mismo derecho que el hombre, de trabajar

junto a su marido, de combatir y de luchar. Porque somos las mujeres las que sufrimos las mayores pobrezas y las que sabemos las necesidades y las que tenemos que velar por nuestros hijos" (*Chile Hoy*, 65, septiembre 1973).

El rostro de esta dirigenta mapuche, junto a los de miles de obreros, campesinos y pobladores que fueron los protagonistas de esos tres años del gobierno de Salvador Allende, empujando cambios a veces más allá de lo deseado por los propios partidos y cúpulas dirigentes que configuraban la Unidad Popular, se confunden hoy con otros rostros también populares que 50 años más tarde vuelven a copar plazas y calles de todo Chile, exigiendo un futuro distinto al que el guión neoliberal les deparaba luego de décadas de gobiernos administrados bajo la constitución y el modelo económico del pinochetismo.

Entre esas multitudes seguramente están los nietos de Margarita Paillal. Y es que tuvieron que pasar 50 años para que otra vez el pueblo retornara al epicentro de la historia, coreando, como guiño y tributo a su propia memoria, que ¡el pueblo unido jamás será vencido!

Yo no voy a renunciar

A Salvador Allende Gossens

Laicos, marxistas y cristianos
a punta de palos
contra los mercaderes en el templo
que es la mina, negociando la tierra
el surco, los microbuses
trenes, los días en todos los valles.

Estudiantes, pobladores, madres, mujeres
tejiendo, escribiendo el programa
desde lo íntimo y silencioso
de cada casa, de cada aula.

Caminando sin claudicar, florece
en la era de las metrallas
enjuagando, cerniendo esa harina
de la sangre proletaria,
blanco quintal, que asoma allende las fábricas
cobijado en mar, cordilleras, la paz.

Metal, los rieles, cuerpo de leche y pan,
hospitales, escuelas
cuando habla la dignidad
avanza la esperanza amigo
arando el suelo, mi abuelo la labranza
es ahora las palabras de continente nuevo.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos.

Marcelo Arredondo

Agradecimientos

Este proyecto es el resultado del trabajo colectivo de ochenta autores, sesenta revisores y varios asesores, realizado en cinco meses durante la pandemia de COVID-19. Agradecemos a l@s autores el gran empeño de trabajar con plazos estrechos, respetando los aportes del equipo revisor. A l@s revisores, agradecemos la solidaridad de su lectura crítica y evaluación minuciosa de cada capítulo a doble ciego, en gran parte de manera relámpago. También agradecemos a los y las poetas que concedieron sus poemas para epígrafes de ambos tomos, a los artistas visuales que permitieron la reproducción gráfica de sus obras, y a los profesionales de la editorial CLACSO.

Por factores imprevistos y a veces repentinos, se ha generado un desequilibrio en la extensión de los capítulos. Nos disculpamos profundamente con las y los autores que cumplieron con el límite de palabras (5 mil), por la inclusión de capítulos bien arriba de dicho límite. En circunstancias distintas, no hubiera ocurrido. En todo caso, esperamos que se justifiquen y que la lectoría vea el valor de cada contribución en ese contexto.

Específicamente, agradecemos a Marta Rodríguez Manzano, Jessabel Guamán Flores, Gisella Rojas, Enrique Antileo, Alan Muir, Alejandro "Mono" González, Sonia Gabriela Hunter, Betty Espinosa,

Paula Fernández, Pascale Bonnefoy, Rosalind Bresnahan, Guillermo Piña, Chepe Alvarenga, Carolina Lobo Guerrero, Claudia Fábrega Vega, Roxana Valdebenito Montenegro, Sergio Grez Toso, Edgars Martínez, Sebastián Teillier, Dante Choque, Rosa García Chediak, Tino Brugos, Nicolás Villarroel Guerra, Oscar Ugarteche, Octavio Avendaño, Mario Garcés, Claudio Robles Ortiz, Paquita Civeira, José Del Pozo Artigas, Marcelo Valenzuela Cáceres, José Luis Lara Valdés, Oscar Soto, Diego Calderón, Victor Wallis, Cristian Suazo, Alexis Cortés, Roberto Guzmán, Jorge Gonzalorena, Andrés Donoso Romo, Estela Valverde, Jorge Pinto Rodríguez, David Áviles, Raúl Holz, Camila A. Da Costa, Romina Andrea Barboza, Paulo Slachevsky, Silvia Aguilera, Jorge Osorio, José Michell de Gregorio, Jimena Alonso, Nico Acevedo, Loreto F. López G., Luis Garrido, Xabier Arrizabalo Montoro, Marcos Cruz García, Valentina Meneses, Matías Ayala Munita, Víctor Marillanca, Manuel Fernández Gaete, Mafalda Galdames, Nelson Marcelo Arredondo, Ángel Spotorno, Esteban Valenzuela, Pedro Canales, Kemy Oyarzún, Isabel Piper, Lucas Sablich, Nicolás Sticotti, Nicolás Arata, Carmen Vargas, Carla Peñaloza, Rena McGrogan, Paula Sánchez, Rafael Agacino, Susan Murray y el equipo de Informática, Universidad de Sídney.

Los compiladores

La vía chilena al socialismo. 50 años después

Robert Austin Henry, Joana Salém Vasconcelos y Viviana Canibilo Ramírez

El 4 de septiembre de 2020 se cumplieron 50 años de la elección del presidente Dr. Salvador Allende y el gobierno de Unidad Popular (UP). Se iniciaba así una de las experiencias democrático-revolucionarias más emblemáticas de la historia continental latinoamericana. Durante poco más de mil días, la UP presidió la creativa y controvertida Vía Chilena al Socialismo, impulsada por una coalición inquieta de siete partidos: el Partido Socialista no alineado de Allende, el Partido Comunista alineado con Moscú, el Partido Radical, el Partido Socialdemócrata, la Izquierda Cristiana, la Acción Popular Independiente y el híbrido Movimiento de Acción Popular Unitaria. Sin ser parte de la coalición, el Movimiento de Izquierda Revolucionario apoyó críticamente su plataforma socialista, argumentando que una confrontación armada con el estado capitalista y sus fuerzas armadas era inevitable.

Chile en 1970 representaba solo el 4,5% de la población latinoamericana. Sin embargo, los ojos del mundo, desconcertados,

emocionados o indignados, se fijaban en la idea de que una revolución socialista podría implementarse a través de las urnas en una sociedad capitalista, sin una sangrienta confrontación de clases. La Revolución Cubana sugería lo contrario. El candidato presidencial vencido, Radomiro Tomic, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), argumentó más tarde que dos tercios de todos los chilenos con derecho a voto habían votado a favor del socialismo al votar por Allende o por él mismo. Ambos candidatos coincidieron en respaldar la nacionalización del cobre y otros recursos básicos, una reforma agraria integral, la nacionalización de la banca, una nueva Constitución popular, la creación de un Área de Propiedad Social, y una política exterior no alineada en la Guerra Fría.

Cincuenta años después, la Vía Chilena al Socialismo sigue siendo enigmática. Simboliza el desarrollo histórico –dentro de una formación social capitalista dependiente– de un programa para abolir el dominio imperial y neocolonial sobre la gran mayoría de la población, mediante reformas político-económicas desde arriba y lucha popular desde abajo. La fuerza de la Unidad Popular se asentaba en una alianza transversal de las clases trabajadoras y campesinas seguramente más organizadas y combatientes de las Américas en ese momento. Articuló tenuemente a los trabajadores urbanos y rurales; a profesores, intelectuales y estudiantes organizados; a trabajadores culturales; a los desposeídos; a los pueblos originarios; a organizaciones populares de tomas de tierra; a organizaciones de mujeres y juntas de vecinos; y a partidos políticos progresistas; en lo que Allende –acentuando las diferencias culturales con otras sociedades latinoamericanas– bautizó famosamente como un socialismo a la chilena, "con sabor a empanadas y vino tinto".

La Revolución Chilena fue una convergencia de múltiples corrientes históricas, en la heterogeneidad de los territorios. Las tensiones entre los sectores constitucionalistas y revolucionarios de la izquierda chilena –incluso la izquierda del Partido Socialista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y los Cordones Industriales, se hicieron eco de los dilemas y desafíos que aún persisten

en las sociedades latinoamericanas, respecto a las temporalidades de las luchas revolucionarias, a la complejidad de la conquista del poder popular, y al desarrollo de formas transitorias de socialización de la economía y de la política, en pos de lograr simultáneamente la emancipación laboral y el aumento de la producción.

Los intereses imperialistas en Chile eran tanto simbólicos como económicos. Simbólicamente, las potencias imperialistas dominadas por Estados Unidos temían que cualquier análogo de la Revolución Cubana de 1959, en Chile, se volviera regionalmente contagioso. La Alianza para el Progreso de Kennedy de 1961 había establecido una agenda regional de reforma agraria y educativa, junto con una vago "desarrollo comunitario", dentro del modo de producción y el modelo de acumulación capitalistas imperantes.

Concebida por el capital transnacional como una respuesta regional tardía a la propagación de la ideología antiimperialista, la Alianza vio a Chile como una prueba de fuego de su capacidad para canalizar la agitación social hacia la modernización capitalista, mientras conservaba el dominio político a través de una coalición renovada de industrialistas y la oligarquía terrateniente. Una serie de agencias internacionales estadounidenses o dominadas por Estados Unidos formaron la infraestructura político-económica para la práctica de la Alianza; todas fueron activas en Chile desde principios de la década de 1960.

Los intereses económicos de Estados Unidos permanecieron hegemónicos en la víspera de las elecciones de 1970. El cobre fue la fuente principal de ingresos de la exportación chilena durante el siglo XX. Pero desde principios estuvo controlado por dos gigantes estadounidenses, Kennecott y Anaconda. A precios de 1970, habían exportado 3 mil millones de dólares para una inversión de 750 millones de dólares, una renta de 400%. De 1955 a 1970, Anaconda obtuvo una ganancia mundial promedio de 3,67%, pero en Chile fue 21,5%. Kennecott, con un promedio de 9,95% a nivel mundial en el mismo plazo, obtuvo un 52,8% de ganancias sobre sus inversiones chilenas. Para 1970, el capital nacional acumulado de Chile desde la

independencia era de 10 mil millones de dólares. Por lo tanto, Kennecott y Anaconda por sí solos expropiaron casi un tercio de lo que el país había acumulado, a lo largo de sus 150 años.

Durante el trienio de la Unidad Popular, una coalición reaccionaria de la oligarquía local y su expresión política (el Partido Nacional), la jerarquía de la Iglesia Católica y su expresión política (el PDC), el sector anticomunista de la pequeña burguesía y gran parte de la burguesía misma, tropas de choque de la ultra derecha como Patria y Libertad, altos oficiales de las Fuerzas Armadas, el monopolio mediático Edwards financiado por Washington, y la CIA de Richard Nixon, lanzaron un proyecto contrarrevolucionario en diversos frentes.

Primero, impusieron la asfixia económica a través de una huelga de capital que incluyó la denegación de préstamos y créditos esenciales, de repuestos para el sector del transporte, más el paro de camioneros en octubre de 1972, durante la cual la CIA les pagaba para que no trabajaran, en un intento de paralizar el país. Fue derrotado principalmente por la organización popular masiva de transporte alternativo. La creación de una escasez artificial de alimentos fue otra táctica –el acaparamiento– en gran parte derrotada por las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP), respaldadas por el gobierno y la clase trabajadora. También contribuyeron a la misma causa los suministros de pescado de bajo costo por una flota pesquera soviética cercana a Chile.

Segundo, los líderes sindicales de derecha financiados por la CIA organizaron una serie de paros en minas de cobre y plantas de producción en 1972, centrados en la mina El Teniente en Rancagua. Los trabajadores del cobre se habían convertido en un grupo de élite entre la clase trabajadora, y la dependencia del cobre de Chile lo expuso a enormes pérdidas económicas, magnificadas por un monopolio internacional dominado por Estados Unidos sobre la fijación de precios, lo cual devaluó momentáneamente el precio de cobre. Nuevamente prevaleció la movilización popular progubernamental.

Tercero, la facción progresista de Tomic perdió control del PDC frente a la facción de Frei Montalva, respaldada por la CIA. A partir

de ese momento, el principal objetivo del partido fue agravar el conflicto entre el ejecutivo (Allende) y la legislatura (el Congreso), para luego incitar a un golpe de Estado por la supuesta inefectividad del gobierno. Usó su mayoría en el Congreso para rechazar constantemente la legislación de Unidad Popular e inculpar a sus ministros, aún por sobrepasar los límites de la constitución oligárquica de 1925. El Tribunal Supremo y el Contralor General ratificaron sus ilegalidades.

Cuarto, la coalición contrarrevolucionaria lanzó una movilización masiva de estudiantes de la Universidad Católica y otros del élite en 1972, en torno a su oposición al programa de reforma educativa de la Unidad Popular (especialmente su proyecto de la Escuela Nacional Unificada, inspirado por la UNESCO) y la preservación de la educación privilegiada para las élites tradicionales. Sus protestas se volvieron cada vez más violentas, siendo apoyadas por los reaccionarios católicos del Opus Dei, más Patria y Libertad. Estudiantes universitarios estatales organizados, en conjunto con organizaciones obreras y sectores leales de las Fuerzas Armadas respondieron vigorosamente.

La Unidad Popular y la lucha popular consiguieron importantes avances económicos, sociales y culturales para la vasta mayoría de las y los chilenos. La matrícula universitaria de mujeres se triplicó. La matrícula de estudiantes de clase trabajadora y campesina aumentó en más del doble. El analfabetismo se redujo a la mitad (duplicando todos los registros anteriores), y estaba en camino de ser eliminado para 1976. Se introdujo la educación bilingüe para el pueblo mapuche, el grupo indígena más grande de Chile. La atención médica gratuita pasó a estar disponible universalmente, con especial énfasis en las mujeres y los niños. El cobre fue nacionalizado y las ganancias se invirtieron en vastos proyectos públicos: por ejemplo, la vivienda pública experimentó una expansión inédita.

En solo tres años, la mayoría de los campesinos fueron liberados de sus terratenientes. La Unidad Popular expropió 3.282 latifundios en 1971 y 1972 –más que el doble del régimen demócrata cristiano

(1964-1970) en un tercio del tiempo– y un total de 6 millones hectáreas de tierra (150% más que el PDC). La UP eliminó los latifundios en junio de 1972. La sindicalización del sector agrario aumentó en dos tercios durante el trienio, organizando 313.700 trabajadores rurales o el 20% de todo el campesinado chileno. Se crearon unos 100 Consejos Campesinos para unificar y consolidar el poder popular rural.

La redistribución del ingreso favoreció a los pobres. Floreció la cultura popular: músicos como los Parra, Inti Illimani y Quilapayún se unieron en torno al proyecto de Unidad Popular. Las obras del galardonado Nobel Pablo Neruda y otras literaturas de alta calidad estaban libremente disponibles. De hecho, Quimantú, la editorial estatal, publicó cinco millones de libros en dos años y medio, duplicando lo que se había publicado en Chile durante los setenta años anteriores. Se nacionalizó la banca, para atender a todos los chilenos. En resumen, el alcance y la velocidad vertiginosos de los avances populares han sido rarísimos en la historia latinoamericana sino mundial, con excepción de la Revolución Rusa.

Sin embargo, entre 1890 y 1970 hubo 23 sublevaciones militares en Chile, costando la vida de miles de trabajadores y campesinos. La facción del Partido Socialista encabezada por el secretario general Carlos Altamirano se opuso a la Vía Chilena, calificándolo como destinada a terminar en derrota. Pero la facción constitucionalista de Allende, junto con el Partido Comunista dominante en la UP, permanecieron leales a la Constitución de 1925 en todo momento, presumiendo una respuesta oligárquica única, por la cual cedieran el poder sin una confrontación de clases y abrieran el camino al socialismo.

Apenas una década antes, la Revolución Cubana había llegado al poder a través de una lucha armada de clases. Fidel Castro debatió con Allende los méritos de ambos caminos en el icónico "Diálogo de América", durante su célebre visita a Chile en 1971. A su regreso a Cuba, Castro notó con aprensión que la Vía Chilena había ganado el gobierno pero no el poder real. El 11 de septiembre de 1973 –el día en que Allende iba a anunciar un plebiscito para reemplazar el

parlamento bicameral dominado por la burguesía con una asamblea popular unicameral– un golpe militar respaldado por la CIA destruyó la Vía Chilena brutalmente, imponiendo una dictadura fascista que duraría 17 años. Pero como ha demostrado el octubre chileno de 2019, en las últimas palabras del cineasta Patricio Guzmán a su épico documental de la década de 1970, la Batalla de Chile aún no ha terminado.

Sobre este proyecto

Si bien el trienio de la Unidad Popular ha generado una gran literatura mundial, sigue siendo un tema de relevancia central para la reflexión crítica sobre los caminos al socialismo, sus formas, ritmos y obstáculos. El proyecto vigente es resultado de un profundo esfuerzo colectivo para alabar y criticar al mismo tiempo la Vía Chilena, a 50 años del triunfo de Salvador Allende y la Unidad Popular, desde variados enfoques. Formamos un colectivo de unos 80 autores, 60 revisores y el equipo editorial de CLACSO, habiendo producido conjuntamente unos 70 capítulos organizados en dos tomos en 5 meses. Eso, en medio de la doble crisis del capitalismo mundial: la COVID-19 y la nueva catástrofe económica. Destacamos especialmente la contribución solidaria y ejemplar del equipo revisor: revisaron al menos un capítulo por revisor/a, a doble ciego, aportando comentarios y frecuentemente hasta versiones revisadas en "control de cambios" para las versiones finales de cada capítulo, todo en un plazo muy corto.

Desde los inicios buscamos la pluralidad política, la equidad de género y la presencia de contribuyentes indígenas y su historiografía, como intento de expandir y profundizar los análisis y testimonios. Para este proyecto, la Historia y la Memoria tienen igual valor, expresado a través de estudios y relatos complementarios. Es, además, una obra de homenaje, que intenta presentar a las nuevas generaciones latinoamericanas, la trascendencia del hito histórico que fueron, al decir de Frank Gaudichaud, los mil días de la Unidad Popular.

En el *Tomo I (Historia)*, la lectoría encontrará tras el prefacio de Faride Ferán, un conjunto de 29 capítulos divididos en seis partes temáticas. La primera, sobre "Cultura y Feminismos", contiene cinco capítulos que tratan de los feminismos interseccionales durante la UP, los cambios en la cultura, en la educación y la producción literaria. La segunda parte, "Lucha Popular y Derechos", reúne cinco trabajos sobre la experiencia de lucha cotidiana de los trabajadores, los sentidos populares de la política, el protagonismo comunitario y el sistema sanitario de la UP. En la tercera parte, "Poder y Partidos", se encuentran cinco capítulos sobre los partidos de izquierda, las polémicas de la Revolución Chilena bajo la mirada del presente, las alianzas políticas tejidas en las luchas sociales, la historia del FRAP hasta la UP y las relaciones entre la Revolución Cubana y la Vía Chilena.

En la cuarta parte, titulada "Económica y Reforma Agraria", están reunidos otros cinco capítulos sobre la nacionalización del cobre, la reforma agraria, las luchas campesinas, el problema de la productividad, las crisis de desabastecimiento y el paro patronal de 1972. En la quinta parte, "Luchas Indígenas y Territorio", se encuentran otros cinco capítulos sobre la larga temporalidad de la lucha indígena, el *Cautinazo*, las relaciones de alianzas y tensiones entre el pueblo mapuche y el marxismo, más las particularidades culturales y territoriales en las movilizaciones por la recuperación de las tierras usurpadas en Wallmapu. En la sexta parte, "Imperialismo y Contrarrevolución", están cuatro trabajos sobre las estrategias y actuación de las derechas durante el trienio, las maniobras de la sedición, las fuerzas que generaron el golpe de 1973, la participación de Estados Unidos y la cuestión militar.

En el *Tomo II (Memoria)*, con el prefacio de Tomás Moulian, la lectoría se encuentra con una colección irremplazable de memorias de la época, con testimonios históricos y políticos sobre la Vía Chilena producidos por 29 chilenos, 3 estadounidenses, 2 brasileños y 2 australianos. Entre ellos hay pobladoras, campesinas, obreros, trabajadores fiscales, educadores, estudiantes, intelectuales, dirigentes

políticos y valientes militantes sociales, que aportaron con su trabajo para construir un Chile mejor.

Estas memorias fueron entrelazadas especialmente para este libro, producidas con magno esfuerzo por sus autores. Para muchos, traen consigo no solo dolorosos recuerdos sino pesadillas, pero igual demuestran un espíritu combatiente y luchador, merecedor de admiración, que sirve como ejemplo para futuras generaciones. Lo que hicieron estos autores fue una síntesis de militancia histórica, reflexión y proyección que, como dice Violeta Parra, mezcla "dicha y quebranto" en "el mismo canto". La memoria de la alegría popular y compromiso político que se realizó con la elección de Salvador Allende y la Unidad Popular hace 50 años, y las conquistas populares, es un hilo común entre todos los autores. "Los mejores años de mi vida", muchos expresaron. Hay aquí reflexiones, análisis y pronósticos imprescindibles para un futuro siempre presente, que pueden también ser leídos como un "acervo de sabiduría política".

En este tomo hay 4 capítulos que se diferencian de los demás. El primero, que abre el tomo, es una investigación sobre la memoria y la política desde una perspectiva analítica, que entrega posibilidades interpretativas a lo que viene. Además, hay dos capítulos que traen consigo las memorias de otras personas (y no de sus autores), por medio de entrevistas colectivas. También se reedita una entrevista de la revista *Punto Final* relevante a los debates dentro de los partidos de la Unidad Popular.

Agradecemos profundamente la enorme solidaridad de todas y todos los participantes en este proyecto colectivo, realizado en solo 5 meses de junio a noviembre del 2020, ya sea como autores, revisores, o asesores. También agradecemos al equipo de la editorial CLACSO, por su generoso apoyo en tiempos tan difíciles, y la confianza que depositaron en este proyecto. El conjunto de estos esfuerzos demuestra la duradera relevancia de la Unidad Popular, y la lucha monumental en que se situaba, para los pueblos de Nuestra América, más las y los explotados de todo el mundo.

¡Venceremos!

Cultura y feminismos

Unidad Popular: genealogías feministas interseccionales

Kemy Oyarzún V.

"Lo que existe concretamente no es el cuerpo-objeto descrito por los científicos, sino el cuerpo vivido por el sujeto".

Simone de Beauvoir. *El Segundo Sexo*.

"La representatividad que me dio el pueblo no me la quita una dictadura".

Laura Allende

Introducción

Las subjetividades psicosociales, sexuales, culturales y políticas de hoy representan nudos centrales para el feminismo interseccional, para la radicalidad democrática y para el pensamiento crítico al ingresar al siglo XXI. Conocí personalmente a Carmen Gloria Aguayo, Laura Allende (hermana de Salvador) y María Elena Carrera durante una gira de mujeres antifascistas que organizamos como Chile Democrático en San Francisco, California, en 1976. La gira venía

coordinada con Chile Democrático, Roma y con Isabel Margarita Letelier en Washington, poco después del asesinato de Orlando Letelier un 21 de septiembre de 1976. Laura venía del Primer Gran Encuentro de Mujeres organizado en México en 1976, donde nos representó como país desde el exilio. Venía muy entusiasmada con el trabajo que se estaba desarrollando en torno a los derechos humanos, sociales, sexuales y reproductivos de la mitad de la especie. Pero también venía desencantada. Sufría el agobio de la agudización de su cáncer y la dictadura le había negado rotundamente el retorno a Chile. En esa ocasión el alcalde de San Francisco, George Mosconi, integrante de la organización "Feed the Cities. Not the Pentagon" ("Alimentemos a las ciudades, no al Pentágono"), les entregó a las tres las llaves de la ciudad. La visita también fue auspiciada por el primer concejal militante en favor de los derechos homosexuales, Harvey Milk. Poco después, el Alcalde y el Concejal eran asesinados.

Hoy tenemos el privilegio de contar con *Mujer y Política* (2004), un intenso relato de memorias y testimonios de Carmen Gloria Aguayo, ex ministra de la Mujer que nunca logró asumir el cargo a raíz del golpe cívico-militar. Pese a que la autora no se reconoce como feminista, su relato escenifica el cuerpo existente y sus tránsitos como subjetividad social y política. Lo privado y lo público atraviesan el texto, como también las dimensiones trágicas que cruzaron a todas aquellas mujeres que se comprometieron junto al Presidente por una democracia socialista: Miria Contreras ("la Payita"), Beatriz Allende ("la Tati"), y Julieta Campusano, entre otras tantas otras.

Con esas actorías en mente, examino la Unidad Popular (UP) a partir de la alta vara que nos habían dejado el Movimiento de Emancipación de la Mujer en Chile (MEMCH) en 1935, y la experiencia de los Frentes Populares (1936-1941) antes de la Ley de Defensa de la Democracia (LDD), como legado para el siglo XXI. Me apoyo en un texto publicado por una de sus protagonistas, Carmen Gloria Aguayo, en su relato *Mujer y Política.* Lo leo desde el reciente estallido feminista de mayo 2018 en Chile, porque este puso en evidencia la necesidad de cruzar dos grandes ejes de dominación: Patriarcado/Género y

Capital/Trabajo. Lo hago con un aforismo *a la* Simone de Beauvoir: si el sexo no nace, sino que se llega a serlo, lo mismo hemos de decir de la clase y la raza. Las distintas formas de dominación son construidas psicosocial, históricamente, como lo es la territorialidad geopolítica y la Nación Estado. Y ellas son construidas en situación.

¿En qué medida las demandas feministas y de mujeres fueron incorporadas al Programa de la UP? ¿Se asumieron los avances del Movimiento de Mujeres de las décadas de 1930-1940 al imaginario del Movimiento por la UP? ¿Qué avances concretos se materializaron? ¿Qué retrocesos? ¿Qué imaginarios alimentaban las concepciones en torno a los derechos de las humanas, sus derechos sociales, sexuales y reproductivos del período? ¿Desbordó la UP el modelo hegemónico de las "mujeres excepcionales"? (Maravall Yáguez, 2012, p. 35). ¿Se planteó "Protección" con o sin equivalencia? ¿Se trató de familiocentrismo y/o ciudadanías seculares?

Mis objetivos aquí son dos: 1) reflexionar desde los feminismos sobre la importancia de articular movimientos sociales y proyección política; y 2) poner particular atención a las formas asociativas antipatriarcales y anticapitalistas del quehacer político del período en función de los procesos de subjetivación, sujeción y rebeldías. Las formas relacionales capitalistas han dado lugar a moldes organizacionales jerárquicos, competitivos, individualistas y elitistas que muchas veces han sido problematizados por las organizaciones feministas y de mujeres, a favor de formas más autónomas, sororas y solidarias, afines a modelos de democracias deliberativas, participativas y comunitarias. La búsqueda de lazos y redes de mayor horizontalidad en las subalternidades de género, clase y pueblo nación han transcurrido con altibajos en busca de formas alternativas de construir subjetividades psicosociales, culturales y políticas. Problematizar la intimidad, la cotidianidad, la familia hegemónica, los invisibles lazos de la violencia patriarcal del capital ha guiado mis palabras.

Metodológicamente, recurro a los tres vectores que articula Nancy Fraser para estudiar los feminismos y las luchas por la igualdad

de género: *representación, reconocimiento y redistribución* (Butler y Fraser, 2000). La hipótesis central es que los problemas culturales, la sexualidad, la propia forja de subjetividades y actorías están lejos de ser periféricos para las transformaciones radicales. Creo que estas tres categorías proporcionan una lúcida distinción a partir de la cual realizar una evaluación crítica de las distintas intersecciones del Patriarcado/Sexo Género en relación al eje Capital/Trabajo durante la UP. El reto ha sido doble: las reformas no pueden tener lugar sin la sociedad civil, y la articulación entre sociedad civil y feminismos emerge como un deber ético-político, afirmando las *diferencias en la igualdad*. Aparte de la desigualdad estructural entre capital y trabajo, el modelo hegemónico patriarcal desconoce las ciudadanías incardinadas y deseantes para la mitad de la especie y sus disidencias sexuales. Se ha entendido por "ciudadanos" un molde de falsa universalidad occidentalista, androcéntrico, esencialista e incorpóreo.

Me inclino a identificar la *representación* con las luchas sufragistas que pusieron en tela de juicio los procesos republicanos de democratización en Chile a partir del MEMCH 35. Decididamente, ellas pugnaban por cambios políticos radicales, no solo por inclusión electoral. Pero durante la década de 1960, hacer coincidir liberación nacional con liberación feminista en las periferias se hizo cada vez más difícil. Se fueron protagonizando actorías androcéntricas y patriarcales, en desmedro de los pueblos originarios y las mujeres como subjetividades *para sí* o *para nosotras*, aspectos cruciales para las autonomías. El acento del reconocimiento en el para sí –subjetividad singular– y el para nosotr@s –subjetividad colectiva– es clave para las actorías en torno a los derechos. Si no nos reconocemos ni se nos reconoce, ¿desde dónde exigimos derechos?

En este sentido, vale recordar que en Chile, uno de los impulsos coalicionales de mayor envergadura (los Frentes Populares encabezados por los radicales en 1936) fue antecedido precisamente por el amplio movimiento feminista del MEMCH 35.

A diferencia de Europa, en América Latina los movimientos por el *reconocimiento* y la problematización de las identidades, vinieron

vinculados a las luchas anticolonialistas de 1968, cuyos antecedentes tempranos se encuentran en el indigenismo marxista de Mariátegui, para llegar más tarde hasta Cornejo Polar. El indigenismo cuestionó el carácter monolítico de la Nación/Estado, sus límites y expansiones hasta culminar hoy en la demanda de un Estado Plurinacional. El r*econocimiento* y la problematización de las identidades sexuales, tan propias de Francia (de Simone de Beauvoir al Movimiento *Tel Quel*) se plantearon en Chile tempranamente con el MEMCH 35, pero esos cuestionamientos identitarios se fueron perdiendo con el desmantelamiento de la organización a raíz de la "Ley Maldita", dado que muchas de sus directivas y socias eran comunistas y la Ley proscribía el Partido Comunista.

El tercer vector, las luchas por la *redistribución y reapropiación del poder a nivel estructural*, se topa hoy con el Estado Subsidiario impuesto con el Golpe. A su vez, la *representación y el reconocimiento* de identidades plurales volvieron a tomar impulso en el seno de las luchas contra la dictadura: "la democracia no va si la mujer no está", consigna de la década de 1980. En este amplio marco, los feminismos interseccionales han problematizado las identidades de sexo, género, clase y pueblo nación en una lucha sin tregua que implica el necesario reconocimiento de sujetas, sujetos y actores para la redistribución igualitaria de recursos materiales, simbólicos y políticos con un profundo sentido de transformación civilizatoria.

Las mujeres del MEMCH 35 dan cuenta de las 3 categorías planteadas por Nancy Fraser. El movimiento chileno no debe ser percibido como *meramente sufragista,* dado que las memchistas se organizaron por el *reconocimiento y la identidad* en tanto mujeres, en el contexto de un modelo de Estado de Bienestar, también llamado Estado de Protección, que contemplaba socializar los cuidados desde el Estado. Si algún calificativo les aplica a las memchistas es el de feministas de la igualdad, porque en Chile *la igualdad en la diferencia* es un fenómeno más bien dictatorial y posdictatorial. La defensa del derecho al trabajo para las mujeres, la crítica al fascismo español, y la lucha por derechos reproductivos demostraría la amplitud y lucidez de un

movimiento feminista que propendía a identidades plurales en las que ni la clase ni el sexo se naturalizaban.

La Unidad Popular desde los imaginarios feministas de hoy

El 4 de septiembre de 1973, 392.736 mujeres votaron por Radomiro Tomic (DC); 479 104 por Jorge Alessandri (derecha) y 443 753 por Salvador Allende y la coalición de la UP. La población total era de 8.884.768, de los cuales 51.12% eran mujeres. Aunque no se trataba de una diferencia aplastante, el voto femenino a favor de la *Vía Chilena al Socialismo* fue inédito para el período. El 4 de marzo de 1973 la correlación a favor de la UP era aún mayor, habiendo ascendido a un 43.5% del total. Por otra parte, un 24.87% de la población provenía de zonas rurales (INE, 1970). En las ciudades, el constante peregrinaje desde los campos generaba enormes problemas de vivienda, de manera que, entre 1950 y 1960 se produjeron múltiples "tomas de terreno" capaces de generar importantes liderazgos de mujeres populares. Es importante tener en cuenta que el ingreso per cápita en esos momentos no superaba en dólares los US$ 2.500. En ese contexto, se formularon las 40 medidas de la UP.

El nuevo gobierno se centró en tres grandes ejes: la Reforma Agraria, la Nacionalización del Cobre vía expropiación indemnizada, y la generación de un Área de Propiedad Social (APS), a partir de empresas de carácter monopólico, que contemplaba intervenir al menos 91 grandes empresas. Con esto, se incluían tres áreas de propiedad: privada, mixta y estatal.

Es ineludible reconocer que para esos años ya había mayores niveles de inclusión en la noción de "civismo". La nueva ley de sufragio durante la UP incluyó a toda la población ágrafa. Pero ni la *representación* ni el *reconocimiento* de las mujeres hacían parte aún de los imaginarios nacionales. Incansable en la campaña electoral de Salvador Allende, Carmen Gloria Aguayo les habla a las mujeres, habiendo previamente renunciado al ala "rebelde" de la Democracia

Cristiana (DC). Su discurso da cuenta de su propia radicalización, así como de la complejidad del momento. Desde la radio, se dirige así a las mujeres:

> Queridas amigas. Eduardo Frei y la Democracia Cristiana nos ofrecían una revolución en libertad. Nos decían que toda la injusticia que tiene sometida en la pobreza y en una vida tan dura y difícil a la gran mayoría de nuestro pueblo, iba a terminar. Yo venía aquí mismo, a esta radio, a decírselo a ustedes. Era porque entonces yo creía. Fuimos miles, muchos miles las mujeres que creímos y le dimos el gobierno a Eduardo Frei. Pero ¿qué cambio?; ¿qué cambió en la vida diaria del hombre y la mujer que viven de su trabajo? ¡Poco! La causa, lo que produce la inmensa riqueza de unos pocos a costa de la pobreza de tantos, es el sistema capitalista. El capitalismo divide a Chile en dos mundos: por un lado un pequeño grupo de los que son dueños del capital, es decir de la tierra, las minas, los bosques, las industrias y, por otra, la inmensa mayoría que por no tener nada de eso, se ve obligada a trabajar para esos patrones dueños del capital (Aguayo, 2004, p. 86).

Aquí, ella da cuenta de una agudización de las tensiones de clase en medio del flagelo del pueblo campesino y trabajador urbano. Sin embargo, creo que aquí, Capital/Trabajo no logra articularse con Patriarcado/Género, sino más bien con la tensión Capital/Pueblo. Hay quienes afirman que el "florecimiento político y social del país intentó equiparar los derechos ciudadanos de hombres y mujeres", representando un paso adelante frente a lo avanzado durante los años del Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH 35), (Maravall Yáguez, 2012, p. 26). Pero la más importante feminista de la década de 1980 en Chile, Julieta Kirkwood, lamenta que los años de la UP implicaran la invisibilización de las mujeres y un franco retroceso a partir de la reproducción de estereotipos patriarcales, androcéntricos (Kirkwood, 1900). Es importante recordar que los feminismos no solo refieren a la lucha por insertar a las mujeres en los distintos espacios públicos, sino por cuestionar las propias

"dinámicas de representación", las formas y estructuras, las lógicas y la simbólica de la desigualdad, la violencia de género, la discriminación y las segregaciones propias en los ámbitos de lo público y lo privado, la estructuración psicosocial y política del Sistema Sexo Género hegemónico. *Mujer y Política* de Carmen Gloria Aguayo nos da pautas para revisitar aspectos sociales, ideológicos y políticos que impidieron a la UP entre 1970 y 1973 retomar el curso transitado por el movimiento de mujeres de las década de 1930 y 1940, más allá de las urgentes exigencias económicas y de las visiones economicistas de la época. La vida de Carmen Gloria, su vida personal, estuvo álgidamente cruzada por una temprana vocación pública, aunque aún no se planteaba en la década de 1970 en Chile que "lo personal es político", consigna feminista de la década siguiente en nuestro país.

En un contexto de álgida embestida de la derecha y la CIA, en el seno de la "Guerra Fría", las medidas de la UP se centraron en aspectos clave de protección social: se crearon los Consejos Comunales Campesinos; se avanzó en formas cooperativistas, de propiedad colectiva y de participación directa para campesinas y campesinos. La Reforma Agraria de Frei y Salvador Allende incorporó la integración del campesinado por medio de la expropiación de las haciendas improductivas y la distribución de nuevas unidades de producción agropecuaria, normalmente pequeñas y medianas (Avendaño, 2017). Las grandes propiedades representaban el 6,9% del total de los predios, ocupando el 81,2% de la superficie territorial (Kay, 1986, p. 44). Nuevas formas de asociatividad también se dieron en los sectores poblacionales urbanos. En ese sentido, si bien los cambios no implicaron igualdad estructural, en tanto actorías feministas, las formas de economía social supusieron el empoderamiento de grandes mayorías empobrecidas. La pregunta por el *reconocimiento de identidades* de género es clave para entender si hubo luchas por el rol protagónico de las mujeres como actoras movimientistas de la UP, aun cuando se hablara de mujeres y no de feministas. La historia nos ha invisibilizado y la democracia nos ha negado, insiste la Julieta Kirkwood de la década de 1980. ¿Se advierten nuevos lenguajes, formas

y herramientas para realizar críticas radicales y sistémicas que incorporen las álgidas aristas entre lo personal y lo público en el texto de Carmen Gloria?

Lo cierto es que se han fracturado los empalmes, las diversas forjas de dominación al tejer perspectivas binarias y excluyentes, y creo que se ha perdido muchas veces el ovillo. *Mujer y Política* muestra que durante la UP, los ejes Patriarcado/Feminismo y Capital/Trabajo no se cruzaban o se concebían como formas recíprocamente excluyentes, precisamente en el campo incuestionado de invisibilización de la vida privada. Muchas veces, el feminismo era concebido como resabio burgués en algunos sectores marxistas y se lo percibía como herejía en los sectores socialcristianos que fundían mujer, maternidad obligatoria, heteronormatividad, resistencias al divorcio y al aborto. En fin, ser revolucionaria y feminista no parecían tener articulación posible. Recién entre 1980 y 1990 se planteó romper con los "muros y techos" de segregación que se han venido alzando desde diversos aparatos ideológicos del estado en los idearios oligárquicos, en el capitalismo clásico y en el neoliberalismo. Recordemos que "techos y muros" de cristal refieren a la segregación vertical y horizontal de sexo y género, respectivamente. La primera refiere al desigual acceso a liderazgos en toma de decisión y la segunda a las segregaciones de lo masculino y lo femenino en la división sexual del trabajo y la praxis política, por extensión.

A su vez, a nivel del imaginario social, esas segregaciones también venían alimentando ideologemas que nutren las formas patriarcales de hacer política: lo privado o lo público, lo doméstico o la calle. Las formas patronales, patriarcales y jerárquicas cruzaban las organizaciones sindicales y las izquierdas. Y en eso, la UP expresó resistencias, pero no fue la excepción. Urge reflexionar a nivel más estructural sobre las formas de concebir la democracia, las luchas sociales y los protagonismos políticos. Las críticas a la democracia liberal, "representativa", cruzan mi lectura del texto de Carmen Gloria Aguayo, en busca de raíces más deliberativas y participativas, más vinculantes y comunitarias.

Resignificar la Unidad Popular: feminismos interseccionales

Miro el triunfo de la UP históricamente desde *nudos de sabiduría feminista* de clase, diversidad sexual y pueblo nación; mirada interseccional. Creo que se trató de un momento de tan alta propensión coalicional como los Frentes Populares y los Movimientos Feministas heterogéneos que cruzan nuestra historia. Es posible que las feministas y las mujeres movimientistas fueran invisibilizadas o se autocensuraran en los imaginarios del período, pero sobre todo creo que ellas han seguido siendo silenciadas por las cegueras epistémicas de la historiografía académica aún en nuestro tiempo. Aquí sigue siendo imperativo recuperar las biografías, las tensiones vividas por las mujeres del período de la UP. Se hace crucial devolver a la memoria de esos mil días sus claros y sus oscuros, sus puntos interseccionales y sus enunciaciones segmentadas, para desmontar algunos de los binarismos excluyentes existentes, por ejemplo entre clase o género, democracia o socialismo, Estado nación o Estado plurinacional.

Por razones estructurales, para la década de 1970, las campesinas constituían importantes números de trabajadoras y trabajadores, no solo en Chile sino en toda América Latina (Lugones, 2008). Según los estudios hechos para 15 países latinoamericanos por el PREALC, más de un tercio de los 28 millones de trabajadores agrícolas que había en 1970 en esos países estaban en una situación equivalente a la cesantía total (OIT, 1976). En 1970, el 40% más pobre de los chilenos rurales ganaba apenas poco más de la mitad de lo que percibía en promedio el 40% más pobre de sus equivalentes urbanos. Según la Organización Internacional del Trabajo, en 1972, el 43% de los latinoamericanos vivía en una situación de pobreza grave y el 27% en una situación de indigencia mucho más alta entre los rurales que entre los urbanos.

Se sufrían marginaciones sociales, económicas, subocupación, subnutrición; una distribución del ingreso mucho más desigual en el campo que en las zonas urbanas, desiguales a su vez en términos

de sexo/género. Imposible desconocer las múltiples formas cooperativistas que emergieron entre las mujeres indígenas y campesinas, alianzas que las han posicionado "de manera crítica frente a las políticas neoliberales que las excluye, margina e intenta homogenizar" o asimilar al Estado Nación (Painemal Morales, 2008, p. 6). A nivel continental, me interpela el carácter antiimperialista y crítico que tuvo la UP frente a los paradigmas extractivistas de desarrollo, frente a la geopolítica y a las nuevas formas de ejercer hegemonía en las zonas urbanas. Entre ellas, redescubro las contundentes tesis de Jacques Chonchol sobre democracia comunitaria, que influyeron mucho en la vida y las ideas de Carmen Gloria Aguayo.

Sin embargo, durante la UP para muchas y muchos ser revolucionaria y ser feminista parecían términos binarios, sin articulación posible. En este sentido, Julieta Kirkwood fue tajante: "La política no es una dimensión fácil del feminismo. Tampoco los problemas políticos derivados de la incorporación formal y concreta de las mujeres al mundo ciudadano, como la consecuente ruptura del espacio interior doméstico y privado" (Kirkwood, 1990, p. 188).

Reconocer a las mujeres: forja de nuevas formas

La importancia de las subjetividades a la hora de articular sexo, clase y raza es clave. Pero el *reconocimiento* de las diversas actorías debe incorporar el estudio de las nuevas formas asociadas a las relaciones psicosociales y políticas. Problematizar las culturas de asociatividad y la forja de nuevas actorías se hace indispensable en cada hito histórico. El "pueblo" no es una masa abstracta sin subjetividades. Esto no solo aplica a las mujeres organizadas como trabajadoras urbanas, sino también a campesinas y a indígenas. La reforma agraria permitió al campesinado acceder a créditos y maquinaria agrícola, así como al desarrollo agrario, con el consiguiente incremento de ciudadanías agrarias, derechos laborales, reforma educacional y desarrollo del trabajo agrícola (Osandón, 2014). Pero la crítica feminista

se advierte de inmediato: "Las mujeres de la izquierda política han reivindicado siempre sus problemas *como trabajadoras y no como mujeres*... no las *necesidades específicas* que tenemos" (Maravall Yáguez, 28, *mi énfasis*). Lamentablemente, es muy posible que el imaginario de la UP se conjugara desde un binarismo excluyente: *o mujer o trabajadora.* ¿Por qué no pensar en articular los dos términos? Después de todo, se produce con creces en el ámbito doméstico, no remunerado, desconocido como trabajo y como contribución al PIB. El sistema sexo género construye y elabora cuerpos e identidades en situaciones y relaciones sociales específicas, dentro de las que se incorporan múltiples instituciones, partiendo con la trama doméstica y sus trabajos invisibles de cuidados. Ambas tramas involucran labores, pero además producen gamas identitarias y actividades como la sexualidad y el erotismo, la afectividad y las formas específicas de relacionarnos.

El problema de la asociatividad y de las formas relacionales es clave a la hora de discutir la UP y la caída de los feminismos vinculados al MEMCH. Si las mujeres no son reconocidas ni reconocibles como sujetas, ¿desde dónde asumen sus derechos civiles, sociales y sexuales? La UP no logró en los mil días la incorporación de las mujeres como subjetividades deseantes, creativas y protagónicas, a no ser por roles que se encuadraran en la maternanza y los mandatos femeninos patriarcales (Painemal, 2008). Sí se luchó por demostrar que las mujeres son tan capaces como los varones, velando su especificidad (p. 34).

En un plano económico, hasta la UP, las mujeres no accedían a créditos. En el gobierno de Salvador Allende se fortalecieron modelos cooperativistas de trabajo y relaciones sociales que para las campesinas resultaban (y resultan hoy) muy idóneas. La organización capitalista de la vida y el trabajo es multidimensional, y esas dimensiones *otras* no alcanzaron a ser atendidas. Resalta también que al alero de la UP se forjaran culturas anticoloniales y antiimperialistas en las que las identidades de clase y soberanía nacional eran fundamentales. Pero se consideraba que la "contradicción principal" eran

la dominación de clase y el extractivismo, en desmedro de los mandatos psicosociales y culturales de género. Estudiar esas tensiones en relación a las correlaciones reales de fuerzas es indispensable.

No debemos desconocer el estudio de las formas relacionales ni de los aspectos relativos a la toma de decisión en los procesos económicos y sociales. Las formas generadas por el cooperativismo han sido transicionales en la organización del capitalismo, en el paso del latifundio al minifundio, así como a modelos de democracia comunitaria. Las memchistas revelaban notables diferencias con las formas de liderazgo elitista y competitiva de sus pares letradas y de sus pares masculinos. Las supuestas "subordinadas" eran insolentes y antiautoritarias, cuestión que Elena Caffarena apreciaba en su contacto con las socias de regiones. Ese modelo insubordinado de identidades y formas relacionales les parecía importante de imitar por parte de las feministas letradas, a las cuales el MEMCH les proponía rebelarse. Las socias exigían a las letradas traspaso de in/formación de "tú a tú". El texto de Carmen Gloria Aguayo coincide en esto al relatar sus experiencias con las socias de los Centros de Madres (Oyarzún, 2018, p. 46).

Los derechos comunales sobre los territorios han estado tensionados durante siglos, habiéndose complejizado particularmente durante la UP. Aunque los derechos sobre la tierra están todavía frecuentemente cruzados por diferencias discriminatorias de género en las propias comunidades (Deere y León, 2000, p. 29), la solidaridad, las formas no elitistas, fueron propias de las movimientistas, y a veces lograron generar protagonismos colaborativos más horizontales: procesos de participación protagónicas, pedagogías concientizadoras, modelos que llegaron a ser fundamentales en las pedagogías freirianas y después, en las metodologías de Enrique Pichon-Rivière. Estas formas de trabajo y actorías presentes hoy en ANAMURI se extienden hasta nuestros días en sus vínculos con Vía Campesina. Durante la UP, las demandas "nacionalitarias" (Mariman, 2000) no se habían materializado aun y las demandas indígenas tenían un carácter más social que político, cuestión que también ocurre en

el período con las demandas feministas no indígenas Estos moldes más horizontales fueron gravitantes para la forja de liderazgos colaborativos de mujeres, no solo en el agro, sino en las organizaciones de sobrevivencia como las ollas comunes, los modelos de sanación y otras formas de resistencia protagonizadas después de la UP en el trabajo antifascista e incluso durante el Estallido del 19 de Octubre de 2019 o la Pandemia del COVID-19. Con la contrarreforma agraria que sobrevino al Golpe reprivatizaron los latifundios expropiados, se promovió la recolonización empresarial exportadora se reconcentró la propiedad de la tierra (Gómez, 2014), resultando refortalecidos los moldes autoritarios y las violencias extremas de formas patronales y represivas.

Lo más significativo de los derechos colectivos es que fueron derivando hacia las prácticas soberanas y hacia la autodeterminación, todo lo cual eventualmente pondrá en tela de juicio el propio Estado nación (Boaventura dos Santos, 1998), como se evidencia a partir del Convenio 169 de la OIT y del Proyecto de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Hacia la UP: las familias y la conciencia problemática de ser mujer

Carmen Gloria se había involucrado desde su temprana juventud al trabajo social con un ideario socialcristiano. Desde los 15 años se dedicaba a enseñar tejido y costura en un Centro de Madres de la Parroquia. Se autodescribe como una mujer de clase acomodada que a los 19 años estudiaba pedagogía en filosofía e inglés en la Universidad Católica y posteriormente, una vez casada con Vicente Sota, se dedicaba a dar charlas sobre "los deberes de una buena madre y esposa" (p. 19). Las tajantes diferencias entre los movimientos sociales y lo político estaban álgidamente enunciadas desde el inicio. Carmen Gloria relata que tenía gran vocación social, pero que fue en su convivencia con Vicente Sota, su marido, que se habría politizado.

Un diálogo con Vicente es esclarecedor en este sentido: "Esto que tú haces –dice su marido– no sirve... Lo que hay que hacer es terminar con la causa de esta pobreza... Hay que trabajar en política... Hacer una revolución" (p. 9). De hecho, ella misma se caracteriza como "mujer de un político de la Falange" en la primera parte de sus memorias, lugar en el que militaba junto a Eduardo Frei, Jacques Chonchol, Radomiro Tomic y Patricio Aylwin.

El período comprendido entre 1960 y el golpe militar de 1973 lo cubre gran parte del testimonio de Carmen Gloria Aguayo, constatándose que el concepto de "mujeres y pueblo" pasará a convertirse en "pueblo y familias", creciente aporía del impacto de la Falange Nacional y el maternazgo de la DC en las luchas del período. La crítica a la aporía "mujer" y "política" está muy bien planteada por Antonieta Vera (2009). La diferencia entre "maternidad" y "maternazgo" apunta a la relación del primer término con un proceso biosocial al asumir la responsabilidad de concebir y criar, mientras que el "maternazgo" es, más bien, una forma que convierte a las mujeres en las madres abstractas de los demás.

La democracia comunitaria se radicalizaba en todos los ámbitos. Distingo en *Mujer y Política* las actividades personales, de las sociales y políticas. En un sentido amplio, la UP está vista desde su prisma personal porque, aunque ella no lo diga en estos términos, su interioridad está imbricada con un alto grado de reflexión y afectividad política en los acontecimientos que vive. Aunque no se explicite, el texto hace pasar lo íntimo y personal por el registro de lo político y viceversa. La sujeto de la situación de habla (Carmen Gloria Aguayo) está siempre cruzada por una existencia vorazmente radical y política. Por todo el texto, ella relata la centralidad de los Centros de Madres durante el período de Frei Montalva y durante la UP para articular mujeres y movimientos campesinos. Ello no es trivial. Durante este período era menos común que en la década de 1980 concebir las "dobles militancias" entre los movimientos sociales y la praxis política, como lo demuestran el Movimiento Mapuche y las críticas de Julieta Kirkwood a la izquierda. Julieta Kirkwood narra en esa década que cuando estaba

entre socialistas, decía a propósito que era feminista, y cuando estaba entre estas últimas, enfatizaba que era de las "políticas" (Kirkwood, 1990, p. 47). Esto se debía precisamente a que no había una política de género en los partidos de izquierda del período. A su vez, las feministas experimentaban una desafección hacia las instituciones políticas a partir de sus demandas por autonomía y reconocimiento. A medida que avanzan las memorias de Carmen Gloria, se irá produciendo el desplazamiento desde las luchas por el *reconocimiento* en el período del MEMCH, al acento en las luchas contra las enormes desigualdades de clase del Chile de la UP que sin saberlo se dirigía al golpe cívico-militar.

Según Sierra, "[L]as mujeres indígenas organizadas" como mujeres, también "desean luchar por sus derechos y la autonomía de sus pueblos y comunidades", al mismo tiempo que muchas critican la violencia patriarcal contra ellas. Es en este proceso que se han ido apropiando de un discurso de género (2004, p. 322). Las críticas feministas al gobierno de Salvador Allende remiten a la preeminencia de roles y quehaceres domésticos, en el marco de una lucha ideológica en donde las álgidas tensiones de clase y neocolonialismo forzaron a un segundo plano el desarrollo de nuevas actorías sociales y políticas de las mujeres. La distancia entre trabajadoras y "dueñas de casa" de sectores acomodados se tensionó a niveles extremos y la UP quedó cruzada por ella.

El relato de Carmen Gloria es de profunda afectividad política, memoria histórica, diario íntimo en el que articula lo privado y lo público, con un sentido de deber cívico en el que se conjuga el mandato psicosocial al cuidado con un creciente mandato ciudadano. Creo que *Mujer y Política* ayuda a comprender las complejidades de las transformaciones del feminismo chileno de las décadas de 1930 y 1940 a un segundo plano de nuestra historia, en la mediación de principios falangistas y familiocéntricos primero, y de conciencia política después, cuando el grupo de rebeldes renuncia a la DC para integrar el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y unirse a la UP. Es una pieza de extraordinaria riqueza para las genealogías de mujeres a partir de fotografías, epistolarios, recortes de prensa y

notas de su "cuaderno de diario". Buena parte de su texto revela una vida social cruzada por siete embarazos en los cuales la autora intenta equilibrar la familia como puente entre lo doméstico y lo público, entre la vida privada y el Estado, en el marco del "ideologema de la familia" (Oyarzún, 2000). "Segundo embarazo. Hasta ahí llegó mi experiencia de profesora de filosofía", dice Carmen Gloria, "entre mamaderas y pañales" (p. 19). Su compleja interioridad la inquieta y su vocación cívica la impulsa hacia los Centros de Madre, como "un lugar para salir al mundo exterior" (p. 19). No obstante, su propia relación de pareja con Vicente expresaba la división entre vocación social y vocación política, como una distinción de género entre lo femenino y lo masculino, respectivamente.

Históricamente clave para el familiocentrismo, la Falange Nacional, partido político socialcristiano organizado en Chile en 1935, se había distanciado del Partido Conservador en 1938. Entre movilizaciones y masacres, entre "defensa" del autoritarismo (Ley Maldita) y "saneamiento" o profundización de la democracia, se constata un nuevo aumento coalicional popular y una disminución de lo que llamamos luchas por el *reconocimiento* de identidades feministas. El propio título, *Mujer y Política* que escoge Carmen Gloria Aguayo para este relato, representa una rearticulación de la aporía predominante en la época entre mujer *o* política, así como el binarismo excluyente entre "familia" *o* ciudadanía". Su vida entera se abre a conjuntar los términos disyuntivos en la ideología; y los conjuga en su propia praxis de vida. Una vida en la que el término "madre" presuponía a la palabra "mujer", y en donde la noción de crianza se suponía inarticulable con el concepto de lo público, social y político. En este sentido, el propio título de su relato es disruptivo respecto de la ideología falangista de sus momentos de juventud.

Entre 1958 y 1964 Carmen Gloria se mueve de lleno al ámbito político al ingresar a la DC, punto en el cual se intercepta su biografía con su ruptura de la Falange, su incorporación a la DC y su futuro quiebre con esta para ingresar finalmente al MAPU en mayo de 1969. Una mujer capaz de tales transformaciones es, en mi concepción,

una mujer *para sí;* una subjetividad plena, compleja y de gran espesor crítico. Rescato sus tránsitos, sus procesos, su reflexión. Es el trayecto de su vida lo que importa aquí, mucho más allá de una mera toma de posición. El recorrido transita desde el ser para otras y otros, hasta llegar a convertirse en un ser capaz de asumirse plural en el plano de la existencia personal y la vida pública. Su trayectoria va desde la vocación social en los Centros de Madre al despertar de una conciencia revolucionaria en más de 50 años de entrega guiada por "una fe que era tanto religiosa como política durante el período comprendido entre la década de 1960 y el Golpe (p. 8).

Para 1955, el partido formaba parte de la Federación Socialista Cristiana, en torno a un imaginario dirigido a jóvenes católicos, estudiantes universitarios de capas medias y trabajadores unidos en torno al humanismo cristiano. Se definían como "un movimiento político que lucha por instaurar en Chile una Democracia verdaderamente humana, en que imperen la libertad y la justicia", en férrea oposición al despotismo y la tiranía. Afirmaban el cooperativismo, además de la necesidad de superar el sistema capitalista y los fines de lucro, proponiendo una democracia integral a nivel económico y social, y poniendo particular énfasis en la idea de vivienda popular. De ahí el imperativo de la década de 1960 de involucrar el trabajo de masas de la izquierda y la DC con las y los pobladores por la vivienda digna.

Lo interesante para nuestro rastreo del maternazgo, es que la Falange preconizaba una concepción del "bien común", robusteciendo las organizaciones intermedias, en particular, la familia como mediación entre el individuo y el estado. Pero esos conceptos de cooperación apuntaban a un divorcio entre lo personal, lo social y lo político. Evidentemente los liderazgos de "alta" jerarquía eran patriarcales, clasistas y políticos. Utilizaban los maternazgos femeninos, la afectividad filial y la solidaridad de los sectores empobrecidos como formas seductoras de ejercer influencia y sometimiento. La familia (y el *ethos* de cuidado femenino) se convertían en poderosa herramienta ideológica para ejercer hegemonía. De ahí que uno de

los rasgos preponderantes de este concepto de bien común se fundaba en la "unidad y la estabilidad de la familia, célula básica de la sociedad", rechazando el "divorcio y todo lo que la debilite o destruya", así como oponiéndose tajantemente a "cualquier monopolio estatal de la educación" (p. 5) que desafíe la autonomía de los integrantes del ideologema. Con la excepción del rechazo de la Falange al autoritarismo y la tiranía, se constata en estos aspectos, no solo la continuidad de principios de la DC, sino de la propia Constitución de Augusto Pinochet en 1980. ¿Cuánto del ideologema nos queda aún?

No obstante, Carmen Gloria siente que ayudar a los más pobres debía y podía conjugarse con su *ethos* materno, aunque sintiera que intentarlo aumentaría las tensiones entre la crianza y su "clara vocación de entrega, de servicio a los demás en una acción grande". "No me siento cumpliendo esa vocación", confiesa. Y se pregunta, inquieta, "¿Estoy frustrándome, mutilando mi Yo total?" (p. 20). Cuando Carmen Gloria se hace ese interrogante, lo que está expresando es conciencia y dolor frente a la contradicción excluyente entre su autonomía personal y su obediencia al mandato famioliocéntrico de la Falange, entre su ansia moral y deseante de soberanía y el sometimiento a la maternidad ideologizada. El resto es historia: se vuelca hacia Techo Jesuita y los Centros de Madres Poblacionales. Y concluye: "nacen los centros de madres"; las madres "se convierten en socias", "se les da la palabra y ellas la tomaron para no soltarla más" (pp. 22-23). Y concluye: "así era la mujer pobladora; cuando salió del enclaustramiento en su casa, se incorporó plenamente a las luchas sociales. Una vez que su conciencia ha despertado, sigue su propio camino" (p. 25). Luego de participar en la campaña y derrota de la candidatura de Radomiro Tomic, el Congreso Provincial Femenino de la DC decide "mantener la línea inflexible e intransable de nuestra posición anticomunista y anticapitalista" (p. 35). Desde su filiación con la línea rebelde de la DC, Carmen Gloria Aguayo, como las socias, también "sigue su camino" (p. 25).

En adelante, los puntos de inflexión para su acción política se abrirán a la actividad social y sindical, popular y campesina. Su

compañero de camino político, Jacques Chonchol, expresa la propuesta de generar formas colaborativas en la UP en los siguientes términos: "queremos construir en Chile una sociedad socialista y comunitaria que sea, al mismo tiempo, pluralista en lo cultural, partidario y religioso. Sociedad que esté realmente conducida por los trabajadores, que funcione al servicio de las grandes mayorías nacionales... para avanzar hacia el socialismo a través de una vía no capitalista de desarrollo" (p. 74). Cercano a Paulo Freire, Chonchol expresaba en esos momentos la forja de las nuevas actorías subjetivas como una forma "de despertar la conciencia que estaba sumergida para que se convirtiera en conciencia crítica" (p. 74). Lo que no se nos explica, sin embargo, son las razones para que dicha "conciencia crítica" no incluyese un auge de conciencia y protagonismos insumisos de mujeres.

Para 1963 se advierte una Carmen Gloria cada vez más atraída hacia la izquierda, "con la adquisición de una nueva fe: la creencia en la bondad del socialismo" (p. 36). En 1969 participa en el Congreso Mundial de Mujeres de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FEDIM). Visita los países socialistas y finalmente renuncia a la DC. Al hacerlo, concluye: la sociedad comunitaria viene de "crear la conciencia del *hombre* nuevo... un socialismo comunitario" (p. 62, *mi énfasis*). Es 1969. Junto a los rebeldes de la DC, Carmen Gloria presenta finalmente su carta de renuncia para unirse al MAPU. Compleja e inquieta, crea una serie de círculos de estudio dedicados a la mujer campesina. "Estoy leyendo a Simone de Beauvoir y me tiene trastornada con su *Segundo sexo*" (p. 68), aclara, pero, agrega, "nunca fui feminista, nunca me gustó esa carga anti-hombre" (p. 68). No obstante, inequívocamente rebelde, apoyaría la "nueva libertad en materia sexual, la contracepción, el aborto, el divorcio, el reconocimiento de la vida en convivencia fuera del matrimonio" (p. 68). Ni rastros quedaban ya, en este punto, de la mujer falangista de Las Condes. El tránsito a la *mujer nueva* se había producido, aunque aún seguía sin nombrarse, bajo la rúbrica del "*hombre nuevo*" de la UP.

Según Carmen Gloria Aguayo y por razones opuestas, ni la *Revolución en Libertad* ni la UP impulsaron la constitución de identidades feministas, si bien ambas se plantearon proyectos de desarrollo del país. Supuestamente, las contradicciones entre la emancipación de las mujeres y la liberación nacional se habrían de resolver "más adelante". Se podría especular que el silencio feminista de la UP subordinó la cuestión del sujeto y el reconocimiento de sexo y género a la "cuestión popular" sin más calificativos, en momentos en que se advertían algunas cuestiones tácticas: el interés en seguir avanzando sin perturbar al maternalismo ideológico de los sectores medios y la DC por una parte; así como la urgencia de sumar fuerzas en contra de la intervención estadounidense y los avatares antidemocráticos del capital monopolista chileno. Según la entonces senadora comunista, Julieta Campusano: "Agrupadas en un Frente Patriótico, las mujeres se pronunciaron contra las amenazas de golpe de Estado. Durante 1972 y 1973 fueron corrientes los enfrentamientos entre mujeres anti-allendistas de la alta y mediana burguesía (Poder Femenino) con mujeres pobladoras y asalariadas en el centro de Santiago, primando los intereses políticos por encima de los de género" (Senado, 1969). En síntesis, el protagonismo social de las mujeres populares adquirió importantes dimensiones políticas bajo la UP. Sin embargo, se fue profundizando una conciencia de clase por "encima" de la conciencia de género, en ausencia de las extraordinarias organizaciones feministas del pasado.

Mujer y Política relata la campaña electoral y la respuesta de los sectores familiocéntricos: "¡Les íbamos a quitar los niños a las madres para mandarlos a educar en un país comunista!", señala durante la campaña de Salvador Allende (p. 78). Ante el retroceso ideológico representado por sectores de la DC y la derecha, la UP experimentaría la avanzada de mujeres de derecha, organizadas bajo el lema de "Poder Femenino", que a diferencia de las mujeres de la UP, lanzaban sus campañas profamilia, consolidando la resacralización de la familia heteronormativa, la sumisión neocolonial y la agresiva repulsa de los amplios imaginarios interseccionales. En perspectiva, los derechos reproductivos resultarían siendo *uno más* de los chivos expiatorios

de la dictadura. En la década de 1980, la repenalización del aborto dio vuelta el reloj hacia 1931, haciendo tabla rasa de las luchas feministas de la década de 1930. No habrá solución de continuidad entre esa actoría hegemónica de *mujeres autocráticas* y la constitución pinochetista, cuyo biopoder patibulario propugnará la violencia sexual como eje de la violencia de clase, según testimonian los múltiples relatos de tortura. Aunque de ello no se hable sino hasta apenas 7 años atrás, no habrá prisionera que no fuera violada en cruentas prácticas sexuales, como tampoco varón que no haya sido "feminizado" a partir de las torturas sexuales en cautiverio (como feminista interseccional, entiendo que el patriarcado realiza violaciones simbólicas y físicas precisamente a partir de concebir lo "femenino" como lo *otro*, lo abyecto, en el sentido heteronormativo que ejerce).

Carmen Gloria narra su experiencia durante la campaña electoral por Salvador Allende con un agudo sentido de rupturismo cultural. Y recuerda el sentido de la ironía que lo caracterizaba: "El sábado las compañeras van a tener una concentración. Ustedes, compañeros, tienen que quedarse en la casa cuidando los niños para que ella pueda salir tranquila. Tienen que aprender a darle la mamadera a la guagua". Narra con entusiasmo las palabras del futuro compañero Presidente: "Vamos a crear un Ministerio de la Familia y el ministro va a ser una mujer". Sabemos que Salvador Allende respaldó con hechos el movimiento popular de mujeres, como ninguno de los anteriores presidentes de Chile, a pesar del rechazo del Partido Nacional y de la DC, e inclusive con el desagrado de una mayoría de dirigentes de la propia UP que auspiciaban una ideología patriarcal familiocéntrica. Contribuir a que fueran las mujeres quienes decidieran ingresar al "mundo exterior" fue gravitante. En su discurso electoral, Salvador Allende se pronuncia inequívoco:

> La mujer que al trabajar tiene que hacer un doble trabajo: antes de salir y después de volver a su casa tiene que cumplir todo el quehacer de la cocina, el aseo, el lavado y la eterna rutina que no conoce nunca descanso. Aquí está la mujer empleada y la funcionaria la que pese a sus esfuerzos, a su preparación y a su inteligencia, sufre

> todas las postergaciones y discriminaciones. Aquí todas las mujeres trabajadoras, la profesional, la intelectual y la artista que en el estrecho marco que fija para la mujer la cultura tradicional capitalista no encuentra la posibilidad de desarrollar plenamente su facultad creadora. Aquí está la mujer cristiana que no puede vivir el mandato del amor en este mundo de egoísmo y crueldad. Aquí está la mujer que después de una larga vida no tiene derecho al descanso porque su montepío o su jubilación son, como se ha dicho, demasiado para morir y demasiado poco para vivir (p. 94).

La UP favoreció la participación de las mujeres en varias áreas en las empresas en que se desarrollaba el control y la administración de la producción; en las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP); en la autoconstrucción de viviendas y policlínicos; en las Juntas de Vecinos, en los comandos comunales. Entre las 40 medidas se incorporaron ejes significativos respecto del rol del Estado en la ética de cuidados como un tema de derechos sociales garantizados, eje crucial de las medidas de un Estado Protector a diferencia del Estado Subsidiario.

Finalmente, la propuesta de crear el Ministerio de la Mujer chocó con resistencias de los propios partidos de la UP para ser finalmente coartada por el golpe cívico-militar de 1973. Debatiendo en el Comando por Salvador Allende, Carmen Gloria lamenta que no se considerara la importancia de apoyar la campaña femenina que ella había asumido. "No teníamos financiamiento: muy pocas éramos las que disponíamos de auto para movilizarnos; todas pagábamos nuestros gastos. No podíamos contratar un espacio en la radio, ni anunciar en la prensa nuestros actos masivos", declara, en *Mujer y Política* (p. 78). A medida que la campaña fue creciendo entre las mujeres, la visión de cuidados se va socializando: "dar un sentido social a la maternidad, junto con apreciar verdaderamente el papel de la mujer, la libera para que más allá de su función de madre y de dueña de casa, pueda desarrollar todas sus facultades humanas en el amplio campo del trabajo productivo, el arte, la cultura y toda otra posible obra creadora (p. 83).

El familiocentrismo estaba en el centro de los más álgidos debates, sobre todo porque las presiones contra el divorcio y a favor de la repenalización del aborto eran considerables. Con todo, en 1971, Salvador Allende logró crear la Secretaría de la Mujer como organismo integrante del gobierno. Los estatutos de la Secretaría de la Familia incorporaban muchos de los resultados investigativos de Elena Caffarena, quien ya en los años de la persecución de las y los comunistas se había dedicado a investigaciones jurídicas sobre los derechos de las mujeres. Así, la Secretaría planteaba, entre otros, el derecho de las mujeres a celebrar contratos, enajenar e hipotecar sus bienes, sin autorización del marido; compartir con su pareja el cuidado y la manutención de los hijos; filiación única, terminar con las diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos; una nueva juridicidad para la unión estable de la pareja no casada oficialmente por el Registro Civil; tribunales de familia, integrados por un/una psicóloga, una asistente social y una/un abogado, para promover el divorcio luego de un tiempo prudencial de separación, sin obligarlos a rendir testimonios humillantes.

En paralelo, la UP se propuso paliar la carga de las mujeres en el hogar promoviendo comedores populares en las fábricas y en el edificio de la UNCTAD (denominada "Torre de la mujer"), además del "Programa de comidas preparadas". A su vez, puso a disposición de las mujeres asalariadas del área social más de 150.000 raciones de comida, para que pudieran comprar y llevar a sus hogares. En fin, se lograron abrir 467.000 nuevos puestos de trabajo destinados solo para mujeres. Todo ello aparte del medio litro de leche para las mujeres embarazadas y lactantes; aumento del fuero maternal; obligación de las empresas, con más de 20 mujeres, a tener salas-cuna; aumento de 45 a 90 días del permiso posnatal e inauguración en 1971 del primer centro de atención posnatal para campesinas. La UP estimuló también la sindicalización de las empleadas domésticas, recomendando 8 horas de trabajo y permisos para estudiar en los colegios cercanos al trabajo.

En 1971, muchas de las mujeres formaron Brigadas de Salud que colaboraban con los policlínicos de las poblaciones, las mismas

que durante 1972 en la comuna de Barrancas en Santiago se organizaron para fundar un centro piloto de atención colectiva en Salud, Vivienda, Educación y Transporte. En estas labores, fue innegable el aporte de parlamentarias como Julieta Campusano, María Elena Carrera y Laura Allende. En agosto de 1972, las asambleas de mujeres campesinas se reunieron en Bío-Bío para impulsar Centros de Reforma Agraria (CERA), en los que las mujeres tuvieron, por primera vez en la historia de Chile, los mismos derechos a la tierra que los varones.

El Estado subsidiario anexado al exterminio durante la dictadura es hasta hoy producto ancilar de una transición posdictatorial inconclusa que revirtió el rol público del Estado a favor del subsidio empresarial. En la actualidad, referir a mujer y/o género implica asumir la diferencia radical entre lo femenino y el feminismo interseccional, entre *ser sujetos u objetos* de políticas públicas, entre neoliberalismo y democracia deliberativa y comunitaria.

Chile experimentó un inédito y masivo movimiento feminista en mayo de 2018. Miles de mujeres y varones, en su mayoría jóvenes, exigieron fin al patriarcado, fin al capitalismo neoliberal con la consigna, "Patriarcado y Capital es alianza criminal". El movimiento se conoce hoy como "Mayo 18", y repolitizó el propio concepto de género, que se había venido sumando a otras estrategias de gatopardismo y autocensura para eludir hablar directamente de patriarcado, machismo o extractivismo, pero también para eludir las categorías de clase, raza, colonialidad o hablar claramente de imperio. El largo camino de blanqueo e impunidad frente al exterminio dictatorial resurge una y otra vez como situación inconclusa, como retorno de lo reprimido a niveles macro y microestructurales. El segundo gobierno de Michelle Bachelet propugnó reformas estructurales como el fin al binominal, la reforma tributaria o el derecho universal a la educación. Pero esas reformas, instaladas a partir de nuevas convergencias democratizadoras, no siempre concitaron amplio respaldo al interior del propio gobierno; en última instancia redundaron en diseños deficitarios que finalmente favorecieron la elección del

actual gobierno de derecha. La despenalización parcial del aborto en 3 causales aguarda aun convertirse en pleno derecho reproductivo –aborto libre, gratuito y de calidad– a partir de más amplias subjetividades y actorías democratizadoras, capaces de nuclearse en torno a objetivos prioritarios colectiva y participativamente acordados.

Decididamente, Chile está en deuda con el estudio riguroso de las formas comunitarias de hacer política, en la medida en que ellas propician nuevas actorías y subjetividades interseccionales. Importa subrayar que la primera organización de mujeres mapuche, la Sociedad Femenina Araucana *Yafluavin,* fundada en Temuco en 1937, coincidió con el auge del Movimiento de Emancipación de la Mujer Mapuche (Foester y Montecino, 1988). Los liderazgos femeninos indígenas se han debido abrir paso en complejos procesos de lucha por el reconocimiento de su propia cultura y formas de hacer familia. También, a partir del reconocimiento de las trayectorias políticas del parentesco, un sentido comunitario de lo doméstico y relaciones de reciprocidad, niegan la excluyente aporía entre lo privado y lo público de las sociedades oligárquicas y capitalistas (Guzmán, 1997; Cervone, 1998; Weismantel, 2003).

Grandes vacíos rodean a las mujeres de la UP, desafío de quienes hemos apostado a reconstituir sus memorias con un sentido profundo de empatía y crítica. Duele el vacío feminista, epistemológico y político. Es un vacío de sexo y género: vacío en y por el lenguaje, un discurso que no se asume aun como no sexista. A la distancia de 50 años, la trágica contradicción excluyente entre identidades, derechos y reapropiaciones se evidenció con una dictadura que se propuso eliminar a toda una generación para dejar pendiente las deudas que las democracias liberales tienen con las mujeres, con las diversidades sexuales y los pueblos indígenas del continente. *Mujer y política* es uno de los pocos relatos de liderazgos de mujeres de la UP y una verdadera joya histórica. De Laura Allende, diputada socialista, se sabe muy poco y de Julieta Campusano, primero diputada y posteriormente senadora comunista, solo he podido recoger lo que aparece en las memorias del Congreso en torno a la gran Marcha del

Hambre. Generar un archivo de mujeres de la UP es urgente tarea feminista e histórica por hacer, un desafío de reapropiación cultural y política.

La enorme desigualdad estructural en Chile afecta particularmente a las mujeres y a las grandes mayorías, en la medida en que la reproducción de la especie y la reproducción de la fuerza de trabajo remiten a la maternidad obligatoria, a doble y triples jornadas de trabajo, y a mermas crecientes del *tiempo para sí*. Hoy, cuando casi el 50 % de las mujeres se ha incorporado a la fuerza laboral, todavía sorprende que perciban el 65% del salario de los varones. De gran impacto para un sistema de sexo género contrahegemónico es el matrimonio igualitario y un sistema nacional que garantice desde el Estado los cuidados, que permita desmantelar el binarismo excluyente entre lo privado y lo público, entre la producción y la reproducción, así como entre la reproducción y la creación artístico-cultural. Pendiente queda la capacidad colectiva de convocar a una Nueva Constitución desde las y los nuevos sujetos. Imagino una carta de navegación estratégica que asegure el tránsito desde el Estado subsidiario impuesto durante la dictadura y prolongado desde el NO hasta ahora. La ruta: un proceso hacia un Estado garante de derechos para humanas y humanos, de plenos derechos sociales, sexuales y reproductivos. Se trata de igualdades sustanciales y no meramente formales. Los feminismos interseccionales insertos en los movimientos sociales y en el parlamento, desde las casas y las calles, desde imaginarios plurales y dialógicos, han delineado los mapas. El viaje que va desde los sufragios activos y el reconocimiento de las identidades plurales a las reapropiaciones materiales y simbólicas recién comienza.

Referencias

Aguayo, C. G. (2014). *Mujer y Política.* Autoedición. Santiago de Chile.

Avendaño, O. (2017). Reforma agraria y movilización campesina en Chile (1967-1973) y Perú (1969-1976). *Polis, Revista Latinoamericana,* 47.

Boaventura de Sousa, S. (1998). *La Globalización del derecho. Los nuevos caminos de la regulación y la emancipación*. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de Colombia.

Butler, J. y N. Fraser. (2000). *¿Reconocimiento o redistribución? Un debate entre marxismo y feminismo*. Madrid: New Left Review.

Cervone, E. *et al*. (1998). *Mujeres contracorriente. Voces de líderes indígenas.* Quito, Ecuador: Editorial ACDI-CEPLAES.

Chonchol, J. (1979). Alternativas para América Latina: un nuevo tipo de desarrollo rural con reforma agraria o la aceleración de la desintegración social. *Nueva Sociedad* 41, Marzo-Abril, 5-13.

Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *The University of Chicago Legal Forum* 140, 139-167.

Davis, A. (2005). *Mujeres, raza y clase*. Madrid: Akal.

De Beauvoir, S. (2016). *El segundo sexo*. [Trad. Alicia Martorell]. Madrid: Ediciones Cátedra, p. 371.

Deere, C. D. y M. León. (2002). *Género, propiedad y empoderamiento. Estado, tierra y mercado en América Latina*. Bogotá: Editorial Tercer Mundo.

Diario de sesión. (1969). Intervención. Julieta Campusano. Marcha de las Mujeres contra el hambre. *Sesión Ordinaria,* 8, 12 de noviembre. Senado de la República, Chile.

Falange. http://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/13338/5/mj_00048_G.jpg y http://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/13629/1/198106.pdf. Fecha de acceso: 25 de septiembre 2020.

Freire, Paulo (1970). *Pedagogía del oprimido.* Montevideo: Nueva Tierra.

Foester, R. y S. Montecino. (1988). *Organizaciones, líderes y contiendas mapuches: 1900-1970*. Santiago: Ediciones CEM.

Garret, P. (1982). La Reforma Agraria, organización popular y participación de la mujer en Chile (1 1973) en M. León. *Las trabajadoras del agro*. Bogotá: ACEP, Tomo I, 288.

Gómez, S. y J. Echenique. (1988). *La agricultura chilena. Las dos caras de la modernización*, Santiago de Chile: FLACSO/AGRARIA.

Guzmán Gallegos, M. A. (1997). *Para que la yuca beba nuestra sangre": Trabajo, género y parentesco en una comunidad quichua de la Amazonía Ecuatoriana*. Quito: Ediciones Abya-Yala/CEDIM E.

Hill Collins, P. (2019). *Interseccionalidad*. Madrid: Morata.

Hooks, B. (1984). *Feminist Theory: From Margin to Center*. Cambridge, Massachusetts: South End Press.

Kirkwood, J. (1990). *Ser Política en Chile. Los nudos de la sabiduría feminista*. Santiago: Editorial Cuarto Propio.

Lebeau, E. (2020). "Miria Contreras Bell (La Payita): Desafíos epistemológicos para una biografía". Toulouse, Francia. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02182507 Fecha de acceso: 25 de septiembre 2020.

Loden, M. (1985). *Feminine Leadership*. New York: Crown.

Lugones, M. (2008). Colonialidad y género. *Tabula Rasa* 9 73-101, julio-diciembre, Bogotá, Colombia.

Maravall Yáguez, J. (2012). *Las mujeres en la izquierda chilena durante la Unidad Popular y la dictadura militar (1970-1990).* Tesis. Universidad Autónoma de Madrid, España.

Mariátegui, J. C. (1979). *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*. Venezuela: Fundación Biblioteca Ayacucho.

Mariman, J. A. (2000). El conflicto nacionalitario y sus perspectivas de desarrollo en Chile: el caso mapuche. *Revista de Antropología social Austerra.* Universidad Bolivariana, 2.

Montalbán Moya, R. (2020). ¿Es la economía social y solidaria una habitación propia para las mujeres? Reflexiones sobre una epistemología feminista y descolonial para su estudio desde una sociología de la emergencia. En M. de los Á. Dicapua. *Economía social y solidaria y género*. España: Editorial Tirant lo Blanch, pp. 165-188.

Oficina Internacional del Trabajo (OIT). (1976). *El Problema del Empleo en América Latina: Situación, Perspectivas y Políticas*. Santiago de Chile.

Oyarzún, K. (2000). La familia como ideologema. Género, globalización y cultura. *Revista chilena de humanidades*. Facultad de Filosofía, Universidad de Chile.

Oyarzún, K. (2018). "Feminismos chilenos: Una democratización encarnada". *Revista Anales.* Séptima serie, 14, 33-50.

Painemal Morales, A. M. (2008). *Participación social e identidades políticas de mujeres Mapuche: el caso de ANAMURI.* Tesis. Sistema FLACSO, Ecuador.

Pascal Allende, D. (2006). Discurso de la diputada Denise Pascal Allende. Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados de Chile, sesión 32, 7 de junio, en homenaje a Laura Allende.

Pateman, C. (1995). *El Contrato sexual*. [Trad. de Mª Luisa Femenías y María-Xosé Agra Romero]. Barcelona: Anthropos.

Pichon-Rivière, E. (1999). *El proceso grupal.* Buenos Aires: Nueva Visión.

Polar, A. (1999). Para una teoría literaria hispanoamericana: A veinte años de un debate decisivo. *Revista De Crítica Literaria Latinoamericana 25*(50), 7-12. doi: 10.2307/4531050.

Sierra, M. T. (2004). Derechos Humanos, etnicidad y Género: Reformas legales y retos antropológicos, en R. A. Hernández, P. Sarela y M. T. Sierra (eds.). *El Estado y los Indígenas en tiempos del PAN: Neoindigenismo, legalidad e identidad*. México: Editorial Porrúa.

Valdés, X y L. Rebolledo. (2015). Géneros, generaciones y lugares: cambios en el medio rural de Chile Central, Polis 13. *Revista Latinoamericana* 13(42), 491-495.

Valdivia, V. (2017), *Subversión, coerción y consenso*. Santiago: Ediciones Lom.

Vera, A. (2009). Una crítica feminista a la Madre Pública Postdictatorial: los discursos de género en la campaña presidencial de Michelle Bachelet. Revista *Nomadías,* 10.

Villanueva, P. (1984). *Cuadernos de Orientación Socialista*, 19, Santiago de Chile, noviembre 1984.

Wiesmantel, M. (2001). Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos. *Antología de Estudios de Género*. Gioconda Herrera (ed.). Ecuador: FLACSO.

Educación y democratización en tiempos de crisis

Alcances contemporáneos de la experiencia de la Unidad Popular

Leonora Reyes-Jedlicki, Luis Osandón-Millavil y Fabián Cabaluz-Ducasse

La crisis orgánica de la educación chilena: siglos XX y XXI

Es nuestro interés revisar aquí el desarrollo de la política educacional del gobierno del presidente Salvador Allende entre 1970 y 1973, quizá la más controvertida de la historia republicana, dado su compromiso con la construcción de una amplia base social de apoyo para la definición de sus orientaciones, implementación y ejecución; así como por su articulación con un proyecto de desarrollo basado en la nacionalización de los recursos, la socialización de los medios de producción y la creación de la propiedad social.

A 50 años del triunfo electoral de la Unidad Popular (UP), coalición política que, junto con sostener el gobierno de Allende, asumió el liderazgo de la "vía chilena al socialismo", nos preguntamos por el aporte que podría tener –aun cuando no alcanzó a implementarse– el proceso de democratización educacional que se impulsó entonces.

Específicamente, a la luz del estallido o revuelta social del pasado 18 de octubre, y el proceso destituyente-constituyente que desencadena, nos preguntamos por los aprendizajes que podríamos obtener de este proceso y sus proyecciones en el presente.

La crisis de la educación neoliberal –lo demuestra así el proceso social y político en el que nos encontramos–, se corresponde con una más profunda: la del modelo de desarrollo neoliberal global. Al mismo tiempo, se diferencia de las crisis educacionales del ciclo histórico republicano (hasta 1980), no solo porque se expresa fuera del Estado Garante, sino porque ya no tiene que ver con la incapacidad del sistema de absorber una población excluida. Recordemos que, como consecuencia de sucesivas crisis de crecimiento, en 1920 se promulgó la ley de instrucción primaria obligatoria, en 1967 se logró la cobertura universal en este mismo nivel, y en 2003 se instauró la obligatoriedad de 12 años. Nada de esto parece haber resuelto problemas de fondo, se trata más bien de lo que Puiggrós y Dussel han llamado la "crisis orgánica", para distinguirla conceptualmente de las "crisis disfuncionales" de los sistemas educativos latinoamericanos, que no pusieron en riesgo "la organicidad del sistema educativo, ni de la educación pública". Efectivamente, la educación pública de gran parte del siglo XIX y XX en América Latina, hasta la década de 1980, se sostuvo en "el pensamiento pedagógico moderno atravesado por la lógica del adentro y del afuera" donde su desafío principal era disponer de ese "afuera" para integrarlo en un "adentro" (Puiggrós y Dussel, 1999, pp. 12-13). Entonces, una vez que las mayorías están siendo escolarizadas, ¿cuál es el problema que asoma? ¿Dónde pone las fronteras la escuela en la actualidad? ¿A quiénes incluye y a quiénes excluye? ¿Cómo lo hace cuando lo que se desestabiliza son "los límites y la función de la escuela", cuando la trama homogénea se ha roto y el problema de la desigualdad se ha trasladado dentro del sistema, llegando a constituir el "apartheid educativo"? (Gentili, 2001).

La "crisis orgánica" refiere a lo que sucede en el "adentro", la pérdida del sentido original de la construcción del sistema escolar, "los vínculos político-pedagógicos, a los roles de educador y educando,

y al orden de la transmisión generacional" (p. 8). A la vez, implica la derrota de uno de los fundamentos modernos sustanciales de la ilustración, la promesa de que, a través de un sistema de educación pública masivo, se alcanzaría un orden social igualitario (Núñez, 2015).

En Chile, la introducción del modelo económico y educacional importado por los Chicago Boys, desde fines de la década de 1970, generó políticas regresivas, echando por tierra los esfuerzos y avances realizados desde 1860 en adelante en materia de igualdad educativa. El modelo de desarrollo educacional bajo la Constitución de 1980 ha sido denunciado por el profesorado desde 1997, y luego por las movilizaciones estudiantiles de 2001, 2006 y 2011. Desde entonces, se han demandado una serie de cambios legales para hacer retroceder el modelo educacional privatizador y la desigualdad educativa promovida por este. Durante las últimas cuatro décadas, el modelo, en su estructura fundamental, no ha sido transformado, sino más bien regulado, a través de la promulgación de una serie de leyes desde la Ley General de Educación (2009), en reemplazo de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (1990), y luego a través de la ley que crea el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (2011), la Ley de Inclusión (2016) y la Nueva Educación Pública (2017). En paralelo, el gremio docente, a través de movilizaciones desarrolladas durante 2015 y 2019, interpela el marco regulatorio de su trabajo, consagrado con la Ley de Carrera Docente (2016), denunciando el agobio laboral y la falta de autonomía profesional.

Estas luchas, sin embargo, no han logrado articularse entre ellas, ni con las comunidades y territorios, de manera de levantar una alternativa al modelo de educación vigente. Si bien se asomaron trazas de articulación en distintos momentos, ellos han sido marginales o fragmentarios, sin lograr convertirse en una propuesta educativa de recambio al orden vigente (Colectivo Diatriba/Opech-Centro Alerta, 2011; Olave y Silva, 2014).

Hoy podemos decir que el modelo privatizador convirtió a la ciudadanía colectivizada de 1970 en individuos y clientes, obstaculizando o cooptando la posibilidad creadora de las comunidades

educativas. Subyace a este proyecto privatizador una idea de "sujeto universal", sin contextos, sin historicidad, donde estudiantes, profesores y directores son "sujetos sin agencia, entrenables, evaluables, "accountables", "unidades cognitivas estándar" (Carrasco, 2007, p. 296).

En esta situación, buscar salidas para la crisis de sentido resulta difícil. Estas preocupaciones, son las que nos llevan a revisitar y analizar críticamente el proyecto educacional de la Unidad Popular, poniendo énfasis en su eje democratizador.

La Unidad Popular y la crisis educacional

Desde que el gobierno de la UP fuera interrumpido por la fuerza de un golpe militar, no ha vuelto a desarrollarse un proceso amplio y profundo de discusión con la sociedad civil y sus organizaciones acerca de los sentidos y las bases fundantes del modelo educacional nacional. Tradicionalmente la educación pública fue concebida a partir de una relación entre Estado y ciudadanos, sin embargo, el gobierno de la Unidad Popular incorporó un nuevo elemento en la ecuación: la sociedad y sus organizaciones, convirtiéndose en el primer gobierno en la historia de Chile que intentaba resolver de manera colectiva la crisis histórica de la educación pública. Esta iniciativa se comprende en el marco de los proyectos de educación alternativa y de pedagogías innovadoras provenientes de los movimientos sociales y pedagógicos desarrollados desde principios de siglo hasta 1970, momento en que la UP, en tanto que proyecto social, político y cultural, decide hacerlas suyas, como parte también de su ideario educativo-pedagógico.

Son numerosos los documentos de este período que establecen la relación entre los desafíos educacionales de la Unidad Popular y las "antiguas aspiraciones del magisterio", sobre la base de su "experiencia y madurez" (Allende, 1972, p. 719; Allende, 1971; Austin, 2004, p. 36). Por otro lado, un documento llamado "Segundo aporte",

elaborado por una comisión ad-hoc, hizo "un recuento de los esfuerzos educativo-culturales de Luis E. Recabarren en el alba del movimiento obrero, de la lucha por la dictación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, de las batallas de la Asociación General de Profesores y la reforma de 1928, de la política educacional del Frente Popular, del Plan San Carlos y las escuelas consolidadas", concluyendo que:

> la idea de la ENU no es más que una concreción de un conjunto de valores e ideas manejadas en torno a la educación por las generaciones pasadas, con el fin de hacerla funcional y útil al desarrollo cultural, social y económico del país (citado en Núñez, 1990, p. 181).

Así es como la política educacional del gobierno de Allende "se inspiró claramente en los principios de unidad, continuidad, correlación, diversificación y democratización del sistema educativo" implementados en las escuelas consolidadas, que, en tanto escuelas unificadas, servirían de proyecto piloto para la implementación de la Escuela Nacional Unificada (ENU) (Núñez, 1990, pp. 181-183; Farrell, 1986, p. 147).

Un eje esencial y común a todas estas experiencias, era la consideración del niño y la niña al centro del proceso, no como objeto de políticas sino como sujeto históricamente situado, y que, por tanto, pasaba a ocupar un lugar protagónico en los espacios escolares y los procesos educativos desde dónde tenía que partir un nuevo orden educacional público. En efecto, esta es una idea central en el diagnóstico de la crisis educacional: "¿Ha pensado usted que los niños que hoy entran a la escuela dirigirán los destinos del país en el año 2 mil?" Con esta pregunta comienza la editorial del libro *La crisis educacional,* publicado pocos meses antes del golpe de Estado por Quimantú, en 1973. Quimantú, proyecto editorial dependiente del gobierno de Salvador Allende, operó como vocero de sus principales políticas, masificando el ideario cultural, político, social, económico e ideológico de la Unidad Popular a través de una política de distribución masiva y abaratamiento de costos. En la introducción de este ejemplar, se enumeraban los 10 "síntomas" de la crisis educacional chilena,

que, resumiendo, podríamos establecer como: "Educación antidemocrática", cada mil hijos de trabajadores que ingresan a la educación básica, solo 3 llegan a la educación superior; "desigualdad de oportunidades", si bien entre 1970 y 1973 ingresó casi un millón de alumnos a la educación, llegando a los 3 millones y medio de alumnos en total, la gran mayoría no terminó su educación. De un total de 348.600 estudiantes que ingresaron en 1960 al primer año básico, en 1971 alrededor de 291.000 quedaron en el camino; "Educación excesivamente teórica", mientras la educación técnica era considerada subalterna; "Educación no concordante con las necesidades productivas" para salir del subdesarrollo; "Desequilibrio e incapacidad de absorción" de profesionales egresados; "Educación rígida" que obstaculizaba la reintegración de personas al sistema; "Educación conservadora", que no asumía los importantes avances científico-tecnológicos, y las necesidades formativas técnicas de trabajadores y profesionales, para aumentar la sustitución de importantes y la producción; "Educación compartimentada", dividida en subsistemas sin una "espina dorsal" que la articule; "Educación individualista", promoviendo un clima competitivo al estimular con sistema de notas el rendimiento de cada alumno y no del grupo; "Autoritarismo en el gobierno educacional", las comunidades no participan (Quimantú, 1973, pp. 2-12).

El análisis crítico de la Unidad Popular al sistema educativo complementa un ya antiguo diagnóstico realizado por docentes del sistema e intelectuales de la educación en distintos momentos del siglo XX. Todos coincidían en determinar que la desigualdad, homogeneidad, burocratización, centralización, autoritarismo y falta de pertinencia del sistema educativo, habían sido problemas permanentes en la estructura organizacional del sistema formal de educación republicano, concluyendo que lo que se requería para alcanzar el ideario de una sociedad democrática, moderna e independiente, era una profunda reestructuración no solo de su financiamiento, sino de sus fundamentos, propósitos y prácticas pedagógicas (Gómez Catalán, 1926; Troncoso, 1925, 1956, 1956; Hamuy, 1960; Núñez 1993, 2015 entre otros).

El gobierno liderado por el presidente Eduardo Frei Montalva había advertido que la educación, al no estar actuando como canal de movilidad social, retardaba y dificultaba el cambio social, convirtiéndose en un gran peligro para la vida democrática (Osandón y González, 2014). Por ello su reforma educacional se estableció como un pilar primordial de su programa de gobierno, sosteniéndose, en parte, en el ideal comunitario de base socialcristiana, que asigna un rol preponderante a la educación para mantener el orden democrático (Núñez, 1990, p. 96). Pero de manera más relevante, influyó en ella el modelo social y político de las teorías del desarrollo y la modernización, basada en la noción de "capital humano", promovida desde distintos organismos internacionales, situando a la educación como factor de desarrollo económico (Cox, 1986; Núñez, 1990; Ruiz, 2010). Como telón de fondo de los programas sociales del gobierno, se encuentra la influencia de la teoría de la marginalidad de Roger Vekemans, que enfatizaba procesos de integración, participación y modernización de sectores sociales tradicionalmente excluidos. La educación fue considerada así, de un lado, como un medio técnico, una inversión, para contribuir al desarrollo, mientras de otro, un medio de cambio social, concebido como un medio de selección y de ascenso social, de movilidad social, lo cual es otra exigencia del progreso técnico (Vera, 1985). Así, el proyecto político e ideológico del gobierno demócrata cristiano canalizó la presión social por mayor democratización y movilidad social a través de la implementación de un modelo democrático que Ruiz calificó como "fuertemente elitista y etnocéntrico" (2010, p. 84). En este marco sus principales líneas de acción, fueron la expansión cuantitativa (logrando la cobertura universal de la educación primaria en el año 1967), el mejoramiento cualitativo (como la creación de programas de formación de profesores de educación básica en las universidades), la racionalización administrativa, y la reestructuración general del sistema, tanto para establecimientos científico-humanistas como técnico-profesionales (desde 6 a 8 años para el ciclo de primaria, y desde 6 años a 4 para educación media) (Núñez 1990).

Al asumir Salvador Allende la presidencia en 1970 se prosiguió con estos lineamientos, ampliando aún más la cobertura educativa en todos los niveles y la modernización del sistema. Sin embargo, daba un golpe de timón al proyecto educativo demócrata cristiano al impulsar una política de "democratización" basada en la ampliación las posibilidades de participación de las fuerzas sociales en la discusión del rumbo que tomaría la educación. Por otro lado, elaboró, propuso y defendió un proyecto de reforma con un sello propio. Se trataba del Plan de Escuela Nacional Unificada, como resultado, en parte, del proceso de discusión participativo propuesto. Con ello ponía en marcha un antiguo anhelo del profesorado que demandaba mayores cuotas de participación, tanto del gremio como de las comunidades educativas, en el diseño del proyecto educativo nacional (Núñez, 2003).

Si bien lo que derivó en un proyecto de transformación educativa, como lo fue la ENU puede ser leído a partir de sus influencias externas, en que es apreciable la incidencia de conceptos como los de "educación permanente" y "ciudad educativa", ampliamente difundidos por la UNESCO en América Latina, particularmente, a partir del Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación, que presidió Edgard Fauré, publicado bajo el título *Aprender a Ser*. La noción de "educación permanente" fue interpretada o "traducida" por el gobierno de la Unidad Popular a partir de dos formulaciones: en primer lugar, se vinculó al concepto de "educación de masas", es decir, a una educación "por" y "para" las grandes mayorías del país; y en segundo lugar, se asoció con la idea de entender al conjunto de la sociedad como una gran escuela, lo que se inspiraba en la experiencia de la campaña de alfabetización popular gestada en Cuba y las famosas consignas que reivindicaban al conjunto de la isla revolucionaria como una gran escuela. A parte del informe Fauré, se consideraron recomendaciones de la Conferencia de Ministros de Educación, celebrada en Venezuela en 1971, y párrafos de la reforma educacional peruana. Por otro lado, coincidía con preocupaciones fundamentales planteadas por la Iglesia en relación con

la humanización de la educación, con los trabajos de Paulo Freire y sus reflexiones y experiencias asociadas a la educación liberadora, promovida por educadores cristianos (Núñez, 1990, p. 180).

Con todo –y es el énfasis propuesto por el presente artículo– nos parece relevante examinar el proceso participativo en la elaboración de una política educacional como estrategia política fundamental para abordar la crisis histórica del sistema educativo, pues lo que se jugó en dicho proceso fue una discusión fundamental sobre los sentidos de la educación pública. Con ello, nos comprometemos con la recuperación de nuestras propias experiencias históricas de democratización educacional, con miras a aportar a la búsqueda colectiva de un nuevo proyecto educativo para el país.

Una política educacional para la democratización del proceso educativo

Aún hoy, pareciera que el hito más visible de la política educacional de la Unidad Popular es la elaboración del proyecto de Escuela Nacional Unificada, sin embargo, este proyecto surgió de una instancia profundamente democrática: el Congreso Nacional de Educación, desarrollado, en su etapa final, entre el 13 y 16 de diciembre de 1971. En dicho Congreso, se desarrollaron líneas estratégicas para transformar profundamente el sistema educacional del país y, desde nuestra perspectiva, creemos que fue un momento fundante de un denso y breve proceso de democratización del sistema educativo nacional. Como veremos, no se trató solo de un ajuste funcional de sus instituciones, sino de la construcción de un nuevo sentido respecto de cuál es el concepto que debe animar la organización de un sistema nacional, para educar en coherencia con el proceso de tránsito hacia una sociedad de carácter socialista.

En efecto, el año 1971 fue declarado por Salvador Allende como el "año de la democratización educacional", lo que se inició con un proceso de análisis crítico de la realidad educacional chilena por

cada establecimiento del país, continuando con congresos provinciales y regionales, los cuales se coronaron con el encuentro final del Congreso Nacional de Educación en diciembre. Los ejes de discusión propuestos por el Ministerio de Educación, para dicho año, referían a los problemas y desafíos educativos y culturales asociados a la transición al socialismo, la planificación educativa en el proceso de transición, la política de democratización escolar y la institucionalidad asociada a la ENU (Ministerio de Educación Pública, 1971; Nuñez, 2003).

Su realización permitió avanzar en orientaciones que animaron la integración de diferentes sujetos sociales en procesos crecientes de codirección y coadministración del proceso educativo. Del mismo modo, representó un esfuerzo importante por desconcentrar y descentralizar el debate educativo. Es así como en el Congreso participaron un conjunto muy diverso de actores, desde representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), de la Central Única de Trabajadores (CUT), del Ministerio de Educación y otros organismos estatales, pasando por representantes de la enseñanza privada y las universidades, hasta las organizaciones de madres, padres y apoderados, estudiantes secundarios y universitarios, los partidos políticos, y organizaciones comunitarias como las Juntas Vecinales, los Centros de Madres, entre otros. Esto parece ser la fiel expresión de la voluntad política del gobierno popular, con respecto a que fueran los propios protagonistas del sistema educativo quienes construyeran las principales directrices de su transformación.

Respecto de sus contenidos, el Congreso Nacional de Educación puso como punto de arranque de los debates educativos la noción de "crisis educacional", la que se expresaba fundamentalmente en su incapacidad de superar algunas de las siguientes contradicciones: los procesos de socialización de las relaciones sociales y un sistema educacional clasista e individualista; la promoción de la participación y la solidaridad, en contraposición con un sistema autoritario y competitivo; las crecientes exigencias científicas y tecnológicas y la incapacidad de responder adecuadamente por parte del sistema

escolar; la relevancia de la vinculación entre educación y trabajo, versus un sistema que desprecia el trabajo.

Teniendo en cuenta esas contradicciones, el Congreso Nacional de Educación señaló como sus objetivos centrales tomar conciencia sobre los problemas que afectan a la educación nacional; desarrollar una concepción educativa coherente con el proceso de transición al socialismo; incorporar a múltiples actores sociales en la toma de decisiones de política educacional; y comprometer a diferentes fuerzas sociales y comunitarias con las transformaciones educacionales que exigía el momento histórico (Ministerio de Educación Pública, 1971).

En la actualidad, existe consenso en sostener que la política educativa impulsada por el gobierno de la Unidad Popular apostaba por impulsar procesos de democratización del sistema educativo nacional, entendiendo que aquello era un problema central y estratégico para el proyecto sociopolítico de la Unidad Popular. Sin embargo, esto no se expresó solo por medio de un Congreso con una amplia convocatoria, sino también, en al menos otras tres líneas de desarrollo: la preocupación por mejorar las condiciones materiales y de acceso a la educación pública; la promoción de una noción de desarrollo profesional del profesorado desde una perspectiva situada de la pedagogía, y la importancia de democratizar el contenido de la enseñanza, a partir del fortalecimiento de la relación entre educación y vida social o más concretamente entre escuela y el trabajo.

Principales lineamientos de la política de democratización educacional

En primer lugar, entre los años 1970 y 1973, se verificaron esfuerzos notables por incrementar el acceso al sistema educacional y mejorar las condiciones materiales de las escuelas. Así entonces, durante estos cortos tres años, la matrícula del sistema de educación formal experimentó un crecimiento sin precedentes. Se amplió la matrícula escolar en un 17,4%, llegando a los índices más altos registrados

hasta entonces; la cobertura de todo el sistema (de la población de 0 a 24 años) se elevó desde 47% (1970) hasta un 54,5% (1973); en la enseñanza especial la expansión fue, aproximadamente, de 55%; en la educación parvularia de 53%; en la enseñanza media de 32%; y en la educación superior de 101% (Núñez, 2003). Lo anterior, y para ser justos con el desarrollo histórico del país, fue parte de un conjunto de políticas que se ratificaron e intensificaron tras el camino emprendido por la reforma educacional de 1965, liderada por el Partido Demócrata Cristiano y el presidente Eduardo Frei Montalva. Planteado de otra forma, lo que nos interesa remarcar, es que el gobierno de la Unidad Popular dio continuidad e incluso incrementó una tendencia democratizadora que venía desarrollándose desde la década de 1960.

En el mismo plano, y cómo una forma de enfrentar los problemas que la misma expansión de la cobertura acentuaba (Osandón y González, 2014, pp. 109-113), el gobierno de la Unidad Popular generó un incremento sustantivo de las construcciones escolares (edificaciones, aulas, aulas de emergencia, buses-aulas, etc.), las cuales superaron los 79.980 m2 construidos en 1970, llegando tan solo un año después, a una superficie de 195.468 m2. Por otra parte, se aumentaron las raciones alimentarias (desayunos y almuerzos) y hubo un aumento de un 45% en becas escolares; se distribuyeron de manera gratuita los textos escolares para la educación básica; y se desarrollaron importantes mejoras en el equipamiento y la infraestructura de la enseñanza técnica y profesional. Desde nuestra perspectiva, tanto el incremento en las construcciones escolares, como la mejora de las condiciones materiales de la educación pública, debemos comprenderlas como un avance en el proceso de democratización educativa, asociado particularmente a la mejora de las condiciones de acceso y permanencia de niños, niñas y jóvenes en edad escolar (Nuñez, 2003; Reyes, 2013).

En segundo lugar, el gobierno de la Unidad Popular impulsó todo un proceso de democratización educativa centrado en promover y robustecer la participación democrática, directa y responsable de

los/as trabajadores de la educación. Un reflejo de esta preocupación es el modo en que se concibió el perfeccionamiento docente, cuestión que quedó plasmado en el decreto 538 del 17 de abril de 1972. Dicho decreto creó los Talleres de Educadores, en los cuales se proponía una nueva concepción del trabajo docente, asumiendo que los procesos de formación y perfeccionamiento docente debían ser permanentes, masivos, descentralizados y unificados. Estos talleres, coordinados desde el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), a partir de grupos pequeños y autorregulados de profesores/as, propusieron al país: impulsar un proceso de análisis crítico y colectivo en torno a la actividad práctica de los/as docentes; promover la capacidad creativa y la toma de decisiones en el profesorado; suscitar relaciones sociales de nuevo tipo que fueran capaces de tensionar las lógicas competitivas, individualistas y verticales entre el profesorado y en el seno de las comunidades escolares; y finalmente, incentivar la participación del magisterio en la política educacional impulsada por el gobierno popular (Reyes, 2013).

Finalmente, es notorio el esfuerzo por avanzar en procesos de democratización del contenido de la educación. Ello es quizás uno de los esfuerzos más difíciles y de mayor calado que intentó impulsar el gobierno de la Unidad Popular, sin embargo, esto implicaba un conjunto de complejidades asociadas a procesos de transformación cultural. Una de las aristas que más resaltan en este tema fue la intención, a través del proyecto ENU, de incorporar el trabajo productivo en el currículum. La base de aquello era el esfuerzo por articular la educación con la vida social, o en términos mucho más concretos, la escuela con el trabajo y la vida comunitaria. En el informe de la ENU se observa con claridad.

> La incorporación del trabajo productivo en el currículum escolar y la vinculación de la escuela con la vida de la comunidad constituyen dos elementos cualitativamente nuevos y su introducción requiere de una fase de ensayo y experimentación en que la participación

> creadora del profesorado permita poner a prueba y evaluar múltiples formas de hacerlo (Superintendencia de Educación, 1973, p. 15).

Así, el sentido del proceso educativo quedó abierto a una transformación sustancial. Las críticas históricas a una educación desvinculada de la fenomenología propia de la vida social, en que el trabajo tiene un lugar central, y, por otro lado, la omisión pertinaz del contexto comunitario del proceso formativo, acentuado contradictoriamente por una pedagogía neo conductual promovida por la reforma del gobierno demócrata cristiano, hacían que cualquier esfuerzo por legitimar tales nociones provocara una fuerte resistencia. Más aún si ello remitía a un imaginario totalitario sobre los socialismos vigentes en la época. Con todo, dicha propuesta constituyó un eje central del Plan ENU, y se tradujo en cuatro líneas de acción muy concretas.

a. Instalar a la educación politécnica como una característica central de la organización curricular, lo que debía colaborar para que las nuevas generaciones comprendan los fundamentos científicos de las principales ramas de la producción y de los servicios de la economía nacional, y para que, a su vez, dominaran en términos teóricos y prácticos la tecnología. Esto requería, por cierto, mejorar laboratorios y talleres al interior de las escuelas, junto con estrechar sus lazos con industrias, fábricas y espacios productivos;

b. Articular los desafíos educativos con la "batalla de la producción", lo que llevó al gobierno a impulsar convenios de colaboración entre la Central Única de Trabajadores, el Instituto Nacional de Capacitación y la Universidad Técnica del Estado;

c. Reivindicar explícitamente el concepto de "trabajo socialmente útil" como una forma de enfrentar las lógicas del consumismo individualista, fomentando la mentalidad "productiva y solidaria", y reivindicando el trabajo voluntario y comunitario, coherente con la satisfacción de las necesidades del pueblo y la transformación de la realidad;

d. Subrayar que el fomento de la unidad entre educación y trabajo productivo también debía entenderse como una forma de incrementar los niveles de capacitación y formación del pueblo para contribuir a la superación del subdesarrollo y la dependencia (Cabaluz y Olivares, 2020).

Una reconceptualización de la relación entre Estado, educación y sociedad

Como se señaló al inicio de este capítulo, los desafíos del tiempo constituyente que vive Chile obligan a volver sobre preguntas fundamentales en la organización de la sociedad. Así, la relación entre Estado y educación efectivamente cobra un sentido nuevo si es que nos permitimos remirar la propuesta política de la Unidad Popular. Como lo analizan Osandón y González (2014), la larga trayectoria de la escolarización de la sociedad chilena ha estado tensionada por dinámicas tanto de inclusión/exclusión, como por problemas de equidad del servicio educativo. ¿Quiénes reciben educación efectivamente? ¿Qué tan pertinente y útil es su contenido para lograr fines sociales compartidos? ¿Qué tan pertinente y capaz es el Estado, por sí solo, para atender las cambiantes necesidades de la evolución demográfica, productiva, política y cultural de sus ciudadanos/as?

Como ya hemos visto, el gobierno de la Unidad Popular tuvo plena conciencia de que estos eran aspectos clave para delinear el futuro de una sociedad que se pretendía encaminar al socialismo como modelo de organización social. Y sobre esto es especialmente interesante ver cómo fue que se articuló una nueva representación sobre la relación entre Estado, educación y sociedad al incorporar a las comunidades como un actor clave en la ecuación; se transitó así desde una representación asentada en la idea de que el Estado provee un servicio público a ciudadanos y ciudadanos, a otra en que el Estado es una instancia de intermediación institucional para que la sociedad y sus organizaciones definan e implementen procesos educativos de acuerdo a

necesidades e intereses –con un alto componente local-territorial– pero enmarcados en un proyecto de desarrollo nacional de carácter socialista. Según lo expresaba el programa de gobierno, era necesaria la formación de un pueblo "socialmente consciente y solidario, educado para ejercer y defender su poder político, apto científica y técnicamente para desarrollar la economía de transición al socialismo" (Unidad Popular, 1970, p. 28).

Visto de este modo, lo que se conoció en la época como Decreto de Democratización, fue un intento por transformar radicalmente la gobernanza del sistema educativo público, intentando involucrar activamente a ciudadanos/as, ya no solo en su categorización puramente liberal (padre, madre, apoderados, estudiante), sino en su multidimensionalidad sociopolítica. Del mismo modo, la democratización del sistema educativo implicaba un proceso intenso de descentralización a nivel local, provincial y regional (Nuñez, 2003).

Según hemos podido constatar, dicho instrumento jurídico tiene antecedente directo en un documento de trabajo publicado por el CPEIP en 1972, cuyos autores, los profesores Amalia Moreno y Edgardo Mendoza, lo elaboraron como material de trabajo para el Curso Multinacional de Planeamiento y Administración de la Educación, dictado bajo el alero del citado organismo de perfeccionamiento. El análisis que realizan los autores es significativo respecto de lo que venimos argumentando, pues, entre otras cosas, sintetiza a la vez que devela, el carácter burocrático-técnico del servicio educativo estatal. Ello lo hacen para cada uno de los niveles educativos, desde la educación preescolar hasta la universitaria, y solo por citar un ejemplo del tono del análisis, cuando se refieren a la enseñanza media, señalan lo siguiente:

> La observación de los artículos que reglamenta a la educación media chilena nos permite concluir que todas las tareas de dirección, ejecución y planificación educacional recaen sobre individualidades (...) no se observa una participación ni representación de organismos populares de la comunidad ni de organismos de producción de la

> localidad o región (...) a lo más se observa la participación pasiva de algunos representantes de los estudiantes o de los apoderados (Moreno y Mendoza, 1972, p. 39).

La razón de esta observación crítica, al modo de organizar el sistema educativo chileno, se encuentra en la representación de un escenario más complejo y situado de los problemas educativos. Esto se refleja en el énfasis que ponen en ampliar el espectro de intervinientes en el proceso educativo, pues

> Los organismos populares (centros de madres, junta de vecinos, sindicatos, clubes deportivos, organizaciones culturales) están enriquecidos con la experiencia que la dura práctica de la vida entrega. Ellos son el vehículo idóneo que puede coordinar y movilizar la acción fundamentalmente en la base, en favor de la solución de los problemas de la educación (p. 57).

Indudablemente, este requerimiento de transformación del sentido y organización de la administración del sistema educacional estatal, va de la mano del demandante desafío por hacer viable el programa de gobierno de la Unidad Popular, entendido este como el inicio de un proceso revolucionario de transformación de la sociedad, así:

> Todo proceso revolucionario, para que sea tal, debe estar permanentemente ligado a la masa, en el caso de la educación, queremos buscar la manera para poder plantearle los problemas educacionales para que aquellos trabajadores, planteen a su vez, directamente sus ideas, aspiraciones y por sobre todo el aporte físico e intelectual, para que entre todos construyamos las soluciones necesarias, en una palabra: 'dar al pueblo la libertad de manifestar su patriotismo' (p. 5).

Teniendo como antecedente estas ideas, el 6 de marzo de 1973 se promulgó el Decreto 224 que creó, con el carácter de experimental, los Consejos de Educación (aun cuando quedó totalmente tramitado un mes después). Dicho decreto comienza señalando que se ha optado por impulsar un proceso de democratización en aras de que los/as trabajadores y las fuerzas sociales, asuman un rol protagónico en la

conducción de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales del país. Para asegurar dicha participación, el decreto creaba los Consejos de Educación en tres niveles: Regional, Provincial y Local, los que cumplirían funciones, entre las más destacables, asociadas al asesoramiento de las autoridades educacionales, el señalamiento de necesidades educativas y culturales de las comunidades y territorios, la realización de estudios y análisis que permitieran coordinar y planificar el funcionamiento del sistema escolar, la colaboración y apoyo en las actividades económicas, sociales y culturales de la comunidad.

Sin embargo, es importante subrayar que el decreto no otorgó atribuciones resolutivas ni vinculantes a los Consejos de Educación, lo que se debió fundamentalmente a las trabas y negativas argumentadas por las fuerzas políticas de oposición, quienes advertían con pavor que eso pudiera significar una redistribución de poder estatal hacia la sociedad. Ello, en definitiva, implicaba pérdida de control burocrático-elitario sobre los procesos educacionales. Al respecto, es decidor el pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre el Decreto de Democratización, señalando su legalidad en la medida que no interfiere el carácter ejecutivo de la institucionalidad educativa.

> Esta Contraloría General ha dado curso a este decreto, por cuanto sus disposiciones se conforman con las atribuciones que confieren al Presidente de la República los artículos 60, 71 y 72 N° 2 de la Constitución Política del Estado, en virtud de los cuales, como lo ha expresado la jurisprudencia administrativa, el Jefe del Estado puede crear comisiones, consejos o comités encargados de desarrollar labores de carácter meramente asesor, como sucede en el presente caso, y sin asignarles, por ende, funciones ejecutivas, que son privativas de las reparticiones y autoridades señaladas por la ley (Resolución N° 27.189, 1973).

A pesar de estas limitaciones, es de sumo interés el espectro de actores convocados para componer esos Consejos, los que contaban con representantes estatales, tales como autoridades ministeriales,

universitarias y de la oficina de planificación nacional, pero también con representantes de universidades, sindicatos, mundo campesino, organizaciones estudiantiles, centros de padres, madres y apoderados, juntas de vecinos/as, entre otras organizaciones comunitarias. Es decir, el grueso de sus integrantes, provenían predominantemente de la sociedad civil.

A su vez, el decreto de democratización creaba en todos los establecimientos públicos del país los Consejos de Comunidad Escolar, los cuales asesoraban y/o colaboraban con la planificación de actividades educativas y culturales en los establecimientos y su vinculación con las comunidades; los Consejos de Trabajadores de la Educación (que reemplazaron a los Consejos Generales de Profesores), tenían por función asesorar y estudiar la planificación técnico-pedagógica y administrativa de las escuelas, proponiendo medidas y pautas de acción y de mejoramiento; y los Comité de Coordinación, los cuales prestaban funciones de asesoría y proposiciones al jefe del establecimiento educacional. Todos estos organismos colaboran estudiando y elaborando proposiciones, poniendo sobre la mesa de discusión las necesidades de las comunidades, informando sobre problemáticas que afectan a la escuela, evaluando críticamente el cumplimiento de proyectos, planificaciones, inversión y distribución de fondos públicos, entre otras acciones.

En síntesis, lo que se ponía en juego con este decreto era la lógica más profunda que animaba al sistema educacional, es decir, plasmaba aquello que cada cierto tiempo emergía como necesidad y proyecto desde el mundo popular, el profesorado y otros actores del debate educativo (Reyes, 2014; Rubio, Osandón y Quinteros, 2019). La escuela no debía ser más un espacio cerrado, provisto burocráticamente como servicio, sino uno del cual la comunidad debía, por derecho, ser copartícipe de su diseño y desarrollo situado (Osandón, 2007; Osandón y González, 2014). Entonces, democratizar adquiere una particular resonancia, pues no es necesariamente equivalente a incidir delegando, sino en construir protagónicamente sus fines y formas de hacer.

Ideas en proyección: desafíos de la educación pública en tiempos constituyentes

La crisis política y social, expresada con claridad a partir del 18 de octubre de 2019, representa la constatación de que el malestar expresado en las diversas manifestaciones de las últimas décadas no era solo un síntoma, sino un proceso de toma de conciencia respecto de un modelo que produce estructuralmente problemas bajo una misma lógica, la de maximizar –mediante todas las formas posibles– el interés privado de minorías con altos niveles de concentración de poder, en detrimento del interés público y de la dignidad en las condiciones de vida de las mayorías.

La actual crisis sanitaria en el marco de la pandemia del COVID-19, se acopla a la crisis política y social, y profundiza la situación de carencia de garantía estatal de los derechos sociales básicos. Esto hace, más necesario que nunca, preguntarse por la manera en que podría ampliarse y profundizar el derecho a la educación, mediante una garantía real de un sistema público de educación. Esto nos desafía a reponer la discusión y definición de los sentidos de la educación pública que queremos y necesitamos, proceso abruptamente interrumpido con el golpe militar de 1973. Para aportar en esta dirección, queremos proponer, sintéticamente, tres grandes desafíos para el tiempo presente.

1. *El desafío de democratizar el sistema educativo, a partir de los avances realizados en las últimas décadas.* En la actualidad, la ley de Nueva Educación Pública ha propuesto saldar un problema pendiente asociado a la precarización de la educación pública desde la década de 1980, introduciendo un proceso de desmunicipalización y creando los Servicios Locales de Educación. Esta nueva institucionalidad tiene como propósito "devolver" la administración de los establecimientos educacionales al Estado, buscando que en ellos haya más participación de las comunidades educativas. Ahora bien, cabe interrogarse si sus propósitos de gestión más participativa y democrática podrán

desarrollarse en consonancia con la persistencia de políticas del rendimiento y mediciones de resultados a través de pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, gestionada según indicadores de cumplimiento de desempeños en el caso de las escuelas y los/as docentes, y tensionada por la manutención del sistema *voucher* para su financiamiento. La experiencia de la Unidad Popular, en este sentido, aporta interesantes perspectivas respecto de la complejidad de emprender acciones de democratización de un sistema educativo. Si en su momento fue el desafío multidimensional por romper con la administración burocrático-institucional, hoy puede significar fortalecer el rol conductor del Estado, a la vez que desconcentrar poder resolutivo a nivel local, sin replicar lógicas mercantiles de descentralización (Osandón y Pinto, 2018).

2. *El desafío de articular la democratización de la educación pública con un nuevo modelo de desarrollo plurinacional y global*. Las luchas por democratizar la educación pública en el país, tienen el complejo desafío de avanzar en procesos de articulación con las fuerzas sociales y políticas que están dando forma a un nuevo modelo de desarrollo, que sea capaz de superar la creciente y progresiva tendencia a la concentración económica del poder en pocas manos, las políticas extractivistas, de depredación y despojo de los bienes comunes presentes en el territorio, las lógicas de exclusión, segregación y subalternidad que viven las comunidades, pueblos y naciones indígenas, la desigualdad histórica y estructural que afecta a las mujeres y disidencias sexuales en el país. En fin, la democratización de la educación pública tiene que engarzarse en lo que desde la sociedad civil y diferentes movimientos sociales, se viene bosquejando como un modelo de desarrollo que fomente la soberanía, la democracia, la justicia social, la plurinacionalidad y los derechos humanos. Mirada en perspectiva, la política educacional de la Unidad Popular, conforme a su tiempo, hizo visible a un conjunto de actores tradicionalmente ausentes del debate educativo (Austin, 2003) y diseñó un modo de hacerlos converger con actores estatales, de diversos ámbitos, no solo

educativos. Al mismo tiempo, promovió este encuentro de actores sociales e institucionales a través de todos los niveles del sistema. En proyección, esto abre interesantes perspectivas respecto de cómo y quiénes inciden en la deliberación situada de los procesos educativos, entendiendo que hoy la agenda es mucho más plural, pero también fragmentada y con agendas que van en múltiples direcciones.

3. *El desafío de recuperar creativamente el sentido democratizador de un proyecto de educación pública, a partir de la relación entre política educacional desarrollada desde, por y para la sociedad civil y sus organizaciones.* Un proceso constituyente como en el que nos encontramos, tiene que hacerse cargo de la revitalización de la vertiente histórica que sostiene una idea de educación pública, sobre la base de una noción del derecho a la educación ampliada: el ejercicio soberano de los pueblos, de las comunidades, de autodeterminar los proyectos educativos que estas quieran darse. Establecer lo público como lo que es común, o lo comunitario, optando por el alejamiento de lo estatal como el lugar del desarrollo y fortalecimiento de lo común, y también alejado de las dinámicas del mercado centrado en el lucro y la segmentación social. Lo comunitario como parte de lo que es preciso recuperar en la discusión sobre educación pública, sin duda puede desarrollarse como materia de otro artículo. Esto no quita que podamos dejar anunciadas algunas ideas, fundamentadas en la investigación histórica, que creemos urgente considerar en la discusión de lo público en educación. Los desafíos aquí son varios, inspirados en Fauré y Cabezas (2020), dejaremos planteados solo dos de ellos: ¿Cómo los movimientos sociales con nuevas propuestas educativas y pedagógicas democratizadoras –orientadas a la justicia social– y que se autodefinen como parte de "lo público", no sean confundidos con el discurso de "lo público como "servicio" que levantan élites empresariales?, y, ¿Cómo no confundir una educación estatal con control comunitario con lo que la misma élite empresarial ha dicho que hay que "devolver a las comunidades" lo que anteriormente era materia del Estado, para acabar con la burocracia?

En síntesis, nos parece que es de extraordinario valor proyectar lo que fue la implementación de la política educacional de la Unidad Popular, pues, más allá de las dificultades propias del contexto político, su diseño obedeció a una plena conciencia de la situación de crisis de los principios que sustentaron la construcción del sistema público de educación desde el siglo XIX. Si bien el diagnóstico de crisis ya se había dado con fuerza desde inicios del siglo XX, es en esta coyuntura donde se llega más lejos en la concreción de un nuevo enfoque, radicalmente transformativo y democrático, de la relación entre Estado y sociedad. Comprender esto es clave en este nuevo contexto de crisis societal derivado en proceso constituyente. Tras casi cinco décadas de imposición y legitimación de un enfoque radicalmente mercantil y liberal en el campo educativo, la oportunidad de la deliberación constituyente se encontrará, inevitablemente, frente a fuerzas sociales conservadoras que pugnarán por mantener principios fundamentales de aquello. El desafío es, entonces, no solo tener claridad de cuáles deberían ser los nuevos principios de la relación entre Estado y sociedad, sino además atender a su viabilidad procedimental en consonancia con las transformaciones sociales y culturales asentadas en las últimas décadas. "Chile cambió" tiene más de una lectura posible.

Referencias

Allende, S. (1971). El niño, único privilegiado. Discurso de apertura del año escolar 1971. Santiago de Chile. https://www.marxists.org/espanol/allende/1971/marzo25.htm

Austin, R. (2003). *The State, Literacy, and Popular Education in Chile 1964-1990*. Lanham, MD: Lexington.

Austin, R. (2004). Estado, pobladores y Educación Superior, 1842-1952 en R. Austin (comp.). *Intelectuales y educación superior en Chile: de la Independencia a la Democracia Transicional, 1810-2001*. Santiago de Chile: CESOC, pp. 1-37.

Cabaluz, F. y C. Olivares. (2020, septiembre). Educación y marxismo en el Chile de la Unidad Popular. Notas a partir de la Escuela Nacional Unificada. *Boletín El ejercicio de pensar*, 4, pp. 26-41. https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/09/V3_Herencias_y_perspectivas_marxismo_N4.pdf

Cariola, P. (1973, mayo). La Escuela Nacional Unificada: lectura de un informe. *Revista Mensajes*, 218, 193-198.

Carrasco, A. (2007). Mejoramiento Escolar en Sectores de Pobreza: Problematizando Supuestos. *Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 5(5e), 291-299.

Colectivo Diatriba/Opech-Centro Alerta. (2011). *Trazas de Utopía: La experiencia de autogestión de cuatro liceos chilenos durante 2011*. Santiago: Editorial Quimantú.

Contraloría General de la República. Departamento Jurídico (1973, 11 de abril). Resolución N° 27.189. Cursa con alcance el decreto N° 224, de 1973, Ministerio de Educación Pública. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1034053

Cox, C. (1986). *Políticas educacionales y principios culturales. Chile 1965-1985*. CIDE.

Editorial Nacional Quimantú. (1973, septiembre). La crisis educacional. Serie documentos especiales. Santiago de Chile.

Farrell, J. (1986). *The national unified school in Allende's Chile. The role of education in the destruction of a revolution.* Vancouver: The University of British Columbia Press.

Fauré, D. y D. Cabezas. (2020). Lo público-comunitario como discurso emergente en las prácticas de Educación Popular en el Chile postdictatorial (1999-2016). *Trenzar. Revista de Educación Popular, Pedagogía Crítica e Investigación Militante*, 3(2), 17-46.

Gentili, P. (2001). La exclusión y la escuela. *Revista Docencia,* 15, 4-11.

Gómez, L. (1926). *Un proceso de Cultura y dignificación: La obra de la Asociación General de Profesores.* [Santiago de Chile, Memoria para optar al título de Profesor de estado en la asignatura de Castellano].

Hamuy, E. (1961). *El problema educacional del pueblo de Chile.* Santiago: Editorial del Pacífico.

Ministerio de Educación Pública. (1971). *Convocatoria, Reglamento y Programa del Congreso Nacional de Educación*. Santiago: MINEDUC.

Ministerio de Educación Pública. (1973, 12 de abril). *Decreto 224. Crea con carácter experimental los consejos de educación que indica para asegurar la participación de las organizaciones que señala.* Santiago de Chile.

Moreno, A. y E. Mendoza. (1972). *Estructura educacional para una acción de masas.* Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Innovaciones Pedagógicas.

Núñez, I. (1990). *Reformas educacionales e identidad de los docentes. Chile, 1960-1973*. PIIE.

Núñez, I. (2003). *La ENU entre dos siglos. Ensayo histórico sobre la Escuela Nacional Unificada*. Santiago: LOM Ediciones.

Núñez, I. (2015). Educación chilena en la República. Promesas de universalismo y realidades de inequidad en su historia. *Psicoperspectivas.* 14(3), 5-16.

Olave, G. y E. Silva. (2014). La escuela en nuestras manos. La experiencia de autogestión de la Escuela Comunitaria República Dominicana 2012-2013. *Revista Docencia*, 52, 99-103.

Osandón, L. (2007). *El cambio educativo desde la comunidad, la escuela y la familia. 1930-1970*. Santiago: Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Osandón, L. y F. González. (2014). La educación de masas durante la Unidad Popular: una nueva escuela para toda la comunidad en J. Pinto (ed.). *Fiesta y drama: nuevas perspectivas sobre la historia de la Unidad Popular*. Santiago: LOM Ediciones, pp. 109-142.

Osandón, L. y R. Pinto. (2018). El currículum nacional y la descentralización: políticas, institucionalidad y saberes en A. Arratia y L. Osandón (eds.). *Políticas para el desarrollo del currículum. Reflexiones y propuestas*. Santiago: Ministerio de Educación/UNESCO, pp. 155-184.

Puiggrós, A. e I. Dussel. (1999). Fronteras educativas en el fin de siglo: utopías y distopías en el imaginario pedagógico en A. Puiggrós. *En los límites de la educación. Niños y jóvenes del fin de siglo*. Rosario: Homo Sapiens, pp. 7-23.

Reyes, L. (2013). Profesorado, perfeccionamiento permanente y poder popular. Los Talleres de Educadores de 1972. *Rufián Revista*, 15. http://rufianrevista.org/?portfolio=profesorado-perfeccionamiento-permanente-y-poder-popular-los-talleres-de-educadores-de-1972

Reyes, L. (2014). *La escuela en nuestras manos. Las experiencias educativas de la Asociación General de Profesores y la Federación Obrera de Chile (1921-1932)*. Santiago: Editorial Quimantú.

Rubio, G., L. Osandón y F. Quinteros. (2019). La experimentación pedagógica territorial y la democratización del sistema educativo. Lecciones del Plan Experimental de Educación Rural de San Carlos (1944-1947). Ensaio: *Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 27(102), 88-107.

Ruiz, C. (2010). *De la República al mercado. Ideas educacionales y políticas en Chile*. Santiago: LOM Ediciones.

Silva, C. (2018). *Escuelas pobladoras. Experiencias educativas del movimiento de pobladoras y pobladores. La Victoria, Blanqueado y Nueva La Habana (Santiago, 1957-1973).* Santiago: Editorial Quimantú.

Superintendencia de Educación (1973). *Informe sobre la Escuela Nacional Unificada*. Ministerio de Educación Pública, Santiago de Chile.

Tapia Valdés, J. (1973). La respuesta chilena. Versión del discurso del Ministro de Educación, Jorge Tapia Valdés, en el Seminario sobre la ENU, 7 de marzo 1973 en UNESCO. *El mundo dice sí a la Escuela Nacional Unificada*. Folleto. Santiago de Chile, 1973.

Troncoso, V. (1925). *Igualdad social y económica del magisterio*. Imprenta La Nación.

Troncoso, V. (1956). *La educación fundamental y lo fundamental en educación.* Santiago: Atenea.

UNESCO. (1973). *El mundo dice sí a la Escuela Nacional Unificada.* Folleto.

Unidad Popular. (1970). Programa Básico de la Unidad Popular. Candidatura presidencial de Salvador Allende. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7738.html

Producción literaria y editorial durante la Unidad Popular

Matías Ayala Munita

En la historia de la literatura chilena no existe la categoría "Literatura durante la Unidad Popular", tampoco "Literatura de la Unidad Popular". Pueden buscarse con cuidado estas y otras entradas similares en las historias literarias disponibles y será infructuoso. A pesar de que en los últimos años se han comenzado a estudiar los diversos campos culturales durante la Unidad Popular (UP) desde nuevos métodos y acercamientos –cine, música, visualidad, por ejemplo– la literatura aún pasa desapercibida. Este ensayo explora los motivos de esta invisibilidad desde distintas perspectivas: temáticas, intermediales, editoriales y, por supuesto, históricas y políticas. Estos distintos acercamientos podrán dar una idea de las tensiones, dificultades y logros de la literatura chilena durante la UP.

Más que una inexistencia de literatura o una alguna conspiración para tornarla invisible propongo que ella se encuentra en una compleja encrucijada cultural, mediática, social y política. Frente a este escenario ella despliega una serie de procedimientos y estrategias para acomodarse y responder textualmente. En las siguientes

páginas propongo esbozar la escena cultural que tensiona la literatura durante la UP desde tres puntos de vistas complementarios: el contexto mediático en el que se encuentra; los temas y énfasis que destacan en su narrativas y poesía (oralidad, conspiración y crisis); y la producción editorial de Quimantú como política pública. Estos tres elementos permiten entender y estructurar el panorama de la literatura durante la UP.

Literatura en su contexto medial

Si, retrospectivamente, se compara la producción literaria con otras expresiones culturales, lo primero que parece destacar es su invisibilidad. Frente al cine, la música, la gráfica de murales y el afiche, la literatura parece no tener un lugar importante en la cultura de la UP. Si bien el cine chileno no tuvo una política estatal cinematográfica desde Chile Films (Mouesca, 1988, p. 49) estaba en un momento de expansión claro, con reconocimiento local y extranjero: un puñado de obras notables y una diversidad muy efusiva de variedad de obras. Más que un cine *de* la UP, sería más preciso afirmar que, al menos, hay uno *durante* la UP (del Valle, 2014, p. 342). Parte de sus cineastas más importantes hicieron una obra en relación con el momento de la UP que marcará su obra futura: Miguel Littín, Helvio Soto, Raúl Ruiz y Patricio Guzmán.

Sin embargo, fue la música popular y la gráfica de murales y afiches lo que se convirtió en el sello cultural. Cuando se piensa en la cultura de la UP se destacan los grupos Inti-Illimani, Quilapayún, Víctor Jara, Ángel e Isabel Parra, entre muchos otros más. La música participaba en las concentraciones urbanas y dieron melodía y ritmo a sus lemas más conocidos. Por ejemplo, la canción "El pueblo unido jamás será vencido", de Quilapayún, se tornó lema colectivo de multitudes. Por otra parte, los murales de las brigadas Ramona Parra y Elmo Catalán y los afiches del Taller Larrea y de Waldo González y Mario Quiroz, entre varios otros, fueron el decorado de la

época, ya que cubrieron muros exteriores y paredes con insistencia por todo Chile.

Música y visualidad potencian afectos y sentidos colectivos que unen sujetos diversos, cruzan espacios, géneros y clases sociales. Discos y afiches logran esto a través de su despliegue en el espacio urbano y su reproducción mediática: ambos se encuentran tanto en lugares públicos y abiertos como en espacios privados y cerrados. La literatura, en cambio, escrita y leída en aislamiento, confinada a una industria editorial bastante limitada, restringida al espacio cultural universitario y de lectores de clase social media y alta se ve impedida de tomar un rol mayor debido a su propio desarrollo mediático y cultural, técnico y político. La cuestión de la invisibilidad de la literatura no sería tanto un problema representacional –dificultad de articular literariamente la tensa complejidad social del proceso chileno– sino social, cultural y medial de la misma cultura letrada nacional: la dependencia del espacio universitario y su dificultad de ser parte de una industria cultural (cine, radio, discos).

Una manera de leer la producción literaria es acercarse desde la ensayística y las discusiones entre intelectuales de la cultura, la política y medios de comunicación de masas. El campo discursivo se compone a partir de grupos que se organizan en torno a espacios distintos. No obstante, todos son conscientes que deben articularse para tener éxito en las disputas políticas y culturales. Por una parte, articula el campo el proyecto político, social y económico la "transición al socialismo" de la UP con una gama de periódicos y revistas de partidos políticos y con particular presencia gremial, universitaria e intelectual. Frente a ella, se encuentra la emergencia de las organizaciones espaciales de obreros, campesinos, juntas de vecinos: el célebre "poder popular" que contendría su propia cultura y que se organiza territorialmente a partir de viviendas (barrios, poblaciones) y lugares de trabajo (cordones industriales). Por último, colman el espacio de la cultura urbana y nacional los medios de comunicación masivos (prensa, radio, imprenta, cine y la emergencia de la televisión). Entre la política partidista, la cultura popular y la cultura

masiva, el campo cultural tradicionalmente asociado a la "alta cultura" o cultura letrada queda tensado al máximo.

La pregunta recursiva del lugar de la literatura y la cultura letrada en el cambio político y social es muy importante para los escritores que colaboraron, con más o menos distancia, con el gobierno de la UP. Esta es la pregunta que anima las revistas culturales centradas en la literatura como *Cormorán* (publicada por Editorial Universitaria entre 1969 y 1970) y *La quinta rueda* (Quimantú, 1972-1973). Asediados por la cultura juvenil de medios de masas y la cultura popular que prometía organizarse, la pregunta crítica y recursiva es fundamental: ¿cuál sería la función de la tradicional "alta cultura" y de la "cultura letrada" en relación con la cultura popular y a la cultura masiva mediatizada en un momento revolucionario? ¿Hay que subordinar el *proyecto estético* al *proyecto político* (Canto, 2012, p. 159)?

Martín Bowen propone pensar la tensión de artistas e intelectuales en torno a la posible emancipación, a partir de los conceptos de saber alineado presente y el saber teórico del futuro, entre la capacidad crítica y la apertura a lo popular:

> Así, el proyecto de la Unidad Popular estaba articulado claramente como la relación entre un saber iluminado y un hacer desalienante, administrando un modo de producir la verdad que permeaba no sólo el ámbito cultural o ideológico, sino también la coyuntura política. En este sentido, la verdad a la que accedería el nuevo pueblo –desalienado y autónomo– estaba ya prefigurada y delineada por la teoría. Se configuró así una encrucijada que colocó a los intelectuales en la compleja situación de verse exigidos de acentuar su voluntad crítica a la vez que identificarse con los "verdaderos intereses" del pueblo (2008, p. 77).

Los escritores chilenos independientes enarbolaron la libertad de acompañar los cambios políticos con una cierta distancia crítica (Gilman, 2003, p. 279). El volumen de ensayos *La cultura en la vía chilena al socialismo* (1971) editado por el poeta Enrique Lihn se podría entender como intento de articulación de esta postura: por una

parte, se defiende la libertad crítica y literaria (autonomía literaria) y, por otra, se reafirma el apoyo al gobierno revolucionario (compromiso a pesar de no ser militantes de partidos políticos). Marxistas heterodoxos, a partir de las lecturas de Sartre, Marcuse y Adorno intentan desarrollar un pensamiento que, situado en el "desarrollismo latinoamericano", relacione las nociones opresivas de inconsciente e ideología y las liberadoras de autoconsciencia y cultura. De esta manera, creen en una autonomía relativa de la cultura en relación con la infraestructura económica con un énfasis crítico dentro de la cultura "subdesarrollada". Los escritores en torno a Cormorán quieren "propiciar la autoconciencia como mecanismo para desprenderse de la dependencia y alienación social, de tal modo que los sujetos sean capaces de adquirir su propia determinación cultural y política" (Zamorano, 2016, p. 230).

Sin embargo, la posición de diversos autores chilenos (independientes, comprometidos y militantes) se enfrentan al mismo problema cultural y mediático: cómo lidiar con la cultura de masas juveniles cada vez más amplias y con la emergente noción de lo popular que promete colmar el espacio. Una primera respuesta frente a ese doble acoso es la recursividad autoconsciente que se desprende de la tradición de la vanguardia histórica. La autoconciencia textual se pregunta –más allá de un mero procedimiento formalista– por el lugar y función cultural y social de la obra. Esta una manera de leer la "novela" *Moros en la costa* (1973), de Ariel Dorfman. Este es un texto que consiste en un conjunto de reseñas, críticas de libros y películas ficticias y conjeturales que tratan y acontecen durante la UP. A partir de la multiplicidad, el fragmento y el collage, se compone un texto polifónico y político, autoconsciente e irónico. Las diversas obras resumidas y juzgadas mantienen una pluralidad de relaciones estéticas, políticas y afectivas. En esta novela no se presenta la militancia de manera abierta, más bien se encuentra contrapesada con su prolífica y lúdica elaboración textual. Tan literaria como política, *Moros en la costa* es una indagación fragmentaria de cómo narrar, imaginar y dar sentido al acontecimiento de la Unidad Popular.

En términos poéticos, quizá los libros más importantes de la época son *Artefactos* (1972), de Nicanor Parra, y *Poemas visivos y proposiciones a realizar* (1972), de Guillermo Deisler. Ambos son poetas en distintos momentos de su desarrollo como escritores: Parra con *Artefactos* extrema la fragmentación de la oralidad urbana que viene desarrollando desde la década de 1950 y, Deisler, en cambio, ampliando su trabajo plástico de grabador y editor de la década de 1960, cruza los límites de lo textual, lo visual y la imprenta. Es significativo que ambos son volúmenes en que lo textual se relación a lo visual y lo medial con trabajos gráficos y tipográficos, dibujos, collages y fotografías. En *Artefactos*, eso sí, el interesante trabajo gráfico se debe al diseñador Guillermo Tejeda.

Al mezclar lo textual y lo visual, ambos volúmenes articulan los códigos mediales del periodismo, la publicidad, el cómic junto a los del pop y el conceptualismo. Estas obras piensan sus relaciones contextuales y políticas a partir de sus propios recursos mediales y materiales. Los fragmentos orales y textuales de *Artefactos*, si bien toman el pulso a la época, son expuestos en su antagonismo y violencia, pero se muestran incapaces de darle un sentido más allá de la yuxtaposición (Ayala, 2010, p. 72-73). Deisler, en cambio, utiliza una gran gama de recursos entre el texto y las imágenes, entre la literatura y la plástica. Parra y Deisler encarnan una conciencia mediática aguda de la literatura durante la UP y, expanden los límites de lo textual y lo visual; además utilizan la ironía, el distanciamiento y la autoconciencia como elementos de trabajo.

Uno libro de ensayos más significativos del período es *Cómo leer el Pato Donald* (1971), escrito por Arial Dorfman y Armand Mattelart. Es la más célebre de denuncia marxista hecha a partir de una interpretación descolonizadora de la industria cultural de Estdos Unidos en América Latina. Como una interpretación que combina una lectura de historietas a partir de distintos niveles de significación culturales y sociales (la semiología de Barthes y Greimas) y una teoría de la cultura de masas que proviene de una ideología capitalista (Escuela de Frankfurt), este libro es de una novedosa metodología en el espacio

intelectual latinoamericano. Enmarcado en la teoría de la dependencia y de relaciones globales, también puede leerse en su contexto chileno como una respuesta a las preguntas locales en torno a las relaciones entre industria cultural y transición socialista chilena (Zarowsky, 2013, p. 101).

Además, hay que notar que en Chile no hay una tradición fuerte del novelista o poeta como intelectual público –si se compara, por ejemplo, con el campo intelectual de México o Argentina– y esto no cambió, sino que se reafirmó durante la UP. Se podría afirmar que los "intelectuales orgánicos" de la UP no fueron los novelistas o poetas chilenos, sino los sociólogos del Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) de la Universidad Católica de Santiago. Ellos, desde la academia, la revista *Cuadernos de la realidad nacional* (1969-1973) y sus asesorías al gobierno dan vocabulario y conceptualizan el acontecer social y político durante la UP. La reflexión de Armand Mattelart respecto a los medios de comunicación intentaba pensar cuáles medios masivos de la industria cultural chilena podrían ser utilizados para la revolución socialista y cómo sortear la alienación y concentración de los medios de comunicación (Rivera, 2015, p. 358). Se preguntaba, también cómo replantearse la manera en que se produce, circula y es consumida la cultura y cómo pensar a los mismos sujetos populares como sujetos activos de recepción.

Oralidad, conspiración y crisis

El primer rasgo que destaca, cuando se lee la narrativa de la época, es el registro oral que tiene su escritura. La oralidad es la transposición de una diversidad de actos sonoros al texto. Así, el registro oral trenza voces como acontecimiento acústico y hablas como hecho cultural para relacionarlo con su contexto afectivo, social, político y cultural. La voz, a través del acento, entonación y timbre, es una forma en que los cuerpos se relacionan afectiva y políticamente (Dolar, 2007, p. 130). Dado que la oralidad y la escritura son dos sistemas

tecnológicos, materiales y culturales distintos –como estableció con claridad Walter Ong (1987, p. 81)– la literatura intenta recrear efectos de voces y hablas con el fin de representar sujetos, relaciones sociales y colectividades.

El uso de un registro del habla juvenil durante la UP es muy importante ya que ella da cuerpo a la agrupación generacional que tenía mucha presencia en los medios de comunicación masivos como revistas, radios, cine y televisión. Casi la mitad de la población nacional tenía menos de 20 años en Chile, según el censo de 1970 (Instituto Nacional de Estadísticas, 1970, p. 1). La reproducción de las voces juveniles mediante una textualidad oral es una característica de la poesía coloquial de Claudio Bertoni y Cecilia Vicuña. Ambos autores, que décadas después serán relevantes, publican sus primeros títulos en 1973: *El cansador intrabajable* y *Sabor a mí*, respectivamente. En narrativa, la voz juvenil de clase media urbana era primordial en los narradores y personajes de los cuentos de *Tiro libre* (1973), de Antonio Skármeta, y novelas como *La concentración de bicicletas* (1971), de Carlos Olivares, y *Palomita Blanca* (1971), de Enrique Lafourcade.

Palomita Blanca es particularmente interesante por varias razones. Primero, porque fue una novela muy exitosa durante la época con múltiples reimpresiones. La novela combina los elementos de cultura juvenil representados por los medios masivos: los jóvenes escuchan rock psicodélico, usan drogas recreativas, tienen sexo despreocupadamente y sujetos de diversas clases sociales se mezclan en los espacios urbanos. En ella, además, confluyen el registro juvenil del habla femenina popular (la protagonista de la novela) y los espacios urbanos del barrio alto santiaguino como objetos de consumo y deseo (Providencia, el Parque Forestal, discotecas de La Reina). Al mismo tiempo, *Palomita blanca* es una alegoría política en clave de melodrama: la historia de amor entre jóvenes de distinta clase social está condenada al fracaso durante la UP.

Por otra parte, la oralidad popular también puede ser una marca clara de clase social, ya sea obrera, campesina o urbana. Esto se hace

muy patente en los cuentos *Las aventuras de el Salustio y el Trúbico* (1973), de Alfonso Alcalde, y la novela de Guillermo Atías, *Y corría el billete* (1972). Ya sea mediante la picaresca popular de los cuentos de Alcalde, o en la novela de traición política de Atías, la clase social de los personajes se percibe con rapidez afectiva y política en el registro oral. En ambos casos, esta oralidad popular es una figura de síntesis nacional y popular. Para todos ellos, las supuestas "incorrecciones" del habla chilena son símbolos de identidad cultural nacional y como tales deben cruzar diversos espacios sociales y abarcar representaciones mediáticas.

Desde el asesinato del general René Schneider el 25 de octubre de 1970, justo antes de que asumiera Allende, se tiene la certeza de que operan conspiraciones políticas en Chile. Esta divergencia entre la certeza de las conspiraciones y su invisibilidad es un lugar de trabajo literario fértil. Algunos escritores utilizan el género policial para hacer visible y legible la conspiración oculta, para articularla bajo la lógica del crimen y su investigación. La conspiración económica y política se representa en las novelas de Fernando Jerez, *El miedo es el negocio* (1973), y en la de Guillermo Atías, *Y corría el billete* (1971). En ambas, la conspiración se presenta en torno a la figura del dinero, el trabajo y distintos espacios productivos como la fábrica y el banco. En *El miedo es el negocio*, la elección de Allende desata una fuga de capitales que, en vez de ser una mera reacción del mercado financiero, se revela como una conspiración orquestada para desatar inestabilidad. En *Y corría el billete*, un obrero pagado por los directores seduce a una directiva del sindicato de la fábrica expropiada para hacer fracasar la producción. En ambas historias, la conspiración se narra con la rapidez de capítulos cortos basados en la crónica policial, en donde desfilan personajes de distintas clases sociales a través del lenguaje reconocible.

En *Batman en Chile* (1973), de Enrique Lihn, en cambio, el personaje del cómic Batman viene a Chile contratado por la CIA para ayudar en la conspiración contra el gobierno de la UP. *Batman en Chile* es un esfuerzo paródico para dar sentido textual, narrativo y figural a la

conspiración de Estados Unidos. Así, Lihn usa la ironía y la figuración grotesca para distanciarse de la afectividad del miedo y la paranoia y confunde los planos cognitivos de la influencia de ese país en Chile: por una parte, la figura de los cómics como Batman, y por otra, la intervención de la CIA durante esos mismos años. *Batman en Chile* es una deconstrucción de la influencia cultural de Estados Unidos a través de los medios de forma alternativa a como lo proponía *Cómo leer al Pato Donald* (1971), de Dorfman y Mattelart, del año anterior. Lihn –como el cineasta Raúl Ruiz en sus obras del período– echa a andar situaciones absurdas como investigaciones culturales.

La noción de espacios en crisis permite agrupar una serie de textos en los cuales las zonas tradicionales de mediación como los partidos políticos, la cultura universitaria y el espacio urbano dejan de funcionar como acostumbraban. La crisis comienza cuando las conspiraciones comienzan a tener éxito, por ejemplo, sabotajes, paros y desabastecimiento. En los textos aparecen representados una serie de espacios nacionales durante la UP que se intensifican con violencia y afectos: productivos (fábricas, campos, ciudad) sujetos a expropiaciones y bloqueos; económicos de circulación y consumo de bienes (cerrados, desabastecidos, violentados); urbanos (barrio alto capitalino, poblaciones, Santiago Centro) con manifestaciones, protestas, grafitis y afiches; y mediáticos (periódicos, radio, cine, televisión) con gran cantidad de noticias y discursos contradictorios. En todos ellos se nota una crisis económica, social y política que se amplifica afectivamente por la conspiración, la violencia y la paranoia. Los afectos negativos tradicionalmente políticos como el miedo se encuentran muy presentes en las representaciones de la UP y tensan las nociones de espacios colectivos y constituyen y dan fuerza a los antagonismos sociales. Hay una serie de obras que representan la conspiración de Estados Unidos y las agrupaciones locales para desestabilizar y derrocar al gobierno de Allende. La extensión de afectos negativos como la ansiedad (miedo, confusión, odio) son suplemento afectivo de la conspiración.

A inicios de 1973, Pablo Neruda publica *Incitación al nixonicidio y alabanza a la revolución chilena* en Quimantú, el volumen más propagandístico del célebre y cosmopolita poeta, Premio Nobel en 1971. *Incitación al nixonicidio...* es un libro que intenta denunciar la crisis en Chile desatada en 1972 por la conspiración estadounidense, y mediante una retórica hiperbólica y alusiones literarias a Quevedo y Whitman demuestra la impotencia frente a los hechos de violencia política. En comparación con los otros poemas de acusación de Neruda (*España en el corazón, Canto general*) las presiones del contexto de crisis local no logran tener una mayor elaboración textual.

La producción editorial Quimantú

A inicios de 1971 se estatiza la mayor empresa editorial chilena de entonces, Zig-Zag, la que se convierte en la Editora Nacional Quimantú, que fue importante por la cantidad de ejemplares publicados. Se afirma que 12 millones de libros, más que nunca en la historia nacional (Bergot, 2004, p. 2). A esto se debe el mandato de llegar a un público popular que no solía consumir este tipo objetos culturales. La empresa Quimantú mantiene las directrices de su producción –que eran principalmente revistas– pero reenfoca su labor hacia los fines políticos y culturales de la UP a través de la impresión y distribución masiva de libros. Si antes Zig-Zag producía en el mercado masivo del entretenimiento, en cambio, Quimantú le agrega una función política y pedagógica. Sin embargo, debió financiarse con sus propias ventas.

Quimantú debe pensarse en relación con las políticas educativas de la UP. En este contexto, la educación pública y las campañas de alfabetización son guiadas por la teorización de Paulo Freire, entonces trabajando en Chile. Freire sostenía el método psico-social de alfabetización incluida una "concientización" social y política (Austin, 2003, pp. 95-107). A la vez, el gobierno impulsa la reforma educativa llamada de la Escuela Nacional Unificada (ENU). Alfabetización,

educación y lectura, entonces, son parte de un conjunto iluminista que suple las carencias culturales de la población y forma ciudadanos. Quimantú, de esta manera, quiere construir un lector popular junto a una cultura que articule las relaciones entre alta cultura, cultura masiva y popular. Por estas razones, el proyecto editorial de Quimantú encarna la producción literaria de UP mejor que cualquier novela o libro de poemas. Es aquí en donde habría que buscar el legado cultural de UP, no tanto en "obras literarias" específicas o en escritores individuales sino su producción y distribución editorial como política cultural masiva y popular. De hecho, hay varios escritores y profesores jóvenes que trabajaron en Quimantú como colaboradores, guionistas, talleristas, etc.

Quimantú fue una suerte de negociación entre distintos discursos culturales: el Estado como educador público e impulsor de la lectura a todo nivel, fuente de entretención que competía en el mercado de la industria cultural impresa y difusión de sus ideas políticas. De esta manera, sus principales líneas difundían literatura universal –principalmente narrativa– en las colecciones "Quimantú para todos", "Minilibros" y "Cordillera"; libros infantiles en "Cuncuna"; ensayos ilustrados que construyen una idea de lo nacional-popular en la icónica colección "Nosotros los chilenos" y difusión de teoría política marxista en "Cuadernos de educación popular", "Clásicos del pensamiento social", "Camino abierto" y "Figuras de América". Además, siguió con las revistas del mercado segmentado: revistas humor (*La firme*), femenina (*Paloma*), juvenil (*Ramona*), musical (*Onda*), infantil (*Cabrochico*), cultural (*Quinta rueda*), historietas (*El jinete fantasma*, *Dimensión cero*) entre otras.

Quimantú se jactó de no despedir a trabajador alguno y democratizar sus relaciones laborales y, aún más, aumentaron la producción de forma notoria e hicieron cambios en la distribución de los libros (Molina, 2018, p. 32). Junto a las escasas librerías concentradas en el barrio alto de la capital, se utilizaron los quioscos callejeros, ya que eran más numerosos y llegaban a barrios populares. Como se puede apreciar, los cambios fueron en distintos niveles de formatos,

contenidos y distribución; esto muestra la creatividad que Quimantú logró articular en su producción.

Los libros de la colección "Minilibros" fueron principalmente obras de narrativa universal, es decir, europea, estadounidense y soviética, con un tiraje de 50 a 100 mil ejemplares (Subercaseaux, 1984, p. 54). En esta colección de 55 volúmenes los autores europeos publicados tienen 23 títulos, los estadounidenses 12, los soviéticos 8, los latinoamericanos 6 y chilenos 6, lo que muestra la complejidad en la teoría y la práctica editorial. Joaquín Gutiérrez afirmó que para "Minilibros" busca "realizar el tránsito de la subcultura a formas más elevadas de la literatura" (1972, p. 21). El concepto de "sub-literatura" es diferenciado de la "literatura" propiamente tal por Ariel Dorfman. La literatura "hace preguntas" y la sub-literatura "otorga respuestas" cerradas, la primera trabaja con matices y la segunda con efectos ya calculados (Dorfman, 2016, p. 115). "Minilibros" compite en el mercado impreso con narrativa universal a bajo precio y así hace una oferta de entretención y formación cultural. Al mismo tiempo, rescatar la tradición literaria occidental para encausarla al futuro revolucionario.

Sin embargo, la noción misma de literatura se encuentra en una encrucijada compleja como muestran las investigaciones recientes de Anwandter. Por una parte, la publicidad, las solapas, introducciones de los libros (paratextos) de Quimantú abundan en ejemplos "en que la literatura se concibe como una entretención individual ajena a la acción política" (Anwandter, inédito, p. 19) como si tuviera un individualismo peligroso y elemento estético difícil de administrar. De esta forma, se concibe al lector popular como objeto de educación, pero por otra se entiende como una figura pasiva cuyo placer textual debe ser articulado bajo el discurso político y guiado por los paratextos.

La colección "Nosotros los chilenos", por otra parte, crea su propio formato físico y una forma literaria específica: textos expositivos, entre el reportaje periodístico y el ensayo cultural, siempre ilustrado con una gama muy diversa de ilustraciones, fotografías y dibujos.

"Nosotros los chilenos" articula una identidad nacional a partir del pasado como lucha, el trabajo popular y la cultura tradicional. Entre sus libros hay algunos que se compenetran con los intereses y sentidos políticos del gobierno de la UP, por ejemplo, *La lucha por la tierra, Historia de las poblaciones callampa, Las grandes masacres, El movimiento obrero, Los fusilamientos*. En estos volúmenes se muestra cómo la lucha de clases es el motor de la historia, y el sufrimiento colectivo cambia su sentido narrativo de la tragedia a la épica revolucionaria. Otros títulos, en cambio, son representaciones históricas nacionales: *Los araucanos, Pampinos y salitreros, Historia de la aviación chilena, Historia del ejército, Cuando Chile cumplió 100 años, Los terremotos en Chile*. Por último, otros son publicaciones de historia cultural: *Historia del cine chileno, Pintura social en Chile, La nueva canción chilena, Caricaturas de ayer y hoy, Grandes deportistas, Leyendas chilenas, Inventores obreros.* Esta producción de Quimantú se puede trabajar en detalle para interpretar las temporalidades nacionales que se conjugan en relaciones laborales (*Así trabajo yo*), zonas geográficas y espacios nacionales (*Yo vi nacer y morir los pueblos salitreros, Chiloé. Archipiélago mágico, La frontera*) y tipos humanos (*Niños de Chile, La mujer chilena, Geografía humana de Chile, Viaje por la juventud, Emancipación femenina*). Juan Cristóbal Marinello afirma que "la colección constituyó un intento por conjugar coherentemente la cultura ilustrada con la cultura popular y la cultura de masas" (2007, p. 17). Lo ilustrado es el libro, popular se encuentra en los temas; la cultura de masa en el formato, tiraje y uso de imágenes. Esta conjunción le permitió poder articular una identidad nacional y popular muy atractiva.

En las revistas historietas infantiles siguen un parecido: a partir de una evaluación negativa de la industria capitalista se proponen cambios de formas, formatos o contenidos que puedan tener éxito en el mercado pero que sean acordes a la visión política de la UP. Manuel Jofré relató su experiencia en Quimantú. Jofré sigue la estela del libro de Dorfman y Mattelart ya que comienza el texto dando algunos rasgos de las "historieta tradicional burguesa", es decir, decodifica su ideología estética: parcelación del mundo (1974, p. 112), maniqueísmo

moral que oculta los conflictos de clases (1974, p. 114), valores individuales (1974, p. 115), relaciones de dominio vertical (1974, p. 116), entre otros. Después de este diagnóstico crítico, Jofré expone cómo resolvieron estos problemas. Por ejemplo, le agregaron elementos de la cotidianidad nacional al cómic de manera que la ficción se relacione con la experiencia de lector (1974, p. 131).

El proyecto editorial Quimantú, en definitiva, fue un proyecto complejo que trenza la industria cultural impresa con un lector popular a través de la literatura y la pedagogía social. La tensión dentro de cada una de estas líneas es clara. La literatura se tensiona entre cultura latinoamericana y la universal, entre la complejidad textual y el placer de la lectura, la pedagogía y la entretención. La difusión de las ideas políticas manifiesta los conflictos de las posturas y estrategias políticas de los distintos partidos de la UP. En la colección "Camino Abierto" hay una línea latinoamericanista cercana al Partido Socialista y otra de los clásicos del marxismo, más propia del Partido Comunista. La colección "Cuadernos de Educación Popular", dirigida por Marta Harnecker, se concentraba más bien en formar el Poder Popular. Las decisiones editoriales, en este contexto, también son agudas posturas políticas que deben enfrentarse y ser negociadas.

Cierre

Debido a que la industria editorial nacional se concentraba principalmente en la producción y venta de revistas, la producción literaria se repliega aún más frente a la emergencia la UP. Su autoreflexión textual, cultural y mediática es también material y política como en Dorfmann, Parra y Deisler. Por una parte, se encuentra la extensión de los medios de comunicación que dan preeminencia a los productos que circulan de forma masificable como las revistas. Por otra parte, la emergencia de una cultura popular favorece los productos que intentan ampliar su recepción y que se inscriben en una pedagogía política. La literatura chilena, entre el campo mediático y el campo

político piensa y elabora su propio espacio entre ambos como lugar de pregunta y liberación de sus ataduras ideológicas y de clase, como se puede desprender de las discusiones en la revista *Cormorán*. A pesar de estos obstáculos, la literaria se mostró más rápida y capaz de lidiar con los aspectos políticos y sociales, como la incorporación de la oralidad popular en Alcalde, como representación juvenil en Lafourcade. A su vez, los elementos políticos, como conspiración y la crisis, son rápidamente elaborados por Lihn, Jerez, Atías y Neruda.

En contraposición, Quimantú como producción cultural responde de forma interesante y compleja frente a este mismo escenario. Desde un punto de vista, se organiza entre aumentar la venta en un mercado de medios masivos, la iluminista de la pedagogía política y entre medio, difunde una noción de cultura literaria occidental. La primera funciona dentro de la lógica de mercado capitalista, frente a lo cual se amplía la oferta y la distribución. El mejor ejemplo de esto fue la práctica de Quimantú de vender libros en los kioscos en donde distribuían revistas. Las colecciones políticas, en cambio, muestran una estrategia pedagógica y divulgadora, es decir, como redistribución de capital cultural y formación ciudadana (Subercaseaux 1984, p. 49). Entre ambas, las obras literarias tienen un lugar central pero también inestable: por una parte, la narrativa forma el hábito de la lectura y dan cuenta de un sujeto "culto" en obras importantes occidentales; a la vez, también el placer de la lectura y los sentidos de las obras deben ser canalizados en prólogos y solapas. La mayor representación de la narrativa occidental sobre la latinoamericana son ejemplos de lo anterior.

Referencias

Anwandter, C. (2020). La figura del lector popular en Quimantú: placer, trabajo y revolución. [manuscrito presentado para publicación].

Ayala, M. (2010). *Lugar incómodo.* Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Austin, R. (2003). *The State, Literacy and Popular Education in Chile, 1964-1990*. Nueva York: Lexington.

Bergot, S. (2004). Quimantú: editorial del Estado durante la Unidad Popular chilena (1970-1973). *Pensamiento crítico. Revista electrónica de Historia* 4 (offline).

Bowen, M. (2008). El proyecto sociocultural de la izquierda chilena durante la Unidad Popular. Crítica, verdad e inmunología política. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos.* https://doi.org/10.4000/nuevomundo.13732

Canto, N. (2012). El lugar de la cultura en la vía chilena al socialismo: notas sobre el proyecto estético de la Unidad Popular. *Revista Pléyade* 9, 153-78.

Del Valle Dávila, I. (2014). *Cámaras en trance. El nuevo cine latinoamericano, un proyecto cinematográfico continental*. Santiago: Cuarto Propio.

Dolar, M. (2007). *Una voz y nada más.* Buenos Aires: Manantial.

Dorfman, A. (2016). *Ensayos Quemados en Chile (Inocencia y neocolonialismo).* Buenos Aires: Godot (original publicado en 1974).

Gilman, C. (2003). *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Gutiérrez, J. (1972). Todos seremos lectores. Entrevista. *Chile Hoy* 10, 21.

Instituto Nacional de Estadísticas. (1970). *XIV Censo de población y III de vivienda*. https://web.archive.org/web/20120414164441/http://www.ine.cl/canales/usuarios/cedoc_online/censos/pdf/censo_1970.pdf

Marinello, J. C. (2007). Quién es Chile. La visión de lo nacional en la colección 'Nosotros los chilenos' de la Editora Nacional Quimantú, 1971-1973. *Seminario Simon Collier.* Santiago: Pontificia Universidad Católica y LOM Ediciones, pp. 9-39.

Molina, M. I. (2018). *Quimantú: prácticas, política y memoria*. Santiago: Grafito ediciones.

Mouesca, J. (1988). *Plano secuencia de la memoria de Chile: veinticinco años de cine chileno (1960-1985).* Madrid: Ediciones del Litoral.

Jofré, M. (1974). Las historietas y su cambio. En A. Dorfman y M. Jofré (eds.). *Superman y sus amigos del alma*. Buenos Aires: Editorial Galerna, pp. 93-201.

Ong, W. (1987). *Oralidad y escritura.* Buenos Aires: FCE.

Rivera Aravena, C. (2015). Diálogos y reflexiones sobre las comunicaciones en la Unidad Popular. Chile 1970-1973. *Historia y Comunicación Social,* 20(2), 345-367.

Subercaseaux, B. (1984). *La industria editorial y el libro en Chile (1930-1984).* Santiago: Ceneca.

Zarowsky, M. (2013). *Del laboratorio chileno a la comunicación-mundo: un itinerario intelectual de Armand Mattelart.* Buenos Aires: Editorial Biblos.

Tesis sobre educación y cultura del proceso popular chileno (1970-1973)

Taeli Gómez Francisco y Juan Rubio González

En este capítulo se pretende revisitar las enseñanzas sobre la relación dialéctica educación y cultura del trienio 1970-1973. Sin embargo, es importante advertir que esta contribución no se reduce a describir las acciones realizadas durante el gobierno de la Unidad Popular (UP), sino que intenta interpretar, en términos proyectivos, un proceso que rebasa los límites del gobierno de Salvador Allende, el cual representa una síntesis de los avances en conciencia de clase que gran parte del pueblo chileno venía desarrollando y profundizando desde hace décadas.

Las épocas se caracterizan por sus relaciones sociales; no solo por cómo producen y con ello satisfacen sus necesidades materiales, sino también cómo desarrollan un complejo espiritual de creación histórico-cultural, con sus narrativas, simbolismos, expresiones artísticas, científicas y manifestaciones jurídico-políticas. En definitiva, una superestructura y conciencia social que le son inherentes. Esto se va transformando en una subjetividad colectiva de memoria de los pueblos que deviene interpretaciones contextuadas de mirada

presente y fortalecidas en manos de un narrador que indaga para encontrar un tesoro de esperanza, con la pretensión de fortalecer los propios sueños en una historia popular continua. En esa lógica, este proceso popular representa un hito que invita volver a recordar y valorarlo, pues siempre será referente obligado desde donde seguir sembrando, para ver y construir la historia de Chile.

La década de 1960-1970 representó un encuentro popular; una relación entre el intelectual militante y los movimientos sociales, entre estudiantes obreros, campesinos y mujeres, entre lo público y privado. En este contexto, el movimiento popular chileno durante el período 1970-1973, registra un sello en la historia universal; su propia vía al socialismo, que la desarrolla utilizando el camino electoral, con reformas y transformaciones en coexistencia con el poder burgués. A pesar de las dificultades, el movimiento popular chileno concretizó un período de avance en la conciencia de clase, con convicción, moral interna y organización social; el que transmuta hasta convertirse en una vanguardia con ideas revolucionarias portadas por una buena parte de hombres y mujeres del pueblo organizado.

En esa línea, se puede comprender el valioso proyecto educativo de la UP, que tuvo expresión en la institucionalización de algunas acciones y programas, sumado a los esfuerzos por materializar otros. Así, por ejemplo, surge la idea de la Escuela Nacional Unificada (ENU), a lo que se suma la intención por consagrar en la propuesta de texto constitucional el derecho a la educación (Ríos, Labbé y Centeno, 2013); la preocupación por la educación reflejada en el gasto público (CENDA, 2002); y las múltiples medidas adoptadas por el gobierno de la UP que hicieran eco en los discursos del presidente Allende, quien constantemente hacía mención sobre conceptos como la universalización, la calidad de la educación y la preocupación por la alfabetización. En particular, Allende denomina al año 1971 como el de la democratización educacional, buscando alcanzar la plena autoridad administrativa y técnica de los consejos de profesores, convertidos en órganos de trabajadores de la educación. Además, se proponía formar en cada establecimiento educacional, los

consejos de comunidad escolar, con representantes de los trabajadores de la enseñanza, padres y apoderados, juntas de vecinos, sindicatos, organismos culturales y estudiantiles; para preocuparse de la marcha general de los establecimientos y de sus relaciones con la comunidad (Allende, 1971).

En consideración con esos objetivos, la transformación de la cultura y la educación se establecieron como los pilares fundamentales del nuevo desafío. Esto adquiere una connotación de herramientas esenciales del proceso revolucionario. De ahí que en este capítulo, se abordan algunas tesis que pretenden fundamentar una resignificación de la relación educación-cultura, desde una mirada *política-filosófica-pedagógica-histórica-cultural-militante*, que intenta evidenciar en una red de interpretaciones de hechos y discursos posibles de entramar para comprender, con la pausa de la historia, un período extraordinario.

Primera tesis: relación indisoluble *clase-educación-cultura*

La relación educación y cultura es una conexión que forma parte de una estrategia de clase, con miras, fundamentalmente, a convertir a los pobres del campo y la ciudad en sujetos revolucionarios; hombres y mujeres formados como combatientes para la libertad. En tal sentido, durante el trienio 1970-1973, gran parte del pueblo chileno se encontró frente a una posibilidad cierta de cumplir muchas de sus expectativas y aspiraciones, por las que venía luchando desde hace algunas décadas. De ahí, que el triunfo de Allende logró sintonizar con esos sueños de hombres y mujeres, pobres del campo y la ciudad.

La transformación cultural, como requisito fundamental para consolidar un proceso de ascenso popular, quedó registrado en uno de los postulados del *Programa de la Unidad Popular* que consistía en resignificar la cultura y educación en una cultura nueva para la sociedad (Altamirano, 1977). Pero estaba claro, que lo anterior no podía ser el resultado de un decreto, sino de un proceso social que

debía penetrar y hacerse desde las bases mismas de un pueblo. Por tal razón, esta nueva cultura, debía contener tres lineamientos estratégicos esenciales: la consideración del trabajo humano como el más alto valor, una cultura independiente antiimperialista *y* una visión creativa y crítica de la realidad (Unidad Popular, 1969).

En ese sentido, la relación dialéctica *clase-educación-cultura* representa un vínculo indisoluble y una fase fundamental para *transformar* a una clase trabajadora en vanguardia conductora de una revolución política y social. Para este propósito, se educa científica y tecnológicamente, con el objetivo de hacer progresar a una economía socialista para satisfacer las necesidades de todos, como también para disfrutar de la creatividad y el goce artístico. Siguiendo esa lógica, la sociedad toda debía transformar su práctica en una cultura que educa a los trabajadores del campo y la ciudad, para ser protagonista de su historia de clase "no solo en el aspecto de la enseñanza cultural, sino en la transformación interna que haga de ellos los hombres del siglo XXI, con una nueva mentalidad, un nuevo espíritu, una nueva conciencia social" y asimismo, "preparar con pasión patriótica a los niños" (Allende, 1971, p. 132), para dotarles de una dignidad propia de su etapa y convertirlos en una semilla de futuro.

Segunda tesis: el pueblo chileno, un *sujeto educativo dialéctico*

Para el proceso popular, el *sujeto educativo dialéctico* es el pueblo, en cuanto es educador y educando a la vez. La educación durante el trienio 1970-1973 no se simplifica a la binaria relación de un sujeto educador y un educando reducido al contexto de la escuela, sino que se concibe de manera integral y dialéctica; como un pueblo que aprende y que enseña. Esta perspectiva tuvo un sustrato político-epistemológico complejo, que define al sujeto educativo pueblo, como el portador de un conjunto de relaciones educativas, compuesto por una red de entretejidos no lineales. Lo anterior se tradujo en un entramado permanente de auto reproducir la dinámica de

quien sabe educa, con el propósito de formar a un pueblo consciente de su rol revolucionario.

Este movimiento de relaciones sociales al interior del pueblo se configura como un *sujeto educativo dialéctico*, pues conecta pobres del campo y la ciudad, niños, jóvenes, adultos y ancianos con conciencia de clase. Cabe señalar que esta integral composición también expresa la continuidad, lo que va en la línea de lo planteado por la UNESCO (1995) en esa época, al publicar el documento *21 puntos para una nueva estrategia de la educación*, donde plantea que esta debe prolongarse a lo largo de toda la vida y sin los muros de la escuela. En esa perspectiva, el *sujeto educativo dialéctico* configurado para encabezar el proceso popular no tiene edad, ni raza, ni distancia generacional o temporal, pues en su fase educativa dialéctica representa la recursividad del *educador-educando-educando-educador*, desarrollando la lógica que siempre hay algo que enseñar y aprender. Ello, en última instancia, representa una tarea colectiva de formación de un sujeto histórico revolucionario.

Tercera tesis: la dialéctica *poli-pedagógica* del sujeto educativo

Para su formación, este *sujeto educativo dialéctico pueblo,* requería de un conjunto de diálogos educativos que se entrelacen para formar una multidireccionalidad pedagógica; de distintos contenidos, valores, saberes y de tácticas y estrategias, lo que, en última instancia, se configura como un *sujeto poli-pedagógico*. Esto fue concebido en un sentido dialéctico, no limitado a ocupar lugares rígidos que establece de manera *a priori* quién educa, quién tiene el conocimiento o quién tiene el poder de enseñar. Por el contrario, se partió de la lógica de la existencia de una relación dialéctica, donde maestros, jóvenes, niños, ancianos, pobres del campo y la ciudad, se constituyen en sujetos activos: *educador-educando-educando-educador*. Así, lo establece el propio Allende (1971, p. 498) "el que no sabe aprende, el que sabe enseña", en

cuya lógica, en última instancia, es un sujeto-pueblo, en el devenir de su práctica, que aprende, en especial, su lugar en la lucha de clases.

El sentido poli-pedagógico del sujeto educativo representó una perspectiva dialéctica que da cuenta de cómo una persona se convierte, permanentemente, en educador y educando. En ese sentido, lo mismo realizan las orgánicas políticas y sociales, la clase y el movimiento social. Así, las direcciones *poli-pedagógicas* son internas –como autoformación– y de actividad –transformación–. Ante esto, el rol que ocupa la juventud en el período de la UP es un claro ejemplo. Esta deja de ser espectador pasivo, receptor *bancario* –parafraseando a Freire (1985)– de contenidos dogmáticos e invisibilizado sujeto social, pasando a transformarse en un sujeto teórico-práctico del proyecto educativo popular chileno. Al respecto, Allende reclama "una juventud vigilante sobre la base de estudiar, luchar, criticar y crear" (p. 219).

En ese sentido, la juventud encarna la síntesis ilustrativa de la noción dialéctica de lo *poli-pedagógico*, que deviene pilar social del proceso educativo popular, pues logra articular, dialécticamente, los criterios que le configura esta noción:

a) *sujeto educador de sí mismo*, pues, constantemente, se le exige e interpela a la autoformación como parte de la –auto– construcción del sujeto-educativo-pueblo. Otorgándole responsabilidad en su formación, convocada a tomar conciencia de un proceso que la requiere activa, en constante autocrítica, dialogante y promotora de la discusión ideológica;

b) *trabajador social como sujeto educador,* ya que los jóvenes en esta relación educación-cultura son convocados a transformarse en educadores populares, lo que implica el sentido profundo del proceso democratizador popular; contra el poder de las asimetrías adulto-centristas, donde no ocupa una posición rígida supeditada al pupitre indiferente, sino también, tienen la misión y relevante rol pedagógico en el *aula social*, a través de trabajos voluntarios (Rivera, 2012), además de la tarea alfabetizadora;

c) *sujeto educador trasformador,* pues los jóvenes son identificados con el ideal de un *hombre nuevo,* "los que tendrán en sus manos la construcción de la sociedad socialista (...) el gran factor dinámico de las transformaciones" (Allende, 1971, p. 323), de ahí que los cuadros juveniles deben convertirse en guías; llevar la voz, aliento y su crítica a los sectores populares;

d) *gestor educativo*, ya que, de igual modo, los jóvenes ocupan un espacio de participación político institucional, a través de la Secretaría General de la Juventud, por ejemplo, desarrollando tareas políticas y sociales, como proponer planes de alfabetización.

En suma, la juventud en la compleja red educativa representó un mínimo *poli-pedagógico,* vale decir, formó parte relevante de la red social educando-educador, construyendo desde y para distintos cometidos educativos de formación. Además, de otras redes de mínimos *poli-pedagógicos*, como lo fueron las distintas escuelas populares, el trabajo voluntario educativo y las escuelas de cuadros. En síntesis, todo este entrelazamiento dialéctico de enseñar-aprender, sin atención al lugar ni a la edad, debía sostener la ilusión socialista del proceso popular chileno.

Cuarta tesis: el desarrollo de un *aula social*

Aula es un constructo asociado a una sala de clases e identificado al espacio donde se educa. Sin embargo, al configurarse un *sujeto educativo dialéctico*-pueblo, en constante formación a través de una red *poli-pedagógica*, el aula se traslada y convierte en la sociedad toda. La concepción de que "toda sociedad debe ser una escuela, y la escuela debe ser parte integrante de esa gran escuela que debe ser la sociedad", hace ruptura con la conceptualización de aula, delimitada a espacios estancos y encerrados de la escuela tradicional, "introvertida, satisfecha de una enseñanza que puede ser bien impartida, pero que no traspasa más allá de sus muros". Por el contrario, durante el

trienio popular, las acciones y orientaciones estuvieron direccionadas a "la escuela abierta, plenamente integrada a los procesos que inquietan, preocupan e interesan de la comunidad". De ahí que, con la finalidad de formar cuadros, para tomar con sus manos un futuro justo, independiente y popular, el aula se extiende a toda la sociedad chilena, en sus distintas necesidades de desarrollo y atendiendo sus dialécticas relaciones (Allende, 1971, p. 130).

Así, esta *aula social*, a pesar de su carácter no uniforme, ni de unidad consensual, con sus discontinuidades y contraindicaciones agudizadas sobre consideraciones estratégicas y tácticas, logra conquistar el espacio público popular, en su máxima intensidad y que hoy forma parte del patrimonio inmaterial de un pueblo latinoamericano llamado Chile. En esta *aula social*, convergen todos los mínimos *poli-pedagógicos,* como la formación político-militante que requiere un proceso de inserción popular, los que se transforman en vanguardias educadoras. En este contexto, se ubican los partidos políticos integrantes de la UP, a los que se suman otras orgánicas como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), con sus organizaciones y participación en los frentes de masas (Leiva, 2003); también las estructuras del mundo obrero, incluidos los *Comandos Comunales* como germen de poder popular, los *Cordones Industriales*, la Central Única de Trabajadores (CUT), los sindicatos clasistas, las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP), Centros de Madres, Juntas de Vecinos, Campamentos de Pobladores, entre otras organizaciones.

En ese contexto, esta *aula social* representó un espacio público unificado, que promovió maneras de relacionarse, de valorar, de construir una moral solidaria, de narrativas compartidas, de una identidad común de una misma patria con sentido nacional, latinoamericano y antiimperialista, dirigida al servicio de la satisfacción de las necesidades de los pobres del campo y la ciudad, como del fortalecimiento del espíritu colectivo del sujeto social popular. En ese sentido, esta *aula social* es la propia cultura en dinámica educativa, pues en la medida que enseña al pueblo a transformarla, este se autoconstata como conciencia revolucionaria.

Quinta tesis: el educador como *trabajador social*

El *sujeto educativo pueblo* es un portador consustancialmente político. La perspectiva de la educación no tiene solo el propósito de formar a los niños para el futuro, sustraídos del espacio público, sino que la educación al ser vista de manera indivisible, ligada con la transformación cultural, representa un ideal para la defensa política del proyecto popular. Al mismo tiempo, debe sublimar para cosechar en un futuro al *nuevo hombre* desde las entrañas de una nueva sociedad. En consecuencia, educar es profundizar las bases para la indivisibilidad popular de conquista de un pueblo que hace una revolución, a la vez, que se va revolucionando.

En ese sentido, la concepción del educador, según Allende, como un "agente consciente y preparado de los grandes cambios" (1971, p. 136), es la de un *trabajador social*; este debe realizar un trabajo pedagógico capaz de vincular teoría y práctica, de convertir el trabajo intelectual, a uno militante. Es en esa perspectiva, que en este período se desarrolla de manera intensa el trabajo voluntario, los procesos de alfabetización, entre otras acciones políticas, que en síntesis, reflejaban la articulación de una red social y solidaria llamada pueblo, donde el lema no era educar para transformar, sino transformar educándose y más aún, siguiendo los postulados del marxismo "la modificación de las circunstancias y de la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como *práctica revolucionaria*" (Marx y Engels, 1955, p. 427).

Sexta tesis: el artista, un educador social

El arte para el pueblo postergado no era parte de una estrategia populista, como se podría pensar, ni menos un aspecto accesorio o marginal de un formato táctico electoralista. El arte, para el proceso popular, implicaba un sentido profundo; era parte de una estética militante, de una conciencia social, reflejo de una base material de

camino a recuperar los medios de producción, y en consecuencia, cuerpos, voces y armonías convertidas en un vehículo cultural educativo, con profundas pretensiones sociopolíticas. Desde esa perspectiva, el acercamiento del arte al pueblo obedecía a un imperativo de justicia social, que implicaba la recuperación de aquello que las burguesías les habían despojado; como la posibilidad de sentir en la piel las armonías de unas notas bien interpretadas, el disfrute de una danza desafiante de gravedad, la sonrisa infantil que recobra el teatro popular, la emoción de leer o escuchar poesía. Es decir, el sentirse vivo como humano, a través del disfrute de todo tipo de manifestaciones.

Esta aspiración, formó parte de las medidas del gobierno popular, que desde sus inicios dejó establecida su prioridad en las llamadas *cuarenta medidas* (Altamirano, 1977; Unidad Popular, 1969), donde se plantea la creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura que contó con el profundo compromiso de los artistas, quienes le dieron un alma colmado de colores y melodías al pueblo chileno, transformando el arte y la cultura en un vehículo para la transformación social.

En este escenario, el artista también era un educador que forma parte de la red *poli-pedagógica* que profundizó con sus instrumentos. Así, se desarrolla por ejemplo, el *teatro callejero* que llevó a las poblaciones *una película en vivo* como decían sus espectadores que nunca habían visto una obra (Espinoza, 2015). En esta lógica, especial relevancia adquieren el trabajo de las *brigadas muralistas*; como producción visual urbana, se organizaron, principalmente, a partir de las juventudes de las orgánicas políticas, trasladando a las calles el sentir popular, representado en puños y manos, en miradas de niños, en estrellas y flores, en trabajadores, familias, en palomas y esperanza. Así, estas organizaciones como la Brigada Ramona Parra (BRP), la Brigada Elmo Catalán (BEC), la Brigada Pedro Lobos (BPL), enfocaron su acción en colaborar con la difusión del ideario popular, y en los primeros años de la UP extendieron su labor a lo largo del país, convirtiéndose en una estrategia central de difusión y comunicación popular (Reyes, 2013). En esa lógica, el pintor Roberto Matta

por ejemplo, se sumó a este llamado –como tantos otros– y con la BRP plasmaron en muros de poblaciones, pasajes de la historia del movimiento obrero; lo mismo que desarrollaron destacados artistas plásticos nacionales de la altura de Gracia Barrios y José Balmes.

En este contexto, en 1970 se inauguró el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), que desarrolló una propuesta inédita que comprendió 80 exposiciones presentadas de manera simultánea a lo largo del territorio chileno (Reyes, 2013). Cabe señalar que el MAC fue inaugurado con la muestra *América no invoco tu nombre en vano*, que contaba con obras de artistas de vanguardia como Víctor Hugo Núñez, Carlos Peters y Francisco Brugnoli. En este contexto, el propio director del Museo, Guillermo Núñez, invitó a las brigadas a pintar los murales del recinto en el marco de una exposición titulada "El arte brigadista". Además, en 1971, se presentó la exposición "El homenaje al triunfo del pueblo" y se montó la muestra de obra gráfica "El pueblo tiene arte con Allende" (Reyes, 2013). A lo anterior, se debe sumar el Centro Cultural Gabriela Mistral, construido en 275 días, en ocasión de la Tercera Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD III), que albergó la realización de múltiples actividades culturales y se plasmó en la coordinación y asesoría artística de Eduardo Martínez Bonati, con artistas representantes de las principales tendencias del arte chileno (Reyes, 2013).

Una de las demostraciones del fortalecimiento de la relación artista-educador-pueblo se constata en la organización de la caravana de artistas conocida como "El tren popular de la cultura" (Espinoza, 2015). Con el apoyo de los trabajadores de ferrocarriles viajó por lugares donde, por motivos del incesante trabajo y la pobreza, una parte importante del pueblo nunca tuvo espacio a este regocijo del alma. Pocos son los registros que existen de esa misión, sin embargo, quedó en la memoria y en el recuerdo de los miles de obreros y campesinos, niños y mujeres que fueron espectadores de música, teatro, danza y pintura. Se contó con una exposición organizada para llevar en este tren, trabajos artísticos que fueron seleccionados a través de un concurso de artistas nacionales, antecedente que demuestra la

relevancia que se le otorga a este cometido, con un hondo respeto a un público popular.

El compromiso con el arte y de los artistas con el pueblo excluido, configura la invitación a conquistar el espacio público y transformar las relaciones sociales; el encuentro social con la intención de compartir, de enseñar-aprender juntos y de encontrarse, es parte de la revolución social que tiene sentido con el triunfo popular. En ese sentido, se vuelca un plan urbano, se abren balnearios populares, se habilitan y mejoran parques para el disfrute familiar, se crean centros de madres, talleres, entre otras iniciativas. En esta orientación se entienden las denominaciones dadas a los campamentos y poblaciones que se crearon para forjar una identidad popular y que, por tal razón, fueron eliminados por la dictadura militar. Un ejemplo es que a través del Bando 37 la II Zona Naval de Talcahuano, el 19 de septiembre de 1973, se obliga a cambiar los nombres del Campamento Lenin por Población Diego Portales; la Población Puerto Montt por Población Patricio Lynch; el Campamento Luciano Cruz por Población José Miguel Carrera; el Campamento Por la razón o la Fuerza por Población Javiera Carrera; el Campamento José Tohá por Población Jorge Montt; el Campamento Fidel Castro por Población General Baquedano, entre otros (Silva, 2014). En definitiva, se trataría de toda una propuesta para crear y fortalecer el tejido popular que sabría defender el proyecto del pueblo y los trabajadores, de ahí las acciones desarrolladas por la dictadura, al contrarrestar por decreto, esas identidades forjadas en el proceso popular.

Por otra parte, también se fomenta la lectura, con la idea de que "ser culto es el único modo de ser libre", como dijera José Martí (2003, p. 3). En ese sentido, en 1971 el gobierno de la UP recupera la editorial Zig-Zag, destinando la infraestructura a la Editorial Estatal Quimantú (sol de sabiduría en mapudungún), la cual sería administrada por los trabajadores, con la intención de generar un aprendizaje sobre el valor y relevancia de convertir el conocimiento en una posibilidad de acceso masivo. Se desarrolla la masificación de libros clásicos de

la literatura universal, la colección de minilibros y se publicaron las revistas para niños *Cabrochico*; *Paloma*, dirigida a las mujeres; *Revista juvenil onda*; *La Quinta Rueda*, *La Mayoría* y *La Firme* (Vidal, 2014).

La música, en tanto, tuvo en su canto popular, grupos musicales y folclore, un apogeo sincrónico. No solo de grandes compositores e intérpretes, sino además, de hijos del mismo sueño. Canciones que se convierten en emblemas del período popular y que aún siguen presentes, removiendo la memoria emotiva de quienes vivieron aquella época y generando un vínculo histórico para las generaciones actuales. Los himnos del proceso popular *El pueblo unido jamás será vencido*, de Quilapayún y Ortega (1975), o el *Venceremos*, de Inti Illimani y Ortega (1970), entre muchos otros legados, como los cantautores inolvidables, por su arte y consecuencia, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Patricio Manns, los Parra, Héctor Pávez y tantos otros. En suma, el compromiso de los músicos al proyecto socialista los convertía en creadores de melodías militantes y en educadores populares. De ahí, que los artistas acompañaban a los jóvenes en los trabajos voluntarios por valles, montañas, ciudades y campos de Chile. Junto a ellos, se trasladaban otros grupos de estudiantes y profesionales que mostraban sus expresiones artísticas (Rivera, 2012).

Séptima tesis: la formación del *hombre nuevo*

En los últimos tiempos, la educación como proceso social y cultural se ha reducido a la enseñanza-aprendizaje en el contexto de la escuela. Desde ahí, principalmente, se busca potenciar al individuo, consolidando las nociones de competencias, liderazgos y empoderamiento, para alcanzar fines como el éxito, movilidad social y otros similares. Esta perspectiva, no resulta extrapolable al período de la UP, pues el enfoque parte de premisas distintas. En primer lugar, se contrapone el sentido de individuo con el de *hombre nuevo*, en los términos que el primero pretende logros personales y no existen aspiraciones comunes o propósitos trascendentales. En cambio, la noción

de *hombre nuevo*, como la comprende el Che Guevara (2011), parte de la premisa que hombres y mujeres adquieren, día a día, más conciencia de la necesidad de su incorporación a la sociedad y de la importancia como motores de la misma.

Allende lo comprende como el sujeto "que podremos construir cuando seamos capaces de construir la nueva sociedad, lo que implica una nueva moral y una nueva concepción de las relaciones humanas" (1971, p. 45). En tal sentido, el *hombre nuevo* es entendido como la sociedad que emerge de una práctica revolucionaria, portada por los sujetos que la viven. Es decir, corresponde a una aspiración que debía tener sincronía desde el pupitre de la escuela, hasta las relaciones campo y ciudad; entre el currículo formal, pero también el oculto.

Octava tesis: vigencia del proyecto político-social de la Escuela Nacional Unificada

La ENU se inserta en un plan estratégico denominado Educación Permanente, que implicaba la organización de los sectores más postergados de la población, con el objetivo de transformarse en educadores de su propio destino. En efecto, bajo el ideario de una "educación de masas, por las masas y para las masas" (Ministerio de Educación Pública, 1973, p. 1), este proyecto político-social se proponía superar la crisis estructural del sistema educativo chileno, pero a la vez, transformarse en un motor de cambio, organización y participación de las mayorías, para que estas puedan alcanzar justicia social y acceder al conocimiento, y desde ahí, generar los cambios revolucionarios que Chile requería.

Así, el proyecto de la ENU se forja como un proceso dialógico que contó con la mediación del Gobierno Popular, pero con la participación de los principales protagonistas del contexto educativo chileno que se agrupaban en el reciente creado Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), quienes convocaron y organizaron diversas instancias de discusión y participación y que tuvo su síntesis en el Congreso

Nacional de Educación, celebrado en diciembre de 1971, donde se reunió a cerca de un millar de participantes, entre los que destacaban docentes, estudiantes, padres de familia, trabajadores y vecinos (Núñez, 2003). Es desde esta instancia, amplia y participativa, que surge la propuesta de la ENU inspirada "en los principios de unidad, continuidad, correlación, diversificación y democratización del sistema educativo" (p. 50).

Por lo tanto, la ENU se comprende como una propuesta diseñada a través de un proceso participativo y caracterizada como sistema educativo nacional, unificado –teoría/práctica, educación/vida–, continuo, diversificado, democrático, pluralista, productivo, integrado a la comunidad, científico, tecnológico y planificado (Ministerio de Educación Pública, 1973). Cabe señalar que dado el profundo impacto que tendría este proyecto para la formación de los sectores más postergados del pueblo chileno, tuvo una gran resistencia por parte de la burguesía y la iglesia, y formalmente, no llegó a implementarse.

En ese contexto, la ENU sigue siendo un proyecto vigente. En efecto, la lógica de establecer un sistema integrado de educación, de todos los niveles, tendría la consecuencia de terminar con la competencia entre instituciones educativas, acabar con la segregación y los instrumentos punitivos de medición escolar, otorgaría un acceso democrático al conocimiento, se fortalecería la investigación y ubicaría a la educación como un servicio básico y no un bien de consumo. En lo estrictamente pedagógico, la ENU proponía una integración entre teoría y práctica, con lo cual la educación debía ser un proceso contextualizado a las necesidades de sujeto, y no a las arbitrariedades de currículos teóricos, atomizados y estancos, diseñados por seudo expertos encerrados en oficinas ministeriales, alejados de la realidad vivenciadas por las masas.

Novena tesis: los pueblos aprenden (1970-2020)

Como corolario, queda la convicción que una parte importante del pueblo chileno, como *sujeto educativo dialéctico*, enseñó a la historia

universal que el poder de las burguesías y de su estructura jurídico-política, no está al servicio de los más postergados. En ese sentido, se desprende:

- Que el capitalismo es antagónico a la participación popular y que la democracia no es lo mismo que poder popular.
- El aprendizaje del trienio no se reduce a lo conseguido o no logrado por el gobierno de la UP, sino a la lectura global de proceso popular chileno.
- La unidad es fuerza, pero hay que saber diferenciar tácticas y estrategias.
- El pueblo chileno no es una víctima de la masacre que terminó con la vía chilena al socialismo; es un combatiente vivo que resistió y que en octubre de 2019, siguiendo el lema, *Chile despertó*, vuelve a revivir las esperanzas de un futuro popular.

Referencias

Allende, S. (1971). Textos de Salvador Allende (1971). En Biblioteca Clodomiro Almeyda, Partido Socialista de Chile (eds.). https://www.socialismo-chileno.org/PS/APSA/Discursos%20de%20Salvador%20Allende%201971b%20.pdf

Altamirano, C. (1977). *Dialéctica de una derrota*. México: Siglo XXI Editores.

Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (2002). Financiamiento de la educación en Chile. http://www.opech.cl/bibliografico/

Doc_Financiamiento/Financiamientode%20la%20Educacion%20en%20Chile%20CENDA.pdf

Espinoza, C. (dir.). (2015). *El tren popular de la cultura* [documental]. DOCMA.

Freire, P. (1985). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI Editores.

Guevara, E. (2011). *El socialismo y el hombre en Cuba*. Bogotá: Ocean Sur.

Inti Illimani y Ortega, S. (1970). Venceremos [canción]. En *Canto al Programa*. DICAP.

Leiva, S. (2003). El MIR y su inserción en el mundo obrero: el frente de trabajadores revolucionarios (FTR) y su relación con los cordones industriales. *Cyber Humanitatis*, 28. https://cyberhumanitatis.uchile.cl/index.php/RCH/article/view/5712/5580

Martí, J. (2003). *Maestros ambulantes*. https://www.biblioteca.org.ar/libros/1139.pdf

Marx, K. y F. Engels. (1955). *Obras Escogidas en dos tomos*. Tomo II. Editora en lenguas extranjeras.

Ministerio de Educación Pública (1973). Informe sobre Escuela Nacional Unificada. https://bibliotecadigital.mineduc.cl/bitstream/handle/20.500.12365/79/33019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Núñez, I. (2003). *La ENU entre dos siglos. Ensayo histórico sobre la Escuela Nacional Unificada*. Santiago: Lom Ediciones.

Quilapayún y Ortega, S. (1975). El pueblo unido jamás será vencido [canción]. En *El pueblo unido jamás será vencido*. DICAP.

Reyes, R. (2013). Arte, política y sociedad en Chile desde 1970 hasta 1979: una constelación posible. *Pacarina del Sur [En línea]*, *5*(17). http://pacarinadelsur.com/dossier-9/813-arte-politica-y-sociedad-en-chile-desde-1970-hasta-1979-una-constelacion-posible

Ríos, M., C. Labbé y M. Centeno (eds.). (2013). *Constitución política chilena de 1973. Propuesta del gobierno de la Unidad Popular*. Santiago: Sangría Editora.

Rivera, F. (2012). Construir la patria nueva. Los trabajos voluntarios en la Universidad Técnica del Estado (Chile, 1964-1973). *Revista La Cañada*, (3) 201-225.

Silva, R. (2014). El espacio público dictatorial: edificios y lugares significados por el poder político. *Revista de Urbanismo*, (30) 15-29. DOI: 10.5354/0717-5051.2014.30876

UNESCO (1995). *21 puntos para una nueva estrategia de la educación*. Buenos Aires: Magisterio del Río del Plata.

Unidad Popular. (1969). *Programa básico de gobierno de la Unidad Popular. Candidatura presidencial de Salvador Allende*. [Editor no identificado].

Vidal, V. (2014, 4 de abril). *Allende y la cultura*. Punto Final. http://www.puntofinal.cl/801/allende801.php

Mujeres en la Unidad Popular: caminos de liberación

Sandra Palestro Contreras

En Chile, y en el mundo, poco a poco y muy lentamente, las mujeres fueron logrando su incorporación a espacios que les eran vedados, entre ellos la educación superior y el derecho al sufragio. Desde sus distintas posiciones contra la discriminación y por la emancipación, entre intensos quehaceres, las organizaciones de mujeres fueron confluyendo en el objetivo de obtener el derecho al voto. Tras casi treinta años de luchas y esfuerzos alcanzaron la unidad con este propósito en 1944 y en 1949 lograron los derechos políticos plenos.

En este lapso las mujeres crearon múltiples organizaciones autónomas, con diversas reivindicaciones específicas: un conjunto de ellas incluía demandas de emancipación que tendían a superar su condición subordinada en la sociedad, tales como igualdad entre hombres y mujeres, divorcio, aborto seguro, capacidad política y civil. Otro grupo de demandas se enfocaba en mejorar su situación de pobreza, condiciones laborales, elevar su nivel cultural, educación para niñas y niños, la carestía de la vida, entre otras. Además, en tiempos de convulsión nacional y mundial, la defensa del régimen democrático y la paz.

Historiadoras feministas coinciden en que una vez obtenido este objetivo:

> se produjo una decadencia del movimiento feminista que lo mantuvo inerte por varias décadas. Influyeron, en parte, el conformismo que siguió a la obtención del derecho a voto, por haber centrado el esfuerzo durante muchas décadas en ese solo objetivo, también pesaron los conflictos internos de las principales instituciones que dejaron sin conducción al movimiento, la migración femenina hacia los partidos políticos y, finalmente, la falta de una propuesta globalizadora de emancipación integral de la mujer que se proyectara en el tiempo (Gaviola, 1986, p. 86).

Julieta Kirkwood llamó a esta etapa "silencio feminista", refiriéndose al lapso en que las mujeres no asumieron un papel protagónico en su propia liberación: entre mediados de la década de 1950, 1960 y mitad de la de 1970.

> El feminismo, en adelante, será una multitud en retirada que cambiará su propia fuerza en confesión de inmadurez, porque no quiso –no pudo- tener el valor de mirarle la cara a su realidad humana, a su *ser* producto humano, no idealizable. Con ello tiró por el sumidero presente y utopía, y comenzó la larga tarea de expiar la insolencia de declararse sujeto político, sin que importara bajo qué bandera al fin lo hiciera (1986, p. 154).

También plantea algunas hipótesis para explicar tal situación, que recaen principalmente en las mujeres: la negación de su propia condición de subordinada, dependiente y pasiva (siempre detrás en los anfiteatros, apoyando al compañero); la creencia de ciertas facultades femeninas "propias y distintas", que no estarían desarrolladas aún; que están más expuestas al control hegemónico de la dominación, en fin, todo esto en virtud de la fuerte incidencia de su socialización tradicional.

Seguramente fue muy contradictorio que después de tantas décadas de luchas e importantes logros las mujeres dejaran sus propias demandas de emancipación. Más aún, en un contexto de auge del

movimiento popular, ampliación democrática e integración de sectores antes marginados, entre ellos pobladores, juventudes y campesinos. Pero si observamos el contexto, de posguerra y guerra fría entre los grandes bloques comunista y capitalista, el "silencio feminista" se produce cuando en esta confrontación los procesos revolucionarios celebraban triunfos y con creciente fuerza se expandía la teoría de la liberación global, a la que las mujeres debían sumarse en pos de la unidad del pueblo, pues sus reivindicaciones eran una contradicción secundaria respecto de la lucha de clases.

El triunfo de la Revolución Cubana y de allí toda la década de 1960 fue de procesos de cambio que impactaron en muchos sentidos y produjeron marcas ideológicas indelebles en la juventud, a la sazón, hijas e hijos de las flamantes ciudadanas que inauguraban su ingreso al Parlamento. En 1961, Fidel Castro proclamaba el carácter socialista de la Revolución Cubana, tras la derrota de la invasión en Playa Girón organizada por el Pentágono y la CIA.

La Guerra de Vietnam concitaba repudio en todas las latitudes y la solidaridad de una juventud henchida de idealismo; en 1964, Estados Unidos enviaba soldados y armamento de guerra, mientras el estudiantado universitario enviaba sangre y medicamentos para el Vietcong. El mayo del 68 en Francia inflamó a los estudiantes, la protesta iniciada en Nanterre por la segregación sexual en las residencias universitarias se expandió por todo el país, a la vez que sus consignas revolucionarias derivaban hacia el repudio a la Guerra de Vietnam y el imperialismo, contra el sistema capitalista y el orden del mundo. Más de nueve millones de trabajadores se unieron a los estudiantes, paralizaron Francia y al presidente De Gaulle no le quedó otro camino que convocar a elecciones anticipadas.

En Estados Unidos se producía la crisis de los misiles, los asesinatos de John Kennedy, Martin Luther King y Malcolm X. Surgía el movimiento hippie, con la propuesta de una vida en comunidades sin jerarquías, en armonía con la naturaleza, en paz y amor libre.

En América Latina, las guerrillas se desplegaban en gran parte del territorio, y la figura del Che alentaba la perspectiva del "hombre

nuevo", hasta que su asesinato en 1967 lo convirtió en leyenda. En México, sucesivas intervenciones militares en las universidades habían creado un *ambiente de descontento y malestar entre la juventud* hasta que, en octubre de 1968, una masiva manifestación estudiantil fue ametrallada por fuerzas militares causando una cantidad indeterminada de muertos; la masacre de Tlatelolco enlutó a México y enardeció a las juventudes latinoamericanas.

En Chile de 1968, el estudiantado levantaba las demandas de universidad para todos, vinculación de la universidad con una sociedad en cambio, contra las inequidades existentes y una transformación en las relaciones sociales jerárquicas y autoritarias en todos los ámbitos.

En esta etapa, también se venían experimentando cambios que impactaron específicamente en la vida de las mujeres. Entre ellos, la política de planificación familiar que implementó el gobierno de Eduardo Frei Montalva desde 1967, que se tradujo en repartir masiva y gratuitamente la píldora anticonceptiva en consultorios, sin ninguna restricción. Su objetivo fue "reducir los riesgos asociados a la práctica del aborto inducido en condiciones inseguras"... pero su impacto fue mayor, cambió la estructura familiar, se amplió la percepción sobre sexualidad, la relación sexual se separó de la reproducción e impulsó a las mujeres a buscar mayores espacios de autonomía. La tasa de natalidad disminuyó de 5,0 en 1960-1965, a 4,1 en 1965-1970, y a 3,3 en 1970-1975 (CEPAL, 1986). Asimismo, influyeron las ideas de feministas estadounidenses sobre liberación de la mujer, quienes intentaban conciliar teóricamente feminismo y socialismo y defendían la complementariedad entre ellos: uno contra el patriarcado, sistema de dominación sexual, y otro contra el sistema capitalista o de clases.

En suma, la década de 1960 es de intensa movilización social y ascenso de los sectores populares: se masifican las tomas de terrenos, los obreros realizan huelgas ilegales, las y los estudiantes y docentes toman liceos y universidades, y en todas ellas las mujeres estuvieron codo a codo con sus pares varones, en algunas incluso con mayor protagonismo. Sin embargo, su ausencia en el relato histórico responde,

además de su posición subordinada en la sociedad, a que se incorporan a organizaciones mixtas como partidos políticos y sindicatos en los que sus propias demandas se subsumen en las reivindicaciones globales. Además, el lenguaje castellano construido sobre la base del genérico masculino, en el que supuestamente están incluidas, lo que hace es que queden ausentes en el imaginario social.

La organización y combatividad de los sectores populares se intensificó con el triunfo de la Unidad Popular (UP) el 4 de septiembre, que inauguraba la década de 1970 en Chile con la elección de Salvador Allende a la presidencia de la República, y un Programa de Gobierno que tendrá para el país y específicamente para las mujeres variadas y complejas repercusiones.

El discurso de la UP puso el acento en que solo "la acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, podrá romper las actuales estructuras y avanzar en la tarea de su liberación"; la "conformación de una nueva cultura que considerara el trabajo humano como el más alto valor", y la participación en instancias de toma de decisiones como forma de ejercer poder.

La acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, a la que se le asignaba tan alta responsabilidad, fue el llamado a cerrar filas en torno a un proyecto global de emancipación del pueblo, proceso en curso al que las mujeres debían incorporarse postergando su propia liberación, ya que esta vendría de suyo con la liberación global.

El proceso revolucionario requería la unidad de todos los sectores, quienes debían participar desde sus propias instancias organizativas; sin embargo, el sentido común y las políticas estatales reproducían y fomentaban la posición de las mujeres en roles tradicionales de madre, esposa y dueña de casa, en un ámbito privado, doméstico, sin reconocimiento ni valor.

La institucionalidad estatal históricamente confirma la posición que se le asigna a las mujeres en la sociedad e incluso así la nombra. La Asociación de Dueñas de Casa, fue el organismo público creado a fines del gobierno de González Videla, y la Fundación Ropero del

Pueblo durante el gobierno de Ibáñez del Campo, para canalizar los Comités de Dueñas de Casa como organizaciones propias de las mujeres de sectores populares. Luego, durante el gobierno de Frei Montalva se crearon los Centros de Madres, que proliferaron en las poblaciones urbanas periféricas y en las zonas rurales durante los años siguientes.

El programa de la UP, por su parte, propuso la creación del Ministerio de la Familia y Desarrollo Social para abordar todos los aspectos relativos a las mujeres. Sus objetivos fueron:

> 1. Procurar la integración y desarrollo del grupo familiar.
>
> 2. Promover la incorporación de la familia a las organizaciones sociales.
>
> 3. Procurar el desarrollo cultural y la recreación del grupo familiar.
>
> 4. Establecer las condiciones materiales necesarias para facilitar y perfeccionar la convivencia familiar.
>
> 5. Procurar la solución de los problemas relativos a menores en situación irregular, delincuencia, prostitución, alcoholismo, uso de drogas y vagancia.
>
> 6. Atender a los grupos familiares y personas que se encuentren en estado de indigencia (Rojas, 1994, p. 72).

Es decir, estaba naturalizada en la cultura la ausencia de la mujer como sujeto en sí misma, su existencia estaba connotada por ser dueña de casa, madre y esposa, y ahora se definía por la familia. Más de un 70% de las mujeres en edad de trabajar a cambio de un salario, eran dueñas de casa, realizaban sin remuneración labores domésticas de manutención del hogar, de crianza y de cuidados, y sobre ellas recaería, además, enfrentar como familia los múltiples problemas derivados de la desigualdad social.

Ahora, el proyecto gubernamental buscaría una transformación de la familia, a fin de hacer de esta una protagonista consciente en la

consolidación de la nueva sociedad, explicaba Carmen Gloria Aguayo, la futura ministra:

> nuestra intención es la de cambiar el concepto tradicional de un núcleo cerrado en sí mismo, en el que cada uno lucha sólo por su gente, por su familia y nada más. Deseamos que ahora la familia esté abierta a la comunidad y que se incorpore de lleno, a las otras... romper el concepto machista...que la mujer llevaba y lleva aún, en muchos casos, todo el peso del hogar, un trabajo lógico de ella, pero sin ayuda alguna, tocándole, por ende, la parte más dura... (Rojas, 1994, p. 174).

La acción unitaria presentaba dificultades para las mujeres, puesto que hacía poco tiempo venían rompiendo el aislamiento en sus casas, a raíz de su participación en Centros de Madres, y mostraban poco interés por la política, aunque sí estaban inscriptas en los registros electorales y contaban a la fecha con nueve diputadas y una senadora. Un 60,4% de las mujeres había votado por Salvador Allende y Radomiro Tomic, es decir, se manifestaron a favor de los cambios que con mayor o menor profundidad proponían esos candidatos, y un 38,4% lo había hecho por el candidato conservador. Los Centros de Madres, que fueron concebidos para proporcionar a las mujeres capacitación e instrumentos para aportar a la economía familiar, ya las habían vinculado entre sí; sus organizaciones con el tiempo se comenzaron a articular en Coordinaciones Comunales y Federaciones Provinciales de Centros de Madres, y con ello a compartir sus problemas cotidianos, pero sostenían una escasa conexión con otras organizaciones.

El trabajo humano como el más alto valor, al que se refiere el Programa de la UP es el trabajo productivo, aquel remunerado, realizado fuera del hogar y, por tanto, puso énfasis en la mujer trabajadora y en crear condiciones para la incorporación de más mujeres al ámbito laboral. En 1970, la participación femenina en la fuerza productiva era de 14,3% de las mujeres en edad de trabajar.

> Con el fin de atender las necesidades de desarrollo propias de la edad preescolar y *para posibilitar la incorporación de la mujer al trabajo productivo*, se extenderá rápidamente el sistema de salas-cuna y jardines infantiles, otorgando prioridad a los sectores más necesitados de nuestra sociedad (Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, 1969).

Consecuentemente, el equipo de mujeres de la UP que programaba la acción del futuro Ministerio de la Familia, definió que la función de este organismo sería dar a la mujer la posibilidad de integrarse al proceso productivo, al tiempo que desarrolle todas sus capacidades. Y ese fue el sello de la acción gubernamental para las mujeres:

> Para emancipar verdaderamente a la mujer, deberá liberarla de los quehaceres domésticos, para lo que se crearán guarderías infantiles y lavanderías populares, se entregará capacitación profesional en cada Centro de Madres; se le dará un sistema previsional y el derecho de jubilar y al mismo tiempo, se impulsarán centros infantiles y juveniles en cada comuna (Rojas, 1994, p. 73).

Aunque el Ministerio de la Familia no llegó a concretarse, se creó la Secretaría Nacional de la Mujer en 1971, dirigida por la militante socialista Marta Melo, como organismo asesor del gobierno, que alcanzó a implementar algunas de estas medidas.

Además, entre los puntos básicos de la agenda social del gobierno se incluía la definición de una política de remuneraciones, que entre otras medidas consigna: "se eliminará toda discriminación entre el hombre y la mujer o por edad en materia de sueldos y salarios" (Programa de la Unidad Popular, 1969). Así también, se estimuló la sindicalización de las empleadas domésticas, que pasaron a llamarse Empleadas de Casa Particular, mediante un proyecto de ley presentado por la diputada socialista Carmen Lazo en 1970 que incluía: limitar el horario de trabajo a 8 horas, derecho al salario de un mes por año de servicio en caso de despido, y que los patrones deberán imponer al Servicio de Seguro Social un 2% de los salarios de las empleadas de casa particular, con el fin de construir escuelas hogares

de perfeccionamiento de profesiones propias del gremio, entre otras medidas.

En los sectores rurales se crearon asambleas de mujeres para impulsar los Centros de Reforma Agraria. Esta les ofrecía un atractivo modelo de familia moderna, sin embargo, su desarrollo reforzó un modelo de familia en el cual, para tener acceso a los beneficios de tierra y trabajo estable, una mujer debía tener una relación permanente con un hombre beneficiario, lo cual aumentó su dependencia. Las mujeres jóvenes y solteras tenían acceso a trabajo, pero temporal e insuficiente como para sostener a una familia. Sin embargo, las campesinas se beneficiaron del mejoramiento de salarios, salud, educación y vivienda que trajo la reforma.

> la participación de los hombres en sindicatos y asentamientos los capacitó para responder al conflicto social a través de canales institucionales y políticos. Pero por el contrario, las mujeres estaban organizadas alrededor de identidades de "dueñas de casa" que las hacían más dispuestas a responder al conflicto social en términos de roles dentro de la familia: roles en que las obligaciones de los hombres hacia ellas, eran más decisivas que nunca (Tinsman, 2008, p. 65).

Así también, el programa de gobierno de la UP había contemplado mejorar la condición de las mujeres otorgándoles plena capacidad civil a las casadas; divorcio con disolución de vínculo que les diera garantías a ellas y a sus hijos, e igualdad jurídica para todos los hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio. Además, el gobierno consideró dentro de sus primeras cuarenta medidas otorgar previsión para las dueñas de casa, desayuno a los alumnos de educación básica y almuerzo para aquellos niños cuyos padres no eran capaces de otorgárselo, medio litro de leche diario para todos los niños hasta los 15 años de edad y mujeres embarazadas y la implementación de consultorios materno-infantiles en cada población. Muchas de estas medidas no se alcanzaron a concretar.

La participación en instancias de toma de decisiones será efectiva por cuanto, "las organizaciones sindicales y sociales de los obreros,

empleados, campesinos, pobladores, *dueñas de casa*, estudiantes, profesionales, intelectuales, artesanos, pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores serán llamadas a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder" (Programa de la Unidad Popular, 1969).

Aunque en el Programa se señala una especificidad de las mujeres en cuanto "dueñas de casa", en realidad su participación en el proceso que se vivía fue en todos los ámbitos: políticos, sociales, económicos y culturales. Las mujeres llevaban dos décadas como ciudadanas con derechos políticos plenos y habían cobrado importancia en tanto potencial 50% del electorado. Se habían incorporado a los partidos políticos y al Congreso Nacional. En los períodos parlamentarios 1969-1973 resultaron electas 9 diputadas (6,0%) y una senadora (2,0%); en 1971, Mireya Baltra, militante comunista, fue nombrada ministra del Trabajo. En el período 1973-1977 fueron elegidas 14 diputadas (9,3%) y una senadora (2,0%), quienes no pudieron cumplir su período a raíz del golpe cívico-militar.

Así también, se incorporaron a los sindicatos y se legisló para mejorar su situación laboral: ampliación del fuero maternal, extensión del permiso pre y posnatal de 45 a 90 días y la implementación de jardines infantiles.

En educación participaron como maestras, debido a la ampliación de la cobertura para educación básica y media. En 1960, la tasa de analfabetismo de mujeres era de 17,6%, en tanto en 1970 bajó a 11,8%. La matrícula en Educación básica en esta década es prácticamente igual en mujeres y hombres, en tanto en Educación media, la matrícula de mujeres supera en casi un punto porcentual a la de hombres. En cuanto a la educación universitaria, siendo un privilegio de la reducida élite socioeconómica, en 1960, la cobertura masculina era de 5,1% y la femenina de 2,9%, mientras en 1970 esta se amplió a 11,4% y 7,1% respectivamente, lo cual refleja la doble discriminación por género y clase. Las mujeres, eligieron las carreras de maestra, enfermera o asistente social y en el nivel de carreras técnicas optaron por costura, tejido, peluquería, secretariado; es decir,

aquellas vinculadas con el servicio a otros y otras, internalizado desde muy temprana edad.

En salud participaron en brigadas y comités paritarios, desplegando una activa participación en campañas sanitarias, de vacunación y del medio litro de leche para todas las niñas, niños y mujeres embarazadas. También, como usuarias de los programas de salud materno infantil, educación en puericultura y las campañas preventivas de cáncer cérvico uterino.

Las y los jóvenes, además de su militancia en partidos políticos, se integraban a clubes juveniles, culturales y deportivos que habían proliferado en los sectores populares. Las mujeres pobladoras se encontraban mayoritariamente en Comités de Vivienda, "tomas de terrenos", Juntas de Vecinos, Centros de Padres y Apoderados, y masivamente en Centros de Madres. Estos llegaron a ser 20 mil durante el gobierno de la UP con cerca de un millón de afiliadas y pasaron a ser importante apoyo de políticas públicas. Así también recibieron capacitación por parte del Ministerio de Educación a través de escuelas impartidas por la Universidad Técnica del Estado (UTE) y cursos de verano, entre otros.

En momentos de desestabilización del gobierno por parte de la derecha golpista, que se concretaba con el desabastecimiento, acaparamiento y mercado ilegal, agudizada por el paro de los camioneros, las mujeres de la UP participaron activamente de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP), organizaciones de nivel vecinal encargadas de asegurar la distribución de artículos de consumo básicos y controlar a los comerciantes que lucraban con el desabastecimiento.

Para las mujeres en Chile, las dos décadas posteriores a la conquista de sus derechos políticos, y especialmente en los tres años de gobierno de la UP, fueron de masiva participación y grandes aprendizajes en el camino de su incorporación al mundo público, inmersas en un contexto nacional, continental y mundial que remecía los cimientos del orden establecido.

La emancipación de las mujeres implicaba un lento y sostenido proceso de ruptura de su dependencia y subordinación, de su confinamiento en un mundo privado, doméstico, al que no se le asignaba reconocimiento ni valor, aunque allí se realizara la función más importante de todo conglomerado humano: reproducir la vida.

La irrupción de las mujeres en el ámbito público, masculino, fue producto de su propio esfuerzo y voluntad, de la creación de organizaciones, difusión de sus ideas, de acciones persistentes y búsqueda de alianzas. El acceso a trabajos remunerados, a la educación superior, a salud con la especificidad que requiere, fueron logros de un movimiento en alza que culminaría con la obtención de los derechos políticos plenos. Es necesario relevar que en todas estas áreas mayoritariamente su inserción fue conservando los sellos de su socialización como madres y dueñas de casa: en el ámbito laboral se desempeñaron en servicios y cuidados de otras y otros; su acceso a la educación superior fue en carreras feminizadas y también se mantuvieron como profesionales en servicios secundarizados en el área de la salud. En todos ellos se enfrentaban a las dificultades producto de sus labores domésticas y a las promesas incumplidas en campañas políticas, "que mostraban que la tan mentada integración de las mujeres, no pasaba de ser un espejismo" (Gaviola, 1994, p. 27).

Las mujeres, aunque traspasaron la barrera entre los mundos público y privado, y asumieron el desafío de situarse en una nueva posición en la sociedad, como personas con identidad propia, no lograron cambios culturales en cuanto a la distribución de roles en el ámbito privado ni en el público, lo cual les significó una doble jornada de trabajo. El proceso desarrollado por las mujeres hacia la consecución de mejores condiciones de vida tuvo logros y aprendizajes para ellas, pero no fue recíproco por parte de los hombres para asumir roles en el ámbito doméstico.

En acuerdo con las historiadoras feministas, que señalan el período posterior a la consecución del derecho a voto como de decadencia de las organizaciones y reivindicaciones propias de mujeres, cabe hacerse la pregunta de si pudo haber sido de otra manera en el

contexto que se vivía o si la experiencia vivida en este nuevo contexto acaso no les reportó mayor conciencia.

Salvador Allende llamaba a las mujeres a integrarse al proceso revolucionario afirmando la importancia crucial de su participación:

> Creo que la revolución sin la presencia de la mujer no puede ni afianzarse ni desarrollarse; por lo tanto, para nosotros, la presencia de la mujer es fundamental en el proceso que vive nuestro país. Además, en el régimen capitalista, sin discusión, la mujer está en condiciones de inferioridad frente al hombre, y se hace más evidente en los países como el nuestro (Modak, 2008, p. 250).

Durante el gobierno de la UP hubo muchas políticas destinadas a las mujeres que significaron mejorar su situación, pero los cambios sociales no van necesariamente acompañados de cambios culturales, más aún cuando están arraigados en el sentido común no solo de una sociedad particular sino en las estructuras de un sistema patriarcal, androcéntrico, que se basa en la subordinación de las mujeres y de un sistema capitalista que requiere la explotación de su trabajo no remunerado.

Sin duda las transformaciones sociales que traería la revolución requerían de la participación de las mujeres, y a ella se entregaron con pasión, pero también requería de una nueva mentalidad en los hombres y en toda la sociedad, de manera que se internalizaran en la práctica cultural otros relacionamientos humanos, no opresivos ni de dominación, que supuestamente constituían la base de la liberación global. En palabras del presidente Allende:

> La irresponsabilidad del hombre que engendra un hijo en nuestros países marca también lo que es una moral injusta. Por ello, para nosotros, preocuparnos de la mujer es preocuparnos de un factor esencial, y la mujer en un proceso revolucionario es la que más tiene que ganar. Si hay alguna cosa que nos interesa, es precisamente enseñarles a los hombres de nuestra patria el respeto que le deben a su mujer, a las mujeres; y bastaría que pensaran en sus madres para que lo tuvieran (Modak, 2008, p. 250).

En tanto, Carmen Gloria Aguayo, quien se encargaría de dirigir el Ministerio de la Familia, se refería a que el carácter "machista" de esta era un factor de retraso en su interior:

> El hombre tendrá que entender que cooperar en el hogar no significa simplemente dar la plata para la comida. ...aunque no soy feminista lucharé por este cambio de mentalidad machista al interior del Ministerio de la Familia... Me niego a aceptar que el hombre es así como una cosa natural y fatal. No existen roles fijos sino que han sido impuestos por la sociedad (Rojas, 1994, p. 74).

Por primera vez durante el gobierno se escuchaba un planteamiento en el sentido de transformar la familia patriarcal en una más democrática y la necesidad de desnaturalizar los roles culturalmente asignados a hombres y mujeres.

Por tanto, el silencio feminista, que efectivamente fue respecto de sus propias reivindicaciones, no significó pasividad en las mujeres, sino su incursión en todos los frentes del cambio social que se venía como aluvión. Tampoco significó que en esos años no hubiera desarrollo personal e importantes logros y aprendizajes colectivos. Los Centros de Madres fueron el movimiento social más masivo que ha habido en Chile, mayoritariamente integrados por mujeres de sectores populares, que encontraron en ellos un lugar de expresión, contención y esparcimiento. Estos Centros tuvieron la virtud de sacar a las mujeres del aislamiento en sus hogares y desarrollar su espíritu asociativo, contribuyeron a colectivizar los problemas más apremiantes de las mujeres y a tomar conciencia sobre sus propios intereses y anhelos. Así también, la participación en diversas organizaciones sociales territoriales mixtas les proporcionó una vasta experiencia organizativa y la retroalimentación de problemas comunes, que se desplegó tempranamente en las primeras organizaciones contra la dictadura, entre ellas las prácticas de sobrevivencia económica y el surgimiento de grupos de defensa de los derechos humanos, en las que participaron mayoritariamente.

Finalmente, es necesario profundizar la reflexión sobre "la integración de las mujeres a la sociedad" que se repite constantemente y se internaliza con total naturalidad.

El relato histórico oficial ha consignado que, en el siglo XX, *la incorporación de la mujer a la sociedad* se vio favorecida por una serie de procesos sociales (cambios demográficos y disminución de tasas de natalidad, incorporación al mercado laboral, avance en niveles educacionales, participación política).

Esta afirmación contiene una negación de las mujeres en la sociedad, como si no fueran parte consustancial de ella siempre; si se integraron a la sociedad en el siglo XX, ¿dónde estaban antes? También, se está homologando sociedad con mundo público, dominado por hombres, lo que significa que la incorporación de las mujeres a ese ámbito decreta su existencia como tales, antes eran madres, esposas, dueñas de casa. Por otra parte, las razones de dicha "incorporación", que les niega historicidad, como si todo les sucediera pasivamente, omitiendo su tenaz agencia y los obstáculos que tuvieron que enfrentar para derribar las barreras impuestas (Palestro, 2016, p. 21).

La osadía de las mujeres de traspasar la frontera de lo privado a lo público fue el acontecimiento de mayor impacto en las sociedades modernas; baste mencionar la democratización de sus estructuras sociales y políticas y la ampliación del conocimiento hacia un ámbito cotidiano que permanecía invisible, entre otras. Requirió de ellas mucho coraje para ocupar lugares que les eran ajenos, vedados, y lo siguen haciendo, en continuidad de su historia de liberación en un mundo compartido, atesorando la experiencia vivida en aquellos luminosos tres años de gobierno del presidente Salvador Allende.

Referencias

Gaviola, E., X. Jiles, L. Lopresti y C. Rojas. (1986). Queremos votar en las próximas elecciones. Historia del Movimiento Femenino Chileno 1913-1952. Coedición del Centro de análisis y difusión de la condición de la mujer, "La Morada", Fempress, Ilet, Isis, Librería Lila, Pemci, Centro de Estudios de la Mujer. Santiago, Chile.

Gaviola, E., E. Largo y S. Palestro. (1994). *Una historia necesaria. Mujeres en Chile: 1973-1990*. Santiago, Chile: edición propia.

Kirkwood, J. (1986). *Ser política en Chile. Las feministas y los partidos*. Santiago: FLACSO.

Modak, F. (coord.). (2008). La revolución necesita la presencia de la mujer. Conferencia de prensa en la sede de la ONU, 4 de diciembre de 1972, fragmentos. En S. Allende. *Pensamiento y acción*.

Palestro, S. (2016). Androcentrismo en los textos escolares, en *Educación No Sexista. Hacia una Real Transformación. Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres*.

Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular. Candidatura Presidencial de Salvador Allende. (1969). Disponible en Internet.

Rojas Mira, C. (1994). "Poder, mujeres y cambio en Chile (1964-1973): un capítulo de nuestra historia". Tesis para optar al grado de Maestría en Historia, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapalapa), División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Historia, México D.F.

Tinsman, H. (2008). La tierra para el que la trabaja: política y género en la reforma agraria chilena. *Revista Perspectivas*, 19.

Lucha popular y derechos

Los trabajadores y el sentido del socialismo en democracia

Márcia Cury

A cincuenta años de distancia, la experiencia de la Unidad Popular (UP) todavía puede traernos ecos de su grandeza. Para aquellos que conocen la historia chilena y las fuertes marcas de esa sociedad, fue inevitable vislumbrar las características rebeldes de otros tiempos en las manifestaciones masivas de octubre de 2019. Por supuesto, los tiempos son diferentes, como la situación política, su configuración económica o el contexto internacional. Pero entiendo que los tiempos en política son diferentes si se piensan en términos institucionales o si se reflejan en términos de identidad. Y es precisamente allí donde es posible escuchar los vientos que resuenan desde 1970.

Cincuenta años después de vivir un proyecto para la construcción del socialismo en democracia, Chile vive una crisis en su sistema político actual, en el cual busca compatibilizar la democracia con un modelo de libre mercado diseñado por el régimen militar y sostenido por las nuevas fuerzas políticas que se han sucedido en el poder desde la transición. Esta crisis refleja los impactos que viene provocando el modelo neoliberal a través de la privatización de servicios que

afectan la vida de los trabajadores y por la extrema reducción del rol del Estado.

Cuando se implementaron, dichas transformaciones tuvieron como objetivo, entre otras cosas, despolitizar las relaciones sociales del país y orientarlas con principios de mercado. Así, el desequilibrio de poder entre capital y trabajo es una de las principales bases de este modelo, como afirma Barret (2001, p. 562). Los negocios son más fuertes que en cualquier otro momento, el trabajo está políticamente debilitado, es precario y el poder político sirve principalmente a quienes tienen mayor riqueza y privilegios. Así, sostengo que el trabajo perdió la centralidad política que adquirió y que sostuvo parte de los proyectos políticos partidistas en gran parte del siglo XX. Lo que se tiene ahora es el cuestionamiento desde abajo del modelo de democracia concebido por proyectos partidistas, que desde la transición se ha vaciado de la noción de derechos y participación.

Entonces, allí algunos rasgos que nos remiten a la UP son más evidentes, porque son explícitos, como la recurrencia de símbolos de celebración y orgullo de otras generaciones, que revelan un punto fundamental de la cultura de la movilización colectiva chilena. Cuando se está presente entre los chilenos en sus manifestaciones, se nota la permanencia de símbolos de la izquierda y las luchas populares, como imágenes de Salvador Allende e himnos de Víctor Jara que entonaban en las marchas de la Unidad Popular.

Sin embargo, los ecos de la UP van mucho más allá de estos símbolos estéticos más explícitos, y es posible identificarlos en los sentidos que guían las movilizaciones sociales a lo largo de la historia y que son una parte tan característica de los trabajadores de esa sociedad. Y en ese actual escenario de disputas en torno de la memoria histórica, especialmente, respecto a las experiencias revolucionarias y a las subsecuentes dictaduras contrarrevolucionarias, y de fuerte crisis de una democracia presionada por políticas neoliberales, es urgente darle voz a la temática y reconocer la importancia de la acción popular para la transformación de la sociedad chilena y especialmente de los sentidos que esta acción tuvo en la historia.

La formación de una identidad

A lo largo de la historia chilena, los trabajadores han actuado como sujetos colectivos que han contribuido significativamente para la democratización de aquella sociedad, en la medida en que se articularon en sus agrupaciones de clases, en el trabajo o fuera de él, en sus barrios y en la lucha por la vivienda. Siempre movilizados contra el alza de precios, por derechos laborales, seguridad social, vivienda, en acciones que se corresponden invariablemente con la truculencia del Estado y que dieron lugar a innumerables muertes, como en sus históricos motines (1909 y 1957), o en el apogeo de sus movilizaciones durante el gobierno de la UP (1970-1973), que fue duramente reprimido con un golpe militar, o las jornadas de protesta contra la dictadura, en la década de 1980, con fuerte protagonismo juvenil. Así, siempre imbuidos en una fuerte cultura política de izquierda, actuaron y actúan por la conquista y ampliación de derechos a partir del cuestionamiento a un orden social excluyente y autoritario. El gobierno de la UP fue sin dudas el punto culminante de ese historial de movilización.

En ese historial, la construcción del régimen democrático chileno, al menos desde principios del siglo XX, está marcada por la relación de conflicto, tensión, influencia mutua y un compartir de proyectos políticos entre los sectores populares y las instituciones del país. La reacción de los trabajadores a la explotación impuso presiones sobre los capitalistas y sobre el Estado, lo que dio como resultado el logro de los derechos, mejoras en las condiciones laborales, políticas de bienestar, en la reducción del desequilibrio en la relación capital-trabajo. Las formas de organización obrera y las influencias políticas sobre ella han ido cambiando, dando lugar a nuevos mecanismos de lucha y movilización, basados en sus relaciones con la política partidaria. En esta relación de complementariedad entre diferentes formas de lucha, y de mutua influencia entre movimientos de base y

partidos, la izquierda ganó su espacio para colocar las demandas de los trabajadores en la agenda política institucional.

Los diferentes grupos políticos y sociales del país pasaron a tener la lucha institucional por el poder estatal como denominador común de sus ideologías. Este denominador también estuvo presente en la cultura política de izquierda e influyó directamente en los movimientos sociales. Ese proceso demostró también el funcionamiento de aquel sistema excluyente establecido bajo la hegemonía económica burguesa, que, al construir un Estado primero como opresor y mantenedor del orden, y después como espacio de institucionalización de los conflictos, buscaba neutralizar la tendencia a la actuación colectiva de los trabajadores que eclosionaba y cuya acción pretendía ocupar aquel mismo espacio (Cury, 2018, p. 70).

Por lo tanto, en este contexto, se consolidaría la legitimación del Estado como "creador de la cohesión social". Al mismo tiempo, disputas sobre los proyectos concebidos en torno a este espacio y el papel que debe desempeñar. La propuesta de democratización adoptada por el Estado chileno pasó a expresar la crisis de hegemonía de la clase dominante, que veía a este Estado como un elemento garantizador del orden, y mostraría los límites del consentimiento de los sectores populares, que pasaban a considerarlo una vía de lucha contra el poder del capital y la construcción de un nuevo orden.

Desde la década de 1930 se vivió esa combinación de procesos sociales e institucionales. Por un lado, se produjo un importante y masivo proceso de industrialización y migración desde las regiones mineras y el campo hacia los centros urbanos, especialmente hacia Santiago. Proceso que permitió el fortalecimiento del movimiento obrero y su articulación con los partidos de izquierda y centro político; la articulación de los movimientos sociales, especialmente el movimiento de pobladores, que se convertiría en el movimiento social más fuerte del país junto al sindicalismo. Sus luchas por la vivienda, las vivencias cotidianas de solidaridad y lucha, su articulación con los partidos están también en la base de la transformación política que vivía el país en ese contexto. Al mismo tiempo, la izquierda

garantizó su espacio como representante de los sectores populares en el Estado, teniendo como hito para su inserción institucional la experiencia del Frente Popular, en 1938, y garantizando su fuerza representativa en el escenario político nacional.

En la década de 1960, el país atravesaba un período de creciente radicalización social provocado por varios factores, como la creciente organización de las bases en sus luchas por los derechos, la influencia de la Revolución Cubana bajo el discurso revolucionario de la izquierda chilena y el auge de la Democracia Cristiana (DC), que logró movilizar una parte significativa de los sectores populares en torno de su proyecto de Revolución en Libertad. Con la expectativa de cambio que generaba el contexto, el centro de la disputa política se daría entre dos proyectos que apostaban por la aglutinación del apoyo popular, con la DC en defensa de la integración social, y por el otro, la izquierda, vocalizando un discurso de transformaciones estructurales.

La intensificación de las presiones sociales dejó en evidencia el cuestionamiento a aquel modelo de desarrollo durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), llevó a la izquierda a reorganizarse para una nueva etapa política que se consolidaría en 1970 con el triunfo de la UP. El proyecto de la Unidad Popular reunió toda esta historia política y social aquí destacada, de apostar por las instituciones chilenas y la democracia, en alianzas con otros actores del escenario político, como se vive en la experiencia del Frente Popular y, especialmente, en la movilización popular por la construcción del socialismo.

Defiendo la tesis de que la elección de la UP y su faceta más creativa, que fue la gran movilización popular vivida durante su gobierno, no fueron el resultado de un proceso electoral y la elección de un liderazgo histórico. Más bien, se basan en el histórico "compartir de proyectos políticos" entre trabajadores y partidos de la izquierda chilena, que forjaron identidades y prácticas políticas que adquirieron nuevas proporciones durante la experiencia chilena. Este compartir, marcado por consensos y tensiones, se basó en concepciones

generales sobre las bases para la construcción de una sociedad más igualitaria (Cury, 2018). Se trata de un elemento central de tensión sobre el que quiero llamar la atención, que son los sentidos de democracia proyectados por algunos de los actores que protagonizaron ese proceso. Este elemento sigue siendo un factor de divergencias y que, desde la transición hacia la democracia, en 1990, y en el contexto actual de la historia política chilena, ha significado la ruptura de este compartimiento de proyectos entre los sectores populares y la izquierda partidaria.

Destaco en esta historia las principales experiencias vividas por los trabajadores que fueron fundamentales para forjar una sólida identidad de clase y este compartir de proyectos con la izquierda del país. El movimiento obrero atravesó procesos fundamentales a principios del siglo XX: su vinculación con la izquierda a principios del siglo, dando origen al Partido Comunista (PC) ya en 1921, y las definiciones derivadas de la denominada institucionalización de los conflictos, de la intervención del Estado en relaciones de trabajo. Destaco este proceso porque las reglas establecidas por el Estado para la organización sindical, que buscaban fragmentar y debilitar el movimiento sindical, manteniendo los sindicatos por empresa y no por categoría, terminaron permitiendo un nuevo tipo de organización y la formación de fuertes lazos entre los trabajadores, sus entidades y sus líderes en la fábrica. Esta vivencia cotidiana forjó líderes legítimos entre los trabajadores, quienes, por sus vínculos con la izquierda, actuaron como intelectuales orgánicos entre las bases en el quehacer cotidiano. Estas relaciones resultaron fundamentales para la movilización que se viviría durante la experiencia chilena en 1970.

Otro aspecto fundamental para la formación de la clase trabajadora chilena se dio fuera del ámbito laboral, en su lucha diaria por los derechos y mejores condiciones de vida. A medida que estos trabajadores llegaron a la ciudad de Santiago, la lucha por la vivienda se convirtió en uno de los factores de supervivencia en la capital de Chile. El movimiento de pobladores, conformado por trabajadores de diferentes sectores, actuó en la ocupación de espacios urbanos

comenzó a configurar uno de los movimientos sociales más importantes del país, a través de una actuación que fue fundamental para la construcción de redes políticas y sociales de solidaridad, por forjar su identidad colectiva, para ampliar el debate político en torno a los impactos de la estructura capitalista en la vida de los sectores más pobres. La práctica de las 'tomas' cobró forma y amplitud, pasó a contar con el liderazgo de la militancia partidaria y se convirtió en una de las principales formas de lucha en estos sectores (Garcés, 2002).

Esta práctica ya estaba presente entre los trabajadores en los conflictos laborales, ocurriendo en contextos de huelgas y paralizaciones y configuró una de las herramientas más simbólicas en sus luchas, como medio de ejercer presión sobre el poder público para reclamar el reconocimiento de sus derechos frente a un Estado excluyente. En su relación con la UP, muchos campamentos articularon la lucha por la vivienda con la política de la formación de los comités de UP, que crearon órganos básicos de movilización durante la campaña electoral. Durante el Gobierno Popular, las tomas fueron los medios para ejercer lo que ellos pasaron a entender como el ejercicio de un nuevo derecho, que era la confiscación de propiedades privadas en un mecanismo directo de resistencia al orden capitalista.

Lo fundamental en ese historial es la importancia que siempre tuvo la centralidad del trabajo en la experiencia, en la identidad y en el proyecto político de los sectores populares. Esa experiencia envuelve la vivencia en la venta de la fuerza laboral, sumisión a condiciones de explotación, la vida cotidiana vivida en condiciones precarias, la lucha por los derechos en el trabajo y también en la comunidad y la identificación con el proyecto vocalizado por la izquierda. Situaciones vividas bajo "el impacto de su situación común que, a su vez, refuerza el sentimiento de pertenencia a una clase" y fortalece la identidad de estos sujetos como grupo que dependía de su fuerza de trabajo, que identificaban la distancia en relación con sus antagonistas (Zeitlin y Petras, 1970, p. 19). Más que eso, que se reconocían como sujetos que producían la riqueza del país y que, por lo tanto, merecían ganar un espacio y "tener voz" en aquella sociedad.

Esta identidad que lleva el trabajo a su núcleo fue fuertemente movilizada en la campaña de la UP, que ganó las calles, barrios y espacios de trabajo con el compromiso de sus bases. La identificación de los trabajadores con ese proyecto socialista se cristalizó a partir del papel de protagonista dedicado a los trabajadores como 'actor' de la construcción de la nueva sociedad chilena en el discurso de la UP. La movilización de símbolos históricos de la lucha popular, el papel del trabajo y los trabajadores sirvió como vínculo fundamental para sellar ese compartir de proyectos. La valorización del trabajador y el fortalecimiento de su identificación como sujeto de la formación de un nuevo Chile impregnaron proyectos artísticos y culturales comprometidos y todo el discurso de la izquierda partidaria que reforzó una memoria colectiva de identificación de las luchas sociales con la izquierda y la emancipación del país.

Participación y democracia

La plataforma nacionalista, antiimperialista y antioligárquica de la UP tenía como objetivo lograr transformaciones estructurales a través de proyectos de intervención directa en la economía, orientados a la socialización de los medios de producción. Para ello, la economía se gestionaría separadamente en tres sectores, un área mantenida en el sector privado, un sector mixto y el área de propiedad social. En esta propuesta se proyectaba la apertura de canales de participación para los trabajadores, que se realizarían a través de sus órganos de representación, especialmente la Central Única de Trabajadores (CUT).

Este proyecto trajo definiciones más claras en cuanto a las transformaciones económicas estructurales, que tenían como objetivo constituir una nueva estructura productiva y ponerla al servicio de las grandes mayorías del país, y la democratización económica, estrechamente relacionada con el aumento de los ingresos de los más pobres. De esta forma, sectores que condicionaron el desarrollo económico del país, básicamente constituidos por 150 de las

mayores empresas mineras e industriales, las mayores distribuidoras, el sector financiero, cerca del 80% del negocio exportador, 60% de las exportaciones, parte de la industria de las comunicaciones y las propiedades con más de 80 hectáreas pasarían a formar parte del campo económico a ser controlado por el Estado, el Área de Propiedad Social de la economía.

La denominada Área de Propiedad Mixta estaría compuesta por empresas que combinarían capital estatal con capital privado, y se establecerían en sectores productivos tecnológicamente avanzados. Las pequeñas y medianas empresas permanecerían en el Área de Propiedad Privada.

En el contexto de las relaciones sociales de producción y cambios en las formas de participación política, tanto la frágil definición programática de la UP como las disputas ideológicas en la izquierda chilena terminaron por convertirse en obstáculos en el rumbo del gobierno y puntos clave para el desarrollo del proceso que terminó teniendo su plan inicial reapropiado y superado por organizaciones de base.

Existía un esbozo para la creación de una Asamblea Popular, que presuponía la transformación de las instituciones, para garantizar una amplia y más directa participación popular. Además de poco elaborado, este cambio requeriría una mayoría absoluta en el Parlamento, que la UP nunca alcanzó. Sin embargo, con un enfoque en el proceso a través de las instituciones democráticas, hubo un consenso entre la UP y sus bases de que el centro de conducción del proceso de transformación económica y los cambios políticos necesarios (incluso cambios que incluyeron la apertura de canales de participación) se llevaría a cabo en el Estado.

Aquí estaba el punto neurálgico de las tensiones que se desatarían a lo largo de la experiencia chilena: en la combinación de las dos esferas de transformación estructural, la política y la económica, con el afán de las bases sociales de concretar el protagonismo popular al que apelaba el discurso de la UP al afirmar que las transformaciones ocurrirían si el pueblo chileno tomara en sus manos el poder

y lo ejerciera real y efectivamente (Programa Básico, 1969). Ese punto incidiría en torno a cuál sería el socialismo democrático a ser construido al final.

La participación popular en el gobierno de la UP se dio de múltiples formas y por diferentes motivaciones. En conjunto, representaron una reapropiación de nexos específicos del proyecto socialista de la izquierda, del cual compartían, y fueron más allá de las formas de participación inicialmente propuestas. Por un lado, a través de la expansión de formas de socialización y prácticas políticas que llevaron a las movilizaciones a tensarse con la institucionalidad. La expansión de las prácticas de tomas de terrenos, la ocupación de organismos públicos, como las municipalidades, como una forma de cuestionar la legitimidad de un poder de arriba, distante e incapaz de resolver los problemas que enfrenta la comunidad; la capacidad de articulación entre organizaciones comunitarias y laborales en los llamados Comandos Comunales, como gérmenes de poder local; la organización de la autoconstrucción y la exigencia de incorporar estos comités a los programas de vivienda del Estado, son algunos ejemplos de iniciativas de poder que los trabajadores pretendían incorporar al proyecto.

Uno de los más significativos se debió a los intentos de los trabajadores por ejercer derechos de participación en la gestión de sus puestos de trabajo. Lo intentaban a través de la exigencia de intervención estatal, de la formación de comités de vigilancia, o de la incorporación de la empresa al Área de Propiedad Social. Una vez que, inicialmente, los canales de participación solo se establecerían en las empresas del Área Social y en las del Área Mixta en las que el Estado fuera accionista mayoritario, lo que integraría alrededor de 50 mil trabajadores, y excluyendo a los trabajadores de empresas privadas, que conformaban la mayoría.

Por otro lado, la reacción en medio de la crisis de abastecimiento de 1972, generada por el boicot patronal y la huelga de camioneros. En ese contexto se mostró toda la capacidad de articulación y creatividad de los sectores populares para reaccionar ante los obstáculos

que se imponían a ese momento vivido como 'su' gobierno. La formación de los Cordones Industriales, que fueron una especie de articulación política entre los sindicatos de empresas de una misma área geográfica, discutir soluciones políticas y prácticas para mantener el abastecimiento, para apoyar ocupaciones y el funcionamiento de empresas que sufrieron el boicot patronal, y movilizar políticamente a los trabajadores; o con la formación de las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP) que permitieron la distribución de alimentos en poblaciones a través de la organización local, entre otras iniciativas importantes.

Sin embargo, al mismo tiempo que la UP apeló al protagonismo popular, su propuesta de participación fue muy restrictiva o poco elaborada en algunos aspectos, especialmente en lo que se refiere al alcance de las estructuras de participación y, en especial, a las relaciones sociales de producción, que no se transformarían. Así, no existía una propuesta clara de una nueva democracia que superase el modelo institucional existente. Y el plan de participación se estructuró en la creación de órganos consultivos, más que deliberativos. Y los trabajadores se harían responsables de la calidad y, principalmente, de la eficiencia de la producción: "Hoy, los trabajadores de estas empresas [estatizadas] tienen un desafío histórico: trabajar más y mejor: producir de tal forma de demostrarles a los imperialistas, a los capitalistas, que los trabajadores, los profesionales y técnicos chilenos, somos capaces de dirigir las empresas e industrias y de hacerlas producir más que las empresas de carácter privado capitalista" (Central Única, 1971, p. 8).

O en las palabras de Allende: "La revolución, el destino, el futuro de Chile está en manos de ustedes. Si fracasamos en el campo económico, fracasaremos en el campo político, y será la decepción y la amargura para millones de chilenos y para millones de hermanos de otros continentes que nos miran y nos apoyan. [...] el gran combate, la gran batalla de Chile es ahora y será siempre la batalla de la producción; que lo entienda, que se lo grabe aquí en el cerebro y en

el corazón, repito, la batalla de ahora y de siempre es la batalla de la producción" (pp. 9, 16).

La implementación del sistema de participación llevó a muchos trabajadores a cuestionar el mantenimiento de las relaciones verticales tradicionales, y a aspirar a una participación más activa en el control y dirección de las fuentes de trabajo. La energía participativa desde las bases obreras comenzó a darle un contenido concreto a las nociones de participación y propiedad social sobre una base que añoraba los cambios prometidos por el gobierno popular.

Innumerables empresas que pasaron al Área Social fueron por una "intervención" del Estado o por la "requisa de empresas", permitida por varios decretos del código laboral. La UP había propuesto expropiar 253 de las 35.000 empresas de Chile, pero ese número había disminuido a 90 debido a la presión de la oposición al gobierno. En diciembre de 1972, el número total de empresas intervenidas en el sector industrial era de 202. Estas sumaban 117.471 trabajadores; y de las 65 empresas adicionales que se agregaron al área social, solo 9 correspondían al listado original de empresas estratégicas (Silva, 1998, p. 252).

Dicha expansión se debió a acciones sociales que comenzaron a asumir una dinámica diferente en varias empresas, incluidas las pequeñas y medianas, a partir de la acción de los trabajadores que demandaban el paso de las industrias al área social, o al menos, la intervención del gobierno para obtener los derechos de participación que existían en el área administrada por el Estado. Una expresión importante de las demandas de los trabajadores de estas empresas es el aumento significativo del número de conflictos laborales, que tomaron el tono de reclamar participación y denunciar el boicot del empleador o el no cumplimiento de las leyes laborales, o denuncias de los empleadores contra los trabajadores que estarían estimulando los conflictos para conseguir la intervención del Estado. Desde una media de 1.000 entre los años 1967 y 1969; hasta 1819, en 1970; 2709, en 1971 y 1763 solo en el primer semestre de 1972.

Estos casos denotan los límites de la propuesta del gobierno en cuanto a la concepción de los trabajadores, para quienes el empresario no se podía distinguir entre el grande, monopolista, y el pequeño, todos representaban la figura del explotador. Esto demuestra que la lógica de la oposición de clases suplantó el nexo nación-antinación propuesto por la UP. Con acciones desiguales en el tiempo, el lugar y la velocidad, los distintos movimientos inculcaron en su concepción sobre la construcción del socialismo las preocupaciones cotidianas y los problemas históricos que asolaron a la clase obrera. Para ellos, los nuevos modos de participación popular fueron el resultado de una democratización creciente que abrió el camino a una sociedad socialista (Cury, 2018, p. 186).

Por otro lado, para la UP, la concepción de gobierno obrero se debía en gran parte a la representación que ejercería la CUT en instancias gubernamentales o por los interventores del Estado en las empresas: "Una parte del Estado está en manos de los trabajadores a través de los partidos populares y de la Central Única que representa todos los niveles de la organización sindical. [...] Consolidar y ampliar el poder popular supone vitalizar los Partidos Populares, sobre la base de hacer efectiva la unidad, para mantener un diálogo ideológico, polémico, crítico" (Central Única, 1971, p. 9).

Aquí, por lo tanto, la centralidad del trabajo en esta nueva democracia proyectada adquirió diferentes significados, porque si bien todas estas instancias representativas gozaban de legitimidad entre las bases, comenzó a plantearse un cuestionamiento del papel que jugaría el trabajo en el nuevo modelo democrático, un cuestionamiento del papel destinado a los trabajadores, en cuanto solamente 'productor' que vende su fuerza de trabajo, que servía a un nuevo régimen, pero bajo relaciones sociales típicas del capitalismo. El carácter colectivo de su identidad se expresó con fuerza en su deseo de reformular el concepto de participación en una nueva democracia: "el poder popular creo que pasa primero por el control social, por la capacidad de la gente de controlar a sus propios dirigentes, o sea, si las juntas de vecinos andan una serie de instancias mal, porque la

gente es incapaz de emplazar a sus propios dirigentes de su unidad vecinal, a esa gente no le puedo pedir un cambio de sociedad si ni siquiera es capaz de incidir ahí en el metro cuadrado donde vive, creo que por ahí pasa" (Massalin, testimonio, 4 de junio de 2009).

A diferencia de una concepción fragmentada de la vida en sociedad, lo que se observa en las demandas de los trabajadores es que la nueva democracia debería incluir al sujeto colectivo, trabajador, más allá de la producción material. El trabajo en sí y todo el espacio que implicaba la reproducción de la fuerza de trabajo, que afectaba la vida de los chilenos, conformaría una totalidad sobre la que esos trabajadores estaban deseosos de actuar directamente. En este sentido, la presión de los trabajadores se hizo para crear, ampliar y reconocer canales de participación, como se nota en sus palabras acerca del poder popular:

> Solamente una discusión amplia en la base puede garantizar una verdadera democracia. De nada sirven hoy organismos burocráticos, que no representen a nadie o que solo integren a los sectores más avanzados de la clase. El problema es crear poder popular. El poder popular nace de la base misma de las organizaciones de masa, y se ejerce por la fuerza que da la unidad del Pueblo expresada en los Comandos Comunales. [...] Lo que caracteriza a la sociedad burguesa es la división de lo social y lo político [...] el Pueblo no se expresa directamente, lo hace siempre por intermedio de delegados. El Pueblo participa en organizaciones sociales [...], pero lo político se decide en el famoso Parlamento burgués (*El Rebelde*, 1973, p. 7).

A lo largo de la historia de Chile, la disputa por el lugar del Estado, la democracia y los derechos han estado en el centro de las marcas políticas del siglo XX, como el Frente Popular en 1938, la Unidad Popular en 1970, el golpe militar (instaurando un no lugar para la democracia), en 1973, y las movilizaciones por la redemocratización. Y ahora en 2019, la memoria colectiva de una población que sabe lo que es luchar contra un Estado excluyente y ser sujeto activo en la

construcción de una sociedad más justa se ha recuperado con fuerza en los eventos a los que aún asiste el país.

Como señalé al principio, los tiempos en la política son diferentes para la institucionalidad y para la identidad, porque la experiencia no se derrite en el aire como la ideología en el partido. Así como para construirse lleva mucho tiempo, puesto que involucra la práctica de la vida material, relaciones sociales, memorias e ideologías, ella también permanece en una concreción de larga duración. Y la experiencia de la Unidad Popular permitió la explosión y la congregación de prácticas, relaciones de sociabilidad, ideologías y prácticas políticas vividas en la vida cotidiana guiadas por la horizontalidad, forjada durante décadas. Estas experiencias dejaron a la UP con una base muy consciente del rol que debería jugar, ya no restringido al rol de productor, sino capaz de contribuir junto con la izquierda partidista y el Estado, pero en sus propios términos, que expandió el sentido de lo político a las relaciones sociales y las relaciones de producción a construir una democracia verdaderamente igualitaria.

Referencias

Barrett, P. S. (2001, agosto). Labor Policy, Labor-Business Relations and the Transition to Democracy in Chile. *Journal of Latin American Studies*, 33(3), 561-597.

Cortez Massalin, C. (4 de junio de 2009). *Testimonio*. Santiago de Chile.

Cury, M. (2018). *El protagonismo popular chileno: experiencias de clase y movimientos sociales en la construcción del socialismo* (1964-1973). Santiago: Lom Ediciones.

CUT. (1971, junio) Un Primero de Mayo con los Trabajadores en el Gobierno. Párrafos del discurso de Allende en el 1 de Mayo, en *Central Única*.

CUT. (1971, junio). Un Primero de Mayo con los Trabajadores en el Gobierno. Extractos del discurso pronunciado por el secretario de Organización de la CUT, Víctor Díaz, el 1 de Mayo, en *Central Única.*

Dagnino, E., A. J. Olvera y A. Panfichi. (2006). *A disputa pela construção democrática na América Latina*. Brasil: Paz e Terra-Ed. Unicamp.

El Rebelde. (1973, 15 de marzo). *Comandos Comunales de trabajadores: aquí se ejerce el poder popular*.

Garcés, M. (2002). *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970*. Santiago: Lom Ediciones.

Silva, M. (1998). *Los Cordones Industriales y el socialismo desde abajo*. Lizor.

Unidad Popular. (1969, 17 de diciembre). *Programa básico del gobierno de la Unidad Popular*.

Zeitlin, A. y J. Petras. (1970, marzo). The working-class vote in Chile: Christian Democracy versus Marxism. *The British Journal of Sociology*, 21(1), 16-29.

Voz del "poder popular", voz del aparato estatal

Dialéctica sociopolítica y tiempos rotos de la "vía chilena al socialismo" (1970-1973)

Franck Gaudichaud

La discordancia de los tiempos sociales y políticos o las relaciones (y tensiones) existentes entre la "voz de los movimientos" y la "voz de la institucionalidad" (Dechezelles, Stéphanie y Luck, Simon, 2011) es un dato capital de los "mil días" de la Unidad Popular (UP). Durante este período de "fiesta, drama y derrota", como lo dijera Tomás Moulian, se conjugan claramente lo que el filósofo marxista Daniel Bensaïd (1995) describía como momentos de aceleración brusca ("*les hoquets du temps brisé*") del conflicto de clase.

De noviembre de 1970 a septiembre de 1973, del impulso nacido de la participación de los trabajadores en el sector estatizado, orientado por el gobierno, al desbordamiento de las direcciones de los partidos de izquierda; de la crisis del aparato sindical hasta el surgimiento de los cordones industriales; de los intentos de abastecimiento directo en los barrios periféricos a la movilización de algunos campamentos, asistimos a diversos sobresaltos de autoorganización y a varios

destellos autogestionarios. Esta epopeya del movimiento popular corresponde a una batalla colectiva, en plena Guerra Fría, llevada en condiciones (locales, nacionales y mundiales) adversas. Los relatos de vida permiten restituir la dimensión microsocial de esas luchas y entrever lo que pasó en una fábrica, un sindicato o durante la asamblea de un Cordón Industrial, es decir, comprender de qué modo la acción colectiva, las emociones y vivencias, los compromisos individuales se combinaron con el enfrentamiento político global. En consecuencia, son varios los niveles de análisis que se deben abordar si se quiere restituir toda la lógica dialéctica del movimiento obrero y popular o de los numerosos debates que atraviesan a las izquierdas.

Expondremos aquí brevemente algunas de las conclusiones generales que hemos sacado de nuestros estudios sobre "poder popular" y cordones industriales en Chile. Por lo tanto, no pretendemos cubrir todos los aspectos del período, dejando de lado incluso algunos temas esenciales, entre ellos el enfrentamiento central con Estados Unidos y la Guerra Fría interamericana, la situación de lucha agraria en el campo, la reorganización de las derechas o el campo cultural y mediático, entre otros. Centrándonos en las organizaciones sociales urbanas, obreras y sindicales, el *flujo de conflictos* de estos mil días puede dividirse en varios *episodios* que unen diversas *secuencias de interacciones conflictivas* (siguiendo a: Tarrow, Sidney y Tilly, Charles, 2015) en el curso de las cuales se confirman formas diferentes, incluso asimétricas, pero combinadas, de participación de las clases subalternas y de los agentes movilizados en el proceso del cambio social. De modo permanente, lo que se plantea es la cuestión de la interfaz, este ir y venir diacrónico, entre el movimiento popular, el campo sindical, el Estado y los partidos políticos que buscan representar los intereses de las capas sociales subalternas. En gran medida, esta articulación determina el ritmo de desarrollo y reflujo, la respiración de los intentos de autoorganización obrera y de pobladores. Para Hannah Arendt (1988), la gran contradicción del siglo pasado sería precisamente de este orden: "El conflicto entre estos dos sistemas, el de partidos y el de consejos, ocupó un lugar privilegiado en todas las

revoluciones del siglo XX. Lo que se ponía en juego era el problema de la representación frente a la acción y la participación".

La dinámica del poder popular confirma, aunque solo en cierta medida, este análisis pesimista de la filósofa alemana, muy marcada por el impacto del estalinismo en Europa. ¿Cómo no considerar el hecho de que casi siempre, la transformación social pasa por una articulación entre campo político y movimiento social donde intervienen compromisos partidarios y movilizaciones colectivas? Es lo que confirma la experiencia chilena. Es ahí también, es cierto, donde quizá fracasó... Sin embargo, es innegable que son las y los militantes de las organizaciones políticas y sindicales quienes permiten al poder popular estructurarse mejor, permanecer en el tiempo, cambiar de escala. Esos activistas "multiposicionados" (en partidos, sindicatos y colectivos), no se proponen defender únicamente reivindicaciones transitorias, sino crear formas de coordinación territorial que fueran los gérmenes de una sociedad futura y la base de un socialismo revolucionario democrático.

Durante el gobierno de Allende, los aparatos políticos que acompañan las acciones colectivas protestatarias están representados mayoritariamente por los partidos que componen la UP (principalmente el Partido Comunista, PC, y el Partido Socialista, PS). Es decir, son organizaciones partidarias de izquierda que controlan el poder ejecutivo, una parte (aunque minoritaria) del Parlamento y, durante todo el período, que dirigen o coordinan a una amplia fracción del sindicalismo y del movimiento de pobladores. Estos partidos organizan y se apoyan sobre luchas sociales y populares que hacen explosión –literalmente– en todo el país, a partir de 1970. Paralelamente, el objetivo táctico de la izquierda gubernamental es lograr apoyarse en la creatividad popular y también canalizar los agentes sociales movilizados en torno al programa "etapista" de la revolución institucional y no armada. Esto sucede al mismo tiempo que las acciones colectivas entran en un curso ascendente, extremadamente difícil de contener en dichos límites. Así, como en la mayoría de los fenómenos revolucionarios, este pequeño y largo país del Cono Sur vive una

dinámica de desbordamiento, no solo de los partidos de izquierda, sino también del conjunto de los poderes instituidos de representación política o mediación social. Al principio, en una relación muy estrecha, casi simbiótica, que podríamos calificar de heterónoma, se va revelando una diferenciación cada vez más clara entre el espacio del movimiento obrero y el campo partidista. Finalmente, en el curso de esos mil días, se traslapan formas de "poder popular institucionalizado" (bajo control del gobierno) con diversas variaciones de lo que propusimos llamar "poder popular constituyente" surgidas desde la base. En una visión sincrónica, podemos identificar, concluyendo este trabajo, tres grandes secuencias.

Avances, conquistas, retrocesos de los cordones industriales y del "poder popular"

La primera secuencia va desde la elección de Allende hasta el gran paro patronal organizado por la oposición, en octubre de 1972. Está marcada por una fuerte identificación entra la UP y su base social. El gobierno se apoya decididamente en el asalariado organizado y favorece las movilizaciones colectivas, masivas, festivas y entusiastas en todo el país. Lanza un vigoroso programa de reformas democráticas, de redistribución de la riqueza y pone término a la represión estatal en contra de los movimientos sociales, creando así una estructura de oportunidades políticas abierta. Es la noción de participación institucional la que prevalece: Comités de la UP, comités de abastecimiento (JAP), sistema de participación de los trabajadores en el sector estatizado, comités de vigilancia de la producción en el sector privado. Se trata de una participación impulsada y dirigida desde el Estado, restringida a ciertas capas sociales específicas sobre las cuales el gobierno busca apoyarse prioritariamente. Rápidamente, varias iniciativas de este tipo fracasan o no tienen continuidad en el tiempo. Es el caso de los Comités de la Unidad Popular (CUP) que dejan de existir por la falta de un proyecto político concreto más allá

de la campana electoral; otras muestran sus límites, como las JAP, las que, a pesar de su real contribución al combate en contra del mercado ilegal, no alcanzan a tener un poder real; o los comités de vigilancia del sector privado, que no logran constituirse efectivamente por miedo de gatillar la furia de la pequeña y mediana burguesía (y con ellos de la Democracia Cristiana, DC, en el congreso). Por otra parte, el proyecto de la UP tiene rasgos de productivismo, en el sentido de que insiste mucho en la "batalla de la producción", a veces, en detrimento de la importancia de la praxis participativa del conjunto de las clases populares movilizadas.

No obstante, el gobierno también innova en muchos aspectos en el plano democrático-social. Una de las grandes medidas emblemáticas de la UP, con el apoyo de la CUT, a favor de una transformación progresiva de las relaciones sociales de producción, es implantar un sistema de participación y de cogestión en las empresas estatizadas. La constitución (y ampliación) del Área de Propiedad Social (APS) es una originalidad democrática de este período. Es también una de las piedras de tope para la izquierda, ya que acentúa el contenido y la radicalidad de los conflictos entre capital y trabajo, al mismo tiempo que se constituye en un rico ensayo de apropiación social de la esfera productiva por parte de las y los asalariados. Recordemos que son finalmente más de 400 empresas las que conforman el APS en 1973, de las cuales más de 260 son requisadas bajo presión de los trabajadores. Según el lugar y la empresa, a pesar de los numerosos avances en términos de liberación del trabajo e inventividad en términos de participación, es cierto que se mantienen varias formas de *heterogestión* y, a veces, un paternalismo alejado de la gesta autogestionaria deseada por algunos militantes obreros (*Espinosa* y *Zimbalist,* 1978). Igualmente, la difícil cuestión de la propiedad de las empresas nunca es resuelta por el gobierno, ya que tiene que enfrentar un Parlamento mayoritariamente hostil y un aparato judicial conservador que rechaza el derecho a estatizar y controlar la economía.

Progresivamente, la energía liberada por esta "revolución desde abajo" se expande, por capilaridad, desde los sectores obreros más

organizados hacia las capas populares subalternas. La extensión y difusión de la acción colectiva a un sujeto social cada vez más amplio se vuelve en contra del proyecto de reformas institucionales y graduales de la UP. Los dirigentes sindicales de las medianas empresas mantenidas por el gobierno en el sector privado, los pobladores vinculados al ala rupturista de la izquierda, los militantes en general jóvenes y críticos hacia sus direcciones políticas, se convierten en líderes de un movimiento donde se mezclan, de un modo fecundo, renovación generacional, identidades populares insurreccionales y radicalización política. Indudablemente, en las bases de este desarrollo encontramos una modernización acelerada de las fuerzas productivas que cada vez más se sienten aprisionadas en el marco de relaciones sociales de producción a menudo, arcaicas.

El segundo respiro del poder popular toma impulso con el paro de octubre de 1972 y termina en junio de 1973. El rasgo esencial de esta etapa es el surgimiento de organizaciones independientes del ejecutivo, tales como los cordones industriales y, en menor medida, los comandos comunales y diversos comités vinculados al movimiento de pobladores. En esta etapa aparece con fuerza el movimiento de pobladores como parte fundamental del poder popular urbano. Varias experiencias colectivas llevadas a cabo por estos agentes sociales demuestran la importancia de sus movilizaciones y cómo logran interpelar al Estado central sobre su situación en lo relativo al transporte, vivienda, salud, etc. El caso del campamento Nueva Habana es, en este sentido, simbólico, aunque haya sido una excepción (Cofré, 2007). Este ensayo de barrio autogestionado representa un verdadero embrión de poder popular local. Sin embargo, y al igual que otros sectores del movimiento de pobladores, sus habitantes se mantienen insertos en una lógica bastante verticalista en sus relaciones con los cuadros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En cuanto a la aparición de los "comandos comunales"; reivindicados por el MIR y que buscaban articular obreros, pobladores, estudiantes y "pobres de la ciudad y del campo, si bien permite confirmar la tendencia a la unidad de los sectores subalternos (que se acelera

durante el paro de octubre de 1972), podemos concluir que su real praxis ha sido al final limitada, en parte, por falta de tiempo.

A partir de mediados del año 1972, la UP debe moverse en un contexto de grave crisis económica en la que se retroalimentan inflación y mercado ilegal, conscientemente organizados por la burguesía y la oposición, con el apoyo activo de la CIA y de Washington (Kornbluth, 2003). Las clases dominantes, después de haber centrado sus ataques en el gobierno, se preparan para actuar decididamente fuera del marco institucional. Producto de esta acumulación de tensiones, se dibuja una inquietante división dentro del gobierno, entre un sector "rupturista" y un polo más moderado. El fenómeno queda claramente de manifiesto con los sucesos de la Asamblea de Concepción (julio de 1972), duramente condenada por Allende y el PC, líderes del ala "gradualista". Pero, es sobre todo el creciente desfase entre, por una parte, el gobierno, las direcciones de los partidos y, por la otra, los trabajadores y algunos militantes de base, lo que marca la crisis de representación que vive el conjunto de la izquierda partidaria. El aumento exponencial de las movilizaciones obreras no podía dejar de estremecer a la CUT, incluso si esta logra mantener una estabilidad de fachada durante las elecciones sindicales nacionales de mayo de 1972. Frente a la rápida ofensiva de la oposición, a las crecientes dificultades del gobierno (atacado desde el interior, pero también por la violencia de la estrategia desestabilizadora de Washington), a la integración progresiva de la CUT al aparato estatal, algunas fracciones del movimiento popular y obrero buscan nuevas forman de expresión autónomas. La gran huelga patronal y el "octubre rojo chileno" es, en ese sentido, una verdadera prueba de fuego. Asistimos a la creación de múltiples autoorganizaciones, donde se combinan la actividad de varias capas sociales en un gran movimiento destinado a defender el gobierno, pero que también sobrepasa ampliamente los límites del programa de la izquierda parlamentaria. El sistema institucional en el cual se fue progresivamente estancando la UP aparece de repente obsoleto. El gobierno y la CUT se ven paralizados ante el vigor

de la ofensiva y es fundamentalmente desde la base que surge la resistencia, otorgándole –temporalmente– consistencia a las consignas de poder popular. A nivel de la industria, estas coordinaciones de carácter horizontal y territorial responden masivamente al boicot patronal con una ola de tomas de fábrica y, en algunos casos, con la reorientación del aparato productivo bajo control obrero. Esta autodefensa obrera se adecúa a la movilización en el seno de las empresas del APS. Así, varios *cordones industriales en sí*, que existen en el paisaje urbano de las grandes ciudades, se autoorganizan sobre bases políticas radicales e intentan constituirse en tanto que *cordones industriales para sí* en el marco de espacios de lucha bien determinados, muy anclados localmente. Son el resultado de "un conjunto de procesos moleculares de unificación interna del movimiento obrero" que sobrepasa el carácter corporativista de los sindicatos y de la división social del trabajo (Cruz Salas, 1999).

La descentralización de la actividad política es tal y la dinámica de socialización y de intermediación de las acciones colectivas tan importante, que de sujetos pasivos en el marco de un proceso de reformas por etapas, sectores completos de las capas dominadas pasan a "la condición de sujetos determinantes en el mundo material y social que les rodea" (Smirnow, 1979). Nos encontramos claramente frente a una "coyuntura fluida" de profunda crisis política, tal como la teoriza Michel Dobry (2009). Sin embargo, después de cada episodio de *desectorización del espacio social*, los órganos embrionarios de poder popular se ven atrapados entre su fidelidad a Allende (quien les pide respetar sus compromisos institucionales) y el deseo de mantener la presión social para hacer avanzar la transición. Esta indecisión los lleva a un período de reflujo, de desmovilización y nueva separación entre los diversos agentes en lucha (obreros, pobladores, estudiantes, etc.) alimentado, además, por las numerosas divisiones de la izquierda. Al final, el poder popular se "entrega" a Allende y sus posibilidades –limitadas– de acción desde el Estado (como lo muestra la famosa carta, desesperada, de los cordones de Santiago, fechada el 5 de septiembre de 1973).

Rápidamente, el gobierno retoma el control de la situación y canaliza su base militante, muy activa en los embriones de poder popular. El presidente de la República adopta entonces, una inestable posición de moderador de los conflictos sociales, se lanza en interminables negociaciones con la DC (cada vez más a la derecha) y busca frenar las opciones de poder popular constituyente, en la medida que estas cuestionan sus compromisos legales. Esta táctica se sostiene también en la integración creciente del aparato sindical al Estado y por una invitación apremiante a las Fuerzas Armadas para que sus más altos oficiales ocupen cargos en la gestión pública. Asumiendo este rol de árbitro *sui generis* del conflicto de clase, la fracción moderada de la UP –especialmente el PC– condena vigorosamente el "izquierdismo" de las tomas de fábricas, acusando al MIR de ser su instigador. Pero, el "compañero Presidente" tiene también la inteligencia política de admitir el rol esencial jugado por la autoorganización del movimiento popular, reconociendo específicamente a los cordones industriales por sus acciones decisivas. Jugando a dos bandas, la UP estatiza empresas decididamente, designa interventores al mismo tiempo que deja fuera de su proyecto de participación directa a los trabajadores de numerosas empresas del sector privado ocupadas, pero juzgadas "no estratégicas". Identificamos la misma lógica en lo que se refiere al problema del abastecimiento y a las relaciones del ejecutivo con el movimiento de pobladores. De ahí, las numerosas marchas de los campamentos en el centro de la capital y en provincia, o también, la aparición de comandos de abastecimiento directo, destinados a denunciar la falta de iniciativas gubernamentales en la esfera de la circulación de mercaderías.

Rumbo hacia el abismo: hacia el golpe de Estado

Esta dinámica de péndulo que deja insatisfechas numerosas reivindicaciones populares y que tampoco reconforta a las capas medias y superiores de la sociedad, se reproduce durante la tercera secuencia

de las políticas del conflicto de la UP, es decir, a partir del intento de golpe de junio de 1973 (el "Tanquetazo"). A esta fecha, la contrarrevolución ya está en marcha. La figura tutelar de los militares se vuelve omnipresente en todos los niveles y la relación general de fuerzas se degrada considerablemente para los militantes y el movimiento social. La izquierda parlamentaria no quiere apoyar un poder popular que podría hacer surgir una *dualización de poder* (o poder dual), en relación con las instituciones vigentes (como lo reclama el MIR). El debate sobre el poder popular está en su apogeo y el conjunto de las organizaciones políticas del país reconoce su fuerza potencial, sea para condenarlo en nombre del peligro de la "dictadura marxista", sea para intentar canalizar su fuerza. Más que nunca, los cordones industriales proyectan una imagen deformada en la escena política nacional, alimentada por algunos periódicos cercanos a la izquierda "rupturista" y que no tiene relación con sus verdaderas capacidades de movilización.

El poder popular y obrero posee, sin embargo, un repertorio de acción colectiva amplio y diversificado, bastante clásico pero muy vigoroso, que le permite afirmarse como un actor central del conflicto de clase. Algunas jornadas de movilización son incluso excepcionales, como las de junio y julio de 1973. Sin embargo, ver "*soviets* a la chilena" en los cordones industriales es más bien una ilusión heroica militante a posteriori o, en un sentido político opuesto, la marca del discurso pinochetista que para justificar el golpe menciona el "ejercito paralelo" de "los cordones de la muerte" (sic). Los cordones no cuentan con una organización permanente y democrática, basada en delegados elegidos en asamblea de fábrica (y bajo su control) que representen a los miles de trabajadores de su zona. De hecho, la participación política de la mayor parte de la clase obrera y del movimiento social urbano ha sido solo garantizada en coyunturas determinadas y defensivas (paro de octubre, "Tanquetazo"). Una vez la situación estabilizada, la gran mayoría de los asalariados se resitúan bajo la orientación gradualista del gobierno, que sigue representando la esperanza de reformas radicales. Entre tanto, las actividades de

los órganos de poder popular son mantenidas gracias a la ardua labor de algunas minorías militantes activas, algunos cientos de individuos, a menudo, ellos mismos comprometidos políticamente con los partidos de gobierno. En esas condiciones, la estructuración de "comandos comunales de trabajadores" que articulen un amplio bloque social y en condiciones de hacerse cargo democráticamente de la gestión de una comuna, de una provincia, solo ha sido una ilusión. Los caudillismos políticos, las prácticas *sustitucionistas* de los partidos también afectan la dinámica democrático-horizontal del poder popular. El distanciamiento, las asimetrías simbólicas o culturales, entre dirigentes y obreros, entre cuadros militantes y pobladores, las dominaciones de género (entre hombres y mujeres), son elementos que también pesan.

Así, divisiones históricas y sectorización del movimiento social (dentro de la clase obrera, entre el movimiento obrero y los pobladores, entre dirigentes políticos y base social), el patriarcado, las desigualdades culturales o económicas, son un freno para este gran movimiento de emancipación que encarnaron estos mil días revolucionarios. Los intentos de coordinación provincial de los cordones son demasiado tardíos y cortocircuitados por las divisiones de la izquierda, y principalmente, por un debate sin fin sobre la relación tumultuosa entre la CUT y el poder popular. Como lo subraya el historiador Hugo Cancino (1988):

> Las tentativas de coordinación de los nacientes órganos de Poder Popular, solo se lograron en un ámbito provincial, en Santiago, y a nivel de los cordones industriales. Empero, la capacidad de convocación, movilización y efectividad orgánica de esa coordinación no puede sobrevalorarse. Se trataba de un esbozo por lo demás, tropezó con múltiples obstáculos en cada uno de los sectores geográficos del Gran Santiago. Dichos obstáculos se arraigan en las desiguales relaciones de fuerza entre los partidos socialista y comunista y las diferentes tendencias o grupos caudillezcos dentro del PS que a veces se disputaban parcelas o sectores de poder en el movimiento obrero.

Desde fuera de la UP, el MIR participa activamente y, en la medida de sus posibilidades, en las movilizaciones. Con vehemencia, sus militantes buscan construir un "poder dual" que se constituiría en la célula de base de la nueva sociedad por venir. El MIR, sin embargo, subestima la importancia de las iniciativas de centralización de los cordones industriales para el curso de la lucha de clase. La joven organización revolucionaria, que se mantiene minoritaria, se posiciona fundamentalmente en el campo político como una fuerza de presión sobre el ejecutivo (en particular el PS de Carlos Altamirano), pero es incapaz de encarnar una alternativa válida para amplios sectores del movimiento obrero. Paralelamente, el aparato de la CUT busca integrar bajo su dirección a los cordones industriales, mientras los dirigentes comunistas multiplican las maniobras para lograr arrancarlos de las manos del PS y de los "ultraizquierdistas". Atemorizados por una dinámica libertaria de "desborde" que no controla, el partido fundado por Luis Emilio Recabarren no alcanza a considerar esta dimensión del movimiento obrero-popular, distante de su concepción monolítica y "vanguardista" de la acción colectiva revolucionaria. El PS, por su parte, heredero de su historia de partido-movimiento policlasista, toma progresivamente el liderazgo de numerosos órganos de poder popular, gracias a jóvenes militantes provenientes de algunos comités regionales muy comprometidos, no sin una buena dosis de oportunismo. De ahí, la postura ambigua de algunos dirigentes socialistas: muy comprometidos, critican duramente a "su" gobierno y radicalizan las acciones y demandas de los cordones, pero en momentos clave, son los principales moderadores del entusiasmo de los trabajadores para volverlos al regazo institucional allendista.

En el transcurso de estos tres tiempos discordantes del poder popular, se encuentra implícitamente la relación dialéctica entre lo que algunos investigadores han llamado la "revolución desde abajo" (se trata, en realidad, de la autoorganización de los sectores populares) y la política de "reformas revolucionarias" de Salvador Allende. No se trata de una dicotomía simple, ni de un proceso cosificado,

cristalizado. Si el concepto de "revolución desde abajo" del historiador Peter Winn (2013) ha permitido efectivamente hacer avanzar nuestra visión historiográfica, no se puede utilizar esta noción aislada o mecánicamente, separado de su contexto y de sus relaciones orgánicas y dialécticas con la UP, con los partidos, con la militancia y con las reformas públicas encabezadas por Allende. Sin ninguna duda, esas relaciones mutuas permiten, en un primer momento, la victoria electoral de la izquierda, pero también el éxito de las primeras reformas gubernamentales, la politización de las y los subalternos y el inicio de una transformación social "explosiva". Sin embargo, una vez que el marco institucional es desbordado por las clases populares movilizadas hasta entonces al margen de la participación política tradicional, esta articulación sociopolítica se convierte en foco de tensiones y contradicciones. El "constitucionalismo terco" de la UP, su situación de minoría en el Parlamento y dentro del aparato estatal (hecho político fundamental), una confianza desmedida en el "legalismo" de las Fuerzas Armadas, explican que el gobierno haya aceptado ese rol de equilibrista, de árbitro del conflicto de clase. Un ejecutivo que, por ejemplo, está paralizado en el momento de la aplicación por parte de los militares de la "ley de control de armas" en contra del movimiento obrero y que incluso tolera el arresto (y la tortura) de los marinos antigolpistas de Valparaíso (Magasich, 2008). Salvador Allende, fiel hasta la muerte a sus principios y a sus promesas de democratización antimperialista pacífica, intenta hasta las últimas consecuencias mantener equilibrios instables para impedir una ruptura del orden constitucional. En estas condiciones, ninguna vía de escape se presenta con suficiente fuerza para liberar a los "poderes populares constituyentes" de esta relación de dependencia con el Estado y con la estrategia legalista de un gobierno atrapado en un dilema dramático.

Elementos de conclusión. ¿Un proceso revolucionario sin dualidad de poder?

Más allá de su diversidad y de sus contradicciones, el poder popular urbano puede definirse como un "poder en movimiento" en el sentido en que lo entiende el politólogo Sidney Tarrow. Y, como bajo otras latitudes, "no puede ser comprendido sin que sea tomada en cuenta la centralidad de la oposición capital-trabajo, en el seno de las sociedades capitalistas contemporáneas" (Béroud *et al*., 1998). Desde un punto de vista epistemológico, estas políticas del conflicto de gran amplitud subrayan que sería iluso querer segmentar al extremo los conceptos de movimiento popular, movimiento obrero, lucha de clases, acciones colectivas, partidos y procesos revolucionarios, tratando de separar unos para mejor apartar otros. Al contrario, períodos como el de la UP recuerdan la lógica ininterrumpida, aunque diacrónica, de los grandes conflictos sociales *y* políticos. Charles Tilly, a propósito de las revoluciones europeas, ha subrayado que, desde la huelga hasta la constitución de un episodio revolucionario, el camino es tortuoso y que –la mayoría de las veces– ha terminado en violentas derrotas. Según Tilly (2000), en el curso de tales experiencias colectivas excepcionales, conviene distinguir dos etapas fundamentales: la "situación revolucionaria" (*revolutionary situation*) y el "resultado revolucionario" (*revolutionary outcome*). También se debe reconocer el grado de división de la comunidad política y la amplitud de la transferencia de poder en el transcurso de este proceso. Si nos basamos en estos criterios, podemos afirmar que durante la UP decanta una *situación revolucionaria* por el hecho de la importante movilización y división de la sociedad civil, por la profundidad de la crisis del régimen político, así como por el peso de las fracciones de la población que aspiraban a una transformación social radical. Sin embargo, aunque se reúnen estas condiciones, ello no significa mecánicamente un *resultado revolucionario*, es decir, y siempre a partir de la grilla de análisis de Tilly, una ruptura del aparato estatal, la neutralización de las Fuerzas Armadas y una transferencia de poder

a manos de las fuerzas revolucionarias. En esa perspectiva, podemos afirmar que el poder popular y obrero no representan órganos de doble poder en el pleno sentido marxista del término. O, dicho de otro modo, los órganos de poder popular constituyente se quedan en una fase de desarrollo local, la mayor parte del tiempo, en una etapa embrionaria sin llegar a conformar las células de base de la nueva organización política revolucionaria, que vacila en gestarse. Sin embargo, una poderosa tendencia a la autogestión, al control obrero y a la democracia directa existe en Chile durante estos tres años. Estos organismos de poder popular encarnan una posibilidad no advenida del proceso revolucionario del país andino, una bifurcación y un "salto" en devenir. Podemos identificar un potencial autogestionario en marcha en la periferia de las grandes ciudades y, en el curso del último año de la UP, un principio de *dualización de poder* que desemboca, como en la España de la década de 1930 o en otras situaciones revolucionarias latinoamericanas, en la multiplicación de consejos obreros y campesinos.

Como lo ha señalado René Zavaleta Mercado (1974) "los partidos no se iban a los cordones abandonando el poder 'oficial' sino que existían a la vez en el poder oficial y en los cordones". Un punto importante olvidado durante mucho tiempo se sitúa precisamente aquí: más allá de sus divisiones, el conjunto de la izquierda partidaria y amplias fracciones del movimiento popular comparten una *concepción profundamente estatista del cambio social* (Gramsci habla de "estadolatría"). Para la UP, el "Estado de compromiso" no es considerado un obstáculo para su estrategia de transición sino más bien al contrario, como una de sus herramientas fundamentales. Esta "visión estatista" o *estadocentrada* proviene de un conjunto de tradiciones ideológicas y culturales, de percepciones heredadas de una formación sociopolítica que se forjó en el curso de la década de 1920 al servicio de una oligarquía preocupada por el avance de la "cuestión social". A pesar de varios elementos de ruptura, el proyecto de la UP se inscribe, como lo afirman los historiadores Gabriel Salazar y Julio Pinto (1999), en la línea de esos proyectos "nacionalistas-desarrollistas". El sueño

inconcluso de Salvador Allende es intentar combinar esta herencia con un programa de transición al socialismo como prolongación del período anterior, pero sobre todo como su superación gracias a la participación de las clases populares organizadas. Sin embargo, en esas condiciones, los órganos de participación gubernamentales y los poderes populares embrionarios, surgidos desde la base, se encontraron muy pronto maniatados "en la jaula liberal tendida desde 1925 por la Constitución Política" y en una "la crisis terminal del Estado".

Por su parte, las clases dominantes –con la potente ayuda material, financiera e ideológica del gobierno Nixon– logran progresivamente sobreponerse a sus divisiones y tomar consciencia de que el corazón del problema ya se encontraba situado fuera del campo institucional y parlamentario. Casi instintivamente, comprenden que ya no se trata de conservar un pacto social forjado en el marco del Estado de compromiso sino de defender, a cualquier precio y apoyándose en las Fuerzas Armadas, la propiedad privada de los medios de producción y sus intereses de clase. Es precisamente aquí que se sitúa, a lo largo de todo el siglo XX, la "frontera de la democracia" chilena, como lo ha demostrado el politólogo Juan Carlos Gómez (2004).

Se revela así, desde la década de 1930 hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, un *continuum institucional relativo*, acompañado de la presencia combinada de una *discontinuidad social sostenida*, jalonado por luchas sociales explosivas y diferentes dispositivos de represión y control social (De Riz, 1976). Y es también en una trayectoria histórica aún más vasta que se inscriben los poderes populares constituyentes de la UP. Al intentar conectarlos con los diversos momentos de independencia de clase y de autoorganización colectiva de la historia social del país, nos reenvían a otras experiencias como, por ejemplo, la Asamblea Obrera de la Alimentación Nacional de 1918-1919 o incluso las "sociedades de resistencia" de fines del siglo XIX. También nos habla del Chile actual, de las "fisuras" de su modelo neoliberal "maduro" (Gaudichaud, 2015) y de la reciente rebelión

popular del 2019 que hacen de nuevo temblar las grandes alamedas, a 50 años de la victoria de Salvador Allende.

Referencias

Arendt, H. (1988). *Sobre la revolución.* Madrid: Alianza editorial.

Bensaïd, D. (1995). *La discordance des temps: essais sur les crises, les classes, l'histoire*. París: Les Éditions de la Passion.

Béroud, S., R. Mouriaux y Vakaloulis. (1988). *Le mouvement social en France.* París: La Dispute.

Cofré, B. (2007). *Campamento Nueva La Habana: el MIR y el movimiento de pobladores 1970-1973.* Concepción, Chile: Escaparate.

Cancino, H. (1988). *La problemática del Poder Popular en el proceso de la vía chilena al socialismo 1970-1973.* Aarhus: Åarhus Press.

Cruz Salas, L. (1999). Estado, partidos y movimiento obrero, en L. Vitale (ed.). *Para recuperar la memoria histórica. Frei, Allende, Pinochet*. Chile: Ed. Chile América-CESOC, 410-411.

Dechezelles, S. y S. Luck, (dirs.). (2011). *Voix de la rue ou voix des urnes ? Mouvements sociaux et partis politiques*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes.

De Riz, L. (1976). La lucha de clases en la sociedad chilena: hipótesis para su interpretación. *Revista Mexicana de Sociología 38*(1), 127-149.

Dobry, M. (2009). Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles. *Presses de Sciences Po*.

Espinosa, J. G. y A. S. Zimbalist. (1978). Economic Democracy: *Workers' Participation. Chilean Industry*, *1970-1973.* Academic Press.

Gaudichaud, F. (2004). *Cordones industriales y poder popular. Testimonios sobre el movimiento social urbano (197-1973).* Santiago: Lom Ediciones.

Gaudichaud, F. (2015). Las fisuras del neoliberalismo maduro chileno. CLACSO. www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/contador/sumar_pdf.php?id_libro=1053.

Gaudichaud, F. (2016). *Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo*. Santiago: Lom Ediciones.

Gómez, J. C. (2004). *La frontera de la democracia. El derecho de propiedad en Chile. 1925-1973*. Santiago: Lom Ediciones.

Kornbluth, P. (2003). *The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability*. Nueva York: The New Press.

Magasich, J. (2008). *Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973*. Santiago: Lom Ediciones.

Salazar, G. y J. Pinto. (1999). *Historia contemporánea de Chile.* Chile, Tomo 1. Santiago: Lom Ediciones.

Smirnow, G. (1979). The Revolution Disarmed: Chile, 1970-1973. *Monthly Review Press.*

Tarrow, S. y C. Tilly. (2015). Politique(s) du conflit. *Presses de SciencesPo*.

Tilly, C. (2000). *Las revoluciones europeas. 1492-1992.* Barcelona: Crítica.

Winn, P. (2013). *La revolución chilena.* Santiago: Lom Ediciones.

Zavaleta Mercado, R. (1974). *El poder dual en América latina.* México: Siglo XXI.

La Historia es nuestra y la hacen los Pueblos

Ximena de la Barra

La unión de fuerzas progresistas

La participación de Salvador Allende (1939-1942) en el gabinete del Frente Popular –coalición liderada por el Partido Radical (PR) con el concurso de socialistas y comunistas– forjó en Allende la firme convicción de que la unión de las fuerzas progresistas había sido imprescindible para avanzar hacia una cultura igualitaria y desplazar a los partidos oligárquicos que habían gobernado Chile desde su independencia en 1810. En 1952, el Partido Socialista (PS) lo proclamó candidato presidencial aglutinando otras fuerzas de izquierda, incluido el Partido Comunista (PC), en ese momento en la clandestinidad, conformando el Frente del Pueblo, que no tuvo éxito.

El Frente de Acción Popular (FRAP), la alianza comunista-socialista encabezada por Allende se presentó infructuosamente a las elecciones presidenciales en 1958 y 1964, con un Programa similar al que años más tarde se llamó la *Vía Chilena al Socialismo*. Estados Unidos (EE. UU.) financió una feroz campaña del terror para impedir su

triunfo, resultando ganadora en 1964 la Democracia Cristiana (DC), con su programa reformista "Revolución en Libertad" y su dependencia de EE. UU. La Revolución Cubana ya había triunfado y Washington no quería el mal ejemplo de un gobierno socialista elegido en las urnas. Aun perdida esta elección, la alianza comunista-socialista produjo un logro trascendental, la unión de las fuerzas sindicales en una única central de los trabajadores organizados.

El fracaso de la gestión de la DC y su escisión con la creación del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), cambió la correlación de fuerzas, dando paso a la formación de la Unidad Popular (UP) y a la última y exitosa candidatura de Salvador Allende. La campaña movilizó a las masas en torno al *Programa de la UP* y a sus *Primeras 40 Medidas.* No había quien no tuviera un ejemplar resumido, en versión escrita o en *comic* para que no hubiera quien no lo entendiera. Luis Advis y Sergio Ortega crearon una versión musical, *El Canto al Programa*, interpretada por el popular grupo Inti Illimani, que el pueblo cantaba junto con *Venceremos* y *La Canción del Poder Popular* en un ambiente festivo de eventos culturales masivos.

Además de responder a las necesidades básicas de la población, como lo habían hecho anteriores frentes populares, este Programa se dirigía también a las raíces de los problemas: el capitalismo, el imperialismo, los monopolios, los recursos básicos en manos extranjeras y la concentración de la propiedad de la tierra. La clase obrera estaba unida y apoyada por la pequeña burguesía. No había centro de trabajo o población donde no hubiera un Comité de la UP que llevara el liderazgo.

La nueva Estrategia de Desarrollo produjo logros excepcionales en tan solo mil días aunque fueron innumerables las iniciativas que quedaron truncadas por la negativa parlamentaria de la oposición o por falta de aprobación presupuestaria.

Socialismo y democracia. La Unidad Popular

Allende entendía al socialismo como una forma perfeccionada de la democracia, principio inspirador de la *Vía chilena hacia el socialismo.* Resignificaba el concepto de democracia no como instrumento sino como armazón o estructura de la vida nacional. "La democracia política es infecunda en la hora actual, la democracia económica y social es un imperativo" (1943, p. 47).

> La revolución latinoamericana... deberá ser, además de anti-imperialista y anti-feudal, democrática, a fin de que la sientan, compartan y comprendan las masas ciudadanas. Deberá ser profundamente humana, al preocuparse de la realidad de la vida opaca, gris, sin destino ni juventud del hombre común latinoamericano, y darle un futuro de trabajo, salud y educación (1960, p. 283).

La UP reconocía que el socialismo no significaba ruptura de la democracia y del Estado de derecho, sino su plena realización al no renunciar a su carácter revolucionario, poniéndola al servicio de las masas y de la lucha de clases.

> Las transformaciones revolucionarias que el país necesita solo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente. El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas libertades y garantías democráticas, por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de alerta y combatir sin tregua (1960, p. 272).
>
> ...el capitalismo es por esencia anti-humanista, desde el momento en que esencialmente descansa en la explotación del hombre por el hombre... Nosotros creemos que el socialismo es humanista... desde el momento que libera al hombre de la alienación... Pondremos indiscutiblemente como preocupación esencial el hombre y la economía al servicio del hombre (Allende, 1971a).
>
> Democracia, para que el pueblo –a través de sus partidos y organizaciones sindicales– tenga acceso a los niveles de nuestra existencia

> política, social, económica y administrativa. Democracia para que el pueblo sepa que no queremos su voto cada seis años... Queremos más democracia, para que coexista el respeto a todas las ideas (Allende, 1971b, p. 269).

En su segundo mensaje ante el Congreso Pleno, Allende reiteró este principio fundamental.

> La auténtica democracia... no puede limitarse a la periódica entrega de un mandato representativo. La democracia se vive, no se delega. Hacer vivir la democracia significa imponer las libertades sociales (1972, p. xxiii).
>
> Si en lo económico tenemos como tarea la de realizar una política de guerra, debemos tener conciencia de que en el campo político hay que afianzar el poder de los trabajadores. Esta es la mayor garantía de la democracia, de la auténtica libertad y del pluralismo. Es garantía de estabilidad y progreso para Chile. Es garantía de paz (1972b).

Al apelar a la democracia participativa, la UP resulta ser precursora de las pocas democracias directas que se han intentado en el socialismo del siglo XXI, donde el poder constituyente no abandona la escena después de haber instituido el poder, sino que se mantiene activo, acompañando y controlando al poder instituido, tomando decisiones y vigilando que estas se pongan en práctica.

Triunfo en las urnas

El 4 de septiembre de 1970, la izquierda marxista, los socialdemócratas, los demócrata cristianos por el socialismo, y sectores progresistas independientes, unieron fuerzas alrededor del Programa de la UP, superando a las dos fuerzas contendientes, la DC y el Partido Nacional (PN). El triunfo de Allende representaba la primera elección libre de un marxista comprometido con una transformación fundamental del orden vigente dentro del marco legal existente. Si bien

Allende había sido el candidato más votado con 36,6% de votos, no equiparaba la suma de la de sus contrincantes que no tardaron en aliarse entre sí y con el gobierno estadounidense, formando una poderosísima fuerza contrarrevolucionaria.

En su Discurso de la Victoria desde los balcones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Allende afirmó que el triunfo era de los trabajadores, haciendo un llamado a los Comités de Unidad Popular a mantenerse vigilantes respecto a las tareas para poner en marcha al país y hacer cumplir el Programa. Concluyó diciendo: "A la lealtad de Uds., responderé con la lealtad de un gobernante del pueblo; con la lealtad del Compañero Presidente" (1970, p. 60).

De acuerdo con la Constitución, la candidatura ganadora debía ser ratificada por el Congreso dominado por la oposición, que aunque supuestamente democrática, se tornó golpista gozando de amplio financiamiento por parte de EE. UU. Los intereses de las transnacionales estadounidenses estaban en juego por lo que el presidente Nixon ordenó a la Agencia Central de Inteligencia impedir la ratificación de Allende. Esta empleó su arsenal habitual, incluida la guerra psicológica, la presión económico-financiera, los sobornos, e incluso orquestó un primer golpe de Estado.

Como las Fuerzas Armadas se habían mantenido neutrales durante el período electoral, el blanco elegido fue el comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, con la intención de secuestrarlo, responsabilizar a la izquierda y provocar un golpe militar. La reacción del General, firme defensor de la función de los militares como garantes de la Constitución, lo hizo intentar defenderse, por lo que fue asesinado.

Chile no tenía una historia vinculada al asesinato político, por lo que el repudio a esta acción abominable permeó al Parlamento, que decidió, el 4 de noviembre de 1970, ratificar el triunfo de Allende, no sin antes imponer un Estatuto de Garantías Constitucionales. En su primer acto de masas, Allende reconoció este sacrificio heroico, como la circunstancia que salvó a Chile de una guerra civil. Esto no significó que disminuyeran los afanes antidemocráticos ni que

la clase trabajadora se consolidara como fuerza dominante. La UP recurrió entonces al fortalecimiento de la conciencia de clase y a la unidad de los trabajadores, así como también a forjar una coexistencia con los sectores de clase media dentro de la oposición.

Los trabajadores

Superado el escollo parlamentario, y con cuatro ministros obreros en su gabinete, en su Discurso Inaugural, Allende dijo:

> De los trabajadores es la victoria.
>
> Del pueblo sufrido que soportó por siglo y medio, bajo el nombre de Independencia, la explotación de una clase dominante incapaz de asegurar el progreso y de hecho desatendida de él.
>
> La verdad, lo sabemos todos, es que el atraso, el hambre, la ignorancia de nuestro pueblo y de todos los pueblos del tercer mundo existen y persisten porque resultan lucrativos para unos pocos privilegiados.
>
> Pero ha llegado, por fin, el día de decir basta.
>
> ¡Basta a la explotación económica!
>
> ¡Basta a la desigualdad social!
>
> ¡Basta a la opresión política! (1970b, pp. 25-26)

La Central Única de Trabajadores (CUT) fue legalmente reconocida tras años de desprecio y persecución. También se otorgó personalidad jurídica y reconocimiento legal a las organizaciones gremiales de empleados públicos y particulares y a múltiples organizaciones sindicales industriales y campesinas.

La fuerza real del gobierno de Salvador Allende se encontraba en el apoyo de los trabajadores donde la correlación de fuerzas a su favor en la CUT, cerca del 70% de los votos, eran muy superiores a las del proceso electoral. Lo mismo no ocurría en el conjunto de la sociedad, especialmente en los sectores medios urbanos, representados

mayoritariamente por la DC. De las contradicciones entre la vanguardia anticapitalista y las fuerzas contrarrevolucionarias emergía el potencial de un conflicto armado (Garcés, 2013). La necesidad de negociar para ampliar la base de apoyo se transformó en la única alternativa viable para poder concretar el Programa.

Celebrando el 1º de Mayo de 1971, Allende se refirió a la responsabilidad de los trabajadores en abrir camino a las profundas transformaciones estructurales conducentes al socialismo. Llamó a fortalecer, ampliar y consolidar el poder popular, ganando la batalla de la producción, consolidando a las organizaciones populares y su unidad:

> Los que viven de su trabajo tienen hoy en sus manos la dirección política del Estado. Suprema responsabilidad. La construcción del nuevo régimen social, encuentra en la base, en el pueblo, su actor y su juez. Al Estado corresponde orientar, organizar y dirigir, pero de ninguna manera reemplazar la voluntad de los trabajadores. Tanto en lo económico como en lo político los propios trabajadores deben detentar el poder de decidir. Conseguirlo será el triunfo de la revolución (1971d, p. 102).

Nueva estrategia de desarrollo

La planificación del desarrollo no había sido considerada necesaria por parte del Estado ya que era la iniciativa privada la que movía al país con criterios de rentabilidad. Los cambios de orientación de la UP eran tan profundos y afectaban de tal modo al funcionamiento del sistema económico que actuar de acuerdo a un plan participativo y descentralizado, se tornó imprescindible. Se extendió la planificación regional a todo el territorio, vinculándolo a la planificación sectorial y al desarrollo científico y tecnológico.

Solo se lograrían resultados en lo económico, social y cultural controlando una parte importante de los excedentes generados. Para

ello se constituyó una fuerte área de propiedad social y mixta con participación de los trabajadores en su gestión.

Una parte de los excedentes serían destinados a la satisfacción de las necesidades vitales de la mayoría. En la primera fase, la estrategia consistía en disminuir las disparidades, incorporando masivamente a la población a los procesos de cambio por la vía de la participación popular, de un gran aumento del empleo y de un sustantivo aumento real de sueldos y salarios de los estratos de menores ingresos. Asimismo, se cambiaría sustancialmente la composición sectorial de la producción para responder a la nueva estructura de la demanda y a la necesidad de infraestructura. El aumento del empleo y de la productividad produciría el crecimiento. En una segunda fase, otra parte del excedente pondría en marcha la totalidad de la capacidad instalada subutilizada, y se emprenderían nuevas estrategias de desarrollo, e inversión en la expansión de la economía.

Área de Propiedad Social de la economía

Entre las tareas inmediatas, se planteó la construcción del área de propiedad social (APS) de la economía con el objetivo de poder reemplazar el modo de producción capitalista mediante un cambio cualitativo de las relaciones de propiedad y de producción. A las empresas estatales que ya existían se agregó una lista de empresas estratégicas para el buen funcionamiento de la economía. Integrar un centro productivo al área social representaba un hecho absolutamente distinto a un simple cambio de patrón. Se iniciaba una transformación radical en las relaciones de trabajo y en el modelo organizativo, dignificando al hombre de trabajo y su labor creadora. La nacionalización solo entrega el control de la propiedad, en cambio, la socialización traspasaba a los trabajadores y a la sociedad la capacidad de utilizarlos en correspondencia a los intereses de la mayoría.

En su Primer Mensaje ante el Congreso Pleno, el Presidente afirmó:

> Chile tiene ahora en el Gobierno una nueva fuerza política cuya función social es dar respaldo no a la clase dominante tradicional, sino a las grandes mayorías. A este cambio en la estructura de poder debe corresponder, necesariamente, una profunda transformación en el orden socioeconómico que el parlamento está llamado a institucionalizar (1971d, pp. 77-78).

> la construcción del área de propiedad social tiene un significado humano, político y económico. Al incorporar grandes sectores del aparato productor a un sistema de propiedad colectiva, se pone fin a la explotación del trabajador, se crea un hondo sentimiento de solidaridad, se permite que el trabajo y el esfuerzo de cada uno formen parte del esfuerzo colectivo (1971d, p. 95).

La ampliación del área social o bien se logró sobre la base de negociaciones; de la apertura de un poder comprador estatal de acciones; y de intervenciones o requisiciones en caso de infracciones legales o de la necesidad de terminar con monopolios, fueran nacionales o foráneos. Se utilizaron leyes tan antiguas como las de la breve República Socialista de 1932, que así lo permitían. Además, se estimuló con incentivos a pequeños y medianos empresarios a aumentar la producción y la inversión.

Para dirigirla, se constituyó un Comité Económico de Ministros funcionando de acuerdo a un Plan, democrático en gestación, central en su formulación y descentralizado en su ejecución, obligatorio para los sectores social y mixto y orientador para el sector privado. Contra todos los vaticinios de la oposición, se logró una expansión de la producción, el empleo y del consumo de las clases trabajadoras, sobrepasando las metas de redistribución de ingreso y de gasto social. No así en la inversión donde se produjo un virtual estancamiento.

Creció el apoyo electoral a la UP en las elecciones locales de abril de 1971 pasando del 36 al 49% en tan solo cinco meses. La meta se trasladó entonces a cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso en las elecciones parlamentarias de 1973 para poder aprobar una Nueva Constitución que hiciera posible los proyectos revolucionarios.

Nacionalización del cobre

Trascendental para la historia de Chile y para la construcción del APS de la economía fue recuperar la propiedad del cobre. La DC la había iniciado en el período anterior con los fracasados procesos de *Chilenización del Cobre* y de *Nacionalización Pactada*. Radomiro Tomic, el derrotado contendor de Allende, se desligó de las limitadas propuestas de la DC y también la incluyó en su programa de campaña. Allende la mantuvo en el programa de todas sus candidaturas.

A pocos días del inicio de su mandato, en diciembre de 1970, el Presidente envió el Proyecto de Nacionalización del Cobre al Congreso. El mensaje que lo acompañaba denunciaba que las cuatro grandes empresas estadounidenses que habían explotado en Chile estas riquezas, habían obtenido de ellas en los últimos 60 años, ganancias equivalentes al patrimonio nacional logrado en cuatrocientos años. Además, "afirmaba enfáticamente que por tratarse de la principal riqueza básica del país y porque su nacionalización daba paso a la "Segunda Independencia Nacional", la Nacionalización del Cobre debía estar consagrada no en una simple ley, sino en la Constitución Chilena" (Caputo/Galarce, 2020). "Quienes administran esta riqueza y quienes la extraen de la tierra, tienen en sus manos no solo su propio destino o su propio bienestar, sino que el destino y el bienestar de todos los chilenos" (Allende, 1971d, p. 95).

Tras un prolongado debate, el 11 de julio de 1971, la Reforma Constitucional sobre la Nacionalización del Cobre fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Aunque la oposición estaba consciente que se estaba dando un espaldarazo a Allende, hubo de reconocer que la medida contaba con una gran apoyo, incluyendo en sectores de la DC. Ese mismo día, el Presidente se dirigió al pueblo desde la histórica ciudad de Rancagua en cuyas inmediaciones se encuentra el yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo.

> Los trabajadores del cobre no serán dueños de las minas para beneficio exclusivo de ellos, son dueños de las minas en cuanto las minas

> les pertenecen al pueblo, y los trabajadores del cobre forman parte del pueblo, y los trabajadores del cobre tienen que entender, lo saben y lo van a vivir, que el esfuerzo de ellos estará destinado a hacer posible que cambie la vida del niño y la mujer chilena, que el esfuerzo de ellos y el cobre estarán destinados al progreso de la patria, y al sudar trabajando el fondo de la mina están haciéndolo por un Chile distinto, por una sociedad nueva, por el camino que abrimos hacia el socialismo.
>
> Compañeros mineros, trabajadores duros del rojo metal: una vez más debo recordarles que *el cobre es el sueldo de Chile, así como la tierra es su pan* (1971e, p. 103).

Al determinar las indemnizaciones a las empresas estadounidenses, a modo de reparación histórica y de acuerdo con la norma constitucional aprobada, se dedujeron las utilidades más allá de las normales desde 1955, año en que se había establecido el Nuevo Trato del Cobre de Minería. Las apelaciones de las compañías estadounidenses no se dejaron esperar, pero fueron rechazadas por el Tribunal Especial del Cobre.

La Administración Nixon orquestó un boicot internacional e incluso provocó una baja sustancial en los precios del cobre al poner en el mercado sus reservas estratégicas. A esto se sumó el éxodo de los técnicos extranjeros; el boicot, huelgas y sabotajes de supervisores nacionales que quisieron mantener sus privilegios; y las infundadas acusaciones de mala administración desde la derecha. A pesar de todo ello, se logró un aumento de la producción. David Silberman, gerente general de Chuquicamata, hasta ahora "desaparecido" por la dictadura, como tantos otros, lo ilustraba diciendo "la conclusión es una sola: cifras más, cifras menos, problemas más, problemas menos, los chilenos se la han podido. La nacionalización es un éxito, pese a quien pese" (Lawner *et al.*, 2008, p. 405).

Esta gesta heroica se vio truncada por la dictadura y por todos los gobiernos de la posdictadura que entre tantos otros crímenes, contraviniendo a la Resolución de Naciones Unidas de 1962 respecto a

la soberanía permanente sobre los recursos naturales, y a contracorriente de los intereses del pueblo chileno, desnacionalizaron la mayor parte del "sueldo de Chile" (Caputo y Galarce, 2008, pp. 151-179).

Profundización de la Reforma Agraria

Para terminar con el latifundio y lograr un cambio en las relaciones de producción, se profundizó la Ley de Reforma Agraria del gobierno anterior. Se respetaría la propiedad privada de medianos y pequeños terratenientes y se los instaría a participar en los planes nacionales de producción. Se crearon Centros de Reforma Agraria o empresas de propiedad del pueblo que agrupaba contingentes de trabajadores que se organizaban para administrarlo ajustándose al Plan Agropecuario del Gobierno. Para resolver el problema del minifundio se impulsó su integración en formas colectivas de producción. Se reconocieron, en consecuencia, tres formas de propiedad: estatal, cooperativa y privada.

Allende explicó a los campesinos que la reforma agraria no era solo el cambio de la propiedad de la tierra sino, además, la dignificación del campesino, elevando sus condiciones de vida y su capacitación. "Reforma Agraria es tierra, más crédito, semillas, abono, planificación, mecanización, sindicación de la tierra. Es educación y salud" (1971f, p. 124).

En su tercer mensaje presidencial, Allende informó que ya se habían expropiado casi la totalidad de los latifundios y fundos de más de 80 ha. de riego básico pasando a manos de los campesinos. Igualmente se habían constituido un número considerable de centros de reforma agraria o de producción, cooperativas campesinas, comunas agrarias, consejos campesinos y consejos comunales. Planteó la necesidad de elaborar una nueva ley de reforma agraria bajando a 40 ha el límite de inexpropiabilidad (1973, p. 187). Se duplicó la fuerza sindical campesina, y se devolvió a las comunidades indígenas parte de las tierras que le habían sido usurpadas. Uno de los principales

problemas fue la dificultad de aumentar la producción al mismo ritmo que el aumento de la demanda (Chonchol, 2008, p. 188).

El acoso permanente

El gran desafío consistía en avanzar hacia el socialismo siendo que solo se había conquistado el Poder Ejecutivo. La oposición parlamentaria usaba todos los medios posibles para frenar el Programa de la UP, incluyendo acusaciones constitucionales contra los miembros del gabinete y bloqueo de los presupuestos.

Ante el aumento del poder electoral de la UP y su restricto apego al régimen legal, la alianza DC-PN intensificó la política confrontacional y comenzó la conspiración en busca de una salida militar. Entre otras acciones, organizaron corridas bancarias; mercado ilegal; contrabando de dólares; paralización de industrias; cese de importación de materias primas y repuestos; desinversión empresarial; especulación; huelgas de transportistas para promover inflación y desabastecimiento; y ataques mediáticos liderados por *El Mercurio*. Todas apoyadas desde Washington con financiamiento; operación de cerco económico; embargo de bienes; obstaculización de la renegociación de la deuda externa, etc.

Intentando impedir la crisis preservando el camino democrático, hubo que recurrir repetidamente al Tribunal Constitucional y se intentaron infructuosamente negociaciones, con el sector moderado de la DC. En dos oportunidades Allende incorporó al gabinete a militares que hasta el momento se mantenían neutrales y constitucionalistas.

Las movilizaciones y confrontaciones culminaron primero con un paro patronal en octubre de 1972 superado gracias a la tenacidad de los trabajadores que reemplazaron a sus jefes, hicieron funcional las fábricas y se ocuparon del abastecimiento básico. Después, con un intento de golpe el 29 de junio de 1973. Por instrucciones de Allende, el pueblo, desarmado, se mantuvo concentrado y alerta en

tanto que los militares leales encabezados por el general Prats, lo sofocaron. A este lo sucede el general Pinochet quien negocia con el gobierno y la CUT un supuesto Plan de Defensa del Gobierno. En la práctica, ni se arresta a los militares sediciosos, ni se suspenden los allanamientos de fábricas con lo que los militares pasan a llevar a la autoridad civil.

Tampoco faltaron discrepancias en el seno de la UP. Ante la oposición atrincherada en el Parlamento y el Poder Judicial, el PS enarbolaba la bandera de la necesidad de destruir la institucionalidad vigente, a la que se unió la posición del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que no formaba parte de la UP. Allende se opuso vigorosamente argumentando que el poder de la burguesía no se alojaba en las instituciones sino en su poder económico, y que las instituciones deben ser modificadas pero no destruidas.

Los trabajadores, militantes y sindicalistas pensaban que había que proteger al Gobierno como conquista del pueblo, pero sobre todo que había que defender y profundizar el proceso de transformación revolucionaria con las herramientas de las que disponían: ocupación de fábricas, manifestaciones en la calle, autodefensa de las poblaciones, tentativas de control obrero y de abastecimiento directo, etc. El PC apoyaba a los órganos de poder popular como un poder integrado al gobierno, antagonizando al MIR que lo consideraba un poder independiente y alternativo al "Estado Burgués".

A pesar del triunfo en las elecciones parlamentarias en marzo de 1973, con 43,4% de los votos, la UP estaba cada vez más debilitada por su división interna. Allende, con el apoyo del PC y del PR eran partidarios de "consolidar avanzando" el proceso de transformaciones dentro del marco legal, evitando precipitar una guerra civil.

> El PS era tan radical y maximalista que se negaba a apoyar al Presidente socialista cuando más lo necesitaba. No apreciaban la brillantez táctica de moderación de Allende, y lo acusaban de ser un reformista conciliador. No aceptaban los ritmos políticos que el proceso demandaba, exigiendo "avanzar sin transar" con políticas pú-

> blicas que iban más allá de las capacidades legales y políticas de la UP y con movilizaciones sociales que aumentaban la polarización. Tampoco aceptaban la ampliación de la base política abriéndose al ala izquierda de la DC, fundamentalmente seguidores de la Teología de la Liberación. Por el contrario, el PS avalaba las prácticas violentas o ilegales del MIR, que provocaban a la derecha (de la Barra, 2015).

Reforma constitucional

Allende anunció su plan para una reforma constitucional de acuerdo a los mecanismos establecidos y a la voluntad popular. Los partidos de la UP no se pusieron de acuerdo. Se trataba de institucionalizar la participación de los trabajadores en todos los niveles de toma de decisión y aumentar su nivel de control sobre el poder y sobre los excedentes económicos. Buscaba apoyar al gobierno en su base de clase en lugar de en su limitada base electoral. Plenamente consciente de los riesgos que este cambio implicaba, se preocupó de explicarlo incansablemente diciendo:

> El Congreso elabora la institucionalidad legal, y así regula el orden social dentro del cual se arraiga; por eso durante más de un siglo ha sido más sensible a los intereses de los poderosos que al sufrimiento del pueblo.
>
> Someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución de fundamento liberal, por una Constitución de orientación socialista. Y el sistema bicameral existente por una Cámara Única.
>
> El pueblo de Chile está conquistando el poder político sin verse obligado a usar las armas. Avanza en el camino de su liberación social sin haber debido combatir contra un régimen despótico o dictatorial, sino contra las limitaciones de una democracia liberal.
>
> Es mi obligación advertir que un peligro puede amenazar la nítida trayectoria de nuestra emancipación... este peligro es la violencia contra la decisión del pueblo (1971d, pp. 77-88).

> El Gobierno ha elaborado un anteproyecto de Carta Fundamental. Será sometido a una amplísima discusión nacional (1973, p. 207).

Circuló la propuesta entre los afiliados a la CUT y los partidos políticos de la UP antes de su discusión en el Parlamento. Ante el fracaso de los intentos de negociar con el ala más moderada de la DC sobre la relativa importancia que el Estado concedería a la propiedad estatal, privada y mixta, Allende optó por someter el proyecto directamente al pueblo chileno para su aprobación en un plebiscito el 11 de septiembre de 1973, y así lo comunicó a las Fuerzas Armadas (Garcés, 2013, pp. 361-365; Amorós, 2013, pp. 420-422, 482-487). Estas ya habían planificado un nuevo golpe y decidieron acelerarlo para evitar esta acción presidencial.

"El vacío en la estrategia política-militar de la UP, redujo progresivamente su capacidad de defensa" (Garcés 2013, p. 15). El ataque al Palacio de Gobierno con el apoyo entusiasta de Washington, resultó en la muerte del Presidente, en la destrucción del Estado que Allende había defendido con todas sus energías, y en el nacimiento de un nuevo Estado dictatorial liderado por el general traidor, Augusto Pinochet, basado en el terror, la tortura, y el desmantelamiento de todo programa revolucionario.

Irónicamente, Pinochet, sin consulta ni oposición alguna, proclamó la Constitución de 1980, vigente hasta el día de hoy. Los gobiernos "democráticos" que lo sucedieron a partir de 1990 nunca tuvieron la intención de cambiarla a favor del pueblo. Aun hoy, se busca apaciguar al pueblo chileno con una nueva fórmula para el cambio constitucional; esta no resulta ser más que un nuevo engaño antidemocrático iniciado por la derecha en el poder ejecutivo y secundado por la ex-Concertación desde el parlamento. El pueblo chileno se encuentra en un dilema en que no puede permitirse cumplir los deseos de la derecha rechazando el plebiscito, pero tampoco puede permitirse un cambio para que no cambie nada.

Conclusión

La fuerza de la legalidad, usada hasta entonces sistemáticamente para combatir al movimiento popular, se había puesto de parte del pueblo. La transferencia del poder económico hacia las organizaciones populares habían abierto el camino de la socialización del poder político. A pesar de la coyuntura económica adversa, creció el apoyo al Gobierno y a la *Vía Chilena al Socialismo* amparada por la Constitución.

Retrospectivamente, los excepcionales logros alcanzados en tan solo mil días parecen inimaginables aunque fueron innumerables las iniciativas que quedaron truncadas por la negativa parlamentaria de la oposición, como la nueva Constitución, el nuevo Régimen Fiscal, o la Reforma al Poder Judicial. Tampoco se pudo cumplir con todos los planes sociales por falta de aprobación presupuestaria. El logro más trascendental, de toda nuestra historia, fue la Nacionalización del Cobre.

Dicho en las propias palabras del Compañero Presidente:

> El mundo ve en nosotros la realización simultánea de algunas de las más trascendentales aspiraciones que interesan a la civilización actual: la lucha de un pueblo por su dignidad, por liberarse del dominio capitalista extranjero, por acabar con la opresión social de la clase dominante, por avanzar hacia el socialismo con libertades pluralistas y tolerancia de ideas y credos. Es el esfuerzo de un pueblo por dominar, con su conciencia y organización, la violencia interna y las agresiones externas.
>
> Chile está aportando a la solución de los problemas contemporáneos el testimonio práctico del diálogo y del trabajo conjunto de cristianos, marxistas y laicos para edificar un nuevo régimen. Ha contribuido a la historia política con la instalación, por la vía electoral, de un Gobierno Revolucionario de las características del nuestro, que ejerce su poder dentro de los marcos constitucionales. Hemos reforzado las reivindicaciones del Tercer Mundo con la doctrina jurídica que dispone la deducción, con efecto retroactivo, de la rentabilidad

> excesiva obtenida en la explotación de las riquezas básicas. Aportes que hieren, en lo más sensible, los intereses ideológicos y económicos del imperialismo. De ahí la proyección internacional de nuestro proceso. De ahí la persistencia y dureza con que se nos ataca desde dentro y desde fuera (1973, p. 184-185).

Solo nos queda la fuerza del pueblo chileno y el ejemplo de Allende y la UP que hasta hoy iluminan a los movimientos progresistas en el mundo. El legado histórico de Allende es el de un hombre que luchó junto al pueblo, y que no lo abandonó jamás, así como tampoco abandonó sus compromisos con el mandato popular. Sus últimas palabras en La Moneda en llamas lo atestiguan.

> Pagaré con mi vida la lealtad al pueblo... Trabajadores de mi patria, siempre estaré junto a ustedes.... *La historia es nuestra y la hacen los pueblos* (1973b, pp. 396-397).

Referencias

Allende, (1970b, 5 de noviembre). Del Pueblo es la Victoria en Ministerio del Poder Popular, Venezuela (ed.). *Salvador Allende, La Vía Chilena al Socialismo,* Colección Palabras Esenciales. http://biblioteca.vtv.gob.ve/greenstone/collect/document/index/assoc/HASH01f8.dir/doc.pdf

Allende, S. (1971a, marzo). Operación Verdad, Encuentro con la Prensa. *Marxists Internet Archive*. https://www.marxists.org/espanol/allende/1971/marzobis.htm

Allende, S. (1972, 21 de mayo). *Mensaje del Presidente Allende Ante el Congreso Pleno.* Talleres Gráficos Servicio de Prisiones.

Allende, S. (1989) [1970, 5 de noviembre]. Discurso de la Victoria en P. Quiroga (ed.). *Obras escogidas (1970-1973)*. Barcelona: Editorial Crítica.

Allende, S. (1989) [1971c, 1 de mayo]. El Futuro de la Revolución está en manos de los Trabajadores en P. Quiroga (ed.). *Obras escogidas (1970-1973)*. Barcelona: Editorial Crítica.

Allende, S. (1989). [1971d, 21 de mayo]. Primer Mensaje del Presidente Allende ante el Congreso Pleno en P. Quiroga (ed.). *Obras escogidas (1970-1973)*. Barcelona: Editorial Crítica.

Allende, S. (1989) [1971e, 11 de julio]. En el Día de la Nacionalización del Cobre en P. Quiroga (ed.). *Obras escogidas (1970-1973)*. Barcelona: Editorial Crítica.

Allende, S. (1989) [1971f, agosto]. Las Áreas de Propiedad Agrícola en P. Quiroga (ed.). *Obras escogidas (1970-1973).* Barcelona: Editorial Crítica.

Allende, S. (1989) [1973, 21 de mayo]. Tercer Mensaje Presidencial en P. Quiroga (ed.). *Obras escogidas (1970-1973).* Barcelona: Editorial Crítica.

Allende, S. (1989) [1973b, 11 de septiembre]. Las últimas palabras en P. Quiroga (ed.). *Obras escogidas (1970-1973).* Barcelona: Editorial Crítica.

Allende, S. (1992) [1972b, 3 de noviembre]. Cuenta al pueblo al cumplirse dos años de Gobierno en G. Martner (comp.). *Salvador Allende Obras Escogidas.* Santiago: Centro Estudios Políticos Simón Bolívar y Fundación Salvador Allende.

Allende, S. (1993). *Mi Propuesta a los Chilenos* (texto póstumo). Santiago: Centro Estudios Políticos Simón Bolívar y Fundación Salvador Allende Editores.

Allende, S. (2008) [1943, 25 de octubre]. Discurso de Homenaje al Triunfo del Frente Popular en F. Modak (coord.). *Salvador Allende, Pensamiento y acción,* CLACSO. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/modak/

Allende, S. (2008) [1960, 27 de julio]. Cuba y la revolución latinoamericana en F. Modak (coord.). *Salvador Allende, Pensamiento y acción,* CLACSO. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/modak/

Allende, S. (2008) [1971b, 30 de agosto]. América Latina en busca de un Nuevo Proyecto en F. Modak (coord.). *Salvador Allende, Pensamiento y acción.* CLACSO. http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/modak/

Amorós, M. (2013). *Allende La Biografía.* España: Ediciones B.S.A.

Caputo, O. y G. Galarce. (2008). La Nacionalización del Cobre realizada por Salvador Allende y su desnacionalización en Dictadura y en los Gobiernos de la Concertación en M. Lawner *et al.* (coord.). *Salvador Allende, Presencia en la Ausencia.* Santiago: Lom Ediciones.

Caputo, O. y G. Galarce. (2020, 13 de julio). A los 49 años de la Nacionalización del Cobre, *Le Monde Diplomatique, Edición Chilena.* https://www.lemondediplomatique.cl/a-los-49-anos-de-la-nacionalizacion-del-cobre-por-orlando-caputo-y-graciela.html

Chonchol, J. (2008). Profundización de la Reforma Agraria en M. Lawner *et al.* (coord.). *Salvador Allende, Presencia en la Ausencia*. Santiago: Lom Ediciones.

Corvalán, L. (2003). *El Gobierno de Salvador Allende.* Santiago: LOM Ediciones.

de la Barra, X. (2015, 26 de julio). Allende Vive: El Socialismo Chileno ha Dejado de Existir. *Crónica Popular,* 243. https://www.cronicapopular.es/2015/09/allende-vive-el-socialismo-chileno-ha-dejado-de-existir/

Garcés, J. (2013). *Allende y la Experiencia Chilena.* España: Siglo XXI.

Gaudichaud, F. (2016). *Chile 1970-1973. Mil Días que Estremecieron al Mundo*. Santiago: Lom Ediciones.

Harnecker, M. (2001). *La Izquierda en el Umbral del Siglo XXI.* Cuba: Instituto Cubano del Libro.

Harnecker, M. (2006). La Lucha de un Pueblo sin Armas. Los Tres Años de la Unidad Popular. https://rebelion.org/docs/95161.pdf

Lawner, M. *et al.* (2008). La Nacionalización del Cobre. *Salvador Allende, Presencia en la Ausencia*. Santiago: Lom Ediciones.

Martner, G. (comp.). (1992). *Salvador Allende Obras Escogidas.* Santiago: Centro Estudios Políticos Simón Bolívar y Fundación Salvador Allende Editores.

Modak, F. (coord.). (1998). *Salvador Allende en el Umbral del Siglo XXI.* México DF: Plaza y Janés.

ODEPLAN. (1971). *La Planificación bajo el Gobierno Popular,* Serie V, 1, Publicaciones Especiales.

ODEPLAN. (1971b). *Resumen del Plan de la Economía Nacional 1971-1976,* Serie VI, 3, Resúmenes.

Roitman, M. (2019). *Por la Razón o la Fuerza.* México DF: Siglo XXI.

Unidad Popular. (2009) [1969]. Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular en Ministerio del Poder Popular, Venezuela (ed.). *Salvador Allende, La Vía Chilena al Socialismo,* Colección Palabras Esenciales. http://biblioteca.vtv.gob.ve/greenstone/collect/document/index/assoc/HASH01f8.dir/doc.pdf

Unidad Popular. (2009) [1969b], Las Primeras Cuarenta Medidas Salvador Allende en Ministerio del Poder Popular, Venezuela (ed.). *La Vía Chilena al Socialismo,* Colección Palabras Esenciales. http://biblioteca.vtv.gob.ve/greenstone/collect/document/index/assoc/HASH01f8.dir/doc.pdf

Imperialismo y desarrollo del sistema sanitario chileno desde la UP

Intervencionismo de Estados Unidos en América Latina: apuntes para su comprensión

Felipe Rodríguez Ulloa y Catalina Ganga-León

El término *imperialismo* ha sido objeto de un extenso debate en la búsqueda por ampliar los márgenes conceptuales y definiciones teóricas del siglo XX. En América Latina, especialmente durante el contexto de la Guerra Fría, los esfuerzos por desarrollar una postura crítica y revolucionaria buscaron integrar una alternativa socialista que por definición fuese antiimperialista y latinoamericana (Gandasegui, 2005). Y aunque en las últimas décadas del siglo XXI la economía internacional ha experimentado profundas transformaciones, los rasgos centrales de dichas teorías siguen teniendo vigencia.

El proceso de *globalización* constituye un incremento sustancial del nivel de intercambio comercial, financiero y tecnológico a nivel mundial, cobrando un papel hegemónico políticas de apertura y liberalización de países dependientes del capitalismo central. Estados Unidos reafirma su hegemonía a través de las finanzas, ejerciendo cierta capacidad disciplinaria sobre Estados en condición de endeudamiento y sentando las bases del neoliberalismo como

nueva ortodoxia económica (Harvey, 2004). Esta estrategia, desplegada con mayor intensidad desde la segunda mitad del siglo XX, no hace más que justificar su naturaleza expansionista acentuando los rasgos tradicionales del imperialismo (Borón, 2004). A través de un supuesto 'libre comercio' que consolida la reorganización de los comportamientos monopólicos y oligopólicos del mercado mundial, crece dramáticamente la dependencia financiera de países de América Latina a través de préstamos, créditos y pagos diferenciados. La penetración de capital extranjero en esta región intensificó sustancialmente la deuda externa y, con ello, la necesidad de renegociar bajo el concepto de préstamos compensatorios, sumiendo a países como Chile, Argentina, Brasil y Colombia en un fenómeno denominado como 'espiral de endeudamiento'. En el caso de Chile, la deuda pública y privada habría ascendido a $ 3.830.000.000 hacia 1970, ampliando su dependencia financiera y el estancamiento de su capacidad productiva (Caputo y Pizarro, 1974). Esto no hizo más que demostrar su vulnerabilidad ante la hegemonía del capital estadounidense y las presiones financieras y comerciales, además de acentuar las contradicciones sociales que sentaron las bases de la victoria de la Unidad Popular (UP) en septiembre de 1970.

Estados Unidos realizó considerables esfuerzos por influir en asuntos de la política interna de los países de Latinoamérica. Su hegemonía se expresó no solo a través de la diplomacia con partidos de inspiración liberal y afines a sus intereses, sino también a través de operaciones encubiertas y de control sobre las redes informativas y de propaganda, siendo su principal propósito contrarrestar el avance de la izquierda en la región. A través de la Agencia de Informaciones (USIA), instrumento creado en 1953, el país norteamericano buscó la manera de administrar la información y la oferta televisiva en el exterior. En Chile, la prensa oficial colaboró activamente en la cruzada anticomunista, siendo recompensada con aportes financieros suministrados por dicho organismo. Por su parte, la participación encubierta de la CIA a través de agencias sindicales estuvo destinada a frenar la inserción izquierdista en el movimiento obrero y boicotear acciones sindicalistas (Bozza, 2016).

Uno de los documentos más emblemáticos y que develó la magnitud de estas operaciones fue el informe elaborado por el Comité Church, el que describe los alcances de las actividades clandestinas llevadas a cabo por la CIA en países extranjeros. Además del financiamiento de medios de comunicación y de actividades de propaganda de partidos políticos, se reportan operaciones relacionadas con recogida de información a través de enlaces con la policía local y servicios de contrainteligencia; así como de apoyo financiero a sectores privados, grupos de extrema derecha y a ciertos candidatos para elecciones al Congreso chileno. En la lectura de Theotonio Dos Santos (2011), estas operaciones constituyen un proceso de articulación de los intereses del capital internacional con las estructuras internas de los países dependientes, siendo estos últimos condicionados en su autonomía por intereses monopólicos extranjeros. De este modo, para la segunda mitad del siglo XX, Estados Unidos ya concentra el poder económico y militar en América Latina. Su hegemonía se ratifica por medio de alianzas con la burguesía local, la promoción de golpes de Estado y la instauración de dictaduras militares, conformando monopolios y estableciendo acuerdos económicos con la participación clave de organismos como el Fondo Monetario Interamericano y el Banco Mundial.

La emergencia de un discurso contrahegemónico: salud y Unidad Popular

Durante gran parte del siglo XX, Chile enfrentó una serie de problemáticas sanitarias que determinaron un aumento progresivo del deterioro de las condiciones de sobrevivencia de la clase popular, como la falta de viviendas y la segregación residencial, las condiciones de hacinamiento, la inexistencia de seguridad social, la aparición de enfermedades masivas, los altos índices de mortalidad infantil y materna, y la precariedad de los tratamientos de salud. La figura de Salvador Allende, médico de profesión, adquiere un relevante protagonismo para la historia del país al asumir el Ministerio de

Salubridad en 1938, durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda y del Frente Popular. En este período, realiza el primer catastro de la salud pública en su libro *La realidad médico-social de Chile*, siendo pionero en establecer la sujeción directa entre enfermedad y las precarias condiciones de vida de la clase trabajadora, analizando cómo los grandes problemas sanitarios se relacionaban con factores como el salario, la alimentación, y la vivienda. Asimismo, efectúa una denuncia explícita de los efectos del imperialismo sobre las problemáticas sociosanitarias de América Latina, controvirtiendo el afán de lucro y ganancia ilimitada de las empresas capitalistas "sin reparar que en esta tarea un pueblo se aniquile o se malogre" (Allende, 1939, p. 7).

En Chile, la década de 1950 fue de crecimiento de la izquierda y de los movimientos populares. Se expande la práctica de sindicalización de los trabajadores y crecen las huelgas campesinas, procesos que posibilitan la fundación de la Central Única de Trabajadores (CUT) en el año 1953. Por su parte, las condiciones de acuerdo entre el Partido Socialista (PS) y el Partido Comunista (PC), este último aún en clandestinidad producto de la llamada 'ley maldita', dan paso a la formación del Frente de Acción Popular (FRAP) en 1956, el cual constituye una inyección de vitalidad para la acción y proyección unitaria de la izquierda en el país. Con una marcada tonalidad antiimperialista, el FRAP acentúa la necesidad de generar cambios radicales en la sociedad a través de la vía democrática. La 'conciencia de lo social' (Illanes, 2010) se propaga con fuerza, asumiendo el Estado un rol más activo en su labor de protección social. Dicha voluntad se cristaliza con uno de los acontecimientos más destacables en el ámbito sanitario: la creación del Servicio Nacional de Salud (SNS) en 1952. El SNS representó el intento de articular y consolidar las diversas instituciones públicas involucradas en la asistencia sanitaria bajo una estructura unificada, brindando servicios preventivos a toda la población y servicios curativos gratuitos al 65% más vulnerable. Además, fue, con mucho, la principal organización de salud del país, utilizando el 70% del gasto público total en asistencia sanitaria y proporcionando más del 90% de todas las camas hospitalarias (Viveros-Long, 1986).

En la década de 1960, Chile enfrenta una alta polarización social. Se evidencia la incapacidad estatal de neutralizar los daños sociales y económicos del modelo capitalista, madurando los movimientos populares cuya conciencia señalaba que el cambio debía ser estructural, y la lucha, ideológica. Tanto la figura de Frei, como el protagonismo de Allende, fueron expresiones del desafío de reestructuración del Estado, triunfando el primero para las elecciones de 1964 bajo el lema de 'revolución en libertad'. En el ámbito de la salud, en 1968 se establece el Servicio Médico Nacional para Empleados (SERMENA) como un plan de seguro médico para las y los trabajadores administrativos y sus dependientes, de carácter estatal. En el mismo gobierno, el sistema sanitario, de carácter mixto, distribuyó su acceso según condición de la población trabajadora: Las y los trabajadores manuales e indigentes recibieron servicios de salud gratuitos garantizados por el SNS (65% de la población), las y los administrativos fueron atendidos a través de SERMENA (20%), y una minoría de pacientes con mayores ingresos recurrió a la atención privada (10%) (Viveros-Long, 1986).

Si bien las políticas estatales se orientaron hacia el conjunto de la sociedad, importantes contradicciones se exacerbaron, como fue el desborde de la infraestructura institucional por una creciente demanda social insatisfecha. Pese a los éxitos en la disminución de la tasa de mortalidad infantil y materna, estos contrastaban con las cifras de pobreza y miseria (Illanes, 2010). Es así como, a fines de la década de 1960, el inconformismo con la gestión de la Democracia Cristiana (DC) agudizó la protesta social, cuestionando la posibilidad de avanzar en cambios estructurales. Principalmente entre los sectores populares e intelectuales, maduró la necesidad de optar por una profundización revolucionaria: el programa del socialismo.

De la mano de Salvador Allende, convertido ya en el garante de la unidad de acción entre socialistas y comunistas y figura resolutiva de las contradicciones internas, la coalición electoral logra levantar y unificar un sentimiento de injusticia e indignación y promover la urgencia por forjar un nuevo orden social. En octubre de 1969, se

conforma la alianza electoral 'Unidad Popular', compuesta ya no solo por el PC y el PS, sino también por el Partido Radical, el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), Acción Popular Independiente y el Partido Social Demócrata. En septiembre de 1970, triunfa en las urnas el proyecto socialista de la Unidad Popular (UP). Parte importante de la propuesta radicó en el ejercicio real y efectivo del poder popular y la construcción de una política de desarrollo económico con predominancia estatal, aspirando a liberar a Chile de la subordinación del capital extranjero y de la burguesía nacional, por medio de expropiaciones, y medidas como la nacionalización de los recursos naturales, y la profundización y extensión de la reforma agraria:

> Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente (Allende, 1969, p. 4).

Con miras a atender las necesidades de la clase popular, el gobierno de Salvador Allende estructura un plan de acción sintetizado en las llamadas 'Primeras 40 medidas'. La salud es concebida como un derecho humano básico, siendo el Estado responsable de asegurar el acceso a una adecuada atención sanitaria. Las cifras de la época evidencian que desde 1964 a 1973, el gasto en salud pública seguía una curva similar al crecimiento del PIB per cápita, alcanzando un *peak* durante la gestión de Allende. El gobierno de la UP buscó asegurar la atención médica y dental preventiva y curativa de todas y todos los chilenos, financiada por el Estado, los grupos empresariales y las instituciones de previsión social. De igual modo, una de sus primeras medidas consistió en suprimir el pago de todos los medicamentos y exámenes en los hospitales públicos. A largo plazo, su objetivo era crear un sistema de salud unificado con participación financiera progresiva del Estado (Viveros-Long, 1986).

El predominio de una vanguardia humanista en la época sostuvo la idea del desarrollo en plenitud del ser humano en sociedad, en el

que la salud era comprendida como un proceso dinámico de interacción del individuo con su ambiente (Illanes, 2010). En este sentido, las condiciones de vida tenían un papel decisivo en el bienestar tanto físico como mental de la población. Por ello, las intervenciones estatales se concebían desde la acción conjunta en materia de vivienda, educación, cultura y trabajo. A modo ilustrativo, hacia 1972 Chile ratifica el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconociendo el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El Estado asume así el compromiso y la responsabilidad de generar medidas para garantizar este derecho (Drago, 2006). Una de sus políticas públicas más emblemáticas es el programa de 'Medio Litro de Leche', orientado a combatir las tasas de desnutrición y mortalidad infantil, garantizando medio litro de leche diaria a todos los niños y niñas menores de 15 años, embarazadas y nodrizas del país. De 650 mil beneficiados en 1970, para 1973 dicha cifra alcanzó a 3.600.000 personas. Fue tal su éxito, que la medida aún se mantiene vigente en la actualidad, aunque con modificaciones (Ramírez, 2019).

Consistentemente, el gobierno de Allende promovió la concepción de una medicina socializada, a través de la organización comunitaria y la movilidad social. Hacia 1971, se implementan los Consejos Locales de Salud, a fin de formalizar el contacto organizado entre la comunidad, que ejercía el derecho a la salud, y la autoridad, que tenía el deber de amparar ese derecho (López Campillay, 2018). En otras palabras, la incorporación de la población en la tarea de proteger la salud pública, en conjunto con el sector profesional sanitario, ayudó a democratizar las tradicionales instituciones asistenciales e implementar las nuevas políticas en esta materia. Lo anterior modificó la verticalidad, abriéndose paso una praxis de mutuo aprendizaje: la autonomía y la interdependencia constituyeron dos ejes centrales para la organización popular de la salud (Illanes, 2010). Predominó el concepto de atención integral como posibilidad de ejercer una práctica médica de manera eficiente y oportuna para toda la población. En este

sentido, y a través del SNS, se prioriza la conformación de un equipo funcionario con capacidad asistencial próxima al hogar o al sitio de trabajo y en continuidad con el Hospital Base y todos los organismos locales. Por tanto, la organización popular y la experiencia de policlínicos barriales coadyuvaron en la labor sanitaria en estrecha armonía con la dinámica de vida popular. Ejemplo de esto lo constituye el programa de 'Psiquiatría Intracomunitaria'. Juan Marconi, creador de esta iniciativa, sostiene:

> El que estaba maduro para tomar en sus manos sus propios problemas era el pueblo; la idea era que el alcoholismo, después la neurosis y la privación sensorial lo resolviera la propia comunidad *con apoyo técnico pero sin dirección técnica* en el sentido de autoritarismo, lo que podríamos llamar *poder popular* era realmente la base de lo que estábamos planteando (Mendive, 2004, s.p.).

El proyecto de la UP colocaba al centro de su administración la noción de poder popular, fracturando entonces las dinámicas de relación internas. Sin embargo, estos procesos, por su naturaleza democratizadora, conflictúan con la burguesía local y, en consecuencia, con los monopolios internacionales sobre los que se articulan (Dos Santos, 2011). Como respuesta inmediata al triunfo de Allende, entra en escena el llamado Comité 40, organismo que recibe este nombre durante el gobierno de Richard Nixon y que fue presidido por el asistente del presidente en Asuntos de Seguridad Nacional, Henry Kissinger. Según el Informe Church, su propósito era ejercer control político sobre operaciones encubiertas en el extranjero, pudiendo estas acciones ser negadas o desautorizadas por el gobierno de Estados Unidos.

Dictadura cívico-militar: neoliberalismo y desmantelamiento de la salud pública

El martes 11 de septiembre de 1973 constituye el fin de una época. El bombardeo a La Moneda simboliza la derrota de los avances democráticos de más de 50 años y un punto de inflexión en la historia reciente del país. Asimismo, supone la concreción del fin último de las pretensiones de la política exterior de Estados Unidos: la anulación de la victoria electoral de la Unidad Popular. A través de la CIA y otros organismos encargados de detener el avance del socialismo en Chile, se trazaron estrategias que, por un lado, buscaron prolongar la confrontación económica y, por otro, desintegrar gradualmente el Estado chileno (Morley y Smith, 1977). La derrota de Allende por las armas, precedida por otro golpe militar en Uruguay y seguida de una acción similar en Argentina, constituyen expresiones hegemónicas de intereses imperialistas, que implicó una serie de aberraciones amparadas por una política de represión y persecución como torturas, asesinatos, desapariciones y exilio forzado (Harnecker, 1999). Las repercusiones que tuvieron los intereses de la Casa Blanca sobre los países del Cono Sur provocaron la movilización de fuerzas represivas que dejaron un saldo de cuatro millones de exiliados en países extranjeros, cincuenta mil asesinatos, al menos treinta mil desaparecidos, cuatrocientos mil encarcelados y tres mil niños y niñas asesinados y desaparecidos (Paredes, 2004).

La imposición de un nuevo orden, bajo el alero del pensamiento de Milton Friedman y las llamadas 'siete modernizaciones' implementadas desde 1979, abre paso a un conjunto de reformas de extrema liberalización orientadas a la privatización del sistema de seguridad social en el país, el traspaso del sistema de pensiones a manos de un grupo de privados y la privatización del sistema de salud. El núcleo de estas medidas estuvo enfocado en una consistente reducción de la oferta monetaria, una apertura al mercado internacional y una progresiva reducción del sector público. En otras palabras, el nuevo

modelo puso en marcha una serie de reformas basadas en una doctrina neoliberal, con una propuesta bastante simple: desestatizar el manejo de la economía y confiar su funcionamiento a los mecanismos espontáneos del mercado (Salazar y Pinto, 2002).

El mismo año del Golpe se crea la Comisión de Estudios de la nueva Constitución Política, más conocida como Comisión Ortúzar. En ella, se definieron las propuestas y contrarreformas que posteriormente serían revisadas para la redacción de la Constitución de 1980. Sobre este documento, cabe mencionar las ideas de Jaime Guzmán, quien destaca la importancia de consagrar como principio fundamental la descentralización del Poder y la limitación de las atribuciones del Estado a un rol de subsidiariedad. Este principio influiría de manera determinante en la forma en que se concibe el derecho a la salud hasta hoy. A través de un conjunto de reformas, esta definición daba cuenta de la esencia de las principales transformaciones que experimentó el sector público de la salud: una consistente retracción de sus recursos y un mayor protagonismo del sector privado. En términos específicos, el sistema de salud se reorganizó de acuerdo con tres funciones: Transferencia de todas las atribuciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) hacia el Ministerio de Salud; creación del Sistema Nacional de Servicios de Salud (SNSS), a través de la descentralización y creación de 27 sistemas locales de salud autónomos; y la municipalización de la Atención Primaria (Labra, 2002).

En 1979, con el desmantelamiento del SNS y SERMENA, se crea el Fondo Nacional de Salud (FONASA), constituyéndose como un organismo público funcionalmente descentralizado, a cargo de entregar cobertura tanto a la población indigente como a asalariados y sus familiares mediante una cotización obligatoria. Sin embargo, para el año 1981, el Ministerio de Salud, en conjunto con médicos afines a la ortodoxia neoliberal, declararon fundamental proporcionar incentivos para el desarrollo de un sector sanitario privado que pudiera complementar al sector público y, con ello, formar un sistema mixto. Así, se adoptaron tres medidas básicas: limitación de la práctica privada en hospitales públicos; formulación de un nuevo programa de

tarifas para los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas; y la creación de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). A través de un decreto de ley del mismo año, estas entidades, de carácter privado, aparecen como intermediario financiero en la compra y venta de planes de cobertura, aumentando de 6 en 1981 a 23 en 1989, y abarcando al 21% de la población (Labra, 2002). Con su creación, se introduce la noción de salud como un bien que requiere un pago, mercantilizando así su acceso y legitimando el lucro como un criterio necesario para promover la llegada de capital extranjero (Aedo, 2001).

Con la introducción de aranceles en las atenciones de salud (pago por prestaciones) y políticas de externalización de servicios en hospitales, la red pública comienza a funcionar como un cuasi mercado (Goyenechea, 2019). La idea central de menguar los aportes del Estado y marginar su participación en este sector contribuyó a la formulación de una serie de incentivos fiscales concedidos a la demanda de clínicas y prestadores privados. Estas medidas suponen la promoción de cambios estructurales que son determinantes en la reformulación del rol del Estado. Estudios demuestran que desde 1977 hasta 1980, los gastos en salud pública reflejan una disminución constante. Mientras que en 1969 la vestimenta de personal representó el 12,8% de los gastos, esta cifra disminuye a un 2,8% para 1979. Para 1982, con la reducción del 6% del presupuesto de salud pública, los gastos en este sector prácticamente desaparecerían. El número de personal se reduciría de 75.694 en 1975 a 66.969 empleados en 1978. Esto se vería explicado, en parte, por una disminución del valor real de salarios en todo el sector público. Para 1975, los salarios anuales solo representaban el 54,4% del valor real de los salarios de 1970 (Viveros-Long, 1986). En otros estudios se evidencian caídas acumuladas en el gasto en salud de entre un 40% y 50%, entre los años 1983 y 1990. Lectura similar a la ofrecida por documentos del Ministerio de Salud, que refieren una variación de un 49% del gasto fiscal entre 1974 y 1989 (Minsal, 1992).

En el campo de las farmacéuticas, también se aplican medidas compatibles con una política económica de liberalización que, como ha sido mencionado, fue base indispensable de la administración del país durante la dictadura. La producción de medicamentos comienza a regirse por criterios económicos, sentando las bases para que su venta, hasta entonces tema de salud pública, fuera tratada como cualquier mercado. A partir de 1975, se extiende la concesión de todo producto genérico. Se amplía la posibilidad de inclusión de nuevos productores, buscando garantizar la libre competencia en esta materia. A raíz de estas modificaciones reglamentarias e incentivos comerciales, se incorporan nuevos laboratorios que iniciaron operaciones de producción desregulada de medicamentos al margen del Formulario Nacional, entrando en conflicto con Laboratorio Chile, entidad que finalmente es privatizada en el año 1987 (Vergara, 1997).

En cuanto a la Atención Primaria en Salud (APS), sus principios esenciales representaban una forma de democracia y socialización que fue ampliamente extendida durante el gobierno de la UP, pero que colisionaron, inevitablemente, con la organización jerárquica y autoritaria de la dictadura. En 1978 se celebró en Alma-Ata, URSS, la conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, organizada por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, promoviéndose criterios relacionados con la universalidad, participación e intersectorialidad. La delegación chilena tuvo la oportunidad de esbozar los lineamientos esenciales que darían vida al sistema sanitario que se implementó hacia inicios de la década de 1980. Una de sus primeras aclaraciones estuvo basada en el principio del rol subsidiario del Estado, y en la que no hubo alusión a la participación comunitaria, eje central del ejercicio democratizante de los años previos al golpe, provocando serios cuestionamientos sobre la posibilidad de alcanzar las metas propuestas por dicha conferencia. Testimonios recopilados por López Campillay (2018), dan cuenta de las intenciones del entonces ministro de Pinochet, Juan Giaconi, de concebir la municipalización de la APS como un paso intermedio a la privatización de los servicios primarios, además de confirmar las

pretensiones de la dictadura de potenciar los seguros privados y, con ello, el desarrollo de las ISAPRES, en desmedro de elementos sustanciales como la participación social y el fortalecimiento de iniciativas intracomunitarias en salud.

COVID-19: mercantilización de la salud y crisis de un sistema sociosanitario olvidado

Con el retorno a la democracia en 1990 se inicia una relativa reformulación de las políticas de salud, expresadas en un aumento de la inversión en infraestructura y presupuestos operacionales. En términos específicos, estudios demuestran una reversión de la tendencia del gasto fiscal, aumentando cerca de un 50% para la década de 1990 (Labra, 2002). Esto supuso una mayor disponibilidad y cobertura de la protección social, constituyendo un avance en las condiciones de vida y bienestar de la población.

Bajo la tutela de los gobiernos de partidos de centroizquierda agrupados en la 'Concertación', se evidencia una paulatina voluntad por resolver, de manera parcial, la crisis financiera y mejorar la gestión y desempeño del SNSS (Gattini, 2018). Según Labra (2002), los datos dan cuenta de un sostenido progreso de los indicadores básicos de salud producto de factores como la manutención de programas focalizados en el grupo materno-infantil; erradicación del analfabetismo, expansión de redes de saneamiento básico y, sobre todo, por la permanencia del legado institucional y cultural dejado por el SNS. Sin embargo, la voluntad política ha estado lejos de recuperar la esencia de los principios del derecho a la salud y avanzar en universalizar su acceso. Las directrices centrales de la Constitución de 1980, con las que se impone un sistema de salud dual que segmenta y segrega a los pacientes de acuerdo con su capacidad de pago y riesgo de enfermedad, no han sido modificadas. En el caso de las ISAPRES, estudios han develado un fenómeno de integración vertical de la industria, que ha producido un desplazamiento de grupos empresariales locales, sustituyéndolos por

conglomerados transnacionales (Goyenechea, 2019). Sumado a esto, el principio de subsidiariedad en el rol del Estado, piedra angular del proyecto neoliberal implementado en dictadura, permanece vigente.

El año 2020 constituye un período en el que la pandemia de COVID-19 ha cuestionado la capacidad de los sistemas sanitarios de los países a nivel mundial. La emergencia sanitaria llega a Chile en un contexto de álgida movilización popular con el estallido social de octubre de 2019, el cual denuncia las enormes injusticias existentes en uno de los países con mayores índices de desigualdad (OCDE, 2020). Consignas como 'hasta que la dignidad se haga costumbre'; 'no son 30 pesos, son 30 años', reflejan un descontento generalizado ante un Estado que, desde la vuelta a la democracia y en estricto rigor, no ha resuelto la extrema mercantilización y precarización de las condiciones de vida.

Al 15 de septiembre de 2020, Chile acumula 437.983 personas contagiadas por COVID-19 y 12.040 fallecidas (Minsal, 2020). El significativo aumento de casos positivos, junto con el sostenido desfinanciamiento del sistema público, han ocasionado un escenario de progresiva saturación de los servicios de salud. Según estudios de la Universidad de Chile, para el mes de mayo las cifras referidas a la ocupación de servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) alcanzaron un 86% a nivel nacional y más de un 97% en la Región Metropolitana (Canals, Canals y Cuadrado, 2020). Las medidas de retracción de recursos en el sector asistencial no solo han mermado la capacidad de los recintos hospitalarios, sino también el desabastecimiento de elementos de protección de personal, poniendo en riesgo la salud de los profesionales. En un catastro realizado por el Colegio Médico de Chile (COLMED) entre marzo y abril, se develan serias condiciones de carencia de implementos entre el personal sanitario. El 75% de los encuestados reveló la falta de insumos en sus centros asistenciales como mascarillas (62,71%), cobertores visuales (51%), pecheras (34,3%), mascarillas quirúrgicas (33%) y guantes (15%) (COLMED, 2020). Este panorama, deja entrever diferencias considerables con la atención de salud privada. Según registros expuestos

por Sepúlveda y Miranda (2020), las probabilidades de morir en un hospital son mucho mayores que en una clínica. Los datos revelan diferencias según tasas de mortalidad, en las que los recintos públicos duplican, en términos generales, las de los centros privados. Asimismo, cabe señalar medidas afines a criterios económicos como el alza de planes en salud en un escenario de masivas pérdidas de empleos, el rechazo masivo del pago de licencias médicas y la fijación de un valor cercano a 80 dólares para el test de diagnóstico (PCR).

Por otro lado, la gestión de Sebastián Piñera no ha hecho más que demostrar la predominancia de una racionalidad neoliberal, priorizando medidas de reactivación económica, por sobre aquellas tendientes al cuidado de la población. Un primer punto de inflexión ocurre a mediados de mayo, donde la ausencia de medidas para enfrentar la falta de alimentos despertó la indignación y el descontento a través de protestas contra el hambre y la miseria. Asimismo, diferencias entre el gobierno y el concejo técnico de salud, han puesto en duda la efectividad epidemiológica de las llamadas 'cuarentenas dinámicas' planteadas por el Ministerio de Salud, el que ha determinado generar aislamientos focalizados en ciertos sectores del país sin considerar la movilidad de la población entre zonas. A mayo de 2020, un 23,9% de los participantes con sintomatología, y un 14,6% con diagnóstico COVID-19 confirmado, reportaban tener la necesidad de salir de sus hogares para trabajar (MOVID-19, 2020).

En la misma línea, otra de las medidas propuestas por Piñera para enfrentar los despidos masivos y la falta de empleos, consiste en el acceso al nuevo crédito de 'protección de la clase media', fomentando el endeudamiento como mecanismo de respuesta a la crisis sociosanitaria y la precariedad laboral. Asimismo, anuncia la 'Ley de protección al empleo', permitiendo suspender el contrato laboral por hasta seis meses, mientras las y los trabajadores cobran su seguro de cesantía a modo compensatorio por las remuneraciones no recibidas. En paralelo, el gobierno de derecha adopta medidas represivas y autoritarias, decretando toques de queda para toda la población, reforzando la militarización, criminalizando la protesta y el

descontento social, y endureciendo sanciones a quienes incumplan las medidas de aislamiento.

Lo anterior, no hace más que demostrar las carencias de un modelo sostenido bajo principios doctrinarios de una política neoliberal, anclada en la instauración de un Estado subsidiario que asume la privatización de los servicios sociales como eje central y, en consecuencia, el desmantelamiento de la provisión estatal. La crisis sanitaria ha planteado el desafío de repensar las bases estructurales, morales y éticas de la sociedad, a fin de recuperar la proeza de la organización popular de la UP y sostener la conciencia que despertó el estallido social desde el 18 de octubre, para recordarnos que la lucha debe continuar hasta que la dignidad se haga costumbre.

Referencias

Aedo, C. (2001). Las reformas en la salud en Chile en F. Larraín B. y R. Vergara M. (eds.). *La Transformación Económica de Chile*. Santiago, Chile: Centro de Estudios Públicos, pp. 605-640.

Allende, S. (1939). *La realidad médico-social chilena*. Santiago, Chile: Ministerio de Salubridad.

Allende, S. (1969). *Programa básico de gobierno de la Unidad Popular*. Santiago, Chile.

Borón, A. (2004). *Hegemony and imperialism in the international system* [sesión de conferencia]. Sesión de cierre de la Tercera Conferencia de Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe, y XXI Asamblea General del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 131-152.

Bozza, J. A. (2016). La contención de las izquierdas en Chile, 1960-1973. Estrategias culturales, propagandísticas y laborales de los Estados Unidos. *Travesía,* 297-318.

Canals, M., A. Canals y C. Cuadrado. (2020). *Informe COVID-19. Chile al 24.05.2020.* Escuela de Salud Pública. Dr. Salvador Allende. Universidad de Chile.

Caputo, O., y R. P. Pizarro. (1974). *Dependencia y relaciones internacionales*. San José, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana.

Colegio Médico (COLMED). (2020, 6 de abril). *Reporte 2 Catastro de Elementos para Protección Personal*. Consultado el 15 de septiembre de 2020. http://www.colegiomedico.cl/wp-content/uploads/2020/03/Informe-2-encuesta-EPP-Colmed-30-de-marzo-a-6-de-abril.pdf

Dos Santos, T. (2011). *Imperialismo y dependencia*. Caracas, Venezuela: Fundación Biblioteca Ayacucho.

Drago, M. (2006). *La reforma al sistema de salud chileno desde la perspectiva de los derechos humanos*. Santiago, Chile: CEPAL.

Gandasegui, M. (2005). América Latina y el Imperialismo en el siglo XXI, en J. Estay Reno (comp.). *La economía mundial y América Latina: Problemas y* perspectivas. Buenos Aires, Argentina: CLACSO, pp. 169-192.

Gattini, C. (2018, noviembre). *El Sistema de Salud en Chile.* Publicaciones OCHISAP, Escuela de Salud Pública Universidad de Chile. http://www.ochisap.cl

Goyenechea, M. (2019). Estado subsidiario, segmentación y desigualdad en el sistema de salud chileno. *Cuadernos Médicos Sociales, 59*(2), 7-12.

Harnecker, M. (1999). *Haciendo posible lo imposible. La izquierda en el umbral del siglo XXI*. México: Siglo XXI Editores.

Harvey, D. (2004). *El nuevo imperialismo,* 26. Madrid, España: Akal Ediciones.

Illanes, M. A. (2010). *En el nombre del pueblo, del Estado y de la ciencia,(...). Historia Social de la Salud Pública en Chile 1880/1973. (Hacia una historia social del Siglo XX)* (2.ª ed.). Santiago, Chile: Ministerio de Salud.

Labra, M. E. (2002). Neoliberal reinvention of inequality in Chile: the case of the health sector. *Cadernos de saude publica*, *18*(4), 1041-1052. doi: 10.1590/S0102-311X2002000400010.

López Campillay, M. (2018). *¿Salud para Todos? La atención primaria de salud en Chile y los 40 años de Alma Ata, 1978-2018*. Santiago, Chile: Ministerio de Salud.

Mendive, S. (2004). Entrevista al Dr. Juan Marconi, creador de la psiquiatría intracomunitaria: reflexiones acerca de su legado para la psicología comunitaria chilena. *Psykhe (Santiago), 13*(2), 187-199. doi: 10.4067/S0718-22282004000200014.

Minsal (Ministerio de Salud). (1992). *Situación de Salud*. Santiago, Chile: Minsal.

Minsal (Ministerio de Salud). (2020). *Casos confirmados en Chile COVID-19.* Consultado el 15 de septiembre de 2020. https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/casos-confirmados-en-chile-covid-19/

Morley, M., y S. Smith. (1977). El imperialismo y su política en Chile. La política del Estado y el papel de la CIA. *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, *8*(30), 79-109. doi: 10.22201/iiec.20078951e.1977.30.41163.

MOVID-19. (2020, 26 de mayo). ¿Cómo podemos mejorar el aislamiento de casos COVID-19? Una mirada desde la respuesta del sistema de salud y las condiciones sociales (Primer Informe Mesa Social, Monitoreo Nacional de Síntomas y Prácticas COVID-19 en Chile). Universidad de Chile, Colegio Médico de Chile, y Facultad de Psicología Universidad Diego Portales. https://www.movid19.cl/publicaciones/primer-informe/

OCDE (2020). *Income inequality* (indicator). Consultado el 15 de septiembre de 2020. doi: 10.1787/459aa7f1-en

Paredes, A. (2004). La Operación Cóndor y la guerra fría. *Universum (Talca), 19*(1), 122-137. doi: 10.4067/S0718-23762004000100007

Ramírez, F. (2019, 26 de marzo). "Medio Litro de Leche" para todos los chilenos: la historia de una política pública que se extiende por más de cuatro décadas. *Prensa Universidad de Chile.* https://www.uchile.cl/noticias/152243/la-historia-detras-del-medio-litro-de-leche-para-todos-los-chilenos

Salazar, G., y J. Pinto. (2002). *Historia contemporánea de Chile III. La economía: mercados, empresarios y trabajadores.* Santiago, Chile: LOM.

Sepúlveda, N. y B. Miranda. (2020, 21 de junio). Coronavirus: Tasa de mortalidad de los hospitales públicos metropolitanos duplica la de las clínicas. *CIPER*. https://www.ciperchile.cl/2020/06/21/coronavirus-tasa-de-mortalidad-de-los-hospitales-publicos-metropolitanos-duplica-la-de-las-clinicas/

Vergara, H. (1997). *Historia del formulario nacional de medicamentos*. Santiago, Chile: Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile.

Viveros-Long, A. (1986). Changes in health financing: The Chilean experience. *Social Science & Medicine*, *22*(3), 379-385. doi: 10.1016/0277-9536(86)90137-1

"¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!"

La Unidad Popular y el protagonismo de los trabajadores

Sandra Castillo Soto

Revisitar la experiencia histórica de la Unidad Popular (UP) en el contexto actual es aproximarse a una coyuntura que ha sido de las más significativas para la historia del movimiento popular en Chile y un hito político para la izquierda en su conjunto. No es la primera vez y seguro no será la última, en que nos acerquemos a este período histórico intentando rescatar la riqueza de la experiencia de sus protagonistas, que se hace hoy, incluso más valiosa, cuando nos encontramos *ad portas* de un proceso constituyente que pretende(mos) siente las bases de una nueva institucionalidad política y ponga fin a 40 años de legado dictatorial. Recuperar la memoria de una gesta político-social que llevó a los sectores populares, por primera y única vez, a intentar construir una sociedad cuyos pilares fueran la justicia social, la equidad y la solidaridad se hace del todo pertinente y justa.

Sin dudas el gobierno de Salvador Allende marcó un punto de inflexión en la historia política chilena y también mundial. En un contexto en que las únicas revoluciones de izquierda que habían

triunfado fueron a través de las armas, el experimento chileno apostaba por la vía de las urnas para realizar transformaciones estructurales en el país. La izquierda chilena, a través de sus principales partidos políticos llevaba una larga trayectoria de participación en el sistema político que tiene su culminación en la UP y un proyecto de cambios profundos que se inició con altas expectativas por parte del mundo popular. Aún más importante, ponía en el centro del protagonismo a aquellos sectores sociales mayoritarios, pero eternamente silenciados y excluidos.

Sin embargo, el camino hacia la realización de estas aspiraciones fue difícil y plagado de obstáculos, que comenzaron en el mismo momento en que se conocieron los resultados de la elección y que se fueron agudizando a la vez que se profundizaba el proceso de cambios estructurales llevado adelante por Allende. Desde ese momento, las organizaciones populares adoptaron una decidida actitud de defensa del gobierno y del proceso histórico que se iniciaba, situación que tendría su momento cúlmine a partir del segundo año de gobierno. En el caso de los partidos políticos el campo de defensa estaba claro, la propaganda de sus bases militantes y simpatizantes, así como la acción parlamentaria, habían sido tradicionalmente las armas para defender el proyecto político. Pero ¿qué harían los trabajadores para defender a "su gobierno"? Este cuestionamiento planteaba el desafío de ampliar el repertorio de acciones y la creatividad de los sectores populares y, particularmente de los trabajadores, para hacer frente al despliegue de aquellos sectores que no escatimaron esfuerzos por aplastar el avance democratizador que pretendía desarrollar el gobierno de Salvador Allende. Ese protagonismo popular es el que buscamos rescatar en esta exposición, estos sujetos que poniendo su voluntad y su esfuerzo llenaron de significado el eslogan "el gobierno de los trabajadores" y lo hicieron "carne y sangre" en lo cotidiano.

Un gobierno por y para los trabajadores

Por primera vez, en la historia del movimiento obrero chileno, los trabajadores eran protagonistas de un proyecto político y no simples beneficiarios de prebendas de tal o cual gobierno, sino que eran los convocados a participar en las transformaciones que "la vía chilena al socialismo" planteaba. De ahí que se abriera un nuevo contexto de posibilidades de acción político-social sin precedentes hasta ese momento y que debían ser encauzadas a través de las organizaciones sindicales y las del resto del mundo popular, por lo menos era lo que planteaba el programa de la UP. Era una invitación a trabajadores, pobladores, estudiantes, mujeres y todas aquellas personas que estuviesen a favor de los cambios estructurales que el país necesitaba, señalando que "Las transformaciones revolucionarias que el país necesita solo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente" (Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, 1969). Sin embargo, ese traspaso de poder debía producirse de manera paulatina, con la incorporación de los sectores populares a diversas instancias de decisión, siendo esencial la responsabilidad y disciplina que debían adquirir en este sentido los trabajadores, dentro de la estrategia política de transformar el Estado "desde adentro".

Este nuevo protagonismo de los trabajadores en lo político, económico, social y cultural debía ser canalizado a través, principalmente, de la Central Única de Trabajadores (CUT), que fue la convocada a llevarlo adelante, a pesar de las críticas que se le hicieron con respecto a su autonomía del gobierno, especialmente, con la integración de algunos dirigentes a cargos ministeriales y de dirección pública, manifestando que esta situación era "Una lección más de que este Gobierno y la Unidad Popular están con los intereses de los trabajadores y su causa es la de los trabajadores'. [...] Asimismo ratifica que el Gobierno, cada día más, va entregando mayores responsabilidades

–en la conducción del proceso revolucionario– a la clase trabajadora" (Regocijo de la clase trabajadora por designación de Hernán del Canto, 1972). Si bien, los propios dirigentes de la CUT reafirmaban su compromiso con Allende y que "los trabajadores chilenos darían todo y su irrestricto respaldo al programa de la UP, transformándose en la palanca para desarrollar este plan", también señalaban que "que mantendrían su independencia como central sindical" (Presencia de dirigentes mundiales es apoyo para el Triunfo Popular, 1970). Sin duda que detrás de esta declaración estaba la voluntad inquebrantable de la Central sindical de defender, por todos los medios, un gobierno que consideraban un logro de la clase trabajadora.

No obstante, la mayor participación de los trabajadores se concebía en el plano económico y, particularmente, en la implementación del Área de Propiedad Social (APS) de la economía (Castillo, 2009). El APS tenía importancia no solo en términos económicos, ya que se planteó que se convertiría en el motor de la economía nacional, sino también tenía una relevancia simbólica para los trabajadores, puesto que se establecía su participación en la gestión de dichas empresas consideradas estratégicas. Eran los trabajadores los llamados a resguardar la buena marcha de las fábricas, así como también el aumento de la producción de las mismas, cuestión que era fundamental para el gobierno y que promovería "las medidas necesarias para asegurar la participación activa de los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, en la elaboración y ejecución de la política económica y social mediante las siguientes disposiciones: a) Nombrando representantes de los trabajadores en los organismos de planificación y desarrollo económico y social. b) Asegurando la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas estatales y del área mixta" (Acta de acuerdo CUT-Gobierno, 1990).

De esta manera, se establecieron mecanismos y vías formales de participación obrera, es decir, una institucionalidad y estructuras determinadas cuidadosamente para encauzar las crecientes expectativas de los trabajadores, que no eran menores. En su 6º Congreso, la CUT valoraba este paso, ya que "significa romper la estructura de

poder que existía en las empresas capitalistas. Significa traspasar la facultad de decidir en las fábricas, en las industrias, en los servicios, a manos de la clase trabajadora. En las empresas del Área Social ha desaparecido la propiedad privada sobre los medios de producción; no existen patrones. Las máquinas, los equipos, son hoy propiedad del Estado, de un Estado que representa los intereses de la clase trabajadora" (Memoria del consejo Directivo al 6º Congreso Nacional de la CUT, 2000). Aun cuando esto supuso una apertura a la mayor participación de los trabajadores en la gestión económica y administrativa en las empresas estatales, se debe señalar que la estructura, instancias y organismos diseñados por la UP, eran más bien de carácter consultivos y de asesoría, más que resolutivos (Castillo, 2009). Además, el sistema de participación, solo se implementó en las empresas del Área Social, mientras que, en las dos áreas económicas restantes (mixta y privada), la incorporación de los trabajadores se limitaba a constituir *Comités de Vigilancia de la Producción*, para resguardar y defender la empresa ante posibles sabotajes. Esto es de particular importancia, considerando que estos sectores empresariales agrupaban un contingente importante de obreros, muchos de ellos, de reciente sindicalización.

Aunque había consenso en la izquierda en que la participación de los trabajadores era fundamental para empujar el proceso de cambios, como la entendía cada uno de sus componentes, variaba en profundidad y campo de acción. Mientras para algunos sectores dentro de la coalición era necesario que esta participación obrera fuera disciplinada y ajustada a la legalidad, por medio de sus organizaciones, especialmente, la CUT, otros planteaban la necesidad de una participación más activa y crítica con respecto a los planes del gobierno (especialmente a partir de octubre de 1972), apelando a la creatividad e iniciativa por parte de los trabajadores de forma independiente, al margen de las estructuras establecidas por el gobierno, con el fin de "irse incorporando al ejercicio real del poder, a través del manejo directo de las instituciones y organismos directos del estado" (Partido Socialista: Resolución Política del Congreso de La Serena, 2000). Finalmente, sería la segunda de ellas, la que se impondría, no por la

voluntad de sus promotores, sino que por las propias circunstancias creadas por los intentos de sabotaje económico de la derecha política y económica. Mantener y aumentar la producción era un imperativo para el gobierno, pero aún más importante, fue un imperativo para la clase trabajadora, para defender un gobierno que sentían como propio, que había costado años de lucha y muertes del movimiento popular en defensa de las conquistas sociales alcanzadas.

De la Batalla de la Producción a la participación directa

Uno de los ámbitos fundamentales para el gobierno fue la esfera económica y dentro de esta, la participación de los trabajadores en la producción. De ahí la importancia que se le otorgó al sistema de participación dentro del Área Social, para lo cual se apelaba a la "profunda fe en la responsabilidad, en la conciencia de clase de los trabajadores, y estamos seguros [de] que cumplirán esta patriótica labor" ("Los trabajadores tendrán participación en dirección de empresas estatales y mixtas", 1971). Para el gobierno era esencial que los trabajadores siguieran, de manera disciplinada, las directrices emanadas desde la planificación económica, pues si bien se les abrían espacios de injerencia dentro de las decisiones productivas de las empresas, también era prioritario el cumplimiento de metas a nivel nacional. Así, lo manifestaba Salvador Allende cuando llamaba a los trabajadores a "realizar un esfuerzo y trabajar más, para producir más. [...] señaló que la participación de los trabajadores en las empresas trae derechos, pero también deberes" ("Los trabajadores tendrán participación en dirección de empresas estatales y mixtas", 1971). Con esto, se marcaba un límite al ámbito de acción de los obreros: aumentar la producción y moderar su acción reivindicativa, siguiendo las directrices y orientaciones del gobierno "Y yo golpeó [sic] la conciencia de los trabajadores para que entiendan que su Gobierno es quien fija la táctica y los métodos de cómo proceder y que los trabajadores deben tener la confianza necesaria para que el Gobierno pueda cumplir las metas" ("Llamamiento a

los trabajadores", 1971). Entonces, la participación de los trabajadores debía subordinarse a una estrategia política que era necesaria seguir para poder evitar cualquier tipo de desviación y que el proyecto de transformación social que había llevado a Allende al poder no sucumbiera en medio de iniciativas poco factibles.

De esta manera, la prioridad durante el primer año de gobierno fue aumentar la producción de todas las áreas económicas y particularmente de la APS, para lo cual la CUT movilizó todas sus estructuras, convirtiéndola en una tarea a nivel nacional del movimiento sindical. Es en este contexto, que el 1 de mayo de 1971, Día de los Trabajadores, en un acto masivo se lanza la consigna de la "Batalla de la Producción". Un llamado a producir más, pero también a poner en marcha toda la capacidad productiva de las empresas, de todas las áreas económicas, y a los trabajadores a evitar comportamientos negligentes (como el ausentismo laboral), los sabotajes y las maniobras contrarias por parte de los patrones (en el caso de las empresas del sector privado). El llamado de Allende era a "ganar la batalla de la producción y la defensa del Gobierno del pueblo, contra sus enemigos internos y externos" ("Trabajadores y Gobierno unidos en la tarea común", 1971). Así, la responsabilidad productiva se traspasa a los propios trabajadores, haciéndoles protagonistas y responsables de la buena marcha de la producción, condicionando el éxito del proyecto político popular al desarrollo de las fuerzas económicas, ya que "la batalla de la producción es una batalla política que se da en el frente económico" ("Producción: Batalla política en el frente económico", 1971).

A pesar de la resistencia esperable por parte de algunos empresarios, los llamados de la CUT para aumentar y resguardar la producción fueron efectivos en la gran mayoría de los sectores de trabajadores. La prensa de la época, lo registraba así: "Obreros y obreras textiles con 18 y 20 años de trabajo en la fábrica, señalaron a nuestro diario: 'Jamás habíamos trabajado más a gusto como ahora. [...] Los jefes son nuestros propios compañeros por eso rendimos más y nos esforzamos por hacerlo cada vez mejor'" ("Textiles aumentan producción entre un 20 y un 100 por ciento", 1971). Se fue generando,

entonces, una percepción dentro de los trabajadores de ser protagonistas de los cambios y la convicción de que solo ellos podrían sacar adelante el proyecto de la UP y que esto no solo era un mero discurso desde las cúpulas políticas, sino que se plasmaba día a día, en lo cotidiano: en el metro extra de tela, en la fabricación de un televisor más, de una plancha de metal más, ahí estaba el éxito de "su gobierno" y la esperanza de un futuro mejor.

De ahí que los trabajadores que se encontraban fuera de la APS también se movilizaran para pasar a ser parte del Área Social. En el sector de la mediana y pequeña empresa privada comenzaron a sucederse diversas acciones que utilizaban la huelga y la toma de fábricas como una herramienta, no en contra del gobierno de turno, sino como una vía para alcanzar un anhelado objetivo: la participación efectiva. Ya no bastaba solo vigilar lo que hacía el patrón (comités de vigilancia), también se quería ser parte de las decisiones. Así, comienza a surgir una creciente aspiración en una parte considerable de trabajadores, de que sus empresas fuesen intervenidas y, en el mejor de los casos, estatizadas de manera definitiva, aun cuando muchas de ellas no estaban dentro de la lista inicial del gobierno. Si bien, en ocasiones, se trataba efectivamente de razones justificadas, ya sea por la negativa de los propietarios de aumentar la producción (decisión generalmente relacionada con motivaciones políticas) e, incluso la amenaza de paralización de faenas por parte de este, también hubo oportunidades en que fueron los mismos trabajadores quienes creaban las condiciones necesarias (que se ajustaran a la ley) para presionar a las autoridades a intervenir y solucionar el conflicto, fuese este real o no. ¿A qué se debía esta actitud? ¿Eran sectores "irresponsables"? ¿Sectores que tenían "escasa conciencia política y social, a los cuales debemos educar y ganar" ("Trabajadores se jugarán enteros contra la sedición", 1971), como señaló en algún momento la CUT?

Lo cierto es que estas acciones se fueron haciendo cada vez más frecuentes, siendo el resultado de los propios llamados desde el gobierno a movilizarse y que generó grandes expectativas en el mundo popular, iniciando una dinámica en las bases del movimiento obrero

que, tiempo después terminó desbordando los límites impuestos por la propia UP, "Una emergente revolución desde abajo amenazaba con dejar a los dirigentes nacionales de la izquierda detrás y alterar las estrategias económicas y políticas de la Unidad Popular en el proceso" (Winn, 2004). Detrás de las huelgas y las tomas de empresas, encontramos el deseo de ser protagonistas en todos los ámbitos de las transformaciones económicas, sociales y políticas que llevaba adelante la UP.

El deseo de participar, de ser actores del proceso histórico no solo se limitó a la producción económica y dentro de los canales institucionales, sino también fuera de ellos "en la realización de esfuerzos extraordinarios fuera de horario, realizando trabajo voluntario, ya sea para mantener y/o superar niveles de producción o para levantar escuelas y plazas en las poblaciones populares" ("Trabajadores: Un año en el timón de los cambios", 1971). Los trabajadores entendían que el rol que debían cumplir tenía que ser con un sentido colectivo, de responsabilidad y, especialmente, solidario, por lo que el trabajo se entendía más allá de lo meramente material, para llevarlo a un plano simbólico de construcción de nuevos valores morales, para un nuevo tipo de sociedad. Para ello, se hacía necesario avanzar en "terminar con el egoísmo, deponer las actitudes mezquinas y abrirse a actitudes más generosas y consecuentes con el proceso revolucionario que estamos llevando a cabo" ("Trabajadores comienzan a dirigir definitivamente la economía", 1972).

De esta manera, más allá de las cifras macroeconómicas y el mejoramiento material que, sin dudas eran importantes, para el trabajador común el sentirse integrado y protagonista, marcó un cambio fundamental en la percepción de sí mismo y el rol que debía cumplir en la vía chilena al socialismo. La concreción de una esperanza de cambios largamente anhelados y la voluntad de defender aquello que ya se había alcanzado "porque con este Gobierno hemos tenido más trabajo y más respeto por nosotros los trabajadores. Ahora se nos escucha y participamos también en las decisiones de las cosas que se hacen" ("Este Gobierno se pasó", 1971).

La defensa del Gobierno Popular

A partir de 1972, el campo de acción política para el gobierno de Salvador Allende se fue restringiendo debido a una férrea oposición de los sectores de derecha y progresivamente, también de centro. Dicha oposición no se limitó a las herramientas institucionales, se sumó la propaganda y la movilización de las capas medias y profesionales, amenazadas por el desabastecimiento provocado por el boicot de sectores internos y externos. Con este clima político fuertemente tensionado y deteriorado, una crisis económica desatada y una movilización social completa, en octubre de ese mismo año se produce el llamado "Paro Patronal", liderado por los transportistas de la región de Aysén, quienes declararon un cese de actividades de manera indefinida como rechazo a una iniciativa del Ejecutivo de crear una empresa de transportes de carácter estatal. Al movimiento gremialista, se fueron sumando progresivamente la Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura y la Confederación Nacional de la Producción y el Comercio, algunos colegios profesionales, organizaciones de medianos y pequeños comerciantes y estudiantes, generando una situación crítica para el gobierno en el ámbito político y también en el ámbito económico, agudizando aún más la estancada economía.

El Presidente de la República enfrentó la situación con las herramientas que la institucionalidad le entregaba: declaró el estado de emergencia, por lo que las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del orden público, se estableció una cadena de radio y televisión obligatoria (OIR) y se canceló la personalidad jurídica a todas aquellas organizaciones involucradas en la movilización. Además, requisó a través de la Dirección Nacional del Comercio (DIRINCO) los camiones, industrias y establecimientos comerciales paralizados. El llamado de Allende hacia los trabajadores fue que "se mantengan 'en la más absoluta tranquilidad y calma'. Les pide 'producir y trabajar para el país', se opone a todo tipo de 'acciones esporádicas y

espontaneístas'. El discurso es claro: los militantes de izquierda y los trabajadores no pueden organizarse para resistir por todos los medios a esta ofensiva, ya que para garantizar la estabilidad del país se debe confiar en las Fuerzas Armadas" (Gaudichaud, 2016). Así, el gobierno se mantiene fiel a su estrategia política de resolver la crisis por la vía institucional, apelando al "constitucionalismo" de las Fuerzas Armadas para resguardar el deteriorado régimen democrático.

En este contexto, el rol de la Central Única era fundamental para intentar evitar el caos económico y encauzar la creciente oleada de participación popular que se desató ante los llamados del gobierno y la CUT a detener la avanzada opositora. La organización sindical enfatizó la necesidad de que las acciones de los trabajadores fueran responsables y disciplinadas para apoyar al gobierno en ese momento de crisis, ya que "en las duras condiciones que se viven; la unidad de la clase obrera en torno a sus intereses y los de la patria, se hace más necesaria que nunca. [...] Esa unidad monolítica necesita de un profundo esfuerzo por fortalecer la organización sindical, por movilizarnos de manera serena y disciplinada en torno a las tareas concretas que se han planteado por poner todas las fuerzas del pueblo en tensión para la lucha" ("Central Única llama a unión de trabajadores", 1972).

Sin embargo, en la práctica, la falta de coordinación territorial de la CUT retardó la puesta en marcha de las instrucciones iniciales, aunque no impidió que fueran los trabajadores quienes pusieran en marcha sus propias estrategias para enfrentar la movilización de los patrones. Fundamentales articuladores fueron los sindicatos de base de las empresas que se coordinaron territorialmente para ejecutar las primeras acciones de resistencia, en aquellos polos industriales no solo en Santiago sino también en regiones. Así lo relató Hernán Ortega con respecto al Cordón Cerrillos-Maipú, cuando señala que, ante la coyuntura de crisis, activan las redes que se habían formado meses antes a raíz de un conflicto sindical en algunas empresas del sector, puesto que "se requirió una organización distinta que era territorial y que tenía que ver también con un proyecto de defensa del

gobierno y del proceso. [...] Esa es la conclusión de los trabajadores y por eso se decide transformar [...] a partir de este movimiento de solidaridad, una organización permanente, que se transforma en el Cordón Industrial" (Ortega, 2006).

A pesar de los emplazamientos a la moderación en sus acciones, los obreros agrupados, ahora no solo en la CUT sino también en nuevas organizaciones como los Cordones Industriales y los Comandos Comunales, fueron fundamentales para mantener el funcionamiento de las labores de transporte, carga y descarga de productos, especialmente, de primera necesidad y, más importante aún, la defensa del propio Gobierno Popular. Los trabajadores acogieron con entusiasmo y decisión la labor de mantener al país funcionando y combatir las maniobras desestabilizadoras de los sectores opositores. En varias empresas, ante la intención de los propietarios de paralizar las faenas, se tomaron las empresas y las hicieron funcionar: "El ambiente que reinaba en las secciones era de fiesta y con mayor entusiasmo y conciencia que nunca los obreros se mantenían trabajando y aumentando la producción. [...] Por su parte, Francisco Rojas señaló: 'Ahora nosotros tenemos que tirar pa'rriba, cooperar con el Gobierno, seguir luchando y, yo creo lo más importante, redoblar la producción'" ("CIC: Trabajadores tomaron posesión de la industria y doblarán producción", 1972).

La necesidad de defender a "su gobierno" y, simultáneamente su propio futuro, generó una mística particular que llevó a muchos trabajadores a realizar sacrificadas acciones para cumplir con su compromiso con "su gobierno". Así, lo recordaba Guillermo Orrego empleado de Standard Electric en la época: "Yo vivía en San Miguel y me iba 'a pata', muchas veces en camiones de la basura que nos llevaban gentilmente, puta parados allí atrás, un lote de 'hueones' (*sic*) ahí tomados del camión de la basura para llegar a la pega. Nos íbamos más temprano, bueno a veces llegábamos más tarde, pero llegábamos a la pega, había que llegar [...] nuestro propósito era que no nos quebraran, pero era muy difícil" (Orrego, 2006). De esta manera, la clase trabajadora respondió desplegando no solo su disciplina

laboral, sino también toda su creatividad para mantener funcionando las industrias, el abastecimiento y la producción, y evitando, junto al gobierno, que la oposición lograra sus objetivos. Esto generó un empoderamiento y la percepción de ser más protagonistas que nunca de la "vía chilena al socialismo".

Finalmente, un mes después de iniciada la crisis, la oposición gremialista depuso el movimiento, no sin antes conseguir del gobierno la formación de un gabinete-cívico militar, poniendo nuevamente a las Fuerzas Armadas como garantes del orden institucional. El gobierno y la CUT llamaron a los trabajadores a volver a producir con mayor ahínco, utilizando la capacidad organizativa demostrada durante el "paro patronal", pero ahora al servicio de la reconstrucción económica tan necesaria para consolidar los cambios obtenidos y defender al gobierno, guardando la creatividad y la combatividad para otro momento.

No obstante, la clase trabajadora ya había adquirido una percepción nueva de su rol y su protagonismo, no podía ser relegada solo a la esfera económica. Más que nunca, la lucha era no solo económica, sino y sobre todo política, "que no se llame a engaño el compañero Presidente. Fue la presencia física de millones de trabajadores lo que lo mantuvo en el Gobierno. Fuimos nosotros los que lo mantuvimos en el Gobierno. [...] Fuimos nosotros, camarada Allende" (*La Aurora de Chile*, 1972). Nuevamente, encontramos una clase trabajadora que demandaba mayor protagonismo, que estaba hambrienta de participación, de historia. La crisis de octubre significó un punto de inflexión para el movimiento popular y, para los trabajadores en particular. Los llevó al desarrollo de una iniciativa autónoma más allá de los canales preestablecidos para su participación, la organización de clase y territorial se impuso por sobre otras y los vinculó entre ellos, planteando un nuevo curso de acción (que en ocasiones causó problemas a la UP) para defender el proceso de cambios, basado en la iniciativa y la organización popular, en la solidaridad para enfrentar los problemas que surgieran en este camino. Lamentablemente, no fue suficiente la voluntad de un pueblo, frente a las armas y el horror.

A modo de reflexión

El experimento político llevado adelante por Salvador Allende y la UP terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973. El mayor proceso de transformaciones estructurales y democratización iniciado cien días antes llegaba a su fin para dar paso a uno de los períodos más oscuros y deleznable de nuestra historia nacional, cuyas fracturas y heridas han sido tan profundas que han vuelto a abrirse con mayor dolor tras el estallido social del 2019, junto a las medidas represivas adoptadas por el gobierno de turno. Sin embargo, también ha renacido la esperanza de justicia social y, especialmente, de dignidad para aquellos tantas veces postergados, que gritan hoy en las calles por esa dignidad y participación tanto tiempo negada. Por una democracia real.

En este marco, los 50 años de la llegada al poder de Salvador Allende y la Unidad Popular se tiñe de un significado aún más relevante. El gobierno de Allende se nos presenta como un proceso de transformaciones democratizadoras sin precedentes, que fue capaz de llevar a La Moneda los anhelos de las grandes mayorías y que (increíblemente) siguen siendo la bandera de lucha de tantos ciudadanos hoy. La dignidad de los trabajadores y campesinos, de las personas que construyen el país. Ese es, sin dudas, uno de los mayores méritos del gobierno de la UP: abrir espacios de participación a aquellos que no lo tenían, a integrarlos en decisiones que repercutirían en sus vidas y en la del resto de la sociedad. Ser parte de un proceso histórico, ser visibilizados desde su propio protagonismo, incluso desbordando las vías institucionales para convertirse en los artífices de su destino. Apoyaban al gobierno, defendían a "su gobierno", pero también defendían una lucha que iba más allá del gobierno.

El legado histórico y político de la UP renace en la actualidad y nos invita a retomar la senda de la democracia plena que quedó truncada hace 47 años. Si bien los contextos son diferentes, no es difícil apreciar la similitud en el fondo de las demandas de una ciudadanía

que clama por cambios profundos al modelo institucional y político implantado durante la dictadura y mantenido por sucesivos gobiernos hasta la actualidad. La justicia social y la dignidad del ser humano son los pilares fundamentales sobre los que debemos reconstruir nuestra historia como sociedad, colocando a las personas en el centro de las preocupaciones del Estado, tal como lo soñamos hace 50 años.

Referencias

Acta de acuerdo CUT-Gobierno. (1990). En O. Arias (ed.). *Los trabajadores y el gobierno popular.* México D.F.: Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo.

Castillo, S. (2009). *Cordones Industriales: Nuevas formas de sociabilidad y organización política popular durante el gobierno de Salvador Allende (Chile, 1970-1973).* Santiago: Escaparate.

Central Única de Trabajadores. Llamamiento a los trabajadores. (1971, junio), p. 16.

El Siglo. Los trabajadores tendrán participación en dirección de empresas estatales y mixtas. (1 de abril de 1971), p. 9.

El Siglo. Trabajadores y Gobierno unidos en la tarea común. (2 de mayo de 1971), p. 1.

El Siglo. Trabajadores se jugarán enteros contra la sedición. (27 de junio de 1971), p. 4.

El Siglo. Producción: Batalla política en el frente económico. (30 de julio de 1971), p. 7.

El Siglo. Textiles aumentan producción entre un 20 y un 100 por ciento. (14 de agosto de 1971), p. 6.

El Siglo. Trabajadores: Un año en el timón de los cambios. (3 de noviembre de 1971), p. 12.

El Siglo. Este Gobierno se pasó. (5 de noviembre de 1971), p. 7.

El Siglo. Regocijo de la clase trabajadora por designación de Hernán del Canto. (1 de febrero de 1972), p. 3.

El Siglo. CIC: Trabajadores tomaron posesión de la industria y doblarán producción. (19 de octubre de 1972), p. 5.

El Siglo. Trabajadores comienzan a dirigir definitivamente la economía. (19 de noviembre de 1972), p. 9.

Gaudichaud, F. (2016). *Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo. Poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende.* Santiago: LOM Ediciones.

La Aurora de Chile. (9 de noviembre de 1972), p. 1.

La Nación. Presencia de dirigentes mundiales es apoyo para el Triunfo Popular. (3 de noviembre de 1970), p. 4.

La Nación. Central Única llama a unión de trabajadores. (22 de octubre de 1972), p. 8.

Memoria del consejo Directivo al 6° Congreso Nacional de la CUT. 8 al 12 de diciembre de 1971. (2000). En V. Farías (comp.). *La izquierda chilena (1969-1973) Documentos para el estudio de su línea estratégica*. Santiago: Centro de Estudios Públicos.

Orrego, G. (25 de julio de 2006). (Sandra Castillo, Entrevistador).

Ortega, H. (21 de septiembre de 2006). (Sandra Castillo, Entrevistador).

Partido Socialista: Resolución Política del Congreso de La Serena (La Serena, enero de 1971). (2000). En V. Farías (comp.). *La izquierda chilena*

(1969-1973). Documentos para el estudio de su línea estratégica. Santiago: Centro de Estudios Públicos.

Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular. (1969). Santiago.

Winn, P. (2004). *Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo.* Santiago: Lom Ediciones.

Poder y partidos

Movimiento de Izquierda Revolucionaria y su lectura sobre la Unidad Popular después del golpe de Estado de 1973

María Olga Ruiz

Introducción

El surgimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en el año 1965, ocurrió en un escenario mundial y continental marcado por el ideal de la transformación. Durante este período, amplios y diversos sectores sociales abrazaron la promesa la revolución con el objeto de realizar un cambio radical de las estructuras sociales. La Revolución Cubana alimentó esos deseos y sirvió como ejemplo para muchas organizaciones de izquierda (Goicovic, 2012). El MIR abrazó el camino de la lucha armada como vía principal para alcanzar el socialismo, apoyó críticamente al gobierno de la Unidad Popular (UP) encabezado por Salvador Allende y elaboró una particular lectura acerca de la derrota de la llamada "vía chilena al socialismo". En el presente artículo me aproximo al modo en que esta organización construyó un relato acerca del gobierno de la UP y de sí mismo, en tanto movimiento que se autodefinía como vanguardia política del

proceso revolucionario chileno. El foco está puesto en las lecturas que el MIR realizó en los años posteriores al golpe de estado, es decir, entre septiembre de 1973 hasta fines de 1975, momento en que se cierra un ciclo de su historia política al quedar prácticamente destruido en términos orgánicos, producto de la represión dictatorial (Sandoval, 2004).

El foco de este artículo está puesto no tanto en las tensiones y conflictos existentes al interior de la izquierda chilena ni en el escenario regional y global del Chile de las décadas de 1960 y 1970, pues ambos procesos han sido suficientemente analizados por una nutrida bibliografía especializada (Fermandois, 2013; Harmer, 2011; Marchesi, 2018; Schlotterbeck, 2018; Stern, 2006; Winn, 2014), sino en la lectura que esta organización realizó sobre el golpe de Estado de 1973, a partir de la cual estableció responsabilidades políticas, asignó posiciones morales y definió líneas de acción para el conjunto de su militancia. De este modo, pongo atención a las figuras y representaciones que el MIR desplegó en los meses anteriores y posteriores al derrocamiento de Salvador Allende. El texto examina y pone atención a las lecturas que realizaron los dirigentes de la organización y, en consecuencia, privilegia el análisis de fuentes que expresan la voz oficial del MIR, a saber: documentación interna, prensa partidaria, cartas y entrevistas realizadas por historiadores a líderes destacados que han sido publicadas recientemente. No es el propósito de este texto examinar la experiencia práctica de la militancia revolucionaria mirista, siempre múltiple y diversa dependiendo de variables como la edad y género del militante, el territorio y la estructura orgánica en que se desempeñaron las tareas partidarias, o el momento en que militó (antes o después del golpe).

Este trabajo se inscribe en una corriente académica que reconoce la validez de la investigación del tiempo reciente en clave historiográfica, perspectiva que se ha consolidado en los últimos años con estudios que abordan las últimas décadas del siglo XX desde la historia política, social y cultural (Marchesi, 2006; Carnovale, 2009; Franco, 2012; Palieraki, 2014; Álvarez, 2011; Moyano, 2011; Casals, 2010). Estos

enfoques han apostado por la multidisciplinariedad como punto de partida analítico, favoreciendo los diálogos entre la historia, la sociología, la antropología y los estudios de la memoria social, entre otros. En términos teórico-metodológicos, el análisis acá propuesto entrelaza los procesos políticos con la interpretación que sus protagonistas –en este caso, los dirigentes– hicieron de ellos y de su tiempo. Asume que la aproximación a las acciones políticas de los sujetos debe considerar los símbolos, imágenes y discursos que desplegaron como parte de esas estrategias, en definitiva, como parte esencial de su forma de comprender y actuar en la realidad (Chartier, 1996a, 1996b; Lechner, 1986, 1987, 1988).

Algunos antecedentes

Es preciso señalar que el MIR no fue ni la única ni la primera organización chilena que abrazó la revolución como meta política. Tal como señala el historiador Julio Pinto Vallejos (2005), el ideario revolucionario no fue, en ningún caso, patrimonio exclusivo de las organizaciones de izquierda no tradicional y que él prefiere llamar, izquierda rupturista. Esto, porque los partidos Socialista y Comunista también se proponían, como objetivo último, alcanzar el socialismo a través de un proceso revolucionario (Álvarez, 2020). Para la izquierda gradualista chilena, la cultura política nacional de respeto a la convivencia pacífica y la legalidad vigente, hacía inviable alcanzar el socialismo a través de la toma violenta del poder. Desde su perspectiva, dado el atraso de las estructuras sociales y económicas del país, lo que correspondía era completar el tránsito al capitalismo para luego conquistar el socialismo a través del cumplimiento de distintas etapas. Ello, sin embargo, no suponía una renuncia al proyecto revolucionario; tanto así que en el año 1969 el Partido Comunista (PC) declaraba que su propósito último era abrir el paso a la revolución chilena, mientras que en el mundo socialista se apostaba por un cambio revolucionario, entendido como un cambio total del sistema

imperante (Pinto, 2005). De este modo, la revolución socialista era un objetivo compartido, tanto por la izquierda tradicional como para aquellas organizaciones que apostaban por un quiebre radical con el sistema imperante.

En la misma línea, los trabajos del historiador Rolando Álvarez Vallejos (2011, 2020) expresan la necesidad de evitar caricaturizaciones reduccionistas que bajo el rótulo de reformista ignoran que la política adoptada por el PC de la época incluía luchas sociales radicalizadas que no excluían la violencia. De hecho, la política de este partido se denominó vía "no armada" al socialismo, posición que apostaba por una lucha social vinculada a las masas que no descartaba el uso de diversos grados de violencia social. En la misma dirección, Marcelo Casals (2010) analiza exhaustivamente las tensiones, desplazamientos y quiebres al interior de la izquierda chilena a fines de la década de 1960 y demuestra cómo el giro hacia la izquierda involucró a amplios sectores políticos del país, incluyendo partidos de centro y de la izquierda histórica. Ejemplo de ello fue el proceso vivido al interior del Partido Socialista (PS), quien, de acuerdo con Casals, experimentó un proceso de leninización tras la derrota electoral de la izquierda del año 1964. Ello alcanzaría su máxima expresión en el XXII Congreso de Chillán, a partir del cual esta organización resolvió adoptar una línea abiertamente rupturista. De este modo, al interior de la izquierda coexistieron dos estrategias opuestas y excluyentes, que dieron origen a conflictos cada vez más agudos y violentos.

Estos planteos visibilizan los puntos de convergencia entre los diversos partidarios de la revolución y las coincidencias respecto a los fines últimos que se proponían; al mismo tiempo, ponen de manifiesto que las pugnas no estaban dadas entre una izquierda revolucionaria y otra que no lo fuera, sino en las formas de alcanzar esa meta, esto es, de modo gradual o a través de una ruptura radical. Así, es preciso discutir la utilidad histórica de las nociones de "reformismo" y "revolución" como dos polos excluyentes al interior de la izquierda, puesto que instalan acríticamente en el campo académico categorías que provienen del activismo político de ese período (Gaudichaud,

2016; Goicovic, 2012). No se trata de subestimar las diferencias entre las estrategias seguidas por las diferentes corrientes de la izquierda –y que para los propios sujetos fueron parte constitutiva fundamental de su identidad política– sino de visibilizar elementos compartidos y rasgos comunes en actores que se pensaron a sí mismos como radicalmente opuestos.

En este contexto, y desde su momento fundacional, el MIR definió que la vía institucional era una forma de traición a los intereses del pueblo, señalando en su Declaración de Principios que "el reformismo y revisionismo siguen traicionando los intereses del proletariado" al engañar "a los trabajadores con una danza electoral permanente" (Naranjo y Ahumada, 2004, p. 100). En el año 1969, uno de los dirigentes más destacados de la organización, Luciano Cruz, se enfrascó en un virulento debate a través de la prensa con Orlando Millas –intelectual comunista y posterior ministro del gobierno de Salvador Allende– sobre las diferencias estratégicas entre ambas organizaciones. Para Cruz, la política del partido fundado por Luis Emilio Recabarren no solo era errada sino desleal hacia los verdaderos partidarios de la revolución: "Todo esto, señor Millas y otros, tiene solamente un nombre: TRAICIÓN. Traición a los que han luchado durante años, traición a los que han pasado años en las cárceles, traición a los torturados, traición a los muertos" (*Punto Final*, 1969, p. 2).

Al calificar de este modo a quienes apoyaban la vía electoral e institucional para realizar transformaciones sociales, el MIR representaba las diferencias políticas e ideológicas en términos de lealtad y traición al pueblo y a los mártires de la lucha social. Desde su perspectiva, los partidarios de la vía institucional no solo engañaban al pueblo, sino que traicionaban la memoria de sus militantes (*vivos y muertos*). De este modo, las definiciones de sus adversarios dentro del mismo campo de la izquierda eran totalizantes y absolutas, y contribuyeron a crear una lectura de la realidad y políticas partidarias en la que parte importante de la izquierda era considerada como funcional a los intereses del sistema que se deseaba derrumbar. La representación de sus adversarios políticos como enemigos y traidores

revela hasta qué punto esta organización leía la realidad desde una lógica belicista entendida en clave revolucionaria. Esa comprensión del proceso político y de sus protagonistas fueron decisivas a la hora de definir políticas y acciones partidarias durante la UP y en el escenario inmediatamente posterior al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

El MIR en el escenario posterior al golpe de Estado de 1973

A diferencia del PC, que caracterizó al nuevo Estado como fascista, el MIR señaló que se trataba de una dictadura gorila (Naranjo y Ahumada, 2004). Así, la organización que acá analizamos impulsó la construcción de un movimiento de resistencia que consideraba diversas formas orgánicas y cuyo principal soporte eran los Comités de Resistencia y organizaciones clandestinas abiertas a militantes de cualquier partido de oposición. En esa dirección, levantó la consigna "El MIR no se asila", estableciendo el mandato de quedarse en el país para el conjunto de su militancia. Esa orden tenía como propósito la permanencia de sus cuadros en Chile para dar continuidad –en tanto partido de vanguardia– a la lucha por el socialismo y la resistencia antidictatorial (Goicovic, 2012).

En junio de 1974, la Comisión Política del MIR envió a las bases el documento "¡A Fortalecer Nuestro Partido! Los Golpes recientes, algunas lecciones y la Reorganización de las Direcciones", texto que entrega una versión oficial sobre la situación de la organización. Ahí se señala que los golpes represivos habían afectado mayormente a los cuadros medios y a algunos jefes de los llamados Grupos Político-Militares (GPM). En realidad, al momento de ser redactado este documento, un importante dirigente –Bautista Van Schouwen– ya había sido secuestrado en diciembre de 1973; sin embargo, la dirección de la organización asumía que seguía con vida. Importa señalar que el texto atribuía la responsabilidad de los golpes que azotaban a la organización a las negligencias de sus propios militantes afirmando

"que la totalidad de los dirigentes detenidos han sido por consecuencia de nuestros errores y en particular de los detenidos y no por un aumento espectacular de la eficiencia represiva" (Radrigán y Ortega, 1998, p. 333).

Durante este período, en la documentación partidaria se encuentran numerosas referencias a una supuesta reactivación del movimiento popular o a un repunte y rearticulación de los sectores opositores. Así se puede observar en el documento "A convertir el odio e indignación en organización de la resistencia", de octubre de 1974:

> La resistencia ha ido tomando cada vez más fuerza, uniendo desde abajo a la clase obrera, al pueblo y a la izquierda, creando miles de Comités de Resistencia. En este proceso el MIR se ha fortalecido y ha multiplicado su influencia en el seno de la clase obrera, incorporando a sus filas a un número crecido de la "vanguardia proletaria" (Naranjo y Ahumada, 2004, p. 332).

Es posible que estas afirmaciones se hayan formulado en base a la autoconfianza y a la decisión de no infundir el pesimismo en la militancia. Lo cierto es que, entre agosto y septiembre de ese año, la organización se vio seriamente afectada por la represión y se sucedieron los arrestos, secuestros y asesinatos de dirigentes y militantes (Palma, 2012). El escenario partidario empeoraría con el asesinato de Miguel Enríquez, fundador y líder indiscutido de la organización en octubre de 1974, cuya muerte fue exaltada y presentada en la prensa partidaria como una muerte heroica, que debía servir de modelo para el conjunto de la militancia.

Con Andrés Pascal Allende y Nelson Gutiérrez como nuevos dirigentes de la organización, en mayo de 1975 aparece el documento "El desempeño táctico y la situación actual del MIR", texto que ofrecía un balance crítico de la táctica asumida por el MIR en el escenario posterior al golpe de Estado. Ahora bien, al mismo tiempo que se formulaban estas autocríticas, se señalaba, paradojalmente que:

> La evaluación del desempeño táctico del partido a lo largo de estos 18 meses, demuestra el carácter adecuado y científico de nuestra táctica y la capacidad del MIR para enriquecerla a partir de la política revolucionaria concreta del conjunto del partido (MIR, 1976, p. 164).

En definitiva, se señalaba que los golpes recibidos no eran responsabilidad de las decisiones partidarias y se reafirmaban las políticas adoptadas por la organización.

En octubre de 1975 una reunión clandestina de la Comisión Política realizada en Malloco fue detectada por los aparatos represivos de la dictadura. El resultado fue un enfrentamiento armado que terminó con la huida y posterior asilo de los máximos dirigentes del MIR del momento (Pascal y Gutiérrez). A partir de entonces, la dirección partidaria se instaló fuera del país, desatando con ello un conflicto de amplia repercusión en la militancia que se encontraba tanto dentro como fuera de Chile. Ambos dirigentes habían incumplido un mandato que habían exigido sin contemplaciones al conjunto de la militancia y muchos de quienes se habían asilado sin autorización (pues hubo algunas excepciones muy puntuales) habían perdido su condición de miristas en el extranjero y quedaron relegados a participar en grupos de apoyo externos (Sandoval, 1990, 2004, 2012).

El MIR y su lectura de la Unidad Popular en el escenario posgolpe

A pocas semanas del golpe, Miguel Enríquez afirmó desde la clandestinidad que el fracaso del gobierno popular se debía a su naturaleza reformista, y que, por lo mismo, ni el socialismo ni la izquierda revolucionaria habían sido derrotados: "En Chile ha finalizado trágicamente una ilusión reformista de modificar estructuras socioeconómicas y hacer revoluciones con la pasividad y el consentimiento de los afectados, las clases dominantes" (MIR, 1976, p. 271). Desde esta perspectiva, el golpe no hacía sino confirmar lo señalado con tanta

insistencia por el MIR: la vía chilena al socialismo estaba condenada al fracaso. De este modo, Enríquez explicó la derrota de la UP citando a Saint Just: "quien hace revoluciones a medias, no hace sino cavar su propia tumba" (p. 271).

Como señala el ex dirigente mirista Roberto Moreno, al interior de la organización siempre existió claridad respecto al advenimiento del golpe de Estado (Pérez y Berástegui, 2016). Lo que el MIR, ni ninguna otra organización de izquierda, podía saber, era la magnitud de la represión que desplegó la dictadura sobre aquellos sectores que habían apoyado el gobierno popular. Ahora bien, la posibilidad del golpe era observada por el MIR en los siguientes términos:

> No veíamos como terrible que pasara algo así, sino que lo percibíamos como un refuerzo de nuestro discurso de acumulación de fuerzas social, militar y política. La idea es que la ocurrencia de un golpe legitima sin discusión el uso de la fuerza para conquistar el gobierno, o sea legitima la idea que nosotros teníamos de construcción de una fuerza revolucionaria (Pérez y Berástegui, 2016, p. 136).

Para esta organización, el reformismo obrero y el centrismo de izquierda habían impedido fortalecer el polo revolucionario en los últimos meses del gobierno de la UP. Mientras el MIR se preparaba para enfrentar a las fuerzas golpistas, "las conducciones reformistas solo predicaban el repliegue y el apaciguamiento y el gobierno permitía la represión abierta de las Fuerzas Armadas amparadas en la ley" (MIR, 1976, p. 198). Tanto esos sectores de la izquierda chilena como el mismo gobierno liderado por Allende fueron responsables –desde la perspectiva mirista– de capitular ante el golpismo y, peor aún, de dejar desarmadas y abandonadas a las masas populares, a merced de la represión dictatorial. Esa responsabilidad fue caracterizada como una acción criminal del reformismo, de modo que, en un documento de fines de 1975 elaborado por la Comisión Política del momento, se interpelaba a esos sectores reformistas a asumir la responsabilidad histórica que les cabía ya no solo en la derrota política de la UP, sino también en el baño de sangre desatado por la dictadura de Pinochet.

> Que la capitulación fue la última carta que jugaron el Presidente Allende, el reformismo y el centrismo lo prueban dramáticamente (...) el discurso ya preparado a través de una cadena nacional de radio y TV que pronunciaría el Presidente Allende ofreciendo la capitulación del proceso. (...) La derrota de septiembre de 1973 fue una derrota política y militar de la clase obrera, pero por sobre todo fue una acción criminal del reformismo que condujo a las masas con las manos atadas a los "hornos crematorios" de la sanguinaria dictadura gorila chilena. De nada vale echarle la culpa al empedrado de la ultraizquierda para ocultar la tremenda responsabilidad histórica que tiene que expiar el reformismo chileno ante nuestra clase obrera y nuestro pueblo (p. 198).

Las agudas críticas formuladas a la UP mientras esta coalición se mantuvo en el poder se volvieron más virulentas y agresivas en el escenario posterior al 11 de septiembre de 1973. Desde la perspectiva mirista, el gobierno encabezado por Allende había optado por claudicar ante los golpistas y negociar con sectores de la burguesía en lugar de apoyar a quienes querían resistirlo por la vía de las armas. El golpe había que enfrentarlo –más que evitarlo– y eso no se hacía negociando sino apoyando a la izquierda rupturista.

Al mismo tiempo en que se enfatizaba el fracaso del reformismo, se anunciaba un escenario político que podía y debía ser aprovechado por la organización en favor de sus propias políticas revolucionarias. Así se puede leer en un documento emanado de la Comisión Política de la organización fechado pocos meses después del golpe de Estado.

> La ilusión reformista de la UP no nos involucra, la deserción provocada por su fracaso solo nos rasguña. Hemos constituido orgánica, política e ideológicamente una generación de revolucionarios profesionales que hoy son una posibilidad revolucionaria abierta en Chile y el Cono sur. La situación chilena nos ofrece un desafío que somos y debemos ser capaces de vencer. Con una táctica adecuada, con serenidad, valor y audacia lo lograremos (p. 11).

El MIR no solo se desmarcaba del gobierno de la UP, sino que observaba el nuevo escenario como una oportunidad –un desafío– para conducir al pueblo bajo una política verdaderamente revolucionaria. La derrota reformista no solo confirmaba las líneas generales de su política, sino que ofrecía un espacio que debía ser aprovechado por la organización: derrotado el reformismo, había llegado la hora de los verdaderos revolucionarios. Esta lectura se afirmaba en un enorme optimismo y confianza en las fuerzas de la propia organización y en la capacidad de la misma no solo para enfrentar militarmente el golpe sino de conducir un proceso cuyo fin seguía siendo la revolución popular.

De este modo, para Miguel Enríquez el nuevo escenario no era del todo desfavorable y, por el contrario, podía convertirse en una excelente oportunidad para dar continuidad y conducción a la lucha revolucionaria. Con el fin de marcar una distancia radical respecto del reformismo y de mostrar fortaleza política, el MIR desplegó una ácida crítica a los dirigentes de la UP que se asilaron en embajadas para salvar sus vidas. El asilo fue leído en clave de guerra, es decir, como deserción y, en este marco, la política "el MIR no se asila" fue usada para subrayar sus históricas diferencias con la izquierda tradicional, la que –desde la perspectiva mirista– traicionaba nuevamente a la clase obrera al huir cobardemente del país.

> La impotencia reformista y la vacilación centrista de las semanas previas al golpe, después de este se transformaron, salvo excepciones, en deserción y asilo masivo de sus direcciones. (Nosotros)... alertamos a los trabajadores y al pueblo sobre la catástrofe a la que nos llevaba el reformismo, combatimos su política y levantamos otra; no fuimos gobierno, no hay escándalo o corrupción que nos puedan atribuir y el 11 de septiembre combatimos enfrentando al golpismo. (...) Tenemos la autoridad moral y la fortaleza orgánica suficiente para dar conducción al movimiento de masas y llevarlo al éxito (Naranjo y Ahumada, 2004, p. 277).

Es así como el MIR se autoasignaba el lugar de la lealtad y la consecuencia revolucionaria. Desde esta posición de autoridad moral y vanguardia política, esperaba ganar la disputa por la conducción de las masas, meta que no había logrado alcanzar durante los tres años de gobierno popular. Así, en un temprano testimonio de quien fuera miembro de la Comisión Política hasta 1974, el médico Humberto Sotomayor, podemos observar la posición de la organización en los primeros meses de la dictadura.

> A los pocos días del golpe, aprovechando la campaña de la dictadura, enfatizando que el gobierno popular era corrompido, nosotros afirmamos lo mismo en un documento público señalando que ellos se corrompieron, pero nosotros no. (...) Creíamos que el gobierno estaba desprestigiado y queríamos aprovecharnos de la coyuntura para ganar a las masas a nuestro favor haciendo propaganda de nuestra pureza y de nuestra ausencia de compromiso con el gobierno popular (Sotomayor, 1978, p. 80).

Gran parte de los documentos políticos y de la prensa partidaria de los meses posteriores al golpe enfatizan las fortalezas de la organización y al mismo tiempo, remarcan la derrota de los otros partidos de izquierda. Se describía así, un escenario en el que el MIR aparecía como el único capaz de enfrentar a las fuerzas represivas y de conducir al pueblo a la revolución. Frente a la derrota de la izquierda reformista, y la huida cobarde de sus dirigentes, no podía ser sino el MIR el llamado a conducir la resistencia popular antidictatorial.

> A pesar de los golpes y las deserciones, el MIR ha sido la organización de izquierda que ha desarrollado bajo la dictadura el más amplio y efectivo trabajo de masas, se ha fortalecido internamente, ha ganado para sus filas a los mejores cuadros de la clase obrera y el pueblo, ha levantado una plataforma de lucha para el período que es reconocida como propia por todo el pueblo chileno, se ha convertido en la más sólida esperanza del proletariado y las masas trabajadoras no proletarias y en el enemigo implacable de la dictadura y la reacción (MIR, 1976, p. 20).

Es importante señalar que en la lectura ofrecida por la organización acerca de las causas del golpe de Estado y del escenario inmediatamente posterior al mismo, se entrelazan argumentos políticos y morales, al señalar no solo la existencia de políticas equivocadas sino de conductas que fueron señaladas como moralmente inaceptables (huir cobardemente, abandonar al pueblo, entre otras). De ahí la reiteración sostenida y permanente de que únicamente los sectores de vanguardia (es decir, ellos mismos) combatieron activamente el día del golpe, mientras que los otros habrían optado "por el asilo masivo y total, el desvande (sic) y la desmoralización" (p. 222).

La política de permanecer junto al pueblo era –de acuerdo con la dirección política– fruto de una decisión política alejada de todo romanticismo, consciente de que ello les costaría la vida a muchos de sus militantes (MIR, 1976). Ese costo humano fue asumido políticamente como un precio que el MIR estaba dispuesto a pagar bajo la consigna de la entrega total a la causa de la revolución. Así lo planteó quien fuera uno de los máximos dirigentes de la organización, Andrés Pascal Allende, en diciembre de 1974: "En esta guerra a muerte contra la dictadura el combatiente de la resistencia, el militante del MIR debe estar dispuesto a sacrificarse por entero en la lucha (...). Quien no tenga esa disposición no tiene cabida en nuestras filas" (p. 359).

Ahora bien, pese a las adversidades propias del escenario posgolpe, el MIR señalaba que la crisis de los partidos de la izquierda tradicional había llevado al pueblo a adherir a la línea política revolucionaria que ellos encarnaban. Decepcionadas de la izquierda reformista, las masas habrían mostrado una apertura hacia la línea política del MIR, sin embargo, ese proceso natural y espontáneo debía ser estimulado por la propia organización, puesto que "las masas no pueden hacer por sí solas la crítica de su propio pasado político; la vanguardia debe ayudarlo a superar esas formas de conciencia atrasadas a través de una intensa lucha ideológica con el reformismo" (p. 219). Para el MIR, era indispensable que las masas se liberaran del peso de la tradición reformista y de formas de conciencias atrasadas

que habían llevado al pueblo a la peor de sus derrotas. De ahí que asumía como doble tarea tanto la lucha antidictatorial como el combate del reformismo. "Hoy debemos combatir no solo contra la dictadura sino también contra el peso de todas esas tradiciones muertas que, como Lázaro o el Ave Fénix, renacen una y otra vez para volver a encadenar al proletariado y a las masas al pasado y a los errores cometidos" (p. 221).

En esta línea, los documentos del período expresan el deseo de sumar nuevos militantes provenientes de otros partidos de izquierda que, desde la lectura mirista, estaban derrotados o en el exilio, en una clara alusión al PC, organización a la que además se responsabilizaba de poner obstáculos a la formación del Frente Político de la Resistencia. Se intentaba mostrar no solo a una organización sólida y fuerte, sino también la corrección de su línea política. Para eso, nada mejor que señalar que militantes de la izquierda reformista, decepcionados de sus antiguos dirigentes, se sumaban a las filas de los verdaderos revolucionarios. Ello funcionaba como un argumento que respaldaba la política definida por el MIR para el período: era, pues, el pueblo y las masas, quienes les daban la razón a los dirigentes de la organización.

En una entrevista al secretario general del MIR, Andrés Pascal Allende, de diciembre de 1974, quien sucedió a Miguel Enríquez en la conducción de la organización señalaba:

> Muchos militantes, dirigentes y sectores de los partidos de la izquierda tradicional que se mantuvieron en Chile se han integrado ya orgánicamente al movimiento de resistencia popular formando o impulsando los Comités de Resistencia o trabajan coordinadamente con el MIR. Entre ellos hay militantes de todos los sectores de la izquierda tradicional, incluso (y muchos) del Partido Comunista. (...) En Chile los militantes de la izquierda y los trabajadores han aprendido a través de la más dura y sangrienta experiencia que el camino reformista de la conciliación con la burguesía solo lleva al fracaso y hoy los militantes, la izquierda y los trabajadores aspiran a unir a la

> izquierda en un poderoso movimiento de resistencia conducido por una política revolucionaria y realista (p. 356).

Los llamados a la unidad de la oposición en torno al Frente Político de la Resistencia no tenían como propósito refundar el proyecto de la UP, iniciativa que –desde la mirada de la organización– ya había fracasado. Tampoco se tenía como objetivo último la restitución de una democracia burguesa, sino la derrota de la dictadura en la perspectiva de "crear las condiciones políticas y sociales para el establecimiento de un régimen proletario, para la creación de una situación revolucionaria en el país" (p. 227). Para lograr esa meta era indispensable establecer una alianza con sectores de la pequeña y mediana burguesía, pero bajo el liderazgo y conducción de la vanguardia proletaria que el MIR decía encarnar. El mismo Andrés Pascal señalaba que:

> El MIR busca la más amplia alianza con el reformismo y con la pequeña y mediana burguesía para resistir a la dictadura, pero siempre asegurando la conducción revolucionaria y proletaria. La meta no es solo el derrocamiento de la dictadura sino además constituir la fuerza revolucionaria que permita la conquista del poder socialista (p. 365).

Es preciso considerar que el público objetivo a quien iban dirigidos los documentos y la prensa partidaria de este período era la propia militancia mirista. Las condiciones de producción y circulación de este material eran de emergencia, clandestinidad y sobrevivencia, y en ese marco, parte importante de sus contenidos estaban orientados a fortalecer la moral y a animar políticamente a los integrantes de la organización.

Si bien no es posible establecer con exactitud el grado de información que las dirigencias tenían sobre la situación global del partido en un contexto represivo que se incrementaba día a día, se observa un decidido esfuerzo por exhibir fortaleza política y capacidad de movilización. De este modo, al mismo tiempo que se reconocían los golpes represivos y se admitían ciertas debilidades, había un esfuerzo desmesurado por mostrar a la militancia una organización

robusta, poderosa y lúcida políticamente. Se intentaba, ante todo, evitar la desmoralización y para ello era preciso subestimar el poder del enemigo y exagerar las propias fortalezas.

Con ese fin, la organización asumió una intención identificatoria con las masas, hablando en su nombre, y buscando en ellas la legitimación de sus acciones políticas. Al mismo tiempo, desplegó acciones comunicacionales orientadas a encubrir los golpes represivos para evitar que se extendiera el miedo y la angustia entre una militancia acorralada por el terrorismo de Estado. Una de esas operaciones fue organizada por Manuel Cabieses, director de la revista *Punto Final*, quien, en Ciudad de México a inicios de 1975, entregó una fotografía y una ficha clínica del dirigente mirista Bautista Van Schouwen, quien había sido detenido a fines de 1973 y cuyo paradero se desconocía. De acuerdo con esos antecedentes, el dirigente se encontraba vivo en el Hospital Naval de Valparaíso, información que se hizo circular como fundamento para exigir su liberación. De acuerdo con Carlos Torres:

> Esta operación de inteligencia política diseñada por la dirección del MIR representa el aspecto más controversial de la campaña por la vida y la libertad de Bautista. Es imposible que Manuel Cabieses hubiese decidido personalmente este artificio. En el MIR, ante complejas situaciones, este tipo de decisiones las tomaba la Comisión Política. Miguel había llamado al partido días después de la detención de Bautista y Patricio Munita, aún con la limitada información, a impulsar todas las iniciativas disponibles para dar con el paradero de Bautista y salvar su vida antes que fuese asesinado. Saber que esta operación había sido gestada por el MIR, a la señora Carlota le pareció muy cruel y controversial, causándole una gran indignación. A Astrid Heitmann le fue confiada la labor, años más tarde, de informar a la familia que la fotografía en el hospital Naval era trucada y que la finalidad era obligar a la dictadura a reconocer la detención de Bautista (Álvarez Vergara, 2018, p. 203).

De acuerdo con este testimonio, esta operación comunicacional fue parte de una política partidaria y no una decisión autónoma de Cabieses. Si bien es cierto que Miguel Enríquez había llamado a realizar todo tipo de acciones para encontrar a quien fuera su amigo y compañero de militancia, al momento del montaje hacía meses que había sido asesinado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), principal organismo represor que operó entre los años 1973 y 1977. Ello, sin embargo, no desmiente lo planteado por Torres, pues el operativo comunicacional de Cabieses era completamente coherente con la política que en ese momento estaba siguiendo la dirección partidaria: fortalecer la moral de la militancia minimizando los golpes represivos y exhibiendo una realidad partidaria que se alejaba dramáticamente de la realidad.

Conclusión

El análisis realizado permite observar el interés de la dirigencia del MIR por controlar la información que circulaba al interior de la militancia sobre el estado real de la organización, en favor de una versión oficial, unificada y controlada que evitara la indisciplina y el cuestionamiento a las órdenes que provenían de la dirección. De ahí la necesidad de subrayar las diferencias con las otras organizaciones de izquierda –claudicantes y reformistas–, el repudio expresado a militantes y dirigentes que se asilaron –desertores y traidores– y la promoción de un espíritu sacrificial cuya máxima expresión era la disposición a morir por la organización. Así se entienden los continuos homenajes a los compañeros caídos por la represión dictatorial; sus muertes eran entendidas como un sacrificio del pueblo-partido, que entregaba sus mejores hijos a la causa de la revolución. Asimismo, se señalaba que esas muertes debían servir de ejemplo para el conjunto de la militancia, estableciendo una relación directa entre consecuencia revolucionaria y disposición al sacrificio. Esas definiciones eran coherentes con los mandatos guevaristas adoptados desde un inicio

por la organización, disposiciones que establecían que en las revoluciones verdaderas solo había dos caminos: la victoria o la muerte. Evidentemente, en el período posterior al golpe de estado, la posibilidad de morir resultó ser mucho más que una consigna y se constituyó en una amenaza real para el conjunto de la militancia.

Finalmente, y tal como señala el historiador chileno Mario Garcés (2017), la lectura mirista sobre el fracaso de la UP fue errónea, pues la derrota de Allende fue también la derrota del movimiento popular y del propio MIR. Para Garcés, la aplicación forzada del modelo leninista (en especial su noción de vanguardia y la dualidad de poderes) a la realidad chilena, se expresó en un voluntarismo y en la conformación de una cultura política autoritaria que terminó por afectar su propio desarrollo como organización.

Esta mirada global del proceso estuvo presente desde los orígenes de la organización, lo que no deja de ser paradojal, pues en el período analizado el MIR no desplegó acciones armadas de envergadura. Las razones de esa disociación son múltiples: el triunfo de la UP, falta de medios para implementar una política armada eficaz, los errores de la misma organización, entre otros elementos que deben examinarse. Ciertamente, la violencia política debe ser comprendida más allá de la fuerza o la puesta en práctica de acciones armadas, pues considera también las representaciones, discursos y símbolos desplegados por el MIR en sus primeros 10 años de vida política (Baby, 2006). La lectura realizada por la organización expresa una comprensión de la realidad, de sus adversarios y de sí mismos en clave de guerra: traidores, enemigos, desertores y héroes.

En el relato épico construido por el MIR en el escenario posterior al golpe, la UP y las organizaciones que la apoyaron fueron calificadas como las responsables del baño de sangre que cubrió al pueblo y que el lugar del heroísmo y la consecuencia estuvo reservado para los verdaderos revolucionarios, es decir, ellos mismos.

Referencias

Álvarez Vallejos, R. (2011). *Arriba los pobres del mundo. Cultura e identidad política del partido Comunista de Chile entre democracia y dictadura, 1965-1990*. Santiago: LOM.

Álvarez Vallejos, R. (2020) *Forjando la vía chilena al socialismo: El Partido Comunista de Chile en la disputa por la democracia y los movimientos sociales (1931-1970).* Santiago: América en Movimiento Ediciones.

Álvarez Vergara, M. (ed.). (2018). *Bautista Van Schouwen. Que la dignidad se haga costumbre.* Santiago: Pehuén.

Baby, S. (2016). *Violence et politique dans la transition démocratique espagnole 1975-1982.* Tesis de Doctorado, Universidad Paris I. https://journals.openedition.org/mcv/1950?lang=es

Carnovale, V. (2009). *Los Combatientes. Historia del PRT-ERP*. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Casals, M. (2010). *El alba de una revolución: la izquierda y el proceso de construcción estratégica de la "vía chilena al socialismo" 1956-1970*. Santiago: LOM.

Chartier, R. (1996a). *Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marín*. Buenos Aires: Manantial.

Chartier, R. (1996b). *El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación*. Buenos Aires: Gedisa.

Fermandois, J. (2013). *La revolución inconclusa: La izquierda chilena y el gobierno de la Unidad Popular*. Santiago: Centro de Estudios Públicos.

Franco, M. (2012). *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y subversión, 1973-1976*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Garcés, M. (2017). La memoria como fuente de identidad y como disputa social y política, en A. Bello, Y. González, P. Rubilar y O. Ruiz. (eds.).

Historias y memorias. Diálogos desde una perspectiva interdisciplinaria. Universidad de La Frontera.

Gaudichaud, F. (2016). *Chile 1970-1073. Mil Días que Estremecieron al Mundo. Poder popular, cordones industriales y socialismo durante el gobierno de Salvador Allende.* Santiago: LOM.

Goicovic, I. (2012). *Movimiento de izquierda Revolucionaria*. Santiago: Escaparate.

Harmer, T. (2011). *Allende's Chile and the Inter-American Cold War*. Carolina del Norte: University of North Carolina Press.

Lechner, N. (1986). *La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado.* Buenos Aires: Siglo XXI.

Lechner, N. (comp.). (1987). *Cultura política y democratización*. Santiago: CLACSO-FLACSO-ICI.

Lechner, N. (1988). *Los patios interiores de la Democracia: Subjetividad y Política*. Santiago: FLACSO.

Marchesi, A. (2006) '*Ser como los peludos*'. *Proyectos revolucionarios e identidades sociales en la izquierda uruguaya de los 60* [Ponencia]. Princeton, Estados Unidos: Paradoxical Inequalities in Latin America.

Marchesi, A. (2018). *Guerrillas latinoamericanas, de los años sesenta a la caída del Muro*. Buenos Aires: Siglo XXI.

MIR. (1976). "Dos años en la lucha de la resistencia popular del pueblo chileno, 1973-1975". Selección de documentos, declaraciones públicas y discursos emitidos durante los dos años posteriores al golpe militar, serie p, N° 88, Colección "Biblioteca Promoción del Pueblo", Zero S.A.

Moyano Barahona, C. *(2010). El MAPU durante la dictadura. Saberes y prácticas políticas para una microhistoria de la renovación socialista en Chile*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Naranjo, P. y M. Ahumada (eds.). (2004). *Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile. Discursos y documentos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR*. Santiago: LOM.

Palieraki, E. (2014). ¡La revolución ya viene! El MIR chileno en los años sesenta. Santiago: LOM.

Palma Ramos, J. (2012). *El MIR y su opción por la guerra popular. Estrategia político-militar y experiencia militante. 1982-1990*. Santiago: Ediciones Escaparate.

Pérez, C. y R. Berástegui. (2016). *Memorias militantes. La historia de Roberto Moreno y el MIR*. Santiago: Ediciones Ventana Abierta.

Pinto Vallejos, J. (coord.). (2005). *Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular*. Santiago: LOM.

Punto Final (1969, 1 de julio). "Burlando a la policía", Año III, N° 82.

Radrigán, C. y M. Ortega. (1998). *Miguel Henríquez. Con vista a la esperanza*. Santiago: Escaparate.

Sandoval Ambiado, C. (1990). *MIR: una historia*. Sociedad Editorial Trabajadores.

Sandoval Ambiado, C. (2004). *Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 1970-1973. Coyunturas, Documentos y Vivencias.* Santiago: Ediciones Escaparate.

Sandoval Ambiado, C. (2012). *Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 1973-1980. Coyunturas y Vivencias*. Santiago: Escaparate.

Schlotterbeck, M. (2018). *Beyond the Vanguard: Everyday Revolutionaries in Allende's Chile*. Berkeley, CA: University of California Press.

Sotomayor Salas, H. (1978). La historia pasaba a mi lado. *Boletín Exterior del Partido Comunista de Chile*, 27.

Stern, S. (2006). *Battling for Hearts and Minds: Memory Struggles in Pinochet's Chile, 1973-1988*. Durham, CN: Duke University Press.

Valdivia, V., J. Pinto y R. Álvarez. (2006). *Su revolución contra nuestra revolución,* Vol. 1. Santiago: LOM.

Winn, P. (2014). *La revolución chilena*. Santiago: LOM.

El Grupo de Amigos Personales

Patricio Quiroga Z.

En los intersticios de los procesos históricos muchas veces pasan a la invisibilidad actores cuyos dramas y pasiones fueron oscurecidos por los actores de la primera línea. En esa perspectiva, esta investigación de campo, con carácter de relato historiográfico, tiene por intención presentar algunos aspectos de lo que fue la vida política y cotidiana de la escolta que acompañó hasta el último momento a Salvador Allende, el grupo que se anidó en la memoria popular bajo el nombre del Grupo de Amigos Personales (GAP).

Estamos ante un fragmento de historia adscripta a un proceso de mayor amplitud como fue el que desencadenó la Unidad Popular (1970-1973). En ese sentido, la historia cotidiana del Grupo de Amigos Personales (GAP) solo se puede comprender si se toma en cuenta que el hecho histórico liderado por Salvador Allende fue de trascendencia mundial (Quiroga, 2016). Hasta ese momento los cambios con sentido socialista habían sido a través de la insurrección (Rusia), la II Guerra Mundial (democracias populares), la guerra popular y prolongada (China), y la guerra de guerrillas (Cuba). A contrapelo, la propuesta de la vía político-institucional presuponía una transición incruenta a partir de la transformación del sistema institucional con

respeto a una Constitución que se presuponía había entrado en deconstrucción (Garcés, 1976).

Las izquierdas, desde los gobiernos del Frente Popular (1938) habían impulsado la transición desde el Estado excluyente de la oligarquía al capitalismo de Estado (Estado benefactor); además, debido a su participación en el sistema político, desde 1958, estaban profundizando la democracia liberal, protegida por poderosas organizaciones que incluía partidos políticos y movimientos sociales, altamente organizados, cohesionados por la existencia de una cultura contra hegemónica que confrontaba la violencia simbólica (Moulian, 2006). En este contexto, aquella generación detectó que en Chile había emergido un Estado-integral, caracterizado por la ligazón entre sociedad civil y sociedad política, donde el Estado no solo era un aparato gubernamental, sino también un aparato creador de hegemonía. En otras palabras, dominación política (dictadura) y dirección cultural (hegemonía) se equilibraban.

En ese Estado el poder efectivo unía explotación económica, dominación política y dirección ideológica, pero dejaba una brecha para irrumpir por la existencia, en la institucionalidad liberal, de una sólida representación de las izquierdas que impedía los intentos de recorte democrático de las derechas. Estas características diferenciaban a la sociedad chilena de aquellas sociedades en que la sociedad civil era primitiva, en donde las grandes mayorías eran fuerzas pasivas, receptivas y sometidas, donde la ausencia de sociedad civil permitía concebir el asalto al Estado. Así, se logró diferenciar entre la toma del poder que exigía detectar las brechas de la defensa enemiga e irrumpir en ellas en una ofensiva frontal de la organización político-militar, como había sido el caso de las revoluciones socialistas que habían triunfado.

Ha pasado medio siglo de la muerte de Salvador Allende y no obstante se suceden monografías, debates y homenajes. En ese contexto volvemos sobre el tema preguntándonos, ¿por qué una generación de jóvenes chilenos arriesgó/ofrendó su vida integrándose a la escolta del presidente Salvador Allende? ¿Por qué decidieron afrontar las

rigurosidades y peligros de incorporarse a esa primera línea? ¿Cuáles fueron sus razonamientos políticos y éticos? Cuestión compleja por su compromiso con la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS).

¿Por qué varios de ellos pasaron del monte, del escenario guerrillero, a participar en una escolta que prefiguraba la vía político-institucional? Esta no es una pregunta baladí. Varios de los integrantes de la escolta se habían autoproclamados como "Hijos del Che" (Aniceto), otros habían pernoctado en los "barretines" que cubrían el tramo Calama-Cochabamba donde se hacía acopio de armas, alimentos, medicina y tenidas para la guerrilla (Jano). No pocos habían frecuentado La Paz en espera de internarse en la montaña (Luisito), otros sin integrarse al GAP quedarían esperando el llamado para incorporarse a las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) boliviano (Fernando, Eduardo). Entrenados en el mítico Punto Cero o Baracoa, en la Isla, como se susurraba en aquel entonces, su atención estaba centrada en la lucha armada. Los viajes clandestinos por el mundo de ese entonces eran parte de sus vidas (Rodríguez, 2006). Su aspiración conducida por Elmo Catalán y, a su muerte por Arnoldo Camú, se había tronchado con la derrota de la guerrilla de Teoponte, impacto que les condujo a una profunda reflexión (Montiel, 2015).

Asumir una responsabilidad de tamaña naturaleza requería no solo de una férrea determinación, sino de profundos análisis políticos. Levantarse con la aurora, ejercitarse y preparar los "planes de caminamiento" hacia el palacio de gobierno, agudizar los sentidos, prevenir el atentado y disponerse a sucumbir, si era necesario, era parte de la diaria rutina por la cual solo los casados percibían un pequeño viático para la manutención de la familia. La visión-de-mundo del dirigente y sus escoltas marchaba a ese compás, el de la revolución de las esperanzas.

La ira de los vencedores no solo se ensañó con los cuerpos de los derrotados, también afectó al oficio del historiador. Enormes piras quemaron colecciones documentales, los archivos y diarios de vida crepitaron en las hogueras. Los propios afectados debieron

deshacerse de documentación comprometedora ante los allanamientos y registros de militares enardecidos. Una hoja comprometedora podía costar la vida. No obstante, desde la memoria histórica y derruidas hojas testimoniales se ha logrado establecer el pensamiento y los nombres de esa generación.

El GAP, evidentemente, no fue un centro de reflexión. Su objeto era la protección del dirigente y no la elaboración teórica; de manera que sus integrantes, bebieron de la savia intelectual que les entregaba la organización política y los debates en boga. Desde ese punto de vista asumieron posturas relativamente comunes en la izquierda de aquellos años; como militantes del Partido Socialista, asumían la Declaración de Principios de la organización (1933), compartían, además, el imaginario del rol que tenían los trabajadores manuales e intelectuales en la lucha por un mundo mejor (Jobet, 1987). Aquella fidelidad, evidentemente, correspondía a una visión que provenía desde la década de 1930 condicionada por un tipo de Estado caracterizado por la cuasi ausencia de sociedad civil lo que permitía pensar el asalto al poder.

En la perspectiva del cambio mundial y en el contexto de la guerra fría, los integrantes del GAP se veían a sí mismos como parte integrante de la trilogía que impulsaba el cambio: el campo socialista, los movimientos de liberación nacional y la clase obrera internacional. Reforzaban estas ideas-fuerza la adhesión irrestricta a la Revolución Cubana entendida como la punta de lanza de la revolución mundial en América Latina, experiencia de la cual valorizaban el papel de la vanguardia en los procesos de cambios sociales.

Y es que en América Latina, la década de 1960 fue muy convulsa. Hubo gobiernos militares que se inclinaron a la izquierda (Perú, Panamá), no faltaron los golpes de Estado (Bolivia), ni largas dictaduras (Brasil), operaban variadas guerrillas (Uruguay), y las repercusiones de la Revolución Cubana se expandían como reguero de pólvora (Ansaldi y Giordano, 2007). En Chile se vivía un fenómeno inédito en la región, desde 1964 la movilización políticamente activa de los sectores populares concentraba a cientos de miles de personas que exigían cambios estructurales. Estos cambios estaban contenidos en

el Programa de la Unidad Popular y en las denominadas "Primeras Cuarenta Medidas". En fin, para el equipo de seguridad, Chile era un país capitalista pobre y subdesarrollado, una periferia afectada por la miseria, la incultura y la enfermedad, razones por las que apoyaron la estrategia que postulaba el candidato presidencial.

En un marco de creciente polarización se inició la campaña presidencial de 1970. Allende llevaba la proclama a todos los rincones del país en medio del discurso violento de la derecha, la resistencia del centro demócrata cristiano, el escepticismo de parte de sus partidarios, la amenaza latente de sectores de las fuerzas armadas, una emergente violencia callejera y la hostilidad del gobierno de Richard Nixon. En ese clima avanzaba la campaña electoral; reparando en la vulnerabilidad del líder lo acompañaban, en los primeros meses, algunos funcionarios-amigos por propia iniciativa, pero ninguno de ellos sabía de protección del dirigente; de manera tal, que en abril de 1970 se incorporó Mario Melo (+), un ex militar, una boina negra, expulsado del ejército por su ideario de izquierda y proximidad al MIR.

También por aquellos días, un Pleno del Comité Central del PS concluía que eran posibles, un atentado por parte de un servicio de inteligencia extranjero, un atentado desde un sector de la derecha/ultraderecha, o un atentado desde las fuerzas armadas. También fue un factor de atención la posibilidad de un accidente por falta de protección adecuada (incidente caminero, estampida humana, envenenamiento, entre otros). Recuérdese, es el tiempo de la guerra fría y de abundancia de atentados y ajusticiamientos de dirigentes en diversas latitudes. Ante esta eventualidad, la organización de Allende decidió dotar al candidato de un grupo de protección nominando a Eduardo Paredes (+) y Gerardo Vidaurre. También se integraron en forma visible Fernando Gómez, un participante de la guerrilla boliviana y Enrique Huerta (+) caído en la defensa de La Moneda. En funciones invisibles participarían Félix Vargas, otro exguerrillero, posteriormente detenido-desaparecido, Alberto Pérez, decano de la Facultad de Bellas Artes (+), y su ayudante el joven pintor Eduardo Carvallo (+).

Pocos días después de la elección presidencial ingresó un nuevo grupo que provenía del MIR, Emérico García, Néstor Gallardo, Sergio Pérez (+), Max Marambio, Bruno Serrano, Mario Superby (+), Castelo (+), Urbano, Frank y Sergio. Allende tomó esta determinación considerando que había sufrido un par de atentados y algunas agresiones en plena vía pública. Además, aquella era una oportunidad para incorporar a una fuerza extra sistémica que había proclamado la lucha armada; fue una decisión que contempló la posibilidad de neutralizarlos e integrarlos al proceso político evitando que se convirtieran en factor de división del campo popular. El 10 de septiembre de 1971 se incorporarían los socialistas Domingo Blanco (+), Manuel Cortés, Daniel Gutiérrez (+), Miguel Fuentes, Osvaldo Arteaga y Alejandro. La tardanza en su incorporación se debió a que gran parte de estos eran socialistas-militantes del ELN boliviano; por lo tanto, tras la derrota de la guerrilla de Teoponte debieron reorganizar sus filas y discutir la nueva situación política.

Esto explica que, siendo el único grupo armado del socialismo, tardaran en incorporarse a las tareas de protección del dirigente. Este fue un primer paso, luego vendría la disolución y finalmente la aceptación progresiva del allendismo. Decisión política extremadamente compleja por la adhesión a una tradición teórica que hacía suyo el tema del empleo de la violencia en la perspectiva de la toma del poder, Pero, esa tendencia había variado desde 1958 con la apertura del proceso de profundización democrática (Moulian, 2009).

El 23 de octubre, un día después del asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, otro grupo de socialistas se incorporó para reforzar la seguridad: Elena Araneda, Jaime Sotelo (+), Luis Araya (+), Francisco Argandoña (+), Gabriel Gacitúa, Eugenio González, Willie González (+), Juan Correa, Juan José Montiglio (+), Arismando Muñoz (+) Manuel Cortés Jo (+), Wagner Salinas (+), Enrique Valladares (+), Osvaldo Ramos (+), Enrique Ramos, Fernando Chávez, Francisco Valiente (+), Lalo y Ronco. Poco después, la colaboración cubana se haría efectiva con la presencia de instructores militares, Tony de la

Guardia, José Riveros y tres colaboradores de los cuales solo quedaron sus "chapas" para el recuerdo: Balvino, El Guajiro y El Mexicano.

En fin, estos fueron los primeros militantes que consagraron sus vidas a la protección de Salvador Allende, quién el 22 de diciembre de 1971, envió al Congreso Nacional un proyecto que creaba el Departamento de Seguridad de la Presidencia de la República, señalando a los medios de comunicación (*El Mercurio*) que la violencia desatada después del 4 de septiembre de 1970, habría hecho necesaria su aceptación a la iniciativa de militantes que asumieron la decisión de protegerlo frente al peligro que acechaba. Nacía oficialmente el Grupo de Amigos Personales y una estructura compuesta por Escolta, Operativo, Guarnición y Servicios.

Si la fase final de la campaña electoral fue vertiginosa, lo que aconteció se convirtió en una vorágine de acontecimientos. A partir de las 17 horas, del cuatro de septiembre de 1970, las radioemisoras comenzaron a entregar cómputos electorales cada vez más pormenorizados. De manera que, poco antes de las 21, Allende confirmando la certeza del triunfo, convocó a una gran manifestación. Comenzaba así, de acuerdo con nuestros criterios de periodización, la fase del triunfo y asedio inicial.

Fue un día altamente complejo, cuando aún vibraban las últimas frases del denominado Discurso de la Victoria, se tenía noticias sobre una abierta deliberación entre los jefes de plaza que habían emplazado armamento pesado. Pero no era todo, la vieja estructura del edificio de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), desde donde se proclamó el triunfo, había dado señales de peligro por saturación y sobrepeso. Al día siguiente, fue promovido el pánico financiero, estimulándose el retiro de fondos de los bancos; dicho en otras palabras, se iniciaba el asedio reforzado por la idea de convocar a nuevas elecciones en plazo de sesenta días. Estas acciones bastaban para vigorizar la idea de mantener una Escolta Presidencial de carácter permanente. Y, si aún quedaba alguna duda, la campaña del terror, condujo al asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, y a

la presencia de un importante contingente operativo de la CIA (Whelan, 1995), hechos que despejaron el panorama.

Acto seguido, a partir del 4 de noviembre, comenzó la fase de la ofensiva popular. A partir de ese momento la vida cotidiana dejó de tener las características anteriores, la política irradió a todas las esferas trascendiendo lo público y privado, encendiendo profundas discusiones entre los integrantes de la escolta presidencial. Mientras tanto, fueron impulsadas aspiraciones político-simbólicas como la disolución del Grupo Móvil de Carabineros, se inició la entrega de medio litro de leche para los niños con el objetivo de contener la desnutrición infantil y antes de fin de año se firmaba el decreto de traspaso de los yacimientos de carbón de Lota al Estado, iniciándose también la compra de acciones bancarias, la profundización de la reforma agraria, al tiempo que se despachaba el proyecto de nacionalización del cobre.

En este contexto, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), uno de los partidos que apoyaban al gobierno concluyó que el partido debía estar preparado, "para enfrentar y derrotar la contrarrevolución" (Correa, 1971). Esto era una consecuencia directa de los claros-oscuros del Programa de la Unidad Popular. Pero, el MAPU no estaba solo en sus definiciones; el Partido Socialista, en el Congreso de La Serena, concluyó que se habían generado condiciones para "una efectiva conquista del poder" (Altamirano, 1971). Como consecuencia se resolvió la formación de una Comisión de Defensa dependiente del Frente Interno de la Organización de la cual dependería la Escolta Presidencial. Nuevamente aparecía el tema de la toma del poder entendiéndose el momento coyuntural como un momento de acumulación de fuerzas. Por aquellos días se integraban al dispositivo de seguridad, Francisco Acuña (+), Carlos Boada, Carlos Escobar, Hernán Medina, Víctor Olmedo, Benigno Puebla, Jorge Rabanal (+), Marcelo Schilling, Julio Tapia (+), Rubén Salinas, David Valderrama, Milton Silva, Hugo García, Isidro García y Lila.

La controversia requería una sólida respuesta sustentada teóricamente (Allende, 1971). El momento preciso fue el 21 de mayo de ese mismo año cuando Allende formuló ante el Congreso Pleno de la

República lo que denominó como la II Vía al Socialismo, propuesta fundamentada en la relación entre democracia y socialismo y en el anhelo de realizar el cambio social sin el trauma de la violencia (Casals, 2010). Acto teórico recusado por variados aliados; pero, que en el caso del GAP profundizó la ruptura con la experiencia guerrillera, aceleró la disolución de los grupos que aún mantenía la estructura, ahondó la valorización de la vía político-institucional iniciándose (confusamente) la transición desde la consideración del asalto directo al Estado a la teoría de tomar el poder sin asaltar el poder.

En el intertanto, vientos turbios comenzaban a arreciar. La Democracia Cristiana (DC) ponía en práctica la estrategia de los mariscales rusos con el objeto de cercar al gobierno; en el Partido Nacional, el ala liberal era desplazada por el nacionalismo extremo; Patria y Libertad llamaba a la constitución de un "Gobierno Autoritario", y el Grupo Tacna convocaba a las fuerzas armadas a perpetrar un golpe de Estado. Como corolario, las grandes organizaciones patronales la Sociedad de Fomento Fabril y la Sociedad Nacional de Agricultura (SOFOFA, SNA) anunciaban un cerco para asfixiar al gobierno. Pero, pese a todos sus esfuerzos, no había traza alguna de ruptura sistémica, las instituciones seguían funcionando con normalidad.

Esta tendencia cambió abruptamente cuando el 8 de junio de 1972, la Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), asesinó al ex ministro del Interior, el influyente demócrata cristiano, Edmundo Pérez Zujovic (Pérez Zujovic, 2013). La VOP pasaba a las acciones en el convencimiento de que el hecho de sangre podría "acelerar las contradicciones sociales". Para Allende, la acción del grupo estaba buscando, como en el inicio de la guerra civil española, un Calvo Sotelo para Chile. No se equivocó, porque inmediatamente se profundizó el alejamiento con la DC, la derecha afinó su estrategia de acercamiento con esta y se inició el aislamiento del gobierno.

El episodio de sangre se convirtió en el abismo histórico que progresivamente condujo a una nueva etapa, la fase de transición a la violencia abierta. Inmediatamente las pasiones se desbordaron. Ni el descubrimiento de los autores, ni la declaración de zona en estado de

emergencia, ni el decreto de duelo nacional, contuvieron el desborde de la violencia. Para los miembros del GAP fueron días difíciles, debió redoblar la vigilancia y redistribuir sus funciones por el alejamiento del MIR, ocasión en que se integraron Berta Chandía, Carlos Acuña (+), Fredy Araya (+), Carlos Escobedo (+), Francisco Lara (+), Oscar Lagos (+), Pedro Plaza, Renato González (+), Mario Pérez, Juan Vargas (+), Hilda Varas, Rina Balvederessi (+), William Ramírez, Julio Soto y Rodrigo Toledo.

Fueron momentos de enorme tensión porque ahora se produjeron un par de atentados menores junto a una gran profusión de amenazas. No obstante, Allende seguía llamando al diálogo a la Democracia Cristiana sin resultado positivo; aún más, se produjo un reordenamiento de la fuerza opositora, entrando en disputa dos líneas, la de cercar al gobierno para precipitar un golpe blando (DC) y otra que se orientó hacia el colapso del gobierno a través de un golpe de Estado (Partido Nacional), siendo el primer paso de este objetivo el copamiento de las ciudades, experimentado entre junio y octubre.

En la transición a la violencia abierta, los meses de noviembre y diciembre fueron determinantes, contexto en que la visita de Fidel Castro atizó los ánimos, constituyéndose diciembre en el mes decisivo por el traslado de la política desde el parlamento a la asonada callejera, con el agravante que a partir de la despedida del Comandante guerrillero, mediante la "marcha de las cacerolas vacías" apareció el componente paramilitar de derecha, especialmente, Patria y Libertad (Fuentes, 1999). Los comandos Rolando Matus, los grupos Tacna, Tizona y otros, ya no solo orientaron sus afanes hacia un pronunciamiento de las fuerzas armadas, sino que comenzaron a emplear el arte operativo.

La vida cotidiana del Grupo de Amigos Personales se transformó en un torbellino, la derecha reforzó la desobediencia civil, espiral de violencia que culminó con un nuevo intento de golpe de Estado a cuya cabeza se puso esta vez el general A. Canales, grave situación ante la cual la DC, nuevamente, se negaba a abrir el diálogo. Finalmente, en pocos meses, la oposición agrupada tras el Pliego de Chile

llamaría a participar en el Día del Silencio para, a continuación, convocar al Paro Patronal de octubre. La huelga general de octubre de 1972 tomó la forma de un paro generalizado con características insurreccionales en que se combinaron las maniobras legales (proclama), semilegales (copamiento de las calles) y clandestinas (sabotajes).

Pero el intento insurreccional fracasó. La derrota del paro de octubre significó un serio quebranto para la oposición, sector que además recibió un triple impacto, como fueron, el apoyo de la comunidad internacional al gobierno con motivo de la visita de Allende a Perú, México, Unión Soviética, Cuba y especialmente a las Naciones Unidas, ocasión en que fue acompañado por dos integrantes del GAP, ante indicios de atentados externos, Alejandro García y Daniel Gutiérrez (+). Cuando aún resonaban los ecos de la intervención presidencial en las Naciones Unidas, sobrevino un nuevo golpe con la incorporación de los militares al gabinete, a lo que se agregó una donación de alimentos proveniente de la Santa Sede.

Pero las disensiones comenzaban a cruzar a la Unidad Popular, lo que también afectó al GAP, retirándose Carlos Acuña (+), David Arce, Roberto Araya (+), Carlos Boada, Manuel Cortes, Carlos Escobar, Fernando Gómez, Marcelo Schilling, Víctor Olmedo y Rafael García de la Huerta. La razón: levantar un proyecto político en el norte grande.

Acto seguido, se iniciaba la fase del boomerang democrático. El ingreso de las fuerzas armadas al gabinete junto con desatar la crítica de la oposición posicionó a Protección Contra el Comunismo (PROTECO), peligrosa orgánica que se encargó de impartir en los barrios pudientes instrucciones sobre el uso de armamentos, explosivos y movimientos táctico-operativos, creándose un clima de terror a pocas semanas de las elecciones parlamentarias del 4 de marzo de 1973. Bajo esas circunstancias cundió un arma formidable de la oposición, la instauración del mercado ilegal, que llevó a miles de ciudadanos a hacer interminables filas para adquirir artículos de primera necesidad. De esa manera, se creó un fuerte malestar ciudadano profundizado con consignas como ¡Junten Rabia Ciudadanos!, estridencia acompañada con frases escritas en los muros que decían ¡Yakarta

Va! Una clara referencia al golpe de Estado que costó a la izquierda un millón de muertos en Indonesia en 1965.

La renovación de los parlamentarios fue crucial. Para la oposición tenía un carácter plebiscitario exigiendo la renuncia de Allende en el caso de ganar por sobre un 50% de la votación. Vano intento, porque la Unidad Popular sumó dos senadores y seis diputados subiendo su apoyo en comparación con el triunfo electoral de 1970. De esa manera quedaba cancelada la estrategia de cerco flexible, al tornarse imposible el desafuero del gobernante. La ocasión fue propicia para una nueva ofensiva opositora, en tanto que en la DC arribó a la dirección un sector acaudillado por Patricio Aylwin, que se orientó por la confrontación abierta.

En el invierno de 1973 la violencia estaba desatada. El volcán estallaría el 29 de junio con el primer ensayo insurreccional (García, 1971). A estas alturas Chile presentaba las características de una sociedad anómica, tanto que el 29 de junio se inició un alzamiento focalizado del regimiento Blindado N° 2, Maturana. Acantonado en la zona centro de Santiago los conjurados iniciaron operaciones con el objetivo de incentivar un alzamiento en cadena. Desafortunadamente para los perpetradores, fallaron las comunicaciones y la coordinación con Patria y Libertad que estaba detrás de la conspiración. Fue una prueba dura para el GAP, esta vez debieron acudir al pequeño arsenal, mantener la disciplina, disparar, asegurar los planes de caminamiento y afinar la cooperación de fuego.

En la oportunidad se rigieron por un plan de defensa previamente elaborado bajo el nombre de "Plan Santiago". Mientras contenían la ofensiva defendiendo el Palacio Presidencial se coordinó la acción con militares leales a cuya cabeza se puso el comandante en jefe del Ejército, Carlos Prats, operación que culminó con la rendición de los militares facciosos y con la retirada de la escena de los grupos armados de Patria y Libertad. En la oportunidad se incorporaron al dispositivo Rafael Ruiz, Juan Osses, Pablo Zepeda y Pedro Fierro (+).

Ante esta situación se sucedieron conversaciones entre la dirección del GAP, la Comisión de Defensa del PS y Salvador Allende, asesorado

por oficiales constitucionalistas. Ante las posibilidades de un golpe de Estado con mayor planificación y participación, se inició un rápido intercambio de ideas en torno a tres variables, a saber: i) preparar la defensa masiva del gobierno; ii) llamar a plebiscito o transar el programa; y iii) convencer al gobernante de salir del Palacio de Gobierno en caso de otro cerco aniquilador. Para los representantes de la Comisión de Defensa y del GAP el tema de la violencia estaba legitimado postulando la apertura del debate sobre el tema militar. Pero en los planes del gobierno no estaba el recurso a la violencia armada, transar el programa significaba el quiebre de la coalición de gobierno, preparar la defensa demandaba un vuelco radical, y abandonar La Moneda tampoco estaba en discusión por su carácter simbólico-institucional. En fin, el devaneo quedó en tablas, ahora correspondía el turno a los partidos para tomar definiciones.

Se iniciaba de esa manera la fase del desmoronamiento. Ante la crisis se produjo un cambio de gabinete, pero este no tendría el empuje para conjurar la grave situación. Fueron días muy complejos, incluso la Democracia Cristiana llamaba a la incorporación de las fuerzas armadas al gobierno, evidenciando una clara sintonía con un Memorándum Militar redactado por un Comité de Oficiales Generales que proponía medidas de carácter político para normalizar el país. No era todo, ese mismo partido rechazaría ahora dos nuevas invitaciones del gobierno para sentarse a dialogar. Incluso el 18 de agosto, el cardenal Silva Henríquez pondría a disposición sus buenos oficios para sentar al gobierno y la DC en la mesa de negociaciones... vano esfuerzo... el rechazo continuaría.

En el intertanto, los grupos operativos de oposición cubrían el país con diversos tipos de atentados. Por su parte, los militares aplicaban indiscriminadamente la denominada Ley de Control de Armas, pero estas no aparecían, por la sencilla razón que ese acopio no existía fuera de las que tenía la escolta. Aunque, en realidad, lo que perseguía la oficialidad conjurada era la preparación de la tropa para el golpe de Estado. La tendencia se agravaría el 22 de agosto cuando la mayoría opositora en la Cámara de Diputados declaró quebrantado

el estado de derecho, bloqueando finalmente la vía político-institucional. El golpe de Estado estaba *ad-portas* en circunstancias que el gobierno perdía la iniciativa.

Días más tarde, el 26 de agosto, el presidente Allende citaría en la residencia de El Cañaveral a quienes consideraba que estaban dispuestos a sangrar con él, su escolta y un grupo del Frente Interno del Partido Socialista (Quiroga, 2001). En medio de gran expectación, luego de saludar afablemente a los contertulios dio a conocer el motivo de la invitación. Partió indicando que el acuerdo de la Cámara de Diputados era el preludio de un golpe de Estado que consideraba estaba en desarrollo. Luego indicó que la declaración no solo había bloqueado la posibilidad de la II Vía, también había precipitado la renuncia del Comandante en Jefe y otros oficiales que mantenían lealtad a la Constitución.

Acto seguido, señaló los cursos de acción que estaba considerando: i) llamar a una gigantesca concentración para celebrar el III aniversario del triunfo de su gobierno; ii) insistir en el reclamo de mayor unidad de los partidos que le apoyaban; iii) hacer un nuevo llamado al diálogo a la Democracia Cristiana; iv) producir un cambio de gabinete; v) remover altos mandos militares; y vi) llamar a plebiscito (previa consulta a los partidos de gobierno). En ese momento los convocados se percataron del trasfondo de la invitación porque la posibilidad del plebiscito había sido rechazada por gran parte de la alianza que lo acompañaba y enfáticamente por la dirección del socialismo, solo el PC, aunque tardíamente, había dado su conformidad. Dicho en otras palabras, Allende estaba acudiendo a su reserva política, muchos de los allí presentes habían sido renuentes a la participación electoral, pero sus análisis políticos les había encaminado al encuentro con la vía político-institucional.

Los antiguos guerrilleros desvinculados del ELN boliviano y auto disueltos desde enero de 1971, escépticos de la vía electoral y que el propio Allende había convocado para su defensa personal, habían acercado posiciones con el Presidente y el proceso político; de manera que, cuando este agradeció sus desvelos y ofreció la posibilidad

de alejarse del cargo, nadie se fue, nadie vaciló. Impertérritos permanecieron Arnoldo Camú, responsable de la Comisión de Defensa (+); el curtido dirigente sindical, encargado del Frente Interno, Exequiel Ponce (+); Juan José Montiglio, jefe de la Escolta (+) y Ricardo Pincheira, responsable del área de la Inteligencia (+).

Con el golpe de Estado en marcha, dos días después, Allende comenzó a mover sus piezas convocando a un Gabinete de Salvación Nacional con incorporación nuevamente de militares y demócratas cristianos. Pero la posibilidad de desbloquear la vía político-institucional se estrelló con la negativa del PDC, con la renuencia de los militares y con la oposición de los sectores radicalizados que calificaron la propuesta como "Gabinete de Claudicación Nacional". Mientras tanto, el líder de Patria y Libertad gritaba a los cuatro vientos: "derrocaremos al gobierno, aunque haya miles de muertos". Un par de días más tarde la residencia del Cardenal era objeto de ametrallamiento, una advertencia para que no insistiera en intermediar en el diálogo. Horas más tarde, la residencia presidencial también recibía el fuego de la metralla. Como corolario, la armada introducía al país, procedente de Estados Unidos, un cargamento de armamento para combate en localidades, como quedó consignado en el documento "¿Cómo llegaron las Fuerzas Armadas a la acción del 11 de septiembre de 1973?", publicado por *El Mercurio* en conmemoración del golpe de Estado un año más tarde.

De esa manera comenzó la fase del sacrificio. Paradojalmente, no obstante el vendaval, el gobierno no había sido derrotado totalmente. Conservaba apoyo internacional, mantenía una alta capacidad de convocatoria, estaba sumando a la marginalidad, al subproletariado, a numerosas capas de pobres. Además, tenía el apoyo de poderosos movimientos sociales, entre otros, pobladores, la Central Única de Trabajadores, federaciones de estudiantes y casi todas las organizaciones campesinas, contando asimismo con cierto apoyo de la oficialidad constitucionalista y de importantes sectores de Carabineros. Pero la Unidad Popular estaba experimentando la derrota política que le condujo al inmovilismo de los últimos días.

A las 6:30 a.m. del 11 de septiembre, el secretario general del Ejército transmitió los radiogramas que iniciaron a las operaciones subversivas contenidas en el "Plan Ariete". La conjura pasaba ahora al aniquilamiento de la fuerza viva del enemigo como era la prédica de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Fue un plan que, además de la sorpresa operativa, tenía conocimiento del Plan Santiago. Fuera del posicionamiento territorial, se cortaron las comunicaciones, arreció la guerra psicológica a través de bandos, fusilamientos sumarios, proclamas, vuelo rasante de aviones, allanamientos, y el tronar de helicópteros (que ametrallaron poblaciones). De esa manera se buscó quebrar el estado de ánimo de los adherentes al gobierno (Gutiérrez, 2003).

No obstante, y aunque era evidente que se estaba ante un golpe de Estado institucional de las fuerzas armadas, el Dispositivo Presidencial tomó decisiones (Vidaurrázaga, 2013). La escolta se dirigió a La Moneda con el Presidente a la cabeza donde les esperaban funcionarios de Investigaciones (Policía Civil) que habían permanecido leales. Acto seguido, un grupo procedió a preparar la defensa del Palacio Presidencial y otro se atrincheró en el Ministerio de Obras Públicas. Media hora después, desde El Cañaveral llegaría otra escuadra, en tanto otra enfiló hacia Indumet, una fábrica del área metalmecánica, donde convergió con los pequeños destacamentos de la Comisión de Defensa del Partido Socialista (Garcés y Leiva, 2005).

En algunas horas la resistencia sucumbió (Cavallo y Serrano, 2013). El saldo para, ahora los amigos de la vida y de la muerte de Salvador Allende, fue trágico. De los veinte escoltas que combatieron en La Moneda sobrevivieron cuatro, incluso dos que salieron heridos engrosaron las listas de los detenidos-desaparecidos. Ellos fueron Antonio Aguirre, Manuel Castro, José Freire, Daniel Gutiérrez, Enrique Huerta, Oscar Lagos, Juan José Montiglio, Julio Moreno, Juan Vargas, Jaime Sotelo, Osvaldo Ramos, Luis Rodríguez, Julio Tapia, Oscar Valladares, Héctor Urrutia y Óscar Avilés. Los seis que defendieron La Moneda desde el ministerio de Obras Públicas lograron evadir el cerco, pero les esperaba la clandestinidad.

Del grupo que se desplazó desde El Cañaveral, se cuentan entre muertos y detenidos-desaparecidos Domingo Blanco, José Carreño, Carlos Cruz, Pedro Garcés, Luis Gamboa, Gonzalo Jorquera, Oscar Marambio, Jorge Orrego, William Ramírez, Edmundo Montero y Enrique Ropert. Dos integrantes de la Escolta Presidencial que intentaron plegarse a la defensa fueron detenidos y asesinados; a saber, Wagner Salinas y Francisco Lara. Mejor suerte corrieron los escoltas que fueron confinados en campos de prisioneros donde fueron sometidos al escarnio y la tortura, entre ellos, Miguel Fuentes, Alejandro Cid, Juan Osses, Gabriel Gacitúa, Pablo Zepeda, Fernando Chávez, Luis Barraza y Oscar Delgado (+).

Luego vino la cacería que condujo al ajusticiamiento de Arnoldo Camú, Mario Melo, Enrique Contreras, Carlos Acuña, Carlos Escobedo, Freddy Araya, Luis Barraza, Jorge Ojeda, Joaquín Walker, Javier Pacheco, Exequiel Contreras, Mario Superby y Félix Vargas.

En fin, la interrupción de la vía político-institucional significó un severo quebranto para la nueva estrategia de acercamiento democrático al socialismo. En la medida que avanzaban procesos de profundización democrática en diversas latitudes del sistema-mundo y se desarrollaba el Estado-integral, las posibilidades de transiciones incruentas se habrían acrecentado. En ese contexto se entiende la intransigencia de Salvador Allende de permanecer y defender el palacio presidencial, entendido simbólicamente como el centro de una democracia liberal en proceso de deconstrucción/ampliación que se defendió hasta la muerte, depositando así la acción antidemocrática en el militarismo, la derecha, la Democracia Cristiana y la injerencia estadounidense; de manera que, solo en ese trance histórico, relucieron las doscientas cincuenta armas, regaladas por el gobierno cubano, con que el GAP y sus compañeros de la Comisión de Defensa defendieron al gobierno hasta sucumbir.

Pero el sacrificio no fue en vano, quedaron para la posterioridad el apoyo a un proyecto de sociedad, un proyecto de gobierno, una política de alianzas, formas de organización y una ética que cincuenta

años después, no solo rompen los silencios de la historia, llegando a constituirse en un símbolo de resistencia y esperanza.

Referencias

Allende, S. (1971). Primer mensaje del Presidente Allende ante el Congreso Pleno. Talleres Gráficos Servicio de Prisiones.

Altamirano, C. (1971). Resolución Política del Congreso de La Serena. Boletín CC del PS (N° 9). Prensa Latinoamericana.

Ansaldi, W. y V. Giordano. (2007). *América latina. La construcción del orden* (vol. 2). Ariel.

Casals, M. (2010). *El alba de una revolución. La izquierda y el proceso de construcción estratégica de la "vía chilena al socialismo", 1956-1970*. Santiago: LOM.

Cavallo, A. y M. Serrano. (2013). *Golpe, 11 de septiembre de 1973*. Santiago: Uqbar Editores.

Correa, E. (1971). El primer año del gobierno popular. *Unidad Proletaria,* 1.

Fuentes, M. (1999). *Memorias secretas de Patria y Libertad*. Santiago: Grijalbo.

Garcés, M. y Leiva, S. (2005). *El golpe en la Legua*. Santiago: LOM.

García, P. (1973). *El Tancazo de ese 29 de junio*. Santiago: Quimantú.

Gutiérrez, E. (2003). *Ciudades en las sombras*. Providencia, Chile: Publiprom.

Jobet, J. (1987). Historia del Partido Socialista de Chile. Documentas/ Estudio.

Garcés, J. (1976). *Allende y la experiencia chilena*. España: Ariel.

Montiel, D. (2015). *Un chilote en la guerrilla guevarista*. Santiago: Anaquel Austral.

Moulian, T. (2006). *Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende*. Santiago: LOM.

Moulian, T. (2009). *Contradicciones del desarrollo político chileno, 1920-1990*. Santiago: LOM.

Pérez Zujovic, M. (2013). *La gran testigo. El asesinato de mi padre durante la Unidad Popular*. Santiago: Catalonia.

Quiroga, P. (2001). *Compañeros. El Gap: la escolta de Allende*. Santiago: Aguilar.

Quiroga, P. (2016). *La Dignidad de América. El retorno histórico a Salvador Allende*. Santiago: Escaparate.

Rodríguez, G. (2006). *Teoponte. La otra guerrilla guevarista en Bolivia*. Cochabamba, Bolivia: Kipus.

Vidaurrázaga, I. (2013). *Martes once la primera resistencia*. Santiago: LOM

Whelan, J. (1989). *Desde las cenizas. Vida, muerte y transfiguración de la democracia en Chile, 1833-1988*. Santiago: Zig-Zag.

Luchas sociales y alianzas políticas
Actualidad de la epopeya de la Unidad Popular

Carlos Ruiz Encina

Como ocurriera desde sus propios días, la experiencia chilena de la Unidad Popular (UP) sigue concitando atención a medio siglo de su existencia. Como epopeya en la senda de las luchas de los pueblos latinoamericanos y del mundo entero, recuerda que la gesta de los pueblos no es pasado inmóvil. Vuelven una vez tras otra a repaso, en la medida que los pueblos siguen empeñados en horizontes de emancipación. La historia de la UP es fértil en esta perspectiva. En muchos sentidos puede el presente internarse en sus pasajes, y relevar elementos de actualidad que ensanchan su significación.

Más allá del homenaje está la trampa de la evocación pasiva de un pasado de espaldas al presente. Pero el presente lo reinterroga desde sus nuevas condiciones, como necesidad para reflexionar sobre sí mismo. Hoy, que se naturalizan los cambios como una inevitable y única globalización, urge recuperar la especificidad de la condición latinoamericana, de sus procesos políticos y sociales, que apunta en su singularidad aquella gesta.

La experiencia de la UP es especialmente rica en un dilema que vuelve a atravesar a las luchas populares: la relación entre las

alianzas políticas y las luchas sociales. El carácter popular de la UP, relevado continuamente, es también el de un pueblo diverso y heterogéneo, con significativas diferencias en su composición de clase e intereses sociales, cuya unidad política, en un curso en el que la UP es solo el hito culminante, es el gran legado para los desafíos presentes. En contraste, el pueblo chileno hoy se enfrenta a una de las experiencias neoliberales más avanzadas del planeta y, desde su condición pionera, que iniciara durante la dictadura que interrumpe el proyecto popular del siglo XX, abre la posibilidad, ahora en el siglo XXI, de sepultar esa nefasta modalidad de expansión capitalista en la propia tierra que la vio nacer. Es un nuevo pueblo, que emerge de las propias transformaciones que acarrea tal giro capitalista, del nuevo mapa de clases y grupos sociales (Ruiz, 2020), donde vuelven a resonar los dilemas de la articulación política de la diversa y prolífica marcha de luchas populares de nuevo carácter.

Aquella gesta vuelve a sonar. La noción de pueblo apela a una forma histórica de la conciencia social, enfrentada a un modo oligárquico de dominio (en el sentido clásico de "poder de pocos"). El pueblo es, así, un sujeto histórico compuesto de una heterogeneidad de posiciones sociales, clases y grupos, cuya articulación política constituye un complejo reto. Aunque la estructura social chilena es hoy diferente de aquella de la UP (Ruiz y Boccardo, 2014), muchos de los dilemas de articulación política de la heterogeneidad popular se reiteran y desbordan los cursos de alianzas de las fuerzas políticas.

En el marxismo, también en el debate sociológico que incluye la línea neoweberiana de análisis de clase, se discuten las nociones de explotación y de dominación, con el fin de comprender las estructuras de clases del capitalismo contemporáneo, sus confrontaciones más relevantes y advertir sus proyecciones. Ello puede verse, entre otras, en las contribuciones de John Roemer (1989) y Gerald Cohen (1979), así como en la articulación que de tales conceptos formula Erik Olin Wright (1994) y en los debates que sostiene con John Goldthorpe (1992).

En la discusión latinoamericana, debido al carácter excluyente que adopta el capitalismo, se releva, de modo específico, la noción de exclusión. Para repasar el proceso de la UP, interesa recuperar tal distinción a partir de su significación política. Bajo la fisonomía que adopta el desarrollo capitalista por estos lares cobra distintiva relevancia la cuestión de la exclusión, sus efectos en la heterogeneidad popular y los dilemas de las alianzas políticas para erigir una izquierda.

Por cierto, esta orientación difiere de una difundida literatura donde las luchas políticas se abstraen de su carácter social o de clase, bajo una generalidad confusa que ignora los dilemas políticos que cobija. Un propalado relato sobre la UP centrado en las divergencias de figuras y direcciones políticas ignora el laberinto de la lucha de clases y reduce a una imagen elitista el conflicto de la izquierda. Aquí interesa esa complejidad de la forja de la unidad política de la diversidad popular, tan relevante en aquella situación como hoy.

Pasado y presente de las luchas populares

El dilema de revisar un tiempo tan corto e intenso está en distinguir lo pasajero de aquello que indica trascendencia, observar la coyuntura rebasando el tiempo propio de la crónica. Historiadores en la senda de Lucien Febvre y Marc Bloch apuntan a ello como dialéctica de la duración. El examen del presente obliga a volverse al pasado para advertir los procesos más relevantes y distinguirlos de hechos que, más allá de su vigor momentáneo, son efímeros en cuanto a historicidad. En tanto mirada que busca aprehender la totalidad de lo social, obliga a empalmar duraciones diversas, estructuras y coyunturas. Es una historia que no se puede eludir en la comprensión del presente, un recuento que se abre al empeño de captar el sentido del movimiento de los procesos sociales. Es el movimiento de la historia, su dialéctica que discurre del pasado al presente y hasta el mismo futuro.

La revisión del tiempo corto empuja al relato dramático, al hecho explosivo. La tentación, al otro extremo, pretende integrar la historia entera y la condición humana en todo evento. De Croce a Sartre, pasando por Braudel, esas discusiones son largas. En una banda, es el tiempo episódico, a la medida de lo cotidiano. En la otra, la estructura alumbra cuestiones de larga duración, ataduras que sujetan una realidad que apenas se renueva y cifran un tiempo casi inmóvil donde echan raíces coacciones espirituales y encuadramientos mentales. Otras se desploman raudamente. Pero todas son sostén y obstáculo, lindes de los que el individuo y sus experiencias no pueden emanciparse. Evitar el ahogo en ambos extremos supone asumir que presente y pasado se aclaran mutua y recíprocamente. "Los hombres hacen la historia, pero ignoran que la hacen" espeta Marx, una idea que esquivan muchos seguidores. Viviendo su tiempo, los individuos tienen la impresión de captar su movimiento. Pero la historia corre más allá de las luces fugaces. El reparto entre diáfana superficie y opacas honduras es enrevesado. El dilema es relevar las estructuras profundas de la vida como sus rupturas, su brusco o lento deterioro bajo fuerzas contradictorias. El marxismo ayuda, si se rescata del formalismo que lo momifica como explicación previa, aplicable a todo lugar. Un problema para captar la especificidad latinoamericana que atraviesa sus procesos políticos y sociales.

La mirada que hoy campea sobre su historia, incluida la experiencia de la UP, no escapa a los cambios del capitalismo en la región y sus convulsiones políticas. Un giro intelectual cruza al pensamiento criollo. El mapa social actual emerge de las cenizas del pasado arrasado, y las formas de verlo no son independientes, se ligan a la desarticulación de actores como el movimiento obrero y las viejas clases medias bajo el avance neoliberal. La desarticulación de sus condiciones sociales arrastra consigo formas de interpretación de la sociedad, mentalidades, una cultura. No son cambios que operan por encima de los actores; son producidos por estos. El conflicto social de la historia reciente es el teatro donde se dirimen relaciones de poder que fijan el rumbo del patrón de desarrollo y sus efectos sobre grupos

sociales, como estos, que son expulsados de la construcción del Estado. Tal giro en la forma de apreciar la realidad abre una opacidad social que desliga a la política de sus viejos significados sociales. Bajo la reorganización de los modos de diferenciación y jerarquización sociales, la política se vuelca a un elitismo que cierra acceso a gran parte de la sociedad. Es el sello antipopular de la ofensiva dictatorial, pero también su proyección en la etapa democrática. La dominación no apela a un Estado que regule un pacto social, sino a proyectar la exclusión. La gobernabilidad democrática apuesta a la desarticulación social heredada y la lógica representativa se reduce a un ciudadano con abstracción de su condición social.

La idea de un coherente giro neoliberal que enriela la marcha de las postrimerías del siglo XX resulta dudosa en América Latina. A menudo se mezcla con otros estilos de desarrollo (Ruiz, 2019). ¿La experiencia chilena es un patrón tan ortodoxo como irrepetible? Es un asunto plagado de ideologismos. Si la dependencia es común a la región, difiere en situaciones nacionales y su efecto en el mapa de clases sociales. Distinguir en tal sumisión externa es relevar la acción de grupos locales y las diversas alianzas que la operan, cómo se articula el poder interno. La dependencia regional abre una difícil dialéctica entre lo externo y lo interno. El siglo XX ilustra el fracaso de copias occidentales y el auge de movimientos arropados en mezclas de nacionalismo, reformismo social y autoritarismo. Sin claras ideologías de clase, como las que alumbran el capitalismo europeo, un ideario nacional-popular prima en los procesos sociales y políticos locales.

No es caso atizar viejas reyertas, sino apuntar que se diluye el debate de la especificidad política y social. Reducir todo a efectos de la Guerra Fría o la globalización, ignora que tal injerencia se apoya en cursos internos. Que, el Estado en la región, más que eslabón mecánico del dominio externo, es Estado patrimonial al servicio de sus dirigentes. Que muchos rasgos de las dictaduras no resultan singulares, y su irrupción escapa a la imagen liberal que opone democracia y autoritarismo, y enfatiza las libertades políticas

perdidas. La idea del Estado de derecho, un régimen de partidos y de garantías ciudadanas, no es la práctica política dominante en la América Latina del siglo XX. La ausencia de democracia es recurrente. La dictadura irrumpe ante una crisis de dominación con el auge de las masas populares. Por eso, sus rasgos abundan en nuestra historia política e, incluso, muchos prosiguen bajo las "nuevas" democracias.

El neoliberalismo se oscurece como traspaso indiscriminado de funciones estatales al mercado. La pérdida de derechos sociales bajo la privatización de las condiciones de vida no diluye el peso estatal (Ruiz, 2019). Predica iniciativa individual en lugar de prácticas asociativas, pero forja un subsidio estatal a nuevas formas de acumulación privada. Los idearios del capitalismo central resignifican su sentido bajo el metabolismo local y abren una peculiaridad que no es calco ni copia. En este curso, la epopeya de la UP es una versión radicalizada de esa crisis y de los giros de refundación que le siguen.

¿Qué ver hoy en la experiencia de la Unidad Popular?

La singularidad de la UP hoy resulta inaprensible sin recuperar esta óptica del proceso histórico. No se divisa al margen de la especificidad latinoamericana. La drástica y sabida injerencia estadounidense en su colapso abre una lectura conservadora que reduce esta gesta a las tensiones de la Guerra Fría. Obstruye, así, la apropiación de su complejidad, por abrir caminos; es la lectura sobre la UP de la dominación que le sigue. Resituar su andar, su proyecto e influjos, dar paso a la complejidad del proceso, es evitar el homenaje inerte, de cara al presente.

Su espíritu enfila un complejo que opaca el choque soviético-estadounidense. Primero, el ideario y el proyecto de la UP se apartan del énfasis restrictivo en una primacía de la clase obrera, en favor de la idea de un pueblo multiclasista que trae un largo curso de elaboración y debates, por donde pasan muchas dificultades de unidad de la

izquierda chilena décadas antes. Pesa ahí la diferente trayectoria del socialismo chileno respecto a la ruta clásica del socialismo europeo, y la senda comunista apegada a la fórmula soviética. Por eso recela de la UP la dirección soviética, y su apoyo es esquivo en los años más duros. Sus tensiones reflejan su anclaje en una diversidad de grupos subalternos. La UP no busca expresar a una clase en particular, sino encarnar una alianza social amplia.

Su apego al marxismo es de una amplitud que choca con muchos dogmatismos y llama la atención internacional. Busca reelaborar un ideal de soberanía y un contenido nacional que redefine el antiimperialismo, poniéndolo en una órbita latinoamericanista que topa con fórmulas foráneas y sus embajadores locales. Su choque con las oligarquías agrarias y el conservadurismo eclesiástico enfatiza la reforma agraria y la lucha campesina, el laicismo y el cambio en el sistema educativo, acercándola más a ideales de cambio latinoamericanos que a proyectos del marxismo europeo, occidental y soviético. Incluso, cobija un desafío al burocratismo del socialismo este-europeo, en un ideal de democracia popular que debate la participación popular y hasta obrera en las empresas estatizadas, advirtiendo los efectos de la burocratización estatal en los partidos.

La UP se vincula a movimientos anticolonialistas y de liberación nacional, en una ola tercermundista; se liga la lucha argelina y la orientación yugoeslava de no-alineación. Redefine, así, el horizonte anticapitalista más usual de las izquierdas, al no sumarse a la égida comunista de la URSS. La UP, en su formación, como proyecto y práctica, aprecia como limitante a las posibilidades de las luchas transformadoras en el Tercer Mundo y América Latina la forma que adoptaba el choque capitalismo-socialismo como bloques militares que reducen esos horizontes de transformación y emancipación. De ahí la madeja de hilos que concurren en este ideario de izquierda socialista. La historia política y social latinoamericana, sus luchas e idearios, desde la Revolución Mexicana a las ideas de la Acción Popular Revolucionaria Americana (APRA) que lidera Haya de la Torre en

Perú, el peronismo argentino a partir de la década de 1940, Mariátegui y el Che Guevara.

Su forja se ancla en una sociedad chilena que cruza una brusca mutación social y cultural, en su dilatada salida del orden oligárquico agrario hacia una modernización en que chocan disímiles proyectos. La UP entra en ese desafío y fragua una alternativa de modernización socialista y popular para esas condiciones nacionales. Ese proyecto de cambio arma un curso de modernización como estrategia política, de formación de fuerzas populares para tal giro histórico (Arrate y Ruiz, 2020). Ahí, se forjan horizontes económicos y políticos en los que se debaten, con intensidad distintiva, dispares herencias locales y externas. Una concepción del individuo, la libertad, la democracia, el desarrollo y el humanismo, marcan una estrategia de cambio, donde se elabora y debate sobre líneas para cambiar las condiciones concretas chilenas. Los liderazgos capaces de aglutinar a esa heterogénea izquierda que, ya en la década de 1960, detenta un amplio arco de influencias ideológicas, permite apreciar la figura de Allende. Desde la realidad nacional se dialoga con experiencias externas y se piensa una estrategia.

Distinguen a la UP aquellos debates estratégicos que, al contrario de muchos partidos socialistas y comunistas del siglo XX (en la URSS, el resto de Europa y gran parte del Tercer Mundo) no cifra las metas del socialismo en cuestiones como el auge económico, tecnológico o la seguridad, compitiendo con el capitalismo liberal, sino en la democracia y la libertad, proponiendo una visión política distinta, ocupada del humanismo, la democracia social, la soberanía política y la independencia económica.

La UP incide en la formación de la cultura política de las luchas populares, con la idea de "revolución chilena", que asume el cambio latinoamericano desde el dilema del desarrollo que delinea el carácter socialista. Proyecta una revolución hacia el socialismo, en la idea de crear las condiciones para abrir tal alternativa. El sentido antiimperialista se ancla en la soberanía nacional-popular y reclama riquezas básicas bajo control externo. Una línea anti feudal encara el

atraso latifundista. El sello clasista busca unir grupos de trabajadores con otras fuerzas sociales, grupos medios e incluso burgueses no atados al imperialismo y la oligarquía, capaces de insertarse en los planes de cambio. El ideal democrático apunta a ampliar la soberanía popular y a abrir el Estado a las mayorías, como control popular económico. El ideal humanista apunta a ubicar el progreso en dignificar la condición humana. Su latinoamericanismo propugna no una simultaneidad de la revolución, pero sí una integración económica como lucha conjunta de nuestros países.

La singularidad de estos horizontes –ignorados– apuntan la compleja construcción de la mayor unidad de la izquierda en la historia chilena. El proceso de la UP se erige entre los más originales de la izquierda latinoamericana del siglo XX y son de significación global. Su llegada al gobierno en 1970, por la vía legal, y luego el golpe militar, marcan los hitos más visibles. Su gestión y el violento desenlace atrapan el debate, pero su formación como alianza social y política se atiende menos. Su fundación no es tanto su llegada, sino un largo recorrido. Valga apuntar al menos tres rasgos.

Su fundación es posible gracias a un programa común a sus fuerzas, que dista harto de lo que hoy supone en elaboración y significado político, como suma de políticas sectoriales y recetas específicas propias de la mirada administrativa neoliberal de la transición, cuyos términos de unidad se reducen a distribuir esferas de poder. El programa de la UP, con sus luces y límites, fue una estrategia de cambios. Basada en una lectura de la sociedad, hila una alianza social y una acción política y económica. El debate en su formación fue de naturaleza estratégica y, sobre él, se asienta la unidad, así como sus problemas. Un hito que interpela hoy su reducción a dilemas de administración y reparto electoral.

Su formación también supuso procesar diferencias entre partidos y dentro de ellos. Las tradiciones socialista y comunista tenían una larga historia de enfrentamientos. Desde su fundación acarrean disensos culturales e intelectuales. El mérito de la UP fue procesar esas diferencias sin negarlas. De ahí duros debates antes y después

de su surgimiento, con diferencias de proyectos y juicio político, y no solo intereses burocráticos y personales. Las diferencias animan, así, el desarrollo de la cultura política de las fuerzas populares.

La formación de la UP supuso articular fuerzas políticas, pero también sociales. Una diversidad de clases y la unidad de sus partidos en las organizaciones sociales, y una UP atenta a estar presente, a la vez, en la sociedad y en el Estado. Esa izquierda entendía la acción social y política como una unidad compleja. Caben juicios críticos –que se hicieron– sobre dicha relación y el protagonismo del Estado o el movimiento popular en cada momento. Pero la UP era depositaria de una cultura de izquierda con alta conciencia de los procesos que anidaban en la sociedad.

Dilemas de la alianza popular de la UP. Aproximaciones al carácter social de la crisis

Mucha discusión de izquierda sobre la UP queda en el subjetivismo. Sean más críticas o defensoras, se alinean sobre la dicotomía entre derrota y fracaso, pero coinciden en opacar el análisis social bajo la vistosa conducta de las élites políticas, disociando tal curso de sus bases sociales. No se asume la política como proceso social. Pero el proceso de la UP exige atender al conflicto social para distinguir los sectores más relevantes. Sobre su crisis se insiste en la polarización política como explicación, un relato abundante en episodios. Antes de llegar al gobierno, ya es aguda y se atribuye a la dirección política, incluso se apunta que responde más a esta que a una polaridad efectiva de las bases sociales, y abre críticas sobre la capacidad de conducir el proceso y al cobro de responsabilidades. Se apunta al Partido Demócrata Cristiano (PDC) y los partidos de la UP. Se alude a un PDC arrastrado por su pugna con la derecha que orilla al boicot a la UP, sin diferenciar su apoyo a unas reformas y su oposición a otras. Solo hay reflexiones generales sobre lo que eran esas bases sociales, su diferenciación interna y lo que abre su opción golpista. En la UP, se

acusa la incapacidad de una dirección única y coherente del proceso. Su división interna muestra el choque cada vez más inconciliable entre el "consolidar lo avanzado" y negociar con grupos opositores, o bien la crítica a las limitaciones del reformismo que exige mayor radicalización. Lo que redunda en que ninguna lograra avanzar.

Un relato que no atiende a las bases sociales que se constituyen en tal conflicto y se reduce a las directivas políticas. En el desarrollo de los grupos sociales se atiende a la diversidad de las capas medias más que a la que anida en los grupos populares. Pero más allá del asunto de las capas medias y su vínculo con el centro político, la heterogeneidad del mundo popular y sus opciones políticas condiciona directamente las posibilidades del proceso (Faletto, 1977). Allí se divisan dos sectores relevantes: una clase obrera de larga integración política institucional a través de partidos y sindicatos; y un mundo marginal signado por la exclusión económica y política, que incide bajo la movilización directa. Desde mediados del siglo XX, la masificación de la participación política releva tal distinción, y se replantea con la UP. Si el triunfo de Allende en 1970 se basa más bien en la clase obrera, de mayor trayectoria política y peso en la configuración del Estado que impulsa el proyecto industrializador, la mayoría absoluta de la UP llega en las elecciones municipales de 1971 con su extensión al mundo marginal, lo que abre nuevos dilemas de conducción y articulación anclados en diferencias sociales. Las dos líneas políticas en su seno responden a estas bases, no a una mera ineptitud de dirigentes para llegar a acuerdos (Baño, 2003). Las condiciones sociales plantean dilemas difíciles de articular.

La distinción de estas bases sociales de la UP es compleja. No adoptan los rasgos usuales de la mirada estructural ligada al sistema económico. Su carácter integrado o marginal las diferencia, pero no solo como la inserción típica del obrero en la empresa capitalista o su exclusión. Entre los marginados de la empresa capitalista hay orientaciones de carácter obrero según tipos de socialización y cercanía a sujetos con posiciones de clase; a la vez, entre el obrero típico surgen orientaciones marginales bajo el carácter tradicional de la empresa,

tipo de organización sindical, socialización política, proximidad con sectores marginados. Se suele destacar a los grupos obreros de la empresa capitalista moderna, su organización social y política. Pero bajo la UP crece la relevancia del mundo marginal.

La tradición democrática chilena de participación política es un mito, pues electoralmente es reciente. A la mitad del siglo siquiera un tercio de los hombres que podían votar lo hacía. A inicios de la década de 1960 tampoco supera un tercio de los hombres y mujeres con tal derecho. De ahí, hasta la crisis de la UP, crece abruptamente con la inclusión de grupos populares. La forma y coyunturas de este auge electoral indica que es a saltos bruscos. Cada uno duplica al anterior bajo la integración de sectores populares marginales. En 1952, el "terremoto" político que encabeza el exdictador Carlos Ibáñez del Campo impone un candidato fuera del sistema de partidos, de discurso populista, que moviliza nuevos sectores, sobre todo en ciudades que reciben la migración del viejo sistema hacendal. Aunque fracasa y retorna el sistema de partidos, se vuelve a alterar con el auge del PDC. En 1964, la gran votación de su candidato a la presidencia, Eduardo Frei Montalva, no solo se debe al apoyo de la derecha. Otra alza de participación electoral, de franjas no adscriptas al sistema de partidos en ciudades desbordadas por migrantes que viven en la marginalidad. Aunque ambos proyectos difieren, reiteran el liderazgo fuerte y el discurso emotivo, aparte que los ibañistas se fundían en el PDC, que suma al Partido Agrario Laborista con figuras del caciquismo político y arrastran a nuevos sectores populares a la participación electoral.

En cambio, en 1970 no hay mayor alza en la participación electoral. La base de Allende anida en la clase obrera organizada en los partidos, incluso baja su apoyo electoral. El estrecho triunfo de la UP es posible por la división de las otras fuerzas. Pero en la primera elección en el gobierno crece el apoyo con políticas de beneficio popular de redistribución del ingreso y oportunidades laborales para los grupos más precarios. Es un crecimiento en las franjas marginales. Crece la movilización de estos grupos en apoyo a la UP, el peso de su

accionar y su rechazo a la exclusión, que fluye sobre todo al Partido Socialista (PS), de base social más heterogénea y discurso abierto a intensificar la movilización social aun contra la opinión de los grupos populares de más tradición organizativa identificados con el Partido Comunista (PC).

En esos años el mundo popular rural recién asoma a la política con la reforma agraria y movilizaciones. Aquí también difieren quienes son partícipes directos de dicha reforma, trabajadores dependientes de los predios expropiados, de aquellos que, bajo otras formas de inserción productiva, son excluidos (afuerinos, minifundistas, trabajadores de predios no expropiados). Estos últimos engrosan la marginalidad urbana en su migración. La marginalidad rural a la reforma agraria adhiere a la UP al permitir su movilización para integrarse a los beneficios estatales y apunta a los partidos que plantean la intensificación del proceso, como PS, el Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

La historia de la división política de la UP es conocida. Lo que interesa relevar es que esas tradiciones políticas se ligan a diversas formas de organización social (Faletto, 2009). Las divergencias no se agotan en dirigentes o ideologías. Son diferencias sociales las que se expresan en esas opciones políticas. Aunque es muy general la distinción de estos dos sectores populares, el apoyo popular a la UP difiere si se trata de la clase obrera, integrada a la producción (mineros y trabajadores de empresas consolidadas), o de esa marginalidad popular excluida de la producción (de inserción precaria, cesante, independiente, doméstica). No se trata de reeditar acusaciones de aburguesamiento de la clase obrera y el carácter revolucionario de masas marginales que no tenían "nada que perder", sino de relevar el carácter integrativo de la presión de los grupos excluidos.

El conflicto que se plantea en la base social de la UP condiciona los dilemas de una solución política y no a la inversa. La opción de la clase obrera de consolidar posiciones ligadas a la producción no es fácil de conciliar con un mundo marginal que enfatiza una intensa

movilización y una dinámica comunitaria. La política de la UP busca responder a ambos, necesita todo el apoyo popular para encarar la resistencia a su proyecto, pero las tensiones crecen hasta paralizar toda iniciativa. La repetida salida para evitar el colapso en la apertura a las capas medias, un acuerdo político con el centro podría haber acarreado una pérdida de apoyo en el mundo marginal, que habría visto frenada su movilización y su accionar comunitario y vería un retroceso en un acuerdo de consolidación en que no participaba. Tal vez no habría colapsado la UP a través de un golpe, pero sí como proyecto político, siendo imposible saber sus alcances. Al revés, si se impulsaba la movilización radical, chocaba con las capas medias, pero también perdía apoyo de esa clase obrera de mejor posición en el sistema productivo que presionaba por consolidar las mejoras obtenidas.

La heterogeneidad del universo popular se proyecta en los dilemas políticos de la UP. La dictadura luego arrasó las organizaciones sociales y políticas ligadas al mundo popular y la regresión económica impuso la sobrevivencia, no sin advertir esa distinción interna del mundo popular que buscó manipular. Así, apuntó a los trabajadores integrados como un grupo privilegiado donde la presión sindical y política lograba mayor bienestar; los "verdaderos pobres" eran los marginales a quienes ayudar. Impulsó la focalización de subsidios a la pobreza, a fin de crear un "pinochetismo popular" clientelar, que la regresiva distribución del ingreso y la enorme cesantía frustran.

Las protestas contra la dictadura devuelven esta distinción popular, entre el movimiento sindical y el poblacional. El primero llama a las protestas, pero quien las realiza es el segundo. Entre ambos hay diferencias de objetivos y métodos. La transición a la democracia aísla al mundo marginal y sus movilizaciones, para relevar al centro político y los grupos medios. Pero eso no borra la pugna contra la exclusión. A la masiva participación en el plebiscito de 1988 le sigue una desmovilización política. Desde 1993 crece la apatía política. Los no votantes pasan de un 20% ese año a 30% en 1996 y 40% en 1997. Son jóvenes de barrios marginales que rehúsan inscribirse en los

registros electorales. La elección de 1999 revierte la caída de no votantes, de 40% a 30%, con un candidato de derecha que encarna un personalismo anti partido y queda a metros de ganar.

Desde 1989, este mundo marginal, que no responde a un trazado clasista nítido para una economía capitalista, apunta a la no participación. La abstención predomina en las zonas pobres. Aludida como masa marginal, son los desocupados crónicos, trabajadores por cuenta propia, obreros sin calificación y ocupación temporal, trabajadores domésticos y otras similares. La transición a la democracia se proyecta controlando su efervescencia.

De nuevo el pueblo

El estallido del 18 de octubre de 2019 advierte que las masas populares siguen planteando la pugna de la exclusión. La historia es revisitada por cada generación. La sociedad chilena se sacude de un neoliberalismo que cubre ya casi medio siglo. La izquierda se tensa bajo las disyuntivas que plantea esa realidad. La historia no se repite, pero el proceso de la UP, sus esfuerzos y dificultades, portan claves para abordar el desafío popular contra el neoliberalismo.

Volver a la mayor articulación de izquierda en Chile, tras elementos críticos para pensar una política y un sujeto popular capaz de protagonizar una nueva marcha, exige advertir la singularidad de esa gesta. Su herencia repone el dilema de las alianzas políticas, no como ajedrez burocrático sino ante sus condiciones sociales y las disyuntivas que abren. El levantamiento popular hoy vuelve a un desafío semejante. Un nuevo pueblo emerge de la propia mutación neoliberal, nuevas contradicciones originan nuevas fuerzas e identidades. Es iluso creer que se pueda articular una izquierda sin memoria de su pasado. Las nuevas fuerzas políticas errarían al ignorar el proceso de la UP, como también lo harían al apelar a una continuidad mecánica, apenas identitaria. Es preciso ir de la mera reivindicación de la dignidad de la UP al examen de su formación como alianza social y

política, para anclar el homenaje en las urgencias del presente. Las lecciones de la UP son un capital de un costo histórico enorme para los empeños del presente.

Referencias

Arrate, J. y C. Ruiz. (2020). *Génesis y ascenso del socialismo chileno. Una antología hasta 1973*. Santiago: Lom Ediciones.

Baño, R. (2003). Más allá de culpas y buenas intenciones. En R. Baño (ed.). *Unidad Popular 30 años después.* Ediciones Departamento de Sociología, Universidad de Chile, 291-318.

Cohen, G. A. (1979). The Labor Theory of Value and the Concept of Exploitation. *Philosophy & Public Affairs*, *8*(4), 338-360. https://www.jstor.org/stable/pdf/2265068.pdf?seq=1

Faletto, E. (2009). Algunas características de la base social del Partido Socialista y del Partido Comunista. 1958-1973. En E. Faletto. *Obras Completas. Tomo I.* Chile: Editorial Universitaria, 147-198.

Faletto, E. (1977). Clases, crisis política y el problema del socialismo en Chile. En R. Benítez Zenteno (coord.). *Clases sociales y crisis política en América Latina (Seminario de Oaxaca)*. México: Siglo XXI Editores México-Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, 284-314.

Goldthorpe, J. (1992). Sobre la clase de servicios, su formación y su futuro. *Zona Abierta*, *59-60*, 229-263.

Olin Wright, E. (1994). *Clases*. Madrid: Siglo XXI de España Editores.

Roemer, J. E. (1989). *Valor, explotación y clase*. México DF: Fondo de Cultura Económica.

Ruiz, C. (2020). *Octubre chileno. La irrupción de un nuevo pueblo*. Santiago: Editorial Taurus.

Ruiz, C. (2019). *La política en el neoliberalismo. Experiencias latinoamericanas*. Santiago: Lom ediciones.

Ruiz, C. y G. Boccardo. (2014). *Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social*. Santiago: Ediciones El Desconcierto-Fundación Nodo XXI.

Diálogos de Fidel Castro y Regis Debray con la vía chilena al socialismo

Legitimidad revolucionaria para el proyecto de la Unidad Popular

Manuel Fernández Gaete y Roberto Ávila Carrera

"El socialismo es joven y tiene errores. Los revolucionarios carecemos, muchas veces, de los conocimientos y la audacia intelectual necesarios para encarar la tarea del desarrollo de un hombre nuevo".

Ernesto "Che" Guevara, El socialismo y el hombre en Cuba.

"Querido compañero Salvador Allende: pronto ya partiremos de este hermoso y magnífico país. Pronto nos despediremos de este pueblo acogedor, hospitalario, magnífico y caluroso. Una cosa nos llevamos: el recuerdo imborrable de esta visita, de los afectos, de las atenciones, de los honores que a nuestra delegación ustedes hicieron como representante del pueblo cubano y de la Revolución cubana".

Fidel Castro Ruz, discurso pronunciado acto de despedida que le brindó el pueblo de Chile, en el Estadio Nacional, Santiago de Chile, Chile, 2 de diciembre de 1971.

Dedicado a Manuel, Javiera y Camilo. La utopía es de ustedes.

Introducción

Durante el presente año 2020, empujados por un movimiento social y ciudadano que rechazó, con la fuerza de consignas, manifestaciones masivas y el uso de la violencia política desplegada en ciudades de todo el país, como nunca antes ocurrió en los últimos treinta años, y por una crisis sanitaria que ha afectado globalmente a la humanidad, obligados a salvaguardar la necesidad de sobrevivir y convivir, como primer paso para recuperar un espacio digno de vida, *ad portas* a la realización de un plebiscito inédito en la historia republicana chilena que permitirá eliminar la constitución instalada a sangre y fuego durante la última dictadura cívico-militar (1973-1990) y construir las condiciones para la redacción y aprobación de una nueva carta magna democrática, centrada en la salvaguarda de los derechos y por ello profundamente ciudadana, aún tenemos espacio para rememorar.

Sin duda, "no son treinta pesos", sino los últimos treinta años de reconfiguración capitalista neoliberal los que nos muestran la forma en que las élites nacionales han querido relegar, a un pasado sin nombre y sin rostro, los proyectos que en algún momento se pensaron y ejecutaron para eliminar las desigualdades sociales, construir una ciudadanía multicultural, activa y delinear la sociedad inclusiva, descentrada y democrática que requerimos, contando con un Estado puesto al servicio de las mayorías y no de los intereses de una clase dominante fortalecida por el apoyo de la(s) potencia(s) del norte hegemónico.

Nuestro presente, revestido de luces y oropel por las nuevas élites neoliberales, surgidas al amparo y en obsecuente complicidad con el proyecto dictatorial, olvidó muchas veces que aquel proyecto de "revolución capitalista", llevado adelante por civiles y militares, nos condujo a un futuro de individualismo consumista, deterioro medioambiental y un Estado policiaco que reprime, tortura y mutila

a sus ciudadanos y ciudadanas cuando estos manifiestan o demandan sus requerimientos para el cambio.

Al rememorar los cincuenta años de la asunción a la presidencia de la República del proyecto de la Unidad Popular y la llegada de Salvador Allende al sillón presidencial de La Moneda, observamos, tal y como lo hiciera el *Angelus Novas*, de Paul Klee, un pasado que se niega a pasar, señalándonos un futuro condenado a la catástrofe.

El proyecto de unidad política y programática denominado Unidad Popular tiene sus orígenes en la coalición electoral que nucleó a los tradicionales partidos populares, emergentes agrupaciones y movimientos de centro izquierda. Podemos fijar su lanzamiento público en aquella declaración de voluntad electoral contenida en el "Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular", documento aprobado por las direcciones del Partido Comunista de Chile (PCCh), Partido Socialista (PS), Partido Radical y Social Demócrata (PRSD), el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) y la Acción Popular Independiente (API), el 17 de noviembre de 1969. Dicho esfuerzo, surgido del llamado realizado por las direcciones del PCCh y del PS, se lanzó a aquellas agrupaciones que mostraran afinidad política para la construcción de un nuevo bloque de izquierda, manteniendo sus respectivos domicilios ideológicos, los que alcanzaron un grado de síntesis política y un diagnóstico compartido de la realidad chilena. Este diagnóstico estableció que "Chile vive una crisis profunda, que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas" (Unidad Popular, 1969, p. 3).

Dicho diagnóstico alcanzó una formulación de la realidad nacional en su conjunto, mencionando "las crecientes dificultades que enfrentan empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud" (Unidad Popular, 1969, p. 3).

Lo formulado avanzó en la denuncia de lo que provocó el fracaso del proyecto de desarrollo nacional, al expresar,

> Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente (Unidad Popular, 1969, p. 4).

Las consecuencias políticas de este diagnóstico indicaron que "El desarrollo del capitalismo monopolista, niega la ampliación de la democracia y exacerba la violencia antipopular". Aquello provocó la motorización del conflicto interclasista, expresado a partir de una violencia que se ensañó estructuralmente contra los más desposeídos de la sociedad, "porque violencia es, que junto a quienes poseen viviendas de lujo, una parte importante de la población habite en viviendas insalubres y otros no dispongan siquiera de un sitio; violencia es que mientras algunos botan la comida, otros no tengan como alimentarse" (Unidad Popular, 1969, p. 5).

Uno de los aspectos expresados en el Programa de la Unidad Popular, dice relación con la propuesta de Política Internacional del Gobierno Popular. El documento fijó entre sus objetivos "Afirmar la plena autonomía política y económica de Chile", establecer relaciones "con todos los países del mundo, independiente de su posición ideológica y política" y el "respeto a la autodeterminación y a los intereses del pueblo de Chile". Esta posición permitió a los partidos firmantes declarar que "se establecerán vínculos de amistad y solidaridad con los pueblos independientes o colonizados, en especial aquellos que están desarrollando sus luchas de liberación e independencia". El texto postuló que el Gobierno Popular, reforzará "las relaciones, el intercambio y la amistad con los países socialistas", así como también, "promoverá un fuerte sentido latinoamericanista y antiimperialista", por medio de una actitud "vigilante y activa para defender el principio de no intervención y para rechazar todo

intento de discriminación, presión, invasión o bloqueo" realizado por los países imperialistas.

La fórmula planteada por el Programa de Gobierno de la Unidad Popular se expresó respecto al proceso revolucionario cubano. El Programa expresó su solidaridad con la Revolución Cubana, la señaló como "avanzada de la revolución y de la construcción del socialismo en el continente" (Unidad Popular, 1969, p. 34).

Lo anterior permitió a Joaquín Fermandois situar el proyecto de la Unidad Popular, y su vocación socialista y revolucionaria, en la dinámica "mundo y fin de mundo", tratando de relevar el lugar ocupado por Chile, *Finis Terrae*, en el concierto internacional de conflagración. Fermandois supone un alineamiento, *avant la lettre*, de la posición de la Unidad Popular con el proyecto de "avance del comunismo" instalando a Chile en medio de la confrontación ideológica global (2005, pp. 342-343).

Este escenario reveló la importancia de la Revolución Cubana, ya que provocó un cambio trascendente en la estructura de las relaciones interamericanas, situando "un punto de inflexión" a la influencia de Estados Unidos en sus relaciones con América Latina y el Caribe, así como de estas zonas con la potencia estadounidense (Liberman, 2017, p. 48).

Consideramos que a partir de la Revolución cubana, la posición chilena tácticamente se construye como "alternativa", como una "revolución en la revolución", como el "único camino" para dar solución a los problemas estructurales presentados por el desarrollo del capitalismo en su particular trayectoria chilena (Moulian, 2009, pp. 249 y 251).

Tal y como explicó Jorge Magasich, la propuesta de Relaciones Internacionales (RR. II.). expresada por el gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular fue innovadora, pero no logró materializarse en su totalidad durante los casi tres años de su despliegue. Se instaló como un referente que propone una posición alterna para y desde los países de América Latina, lo que permitió que durante las últimas décadas, gobiernos progresistas de la región rescataron e

implementaron algunas de las líneas matrices propuestas durante el gobierno de la Unidad Popular, aún vigentes (2013, pp. 16-17).

¿De qué forma podemos comprender y valorar el impacto provocado por la visita del intelectual francés Regis Debray y del Comandante Fidel Castro al recién inaugurado Chile de la Unidad Popular? ¿Cuáles son las propuestas formuladas al recién inaugurado gobierno popular liderado por Salvador Allende en estos diálogos?

Pensamos estos "diálogos" como encuentros de trayectorias militantes y revolucionarias latinoamericanas, antiimperialistas e impulsoras del socialismo en la región. Las pensamos como un momento de síntesis, como la construcción de una "estructura de sentimientos" compartida por las izquierdas y sus polos gradualistas y revolucionarios. Aquello tornó líquidas las fronteras nacionales con su internacionalismo, alcanzando una legitimidad compartida, al proponer visiones complementarias y equivalentes, anidadas en experiencias comunes y disímiles, pero no opuestas, provocando un hermanamiento de procesos históricos y pueblos ubicados en la misma utopía, radicar en América Latina el proyecto de cambio hacia el socialismo (Harmer, 2013, pp. 56 y 102).

El trabajo que presentamos se ha sostenido en la revisión atenta del contexto en que se han producido las visitas realizadas para observar el proceso chileno, por parte del intelectual francés Regis Debray y del Comandante Fidel Castro. En sus conversaciones con el "Compañero Presidente" (y con el pueblo chileno), en estos "diálogos revolucionarios para América Latina" ocurridos entre "Cuba y Chile", como lo han propuesto Elisa de Campo Borges y Joana Salem Vasconcelos (2019, p. 254), se involucraron ambas lecturas sobre el proceso de construcción del socialismo. En este sentido, el proyecto de la Unidad Popular aparece señalado como un proyecto revolucionario inédito, del cual hay que aprender.

Estos diálogos quedaron registrados en la prensa periódica de la época, libros que compilaron imágenes, que atesoran momentos, así como en registros audiovisuales que constituyen riquísimas fuentes para la exploración de lo planteado. Aquellos materiales se

constituyeron en un referente del trayecto seguido en estos encuentros, permitiendo registrar las impresiones gráficas, los discursos y la presencia de estos sujetos en acto.

Chile, la Unidad Popular y el presidente Salvador Allende

El día 4 de noviembre de 1971 fue investido como presidente de la República el ciudadano Salvador Allende Gossens. Se inauguró así el camino al socialismo o la denominada "Vía Chilena al Socialismo", que se instalaría como una experiencia inédita a escala global. Por vez primera en la historia política mundial, una coalición socialista alcanzó el gobierno por vía electoral, a partir de su elección el día 4 de septiembre de 1970, cuando Allende logró alcanzar la primera mayoría relativa (36,61%), posteriormente ratificada por el Congreso Pleno.

Como abanderado de la Unidad Popular, el rol y la experiencia de Salvador Allende responden a un liderazgo construido en la izquierda chilena desde las primeras décadas del siglo XX. Liderazgo construido en su trayectoria como estudiante universitario y fundador del Partido Socialista, también como ministro del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, senador y presidente del Senado. No resulta menor su experiencia como candidato a la presidencia del país, en tres ocasiones, previas al triunfo de la Unidad Popular. Dicha trayectoria construye un liderazgo con rasgos claramente definidos en torno a una visión del rol del Estado, los efectos de las economías dependientes del capitalismo extranjero, la intromisión del imperialismo en el continente y las formas de lucha política a llevarse adelante para la construcción de un proyecto revolucionario para Chile.

Salvador Allende, con su reconocida altura intelectual, ideológica y política construyó una red de relaciones, tanto en el plano político e institucional como a nivel de las representaciones del camino revolucionario, de los sujetos que le permitieron tender puentes políticos e intelectuales, liderar un proyecto inédito y por ello promover un

itinerario revolucionario para la política y cultural chilena. De esta forma, a no dudarlo, el gobierno de Salvador Allende culminó por asentarse

> en el corazón y en la memoria del pueblo chileno, porque siempre tuvo en el centro de sus preocupaciones los intereses de los obreros, de los campesinos, de los pequeños y medianos empresarios, de los pueblos originarios, de las madres y sus hijos, de los jubilados y pensionados, de la gente sencilla, postergada y maltratada. Se formó para eso y por eso se confabularon contra él los que se consideran amos y dueños del país (Corvalán, 2003, p. 19).

Visitas revolucionarias: Regis Debray y Fidel Castro dialogan con la Unidad Popular

Desde los primeros momentos en que la gesta cubana aparece en el horizonte político de América Latina, como una experiencia de liberación nacional, por ello popular, latinoamericanista y antiimperialista, Salvador Allende demostró una cercanía y apego a dicha trayectoria. Su presencia como representante chileno en la fundación de la OLAS, la participación que en su calidad de presidente del Senado de la República de Chile tuvo en el rescate y posterior viaje de regreso a Cuba, vía Tahití, de los internacionalistas "Pombo", "Benigno" y "Aquino", sobrevivientes de la guerrilla del Che en Bolivia, el apoyo y la participación de su hija Beatriz "Tati" Allende, y de una centena de militantes socialistas como miembros de la sección chilena del Ejército de Liberación Nacional (fracción de los "elenos" del Partido Socialista de Chile), son una muestra dilatada de la trayectoria de solidaridad y cercanía que Allende construyó con respecto al proceso revolucionario cubano. (Quiroga, 2001, pp. 29-40).

El diálogo con Regis Debray se produjo el día 4 de enero de 1971 y fue registrado en el documental de Miguel Littín "Compañero Presidente" (1971) y por la revista *Punto Final* en una edición especial publicada el 16 de marzo de 1971. Allí, Allende explica su encuentro con los líderes del

proceso revolucionario cubano, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro, en los primeros días del triunfo revolucionario. Su primer contacto, en la isla, fue con el Comandante Ernesto Guevara, de quien señala,

> Ahí llegué yo y ahí estaba el Che. Estaba tendido en un catre de campaña, y en ese momento tenía un fuerte ataque de asma. Estaba con el inhalador y yo esperé que se le pasara, me senté en la cama, en la otra, entonces le dije: "comandante", pero me dijo: "Mire, Allende, yo sé perfectamente bien quién es usted. Yo le oí en la campaña presidencial del 52 dos discursos: uno muy bueno y uno muy malo. Así es que conversemos con confianza, porque yo tengo una opinión clara de quién es usted". Después me di cuenta de la calidad intelectual, el sentido humano, la visión continental que tenía el Che y la concepción realista de la lucha de los pueblos (Debray, 2015, p. 23).

Respecto a Fidel Castro, la rememoranza aparece en el relato de Salvador Allende,

> Recuerdo, como si fuera hoy día: estaba en un consejo de gabinete. Me hizo entrar y yo presencié parte de la reunión. Hubo una cena y después salimos a conversar con Fidel a un salón. Había guajiros jugando ajedrez y cartas, tendidos en el suelo, con metralletas, y de todo. Ahí, en un pequeño rincón libre, nos quedamos largo rato. Ahí me di cuenta de lo que era, ahí tuve la concepción de lo que era Fidel (Debray, 2015, p. 23).

Allende no limita sus respuestas ante las preguntas del filósofo francés, puesto que además tiene palabras excepcionales para otros procesos y líderes revolucionarios. Recuerda que hacia el año 1968,

> Corea me impactó fuertemente por el nivel alcanzado en su desarrollo económico, sabiendo lo que ha significado la lucha de Corea y comprendiendo que el primer armisticio firmado por el ejército norteamericano fue con los coreanos, y sabiendo lo que existe hoy todavía en Sud-Corea. Después en Vietnam, y ahí sí que se reafirmó mi convicción, la que yo había sentido y palpado en Cuba: un pueblo unido, un pueblo con conciencia política, un pueblo cuyos dirigen-

> tes tienen la fortaleza moral, el prestigio y el ascendiente de Ho Chi Minh, es un pueblo invencible (Debray, 2015, p. 32).

En su diálogo con el intelectual francés, Allende explica aquellas concepciones que se encuentran en la base de su pensamiento político y dan pie a su cercanía con los procesos de liberación nacional, el "Compañero Presidente" señaló,

> los que han leído a Lenin y especialmente su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, ya tienen los conceptos teóricos. Esta cuestión del imperialismo tiene una connotación principal en los países subdesarrollados y, especialmente, en los de América Latina. Los socialistas advertimos que nuestro enemigo número uno es el imperialismo y por eso concedimos, y aun lo hacemos en la actualidad, primera prioridad a la liberación nacional. La penetración y dominación del capital foráneo se ha acentuado en los últimos años hasta hacer casi invisible la burguesía llamada nacional (Debray, 2015, p. 18).

Avanzado el diálogo, Debray obliga a su entrevistado a asumir una posición si acaso el escenario de confrontación escala a un enfrentamiento abierto, "un levantamiento militar, por ejemplo". Allende respondió,

> Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir, pero en todo caso, nosotros esperaremos que ellos lo provoquen. Estamos vigilantes. Por lo demás no somos mecanicistas. Los enfrentamientos se vienen sucediendo en la historia de Chile desde tiempo atrás. Tú debes conocer la larga lista de las masacres de obreros y campesinos bajo el dominio de la burguesía (Debray, 2015, p. 70).

En este contexto situamos la importancia de la visita de Fidel Castro a Chile. Realizada entre el 10 de noviembre y el 4 de diciembre de 1971, se desarrolló en medio de encuentros con trabajadores/as, pobladores/as y estudiantes, en las más importantes ciudades de Chile.

En sus encuentros con el pueblo chileno las alocuciones de Fidel Castro, para quien la relación entre los pueblos latinoamericanos es

fundamental, Cuba y Chile, aparecen como pueblos hermanados por una historia común de lucha por la liberación, desde la invasión y colonización española pasando por los procesos independentistas,

> Hace 150 años comenzó la lucha por la independencia de este continente, y de este país, ¡ciento cincuenta años! Y los soldados lucharon bravamente, heroicamente, para obtener la independencia de la patria, para darles a los chilenos un lugar en el mundo. Para darles una patria, en dos palabras (Castro, Plaza Mayor, Valparaíso, 30 de noviembre de 1971).

Hermanando historias, el líder cubano entregó luces respecto al lugar que ocupa en el proceso histórico de América Latina la hegemonía de la potencia del norte de América, con sus constantes intervenciones en el continente, durante el siglo XX. En su evaluación, el Comandante Castro expresó las fórmulas aplicadas en estas intervenciones, para claridad de las audiencias chilenas. En un ejercicio de pedagogía política, señaló,

> Antes esas invasiones se hacían con armas. Después se hicieron por métodos más sutiles. No trajeron cañones, ni barcos, ni fusiles. Esos, desde luego, los tenían por si acaso. Pero ¿qué les hicieron a nuestros países? Los penetraron por otras vías y se fueron apoderando de lo que un conquistador habría querido apoderarse: [...] la penetración cultural, ideológica. ¡La penetración cultural e ideológica! (Castro, Plaza Mayor, Valparaíso, 30 de noviembre de 1971).

Las alocuciones fueron dirigidas a los sujetos que el proceso político, en la experiencia del líder revolucionario cubano, ubicó en la vanguardia de los procesos históricos; de esta forma revela la posición de vanguardia de los y las trabajadores/as, en la lucha por la construcción del socialismo. A ellos señala, "El heroísmo del trabajo. Ese heroísmo de todos los días, ese heroísmo de los hombres que construyen algo, ese heroísmo de los hombres que construyen el porvenir de su país" (Castro, Chuquicamata, 14 de noviembre de 1971).

El concepto del heroísmo es utilizado como una unidad de significación que eleva la moral y dignifica la actividad laboral. Por ello es preocupación del Comandante Castro mantener los centros productivos estratégicos en funcionamiento, para lograr elevar la producción, mantener en funcionamiento el Estado, y cumplir con el programa de la Unidad Popular:

> Sabemos que los obreros del carbón han sido baluarte del movimiento revolucionario, del movimiento obrero y del movimiento popular de Chile. Y sabemos además la magnífica actitud que tienen los obreros de este centro, según nos cuentan los chilenos, su disposición a luchar, su disposición a trabajar para echar adelante estas minas. Y cómo están elevando la producción (Castro, Playa Blanca, Lota, 18 de noviembre de 1971).

El discurso de Fidel Castro ubicó a la mujer en la vanguardia del proceso de lucha por la construcción del proyecto socialista en Chile. Las disputas políticas ubicaron a la mujer como un blanco de la propaganda opositora a la Unidad Popular. La propuesta del líder cubano, por ello, situó las conquistas alcanzadas por la Revolución, caracterizándolas como dignificadoras:

> Ahora bien, en esta lucha las mujeres tienen un papel decisivo, ¡decisivo! Hay que tener en cuenta los esfuerzos que la reacción ha hecho en este país por engañar a la mujer, por confundir a la mujer. Hay que tener en cuenta los trucos, las mentiras y todos los procedimientos a que han acudido para evitar que las mujeres se sumaran al proceso revolucionario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque saben que la mujer es una fuerza, una verdadera fuerza, y una fuerza potencial de la revolución. Pero, además, porque saben que en el cambio social revolucionario la que más gana, la que más se dignifica, la que más se eleva, es la mujer [...] Si las mujeres están al lado de la revolución, ¡los "momios" no pasarán, los reaccionarios no pasarán, los fascistas no pasarán! (Castro, Estadio Santa Laura, Santiago, 29 de noviembre de 1971).

La revolución es definida como una oportunidad, en la que las mujeres tienen un nuevo horizonte de desarrollo, desde el ámbito educativo, laboral y en las relaciones interpersonales. Fidel Castro expresó que la revolución dignifica a la mujer, creando una ruptura con el régimen anterior, logrando encauzar las energías de la mujer hacia la transformación y un porvenir más digno ligándolo con el concepto de felicidad,

> La revolución les ofrece a las mujeres un papel humano: les ofrece todas las posibilidades a su talento, todas las posibilidades a su energía, a su entusiasmo, a su espíritu, a sus más nobles sentimientos. La revolución dignifica a las mujeres, la revolución les da un verdadero trato humano a las mujeres. La revolución, que trabaja para el futuro, trabaja para los hijos, trabaja para los jóvenes, trabaja para un porvenir digno, para un porvenir más feliz (Castro, Estadio Santa Laura, Santiago, 29 de noviembre de 1971).

El Comandante Castro propuso que la fábrica no puede ser superada como instancias de educación por ninguna universidad. Aquello estableció una nueva conceptualización, en la cual el revolucionario rompe con las viejas divisiones del trabajador manual e intelectual, desechando rasgos de la cultura burguesa, constituyendo un nuevo tipo de trabajador consciente de las necesidades sociales, al expresar,

> Los miro a ustedes, y pienso que ustedes van a ser los llamados trabajadores intelectuales del futuro. Y nosotros lo que queremos es que los trabajadores intelectuales se parezcan a los trabajadores. Nosotros no queremos que los egresados de las universidades se constituyan en una élite intelectual, divorciada de las realidades de la vida, divorciada del espíritu de los obreros (Castro, Estadio Sokol, Antofagasta, 12 de noviembre de 1971).

La visión propuesta situó a los intelectuales como trabajadores, evitando la edificación de una élite, única forma posible de plantearse los problemas reales, para dar soluciones concretas al momento histórico vivido. El discurso desarrollado tiene una visión de futuro,

señaló un lugar en el tiempo, un espacio lleno de posibilidades de realización de las capacidades individuales, que se lograría con el trabajo y la participación de todos,

> En la sociedad del futuro creemos que todo ser humano debe tener la posibilidad de desarrollar sus capacidades al máximo, sus capacidades mentales. Pero para que ello sea posible, será necesario también que todos los seres humanos participen con sus brazos en la creación de las riquezas que el hombre necesita para vivir (Castro, Estadio Sokol, Antofagasta, 12 de noviembre de 1971).

Su discurso apeló al espíritu combativo de la juventud, para dar batalla al fascismo que comenzó a manifestarse. Castro expresó, "Entonces este espíritu que vemos en la juventud es el espíritu que a nuestro juicio puede dar la batalla. Ese espíritu de las masas es lo que puede contener la ofensiva fascista que asoma sus orejas" (Castro, Universidad Técnica del Estado, Santiago, 29 de noviembre de 1971).

Lo anterior expresó con entusiasmo la representación proyectada hacia el proceso revolucionario chileno. La vía chilena al socialismo fue interpretada como un asunto del cual se debe aprender, como un hecho donde es observable algo extraordinario, único en la historia de la humanidad, donde se intentó que los cambios fueran realizados de manera pacífica, bajo el marco institucional del régimen burgués; por ello un ejemplo de pedagogía revolucionaria. El líder cubano lo señaló de esta forma,

> Hemos venido a aprender en un proceso vivo. Hemos venido a aprender cómo se comportan las leyes de la sociedad humana. Hemos venido a ver algo extraordinario, algo extraordinario: en Chile está ocurriendo un proceso único. Algo más que único: ¡insólito!, ¡insólito! Es el proceso de un cambio. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente (Castro, Estadio Nacional, Santiago, 2 de diciembre de 1971).

Transcurrido medio siglo desde la victoria de la Unidad Popular observamos que dicho proceso, truncado por la violencia reaccionaria,

postuló desafíos a la tarea revolucionaria fundada sobre la experiencia y la prescripción de la teología en boga. Aquel proyecto postuló subvertir las leyes históricas y el esclerotismo doctrinal, por la vía de una utopía situada en el fin del mundo. La presencia de Regis Debray y Fidel Castro hermanaron el proceso caribeño, el movimiento revolucionario mundial, en diálogo y discusión, con el proceso de construcción del socialismo, en el Chile de la Unidad Popular.

Consideraciones finales

Tal y como ha sido explicado, la de la Unidad Popular es una historia de claros y oscuros, en ella se revela una "forja de ilusiones", sostenida por sobre la viabilidad de la construcción del socialismo, que mostró en su trayectoria que la experiencia chilena fue "fiesta, drama y tragedia". Una fiesta democrática y de trabajo popular, un drama político mostrado en cada maniobra y aceleración táctica dada por el gobierno y la coalición política popular, durante su despliegue. Una tragedia que enlutó a la sociedad chilena por 17 años de dictadura terrorista, abriendo las posibilidades de entronización de 30 años de posdictadura neoliberal (Moulian, 2009, p. 265).

Los diálogos ocurridos entre estos actores y el pueblo chileno aparecen como un llamado a resolver las contradicciones propias del proceso que se inició por vía institucional para llevar adelante el socialismo, revelando en las interlocuciones, problemas de larga data y amplio debate en las izquierdas. Problemas críticos que evidencian las variables instaladas a partir del diagnóstico de la realidad chilena y del Programa de la Unidad Popular, como herramienta revolucionaria, que al igual que el proceso cubano, fue develando, en una "larga marcha", las contradicciones, enemigos y posibilidades que abrieron el enfrentamiento directo a los intereses del imperialismo y de la "lumpen burguesía" nacional, el ímpetu y voluntad de las fuerzas reaccionarias, aquellas que emergen desde el corazón de sus matrices políticas (conservadores y liberales) que, apoyadas por

fracciones golpistas de las Fuerzas Armadas y Carabineros abrazaron la lucha callejera de masas, el sabotaje, el complot y el golpismo.

La revisión desarrollada permitió observar la forma expresada en los diálogos por los actores de este retazo del proceso político latinoamericano, revelando en la fórmula de una arenga política dirigida a los "sujetos de la historia", aquellos llamados a desarrollar la tarea de construcción del socialismo, toda vez que la llegada a ocupar el gobierno, hecho por la UP, reveló las tareas a resolver, por parte de las masas involucradas en el proceso revolucionario.

Destacamos la preocupación existente en estos diálogos por realzar el papel de las mujeres trabajadoras, campesinas/os, estudiantes, jefas/es de hogar, artistas e intelectuales, en la construcción de un proyecto de nueva sociedad, inédito en la tradición política revolucionaria, como fue la propuesta de construcción de un horizonte socialista para Chile y América Latina, proposición hecha en estos "diálogos" revolucionarios.

Referencias

Campos, E. y J. Salem. (2019). Cuba e Chile: Diálogos revolucionários para América Latina, en J. Sales, R. Araujo, R. Mendes y T. Silva (orgs.). (2019). *Revoluçao Cubana: Ecos, dilemas e embates na América Latina* [Recurso eletrônico]. Aracaju: IFS.

Comisión de Orientaciones Revolucionarias del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (1972). Cuba-Chile. Encuentro simbólico entre dos procesos históricos. Ediciones Políticas.

Corvalán, L. (2003). *El gobierno de Allende.* Santiago: LOM Ediciones.

Debray, R. (1971). Allende habla con Debray. *Revista Punto Final* [Edición exclusiva para Chile], 5 (126).

Debray, R. (2015). Conversaciones con Régis Debray. [Versión digital de Eduardo Rivas]. *Marxist Internet Archive*.

Discursos e intervenciones del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Presidente del Consejo de Estado de la República de Cuba. http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/. Consultado el 20 de septiembre de 2020.

Fermandois, J. (2005). *Mundo y fin de mundo: Chile en la política mundial 1900-2004*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Liberman, T. (2017). La influencia de la revolución cubana en la izquierda latinoamericana. Reflexiones para la construcción de nuevos caminos para el siglo XXI, en C. Massón (ed.). *Las izquierdas latinoamericanas. Multiplicidad y experiencias durante el siglo XX*. Santiago: Ariadna Ediciones.

Magasich, J. (2013). La política exterior chilena del Gobierno de la Unidad Popular 1970-1973: Un intento de pluralismo en las relaciones internacionales. *Tiempo Histórico* 7, 15-27.

Harmer, T. (2013). *El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana*. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales. (Traducción de Ariel Magnus).

Magasich, J. (2008). *Los que dijeron "No". Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973.* Volumen I. Santiago: LOM Ediciones.

Moulian, T. (2009) [1993]. *La forja de ilusiones: El sistema de partidos, 1932-1973*. (2ª Edición). Santiago: Ediciones Akhilleus.

Quiroga, P. (2001). *Compañeros. EL GAP: La escolta de Allende.* Santiago: Aguilar Chilena de Ediciones.

Unidad Popular (1969). Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular. Candidatura Presidencial de Salvador Allende. (s/d).

La "Vía Chilena al Socialismo". El largo recorrido desde el Frente de Acción Popular a la Unidad Popular

Isabel Torres Dujisin

La victoria alcanzada por la Unidad Popular (UP) con Salvador Allende en 1970 constituyó el triunfo de la izquierda en su lucha por lograr un "gobierno propio", estrategia iniciada en 1956 con la formación de la alianza denominada Frente de Acción Popular (FRAP). Esta fue la expresión inequívoca de la convicción ideológica y pragmática de la izquierda de que había llegado la hora de superar las divergencias que durante un largo período habían marcado la relación entre comunistas y socialistas, y por fin lograr la unidad. Fue la primera vez que este sector se planteó levantar un proyecto político propio, a diferencia de lo que había sido su participación en las coaliciones de centro izquierda de los años 1930 y 1940, bajo el predominio político del centro, donde la izquierda no tenía un papel hegemónico.

El camino recorrido durante los catorce años que van desde la formación del FRAP (1956) a la UP (1970), la alianza de izquierda transitará por distintos momentos en los cuales no estarán ausentes

las controversias ni las diferencias. Sin embargo, el objetivo central, avanzar a un régimen socialista, actuará como factor cohesionador. El FRAP se formará en marzo de 1956, momento en que las fuerzas políticas medulares eran el Partido Comunista de Chile (PCCh) y el Partido Socialista de Chile (PSCh). Al año siguiente de la formación del FRAP, el PSCh, que había estado divido desde 1948, logrará la unificación y en marzo de 1958 el PCCh volvería a la legalidad, después de diez años de proscripción (1948-1958). A partir de esta nueva fase, los partidos de izquierda privilegiarán los aspectos que los unían, minimizando o cohabitando con las divergencias.

Inicialmente el PSCh era partidario de construir una alianza limitada de la izquierda, defendía la idea de crear un Partido Único Revolucionario de los Trabajadores que permitiera llevar adelante las transformaciones revolucionarias, declarando que la unidad no valía "por la amplitud numérica, sino por la cohesión" (*La Última Hora*, 9 de febrero de 1956, p. 5). En ese sentido, objetaba la participación de los radicales en la futura alianza de izquierda, porque consideraban que estaban "dadas las condiciones para grandes transformaciones revolucionarias donde la clase obrera jugaría un papel determinante" (*La Última Hora*, 6 de febrero de 1956, p. 5) y que, en la formación de un Frente de Trabajadores, el Partido Radical quedaba afuera. Fundar el Partido Único de Trabajadores con el PCCh encarnaba la aspiración por "constituir un vasto movimiento que agrupe a los grandes sectores progresistas de la población, pero reclamamos para los partidos de la clase trabajadora la conducción política de este movimiento" (*La Última Hora*, 10 de diciembre de 1956, p. 18).

Por su parte, los comunistas defendían la formación de una coalición amplia, un "Frente de liberación nacional" capaz de convocar a sectores más allá de la izquierda, una fuerza que favoreciera transformaciones democráticas y antiimperialistas, capaz de llevar adelante un proyecto de cambios revolucionarios al interior del sistema democrático legal. Influirán en esta posición, las resoluciones del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el cual se había aprobado la tesis del "tránsito no violento al socialismo" y la

lucha por la democratización. A partir de dicha definición, para el PCCh lo primero era salvaguardar la unidad con el PSCh, estando dispuestos a aceptar ciertas condiciones que los socialistas determinaran. La declaración de la Comisión Política del PCCh de diciembre de 1956 señalaba:

> En el curso de este año, como resultado de la experiencia chilena y de las nuevas tesis marxistas y cambios emanados del XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, se ha logrado un importante avance en el camino del entendimiento entre los partidos socialista y comunista, así como entre estos partidos y los demás integrantes del FRAP (*El Siglo*, 12 de diciembre de 1956, p. 11).

Para los comunistas, la formación del Partido Único de los Trabajadores que propiciaba el PSCh requería pasar por una etapa previa antes de formar un nuevo partido, "el PCCh acoge favorablemente la idea expresada por el camarada Raúl Ampuero, secretario general del Partido Socialista Popular en orden a llegar a la constitución de un partido único de los trabajadores" (*El Siglo*, 12 de diciembre de 1956, p. 11), pero antes se debían superar las pugnas personales, corrientes o fracciones que ponían en peligro la unidad.

> El PC de Chile considera que un Partido Único de los Trabajadores, sobre la base de los principios del marxismo-leninismo debe caracterizarse por la unidad monolítica desde el punto de vista ideológico y político, por su contenido proletario, su organización y funcionamiento democrático y por su profundo sentido nacional y al mismo tiempo internacionalista. Debe existir la más amplia lucha de opiniones, divergencias, pero sometidas a la misma disciplina (*El Siglo*, 12 de diciembre de 1956, p. 11).

Con la formación del FRAP se logró aunar criterios en que dejaban a ambas fuerzas conformes, pero también establecía algunas omisiones. La declaración fundacional, en lo sustancial indicaba:

> El Frente de Acción Popular será una organización política unitaria de las fuerzas de avanzada que concertará la acción de los partidos

> que la constituyen en el campo político, parlamentario, sindical y electoral. El FRAP se caracterizará fundamentalmente por ser núcleo aglutinador de las fuerzas que estén dispuestas a luchar por un programa antiimperialista, antioligárquico y antifeudal. Su acción esencial se dirigirá a consolidar un amplio movimiento de masas que pueda servir de base social a un nuevo régimen político y económico, inspirado en el respeto a los derechos y aspiraciones de la clase trabajadora y dirigido a la emancipación del país, al desarrollo industrial, a la eliminación de las formas precapitalistas de la explotación agraria, al perfeccionamiento de las instituciones democráticas y a la planificación del sistema productivo con vistas al interés de la colectividad y a la satisfacción de las necesidades básicas de la población trabajadora (Jobet y Chelén, 1972, pp. 23-24).

Por otra parte, en 1953, el mundo sindical –después de un período de crisis y fragmentación– logra organizarse bajo una instancia unitaria de izquierda, la Central Única de Trabajadores (CUT). Tres años después, en agosto de 1957, realizan su primer Congreso. Ahí estará presente la larga polémica entre los que veían al sindicato como una organización sujeta a la dirección de los partidos y aquellos que la concebían como un frente autónomo de las direcciones políticas (Barría, 1971). En dicho Congreso fue reelegido como presidente de la orgánica, Clotario Blest, quien era partidario de que el sindicalismo fuera autónomo de los partidos políticos. No obstante su triunfo, la tendencia anarquista prácticamente no obtendrá representación, siendo los partidos Comunista y Socialista las principales fuerzas. Así, la organización sindical asumirá un rol movilizador y protagónico en el plano nacional, restableciendo una larga práctica de articulación con los partidos de izquierda, una suerte de simbiosis entre ambas instancias en la que los máximos dirigentes eran líderes de ambas organizaciones simultáneamente. Esto/Lo anterior permitirá que la CUT jugara un importante rol en las propuestas de la izquierda, respaldara la alianza política y apoyara las campañas electorales, principalmente las presidenciales.

En septiembre de 1957, en miras a las elecciones presidenciales del año siguiente, se llevó a cabo la "Convención Presidencial del Pueblo" para decidir la candidatura y el programa de la izquierda. Además de los partidos integrantes del FRAP, que en el encuentro representaban la mayoría, asistieron dos pequeñas formaciones: la Alianza Nacional de Trabajadores (origen ibañista) y el Partido Radical Doctrinario. Los distintos sectores presentaron precandidatos con los siguientes resultados: Salvador Allende, 509; Alejandro Serani, 350; Humberto Newes, 331; Francisco Cuevas, 323; Rudecindo Ortega, 318; Guillermo del Pedregal, 212; nulos, 43 y blancos, 6.

De acuerdo a lo establecido, se debía realizar una segunda vuelta de votaciones en caso de que ningún candidato alcanzara la mayoría absoluta, pero según lo señalado por la prensa, se había buscado un entendimiento entre las distintas fuerzas para llegar a un acuerdo.

> Cuando debía comenzar la segunda vuelta de votaciones, esta se suspendió y se llevó a cabo una reunión entre los precandidatos, que después de dos horas de intercambio de ideas al respecto, se resolvió anunciar la renuncia de los precandidatos a favor del señor Allende y pedir a la convención su proclamación inmediata (*El Mercurio*, 18 de septiembre de 1957, p. 19).

De este modo, la candidatura de Allende en 1958 fue la primera vez en que la izquierda llevaba un candidato apoyado por una colación hegemónica de izquierda. Tanto para esas elecciones como para las de 1964, la alianza de izquierda vislumbró las posibilidades de triunfar. Escenario distinto a las elecciones presidenciales de 1952, en las que si bien Allende fue candidato, no representó una propuesta de unidad de la izquierda, sino que se buscaba reagrupar las fuerzas de un Partido Socialista dividido. En este sentido, se puede afirmar que tanto el FRAP como posteriormente la UP, más allá de las diferencias existentes al interior de la alianza, fueron la expresión de una izquierda que asumió la lucha electoral como estrategia política para llegar al poder, con la convicción que tenían la posibilidad y la capacidad para llevar adelante un proyecto revolucionario victorioso.

En las elecciones presidenciales de 1964 el punto de vista del PSCh había variado y estaba por formar una alianza más allá de la izquierda, declarando que "el FRAP proclama sus propósitos de conformar un gobierno multipartidista" (Declaración de Raúl Ampuero: 1964 año de prueba para la revolución chilena, Concepción, 1964), y había definido con antelación que Allende sería el candidato del partido. Asimismo, en el Pleno del Comité Central del PCCh del 6 de enero de 1963, se proclamó oficialmente el apoyo a la candidatura de Salvador Allende, y a fines de enero se realizó la Asamblea presidencial del FRAP, donde se debía refrendar el candidato, y tal como decía la prensa, "no fue necesario recurrir a numerosas votaciones" ya que el candidato de los partidos Comunista y Socialista era Allende, no obstante que el Partido Demócrata Nacional (PADENA, fusión de distintos partidos de centro, 1960) presentara a Pedro Nolasco Cárdenas. Los resultados daban a Salvador Allende 150 votos frente a 60 de Nolasco.

El diagnóstico que realizaba el PCCh, y que en gran medida estaba influido por la situación política bajo el gobierno de derecha, era que los problemas que afectaban al pueblo eran el resultado del saqueo imperialista de las riquezas básicas, de la acción de los grupos monopólicos nacionales y de la existencia del latifundio. El Pleno del Comité Central realizado en diciembre de 1963 advertía la necesidad de estar muy atentos porque "ya que en un momento dado, el Golpe de Estado podría pasar a constituir el peligro principal" (*Revista Principios*, mayo-junio de 1964, p. 92). Al poco tiempo, en marzo de 1964 el periódico del PCCh, *El Siglo*, publicó un documento titulado "Aseguremos el camino pacífico" bajo la firma del secretario general Luis Corvalán. En dicho documento se destacaba que se entraba en una nueva etapa, caracterizada por:

> El acrecentamiento de las posibilidades de victoria de la candidatura de Allende. Entre las razones para este triunfo estaba la nueva crisis que enfrentaba el Frente Antidemocrático haciendo perder la fe a los reaccionarios en las posibilidades de mantenerse en el poder (*El Siglo*, 11 de marzo de 1964, pp. 70-76).

Hecho que obligaba a tener presente que "las clases reaccionarias no ceden voluntariamente las posiciones que detentan", y agregaban que estas "se guían ante todo por sus intereses de tales, colocándose por encima de los de la nación", indicando que incluso podrían llegar a la subversión, la guerra civil, el terror y la traición a la patria. Reiteraban su interés y confianza en el camino pacífico, sin que ello descartara los peligros que amenazaban, y que podrían cambiar "bruscamente el curso de los acontecimientos y arrastrarlo a una grave situación". Sostenían que los "ultrarreaccionarios", desde el momento que habían visto la posibilidad del triunfo de la izquierda, habían ideado toda clase de maniobras "para cerrarle el paso al pueblo", entre las cuales estaban las más legalistas, como por ejemplo "modificar la Constitución y las leyes electorales con miras a imponer una división artificial del electorado, entre marxistas y no marxistas", lo que allanaba una posible unión entre los votos de la DC y del Frente Democrático en contra del FRAP. Esto se podía lograr si se "hacía valer indistintamente en el Congreso Pleno, la primera o la segunda mayoría para cualquier candidato que no sea Allende" (*El Siglo*, 11 de marzo de 1964, pp. 70-72), en referencia a que la Constitución de 1925, vigente en dicho momento, establecía que en caso que ninguno de los candidatos a presidente de la República obtuviera mayoría absoluta de sufragios, el Congreso Pleno (senadores y diputados en sesión especial) definirían el próximo presidente (Constitución Política de la República de Chile de 1925).

La izquierda veía el triunfo de Allende como algo inminente, lo que conllevaba por una parte una gran esperanza, pero también un mayor riesgo de que se consumaran los planes golpistas de la derecha, argumentando que:

> Haya o no golpe de Estado u otro tipo de sedición reaccionaria, antes o después de la elección presidencial, no solo depende de los planes y propósitos del enemigo, sino que, fundamentalmente de lograr una correlación de fuerzas favorables para llevar adelante los cambios, desarrollar el movimiento popular, las luchas, la organización, la

> unidad y la conciencia política de las masas (*El Siglo*, 11 de marzo de 1964, pp. 73-76).

Se trataba de "dar la pelea porque la revolución chilena, será en beneficio del 90% de los chilenos" (*El Siglo*, 11 de marzo de 1964, pp. 73-76).

Al interior del PSCh, las tareas más urgentes del socialismo chileno estaban relacionadas con "la unidad de las fuerzas revolucionarias; la elección de los métodos de lucha, legales e ilegales; las definiciones ideológicas relativas a la concepción de la revolución y de la aceptación de la guerra de liberación nacional" (*Revista Arauco*, junio de 1963). Acercándose a las elecciones se percibía que las expectativas del triunfo de Allende eran altas, señalando que:

> La hora de la liberación se acerca. La provocación no le hace perder el tino y su firmeza revolucionaria. Ha aceptado un camino de acuerdo a las condiciones chilenas. Todas sus energías las está entregando en esta lucha y usando las reglas del juego de la democracia formalista y tradicional. (...) Queremos llevar al socialismo, pero no buscando el camino brusco y violento. Queremos un proceso con plena conciencia y participación de las masas (*Revista Arauco*, junio de 1963, p. 5).

En ese momento las visiones de ambos partidos tenían matices, pero compartían lo central: que "Chile se plantea en este instante, la tarea histórica de que las fuerzas populares desplacen del poder a las clases reaccionarias y constituyan un gobierno democrático de trabajadores, bajo el signo del socialismo" (Arrate y Rojas, 2003 p. 367).

En la misma dirección su sitúan las declaraciones de Salvador Allende quien veía que Chile se encontraba en un momento histórico:

> Esta no es una batalla más; esta es la decisiva; es esta una lucha frontal; es el pueblo que ha resuelto romper sus cadenas opresoras mientras la rancia oligarquía pretende continuar sometiéndolos (...), venciendo a las castas dominantes y feudales que entregaron nuestro patrimonio, que han desnacionalizado nuestra patria, y que sirven permanentemente intereses foráneos y no a los efectivos intérésese de Chile y de su pueblo, vamos a construir el primer gobierno

> auténticamente democrático, nacional, popular y revolucionario. Yo no voy a ser un presidente más: voy a ser el primer presidente de Chile que va a defender el interés del noventa por ciento de los chilenos (*Revista Arauco*, marzo de 1964, pp. 11-13).

El triunfo del candidato de la DC, en una elección a dos bandas, con el apoyo incondicional de la derecha que asumió la "opción de mal menor", y que estaba dispuesta a todo para impedir el triunfo de Allende, tendrá alcances en la coalición de izquierda, generando que una parte del sector sintiera que en definitiva "la Democracia Cristiana era la otra cara de la derecha" (Torres, 2014, pp. 244-245). Las altas expectativas de triunfo, sumado a los resultados obtenidos, donde Allende aumentó su votación respecto de la elección anterior, consiguiendo casi un 39%, produjo una fuerte frustración en la izquierda y comenzó a extenderse la desconfianza en la llamada "vía electoral". Incluso en su momento, la influencia que había tenido la Revolución Cubana no había sido un factor para desahuciar del todo la vía electoral. Escepticismo que se observará particularmente en el PSCh, cuando en su 22º Congreso, efectuado en Chillán en 1967, se desechó la vía electoral, señalando que "la vía pacífica y legal por sí misma no conduce al poder". Posteriormente, en junio de 1969, se llevó a cabo el Pleno Nacional del PSCh, ocasión en que la corriente socialista que exigía el cumplimiento de las resoluciones del Congreso de Chillan (1967) demostraría tener significativa fuerza dentro del partido.

El apoyo de la derecha a Frei Montalva tendrá impacto, pero no radicalizará a toda la izquierda. Dentro del PSCh existía un grupo significativo que no estaba por reincidir en la estrategia electoral, sosteniendo que el camino pacífico o la lucha legal eran instrumentos limitados de acción, por lo tanto se planteaban la necesaria implementación de la vía armada. Pero otro sector, en el que se posicionaba Allende, veía con cierto optimismo el nuevo escenario que se configuraba; las señales que valoraban eran el que los radicales se encontraban en posiciones más cercanas a la izquierda, y también la incorporación a la alianza de izquierda de un sector escindido

de la DC el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), quienes compartían la lucha por el camino institucional y la creación de una política de alianzas amplias. En la misma dirección de Allende se ubicaba el secretario general del PSCh, Aniceto Rodríguez, quien señalaba: "La sostenida tarea ideológica y política de los socialistas ha sido y será inexorable: desplazar del poder a los que sirvan al imperialismo y sostienen al régimen capitalista, para construir con decisión una república democrática de trabajadores" (*La Última Hora*, 19 de julio de 1969, p. 7). De este modo, Allende junto a un sector de su partido, se situaba en las posiciones más moderadas, siendo encasillado peyorativamente por el grupo más radicalizado como un "socialdemócrata", y que en el Congreso de Chillán, se había declarado contrario a la retórica rupturista (en dicho Congreso, Allende no resultó electo como miembro del Comité Central de PSCh). Es importante tener presente que este partido, que estaba imbuido del ideal revolucionario y de la teoría rupturista, coexistía con una praxis legalista, que mejor evidencia el hecho de que en ese mismo Congreso se impuso ampliamente la corriente más moderada, resultando electo como secretario general, Aniceto Rodríguez.

El PCCh compartía con este sector del PSCh la visión esperanzadora respecto del futuro, perseveraba en su política de unidad y de formar una coalición amplia, pero privilegiando por sobre todo, la alianza socialista-comunista. Defendía la necesidad de una aceleración del tránsito institucional que permitiera superar rápidamente las tareas de modernización capitalista para pasar a una etapa superior de lucha.

En su 14° Congreso realizado en 1969, este partido ratificó su posición respecto del carácter de la revolución chilena: antiimperialista, antioligárquica y antifeudal. En torno a estos conceptos, abogaba por la formación de un Gobierno Popular, en el cual tendrían representación todos los sectores del pueblo y que debía estar integrado por todos los partidos progresistas y revolucionarios, porque, para ganar las elecciones se requería contar con una base de apoyo que fuera más allá de la izquierda. Planteaban que la nueva alianza debía

ser capaz de alcanzar un entendimiento con el Partido Radical (PR), "que es blanco de las maquinaciones del enemigo, que se empeña en lograr que abandonen su línea de izquierda" (*El Siglo*, 14 de abril de 1969, p. 31), como también con sectores demócrata cristianos. Sobre la unidad de todos los sectores populares, señalaban que en 1964 se había propuesto una alianza de gobierno entre socialistas y comunistas porque en dicho momento no había condiciones para la formación de una coalición más amplia, pero que el contexto había variado: "debemos propender a un movimiento popular y un gobierno de una amplia base social, el cual es la única alternativa para detener a la derecha" (*El Siglo*, 14 de abril de 1969, p. 31).

Así, para un sector del PSCh, entre los que se encontraba Allende, como también para el PCCh, la situación del momento requería de un esfuerzo para unificar a los partidos populares; las condiciones políticas habían cambiado y el momento requería alcanzar una alianza amplia, una Unidad Popular (UP). Finalmente, primó la noción de la UP como alianza amplia. El poder que habían alcanzado los sectores izquierdistas en el PR, y la incorporación del MAPU, que había dado claras señales de acercamiento no solo estratégico sino ideológico, con la izquierda marxista, fueron factores importantes. La presencia de estas nuevas fuerzas ensanchaba el campo de alianzas, por lo cual, si dentro del PSCh se hubiese impuesto la línea menos aperturista, habría arriesgado quedar en minoría o excluido políticamente. No obstante, el ingreso de los radicales a la UP no era un tema resuelto entre los socialistas, quienes exigían "pruebas de sinceridad piden socialistas a los radicales" (*El Mercurio*, 14 de julio de 1969, pp. 41-42). Antes de llegar a formalizar un acuerdo hubo un largo proceso de negociaciones. Las aprensiones y desconfianzas se fueron limando con los meses, a medida que los radicales ratificaban su definición de izquierda.

Finalmente, en octubre de 1969 el PSCh y el PCCh hicieron un llamado a los distintos partidos de la izquierda para formar una alianza política electoral. Fueron convocados el Partido Radical, el Social Demócrata, la Acción Popular Independiente (API) y el MAPU.

Se hicieron las estimaciones y, calculando el respaldo del nuevo conglomerado, en relación con los votos obtenidos por los partidos en las elecciones parlamentarias de ese año, la candidatura de la UP debía lograr casi 42%, lo que en un escenario a tres bandas, le daba la victoria segura al candidato de la izquierda.

La UP quedó constituida oficialmente el 9 de octubre de 1969. Sus integrantes se propusieron primero, lograr un acuerdo en torno a un programa de gobierno. Se estableció un comité coordinador para trabajar en la elaboración del programa. La comisión estuvo integrada por representantes del PCCh, PSCh, Radicales, MAPU y sectores independientes.

La izquierda en general coincidía en que el socialismo era la solución para la crisis estructural de la sociedad. La denominada *Vía Chilena al Socialismo* era la expresión del proyecto de la izquierda, que aspiraba llevar adelante cambios profundos, tanto en el orden económico, en lo político y lo social, a partir de la institucionalidad jurídica-política vigente. En la introducción del programa de la Unidad Popular se señala que "La tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí, es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile" (Programa básico de Gobierno de la Unidad Popular. Memoria chilena. Biblioteca Nacional).

Sin embargo, si en la definición del programa había mayor acuerdo, frente al candidato, cada partido integrante reivindicaba el derecho de que este proviniera de sus filas. En el caso del PSCh, el problema era mayor, porque no había consenso interno frente al candidato. Había grandes dudas frente a la posibilidad de que Allende fuera candidato por cuarta vez. Entre las alternativas estaba también el nombre del secretario general del PSCh, Aniceto Rodríguez.

En las memorias de Osvaldo Puccio, quien por muchos años fue secretario privado de Allende, y un apoyo dentro del partido, se describen muy bien las fuertes pugnas y discrepancias que existían en torno a Allende:

> Antes de que Allende fuera proclamado candidato por el partido, hubo conversaciones con representantes de diversas corrientes dentro del Partido Socialista. Yo conversé con miembros del Comité Central y dirigente de la CUT, quienes desde hace tiempo tenían una posición muy dura y tajante. (...) sosteniendo que el único camino viable para conseguir el poder era la insurrección armada. Que debíamos terminar de arrastrar a los obreros hacia las urnas, lo único que se conseguiríamos era afianzar las posiciones de la derecha. (...) Y que si el partido llegara realmente a plantear la candidatura de Allende, él saldría a la calle a decir que eso era traicionar a la clase obrera (Puccio, 1985, pp. 196-198).

Este relato crítico contra Allende coexistía con conversaciones con otros dirigentes del PSCh, quienes planteaban:

> Solo Allende era capaz de llevar adelante una posición con la cual estuvieran de acuerdo tanto los sectores socialdemócratas como también los sectores revolucionarios del partido. Allende era un político suficientemente audaz como para tomar un camino nuevo hacia el socialismo (...), pero tenía la sensación de que el partido no quería nombrar a Allende, por un complejo anti-Allende de algunos de sus dirigentes (Puccio, 1985, pp. 196-198).

A su vez, Allende, en enero de 1970, hizo referencia al esfuerzo unitario de partidos y sectores que interpretaban las demandas de la mayoría del país afirmando que se requería:

> Tener fe y confianza en la voluntad de las masas populares y en la capacidad de sus dirigentes para enfrentar la responsabilidad histórica que tenemos los hombres de izquierda, la Unidad Popular se plantea como una alternativa de un gobierno diferente, es la conquista del poder para el pueblo, precisamente después que el país ha experimentado el fracaso del reformismo demócrata cristiano y cuando aún están a la vista los resultados del anterior régimen, inspirados ambos en el capitalismo tradicional (Allende, 1992, pp. 275-279).

Pero el tiempo corría en contra y se hacía cada vez más apremiante despejar el nombre del candidato. El PSCh decidió realizar una consulta a nivel nacional. Los resultados fueron elocuentes; de los 35 regionales, solo dos respaldaron a Aniceto Rodríguez y 33 a Allende, comprobándose una vez más la fuerza y liderazgo de Allende a nivel regional. Pero la votación en la dirección del partido fue distinta: 14 votos a favor de Allende y 13 abstenciones, ratificándose la candidatura de Allende. Cabe destacar que entre las abstenciones se contaban las de importantes dirigentes como Carlos Altamirano, Adonis Sepúlveda y Clodomiro Almeyda (Furci, 2008, p. 201).

La tensión permanecía latente; una expresión de esta situación fueron las declaraciones del subsecretario general del PS, Adonis Sepúlveda, quien informaba a la prensa que ante el retiro de la candidatura de Rodríguez se había designado a Salvador Allende como el candidato del PSCh, diciendo implícitamente que Allende había sido designado (*El Mercurio*, 30 de agosto de 1969, p. 31). En aquella reunión de la dirección del partido, paradojalmente, se ratificó por unanimidad "la línea del Frente de Trabajadores y las tesis del Congreso de Chillan" (*El Mercurio*, 30 de agosto de 1969, p. 31).

Finalmente, el 20 de enero de 1970, después que los candidatos presentados por las otras fuerzas partidarias retiraron sus postulaciones, fue proclamado Salvador Allende como abanderado de la Unidad Popular. El acto se hizo en la Avenida Bulnes. De fondo estaba el retrato del ex presidente radical Pedro Aguirre Cerda. Allende se dirigió a las masas y declaro: "A la lealtad de ustedes, responderé con la lealtad revolucionaria (...) las fuerzas de izquierda son la única alternativa que hará desaparecer las tensiones políticas" (*El Siglo*, 22 de enero, 1970), iniciándose así la campaña de 1970.

Los resultados dieron como primera mayoría a Salvador Allende con un 36,2% de los votos. Lo seguía con una estrecha distancia el candidato de la derecha, Jorge Alessandri, que alcanzó el 34,9%. El triunfo de Salvador Allende el 4 de septiembre fue celebrado con alegría y cautela.

El lapso que va desde el 4 de septiembre, cuando triunfa con mayoría relativa, hasta al 3 de noviembre, fecha de su proclamación, fue un período cargado de tensión, en que ciertamente estuvo en riesgo el régimen democrático. Al fracasar el intento de la derecha y los intereses estadounidenses por impedir el ascenso de la UP al gobierno, la posibilidad de asumir se hizo cierta. El 3 de noviembre Allende es nombrado por el Congreso Nacional, Presidente de la República. En la votación se contó con los votos del PDC, previo acuerdo y firma del "Estatuto de garantías Constitucionales".

La llegada de la UP al gobierno inició un nuevo ciclo político: por primera vez en la historia de Chile, se había elegido por sufragio universal un presidente que se definía marxista. Era la inauguración de un nuevo modelo para llegar al socialismo, la "vía chilena". Los ojos del mundo se posaron sobre la experiencia chilena, vista como una experiencia inédita y ejemplar. La UP sería la fundadora de un nuevo modelo para la construcción de una sociedad socialista, que, tal como lo reiteraba Allende, se realizaría de acuerdo con su tradición democrática, pluralista y libertaria.

El gobierno de la UP simbolizó un proyecto que favorecía a las grandes mayorías, la búsqueda por construir una "democracia auténtica", con mayor igualdad y equidad social, la ampliación de las libertades y de las oportunidades, la "participación popular en la dirección de la sociedad"; en suma, una sociedad más justa. Esa fue la propuesta de la UP. Sin duda quedó en deuda, porque en vez de seguir el camino de la "vía chilena" se extravió por otros derroteros que parecían más eficientes, pero que al final pavimentaron el camino a un brutal golpe de Estado (Moulian, 2006).

No era un proyecto imposible, era un proyecto que defendía las aspiraciones de amplios sectores, pero que también chocaba con los intereses económicos nacionales e internacionales, por lo cual era previsible que se desplegaran, tanto en Chile como en Estados Unidos, múltiples acciones desestabilizadoras y bloqueos económicos. Las acciones violentas de la derecha jugaron un papel importante en

el desenlace y la instauración de una de las dictaduras más duras del continente, aunque aquello por sí solo no lo explica.

El triunfo de 1970 se había alcanzado con un poco más de un tercio de los votos, por lo tanto, habría sido necesario ampliar la base de apoyo política y social para lograr gobernabilidad. Pero, por el contrario, desde los tres tercios iniciales se transitó a una situación de polarización, donde la derecha, que estaba conspirando desde el inicio, logró cooptar a la DC, hegemonizando una oposición dura y de confrontación a la UP. El apoyo logrado en las elecciones parlamentarias de 1973 fue leído por la izquierda como una ratificación de la línea de profundización revolucionaria, y por la centroderecha, como la imposibilidad de una salida legal.

¿Era un proyecto posible? Era extremadamente difícil, tenía algo de la "cuadratura del círculo" (Moulian, 2006, p. 269), pero este se podría haber cuadrado si se hubiese valorado una política de alianzas que incluyera a las amplias mayorías, y se hubiese luchado de manera genuina por la "vía chilena", entendida esta como la construcción de una auténtica democracia con todo lo que aquello representa.

Referencias

Allende G., S. (1992). *Obras escogidas: período 1939-1973.* Santiago: Ediciones del Centro de Estudios Políticos Latinoamericanos Simón Bolívar.

Arrate, J. y E. Rojas. (2003). *Memorias de la izquierda chilena: 1970-2000.* Javier Vergara Editor.

Barría, J. (1971). *Historia de la CUT.* Santiago: Ed. Prensa Latinoamericana.

Corvalán, L. (1971). *Camino de victoria*. Santiago: Horizonte.

El Mercurio, 18 de septiembre de 1957, p. 19.

El Mercurio, 19 de junio de 1969, p. 25.

El Mercurio, 14 de julio de 1969, pp. 41-42.

El Mercurio, 30 de agosto de 1969, p. 31.

El Siglo. (1956, 11 de diciembre). Declaración del Partido Comunista de Chile sobre la formación de un partido de los trabajadores. Comisión política, p. 11.

El Siglo. (1956, 12 de septiembre). Declaración del PCCH, sobre la formación de un partido único de los trabajadores, p. 11.

El Siglo, 14 de abril de 1969, p. 31.

Furci, C. (2008). *El Partido Comunista de Chile y la vía al socialismo*. Santiago: Ariadna.

Jobet, J. C., y A. Chelén. (1972). *Pensamiento Teórico y Político del PSCh* (1ª ed.). Santiago: Ed. Quimantú.

La Última Hora, 6 y 9 de febrero de 1956, p. 5.

La Última Hora, 19 de julio de 1960, p. 7.

Moulian, T. (2006). *Fracturas. De Pedro Aguirre Cerda a Salvador Allende (1938-1973)*. Santiago: Ed Universidad ARCIS, LOM Ediciones.

Puccio, O. (1985). *Un cuarto de siglo con Allende: Recuerdos de su secretario privado*. Santiago: Ed. Emisión.

Revista Arauco, 42, junio de 1963, 8.

Revista Arauco, 50, marzo de 1964, 11-13.

Revista Principios, 101, mayo-junio de 1964, 92.

Tohá, J. (1956). Discurso pronunciado en representación del Partido Socialista, en la Concentración del Frente de Acción Popular el 8 de diciembre de 1956. *La Última Hora,* p. 18.

Torres Dujisin, I. (2014). La crisis del sistema democrático: Las elecciones presidenciales y los proyectos políticos excluyentes. Chile 1958-1970. Santiago: Editorial Universitaria.

Economía y reforma agraria

Revolución rural y protagonismo campesino (Chile, 1967-1973)

Eugenia Palieraki

La caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética potenciaron en las ciencias sociales aquella corriente liberal que pronosticaba el fin de la historia y veía en la revolución una noción que resueltamente pertenecía al pasado (Fukuyama, 1994; Furet, 1996). Sin embargo, durante las últimas dos décadas, hubo cambios. Investigaciones en sociología política y en historia han permitido reafirmar la validez de la revolución como objeto de estudio y, también, como interrogación oportuna para el tiempo presente. Esta nueva visión crítica con respecto a la historiografía y a la filosofía (neo)liberal, también lo ha sido frente a aquella otra corriente disciplinaria que proyecta una imagen estereotipada del fenómeno revolucionario: un movimiento de masas dirigido por una vanguardia lúcida que sabía leer en las leyes de la historia, siempre triunfante, siempre borrando toda continuidad con el pasado. Esta concepción estereotipada de la historia de las revoluciones considera, además, que el fracaso de un proceso de cambio social y político no puede sino resultar del carácter insuficientemente revolucionario del mismo.

En oposición a la concepción liberal y a la mistificadora, las investigaciones recientes se han interesado en los *procesos* revolucionarios (Dobry, 2009; Hmed, Jeanpierre, 2016). Estas han analizado de la misma manera los procesos que han tenido una salida victoriosa y los que, al fin del camino, no lograron subvertir de forma radical y permanente las estructuras preexistentes. Si bien la etapa final y los resultados interesan, no se parte de ellos para juzgar el carácter más o menos revolucionario de un proceso. Toda revolución en marcha se caracteriza por su indeterminación y sus actores nunca conocen de antemano si ella tendrá o no una salida victoriosa. Por lo tanto, el carácter revolucionario de un proceso político no puede inferirse de su desenlace, incierto hasta el final. Lo que sí revela una revolución en marcha, tal vez más que las transformaciones macro, son los cambios producidos en las *subjetividades* de los actores históricos, en particular entre quienes nunca antes se habían sentido protagonistas de su propia historia.

En Chile, esta nueva mirada sobre las revoluciones, no como desenlace sino como *proceso* marcado por la emergencia de *subjetividades* revolucionarias, ha permitido repensar el período de la Unidad Popular (UP). Recientemente, la UP viene analizándose ya no como una tentativa reformista que por su timidez no supo ni pudo resistir a la violencia de la derecha, sino como proceso revolucionario. Es decir, esta nueva visión pone en entredicho la tradicional oposición reforma-revolución. Se elabora, en primer lugar, desde la historia de actores que no han dejado de ser reivindicados –por ellos mismos y por la historiografía empática con ellos– como revolucionarios y opuestos al «reformismo» comunista o socialista (Schlotterbeck, 2018; Gaudichaud, 2016). Pero, las mayores posibilidades para repensar la UP como proceso revolucionario incluso en su dimensión «reformista», las ofrece la historiografía interesada en procesos y actores que hasta ahora no se identificaban claramente con el campo revolucionario (Pinto, 2005; Riquelme, 2015; Álvarez, 2010). Y ello, en primer lugar, porque ella rompe de manera aún más radical con el esquema binario y simplificador «reforma versus revolución». En

segundo lugar, porque al interesarse en actores institucionales –hasta ahora tachados de «reformistas»– y en su estrecha relación con actores sociales y políticos no institucionalizados, como los campesinos o los pobladores o los obreros, considerados como revolucionarios por definición, esta nueva mirada revisa o matiza otra tesis que ha condicionado el debate historiográfico sobre la UP: la oposición entre *revolución desde arriba* y *revolución desde abajo* (Winn, 2004).

No cabe duda de que la alianza de comunistas, socialistas y cristianos de izquierda que componía la UP no corresponde a la imagen estereotipada de la vanguardia revolucionaria. No cabe duda tampoco de que la acción estrictamente institucional que se llevó a cabo bajo la presidencia de Allende no se asemeja a una revolución donde, en algunas horas, las masas se apoderan del Palacio de Invierno y hacen tabula rasa de los antiguos poderes. Pero si además de la dimensión rigurosamente institucional del proceso político que vivió Chile entre 1970 y 1973, se tiene en cuenta el *protagonismo* (Burstin, 2013) popular que surge durante el período; y si la llegada de Allende a la presidencia se inserta en una cronología más amplia que dé a entender el contexto social y político de la época, los mil días de la UP sí pueden ser caracterizados como un *proceso revolucionario*, aunque sin una conclusión de la misma naturaleza. Aquí se adopta la noción de "protagonismo" tal como fue propuesta por Haim Burstin para analizar la Revolución Francesa desde abajo y a través de actores "ordinarios". Actores que en tiempos ordinarios se sienten despojados de toda competencia decisoria, pero que, en tiempos extraordinarios, pueden llegar gradualmente a tomar conciencia de su propia capacidad de acción y luego a asumir un rol protagónico en el proceso revolucionario.

El concepto «proceso revolucionario» no tiene el mismo sentido en todo lugar y momento histórico. El objetivo de este capítulo es entender lo que este significaba en el Chile de los años 1970-1973. Para ello, me enfocaré en aquella parte del país que más resistencia al cambio parecía oponer: el mundo rural y más específicamente las regiones de Cautín y Valdivia. Cautín y Valdivia no será comparados,

sino tomados como dos casos de estudio analizados en forma paralela, que me permitirán anclar mi análisis en un contexto histórico y regional específico. He decidido enfocarme en estas dos regiones, porque en ellas la dominación de clase estaba imbricada con la étnica.

Lo rural es, a menudo, percibido como un universo aparte, marcado por la repetición, donde la naturaleza cíclica de los fenómenos naturales y de las actividades de producción opone una resistencia natural al cambio. Esto parecería confirmarse con mayor razón en el caso de Chile, donde desde el período colonial hasta inicios de la década de 1970, las estructuras económicas y sociales –la hacienda con su mano de obra dependiente, el inquilinato– habían conocido muy pocas alteraciones (Bellisario, 2013). Sin embargo, durante los años de la UP, es justamente el campo el que conoce el cambio más profundo de sus estructuras socioeconómicas y políticas y donde surgen las formas más radicales de movilización como la militancia en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) (Palieraki, 2014), pero también y, sobre todo, un protagonismo revolucionario campesino autónomo e inédito.

Es menester aclarar lo siguiente. Los años 1967-1973 no son el primer período de la historia de Chile durante el cual el campo está atravesado por conflictos. A lo largo del siglo XIX hubo la masiva resistencia mapuche a la campaña de conquista lanzada por el Estado nacional chileno (Bengoa, 2000). Los campesinos *winka* tampoco fueron actores sociales apáticos. Sí protagonizaron revueltas campesinas, aunque la forma más frecuente de oposición al patrón de fundo fue el pliego de peticiones (Almino *et al.*, 1970, Vol. 2, pp. 17 y ss.). Ahora bien. La emergencia de un *protagonismo* campesino implica no solo la oposición localizada y puntual al orden social rural; hablar de protagonismo implica que los campesinos movilizados localmente se autodefinan como segmento de un actor social cohesionado dotado de agencia histórica. En este sentido, el único antecedente al protagonismo campesino de los años 1967-1973 fueron los intentos de sindicalización campesina a inicios del siglo XX.

Sin embargo, ellas fueron de corta duración y no prosperaron, tanto debido al poder político de los hacendados, como a la opción de la izquierda por renunciar a la sindicalización campesina para que, a cambio, fuera tolerada la sindicalización minera e industrial (Loveman, 1976). Apartándome de la visión mistificadora del movimiento campesino como actor social constituido a-históricamente y siendo por definición revolucionario, postulo aquí que es menester historizar la agencia y el protagonismo campesinos. En el caso de Chile, la emergencia de un protagonismo campesino es justamente producto del proceso institucional y a la vez social que viven las regiones rurales entre 1967 y 1973.

En contextos marcados por la continuidad y las resistencias al cambio, el cuadro político, institucional o social preexistente puede desempeñar un rol importante en el desencadenamiento de un proceso revolucionario. En el campo chileno de los años 1960-1973, la dominación de clase era tan duradera y la creencia en la imposibilidad de un cambio tan arraigada que el proceso revolucionario solo pudo subsistir adoptando la apariencia del marco legal liberal o de la exterioridad al mundo rural. Así, en el agro chileno, las condiciones de posibilidad para la alteración radical del orden no las genera ni una revuelta campesina ni una explosión incontrolada de ira popular contenida durante siglos. En este orden social rural, aparentemente inmutable, la brecha la abren dos leyes –de reforma agraria y de sindicalización campesina– promulgadas en 1967. La ley de reforma agraria le permite al Estado chileno expropiar 10 millones de hectáreas, sea 1/8 del territorio nacional. La ley de sindicalización campesina promulgada 46 años después de la legalización de los sindicatos urbanos, permite –hasta 1973– la sindicalización de más de 200.000 campesinos. Por esta brecha abierta pasan primero actores revolucionarios externos al mundo rural. Solo entre 1971 y 1973 la revolución rural chilena es realizada por sus protagonistas "naturales", los campesinos.

El sur rural: del paisaje liso y cotidiano a las primeras grietas

A pesar de sus especificidades –una población mapuche numerosa en el caso de Cautín, una dinámica industria maderera en el caso de la región de Valdivia– las dos provincias tenían varios rasgos comunes. En primer lugar, la violenta colonización *winka* entre mediados y fines del siglo XIX y la apropiación, por fraude o con el apoyo del Estado chileno y su legislación, de las tierras mapuche por los colonos blancos o mestizos (Miguez, 2013). Otra característica común de ambas regiones y de su vida política, compartida con las demás zonas rurales del país: el voto masivo y no libre a favor de la derecha. Hasta fines de la década de 1950, cuando las leyes aprobadas gracias a la acción del Bloque de Saneamiento democrático hicieron secreta la votación, los hacendados les dictaban a los campesinos que dependían de ellos qué papeleta introducir en la urna.

Este no era el único caso de violación de los derechos de los campesinos. La desigualdad, la pobreza extrema, la explotación en el trabajo se imponían por medio de una mezcla de persuasión y violencia. La vía de la persuasión era emprendida por las escuelas rurales, financiadas por los hacendados y controladas por una Iglesia Católica conservadora, al menos hasta inicios de la década de 1960. En cuanto a la violencia, era ejercida por las milicias de los hacendados con la participación activa o con la tolerancia de la policía y las autoridades judiciales (Bravo Aguilera, 2012).

Las diferentes formas de abuso eran posibles gracias a la ausencia de medios legales de organización y defensa de los derechos ciudadanos y laborales de los campesinos. Hasta fines de la década de 1960, al mismo tiempo que la sindicalización era prohibida, los hacendados privilegiaban el trabajo de los menores de edad, dados los salarios mucho menos elevados que recibían. Las condiciones de trabajo eran tales que, en detrimento de la vida campesina, muchos jóvenes adultos preferían la marginalidad urbana de la población (Caviedes, 2019).

A pesar de la persistente dominación de clase en el agro chileno, a mediados del siglo XX unas primeras grietas se manifiestan en la superficie del orden rural establecido. El éxodo rural que se intensifica durante los años 1940-1950, crea puentes de comunicación inéditos y extensos entre lo rural y lo urbano. Cuando en la década de 1950, en las poblaciones donde vive una mayoría de ex-rurales, los partidos de izquierda, en particular el Comunista y el Socialista, tienen un mayor auge (Garcés, 2002), la izquierda empieza a ser percibida como canal privilegiado de la politización popular también en el campo (Bravo Aguilera, 2012, pp. 51-57).

Un rol importante en el viraje del campo hacia la izquierda lo tiene también la radio. En la década de 1960, las regiones rurales cuentan aún con un número elevado de analfabetos y una cantidad ínfima de televisores. La radio se impone como el principal medio de comunicación. Estos mismos años son también un período de expansión de las radios universitarias, a las que se les da la misión de democratizar la cultura y la información. El mundo rural deja de ser hermético. La de 1964 es la segunda elección presidencial en la cual los votantes pueden seguir en directo, por la radio, el debate entre los dos principales candidatos a la presidencia, el socialista Salvador Allende y el demócrata cristiano Eduardo Frei. Una propuesta clave en ambos programas es la reforma agraria.

La inclusión en el programa de la Democracia Cristiana (DC) de una medida que hasta entonces en América Latina se identificaba con gobiernos revolucionarios (México, Cuba) puede resultar sorprendente. Ella se explica tanto por la vinculación de la DC con la Alianza para el Progreso, que no será detallada aquí (Wright, 2001), como por el viraje progresista durante esa década de la Iglesia Católica chilena (Nocera, 2014; Giraudier, 2014). A fines de la década siguiente, la corriente socialcristiana se había impuesto en su interior. En 1962, un año después de la encíclica *Mater et Magistra*, del Papa Juan XXIII, que subraya la misión social de la Iglesia, el obispo de Talca, Manuel Larraín, hace la primera reforma agraria en Chile: distribuye 3200 hectáreas a 200 familias campesinas a las que, a la vez,

organiza en cooperativa (INPROA, 1977). Otra importante grieta aparece sobre la fachada lisa del orden rural, esta vez producida por la institución que, hasta entonces, defendía la gran propiedad agrícola y el conservadurismo rural.

La derecha empieza a sentir con aprensión que la marea está cambiando. La victoria de Óscar Naranjo, poco antes de las elecciones presidenciales de 1964, transforma la aprensión en pánico. El socialista Óscar Naranjo –que unos años más tarde organizará la primera toma de terrenos agrícolas por parte del Partido Socialista– se presenta como candidato al Senado en la región rural y conservadora de Curicó. Gana la elección en esta circunscripción donde la derecha nunca había perdido. La instauración de la votación secreta desde 1958, los contactos regulares entre la ciudad y el campo, el acceso a la información, la promoción de la reforma agraria por la Iglesia que legitima los anhelos sociales de los campesinos, hacen posible la victoria de la izquierda en una región tradicionalmente conservadora. Pero si Naranjo ha ganado en Curicó, ¿qué impedirá que la izquierda gane la elección presidencial? En 1964, Frei –a pesar de su programa radical y gracias a una campaña abiertamente anticomunista (Casals, 2014)– sale victorioso en la contienda electoral con el apoyo de la derecha.

Leyes y reformas: un camino para la revolución en el Chile rural

Las primeras grietas en el orden establecido del campo descriptas están, sin embargo, circunscriptas tanto en su extensión geográfica como en su impacto político. Paradojalmente, lo que crea las condiciones de posibilidad para el desencadenamiento de un proceso revolucionario en el campo son dos textos legislativos sobre reforma agraria y sindicalización campesina.

Aunque promulgada por un Congreso con mayoría demócrata cristiana, la Ley de Reforma Agraria N° 16.640 de julio de 1967 es

una disrupción del orden establecido en varios aspectos. En primer lugar, porque, para ser promulgada, necesitó la previa revisión del artículo 10 de la Constitución, posible gracias a una moción presentada por tres socialistas (Raúl Ampuero, Tomás Chadwick, Salomón Corbalán). Antes de 1967, el artículo 10 instauraba la inviolabilidad absoluta de la propiedad privada (Ministerio del Interior, 1925). Los tres socialistas, apelando al principio legal de "función social de la propiedad" y contando con el apoyo de la DC y de la izquierda, logran modificar dicho artículo. De ahí en adelante, si la propiedad privada no cumple con su función social, puede ser expropiada por el Estado, quien no tiene la obligación de indemnizar al propietario. En el caso específico de la propiedad agrícola, la modificación del artículo 10 concierne tanto a las haciendas sin cultivar como a las de tamaño excesivo, donde la acumulación indebida de terrenos deja a los campesinos de la región sin acceso a la tierra.

El artículo 10 y la Ley de Reforma Agraria tienen un profundo impacto en el campo. En primer lugar, liberan a los trabajadores de su subordinación ante el hacendado quien hasta entonces era el único empleador posible (Thezá Manríquez *et al.*, 2017). En adelante, el hacendado puede ser reemplazado por el Estado. En 1967 se rompe el antes ineludible vínculo de dependencia y dominación entre el hacendado y el campesino. Adicionalmente, el concepto de "función social de la propiedad" tiene –al menos en el contexto chileno de los años 1964-1973– un elevado potencial contestatario. A inicios de la década de 1970, los campesinos sin tierra se apoderan sistemáticamente de este argumento formal para legalizar las prácticas disruptivas que son las tomas de terreno y para solicitar la expropiación por parte del Estado de las haciendas que ellos cultivan (Alfaro, 2011).

Pero la Ley de Reforma Agraria no solo produce cambios a nivel macro. También crea las condiciones de posibilidad para que emerja entre los trabajadores agrícolas un nuevo régimen de subjetividad política. Junto con la posibilidad de expropiación de terrenos, esta Ley crea un dispositivo de formación de los campesinos (Garrido *et al.*, 2017). De él se hacen cargo el Instituto de Desarrollo Agropecuario

(INDAP), la Corporación de Reforma Agraria (CORA) y el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria (ICIRA), en ocasiones en colaboración con las sedes universitarias regionales. Aunque algunas de estas formaciones tienen como objetivo la modernización del campo y la transformación de los campesinos en pequeños propietarios individuales, otras tienen una acentuada dimensión colectivista (potencialmente revolucionaria). La Ley de sindicalización campesina que impulsa la organización colectiva termina privilegiando la segunda en detrimento de la primera (Garrido *et al.*, 2019). Si bien la Ley de Reforma Agraria incluye la cooperativa y la cooperativa mixta como posibles formas de propiedad y abre, de esta forma, camino a la colectivización, la emergencia del protagonismo campesino más que producto de un régimen colectivo de tenencia de la tierra, emana de la posibilidad legal de sindicalización del campesinado, que lo institucionaliza como actor social y que hace de él un interlocutor legítimo del estado.

La segunda concepción sobre la formación de los campesinos se inspira en la teoría de opresión de la conciencia del pedagogo brasileño Paulo Freire y consiste en campañas de "alfabetización reflexiva". En el Chile de la década de 1960, en dichas campañas participan militantes socialcristianos o de izquierda, que a menudo son estudiantes. El objetivo no solo es enseñar a los campesinos a leer y a escribir –en efecto, el analfabetismo en el campo es tres veces mayor que en las ciudades (Austin, 2003)– sino también a despertar su conciencia y construir un sujeto social y político autónomo que se piense como protagonista de su propia vida (Kirkendall, 2010).

¿Una revolución importada?

Si bien las dos leyes de 1967 antes mencionadas les dan a los trabajadores rurales el estatuto pleno de actores sociales y políticos, la emergencia del protagonismo campesino es un proceso paulatino. En un primer momento, la ruptura con el orden rural establecido la

promueven actores que vienen del exterior. Se trata, en primer lugar, de funcionarios del INDAP, la CORA y el ICIRA. Algunos de ellos, como Andrés Pascal Allende, son admiradores de la Revolución Cubana y su guerrilla rural y desean explorar –por medio de su campo de experticia profesional y de su cargo en los organismos de reforma agraria– las posibilidades de una revolución rural en Chile (Pascal Allende, 1968 y 1971). Otros, como Jacques Chonchol, adhieren inicialmente a las orientaciones diseñadas por el gobierno demócrata cristiano, pero se radicalizan vía la experiencia que hacen del mundo rural, su miseria, sus desigualdades y terminan trabajando para el gobierno de Allende (Zerán, 2017).

Más importante aún en el proceso de emergencia de un protagonismo campesino es el rol de los estudiantes universitarios, en su mayoría, socialcristianos, militantes del MIR, o los dos a la vez. En Cautín y en Valdivia, la presencia de universitarios es un fenómeno relativamente reciente. Es a inicios de la década de 1960 que la Universidad de Chile inaugura en estas dos ciudades sus sedes regionales las cuales proponen programas de estudio (ingeniería forestal, agronomía, medicina, antropología, etc.) más acordes con las necesidades económicas o sociales de la región. Las pasantías de los estudiantes –entre quienes el MIR tiene una presencia pletórica, tanto en Cautín como en Valdivia– se realizan a menudo en comunidades rurales y crean los primeros vínculos personales entre campesinos y estudiantes. Entre estos últimos, son muchos los que están fascinados por el mundo rural. Un mundo que descubren primero por medio de los escritos del «Che» y su tesis sobre el campesinado como motor principal de la revolución latinoamericana. Luego, gracias a los vínculos creados por las pasantías universitarias, los estudiantes y militantes organizan, esta vez fuera del marco universitario, campañas de alfabetización, centros de salud rurales, o dan cursos de formación técnica.

No se trata, sin embargo, de una transmisión unidireccional de saber urbano desde la ciudad hacia el campo. Los contactos de los estudiantes con los campesinos producen un descubrimiento mutuo y

una adaptación recíproca entre los dos universos (Mallon, 2004). Los ejemplos son numerosos, pero mencionemos solo dos, y, en primer lugar, la *corrida de cerco*. Roberto Moreno, dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) del MIR, explica:

> [La *corrida de cerco*] la habían usado los patrones, pero los mapuches no la habían usado nunca. Nosotros la discutimos, nosotros la descubrimos, nosotros la articulamos. Inicialmente ellos iban a las oficinas de Temuco donde se llevan los archivos que tenían los mapas, sacaban copias de los mapas y entonces se hacía la denuncia. Pero ya no se esperaba que se hiciera justicia, sino que se corría el cerco una noche con la ayuda de todo el mundo. Y eso lo empezamos a hacer, bueno tomó tiempo [...] para que la gente creyera en nuestra opción. Las corridas empezaron hacerse al finalizar el gobierno de Frei, pero sobre todo los primeros meses del gobierno de Allende. Ese era el primer paso restituir, recuperar la tierra, pero el segundo fue ocupar la tierra [...]. Nosotros hicimos este camino intermedio con la corrida de cercos. Porque lo que a los campesinos mapuche les parece posible, justo, legítimo, validable, es recuperar lo que les pertenecía. Entonces tú no te podías saltar ese paso, había que cumplir con todas ritualidades, venir a la ciudad, buscar el mapa, buscar los abogados, hacer el litigio. Los mapuches litigaban mucho... Todo eso nosotros lo respetamos, y eso es lo que permite en definitiva que cuando se hace la acción tenga respaldo, y tenga la legitimidad y después como tiene éxito será repetida (Moreno, comunicación personal, 17 de marzo de 2005).

La toma de terrenos agrícolas es un segundo ejemplo del rol que juegan los actores externos habilitando la emergencia paulatina del protagonismo campesino. A fines de la década de 1960 e inicios de la siguiente, Panguipulli era conocido por su industria forestal y por ser el lugar de acción de José Gregorio Liendo, militante del MIR, más conocido por su sobrenombre "Comandante Pepe" (Cardyn Degen, 2017; Bizé Vivanco, 2017). Ex-estudiante de agronomía en Valdivia, Liendo se instala en la zona de Panguipulli para militar en el MCR. El interés mediático que Liendo suscita se debe a que siempre aparece,

en los testimonios y entrevistas de campesinos, incitando y participando en la totalidad de las tomas que tienen lugar en la región. Tan presente está Liendo que parece tener el don de la ubicuidad. Ahora bien, la pregunta que conviene hacerse no es si el "Comandante Pepe" efectivamente estuvo o no presente en todas las tomas que se le atribuyen, sino por qué los campesinos que participan en estas acciones cuando son interrogados por periodistas, y sobre todo por la policía, le atribuyen a Liendo el rol de protagonista.

A través de los testimonios hallados en los archivos judiciales de Panguipulli es posible identificar las diferentes funciones que cumplen los actores externos al orden rural a fines de la década de 1960, cuando se producen las primeras transgresiones del orden establecido (Palieraki, 2017). En algunos casos, atribuir la autoría a un actor externo es un intento de evadir la responsabilidad legal: el campesino "ignorante" habría sido manipulado. En otros, dada la complicidad de la policía con los hacendados y sus milicias, la referencia a alguien externo permite que el castigo impuesto por el hacendado no sea tan cruel. En efecto, un impedimento no menor a la participación en acciones transgresoras del orden rural es el miedo que sienten los campesinos ante la reacción violenta del hacendado.

Sin embargo, lo que con más frecuencia aparece implícitamente en los testimonios de los campesinos interrogados por la policía o el juez, es la incapacidad para pensarse ellos mismos como motores de la contestación y la movilización. Incluso quienes asumen plenamente su participación y responsabilidad, no logran relatar la movilización sin justificarla mediante una validación externa. Para citar al campesino Carlos Pacheco: "el Comandante Pepe nos dijo que estaba bien lo que pensábamos hacer y que en su oportunidad él nos prestaría ayuda" (Archivos Judiciales de Panguipulli, 1970).

La emergencia del protagonismo campesino y sus límites

Si bien las dos leyes de reforma agraria y de sindicalización campesina, así como la participación de actores externos en las primeras acciones transgresoras del orden rural crean las condiciones de posibilidad para la emergencia de un protagonismo campesino revolucionario, es la victoria de Allende la que completa el proceso.

El cambio se anuncia desde la campaña electoral de Allende. Aunque la DC pensaba poder beneficiar del apoyo campesino por las dos leyes que había promulgado, los trabajadores agrícolas ven en Tomic a un representante de los hacendados y votan masivamente por Allende (Kirkendall, 2010, p. 714). Por primera vez en 1970, los campesinos sindicalizados hacen ellos mismos campaña por su candidato.

La victoria de Allende es la primera victoria de un candidato a la presidencia electo por y para los sectores populares que incluye en su programa el cambio radical de las estructuras socioeconómicas y políticas, invitando a los sectores populares a participar activamente en el proceso. El protagonismo popular, y por lo tanto también campesino, forma por primera vez parte del discurso presidencial, ampliamente difundido por los medios de comunicación. A diferencia de Frei, quien sometía la participación campesina a su convocación por el líder político y a la planificación racional de la reforma agraria realizada por expertos y técnicos, durante la UP, los campesinos son invitados a asumir un rol protagónico en el proceso revolucionario sin que esta participación sea sometida a una relación jerárquica de inferioridad con respecto a los demás actores involucrados en el proceso.

Haciéndose eco del discurso presidencial y gubernamental, las tomas de terreno se multiplican desde noviembre de 1970, hasta convertirse, en 1971, en el principal medio de movilización campesina, desplazando las huelgas (Redondo, 2015). En las tomas de terreno posteriores a 1971, el protagonismo campesino es innegable y la presencia de actores externos marginal.

Más allá de la razón de ser práctica de las tomas –es decir la creación de terrenos agrícolas suficientemente grandes para ser viables–, esta práctica se vuelve altamente simbólica de una ruptura radical con el orden establecido, y ello a partir de las dos tomas emblemáticas de fines de la década de 1960, la toma de la Universidad Católica (Otero, 2018) y la de la Catedral de Santiago (Fernández Labbé, 2019). El sentido político de una toma es no solo la recuperación de un espacio despojado por poderes percibidos como ilegítimos, sino también la negación de las jerarquías existentes y su subversión. La toma repara una injusticia y les devuelve el poder a las colectividades que habían sido desposeídas de él. Pero es también un acto fundador que marca la entrada en escena de un nuevo actor social y político que reivindica su papel de protagonista y portador de cambios: los estudiantes en el caso de la Católica, los cristianos de izquierda en el caso de la Catedral, los campesinos en el caso de las tomas de terrenos agrícolas.

La emergencia del protagonismo campesino que rompe con las estructuras de poder preexistentes se manifiesta también a través de la expresión pública de los campesinos por medio de la creación por la UP de una institución nueva: los Consejos Comunales Campesinos (CCC). A pesar de haber sido concebidos como espacios de debate sin competencia decisoria, los CCC se vuelven instancias que les permiten a los campesinos asumir oficialmente un rol de primera importancia en el proceso de reforma agraria. El testimonio de Edison Chihuailaf, miembro del CCC de Cunco, es revelador:

> Al discutir la organización de los trabajadores de nuestra comuna, nos planteamos la gran responsabilidad que tenemos los campesinos ya conscientes y organizados con respecto a aquellos que todavía no se nos unen (citado en Cárcamo, 2016, p. 106).

El proceso de emergencia gradual de un protagonismo campesino rupturista no está, sin embargo, desprovisto de tensiones y contradicciones internas. Las principales son las siguientes que, brevemente, enumeramos aquí: el protagonismo campesino no logra visibilizarse a nivel nacional; este concierne principalmente a los inquilinos

y no a los temporeros (afuerinos), a los hombres y no a las mujeres; las reivindicaciones de las comunidades mapuche a menudo se estrellan contra las demandas de los pequeños propietarios *winka*; los partidos políticos de izquierda, tanto la UP como el MIR, subordinan el protagonismo campesino y el proceso inédito de politización revolucionaria en el campo a sus objetivos nacionales (respectivamente, batalla para la producción y poder popular) (Bengoa, 2000; Campos Medina *et al.*, 2017).

Pero, no cabe duda de que el principal obstáculo para la consolidación del protagonismo campesino y de las subjetividades revolucionarias a él asociadas, es la derecha. Una derecha civil, antes de ser también militar, dura, dispuesta –más en el campo que en la ciudad– a utilizar medios ilegales y violencia extrema plasmada en asesinatos de dirigentes campesinos, agresiones, atentados con explosivos, con tal de impedir el proceso de reforma agraria, pero también –y tal vez por sobre todo– el cambio en las conciencias y en los anhelos de la población rural. El golpe de estado del 11 de septiembre es el punto culminante de la contrarrevolución en el campo. La represión es aún más cruel en el medio rural que en el urbano, pero su estudio es hasta hoy fragmentado y parcial, entre otras razones, por falta de fuentes primarias.

* * *

En 2008, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó un sondeo sobre la reforma agraria en las regiones de Chile que habían vivido el proceso. Un 58% dijo haber oído hablar de la reforma agraria, pero solo el 40% de los ingresos bajos y el 30% de los jóvenes adultos sabía lo que era la reforma agraria. Entre quienes sí sabían, solo la mitad consideraba que ella había sido algo positivo (Thezá Manríquez, 2017, p. 1). La memoria, inclusive en los sectores populares, vinculada con movilizaciones colectivas e intentos de cambio de las estructuras de poder es en el caso de Chile, claramente, una memoria frágil y compleja. A pesar de esta memoria saqueada

por los 17 años de dictadura, el protagonismo campesino que emergió en los años de la UP constituyó, sin lugar a dudas, un proceso revolucionario que buscaba, en un lapso muy breve, alterar jerarquías y estructuras de poder y de dominación que habían existido durante siglos.

La revolución rural chilena fue, en primer lugar, posibilitada por las leyes de reforma agraria y de sindicalización campesina de 1967. Ellas alteraron las estructuras de poder en el campo y reconocieron al campesinado como actor social cohesionado y como interlocutor legítimo del poder político. Luego, la intervención social y política en el campo de actores no rurales –expertos de los organismos de reforma agraria y, sobre todo, estudiantes– volvió pensables formas de acción (huelgas y tomas de terreno) que rompían radicalmente con el orden social rural preexistente. Por último, el reconocimiento –en el discurso de la UP y en la institucionalidad campesina por ella creada, en particular los Consejos Comunales Campesinos– de un protagonismo campesino no subordinado, a la par con el empoderamiento de los propios campesinos mediante su acción social y política de los años 1967-1971, consolidaron un protagonismo campesino inédito.

Este proceso fue abruptamente interrumpido el 11 de septiembre de 1973, pero la experiencia sí dejó huellas, aunque estas fueran una memoria subterránea no compartida por toda la comunidad. No es casual que las mismas localidades rurales que conocieron una politización radicalizada en los años 1967-1973, sean hoy puntos neurálgicos de las movilizaciones mapuche y ecologistas contra las multinacionales forestales y por la protección del ambiente, movilizaciones que, a menudo, expresan deseos de cambio mucho más profundo.

Referencias

Affonso, A. *et al.* (1970). *Movimiento Campesino chileno*. Santiago: ICIRA.

Alfaro, M. F. (2011). *La Construcción del Movimiento Campesino a partir de las tomas de fundos entre 1971 y 1972* [tesis de Licenciatura de Historia, Universidad de Chile]. Repositorio de la Universidad de Chile. http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/110027/fi-alfaro_mf.pdf?sequence=3.

Álvarez, R. (2010). La Unidad Popular y las elecciones presidenciales de 1970 en Chile: la batalla electoral como vía revolucionaria. *OSAL*, *28*, 219-239.

Austin, R. (2003). *State, literacy and popular education in Chile, 1964-1990*. Lanham: Lexington Books.

Avendaño, O. (2017). Reforma agraria y movilización campesina en Chile (1967-1973) y Perú (1969-1976). *Polis*, *47*. http://journals.openedition.org/polis/12451.

Bellisario, A. (2013). El fin del antiguo régimen agrario chileno (1955-1965). *Revista Mexicana de Sociología*, *75*(3), 341-370.

Bengoa, J. (2000). *Historia del pueblo mapuche (siglo XIX y XX)*. Santiago: LOM.

Bizé Vivanco, C. (2017). *El otoño de los raulíes: poder popular en el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli (Neltume, 1967-1973)*. Santiago: Tiempo Robado Editores.

Bravo Aguilera, J. M. (2012). *De Carranco a Carrán. Las tomas que cambiaron la historia*. Santiago: LOM.

Burstin, H. (2013). *Révolutionnaires. Pour une anthropologie politique de la Révolution française*. Paris: Vendémiaire.

Campos Medina, J., C. Farías Durán y F. Vergara Pinto. (2017). Aproximación a la identidad étnica mapuche dentro del Movimiento Campesino Revolucionario. *Izquierdas*, *37*, 120-141.

Cárcamo, O. (2016). Movimiento Campesino Revolucionario y Consejos Comunales Campesinos de base. Una experiencia de Poder popular en Chile. *Desacatos*, *52*, 94-111.

Cardyn Degen, P. (2017). *Sangre de baguales: Epopeyas mapuches y obreras en tiempos del Complejo Maderero Panguipulli*. Santiago: LOM.

Casals, M. (2014). Chile en la encrucijada. Anticomunismo y propaganda en la "campaña del terror" de las elecciones presidenciales de 1964, en A. Riquelme y T. Harmer (eds.). *Chile y la Guerra fría global*. Santiago: RIL, pp. 89-112.

Caviedes, C. (2019). *The Politics of Chile: A Sociogeographical Assessment.* New York: Routledge.

Dobry, M. (2009). 4: Le politique dans ses états critiques: retour sur quelques aspects de l'hypothèse de continuité. *Bifurcations. Les sciences sociales face aux ruptures et à l'événement.* Paris: La Découverte, pp. 64-88.

Fernández Labbé, M. (2019). *Tiempos interesantes: La Iglesia Católica chilena entre el Sínodo y la toma de la Catedral, 1967-1968*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Fukuyama, F. (1994). *El fin de la historia y el último hombre*. Barcelona: Planeta.

Furet, F. (1996). *El pasado de una ilusión. Ensayo sobre la idea comunista en el siglo XX*. México: FCE.

Garcés, M. (2002). *Tomando su sitio: El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970*. Santiago: LOM.

Garrido, E., G. Valenzuela, E. Misle y G. Aravena. (2019). Cambios en la propiedad agrícola del sector reformado chileno en la comuna de Curicó (Chile), período 1975-2007. *Revista Espacios*, *40*(43), 2019. https://www.revistaespacios.com/a19v40n43/a19v40n43p03.pdf

Gaudichaud, F. (2016). *Chile 1970-1973. Mil días que estremecieron al mundo*. Santiago: LOM.

Giraudier, É. (2014). Le Parti démocrate-chrétien, l'Église et le pouvoir au Chili. *Histoire@ Politique*, *1*(22), 233-250.

Hmed, C. y L. Jeanpierre. (2016). Révolutions et crises politiques au Maghreb et au Machrek. *Actes de la recherche en sciences sociales*, *1*(211-212), 4-23.

Instituto de Promoción Agraria (INPROA). (1977). *Reforma Agraria de la Iglesia en Chile. Quince años de reforma*. Santiago: INPROA.

Kirkendall, A. (2010). *Paulo Freire and the Cold War Politics of Literacy*. Chapel Hill: North Carolina University Press.

Loveman, B. (1976). *Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labor in Chile, 1919-1973*. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Mallon, F. (2004). *La sangre del copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailió y el Estado chileno, 1906-2001*. Santiago: LOM.

Mayor Quantía de Panguipulli y Miranda, J. (1970). *Usurpación, violencia y retención contra Lorenzo Barriga Muñoz et al.* Archivos judiciales de Panguipulli, *3701/58-22*.

Míguez, R. (2013). Estado chileno y tierras mapuche: entre propiedades y territorialidad, en H. Olea Rodríguez (ed.). *Derecho y Pueblo mapuche. Aportes para la discusión*. Santiago: Universidad Diego Portales, pp. 21-49.

Ministerio del Interior de Chile. (18 de septiembre de 1925). *Constitución Política de la República de Chile*. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=131386&tipoVersion=0.

Nocera, R. (2014). La "relación triangular" Estados Unidos-Italia-Chile y la elección de Eduardo Frei Montalva, en A. Riquelme y T. Harmer (eds.). *Chile y la Guerra Fría global*. Santiago: RIL editores, pp. 113-132.

Otero Perdomo, A. (2018). *Réforme, intervention et métamorphose d'un système universitaire : le cas de l'Université Catholique du Chili (1967-1981)*. [Tesis de Doctorado en Historia, Université Paris 1 y Pontificia Universidad Católica].

Palieraki, E. (2014). ¡La revolución ya viene! El MIR chileno en los años 1960. Santiago: LOM.

Palieraki, E. (2017). De l'invisible au sensible. Archives judiciaires et écriture de l'histoire politique chilienne pendant et après la dictature, en M-B. Basto y D. Marcilhacy (eds.). *L'Archive sensible. Mémoire, intimité et domination*. Paris : Université Paris-Sorbonne, pp. 187-204.

Pascal Allende, A. (1968). *La clase media rural y las organizaciones campesinas entre los pequeños agricultores de Chile*. Santiago: Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria.

Pascal Allende, A. (1971). *Relaciones de poder en una localidad rural*. Santiago: Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria.

Pinto, J. (ed.). (2005). *Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular*. Santiago: LOM.

Redondo, J. Á. (2015). Las tomas de fundos en la provincia de Cautín (Chile), 1967-1973. *Cuadernos de historia*, *42*, 153-178.

Riquelme, A. (2015). La vía chilena al socialismo y las paradojas de la imaginación revolucionaria. *Araucaria*, *17*(34), 203-230.

Schlotterbeck, M. (2018). *Beyond the Vanguard: Everyday Revolutionaries in Allende's Chile*. Berkeley: University of California Press.

Thezá Manríquez, M., D. Flores Cáceres y D. Gac Jiménez. (2017). Reforma Agraria en Chile, ¿Palimpsesto de otra ruralidad? Reflexiones y propuestas. *Polis*, *47*. http://journals.openedition.org/polis/12499.

Winn, P. (2004). *Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo*. Santiago: LOM.

Wright, T. (2001). *Latin America in the era of the Cuban Revolution*. Londres: Praeger.

Zerán, F. (2017). Entrevista a Jacques Chonchol. La Reforma agraria en primera persona. *Anales de la Universidad de Chile*, *12*, 156-171.

Economía y correlación de fuerzas en el gobierno de Allende 1970-1973*

Orlando Caputo y Graciela Galarce

Introducción

El gobierno de Salvador Allende (1970-1973), por primera vez en el mundo, puso en práctica el tránsito pacífico del capitalismo al socialismo respetando la institucionalidad democrática, pluralista y libertaria que caracterizaba, con algunas limitaciones, a la sociedad chilena. Allende triunfó en las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970 como candidato de la Unidad Popular (UP), con una mayoría relativa de solo 36,6%. La UP estaba constituida por los partidos Socialista, Comunista, principales partidos de la izquierda chilena, que por décadas tuvieron una fuerte presencia en la clase trabajadora. En la UP también participaban el Partido Radical, y otros partidos.

* Este capítulo saldrá en forma ampliada en Llorca-Jaña y Miller (eds.), *An Economic History of Chile* (2021).

La 'Vía Pacífica al Socialismo' planteaba profundas transformaciones económicas, sociales y políticas que concitaron gran expectación mundial. El Programa de la UP recogió y profundizó las propuestas de las tres anteriores campañas presidenciales de Allende: Nacionalización del Cobre, principal riqueza de Chile, que era propiedad de grandes empresas mineras mundiales estadounidenses (Anaconda y Kennecott); Reforma Agraria, que terminaría con el latifundio en Chile, creado desde la colonia, que había perdurado tres siglos; Área de Propiedad Social (APS), conformada por las principales empresas monopólicas del sector industrial, de la distribución y de la Banca. Serían empresas de 'Propiedad Social', no estatal, con participación de los trabajadores. El Programa de la UP, tenía como objetivo fundamental la redistribución del ingreso a favor de los trabajadores y sectores populares.

Las transformaciones antiimperialistas, anticapitalistas y antioligarquía por la vía pacífica se pusieron en práctica en forma simultánea al inicio del gobierno de Allende. Estas se concretaron en gran medida en 1971, con amplio apoyo político y popular, a pesar de la fuerte oposición de Estados Unidos, la derecha chilena y sus medios de comunicación. Dichos actores desarrollaron permanentes intentos de sedición. Días antes de que Allende fuese proclamado presidente por el Congreso Nacional, asesinaron al comandante en Jefe del Ejército chileno, el general René Schneider, hecho que conmovió a Chile y al mundo.

Desde noviembre de 1970 a septiembre de 1973, se produjeron profundas modificaciones de las correlaciones de fuerzas sociales y políticas. En 1971 estas nuevas correlaciones posibilitaron importantes avances para el cumplimiento del Programa, en crecimiento económico, empleo y redistribución del ingreso. A mediados de 1972 se fue consolidando una confrontación de fuerzas políticas equivalentes, que culminaron con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, instaurándose en Chile una de las dictaduras más represivas en la historia contemporánea.

Concentrar el análisis de la economía solo en el comportamiento de las categorías macroeconómicas es completamente insuficiente para comprender en toda su magnitud el proceso de transformaciones estructurales de la UP (Bitar, 1979, pp. 14-17; Ramos, 1972, pp. 15-79). La macroeconomía supone definida la propiedad del capital y de recursos naturales. La experiencia de la UP se basó en un cambio profundo de la propiedad del capital y de los recursos naturales. Su estudio, por tanto, debe considerar un análisis conjunto de dichas transformaciones económicas y las modificaciones de las correlaciones de fuerzas políticas en las dos etapas señaladas hasta el 'Desenlace': golpe de Estado y muerte de Allende en 'La Moneda'.

La 'Vía Pacífica al Socialismo'. Principales antecedentes

Allende fue categórico al señalar la originalidad de la 'Vía Pacífica al Socialismo' en sus discursos en Chile, en otros países y ante las Naciones Unidas. En su primer mensaje presidencial al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1971, profundizó y marcó diferencias de su Programa de Gobierno con las vías del llamado 'socialismo real' y con la experiencia cubana.

> Chile se encuentra ante la necesidad de iniciar una manera nueva de construir la sociedad socialista: la vía revolucionaria nuestra, la vía pluralista, anticipada por los clásicos del marxismo, pero jamás antes concretada. Los pensadores sociales han supuesto que los primeros en recorrerla serían las naciones más desarrolladas, probablemente Italia o Francia, con sus poderosos partidos obreros de definición marxista [...] Este desafío despierta vivo interés más allá de las fronteras patrias. Todos saben, o intuyen, que aquí y ahora, la historia empieza a dar un nuevo giro, en la medida que estemos los chilenos conscientes de la empresa [...] Por mi parte, estoy seguro que tendremos la energía y la capacidad necesarias para llevar adelante nuestro esfuerzo, modelando la primera sociedad socialista edificada según un modelo democrático, pluralista y libertario [...] Supone, además, como requi-

> sito previo fundamental, que podamos establecer los cauces institucionales de la nueva forma de ordenación socialista en pluralismo y libertad. La tarea es de complejidad extraordinaria porque no hay precedente en que podamos inspirarnos. Pisamos un camino nuevo; marchamos sin guía por un terreno desconocido [...] En la Rusia del año 17 [...] se edificó una de las formas de la construcción de la sociedad socialista que es la dictadura del proletariado. En términos más directos, nuestra tarea es definir y poner en práctica como la vía chilena al socialismo, un modelo nuevo de Estado, de economía y de sociedad, centrado en el hombre, sus necesidades y sus aspiraciones [...] No existen experiencias anteriores que podamos usar como modelo, tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y económica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la creación socialista [...] Vamos al socialismo por el rechazo voluntario, a través del voto popular, del sistema capitalista y dependiente cuyo saldo es una sociedad crudamente desigualitaria, estratificada en clases antagónicas, deformada por la injusticia social y degradada por el deterioro de las bases mismas de la solidaridad humana (Allende, 1971a, pp. 197-213).

Del Programa de la UP destacamos la caracterización de Chile como economía y sociedad dependiente:

> Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada. Los problemas en Chile se pueden resolver. Nuestro país cuenta con grandes riquezas... ¿Qué es entonces lo qué ha fallado? Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados al capital extranjero. Más aún, se acentúa cada vez más en su dependencia [...]. De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia (Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular, 1970, pp. 3-6).

Los principales cambios estructurales del Programa del Gobierno de Allende pretenden cambiar la estructura económica. El Programa era antiimperialista porque rescata el cobre, la principal riqueza básica de Chile, que estaba en manos de las grandes mineras mundiales estadounidenses, que tenían gran poder en el estratégico mercado mundial del cobre. El Programa era antioligárquico, porque la Reforma Agraria perseguía terminar con el latifundio y, rescatar las tierras usurpadas al pueblo mapuche. El Programa era anticapitalista porque expropiaba un reducido número de grandes empresas monopólicas que controlan todos los sectores de la economía nacional, para constituir el APS, que sería la dominante con aproximadamente 200 grandes empresas monopólicas más las empresas del Estado. También se contemplaba un Área de Propiedad Privada con mayor número de empresas pequeñas y medianas: en 1967, eran 30.500. Finalmente, el Área de Propiedad Mixta, constituida por empresas privadas nacionales o extranjeros con participación estatal.

Medidas económicas y sociales de corto y mediano plazo

Paralela a las reformas estructurales se propusieron medidas económicas y sociales de corto y mediano plazo.

> Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado. Diversificar las exportaciones, abrir nuevos mercados, lograr una creciente independencia tecnológica y financiera y evitar las escandalosas devaluaciones de nuestra moneda. La lucha contra la inflación se decide esencialmente con los cambios estructurales enunciados. [...] Las aspiraciones económicas y sociales del pueblo chileno son legítimas y posibles de satisfacer: viviendas dignas; escuelas y universidades para sus hijos; salarios suficientes; reajustes automáticos, trabajo estable; atención médica y dental preventiva y oportuna; extender previsión social y pensiones dignas; jardines infantiles; servicios básicos domiciliarios y comunales. [...] Se establecerá la plena capacidad civil de la mujer casada y la igual condición jurídica de todos

> los hijos [...], una adecuada legislación de divorcio con disolución de vínculo, con pleno resguardo de la mujer y los hijos (pp. 24-25).

De las 40 medidas del Programa de la UP, destacamos: limitación de los altos sueldos de los funcionarios de confianza; jubilaciones justas, no millonarias; previsión para todos; educación gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares para la enseñanza básica; medio litro de leche diaria a todos los niños de Chile (Lawner, 2008, pp. 397-401).

La 'Vía Chilena al Socialismo': impacto mundial

La experiencia chilena de la UP coincide con el retroceso general de Estados Unidos en la Guerra Fría; su derrota en Vietnam; la crisis financiera de Estados Unidos y el fin del Patrón Oro; y el auge del movimiento popular mundial. Como parte de este proceso surgió la teoría de la dependencia económica, social, política y cultural, que planteaba la imposibilidad de desarrollar un capitalismo nacional e independiente en el Tercer Mundo. La política de Allende era original. Planteaba un camino socialista alternativo como forma de superación del capitalismo dependiente. Era tan inédita su propuesta que a la fecha no existía ninguna experiencia política en el mundo que se atreviera a proponer una transición al socialismo por la vía pacífica, a través de un proceso electoral (Dos Santos, 2009, pp. 11-12).

En sus Memorias, Kissinger, secretario de Estado de Estados Unidos, al asumir Allende, afirmó que la 'Vía Pacífica al Socialismo' era una amenaza para la hegemonía de Estados Unidos en el mundo:

> Nixon y sus principales consejeros estaban convencidos de que Allende representaba un desafío para los Estados Unidos y para la estabilidad del hemisferio occidental. La promesa de Allende de nacionalizar las empresas de propiedad norteamericana no era nuestra principal preocupación [...]. Dos gobiernos anteriores a Nixon habían coincidido en que una victoria por parte de Allende ponía en peligro nuestros intereses en el hemisferio occidental. Ellos otorgaron

> importantes sumas de dinero al Partido Demócrata Cristiano para bloquear a Allende en las elecciones presidenciales de 1964 y a su coalición en las elecciones en el Congreso de 1968. [...] Para entonces Nixon había asumido un papel personal. Había sido impulsado a actuar el 14 de septiembre [de 1970] por Agustín Edwards, el editor de *El Mercurio,* el periódico chileno más respetado que había venido a Washington a advertir cuáles serían las consecuencias de la toma de Allende [...]. El éxito de Allende habría tenido importancia también para el futuro de los partidos comunistas de Europa Occidental cuyas políticas inevitablemente socavarían la Alianza Occidental (Millas, 1996, pp. 90-91).

Salvador Allende, del triunfo electoral a su proclamación como presidente

Desde la década de 1950 la efervescencia económica, social y política crecía. En 1952 Allende obtuvo el 5% como candidato a presidente. Días después, en el Senado señaló: "Nunca pensamos triunfar. Pero esos 52.000 sufragios constituyen la expresión de otras tantas conciencias limpias, que sabían que votaban por un programa, por una idea, por algo que estaba apuntando hacia el futuro" (Corvalán, 2008, p. 41). En 1958, con la consigna "Ahora le toca al Pueblo", Allende fue segundo entre cinco candidatos (28,9%). Alessandri, de derecha ganó con 31,6%. Un diputado de izquierda le restó fuerzas a Allende con 3,34%.

En marzo de 1964, falleció un diputado socialista y médico. En la elección extraordinaria su hijo, médico y socialista, con un triunfo aplastante provocó un terremoto político, que repercutió en la elección presidencial de septiembre de aquel año. La derecha volcó su votación hacia Frei Montalva (Democracia Cristiana, DC) que obtuvo mayoría absoluta de 56%, el doble de 27,4% de la DC en marzo. Allende obtuvo un 38,9%, similar al 39,7% de marzo. El candidato de derecha obtuvo un 5% contrastando con el 33% que la derecha había obtenido en marzo.

La cuarta fue la vencida. En septiembre de 1970 triunfó Allende con 36,6%. Segundo, el derechista Jorge Alessandri, con 35,3%; tercero Radomiro Tomic (DC) con 28,1%. Dicho triunfo estuvo precedido por una efervescencia económica, social, política y cultural (Varas, 2008, pp. 353-366) que intensificó las campañas de todos los candidatos. En la campaña de Allende se crearon múltiples comités allendistas en las ciudades y barrios de Chile.

Las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) fueron un símbolo político, que presagió el triunfo de Allende. En 1970, por primera vez, la UP Universitaria triunfó en la FECH derrotando a la DC, que la había presidido desde 1957. En la noche del 4 de septiembre, en su primer discurso, desde los balcones de la FECH, Allende proclamó:

> ¡Qué extraordinariamente significativo es que pueda yo dirigirme al Pueblo de Chile y al Pueblo de Santiago desde la Federación de Estudiantes! [...] La Juventud de la Patria fue vanguardia en esta gran batalla [...]. Le debo este triunfo al Pueblo de Chile, que entrará conmigo a La Moneda el 4 de noviembre (Allende, 1970, p. 64).

A pesar de obtener la primera mayoría, no era seguro que se siguiera la tradición que el Congreso ratificara como presidente a Allende. Estados Unidos y la oposición chilena llevaron a cabo tres operaciones destinadas a impedir su proclamación como presidente. Primero, que Alessandri hiciera un llamado al Congreso pidiendo ser electo y luego renunciaría. En la nueva elección, apoyarían a Frei como candidato (Valdés, 2020, pp. 311-324). Segundo, Andrés Zaldívar, ministro de Hacienda de Frei, en exaltado discurso profundizó los problemas económicos de la 'Campaña del Terror' de la derecha apoyada por la CIA. Tercero, a solo 48 horas del pronunciamiento del Congreso Nacional, fue asesinado el comandante en Jefe del Ejército, general Schneider considerado por la derecha y el gobierno de Nixon como un constitucionalista opositor a un posible golpe de Estado (Bitar, 1979, pp. 69-70).

Previo la campaña presidencial, se inicia una fuerte caída del precio del cobre. Los precios frente a la nacionalización deberían subir. Sin embargo, los precios bajaron. Hasta fines de la década de 1960, la industria del cobre estaba concentrada en reducido núcleo de empresas privadas, mayoritariamente estadounidenses, con elevado poder monopólico controlando la oferta y la demanda a través de su participación en la manufactura de cobre. Regulaban el precio también a través de los inventarios (Moussa, 1999, pp. 14-15). La fuerte disminución del precio del cobre fue una de las acciones más importante del plan sedicioso de Estados Unidos y de sus empresas mineras, afectando el corazón de la economía chilena desde antes de las elecciones y durante el gobierno de Allende.

El cobre representaba el 70% de las exportaciones chilenas. En diciembre de 1969, el precio del cobre era de 77,1 centavos de dólar la libra; en septiembre de 1970 bajó a 56,6 y en noviembre de 1970 bajó a 49,2 (una disminución de 38% desde diciembre de 1969 a noviembre de 1970). Esta profunda disminución se produjo cuando el precio del aluminio –el principal sustituto del cobre– subió y también el del níquel, plomo, estaño, y el zinc (Comisión Chilena del Cobre, COCHILCO, 1988, pp. 88-90).

Correlación de fuerzas y la designación de Salvador Allende como presidente de la República el 4 de noviembre de 1970

Luego de las elecciones presidenciales, se unieron las fuerzas allendistas y las que apoyaron a Tomic por la similitud de sus programas, que representaban las aspiraciones de la mayoría de la sociedad chilena. Las fuertes movilizaciones de las organizaciones sociales permitieron enfrentar los diferentes planes sediciosos. Al interior de las Fuerzas Armadas, el frustrado rapto del general Schneider, que terminó en su asesinato, fortaleció a los sectores constitucionalistas. El reconocimiento mayoritario de la sociedad de que debería respetarse la tradición histórica de elegir al candidato con la primera mayoría,

y el acuerdo entre la UP y la DC sobre 'Garantías Democráticas' permitieron superar el tenso período, con la definitiva proclamación del Congreso Nacional a Salvador Allende como presidente.

Las reformas estructurales del gobierno de la Unidad Popular

Desde los primeros días de su gobierno, Allende empezó a implementar su programa facilitado por la fuerte participación del Estado en la economía: importantes empresas estatales, significativa inversión pública, Banco del Estado, elevadas regulaciones económicas. Además, el carácter presidencialista le permitía designar los cargos ejecutivos superiores de las instituciones y de las empresas del Estado.

La Nacionalización de la Gran Minería del Cobre (GMC)

Salvador Allende denominó al cobre "El Sueldo de Chile". Chile tenía y tiene las mayores reservas mundiales de cobre (30%). En 1970 produjo 692 mil toneladas métricas de cobre fino. El 80% de esta producción correspondía a las grandes empresas mineras estadounidenses: Chuquicamata, El Salvador y El Teniente, denominadas 'Gran Minería del Cobre' (GMC). Anaconda explotaba Chuquicamata, la mina a tajo abierto más grande el mundo, y la mina El Salvador. Kennecott explotaba El Teniente, empresa minera subterránea más grande del mundo.

En 1970, Estados Unidos con 1.560 mil toneladas métricas de cobre fino era el principal productor mundial de cobre. Chile era el segundo con 692 mil, y Zambia, el tercero con 684 mil toneladas de cobre fino. Chile y Zambia eran los principales exportadores mundiales (COCHILCO, 1988, p. 47). En 1970, el 20% de los ingresos fiscales provenían de la GMC. Esto pone de relieve que durante muchos años

la suerte de un Estado soberano e independiente estuvo entregada a las decisiones de estos poderosos consorcios industriales extranjeros (Novoa, 1972, p. 14).

El presidente Frei (1964-1970) suscribió dos iniciativas: la 'chilenización del cobre' y la 'nacionalización pactada'. La primera, que debía durar 20 años, fracasó, y a los cuatro años debió ser sustituida por la 'nacionalización pactada', la que sufrió igual suerte (Soto, 2008, p. 403). El fracaso se reconoció por el increíble incremento de las utilidades de Anaconda y Kennecott, resultado de las iniciativas señaladas.

Cuadro 1: Utilidades y Producción de la Anaconda y Kennecott, 1965-1970

	1965	1966	1967	1968	1969	1970
Producción (Miles de TM* de cobre fino)	478,6	524,9	536,4	519,3	540,2	540,7
Utilidades (Millones de dólares)	43,9	81,9	174,5	177,1	220,0	265,9

* Toneladas Métricas. Fuente: Construido a partir de Novoa (1972, pp. 101 y 103).

Teniendo presente que en 1964 la producción fue de 527,6 mil toneladas, en el período 1965-1970, la producción apenas varió (523 mil toneladas en promedio). Las utilidades promedio anual del período 1960-1964 fueron de 42,8 millones de dólares, en 1965 fueron 43,9 millones de dólares y siguieron aumentando hasta 265,9 millones en 1970 (500%).

> Fueron tan desmedidas las utilidades que el Profesor de la Universidad de Harvard T. H. Moran aludió a ellas diciendo que "han sido tan estupendas, que son prácticamente una vergüenza". Las cifras oficiales indican que entre 1965 y 1970, las compañías norteamericanas obtuvieron utilidades líquidas por 605 millones de dólares, esto es, por más del valor total de sus capitales en Chile (Novoa, 1972, p. 59).

Tomic señaló: "La nacionalización legal e integral nos habría permitido haber pagado ya el valor total de todas las instalaciones de

Anaconda y de Kennecott en Chile" (Novoa, 1972, p. 59). Tomic denunció que las compañías estadounidenses, ante la inminente nacionalización se dedicaron a explotar los sectores de mayor ley y dejaron de remover 20 millones de toneladas de material estéril (floreo de minas), para obtener el máximo de utilidades en el menor tiempo posible. Redujeron la manutención, las inversiones e incrementaron la deuda con instituciones estadounidenses (Soto, 2008, pp. 403-404).

En noviembre primeros días de su gobierno, Allende designó a sus representantes en los directorios de las sociedades mixtas para asumir la dirección, evitar sabotajes, dar estabilidad a los técnicos extranjeros, promover a los técnicos nacionales, la participación de los trabajadores, corregir los daños ocasionados y asegurar los niveles de producción (p. 404).

En diciembre de 1971 Allende envió el Proyecto de Nacionalización al Congreso (Allende, 1971b, pp. 402-424), afirmando: "La Independencia de España en 1810, marcó la Independencia Política, en tanto la 'Nacionalización del Cobre' significaba la Independencia Económica de Chile. Por tal razón, la 'Nacionalización del Cobre' debería quedar plasmada en la Constitución Chilena".

Allende rescató la Resolución de Naciones Unidas sobre 'Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales' (1.803, XVII, 14 de diciembre de 1962), que declaraba: "el derecho de los pueblos y de las naciones, a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado" (pp. 398-401). En su Mensaje, Allende hizo un contrapunto entre los intereses de las empresas estadounidenses y los intereses de Chile:

> A Chile le convienen precios altos para sus materias primas. A los monopolios les conviene precios bajos para abaratar los costos de sus fábricas elaboradoras. A Chile le conviene una mayor elaboración en el país, para integrar la economía nacional, lograr mayor ocupación, más procesos industriales, más salarios, más tributación, más compras en el país. A los monopolios les interesa no industrializar en Chile para que el gran valor que agrega al precio del metal su elaboración, que significa inmensa actividad industrial y comercial

> y altos salarios, quede en la metrópoli. A nosotros nos interesa cuidar nuestra reserva y sacar el máximo provecho de ella, a medida que la necesitemos. A ellos les interesa llevarse fuera la mayor cantidad de cobre, al precio más bajo y en el menor tiempo posible (p. 407).

El apoyo mayoritario del pueblo permitió que la nacionalización del cobre fuera aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional en Pleno el 11 de julio de 1971, día que Allende denominó 'Día de la Dignidad y de la Solidaridad Nacional'. Dignidad, porque Chile rescataba la principal riqueza básica del país. Solidaridad, porque sus recursos permitirían mejorar las condiciones de vida del pueblo chileno en ese momento, y para las futuras generaciones. La Constitución afirma que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Declaró automáticamente nulos todos los contratos establecidos en la Gran Minería y los mecanismos para las indemnizaciones de acuerdo con el valor libro de sus activos, a los que debería restársele, la rentabilidad excesiva a partir de 1955, que excedieran el 12% sobre el valor libro.

Cuadro 2. Nacionalización del Cobre: cálculo de la indemnización (Millones de dólares)

	Chuquicamata	**El Salvador**	**Exótica**	**El Teniente**	**Andina**
Valor Libro	241,96	68,37	14,81	318,80	20,14
Deducciones por derechos mineros	-5,40	-0,35	-0,25	-0,22	-1,53
Bienes en mal estado	-13,06	-5,60	-4,55	-20,52	-0,34
Revalorización de activos	0,00	0,00	0,00	-198,58	0,00
Indemnización	235,50	62,42	10,01	99,48	18,27
Deducciones por utilidades excesivas	300,00	64,00	0,00	410,00	

Fuente: Reproducción del cuadro iv-6, Bitar (1979, p. 117).

Las deducciones fueron muy elevadas (cuadro 2). Kennecott y Anaconda no recibirían retribuciones del Estado chileno, Exótica

y Andina, que iniciaron sus operaciones en 1971, se estimaron indemnizaciones. Las compañías y el Estado chileno apelaron al Tribunal Especial del Cobre, que estaba contemplado en el Proyecto de Nacionalización. Este Tribunal falló a favor del Estado chileno (Soto, 2008, p. 406).

El gobierno debió enfrentar también múltiples presiones de Estados Unidos, de Anaconda y de Kennecott. Además de bajar el precio del cobre, prohibieron la exportación de repuestos e insumos estadounidenses para la minería chilena; así como los préstamos internacionales a Chile. Recurrieron a los tribunales europeos para embargar el cobre producido por las empresas nacionalizadas, sin mayor éxito judicial (p. 407).

Cuadro 3: producción de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente 1968-1973 (Miles de TM de cobre fino)

	1968	**1969**	**1970**	**1971**	**1972**	**1973**
Producción	519,7	540,3	534,5	517,7	538,7	559,2

Fuente: Construcción basada "Estadísticas del Cobre. Anuario Estadístico 1988". COCHILCO.

A pesar de las dificultades, la producción de Chuquicamata, El Salvador y El Teniente, en 1971, 1972 y 1973, se mantuvo cercana a los valores de 1970 y superiores a la producción de 1968 (cuadro 3). Considerando que desde 1968 a 1970 los niveles de producción de las mineras administradas por las empresas extranjeras fueron favorecidos por el 'floreo de las minas', la producción total es muy meritoria comparada con los tres años anteriores, sobre todo con 1968.

La producción de la Gran, Mediana y Pequeña Minería aumentó, y los precios disminuyeron sustancialmente, el valor de las exportaciones disminuyó cada año. En 1971, comparado con 1969, disminuyó en 223,7 millones de dólares. La suma de las disminuciones del valor de

las exportaciones de cada año entre 1970-1972, respecto a 1969 es de 577,3 millones de dólares (cuadro 4).

Cuadro 4. Chile: producción, exportación y precios del cobre 1969-1973

	1969	1970	1971	1972	1973
Producción (Miles de toneladas cobre fino)	688,1	691,6	708,3	716,8	735,4
Precio (Centavos de dólar la libra)	66,6	64,2	49,3	48,6	80,8
Exportación (Millones de dólares)	925,5	839,8	701,8	657,6	1025,6

Fuente: Elaboración propia basada en 'Estadísticas del Cobre. Anuario Estadístico 1988'. COCHILCO, pp. 4, 12 y 88).

Las importaciones de alimentos, entre 1971 y 1972, aumentaron y sumaron 510 millones de dólares, para enfrentar el acaparamiento y desabastecimiento. Paradójicamente, el precio promedio anual del cobre que en 1972 fue de 48,6 centavos de dólar/libra, después del golpe de Estado, el precio promedio de octubre de 1973 subió a 94, y en noviembre y diciembre superó los 100 centavos de dólar/libra (COCHILCO, 2019a).

Resumiendo, creemos que la nacionalización del cobre fue la principal medida económica, política y social de Chile en el siglo XX. Posteriormente, Pinochet pagó indemnizaciones a las empresas estadounidenses e inició la desnacionalización inconstitucional de los nuevos y ricos yacimientos de cobre, proceso que se concretó en los gobiernos posdictadura. CODELCO, que con la nacionalización controló el 100% de la GMC, con la desnacionalización, en 2018 controla alrededor del 30% de la producción chilena de cobre. El 70% es controlado por las grandes empresas mineras privadas, especialmente extranjeras (COCHILCO, 2019b).

Finalmente, cabe destacar que La Caravana de la Muerte, al pasar por El Salvador y Chuquicamata, asesinó a los presidentes, ejecutivos, varios dirigentes sindicales y trabajadores. Paradójicamente, la

nacionalización del cobre del presidente Allende fue y ha sido una de las principales fuentes de los ingresos del Estado para la represión y el funcionamiento del capitalismo neoliberal en dictadura y en los gobiernos posdictadura.

La reforma agraria

Este apartado está basado fundamentalmente en Jacques Chonchol (2008, pp. 181-189), ministro de Agricultura entre 1970 y 1972. Para la historia rural de Chile, 'la hacienda' o 'fundo' fue una institución que, proviniendo de la colonia, a través de las Mercedes de Tierras y las Encomiendas otorgadas a los conquistadores, se organizó desde el siglo XVIII hasta la década de 1960, cuando la reforma agraria le puso término. La hacienda fue un factor primordial de acumulación y concentración de la propiedad agraria. Las mismas generaron el denominado complejo latifundio-minifundio, que caracterizó la producción agrícola durante varios siglos. Los grandes latifundios representaban poco más del 1% del total de las explotaciones, pero poseían el 73% de la superficie agrícola nacional (censo de 1965; Ramos, 1972, p. 120).

En la década de 1960 se incrementaron las luchas campesinas, influidas por la reforma agraria en Cuba y la Alianza para el Progreso de Estados Unidos, que recomendaba la Reforma Agraria. En 1962, el gobierno de derecha del presidente Jorge Alessandri aprobó la primera Reforma Agraria, creó un número limitado de huertos familiares, se conoció como "Reforma Agraria de Macetero". Ese mismo año, dos máximas autoridades de la Iglesia Católica distribuyeron las tierras de la Iglesia en sus respectivas zonas.

Una segunda reforma agraria se inició con el gobierno de Frei, influenciado por la 'Alianza para el Progreso' y por las activas organizaciones campesinas. La Ley de Reforma Agraria de Frei fue promulgada en 1967. Principalmente limitaba la propiedad de la tierra a un máximo de 80 hectáreas de riego básico. Ese mismo año se promulgó

la Ley de Sindicalización Campesina. Después de tres años de su promulgación, se podían expropiar todas las tierras independientemente de su tamaño por mala explotación. Bajo el gobierno de Frei se asignaron 1.319 fundos, con 3,4 millones de hectáreas, con el 13% de la superficie cultivada del país, beneficiando a 30.000 familias.

La reforma agraria de Allende se implementó bajo una fuerte presión campesina, agudizada al final del gobierno de Frei. Las huelgas rurales habían pasado de 142 en 1965 a 1.580 en 1970 y las tomas u ocupaciones de predios de 13 en 1965 a 456 en 1970. Como Allende no tenía mayoría en el Congreso para mejorar la Ley, optó por implementar a fondo la Ley vigente. Como la Ley permitía que pasados tres años de su promulgación se podía expropiar las tierras mal trabajadas, este mecanismo y otros permitió al gobierno acelerar el proceso expropiatorio.

La reforma agraria de Allende fue fuerte y sistemáticamente resistida por los propietarios agrícolas y latifundistas que utilizaron diversos mecanismos –legales y extralegales– para impedir que el Estado tomara posesión de las tierras expropiadas Las combativas movilizaciones campesinas llevaron a que fuerzas políticas de la UP y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) apoyaron la toma de predios no contempladas en la Ley de Reforma Agraria, creando dificultades al gobierno con agricultores medianos y pequeños (Bitar 1979, p. 146).

En el gobierno de Allende se expropiaron 4.490 predios, que abarcaban 6,6 millones de hectáreas. En septiembre 1973 había desaparecido en Chile el gran latifundio, excepto las grandes viñas. Asimismo, se había duplicado la fuerza sindical campesina, respecto del gobierno anterior, alcanzando los 200 mil afiliados. Finalmente, la extensión de la Reforma Agraria a las comunidades indígenas fue uno de los grandes logros del gobierno de Allende.

Los conflictos políticos entre los partidos de la UP y la DC, los conflictos entre los diferentes tipos de trabajadores del campo, y la fuerte resistencia patronal, afectó seriamente la producción agrícola. Por otra parte, la Ley de Reforma Agraria no incluyó tomar posesión de

maquinarias, equipos ni animales, que tenían que negociarse caso a caso, lo que requería tiempo. Adicionalmente, existieron dificultades para obtener repuestos para las maquinarias y equipos, lo que también afectó la producción agrícola. Esto forzó al gobierno a aumentar el gasto en importación de alimentos, lo que fue posible al comienzo, pero después se dificultó por la falta de divisas, créditos y capacidad portuaria. Finalmente, en 1972, la huelga de los camioneros afectó el transporte de la producción y seriamente las siembras de primavera (Bitar, 1979, p. 146).

El Área de Propiedad Social (APS) y la estatización de la Banca

El apartado sobre el APS está basado fundamentalmente en el documento de Martínez (1997, pp. 26-82). El APS era fundamental en el Programa de la UP. En ella, se planteaba la transformación de las grandes empresas capitalistas, a empresas del APS con amplia participación de los trabajadores. Era el núcleo urbano de tránsito al socialismo. La economía chilena estaba dominada por un reducido número de empresas monopólicas u oligopólicas que controlaban la producción, distribución y venta, que además estaban protegidas de la competencia externa por elevados aranceles a las importaciones. Por todo lo señalado, estas empresas ejercían fuerte dominación sobre la pequeña y mediana industria. Las inversiones privadas eran limitadas, bajo desarrollo del mercado interno y limitada canasta de exportaciones industriales.

El papel inversor y productor del Estado por décadas pasó a ser esencial en la creación de empresas públicas estratégicas: energía eléctrica, petróleo, carbón, petroquímica, acero y otras, con lo que pasó a jugar un rol esencial en la reproducción del capitalismo en Chile. Sin embargo, el Estado se vio limitado por la resistencia empresarial al aumento de impuestos. De este modo, se promovió la inversión extranjera en la industria a través de filiales de las empresas

matrices, las que se asociaron a empresas nacionales que controlaban el mercado interno.

A la dependencia externa se agrega la dependencia del sector industrial. Con este nuevo carácter de la dependencia se acentuaron las tendencias más negativas: lento crecimiento del empleo, baja participación de los salarios en la producción global; una elevada concentración del ingreso y crecientes y altas remesas de utilidades e intereses de la inversión extranjera (Caputo y Pizarro, 1970; Ramos, 1972, pp. 83-116). Además, un mercado interno limitado y orientado a la producción de productos suntuarios de la época.

La agricultura, minería e industria dependían cada vez más de la necesidad y capacidad de importar. Esta, a su vez, dependía de la exportación del cobre en manos de empresas estadounidenses, que fijaban precios bajos al cobre chileno. En 1966 el precio del cobre en la Bolsa de Metales de Londres fue de 69,5 centavos de dólar la libra. El precio productor de Estados Unidos fue de 36,2 centavos de dólar la libra, precio efectivo que fijaban al cobre chileno (COCHILCO, 1988, p. 88). Se debió recurrir a financiamiento externo, que gatilló el aumento de la deuda externa. En efecto, Chile era el país con el más alto endeudamiento per cápita de América Latina, y altamente concentrado en Estados Unidos. El nivel de importaciones y la actividad económica, era altamente vulnerable a una presión de Estados Unidos (Bitar, 1979, p. 46). El APS tenía como premisa el agotamiento de la estructura señalada. El bajo crecimiento subsistía con una gran capacidad instalada ociosa, que sería clave en el funcionamiento del APS. La expropiación debía afectar, como se ha señalado, a un pequeño grupo de empresas, 150 de un total de 30.500 en 1967.

Los principales objetivos del APS eran liberar al país de la dependencia del capital extranjero; utilizar al máximo la capacidad instalada; orientar la producción para satisfacer a la mayoría de la población; aumentar el empleo; controlar la inflación; la nacionalización del comercio exterior. Para contrarrestar el boicot económico, desde antes y al inicio del gobierno, se promovió el rápido control de los principales monopolios. A través de negociación y requisición

o intervención. Lo último, consistía en la toma del control administrativo de las empresas privadas –por acaparamiento, especulación, paralización, toma de empresas por los trabajadores, etc.– que no alteraba la propiedad, la que se negociaba posteriormente (Bitar, 1979, pp. 118-125).

Desde 1971 el fuerte aumento de la demanda se enfrentó utilizando la capacidad ociosa de las empresas públicas y de las nuevas empresas incorporadas al APS. Se amplió la ocupación y se utilizaron parte de las reservas internacionales.

Pronto, el APS se convirtió en el principal conflicto interno. La burguesía nacional opuso férrea resistencia. La ausencia de un listado de empresas y la puesta en duda de la legalidad del APS posibilitó generar incertidumbre en los empresarios medianos y pequeños, y en las clases medias. La toma de empresas medianas promovidas por los partidos y trabajadores de la UP y del MIR profundizó el conflicto interno, generando una creciente unidad de acción de la DC con el derechista Partido Nacional (Ramos, 1972, pp. 320-321). El MIR se constituyó en 1965, siendo partidario de 'La Vía Armada', inspirado en la Revolución Cubana. El MIR criticó la Vía Pacífica de la UP, apoyando críticamente al gobierno de Allende. El gobierno envió al Congreso Nacional un proyecto especial a fines de 1971. Simultáneamente, la oposición presentó otro proyecto sobre la materia, cuyos objetivos eran reducir ampliamente el APS; someter cada caso a la aprobación del Parlamento; crear un cuarto sector de empresas de trabajadores. A partir de allí, los conflictos legales, sociales y económicos se mezclaron y profundizaron. El APS continuó ampliándose. En 1973 el APS llegó a 350 empresas, de las cuales 235 eran industriales. Las empresas tuvieron pérdidas y los reajustes salariales superiores al incremento del Índice de Precios generaron grandes déficits del APS.

Estatización del Sistema Bancario

El control del Sistema Financiero era vital para el funcionamiento de la economía y de todas las reformas estructurales del Programa de la UP. El 30 de diciembre de 1970 Allende anunció la estatización de la banca.

La banca privada controlaba el 63% de los activos y el Banco del Estado de Chile, el 37%. Ese año había 22 bancos nacionales y 5 extranjeros. El 60% de los depósitos estaban concentrados en 5 bancos nacionales y la mayor parte de los créditos eran otorgados a empresas relacionadas (Walder, 2008). Una propuesta de Ley para estatizar la Banca no sería aprobada por el Congreso Nacional.

Así, el camino elegido correspondió a la lógica del mercado capitalista: a inicios de 1971 se compran los bancos extranjeros con poca gravitación en el sistema. A los bancos privados nacionales se les propuso comprarlos a través de adquisición de acciones. Accionistas mayoritarios expresaron su disposición de vender sus títulos. Otros buscaron condiciones más favorables, pero en definitiva el peso que tenía el Estado a través del Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el Banco del Estado los llevó a buscar acuerdos (Fazio, 2008). A fines de 1971, el control estatal del sistema bancario era casi total. De ellos, 16 bancos controlaban el 90% de todo el crédito.

Primer período del gobierno de Allende: noviembre de 1970 a mediados de 1972

Patricio Meller señala que en 1971 la economía chilena vivió un auge sin precedentes, resultado de políticas económicas expansivas. Hubo un mejoramiento generalizado en el nivel de vida y la producción creció 8% en 1971, más del doble de 1970, tasa de crecimiento anual más alta desde 1950. La inflación bajó de 36,1% a 22,1%, el desempleo bajó de 5,7% a 3,8% (cuadro 5). Fue la primera vez en la historia con

un desempleo tan bajo. Los salarios reales de obreros aumentaron 39% y los de empleados en 10% en 1971 (Meller, 1996, pp. 118-137).

Cuadro 5. Evolución de las principales variables macroeconómicas 1970-1973 (Porcentajes)

Variables	**1970**	**1971**	**1972**	**1973**
Tasa de crecimiento (PGB)	3,6	8,0	-0,1	-4,3
Tasa de inflación (IPC)	36,1	22,1	260,5	605,1
Tasa nacional de desempleo	5,7	3,8	3,1	4,8
Incremento anual de salarios reales	8,5	22,3	-16,6	-25,3*

*Corresponde a los tres primeros trimestres de 1973. Fuente: Meller (1996).

La participación del trabajo en el PGB subió de 52,2% (1970) a 61,7% (1971). Los gastos del gobierno crecieron en 36%. La participación del gasto fiscal en el PGB pasó de 21% en 1970 a 27% en 1971. En 1970 se construyeron 24.000 casas y en 1971 se iniciaron 76.000 casas. Se distribuyeron gratuitamente medio litro de leche a cada niño, 1.800.000 desayunos y 560.000 almuerzos escolares y útiles escolares. Entre 1970 y 1973, el precio real de la electricidad cayó 85% y otros servicios domiciliarios y combustibles tuvieron sustanciales disminuciones entre 1970 y 1972.

Aumento del gasto público y limitaciones de los ingresos públicos

En vez de excedentes, el APS tuvo grandes déficits. La nacionalización del cobre mantuvo la producción, pero su valor disminuyó por caída de precios. En 1971 los ingresos corrientes del Estado se mantuvieron alrededor del 38%, en tanto, los gastos corrientes aumentaron considerablemente de 31% a cerca de 40% del PIB, por aumento de remuneraciones superiores a lo estimado (cuadro 6). Si se agregan las inversiones del Estado en infraestructura y viviendas, se llegó en 1971 a un gasto total de 50% del PGB del sector público.

Cuadro 6. Chile: Sector Público No Financiero Consolidado 1970-1973 (%PGB)

Variables	**1970**	**1971**	**1972**	**1973**
Ingresos Corrientes	38,14	37,7	34,48	21,26
Impuestos Directos	7,73	6,2	4,28	6,68
Gastos Corrientes	30,86	39,45	46,41	41,05
Sueldos y salarios	15,83	19,54	20,50	15,76
Pago de la previsión social	8,6	11,87	11,86	6,03
Saldo de Ingresos y Gastos Corrientes	7,28	-1,79	-11,93	-19,79
Inversión del Sector Público	10,41	10,48	9,64	8,65
Gasto Total (Gasto Corriente + Inversión)	41,27	49,93	56,05	49,39

Fuente: Meller (1996).

Extraordinario déficit estatal, emisión monetaria e inflación

Dado que el crecimiento del gasto fue cada vez más elevado que los ingresos, se generaron crecientes déficits del sector público en todos sus ítems.

Cuadro 7. Déficit global del Sector Público (%PGB)

	1970	**1971**	**1972**	**1973**
Déficit global	- 6,69	- 15,28	-24,53	-30,28
Déficit del Gobierno General	- 3,51	- 9,76	-14,12	-10,52
Déficit de las Empresas Públicas	- 3,19	- 5,52	-5,81	-10,46
Déficit Área de Propiedad Social			-4,57	-9,52

Fuente: Meller (1996).

El déficit global del sector público en 1970 ya era muy elevado y preocupante. Se financió con emisiones monetarias del Banco Central.

Los éxitos de 1971 en producción, empleo e inflación no permitieron una reflexión crítica. Apoyada en la teoría estructuralista, se pensaba que la inflación era controlable adecuando los problemas de demanda y oferta de productos, y la adecuación a través del comercio exterior. En la elaboración del programa, se afirmaba que la APS, las empresas públicas y el sector agrario contaban con capacidad ociosa frente a aumentos de demanda. Clodomiro Almeyda, académico y ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Allende, señaló que, en los primeros años, estas profundas transformaciones no lograrían tal crecimiento de la producción (Almeyda, 1987, pp. 172-179). La inflación en 1972 se transformó en una hiperinflación de 260,5% (cuadro 1).

Las principales corrientes teóricas en economía asignan un rol primordial al incremento desproporcionado de la cantidad de dinero en la explicación de la elevada inflación. Para Marx, el dinero es el equivalente general que mide el valor de las mercancías, es decir, el trabajo presente y pasado incorporado. El valor del dinero, aun en la forma de signo de valor, debe ser cautelado. La cantidad de dinero en circulación debe corresponder a la cantidad necesaria para hacer circular las mercancías. Su desvalorización es al mismo tiempo desvalorización del trabajo humano. Marx afirma que, si se aumenta 15 veces la cantidad de dinero –signos de valor– "todos los precios de las mercancías se elevarían 15 veces [...], el alza de los precios no sería más que una reacción del proceso de circulación" (Marx, 1974, p. 142).

Principales acciones de Estados Unidos para desestabilizar la economía chilena

Estados Unidos conocía perfectamente la vital dependencia de la economía chilena. El Informe Church señala días después del triunfo de Allende que Nixon dio instrucciones de "hacer chillar a la economía chilena". El embajador Korry le señala al gobierno de Frei "que bajo Allende no se permitirá que llegue a Chile ni un tornillo ni una tuerca" (Schatán, 2008, p. 216). También el Informe Church

señala que la ayuda bilateral de Estados Unidos bajó de 35 millones de dólares en 1969 a poco más de un millón en 1971; los créditos del Eximbank, por 237 millones de dólares en 1967, desaparecieron en 1971; los préstamos del BID bajaron de 46 millones de dólares en 1970 a 2 millones de dólares en 1972 (Schatán, 2008, p. 216).

Cuadro 8. Stock Mundial de Cobre 1968-1973 (Toneladas de cobre fino)

	Productores	**Consumidores**	**Bolsas**	**Comerciantes**	**Stock Total**
1969	244	191	22	10	467
1970	364	278	88	11	741
1971	322	263	159	11	755
1972	307	225	236	22	790
1973	321	204	40	21	586

Fuente: 'Estadísticas del Cobre. Anuario 1988'. COCHILCO.

Las empresas estadounidenses tenían poder oligopólico y de integración vertical con la industria manufacturera del cobre, es decir, podían controlar el precio a nivel mundial, ajustando la producción, la demanda y modificando rápidamente los stocks. El stock en las Bolsas se incrementó en forma inusual, de 22 mil toneladas (1969) a 159 mil toneladas (1971), un incremento de más de 600%. Los 'Stocks Totales' y los 'Stocks de las Bolsas', aumentaron en 1972 otra vez. Los stocks anuales informados se registran a fines de cada año. En 1973, para favorecer a la dictadura, estos disminuyeron abruptamente generando un fuerte incremento de los precios internacionales del cobre como lo hemos señalado (cuadro 8).

En 1971 la suspensión de los créditos internacionales (318 millones de dólares), combinado con la disminución del valor por las exportaciones de cobre (223,7 millones de dólares) entre 1969 y 1971, significó que Chile dejó de recibir alrededor de 540 millones de dólares, casi tres veces las importaciones de alimentos de 1971 (192 millones de dólares).

Segundo período del gobierno de Allende: mediados de 1972 al golpe de Estado

Los acuerdos UP-DC fueron muy importantes durante 1970 y 1971. La derecha de la DC ganó influencia a raíz del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, ex ministro del presidente Frei (1971), lo que liquidó el Acuerdo con la UP sobre la presidencia en el Parlamento. Además, la DC presentó el Proyecto Constitucional Hamilton-Fuentealba de octubre de 1971, que pretendía crear el Área de Propiedad Privada y detener el APS de Allende. Este cambio se manifestó también en las bases: la marcha de las cacerolas (noviembre de 1971) y el acto de masas de constitución del Área de Propiedad Privada (diciembre de 1971). A inicios de 1972, la derechización de la DC se intensificó. Los demócrata cristianos liquidaron el acuerdo sobre las áreas de la economía, alcanzado anteriormente entre Allende y la DC. Asimismo, se profundizan las diferencias en la UP, conocidas como "Discusiones de Lo Curro", que se mantendrán hasta septiembre de 1973. Esta dualidad lesionó, sin dudas, su unidad de dirección y su capacidad combativa (Martínez, 2008, p. 114).

Como se ha señalado, la 'Vía Pacífica al Socialismo' situaba todo el proceso a través de la institucionalidad existente, y a través de ella misma se pretendía transformar la institucionalidad. De las dos corrientes que se expresaban, la mayor de ellas era la del Partido Comunista, y otros partidos que coincidían con Allende, la que "ponía el acento en el carácter democratizador del Programa; sus propuestas tendían a profundizar y hacer más real la democracia y en tal sentido se abría camino al socialismo, pero no se trataba ya de una revolución socialista. Se trataba de un proyecto más por etapas [...], necesariamente más gradual y acotado en su desarrollo". La otra corriente tenía más sustento en el Partido Socialista, propugnando una marcha más acelerada de carácter socialista, que coincidía con otras fuerzas de izquierda al margen de la UP, como el MIR (Martínez, 2008, pp. 97-98). Tomás Moulián señala que las diferencias entre

el Partido Comunista y el Partido Socialista se presentaban en forma aguda desde décadas (Moulián, 2005, pp. 35-50).

Consolidación del cambio en la correlación de fuerzas políticas 1972

La profunda modificación política no fue claramente percibida a nivel de las fuerzas sociales, como lo muestran las masivas resistencias al paro patronal de octubre de 1972, y en los resultados de las elecciones de marzo de 1973, en que la UP obtuvo el 43,7% de los votos emitidos. El cambio se expresó más bien en una consolidación en todos los sectores contrarios a la UP, a un fuerte desplazamiento en esa dirección de sectores medios inicialmente neutrales o inactivos, y a un aumento excepcional de su capacidad de acción y de combate. Con ello pasan a constituir una fuerza social de una envergadura por lo menos similar a la del movimiento popular. Tanto es así que en octubre de 1972 se atreven a desencadenar el primer intento subversivo de masas. Estos mismos acontecimientos muestran que el desplazamiento de fuerzas no alcanza aun al campo militar, donde todavía continuará una neutralización interna por algunos meses (Martínez, 2008, p. 115).

En el plano político, el ala derecha de la DC logra, en lo fundamental, el control de su partido, imponiendo un entendimiento permanente con el Partido Nacional y el imperialismo estadounidense para terminar con el gobierno de Allende. Esta alianza moviliza todas las fuerzas disponibles para paralizar la acción del gobierno en cualquier sentido, actuando a través de instituciones políticas del Estado, organizaciones sociales, asociaciones empresariales, de profesionales, de vecinos y sindicatos de trabajadores. Se pretendía presionar el cerco externo, extremar el sabotaje y el entorpecimiento de la producción, el acaparamiento, la especulación, la evasión de impuestos y todo lo que contribuyera a la desorganización económica del país (Martínez, 2008, p. 115).

Acaparamiento, mercado negro, especulación, y paro patronal octubre 1972

El acaparamiento y desabastecimiento fueron agresiones muy importantes para socavar el gobierno de la UP, que se agravó previo a que Allende sumiera la presidencia el 4 de noviembre de 1970. Eran organizadas por el Partido Nacional, sectores de derecha DC y con reiteradas operaciones encubiertas de la CIA.

Del Informe Church mencionamos algunas: el 14 de octubre de 1970 se aprueban 60.000 dólares para una estación de radio. El 19 de noviembre de 1970, 750.000 dólares para acciones clandestinas. El 28 de enero de 1971, aprueban 1.240.000 dólares para la compra de otra estación de radio y periódicos, también para apoyar candidatos municipales y actividades anti-allendistas. El 9 de septiembre de 1971 aprueban 700.000 dólares para apoyo al periódico más importante en Chile: *El Mercurio*.

La reactivación de la economía de los primeros meses del gobierno de Allende superó el desabastecimiento no así el acaparamiento, que continuó en los sectores acomodados. A mediados de 1971, el gobierno creó la empresa Distribuidora Nacional (DINAC), que negoció y adquirió, casi la totalidad de las grandes empresas distribuidoras. Los dueños de la gran distribuidora nacional CODINA prefirieron vender a la Cámara de Comercio Minorista, que promovía el desabastecimiento y que posteriormente apoyó los paros patronales. DINAC creó la canasta popular: alimentos a precios oficiales repartidas por Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) en los barrios a través de país.

A mediados de 1972, camioneros y gremios empresariales comenzaron a preparar el paro nacional indefinido que se inició el 9 de octubre de 1972 paralizando gran parte de país. El paro patronal fue una verdadera sedición.

El Informe Church señaló que a lo menos 8 millones de dólares se gastaron secretamente durante 1970-1973 para boicotear la economía de Allende, de los cuales más de 3 millones de dólares cambiados

en el mercado ilegal para financiar el paro patronal (Schatán, 2007, p. 223).

En relación con el trigo, demostramos que si existió desabastecimiento fue por acaparamiento y mercado negro y no por falta de este producto. La producción interna de trigo disminuyó en 560.000 toneladas entre 1970 y 1973. Las importaciones de trigo aumentaron en 751.000 (de 200.000 toneladas (1970) a 951.000 toneladas (1973). En síntesis, existió exceso de trigo, pero gran acaparamiento y mercado ilegal (Meller, 1996, pp. 127 y 158). Inmediatamente, después del golpe de Estado, aparecieron, repentinamente y casi milagrosamente los productos acaparados.

Las Fuerzas Armadas fueron llamadas a integrar el gobierno de Allende

El general Prats, comandante en Jefe del Ejército, fue nombrado ministro del Interior. Prats con el ejército, trabajadores, estudiantes y organizaciones poblacionales derrotaron el Paro Patronal de Octubre. Se realizaron las cruciales elecciones parlamentarias de marzo de 1973, donde el gobierno obtuvo el 43,7% de los votos.

En una entrevista en la *Revista Ercilla*, en noviembre-diciembre de 1972, el general Prats señaló que:

> El paro significó un vuelco completo... Fue un paro mayoritariamente empresarial y profesional. No quiero decir que no hubo sectores de trabajadores que se plegaron. Pero en los gobiernos anteriores los paros los realizaban trabajadores contra patrones (...), ahora se invirtió el esquema. La mayoría parlamentaria solidarizó con el paro, lo que no había ocurrido antes. Los medios más influyentes de comunicación en su mayoría también (...). Si los trabajadores no hubiesen dado un ejemplo de disciplina social pudo haberse producido un enfrentamiento. Piensen ustedes... Cuando el clima de tensión crecía. Bastaba un fósforo (N° 50).

El general de Aviación, Alberto Bachelet fue designado director de la Secretaría Nacional de Distribución, apoyado por oficiales de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y organizaciones sociales, estudiantiles organizaron la distribución de artículos de primera necesidad a la población, especialmente en sectores populares (Soto, 2008b, pp. 142-143).

Los resultados económicos del gobierno de Allende en 1972

Los desequilibrios iniciales de 1971 se profundizaron generando desorganización que no se reflejaron en los resultados macroeconómicos de 1972. El Informe del Comité Económico de Ministros de noviembre de 1972 señala que "en el segundo semestre de 1972 se ha ido perfilando, cada vez con mayor nitidez, los síntomas evidentes de una recesión económica en la industria y agricultura" (Bitar, 1979, p. 328).

Sin embargo, el PGB en 1972 apenas disminuyó en 0,1%. La tasa nacional de desempleo bajó bastante, de 3,8% en 1971 a 3,1% en 1972. Diferente fue la inflación que pasó de 22,1% en 1971 a 260,5% en 1972, afectando los salarios de los trabajadores (cuadro 5). Los déficits del presupuesto público se agravaron (cuadro 7). En 1972 bajaron sustancialmente los ingresos y subieron los gastos (cuadro 6). Ingresos y gasto fueron afectados por el paro patronal.

La profundización de los problemas económicos se reflejó en un empate de las fuerzas políticas y sociales. El intento subversivo de octubre de 1972 "mostró que, si bien había mejorado sustancialmente su fuerza de masas, ella no era suficiente para imponer su proyecto". Una consecuencia de lo anterior fue que la batalla se trasladó al campo militar (Martínez, 2008, p. 116).

Apartado final: el desenlace

Este apartado se basa fundamentalmente en Hernán Soto (2008b, pp. 146-147). Es importante destacar que la elección parlamentaria de marzo de 1973 significó un apoyo al gobierno (un 43,7%). No obstante, la situación siguió siendo muy incierta. Hubo un doble e insalvable obstáculo: el sector que dominaba la DC encabezada por Eduardo Frei y Patricio Aylwin, estaban por derribar el gobierno de la UP, donde un fuerte sector rechazaba acuerdos con la DC. Ambos grupos parecían buscar una definición irreversible. Esa era también la posición del gobierno estadounidense que promovía un golpe de Estado.

Después de las elecciones, el general Prats dejó las tareas de gobierno. Los agudos problemas económicos se profundizaron en 1973: inflación, desabastecimiento y escasez de divisas para las importaciones. La inflación acumulada a septiembre de 1973 llegó a 286,8%. En octubre subió a 528,4%. Este último aumento se debió a la libertad de precios y congelación de salarios decretados por la dictadura.

Los sabotajes dañaron la economía y atemorizaban a la población. En los últimos meses del gobierno se realizaron más de veinte actos terroristas a las torres de alta tensión, líneas férreas, y empresas del APS. "Patria y Libertad", junto a oficiales y suboficiales de la Armada, estarían organizados en una "Base Operacional de Fuerzas Especiales" (BOFE), para realizar acciones terroristas (Gaudichaud, 2016).

Los esfuerzos desestabilizadores se concentraron al interior del ejército y contra el general Prats. Los enfrentamientos callejeros se hicieron cotidianos. Algunos mandos comenzaron a usar la Ley de Control de Armas contra los trabajadores.

El 29 de junio de 1973, se realizó un intento de golpe denominado "Tanquetazo"; los tanques llegaron muy cerca de La Moneda apoyados por el grupo paramilitar "Patria y Libertad". Fue sofocado en horas por la decidida intervención del general Prats.

El 25 de julio se inició un nuevo paro patronal de camioneros y comercio, y de jóvenes de derecha de la Universidad Católica. Según el Informe Church, la CIA participó y financió este paro. Dirigentes sindicales de la DC y de la derecha paralizaron la minera 'El Teniente'. El 26 de julio de 1973 fue asesinado el edecán naval de Allende, comandante Arturo Araya, inculpando falsamente a la izquierda.

Nuevamente fueron llamados los militares al gobierno, con Prats como ministro de Defensa. La mayoría de los generales no respaldó Prats, quien fue víctima de provocaciones callejeras de los grupos subversivos y de esposas de oficiales. Prats renunció el 22 de agosto. Fue cuando Allende nombró al general Augusto Pinochet como comandante en jefe del Ejército.

Un acuerdo de la Cámara de Diputados, apoyado por demócrata cristianos y derechistas declaró que el gobierno actuaba al margen de la Constitución. Se legitimaba de antemano el golpe que estaba por venir.

La división de las fuerzas de la UP impedía actuar con oportunidad y eficacia. No hubo acuerdo para llamar a un Plebiscito Nacional sobre las diversas áreas de la economía, buscando así una salida a la crisis. Esa era la voluntad del Presidente, que solo fue aprobada el 9 de septiembre por la totalidad de los partidos de la UP. El 11 de septiembre el presidente Allende anunciaría el Plebiscito. No alcanzó a hacerlo. El golpe militar comenzó a primera hora encabezado por el general Augusto Pinochet.

Referencias

Allende, S. (1970). Discurso de la Victoria. *Textos Salvador Allende 1970*, pp. 64-68. Biblioteca Clodomiro Almeyda, Partido Socialista.

Allende, S. (1971a). Mensaje al Congreso Pleno, 21 de Mayo, 1971. *Textos Salvador Allende 1971*, pp. 197-213, Biblioteca Clodomiro Almeyda, Partido Socialista.

Allende, S. (1971b). Mensaje del Ejecutivo y Proyecto de Reforma Constitucional, en E. Novoa. *La batalla por el cobre (1972)*. Santiago: Editorial Quimantú, pp. 402-424.

Almeyda, C. (1987). *Reencuentro con mi vida*. Surco, Perú: Editorial Ornitorrinco.

Bitar, S. (1979). *Transición, socialismo y democracia. La experiencia chilena*. México: Siglo XXI.

Caputo, O. y R. Pizarro. (1970). *Desarrollismo y capital extranjero: las nuevas formas del imperialismo en Chile*. Chile: Ediciones de la Universidad Técnica del Estado.

Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) (1989). *Estadísticas del Cobre, Anuario 1988*.

Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) (2019a). *Precios Mensuales. Base de Datos*.

Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO) (2019b). *Anuario Estadístico del Cobre y Otros Minerales, 1999-2018.*

Corvalán, L. (2008). Salvador Allende. Presidente del Pueblo, en M. Lawner *et a*l. (comps.). *Salvador Allende. Presencia en la Ausencia.* Santiago: Lom/CENDA, pp. 35-55.

Chonchol, J. (2008). Profundización de la Reforma Agraria, en M. Lawner *et al*. (comps.). *Salvador Allende. Presencia en la ausencia* (181-189). Santiago: Lom/CENDA.

Dos Santos, T. (2009). *¡Bendita Crisis! Socialismo y democracia en el Chile de Allende*. Venezuela: Editorial El perro y la Rana.

Fazio, H. (2008). Mapa de la extrema riqueza: antes, durante y después, en M. Lawner *et al*. (comps.). *Salvador Allende. Presencia en la ausencia.* Santiago: Lom/CENDA, pp. 191-205.

Gaudichaud, F. (2016). *Chile 1970-1973: Mil días que estremecieron al mundo*. Santiago: Ediciones Lom.

Lawner, M. *et al*. (2008). Las primeras 40 medidas del gobierno popular, en M. Lawner *et al*., (comps.) *Salvador Allende. Presencia en la ausencia*. Santiago: Lom/CENDA, pp. 397-401.

Manns, P. (2008). Recuento. En M. Lawner *et al*. (comps.). *Allende. Presencia en la ausencia.* Santiago: Lom/CENDA, pp. 363-377.

Martínez, A. (1997). El Área de Propiedad Social y Mixta, APSM-del sector Industrial Durante el Gobierno de la Unidad Popular. *Revista de Investigación Económica, Facultad de Economía*, UNAM.

Martínez, A. (2008). Economía y correlación de fuerzas sociales en la transición: el caso de Chile en el período 1970-1973, en M. Lawner *et al*. (comps.). *Salvador Allende. Presencia en la Ausencia*. Santiago: Lom/CENDA.

Marx, K. (1974). *Contribución a la Crítica de la Economía Política*. México: Ediciones de Cultura Popular.

Meller, P. (1996). *Un siglo de economía política chilena (1890-1990)*. Santiago: Editorial Andrés Bello.

Millas, O. (1996). *Memorias 1957-1991. Una digresión. Cuarto Volumen*. Chile: Ediciones Chile América CESOC.

Moulián, T. (2005). La vía chilena al Socialismo: Itinerario de la crisis de los discursos estratégicos de la Unidad Popular, en J. Pinto (coord.-ed.). *Cuando hicimos historia. La experiencia de la Unidad Popular*". Santiago: Ediciones Lom.

Moussa, N. (1999). *El desarrollo de la minería del cobre en la segunda mitad del siglo XX.* Serie recursos naturales e infraestructura. CEPAL.

Novoa, E. (1972). *La Batalla por el Cobre. Comentarios y Documentos.* Santiago: Editora Quimantú.

Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular, (1970). Unidad Popular. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7738.html

Ramos, S. (1972). *Chile. ¿Una economía en transición?* Cuba: Casa de las Américas.

Schatán, J. (2008). El desabastecimiento: la conspiración de EE. UU. que derrotó a la UP, en M. Lawner *et al*. (comps.). *Salvador Allende. Presencia en la ausencia.* Santiago: Lom/CENDA, pp. 207-223.

Silva, J. (2008) ¿Era viable el proyecto de la Unidad Popular?, en M. Lawner *et al*. (comps.). *Salvador Allende. Presencia en la ausencia*. Santiago: Editorial Lom/CENDA, pp. 93-105.

Soto, H. (2008). La nacionalización del cobre, en M. Lawner *et al*. (comps.). *Salvador Allende. Presencia en la Ausencia*. Santiago: Lom/CENDA, pp. 403-407.

Soto, H. (2008b). El gobierno de Allende y las Fuerzas Armadas, en M. Lawner *et al*. (comps.). *Salvador Allende. Presencia en la Ausencia*. Santiago: Lom/CENDA, pp. 104-149.

Valdés, J. G. (2020). *Los economistas de Pinochet: La escuela de Chicago en Chile*. Santiago: Fondo de Cultura Económica.

Varas, J. M. (2008). El sol de la cultura, en M. Lawner *et al*. (comps.). *Allende. Presencia en la ausencia.* Santiago: Lom/CENDA, pp. 353-361.

Walder, P. (2008). "¿Qué pasó con la estatización de la banca?, en *Revista Punto Final*, 665.

El campesinado y la política agraria de la Unidad Popular (1970-1973)

Las políticas agrarias en los años 1960 y 1970

Jacques Chonchol

Antes de la llegada de la Unidad Popular (UP) al poder con el gobierno de Salvador Allende (noviembre de 1970) durante la década de 1960 se habían producido importantes cambios en el agro chileno particularmente bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. En efecto, en 1964 se habían aprobado dos leyes fundamentales que permitirían y facilitarían dichos cambios: la Ley de Reforma Agraria 16.640, promulgada en julio 1967 y la Ley de Sindicalización Campesina 16.625, promulgada ese mismo año.

La reforma agraria en el gobierno Demócrata Cristiano

En 1964, al triunfar el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) a la presidencia de la República, Eduardo Frei, en ardua lucha contra el candidato de las fuerzas de izquierda, Salvador Allende, ambos se comprometieron en sus programas a resolver el

problema agrario y, al desaparecer casi del Parlamento en 1965 las fuerzas de la derecha política, se crearon las condiciones para que fuera abordado en Chile el problema de la reforma agraria.

Gracias a estas nuevas condiciones políticas, entre 1965 y 1970, se realizaron en el plano jurídico e institucional, una serie de transformaciones que fueron el inicio de un esfuerzo profundo para cambiar significativamente el tradicional panorama agrario.

Los cambios jurídicos más importantes que ocurrieron en esos años fueron las nuevas leyes de Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina promulgadas en 1967. Además, se aprobó una reforma constitucional que autorizó el pago diferido de las tierras afectadas por el proceso de reforma agraria.

Los aspectos fundamentales de la Ley de Reforma Agraria, aprobada por el gobierno demócrata cristiano con el apoyo de los partidos políticos de izquierda, eran los siguientes:

a. Se limitaba la posibilidad de acumulación de tierras en manos de una misma persona o de su cónyuge, pues eran expropiables por exceso de tamaño todas las acumulaciones de predios o los predios individuales de más de 80 hectáreas de riego básico (80 hectáreas de terrenos de riego de buena calidad cercanos de la capital o sus equivalentes en tierras de otras condiciones; los equivalentes para cada región estaban establecidos en la propia ley).

b. Eran expropiables también después de un período de 3 años desde el momento de la promulgación de la ley, todos los predios de cualquier tamaño que estuvieran abandonados o insuficientemente explotados en relación con otros predios normales de la misma zona.

c. Eran también expropiables los predios pertenecientes a sociedades anónimas y los que fueron beneficiados por obras de regadío efectuadas por el Estado.

d. Las tierras expropiadas y las inversiones adheridas a ellas se pagarían con una cuota al contado que iba del 1 al 10% según el estado de la explotación y el resto con bonos de reforma agraria amortizables en 25 a 30 años.

e. Los agricultores que explotaban bien sus tierras tenían derecho a conservar en su poder una reserva que podía llegar hasta las 80 hectáreas de riego básico.

f. En las tierras expropiadas se organizaba un sistema transitorio de explotación mediante la asociación entre el Estado y los campesinos que allí vivían que duraría de 3 a 5 años. Este período transitorio conocido con el nombre de "asentamiento" tenía por objeto estudiar el mejor plan de subdivisión de la tierra, hacer las inversiones que se requerían para su mejor explotación, preparar a los campesinos para sus nuevas funciones empresariales y darles en la práctica un sentido cooperativista.

g. Al término del período transitorio las tierras debían ser asignadas a los campesinos beneficiarios en forma de unidades familiares indivisibles por herencia (para evitar el minifundio), en forma de unidades cooperativas de producción o en forma de sistemas mixtos, parte en propiedad familiar y parte en propiedad cooperativa. En casos calificados los predios podían conservarse bajo el dominio público.

h. Finalmente, las aguas de regadío eran definidas como un bien nacional de uso público; sobre ellas había solo un derecho de uso y no de propiedad, y cuando había agricultores con excesivos derechos de agua en relación a las necesidades de sus tierras el Estado tenía la posibilidad de tomar el excedente sin ninguna indemnización para redistribuirlo a otros agricultores que tuvieran necesidad.

En lo que respecta a la nueva Ley de Sindicalización Campesina, aprobada en 1967, sus aspectos básicos fueron los siguientes:

a. Se dieron amplias facilidades para la rápida y libre organización de sindicatos de trabajadores agrícolas al nivel de cada comuna (la más pequeña división geográfica-administrativa del país). Bastaba que 100 trabajadores agrícolas, y en casos calificados un número menor, lo desearan para que rápidamente se constituyera un sindicato.

b. Los sindicatos comunales tenían libertad para organizar federaciones y confederaciones nacionales o regionales de sindicatos.

c. Los sindicatos se financiaban con un fondo constituido por un aporte obligatorio de los trabajadores sindicalizados (en base de sus salarios) y un aporte equivalente que obligatoriamente debían aportar sus empleadores.

d. Todos los campesinos de más de 18 años (hombres, mujeres, asalariados, medieros y aun pequeños agricultores), podían ser miembros de los sindicatos campesinos.

e. En cada fundo si había un mínimo de 5 trabajadores sindicalizados, estos podían designar un delegado sindical con fuero e inamovilidad. De estas franquicias gozaban también los dirigentes de los sindicatos, de las federaciones y de las confederaciones sindicales.

Desde el punto de vista cuantitativo, la acción del gobierno de la Democracia Cristiana favoreció, en lo que respecta a la redistribución de la tierra, a unas 28 mil familias campesinas, que quedaron organizadas en asentamientos o en cooperativas de reforma agraria en los 1.300 predios expropiados o destinados a la reforma agraria, y que tenían una superficie global de 3,4 millones de hectáreas. Esto representaba el 13% del total de las tierras cultivadas en Chile o el 14,5% de las tierras productivas, y los beneficiarios

constituían entre el 5 y el 10% de las familias campesinas sin tierra o con tierra insuficiente. La propia meta que se había fijado el gobierno demócrata cristiano para su período de 6 años era dar acceso a la tierra a 100 mil familias campesinas, lo que significa que realizó un 1/3 de su programa en este aspecto.

Desde el punto de la organización sindical y cooperativa, durante los años del gobierno DC, se constituyeron unos 400 sindicatos campesinos con algo más de 100 mil adherentes, distribuidos en 3 grandes confederaciones sindicales y 2 menores. Estas organizaciones sindicales, a través de huelgas y conflictos colectivos, obtuvieron un mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de los trabajadores rurales. Del mismo modo en esos años, poco más de 80 mil pequeños agricultores se organizaron en cooperativas campesinas y en comités de pequeños agricultores, a través de los cuales tuvieron acceso al crédito, a la asistencia técnica agrícola y a ciertos mejoramientos sociales.

En síntesis se puede decir que aun cuando el proceso de reforma agraria y de desarrollo social del campesinado emprendido por la democracia cristiana estuvo lejos de beneficiar a la gran masa campesina y en muchos aspectos fue inferior a los propios objetivos que dicho gobierno se había fijado, tuvo a su haber resultados significativos: fue la primera vez que se abordó en Chile, con cierta decisión, el proceso de cambio del viejo sistema agrario y se abrieron oportunidades de progreso económico y social para sectores importantes de los trabajadores agrícolas y de los pequeños agricultores.

La reforma agraria en el gobierno de la Unidad Popular

Sin embargo, el desarrollo del proceso de cambio agrario bajo el gobierno demócrata cristiano creó en la masa rural no beneficiada, que era la mayoría del campesinado, una frustración creciente, pues por primera vez veía que abrían expectativas de

mejoramiento, pero estas no alcanzaban sino a una parte reducida de la masa campesina.

Por esto, en el programa de la UP, que en septiembre de 1970 con su candidato Salvador Allende logró conquistar la presidencia de la República, estaba contemplada la profundización de la reforma agraria junto con otra serie de cambios fundamentales en las estructuras económicas de la sociedad chilena, como la nacionalización de los grandes recursos mineros (cobre y otros), la estatización de los bancos y de los grandes monopolios industriales, etcétera.

Se trataba, en el aspecto agrario, de acelerar al máximo la transformación de la estructura de tenencia de tierra, para terminar con el latifundio y crear nuevas relaciones sociales y económicas dentro del sistema rural, así como en las relaciones de este con el resto del sistema económico.

Las tierras expropiadas según dicho programa debían organizarse preferentemente en formas cooperativas de propiedad y, en casos calificados, se contemplaban empresas estatales. De igual modo se establecía que se daría propiedad familiar a los campesinos sobre la casa y el huerto.

Además, en el programa agrario de la UP se indicaban medidas especiales para los grupos campesinos más postergados como los indígenas y los minifundistas y la participación del campesinado, a través de Consejo Campesinos de nivel nacional y regional, en la formulación y ejecución de las políticas agrarias.

Las expropiaciones

El primer aspecto que tuvo que abordar el gobierno de la UP fue el de acelerar el proceso de las expropiaciones para responder a la presión e inquietud de los campesinos. Estos, en efecto, pensaban que, puesto que el nuevo gobierno era de los trabajadores, todas sus diversas aspiraciones de acceso a la tierra debían ser satisfechas del modo más rápido posible.

En estas circunstancias, el gobierno de la UP se fijó para 1971 una meta de mil predios a expropiar. A pesar de ello, y bajo la presión campesina, la aceleración del proceso debió ser aún mayor y al final de 1971 se habían expropiado 1.378 predios con 2 millones 600 mil hectáreas. Este ritmo se aceleró aún más en 1972, año en que se expropiaron más de 2 mil predios con unas 2 millones 800 mil hectáreas, con lo que prácticamente se terminó con el gran latifundio en Chile. En 1973, hasta el golpe de Estado, se expropiaron otros 1.050 predios, sobre todo los mal explotados de tamaño medio y latifundios remanentes, con 1 millón 200 mil hectáreas. A partir de julio de 1970 (3 años después de promulgar la ley) era posible expropiar, según su propio articulado, cualquier predio de cualquier tamaño que estuviera mal explotado. Esta facultad la usó, junto con la del exceso de dimensión, el gobierno de la UP para acelerar el proceso de expropiación.

En resumen, las expropiaciones y superficies expropiadas durante el gobierno de la UP son las que se señalan en el cuadro siguiente, en el cual también se indican las expropiaciones durante el gobierno del PDC.

En esta política de expropiaciones se siguieron distintas estrategias. En un principio se fijó como objetivo expropiar los latifundios más representativos de cada provincia y que eran predios-símbolos para los campesinos de dichas provincias. Además, se dio preferencia a las provincias del sur, especialmente con alta población campesina indígena como Cautín y otras que habían sido poco afectadas durante el gobierno de la DC. El Ministerio de Agricultura estuvo funcionando más de dos meses en Temuco, capital de la provincia de Cautín, a comienzos de 1971, como consecuencia de una decisión del presidente Allende después de asistir en diciembre de 1970 al Segundo Congreso de las Asociaciones Indígenas Mapuche.

Expropiaciones del proceso de reforma agraria en Chile

	Nº de predios	**Superficie (millones de has. físicas)**
Gobierno Frei (1965-70)	1.319	3,4
Gobierno Allende		
1971	1.378	2,6
1972	2.062*	2,8
hasta septiembre 1973	1.050	1,2
Total bajo Allende	4.490	6,6
Total general 1956-septiembre 1973	5.809	10.0

*Esta cifra corresponde a los 10 primeros meses de 1972. De las expropiaciones efectuadas en noviembre y en diciembre de dicho año no tenemos cifras. En todo caso aparecen incluidas en las 1.050 de 1973.

Posteriormente se decidió que las prioridades de 1971 para cada región las establecían los Consejos Campesinos Provinciales y Comunales que se iban constituyendo y finalmente se adoptó como meta terminar con el latifundio en 1972.

El proceso fue sin embargo mucho más complejo y difícil en lo que respecta a las formas de organización social y económica de los predios expropiados.

La organización económico-social del sector reformado

Vimos anteriormente que la Ley de Reforma Agraria contemplaba, inmediatamente después de la expropiación y antes de la asignación definitiva de la tierra a los campesinos, en cualquiera de las formas de la propia ley (individuales o colectivas), un período transitorio de 3 a 5 años de duración.

Este período transitorio, conocido con el nombre de "asentamiento", implicaba un contrato de explotación entre el Estado y los

campesinos, mediante el cual el Estado aportaba la tierra expropiada, el crédito y la asistencia técnica y los campesinos su trabajo. Se consideraba que durante este lapso se podía capacitar bien a los campesinos, que venían de un régimen de dependencia paternalista, para sus futuras responsabilidades como productores independientes. Se les podía, además, dar una mejor preparación técnica y económica y mostrarles las ventajas prácticas del trabajo cooperativo. Habría junto a ello tiempo suficiente en este período para estudiar el mejor plan de subdivisión del predio, hacer las inversiones necesarias para su mejor explotación y para la propia subdivisión y facilitar la incorporación de un mayor número de campesinos de las zonas vecinas al predio reformado al intensificarse su capitalización y su grado de explotación. Finalmente, este período transitorio, en que el predio no se transformaba bruscamente con respecto a su situación anterior en cuanto al tamaño y la forma de explotación, evitaría cualquier eventual baja transitoria de la producción.

La contabilidad de la explotación la llevaban los funcionarios de CORA en oficinas lejanas y sufría de considerable retraso, de modo que al final del año agrícola no se sabía si la explotación había dejado beneficios o pérdidas. De este modo era imposible distribuir entre los campesinos, de acuerdo a su trabajo, el excedente que les hubiera correspondido. Por lo cual, estos ganaban su adelanto salarial y lo que producían en la parte de la tierra que explotaban individualmente. Como, por otra parte, los adelantos salariales eran iguales para todos, cualquiera que fuera el trabajo, ello hacía que los campesinos más esforzados vieran que la mejor manera de aumentar su ingreso era dar más importancia al cultivo individual. El interés por la explotación colectiva iba pues disminuyendo en beneficio de la explotación individual, y había poca preocupación por rembolsar los créditos CORA.

Junto con lo anterior existía dentro de los asentamientos un conflicto creciente entre los asentados futuros beneficiarios de la tierra, que eran en su mayoría jefes de familia, inquilinos y empleados vivientes antiguos del predio y la "fuerza laboral" que eran otros

campesinos con trabajo eventual o más o menos permanente (campesinos jóvenes, campesinos vivientes fuera del predio, afuerinos, minifundistas, etcétera) que solo ganaban un salario. Se iba agravando la diferenciación por categorías de campesinos privilegiados por la reforma o no privilegiados por ella.

Todos estos problemas exigían redefinir la política frente a la organización económica y social del sector reformado, lo que el gobierno de la UP hizo, en una primera etapa, estableciendo que a partir de 1971 todos los asentamientos deberían desarrollar planes de explotación formulados por los campesinos y financiados por el Banco del Estado mediante una cuenta abierta a cada asentamiento. Esta medida tenía por objeto terminar con el paternalismo de CORA, hacer sentir más a los campesinos que el crédito recibido era algo de lo cual eran colectivamente responsables, que debería gastarse mediante un plan de explotación preparado y presentado por ellos, y que sus gastos de vida no eran un salario sino un adelanto de crédito.

Mientras tanto se estudiaba una nueva fórmula transitoria para reemplazar a los asentamientos y esta nueva fórmula fueron los Centros de Reforma Agraria (CERA) establecidos oficialmente a fines de 1971.

Los CERA debían constituirse por la unión de dos o más predios expropiados vecinos o próximos a fin de darles mayor dimensión que a los asentamientos y ligar el proceso de reforma agraria a nuevas formas de organización territorial distintas de los antiguos predios. En los CERA se buscaba, además, dar a todos los campesinos adultos, sin distinción de sexo o de estado civil, los mismos derechos. El órgano máximo de decisión del CERA era en consecuencia la Asamblea General formada por todos los mayores de 16 años, trabajadores del CERA, permanentes o eventuales y familiares.

La remuneración de los trabajadores del CERA podía variar según la calidad y tipo de trabajo de cada uno y además había una participación en los beneficios de acuerdo a los respectivos aportes al trabajo anual.

En los CERA se buscaba ampliar las oportunidades de trabajo para los campesinos externos de los predios reformados, todo lo cual debía hacerse mediante su incorporación al CERA de común acuerdo entre la asamblea del CERA y el Consejo Campesino de la región. Además, de los fondos excedentes, una parte debía destinarse a inversiones para beneficiar a otros campesinos de la comuna, con lo que se pretendía aumentar la solidaridad entre los campesinos del CERA y otros campesinos más pobres de los alrededores.

Mediante estos y otros contenidos organizados se pretendía en los CERA corregir los defectos que la experiencia del período transitorio había mostrado que existían en los asentamientos.

Sin embargo, los obstáculos para que los partidos de la UP actuaran con una visión homogénea frente a este nuevo tipo de organización, dificultó su implantación y facilitó el que fueran atacados por la oposición política como formas disimuladas de empresas estatales en las cuales nunca la tierra sería asignada a los campesinos. Esto no era efectivo, puesto que cuando era necesario establecer empresas estatales en el campo estas desde un comienzo se debían organizar bajo la forma de Centro de Producción (CEPRO), fórmula que estaba también considerada en la ley de reforma agraria. Había para estos CEPRO también una reglamentación que se elaboraba en cada caso de acuerdo con los campesinos que los constituían.

A pesar de ello, el clima de enfrentamiento político que las fuerzas de la derecha y de la Democracia Cristiana extendían por todo el país se desarrollaba en el campo, entre otros aspectos, mediante un ataque violento a la constitución de los CERA, el que no era respondido por la UP con una visión homogénea y una acción dinámica. El resultado final fue una gran confusión en las formas organizativas y luchas entre campesinos por imponer una u otra fórmula. Aun fue necesario establecer como fórmula pasajera la de los "Comités Campesinos" cuando las contradicciones eran demasiado agudas entre campesinos de un mismo predio o grupo de predios vecinos, que querían ya la fórmula del asentamiento o del CERA. Subsistieron durante 1972 y 1973 por todas partes asentamientos, CERA, CEPRO y

comités campesinos, con poca claridad en sus estructuras internas y sin que los CERA pudieran corregir los defectos de los asentamientos.

La asignación de la tierra

A partir de 1972, el gobierno de la UP aceleró el proceso de asignación definitiva de la tierra a los campesinos, comenzando por los asentamientos más antiguos, muchos de los cuales habían ya cumplido durante el gobierno de la Democracia Cristiana el plazo legal, sin que se hubiera hecho la asignación correspondiente de la tierra.

Esta asignación, que no pudo ser más rápida por la escasez de recursos técnicos para los planes de asignación, se basaba en los siguientes principios definidos por el gobierno de la UP en diciembre de 1971:

a. Los campesinos de los asentamientos o CERA, una vez cumplido el período transitorio de tres o cinco años, recibían en forma de asignación familiar la casa y el huerto de cultivo personal. Cada familia campesina de la cooperativa tenía derecho a la propiedad familiar sobre su casa y el huerto.

b. También los asentamientos o CERA podían convertirse definitivamente en Centros de Producción (empresa estatales o CEPRO) si los campesinos miembros de ellos así lo deseaban por una mayoría considerable.

c. Los CEPRO se establecían en casos muy calificados y con el pleno acuerdo de los campesinos miembros. Los más destacados fueron las grandes estancias ganaderas de Magallanes y los fundos forestales del Complejo Forestal de Panguipulli en la provincia de Valdivia.

d. En caso de existir cooperativas campesinas de pequeños agricultores cuyos miembros tuvieran tierra en cantidad insuficiente, y habiendo predios vecinos expropiados que tuvieran un reducido número de trabajadores, dichos predios podían ser asignados

a esas cooperativas campesinas, sobre la base que los campesinos vivientes en esos predios fueran incorporados a dichas cooperativas.

De acuerdo con estos criterios se hicieron asignaciones importantes de tierras en forma definitiva durante 1972 y 1973.

La producción y el consumo

Cuando el gobierno de la UP llegó al poder se encontró con una situación económica crítica: la economía estaba prácticamente paralizada, la cesantía y el subempleo eran considerables, se había producido una gran fuga de capitales, los precios del cobre, la principal exportación de Chile, estaba en un período de descenso agudo, la tasa de inflación había aumentado con respecto a los años precedentes y el monto de la deuda externa superaba los 4 mil millones de dólares, gravando seriamente con el pago de sus amortizaciones e intereses las disponibilidades de la balanza de pagos.

Frente a este contexto, la primera necesidad del nuevo gobierno era reactivar la economía. Para compensar la baja del poder adquisitivo de los trabajadores procedió a reajustar los salarios en la misma magnitud del alza del costo de la vida de 1970 (35%), dando algunos puntos adicionales a los trabajadores más pobres. Para combatir la cesantía y el subempleo inició programas extraordinarios de obras públicas, de construcción de viviendas y de forestación, etcétera. Pudo así, a través de un mayor ingreso monetario de los trabajadores y del aumento del empleo, reactivar la situación económica y lograr la plena ocupación del sector industrial que estaba en 1970 trabajando en muchos rubros a menos de la mitad de su capacidad instalada.

Todo esto lo obligó a incrementar las importaciones de materias primas y de otros productos, lo que, dada la caída del precio del cobre afectó el nivel de reservas en divisas. El PNB aumentó en más del 8% en 1971, lo que trajo consigo un aumento de la demanda de alimentos del 14%, muy superior al crecimiento de la producción agropecuaria

que en ese año fue del 6%. La diferencia se compensó con un aumento de las importaciones alimentarias.

Estos hechos se repitieron en 1972, pero en un contexto más desfavorable. La tasa de empleo era una de las más altas registradas en la historia económica del país. La capacidad instalada en muchos centros industriales estaba plenamente ocupada. Era imposible aumentar más la producción sin inversiones adicionales, pero los precios del cobre permanecían bajos y el bloqueo económico invisible de los intereses estadounidenses, afectados por la nacionalización de las minas de cobre, agravaba la carencia de divisas. Las actividades portuarias y el volumen de los transportes internos estaban limitados por la debilidad de las instalaciones y fueron además gravemente afectados por la huelga prolongada de los camioneros de fines de 1972, fomentada por la CIA y por la oligarquía chilena, y que perturbó seriamente el sistema de producción y de distribución.

La tasa de crecimiento de la producción agrícola, afectada además por malas condiciones climáticas, fue inferior en 1972 a la de 1971 (el crecimiento fue de solo 2% en vez de 6%), y la inflación, en gran parte controlada en 1971, se desencadenó con violencia en el segundo semestre de 1972. El consumo alimenticio aumentó sin embargo en dicho año en el 12%.

Aumentó aún más la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria y la tasa de incremento de la demanda alimenticia, acelerada por la tendencia creciente de la clase media a acaparar alimentos ante la perspectiva de alzas de precios o de escasez. Era para el gobierno cada vez más difícil cubrir el déficit mediante un aumento de las importaciones, no solo por los problemas físicos de desembarque y distribución y por su escasa disponibilidad de divisas y de créditos externos, sino que además porque los precios de los alimentos experimentaron fuertes alzas en el mercado internacional. Así, por ejemplo, el precio del trigo subió 51% en 1972 con respecto a 1971, el de la carne congelada 40%, el del azúcar 86%.

En 1973, en cambio, la situación de disponibilidad alimenticia no aumentó como había sucedido en 1971 y 1972, sino que experimentó

un retroceso debido a una baja de la producción y a las dificultades para importar.

Con respecto a la producción, los cultivos de cereales que debían sembrarse en 1972 para cosecharse a comienzos de 1973 experimentaron una baja por la menor superficie cultivada. Ello se debió a las dificultades para las siembras del invierno de 1972 (abril a junio) por las pésimas condiciones climáticas (fue el año más lluvioso de los últimos tiempos) y cuando en la primavera de 1972 (septiembre, octubre, noviembre) se trató de recuperar haciendo un esfuerzo extraordinario de siembras, la huelga de los camioneros que duró casi todo el mes de octubre, paralizó los transportes de semillas, fertilizantes y combustibles para los tractores. Todo ello condujo a una disminución de las superficies sembradas en 1972 que afectó las cosechas de 1973.

Por otra parte, en este último año las dificultades para compensar el déficit por un aumento de las importaciones se agravaron debido a la aguda escasez de divisas del país, el continuo crecimiento de los precios de los alimentos (el precio del trigo en el mercado internacional se triplicó con creces entre mediados de 1972 y fines de 1973) y a la falta de créditos externos para importar. Con respecto a esto último cabe señalar el doble aspecto del bloqueo económico del sistema financiero estadounidense y de los países capitalistas en general y la falta de créditos suficientes para importar bienes de consumo de parte de los países socialistas. Los créditos de estos últimos eran, fundamentalmente, para importar bienes de capital.

Todo ello condujo a una agudización considerable del proceso inflacionario interno, a la ampliación del mercado ilegal y a la acumulación de stocks alimenticios particularmente por las clases medias urbanas que adoptaban una postura cada vez más violenta de oposición hacia el gobierno. Este se debatía entre la necesidad de racionar los alimentos para satisfacer las necesidades del pueblo o mantener el sistema de mercado que se hacía cada día más caótico, dilema que no logró superar. Y todo este clima económico fue sin dudas un

elemento psicológico importante para crear las condiciones del golpe de Estado militar del 11 de septiembre de 1973.

Los campesinos y su participación en el proceso de cambio agrario

El programa agrario de la UP contemplaba dar a los campesinos activa participación en el proceso de cambio y para ello planteaba la creación de Consejos Campesinos a nivel nacional y regional con el fin de que participaran en la formulación y aplicación de las políticas agrarias.

De acuerdo con este predicamento, en diciembre de 1970 y después de una amplia discusión del Ministerio de Agricultura con las principales organizaciones campesinas, se dictó un Decreto que establecía la creación de un Consejo Nacional Campesino para trabajar a nivel superior con el Ministerio de Agricultura y de Consejos Provinciales y Comunales en las distintas regiones agrarias del país.

La organización de estos Consejos, que se efectuó con rapidez en los primeros meses de 1971, encontró sin embargo diversas dificultades. Por un lado, parte importante del campesinado, especialmente en las provincias del sur, no era un campesinado organizado ni sindical, ni cooperativamente ni en otras formas de organización. Había pues dificultad física para hacer participar a este tipo de campesinos en los Consejos. Buscando su ampliación para hacer participar a estos grupos, se inició, además, una lucha política entre la UP y la DC y entre los propios partidos de la UP para tratar de controlar los Consejos, lo que llevó luego a algunos partidos de la UP a no apoyar la organización de los Consejos Campesinos.

Además de todo esto, las limitaciones jurídicas del gobierno le impedían dar a los Consejos Campesinos, si no era a través de una ley que no tenía posibilidades de hacer aprobar por ser minoritario en el Parlamento, fuero para sus dirigentes y financiamiento para su trabajo.

Por todas estas razones, los Consejos Campesinos, si bien jugaron un papel importante en muchos lugares para unir a los campesinos,

y darles responsabilidades en las tareas de fijar las prioridades de expropiación y otras, no lograron tener el desarrollo y la importancia que se esperaba que ellos alcanzarían. Se establecieron Consejos Campesinos en más de la mitad de las comunes rurales del país (alrededor de 150) funcionando en algunas de ellas con extraordinaria importancia como elementos de participación democrática directa del campesinado de la comuna. Pero a menudo chocaban con la resistencia del aparato burocrático o con la lucha partidista que en definitiva los debilitaba como elementos de unidad y de representatividad amplia del campesinado.

En donde, en cambio, la participación campesina en el progreso de cambio agrario llegó a alcanzar un mayor desarrollo, fue entre las población campesina-indígena.

Existían agrupados en ciertas provincias del sur de Chile (Cautín, Malleco, Arauco, Bío Bío y Valdivia) unos 250 mil campesinos indígenas viviendo en reducciones desde fines del siglo XIX y comienzos del XX (época de la pacificación de Araucanía) donde ocupaban unas 600 mil hectáreas de tierra. Muchas de sus tierras les habían sido usurpadas en los primeros decenios del siglo XX mediante medios diversos, por los agricultores vecinos no indígenas (colonos de origen chileno o extranjero) y la mayor aspiración de los indígenas era la recuperación de estas tierras, además del término del estado de postergación y de opresión en que vivían como ciudadanos y como campesinos.

Una alta proporción de estos indígenas se había venido organizando en Asociaciones Mapuches y gracias a su labor y al apoyo del gobierno de la UP, no solo recuperaron en 1971 y 1972 muchos miles de hectáreas que les habían usurpado, sino que además se aprobó en el Parlamento una Nueva Ley Indígena elaborada fundamentalmente por las Asociaciones Mapuches (Ley 17.729, del 15 de septiembre de 1972), que daba instrumentos para un rápido mejoramiento del estado de miseria y de postergación en que las comunidades mapuche habían vivido hasta entonces. Este es, tal vez, uno de los poquísimos casos en la historia de Chile en que una nueva legislación surgía

primordialmente de la base social y en gran parte fue elaborada (a pesar de que en el Parlamento la oposición al gobierno la limitó bastante) por la base social interesada.

Donde en cambio, durante todo el gobierno de la UP, no fue posible definir y aplicar una política coherente, por las contradicciones políticas entre los partidos, fue en lo que respecta al sector de los pequeños agricultores no indígenas.

Balance del gobierno de la Unidad Popular

En resumen, puede decirse que el gran mérito histórico del gobierno de la UP en los 2 años y 9 meses que duró su experiencia fue terminar con el latifundio tradicional en Chile que venía desde la época colonial, y avanzar en la formulación de nuevos sistemas de organización más adecuados para el desarrollo de una sociedad campesina más solidaria e igualitaria. Dio también a los campesinos, especialmente a los más postergados, una importancia y una dignidad que nunca se les había reconocido anteriormente en la sociedad chilena.

Sus mayores errores fueron el desajuste que dejó producirse ante el aumento de sus disponibilidades alimenticias, limitadas por los factores internos y externos que hemos señalado, y la presión sobre el aumento del consumo derivada, en parte importante, de su política de remuneraciones del último período. Junto con ello, la incapacidad que la UP demostró para definir una política coherente frente al sector de los pequeños agricultores fue hábilmente aprovechada en su desmedro por los sectores de la burguesía.

En los demás aspectos de su programa, el golpe de Estado de septiembre de 1973 impidió que tuviera el tiempo suficiente para desarrollarlos.

La "vía marítima" al socialismo

El transporte marítimo de comercio exterior como límite geoeconómico de la Unidad Popular en el sistema-mundo capitalista, 1970-1973

Luis Garrido Soto

"Las mercancías no pueden ir por sí solas al mercado ni intercambiarse ellas mismas".

Karl Marx, *El capital*, volumen I.

"Dentro del ciclo del capital y de la metamorfosis mercantil que constituye una parte del mismo se lleva a cabo el metabolismo del trabajo social. Este metabolismo puede provocar el cambio de ubicación de los productos, su movimiento real de un lugar a otro".

Karl Marx, *El capital*, volumen II.

"La producción capitalista no puede existir, en modo alguno, sin comercio exterior. Pero si se supone una reproducción anual normal, en una escala dada, con ello se supone también que el comercio exterior sólo sustituye artículos locales por artículos de otra forma de uso o forma natural, sin afectar las relaciones de valor, y por tanto sin afectar tampoco las relaciones de valor con arreglo a las cuales las dos categorías –medios de producción y medios

> *de consumo– efectúan su intercambio recíproco, ni tampoco las relaciones entre capital constante, capital variable y plusvalor en que se puede descomponer el valor del producto creado por cada una de esas categorías. La introducción del comercio exterior en el análisis del valor del producto reproducido anualmente, pues, sólo puede confundir, sin contribuir con ningún factor nuevo ni al problema ni a su solución".*
>
> Karl Marx, *El capital*, volumen II.

Cuando se toca el papel del comercio exterior en la "vía chilena" al socialismo a menudo se lo reduce a la cuestión del descenso del precio del cobre, escasez de divisas, así como al incremento de importaciones sin el correspondiente aumento de las exportaciones lo cual ha llevado al agotamiento de las reservas internacionales del país y aumento de la deuda externa. El recorte de créditos externos –por parte de Estados Unidos– también ha sido recurrentemente mencionado. Ese desenlace ha sido comprendido como consecuencia impulsada por la orientación "keynesiana" del gobierno en que la redistribución hacia los sectores desposeídos de la población –por medio del incrementado gasto social a través del fisco, aumentos salariales y del empleo– tarde o temprano llevará a abordar los problemas de ahorro ya que la capacidad ociosa ofrece un techo de producción ampliado que puede utilizarse solo "una vez". Estos problemas han sido de sobra conocidos y analizados: hiperinflación, desabastecimiento, mercado ilegal, incertidumbre jurídica producto de las expropiaciones, entre muchos otros. En este artículo no pretendo hacer un repaso a la bibliografía respectiva, ni abordar el papel del comercio exterior desde el punto de vista de su impacto macroeconómico, los cuales han sido abordados reiteradamente (Nove, 1986 [1976]; De Vylder, 1976; Christophe-Kolm, 1981; Fermandois, 1985; Meller, 2016 [1996]; Salazar, 2003; Garrido, 2015). Lo único que se puede plantear al respecto es que, aunque el comercio exterior en este período representase entre 20 y 25% del PIB –al observar el gráfico 1– en contraste con el 40% a inicios de la década de 1990, no por eso significa que pueda ignorarse o que sea irrelevante. En cambio, lo que se busca es explicitar brevemente el

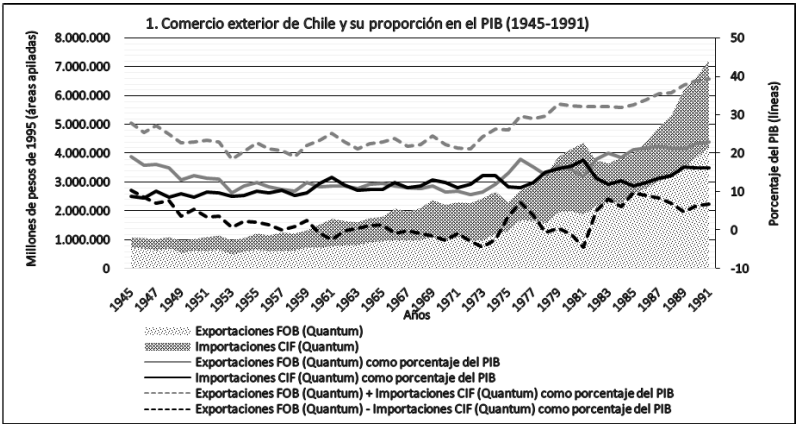
comercio exterior como a) una actividad *material* enraizado en el proceso de *transporte de mercancías* y, simultáneamente, como b) un sector económico *monopólico/estratégico* en el marco del sistema-mundo capitalista (Garrido, 2020).

A casi dos años de comenzada la "vía chilena" al socialismo, el presidente Salvador Allende aludía a complejos problemas económicos que aquejaban a Chile, tanto por las decisiones económicas del mismo gobierno como por la oposición (dentro y fuera de Chile). Los principales cuellos de botella en el ámbito del comercio exterior se debían a la *escasez de divisas*. Dentro de este se derivaron otros que concernían fundamentalmente a la dificultosa *movilidad* de las mercancías. Según él, "[l]a infraestructura de Chile está a tal grado subdesarrollada, que los puertos son casi incapaces de recibir el flujo de productos importados, los que, una vez en tierra, con gran esfuerzo encuentran el bodegaje suficiente". Allende (1972, p. 111) proseguía:

> En 1971, la considerable importación de alimentos destinada a satisfacer a una masa consumidora en expansión, se transformó en una prueba para la infraestructura, que terminó por mostrar sus serias deficiencias. El puerto de Coquimbo, por ejemplo, considerado como alternativa al de Valparaíso, es incapaz de permitir la descarga simultánea de dos barcos y el propio Valparaíso no está en condiciones de atender más de 11 barcos a la vez.

Entre las medidas a adoptar para paliar la situación del transporte de mercancías hacia Chile, al menos, Allende mencionaba "[l]a readaptación urgente de algunos puertos de provincias para la descarga de granos"; "reformas en la organización, mediante la cual se coordinen las tareas en los puertos y se define la prioridad de descarga y carga en casos de atochamiento"; y el "[e]studio minucioso y rápido de la mecanización de los puertos. Sobre esta materia ya se están instalando dieciocho nuevas grúas en Valparaíso" (1972, p. 115). Las cifras en el gráfico 2 muestran el creciente nivel de importaciones al país, pasando ser casi el doble, desde 5.429.000 en 1970 a 9.154.000 toneladas métricas en 1973 de mercancías desembarcadas en Chile. Las mercancías embarcadas en el país, no

obstante, mostraron la tendencia inversa, pasando de 12.293.000 en 1970 a 9.154.000 toneladas métricas en 1972 (el punto más bajo) para subir nuevamente desde 1973 con 9.947.000 toneladas métricas. La cantidad de tonelaje indica que era un aspecto fundamental en este proceso de cambio, tal como indicaba Allende, el cual no puede quedar desatendido.



Fuente: Juan Braun *et al.*, *Economía chilena 1810-1995: Estadísticas históricas*, PUC, 2000, p. 136.

Fuente: elaboración propia usando datos del *Anuario estadístico* de las Naciones Unidas (1948-1985) y *Boletín estadístico marítimo* de la Dirección General de Marina Mercante y Territorio Marítimo, DIRECTEMAR (1993).

Estructuras organizativas marítimas sistémico-mundiales y la economía política de los costes de transporte: conferencias marítimas, incoterms, y el "drawback"

A las pocas semanas de comenzado el gobierno –a mediados de diciembre de 1970– el capitán de la Marina Mercante Nacional, J. Roberto Parra Flores, escribió a Pedro Vuskovic, ministro de Economía, una escueta pero muy relevante carta titulada "Incidencia del comercio de invisibles en la economía del país (rubros fletes y seguros marítimos)". En apenas dos páginas, Parra Flores resume el panorama económico-mundial del transporte marítimo internacional de mercancías. ¿Cuáles eran los impactos que ese sector podría tener sobre el país? ¿Qué medidas podría adoptar el gobierno de Allende? De acuerdo con el capitán, los efectos consisten fundamentalmente "en una cuantiosa evasión de divisas, cercana a los 180 millones de dólares al año (m/m 1/3 del Presupuesto anual de divisas de la Nación) dineros pagados *indevidamente* [*sic*] a empresas extrangeras [*sic*], en Fletes y Seguros Marítimos, (Principales rubros del Comercio de Invisibles) ésto [*sic*] según informes estadísticos del Ministerio de Hacienda (Ministro S. Molina) y Armadores Nac. Publicados en El Mercurio de Valpso. el 16/6/67 y en el Boletín de CEPAL año 1966" (Parra, 1970, p.1). Para contrarrestar esto, Parra Flores llamaba a Vuskovic a fomentar el proyecto de ley llamado *Subsecretaría Técnica de Marina Mercante, Puertos y Pesca*. Con este el aparato estatal podría disponer todos los elementos relacionados al transporte marítimo de mercancías, específicamente con miras a: 1) "CONTROLAR, en beneficio del país, el Comercio de Fletes y Seguros Marítimos, que realizan las empresas Marítimas Nac. entre las cuales podemos citar Armadores Nac., Cámara Marítima de Ch., COVENSA, hoy SOQUIMIN, Empresa Marítima del Estado, etc., etc."; y 2) "ELUDIR, los controles sobre nuestro Comercio y Transporte Marítimos de ULTRAMAR, ejercidos por las Grandes Naciones Desarrolladas, por medio de las Organimos [*sic*] MONOPOLÍSTICAS de su dependencia,

denominados: *Conferencias Marítimas y Flotas de Bandera de Conveniencia*" (1970, pp. 1-2).

Las *conferencias marítimas* son colusiones de las principales compañías navieras mundiales, establecidas desde 1875 –fecha también especificada por Parra Flores– poco antes de la última ronda de expansión geográfica del sistema-mundo (Bergesen, 1980). Si bien han abarcado el 20% del *volumen* del comercio mundial, comprenden el 80% de su *valor* de modo que, al repartirse el mercado mundial de los envíos marítimos por rutas específicas (gracias a la mecanización de los medios de transporte), las compañías "han buscado proteger sus cuotas de mercado desde incursiones de forasteros quienes podrían desestabilizar los mercados de fletes al 'seleccionar' cargamentos lucrativos sin proveer servicios programados" (Cafruny, 1987, p. 54). Las *banderas de conveniencia* son regímenes legales –usado primero por Estados Unidos desde la década de 1920, y después por otros desde 1945– que permiten *disociar* la nacionalidad (bandera) de la propiedad de un buque (o empresa naviera) lo cual, en pocas palabras, ofrece mayores garantías de rentabilidad capitalista por medio de "(1) costes laborales más bajos; (2) reducción impositiva; (3) capacidad para evadir regulaciones de seguridad y ambientales; y (4) libertad de la intervención gubernamental para propósitos políticos, económicos, y militares" (Cafruny, 1987, p. 92). Las divergencias en cuanto a la primacía sobre la base de la *colusión mercantil* sobre rutas (conferencias marítimas) o de la *explotación diferencial* de la fuerza de trabajo marítima (banderas de conveniencia), se relacionan con las hegemonías *británica* basada en el "libre comercio" y *estadounidense* en la "libre empresa" respectivamente (Arrighi, 2014; McMichael, 1995). Es una característica *intra-centro* en cuyas querellas "regulación" *vis-à-vis* "libre competencia" las áreas periféricas tenían muy poco que incidir: Europa occidental sostenía que las banderas de conveniencia eran una amenaza al sistema de conferencias abogando por su regulación, mientras que con respecto a las conferencias "los Estados Unidos argumentaban que la regulación de las conferencias

promovía el libre comercio, mientras los europeos reclamaban que lo estaba destruyendo" (Cafruny, 1987, p. 100).

En este escenario, por tanto, era muy gravitante lo que implicaban los *costes de transporte* como parte íntegra del comercio mundial. Aquí son muy importantes los llamados Incoterms –o términos de comercio internacional– de los cuales los acrónimos FOB (*Free On Board*: libre a bordo) y CIF (*Cost, Insurance, and Freight*: coste, seguro, y flete), presentes en las estadísticas de comercio exterior, indican 1) hasta/desde dónde el proceso de *transporte* será ejecutado, y 2) la *distribución* de esos mismos costes por medio del flete (el precio de la mercancía transporte). La diferencia entre ambas es que FOB corresponde "a mercaderías puestas a bordo en el puerto de embarque" mientras que CIF indica que "la adquisición de la mercadería se efectúa colocada esta en puerto chileno de destino (Ej. CIF. Valpso.), o sea, coste neto de la mercadería más flete y seguro contratado por ellos, con valores estimados y que deben respetarse en la totalidad de la operación" (Durandeau, 1971, pp. 1-2). De esta forma, se ejecutarían compras usando FOB lo cual "nos permite controlar las salidas exactas de divisas para los pagos de fletes y seguros además de mantener invariable el valor FOB que corresponde al costo de mercadería puesta en puerto de embarque" (Durandeau, 1971, p. 2). Al usar FOB, por tanto, se fomentaría a la flota mercante *nacional* (tanto navieras privadas como estatales) para llevar las importaciones al país y, así, evitar la fuga de divisas a través de compañías foráneas lo cual sucedería utilizando CIF. No obstante, esta opción acarreaba otros dilemas, específicamente con la *paridad cambiaria* (entre el escudo chileno y el dólar estadounidense) puesto que las empresas navieras nacionales debían *competir* –de una u otra forma– con las extranjeras, especialmente en rutas hacia/desde destinos más lejanos. Esto obligaba ofrecer mejores condiciones de operatividad –especialmente a las compañías chilenas privadas– lo cual se manifestó en el asunto del *retorno de las divisas* (*drawback*) a los armadores nacionales. Pues, ya para la segunda mitad de 1971 esta situación se tornaba insostenible para las navieras chilenas.

Según lo destacado en el Memorándum N° 24 del Banco Central de Chile a la Subsecretaría de Transportes, el otorgamiento de *drawback* (reembolso) ha beneficiado a las empresas navieras foráneas puesto que antes "era de una paridad igual, esto es, retorno de divisas en el área de corredores" (1971, p. 1). Frente a esto, se barajaron tres alternativas. La *primera* era volver al sistema anterior en la que "armadores nacionales y extranjeros tenían una misma paridad cambiaria y que esta se encontraba en el área de corredores para el retorno de divisas" (1971, p. 1). La *segunda* era "nivelar a armadores nacionales y extranjeros a un tipo de cambio a determinarlo inferior naturalmente a E 28 –dándole además un drawback a los armadores nacionales" (1971, p. 3). Y la *tercera* fue la de "nivelar a los armadores nacionales y extranjeros a un mismo tipo de cambio pero inferior a E 28 por dólar y sin drawback" (1971, p. 4). No podré entrar en los detalles de cada opción en el documento, pero llama la atención por qué se eligió la primera (opción "A"), digna de citar (1971, p. 5) *in extenso*:

> Se estima que no es necesario redundar en lo expuesto en el Memorándum 22 que se adjunta en lo relativo a las necesidades que precisan las empresas navieras nacionales de obtener una paridad cambiaria para el retorno de sus divisas que sean suficientes para cubrir sus costos operacionales, ya que ello va íntimamente ligado al desarrollo de la Marina Mercante que es preocupación preferente del Supremo Gobierno y que a través de esta Subsecretaría ha dispuesto una política de protección y estímulo a las empresas navieras nacionales por la importancia que éstas tienen en el intercambio comercial de Chile, ya que no debe olvidarse que nuestro país paga anualmente una cantidad aproximada de los US$ 200.000.000, –y que el 98% de nuestro comercio exterior se realiza a través de las vías marítimas.

Más allá de la paridad cambiaria, el punto es que contar con una flota mercante nacional era crucial porque prácticamente *todo* el comercio exterior desde/hacia Chile transitaba por mar. En este sentido, la política de transporte marítimo del gobierno de la Unidad Popular

era un paso más en lo que ya se venía haciendo, desde la segunda mitad del siglo XX, que era fomentar el "nacionalismo de los envíos" (De la Pedraja, 1999, pp. 62-66). Esto quedó plasmado en las siguientes leyes: 12.041 (de 1956) la cual establece la reserva del cabotaje para buques chilenos; 12.846 (de 1958) que era la ley orgánica de la Empresa Marítima del Estado (EMPREMAR); y en el decreto 492 (de 1960) que reglamentaba el transporte marítimo de carga para servicio exterior, estipulando que el 50% del cargamento hacia/desde Chile debía reservarse a embarcaciones de bandera nacional.

Economía política de los medios de transporte: tonelaje, número de naves, y su distribución en las áreas de la economía

Para finales de 1971, el papel del transporte marítimo de comercio exterior quedó más claro dentro del plan sexenal de gobierno, que se resume en los siguientes puntos: 1) "Mayor independencia económica nacional"; 2) "Fomento de las exportaciones; 3) "Influencia directa del país en las decisiones de las conferencias marítimas"; y 4) "Mejoramiento de la balanza de pagos" (ODEPLAN, 1971, p. 166). Más allá de la política de desarrollo, ¿cuál era la capacidad de la flota mercante? Esto es más difícil de dirimir puesto que no se puede hacer un seguimiento continuo con la documentación disponible. Solo se pueden establecer las *condiciones iniciales*, así como las *inversiones* propuestas por el gobierno para ampliar sus capacidades a futuro. El *Resumen* sostiene lo siguiente: 1) la flota mercante nacional se componía de 23 buques, cuyo tonelaje de peso muerto (TPM) era de 386.200 toneladas; 2) los fletes que recibía eran de US$ 32.900.000, cuya incidencia en el total de fletes pagados por el país era del 17,5%; y 3) el tonelaje que transportaba ascendía a 1.900.000 toneladas que era el 11,6% del total (exportación e importación) (ODEPLAN, 1971, p. 171). En resumidas cuentas, las navieras *foráneas* percibían el 82,5% de los fletes pagados por Chile, y movilizaban el

88,4% del tonelaje de carga comercial del país. En cuanto a su estructura, la flota poseía 12 naves para *carga general* que se planeaba expandir a 18. Las rutas que cubrían, por orden de importancia decreciente, eran Europa (en importación), el Atlántico, los puertos de Estados Unidos en el Golfo de México y, por último, el cono sur de Sudamérica (Perú, Chile, Argentina, Uruguay, y Brasil). En cuanto a los *graneleros livianos*, la flota poseía seis naves de entre 15.000-20.000 TPM, una de 17.000 TPM y dos de 9.000 TPM; y entre cuyos productos transportaban trigo, maíz, abonos potásicos y carbón en importación, así como salitre, sal y concentrados de cobre en la exportación. En los *graneleros pesados y líquidos* el país contaba con un solo petrolero de 58.000 TPM el cual se usaría para transportar roca fosfórica desde Estados Unidos, petróleo desde Colombia, Venezuela, y el Golfo Pérsico por el lado de la importación, así como mineral de hierro hacia Japón por el lado de la exportación.

Ahora bien, si por el lado de la exportación el cobre era sumamente importante (siendo prácticamente el 80% de las mismas), lo mismo sucede con el petróleo por el lado de la importación. De acuerdo con el *Resumen*, las importaciones de crudo eran del orden de 3 millones de toneladas, distribuidas geográficamente en 1 millón de toneladas desde Colombia; 500 mil toneladas desde Venezuela; y 1,5 millones de toneladas desde el Golfo Pérsico. O sea, el 50% del petróleo importado provenía de los centros de producción más *distantes*, además resaltaba que en el futuro próximo las importaciones de dicho combustible "tendrán un notable incremento, ya que se prevé que alcanzarían niveles de 5 millones de toneladas para 1975 y 7 millones 500 mil para 1980" (ODEPLAN, 1971, p. 176). De ahí la necesidad de invertir para acrecentar la capacidad de transportarlo sobre todo para largas distancias (ODEPLAN, 1971, p. 177):

> Por la importancia que tiene para el país el contar con la máxima seguridad en el suministro de petróleo, es prioritaria la inversión en naves petrolero-metaleras. Sin embargo, cabe asegurarse de que las importaciones continuarán proviniendo del Golfo Pérsico, única ruta donde son factibles de operar estas naves. Este interrogante tiene aún mayor vigencia si se considera la fuerte expansión de la

> producción ecuatoriana de petróleo y la incidencia que tendrá para Estados Unidos la explotación de los ricos yacimientos de Alaska. Por otra parte, no puede dejar de mencionarse la posibilidad ventajosa en que quedaría Chile, dentro del marco del Pacto Andino, al tener un poder de negociación de 65 millones de dólares en petróleo, que es el valor que al precio actual tendría aproximadamente el crudo que se supone se importará en 1975 desde el Golfo Pérsico.

Es muy probable, que se optara por seguir importando el petróleo desde el Golfo Pérsico, a pesar de poder comprarlo desde puntos más cercanos en Colombia y Venezuela, por posibles problemas de circulación que implicase usar el Canal de Panamá a lo cual me referiré en breve. Con los cuatro nuevos petroleros-metaleros que pretendía obtener el gobierno al cabo del sexenio, podría transportar tanto la totalidad del petróleo importado, así como un 30% de las exportaciones de hierro. Dentro de esto mismo, además, tampoco se contempló "en una primera etapa de expansión de la flota metalera nacional mayores volúmenes de mineral de hierro debido a que los contratos que rigen la venta de este mineral hasta 1978, están suscriptos en términos FOB" (ODEPLAN, 1971, pp. 176-177). Las exportaciones de hierro hasta ese año, al menos, serían transportadas por navieras foráneas de modo que no era urgente contar con medios de transporte propios al respecto. El siguiente cuadro resume las inversiones proyectadas por el gobierno en materia de marina mercante.

Nuevas adquisiciones	**Inversiones en millones de dólares**	**Flete anual en millones de dólares**
8 cargueros tradicionales de 12.000 TPM, usados (o equivalentes)	36	9,8
2 graneleros de 15.000-20.000 TPM, nuevos	9	2
4 petroleros metaleros de 160.000-220.000 TPM, nuevos	120	35
Total: 14 naves con 946.600 TPM	165	46,8

Fuente: ODEPLAN, *Resumen del plan de la economía nacional 1971-1976*, p. 177.

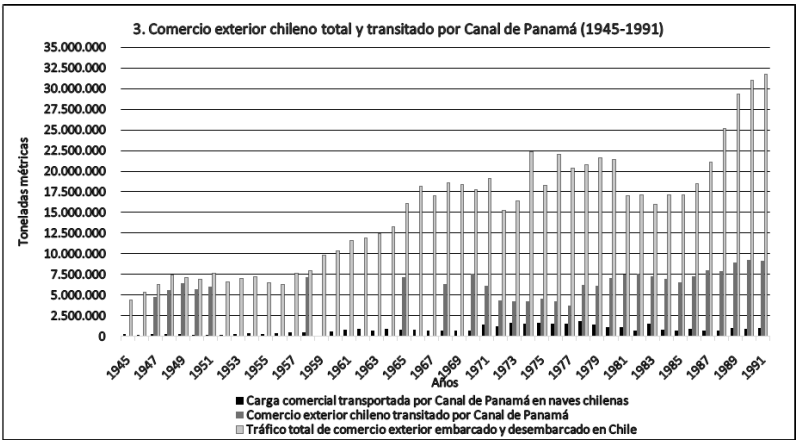
Para 1976, por tanto, la marina mercante estaría compuesta por 37 buques con una capacidad de 1.332.800 TPM. ¿Cómo era la estructura interna de la flota en función de las áreas de la economía, es decir, las Áreas de Propiedad Social, Mixta, y Privada? Esto también es complejo de delimitar de forma continua. En un documento del primer cuatrimestre de 1972 sobre las áreas, se clarifica que tanto la Empresa Marítima del Estado (EMPREMAR) como la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI) pertenecen al APS ya que el Estado las controla en un 100% (Lizana y Reyes, 1972, p. 96). No obstante, esto no quiere decir que el Estado gozase el monopolio exclusivo del transporte marítimo de servicio exterior como sí sucedía en los países del bloque socialista (URSS, Yugoslavia, Cuba, entre otros). Lo que sí nos indica el *Informe económico anual 1972*, en su versión preliminar, publicado en junio de 1973 por ODEPLAN es el siguiente panorama. Del total de la flota mercante nacional de 400.358 TPM distribuido en 24 naves, EMPREMAR controlaba 96.400 TPM y 7 buques; es decir, el Estado controlaba el 24% del tonelaje de peso muerto nacional y el 29% de las naves disponibles. Por el contrario, tanto el 76% del tonelaje de peso muerto como el 71% de las naves disponibles pertenecían al área privada. En esta última área, la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) era la que tenía primacía controlando 156.006 TPM distribuidos en 12 barcos; es decir, prácticamente el 40% del tonelaje de peso muerto y el 50% de los buques. Después estaba la Sociedad de Navegación Petrolera (SONAP), controlando 127.132 TPM distribuidos en 2 buques; es decir, controlaba el 31,7% del tonelaje de peso muerto, aunque solo el 8,3% de las naves disponibles de la flota mercante nacional (ODEPLAN, 1973, p. 244). Dicho sea de paso, la meta de tener 37 buques distaba bastante, faltando un tercio para cumplir la meta sexenal y, sobre todo, en el tonelaje creciendo solo en un 0,04%. Es de suponer que estas compañías fuesen un dolor de cabeza para el gobierno, así como una potencial amenaza al funcionamiento del comercio exterior y, con ello, para el programa de transformaciones en su conjunto, pero los documentos disponibles no permiten ahondar en ello.

Geopolítica de las rutas marítimas: el impacto del Canal de Panamá en el comercio exterior

Un último aspecto por considerar es el impacto del Canal de Panamá para la ejecución del comercio exterior del país. Esto es relevante porque dicho punto nodal interoceánico, el cual une/separa los océanos Atlántico y Pacífico, se encontraba bajo la autoridad/soberanía de Estados Unidos desde su inauguración, en 1914, hasta que finalmente la autoridad le fue transferida a Panamá en 1999. Ahora bien, prácticamente desde el inicio del gobierno, Estados Unidos impuso obstáculos a Chile en el uso del pasaje interoceánico. El 22 de diciembre de 1970, EMPREMAR notificó al gobierno de las restricciones en el transporte de petróleo (y sus derivados) por el Canal de Panamá a los países socialistas las cuales incluirán en el futuro a Chile (Rivas, 1970, p. 4):

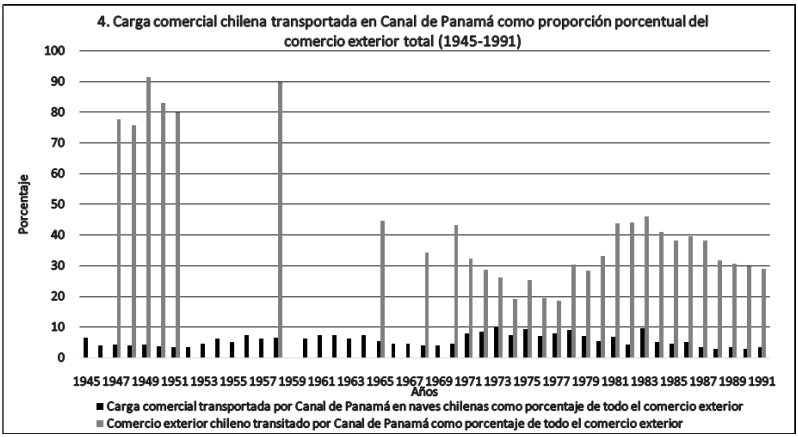
> Ninguna exportación de petróleo o productos del petróleo (incluyendo aquellos usados como combustible de rancho) enumerados en el párrafo (4) más abajo puede ser hecha bajo esta licencia general en una nave extranjera de 500 toneladas grueso registradas o más, zarpando de Estados Unidos para uso a bordo de tal nave si la nave (i) ha hecho escala en un puerto bajo control Comunista del Lejano Oriente ("Puerto bajo Control Comunista del Lejano Oriente" significa un puerto en cualquiera de los siguientes destinos: (1) China, incluyendo Mongolia Interior, las provincias de Tsinghai y Sikang, Sinkiang, Tibet, y Manchuria (incluyendo el anterior territorio Arrendado de Kwantung, la actual Área de la Base Naval de Puerto Arthur y Provincia de Liaoning); pero excluyendo Mongolia Exterior y República de China (Taiwang [*sic*]) (Formosa); (2) Áreas de Control Comunista de Viet-nam; y (3) Corea del Norte) durante los 180 días inmediatamente precedentes a la fecha en la cual tales artículos tienen que ser cargados a bordo de la nave; (ii) hará escala en un puerto bajo control comunista del Lejano Oriente dentro de los 120 días cualquier artículo conocido por el dueño, capitán o agentes para ser destinado directa o indirectamente a estos puertos, a menos que los artículos estén cubiertos por una licencia de exportación extendida por una agencia del gobierno de los Estados Unidos; o (iv) se topa con las restricciones de registro en (3) más abajo.

Esas eran las disposiciones emitidas por la Autoridad del Canal citadas por EMPREMAR. Los efectos de dicha medida sobre Chile serían las siguientes. La *navegación* era perjudicada porque "la sanción se impone no solo sobre la nave sino que también sobre el propietario de estas y es así como ninguna de las naves bajo su control pueden recalar en puertos de Estados Unidos y para el caso del paso del Canal de Panamá, a dichas naves solo se las atiende para el cruce del canal pero no pueden abastecerse de agua, combustible, víveres, lubricantes, repuestos ni hacer ninguna faena de carga, descarga y reparaciones" (Rivas, 1970, p. 1). En cuanto a las *mercancías*, esta afectaba "las compras de fosfato y granos que efectúan el Banco del Estado y la Empresa de Comercio Agrícola en USA" (Rivas, 1970, p. 1). Para contrarrestar dichas medidas, el director de EMPREMAR, Humberto Rivas Burgos, sugería al gobierno intentar aminorar las sanciones solicitando formalmente "eliminar o tal vez reducir las prohibiciones hacia nuestras naves o bien, limitar estas a solo aquellas que recalen en Cuba" (Rivas, 1970, p. 2).



Fuente: elaboración propia usando datos del *Anuario estadístico* de Naciones Unidas (1948-1985), el *Boletín estadístico marítimo* de DIRECTEMAR (1993), el *Annual Report of the Governor of the Panama Canal* (1945-1951), el *Annual Report*

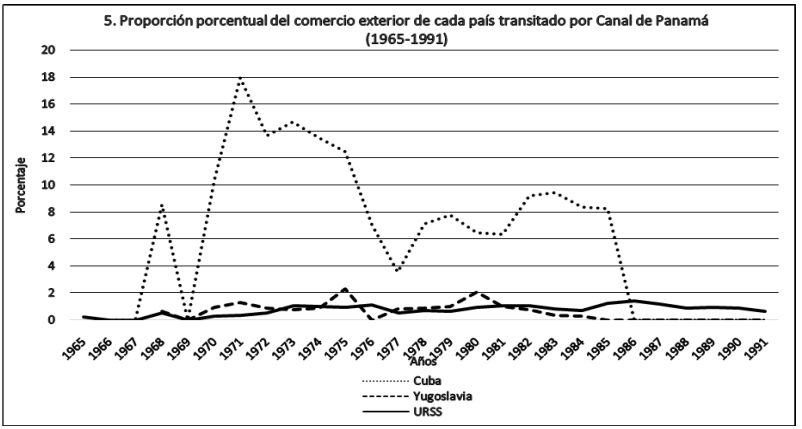
Panama Canal Company (1958-1979), y *Annual Report Panama Canal Comission* (1980-1991).



Fuente: elaboración propia usando datos del *Anuario estadístico* de Naciones Unidas (1948-1985), el *Boletín estadístico marítimo* de DIRECTEMAR (1993), el *Annual Report of the Governor of the Panama Canal* (1945-1951), el *Annual Report Panama Canal Company* (1958-1979), y *Annual Report Panama Canal Comission* (1980-1991).

El subsecretario de Transportes, Hernán Morales Garfias, le dio un portazo a la sugerencia afirmando que "implicaría una abdicación en la política de nuestro país y que contradeciría la doctrina aprobada por Chile de autodeterminación de los pueblos" proponiendo, en cambio, "que nuestra representación en Washington como en la OEA reivindiquen el derecho de nuestro país a comerciar libremente con todos los países del mundo y que en esta perspectiva, se propone abrir rutas marítimas y de todo orden con la República hermana de Cuba" (1971, pp. 1-2). Estas restricciones durarían al menos 4 meses contra Chile, desde enero hasta abril de 1971. Lo más probable es que esta clase de sanciones se extendieran temporalmente, aunque falta documentación que acredite una afirmación de este tipo. No obstante, más allá de esta sanción en particular, lo cierto es que Chile dependía bastante del Canal de Panamá, si bien de forma decreciente desde mediados del siglo XX (gráficos 3 y 4). Según la

información disponible, durante la década de 1950 prácticamente el 90% del comercio exterior transitaba por el canal interoceánico, mientras que desde mediados de la década de 1960 dicho nivel fue descendiendo hasta llegar a 25% y 30% durante la Unidad Popular para volver a subir, durante la dictadura militar, si bien a un nivel menor al 45%. Además, poca cantidad de la carga comercial se movilizaba en naves de bandera chilena, subiendo levemente también durante el gobierno de Allende hasta llegar al 10% de la misma. ¿Qué muestran estas cifras? En primer lugar, que Chile tuvo que utilizar *rutas alternativas* al Canal de Panamá para desplazar su comercio exterior –desde el Atlántico al Pacífico y viceversa– lo cual conllevó, en segundo lugar, que el tiempo de circulación física se extendió de forma que el comercio exterior funcionó con una *rotación más lenta* exacerbando, así, los conocidos cuellos de botella dentro del país. La documentación disponible no permite aseverar que el pueblo panameño, o los trabajadores del Canal de Panamá, protestasen contra las disposiciones de Estados Unidos, a través de la autoridad del Canal; ni que el resto de los países latinoamericanos se opusieran a la restricción, a través de la OEA u otras instancias intergubernamentales, expresando solidaridad a Chile dado el "latinoamericanismo" del gobierno de Allende.



Fuente: elaboración propia usando datos del *Anuario estadístico* de Naciones Unidas (1965-1985), *Review of Maritime Transport* (1986-1991), el *Annual Report Panama Canal Company* (1968-1979), y *Annual Report Panama Canal Comission* (1980-1991).

Al comparar los niveles de Chile con algunos países del bloque socialista –gráfico 5– se observa que a medida que los países se ubican más al Este, *menor* es la utilización requerida del Canal de Panamá, mientras que los situados más al Oeste, *mayor* es su empleo. De los tres países en el gráfico, Cuba es el que tiene el nivel más alto, especialmente en la primera mitad de la década de 1970 entre 18% en 1971 y 12,5% en 1975 respectivamente. El año más bajo con 3,6% fue 1977 pero posteriormente hasta solo el 10% de su comercio exterior transitaba por el Canal de Panamá. Al contrario, el comercio exterior transportado por vía marítima tanto de Yugoslavia como de la URSS oscilaba entre el 1% y poco más de 2%. Es probable que sea por su ubicación geográfica bastante *distante* del Canal de Panamá lo cual permite utilizar rutas *alternativas* hacia/desde otros puntos del mercado mundial, aunque también –en calidad de argumento subordinado– la enorme extensión territorial (sobre todo de la URSS) también permite no depender tanto del comercio exterior e, *ipso facto*, del Canal de Panamá. En cambio, es muy probable que tanto para Yugoslavia como para la URSS (y los demás países del bloque socialista emplazados en la masa terrestre eurasiática) el Canal de Suez haya sido más gravitante para la circulación de su propio comercio exterior tanto *separadamente* como *bloque*, ya que separa/une el Norte con el Sur o, más precisamente, el océano Atlántico (a través del Mediterráneo) y el océano Índico. Eso sí, el Canal de Suez no se encontraba bajo el control de Estados Unidos ni de alguna (otra) potencia del centro del sistema-mundo, sino de Egipto, lo cual implicaba quizá condiciones más favorables para el bloque socialista, aunque eso es harina de otro costal en el marco de este artículo. Lo importante es considerar que el mercado mundial y el comercio exterior no son sitiales ajenos a la liberación nacional ni al conflicto de clases. La reducción de la "fricción de la distancia" gracias a la progresiva mecanización de los medios de transporte no elimina dichos procesos, sino que los reproduce en dicha esfera. La actual "guerra comercial" entre Estados Unidos y China, así como la incautación de buques iraníes o de otros países

–con dirección a Venezuela– por parte de Estados Unidos, son claras evidencias de la pertinencia de este tema.

Reflexión final provisoria: el control de los flujos de comercio exterior en perspectiva sistémico-mundial

Por desgracia, la desproporción atribuida –dentro del *corpus* de la teoría marxista– casi unilateralmente a la "esfera de la producción" en desmedro de la "esfera de la circulación" impide expandir la visión a ámbitos que podrían ser tanto, o incluso más, gravitantes que los analizados hasta el momento en la "vía chilena" al socialismo. Solo véanse los epígrafes de Marx en *El capital* (1975, 1976a, 1976b), sobre todo el tercero referente al papel comercio exterior en particular dentro del modo de producción capitalista, si bien empíricamente esencial pero teóricamente irrelevante (al menos en lo que al análisis del valor concierne). De este modo, la esfera de la circulación –en la que tanto los respectivos procesos de intercambio y transporte toman lugar– no debiera considerarse solamente como un mero factor "interviniente" que solo redunda en una mayor *flexibilidad* –o incertidumbre, si se quiere– a la cuestión de las proporciones "adecuadas" de inversión entre los Departamentos I (medios de producción) y II (medios de consumo), ya que "[a]l traer al foco el hecho básico de que la inversión no solo suma a la capacidad sino que también presupone un cierto tamaño y estructura, el constructo de los dos sectores le inyecta un elemento de realismo en nuestras nociones sobre las velocidades plausibles (o más bien sobre tasas plausibles de cambio en la velocidad) de los procesos de acumulación" (Erlich, 1967, p. 612). Esta cuestión, consiguientemente, no se agota en la mera movilidad espacial de los productos, sino que esta misma movilidad es parte del circuito del capital (industrial) de forma que determinadas *fracciones de capital* de una forma u otra la controlaban y, así, limitaban el proceso de transformaciones conocido como la "vía chilena" al socialismo

a través de la *concentración y centralización* del capital dedicado al tráfico de mercancías dentro del comercio a larga distancia internacional –que suele ser (aún) mayoritariamente por vía marítima– a través de *buques*, *puertos* así como *corredores interoceánicos*.

Sin embargo, esto tampoco se agota en la mera nacionalización del comercio exterior y de los medios de transporte para ese cometido lo cual significa el establecimiento de un monopolio estatal en dicho sector de la economía. Esto implica también tomar en cuenta a la *fuerza de trabajo* dentro de esta industria, tanto en el aspecto económico (clase "en sí") como en el político (clase "para sí") y aquí las cosas podrían volverse mucho más complejas. Lo complejo aquí, por tanto, no era que únicamente debía haber una cierta *coincidencia* entre el Estado y la clase trabajadora dentro de la industria del transporte marítimo en el objetivo de formar un socialismo "en un solo país" en contra de la burguesía monopólica (tanto nacional como extranjera). Lo realmente complejo es que el régimen jurídico *extraterritorial* para los trabajadores marítimos establecido con las "banderas de conveniencia" no solamente socavaría los múltiples "nacionalismos de los envíos" de los países socialistas; el asunto es que los trabajadores marítimos que se opondrían a la existencia de las banderas de conveniencia no tendrían por qué *coincidir políticamente* con los trabajadores marítimos pertenecientes a las estructuras sindicales/políticas de los países en "vías" al socialismo. Si bien, los marineros se han organizado por medio de la formación de la International Transport Workers' Federation (ITF) fundada en 1896 con la cual, al menos, el "internacionalismo proletario" se ha puesto al día organizativamente con el alcance sistémico-mundial del capitalismo (Hopkins, 1977; Robinson, 2013 [2004]); no obstante, la ITF corre el riesgo de *reproducir* los típicos conflictos político-económicos en el seno del capitalismo histórico. Es decir, la ITF podría replicar las posiciones entre las áreas/países que exportan *capital vis-à-vis* las áreas/países que exportan fuerza de trabajo de modo que las principales discusiones reflejarían disputas de poder geoeconómico nacional

en torno a "oportunidades de empleo, derechos de representación sindical y políticas económicas" (Koch-Baumgarten, 1998, p. 380).

Referencias

Allende, S. (1972). Los cambios revolucionarios y el desarrollo económico chileno. *Revista de la Universidad Técnica del Estado*, 9, Julio-agosto.

Annual Report of the Governor of the Panama Canal (1945-1951).

Annual Report Panama Canal Comission (1980-1991).

Annual Report Panama Canal Company (1958-1979).

Arrighi, G. (2014). *El largo siglo XXI: dinero y poder en los orígenes de nuestro tiempo*. 2ª edición. España: Akal Ediciones.

Banco Central de Chile. (1971). *Memorándum N° 24*, 6 de septiembre, Subsecretaría de Transportes, Archivo Nacional de la Administración.

Bergesen, A. (1980). Cycles of Formal Colonial Rule en T. K. Hopkins e I. Wallerstein (eds.). *Processes of the World-System.* Sage Publications, pp. 119-126.

Braun *et al*., J. (2000). *Economía chilena 1810-1995: Estadísticas históricas.* Santiago: Pontificia Universidad Católica.

Cafruny, A. W. (1987). *Ruling the Waves: The Political Economy of International Shipping*, Berkeley: University of California Press.

Christophe-Kolm, S. (1981). *La transición socialista.* Barcelona: Oikos-Tau.

De la Pedraja, R. (1999). *Latin American Merchant Shipping in the Age of Global Competition.* Santa Bárbara (CA): Greenwood Press.

De Vylder, S. (1976). *Allende's Chile: The Political Economy of the Rise and Fall of the Unidad Popular.* Nueva Yrk/Londres: Cambridge University Press.

DIRECTEMAR. (1993). *Boletín estadístico marítimo*.

Durandeau Oyarzún, R. (1971). *Importaciones en valores FOB. y CIF.* 19 de marzo, Subsecretaría de Transportes. Archivo Nacional de la Administración.

Erlich, A. (1967). Notes on Marxian Model of Capital Accumulation. *The American Economic Review*, 57 (2), 599-615.

Fermandois, J. (1985). *Chile y el mundo, 1970-1973: la política exterior del gobierno de la Unidad Popular y el sistema internacional.* Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Garrido Soto, L. (2015). *La "vía chilena" al socialismo (1970-1973): Un itinerario geohistórico de la Unidad Popular en el sistema-mundo.* Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Garrido Soto, L. (2020). Space, Transport, and the World-Market: Maritime Transportation, Freight Rates, and the Global Control of Foreign Trade Flows in the Capitalist World-System, en E. Mielants y K. Salavei Bardos (eds.). *Economic Cycles and Social Movements: Past, Present, and Future*, Nueva York: Routledge, pp. 96-127. [Hay versión traducida al español en *Revista Izquierdas*, 49, septiembre 2020].

Hopkins, T. K. (1977). Notes on Class Analysis and the World-System, *Review*, I (1), Fernand Braudel Center, pp. 67-72.

Koch-Baumgarten, S. (1998). Trade Union Regime Formation Under the Conditions of Globalization in the Transport Sector: Attempts at Transnational Trade Union Regulation of Flag-of-Convenience Shipping. *International Review of Social History*, 43 (3), 369-402.

Lizana, L. y A. Reyes. (1972). Estructura actual del área de propiedad social. *Nueva economía*, 2, Enero-abril, ODEPLAN-Editorial Universitaria.

Marx, K. (1975). *El capital*, tomo I, Vol. 1. México DF: Siglo XXI Editores.

Marx, K. (1976a). *El capital*, tomo II, Vol. 4. México DF: Siglo XXI Editores.

Marx, K. (1976b). *El capital*, tomo II, Vol. 5. México DF: Siglo XXI Editores.

McMichael, P. (1995). The New Colonialism: Global Regulation and the Restructuring of the Interstate System, en D. A. Smith y J. Böröcz (eds.), *A New World Order? Global Transformations in the Late Twentieth Century.* Santa Bárbara (CA). Greenwood Press, 1995, pp. 37-56.

Meller, P. (2016) [1996]. *Un siglo de economía política chilena (1890-1990)*, 2ª edición. Chile: Uqbar Editores.

Morales Garfias, H. (1971). *Nuevas rutas marítimas a Cuba y prohibición impuesta por Estados Unidos*. 6 de enero. Subsecretaría de Transportes, Archivo Nacional de la Administración.

Naciones Unidas. *Anuario estadístico* (1948-1985).

Nove, A. (1986) [1976]. The Political Economy of the Allende Regime, en *Socialism, Economics and Development.* George Allen & George Ltd, pp. 3-29.

ODEPLAN. (1971). *Resumen del plan de la economía nacional 1971-1976: Preparado para discusión popular*, noviembre, ODEPLAN-Editorial Universitaria.

ODEPLAN. (1973). *Informe económico anual 1972*, junio. ODEPLAN-Editorial Universitaria.

Parra Flores, J. R. (1970). *Incidencia del comercio de invisibles en la economía del país (rubros fletes y seguros marítimos).* 14 de diciembre de 1970, Subsecretaría de Transportes, Archivo Nacional de la Administración.

Rivas Burgos, H. (1970). *Empresa Marítima del Estado.* 22 de diciembre, Subsecretaría de Transportes, Archivo Nacional de la Administración.

Robinson, W. I. (2013) [2004]. *Una teoría sobre el capitalismo global: Producción, clase y Estado en un mundo transnacional.* México DF: Siglo XXI Editores.

Salazar, G. (2003). *Historia de la acumulación capitalista en Chile (Apuntes de clase).* Santiago: Lom ediciones.

Revolución chilena y batalla de la producción agraria

Sabotajes patronales y estímulos al trabajo campesino

Joana Salém Vasconcelos

"El cobre es el sueldo de Chile, la tierra es el pan".

Salvador Allende, 1971.

Introducción

"En Chile de Allende, las revoluciones verde y roja son ahora vistas como interdependientes, y poder y producción como inseparables", escribieron Cristóbal Kay y Peter Winn (1972) en el segundo año de gobierno de la Unidad Popular (UP) (p. 22). La batalla de la producción agraria fue uno de los principales desafíos para la revolución chilena puesta en marcha con la elección de Salvador Allende en 1970. El gobierno popular no ahorró esfuerzos para dialogar con el campesinado sobre el carácter imperioso de su trabajo, del cual

dependía la alimentación de todos los chilenos y la estrategia de desarrollo de la revolución.

Se suponía que el esfuerzo laboral campesino, productor del "pan de Chile", permitiría el incremento de las condiciones de vida de todos los trabajadores del país, abriendo camino a tres procesos socioeconómicos simultáneos: primero, la reducción de precios de los alimentos; segundo, la disminución de los subsidios fiscales para fijar estos precios; y tercero, la liberación de divisas usadas con importaciones agroalimentarias en un contexto de declive del precio del cobre, lo que mitigaría déficits comerciales y crearía reservas presupuestarias para comprar bienes de capitales y hacer inversiones sociales. Evidentemente, los campesinos no eran los únicos responsables por el aumento de la producción en la vía chilena al socialismo. Cada categoría de trabajadores tenía su responsabilidad a cumplir. Sin embargo, la disciplina laboral campesina era un eslabón indispensable para que se efectivaran algunas de las principales promesas revolucionarias.

En abril de 1971, Allende dijo: "iniciamos una Campaña de Producción Agropecuaria, cuyo éxito o fracaso dependerá de los compañeros campesinos, que deben discutir el problema y fijar sus metas de producción de alimentos para abastecer el país". Y prosiguió: "No son los campesinos, ni el gobierno, ni la Unidad Popular los que abandonan sus responsabilidades productivas para abastecer a los chilenos" (*El Siglo*, 12 abril, 1971). El gran desafío revolucionario de la UP era conciliar la batalla de la producción agropecuaria con el proceso expropiatorio más acelerado de la historia chilena, que modificaba profundamente las relaciones laborales en el campo.

Como advirtieron Jacques Chonchol (1964) y Solon Barraclough (1970, 1971), era inevitable que la alteración estructural del régimen de tenencia de tierras generase desorganización productiva. En el caso de la revolución chilena, 5,3 millones de hectáreas fueron expropiadas en 20 meses (Barraclough y Fernández, 1974: 75) y el latifundio (propiedades mayores que 80 *hectáreas de riego básico*) fue eliminado en junio de 1972. Los 9 millones de hectáreas del sector reformado (sumándose las

expropiaciones del gobierno anterior) fueron sometidas a un sistema laboral nuevo, lleno de indefiniciones e incertidumbres.

Aunque la reforma agraria incorporara a la producción una gran cantidad de tierras ociosas de los latifundios, las nuevas relaciones sociales de trabajo no se estabilizarían automáticamente. Menos aun considerando que el proceso expropiatorio era el resultado de luchas sociales, tomas y efervescencia popular, alterando en definitiva la experiencia de vida de los trabajadores y su percepción sobre su propio trabajo. Los desafíos no paraban ahí. Había que considerar la actividad de las fracciones sediciosas de la clase propietaria rural, que realizaban sabotajes cotidianos a la producción. Dicho de otro modo, en el trienio, la tensión de clases en el campo estaba presente en cada centímetro de tierra.

Este artículo analiza los desafíos de la batalla de producción agraria durante el gobierno de la UP en una narrativa con tres partes: la primera trata de las actividades de sabotaje patronal a la producción agropecuaria y la intensificación de la lucha de clases en el campo; la segunda aborda los desafíos de la organización laboral campesina y de los sistemas de remuneración en el sector reformado; y la tercera, el rol del estímulo moral y del trabajo voluntario en la batalla de la producción, una estrategia movilizadora de alianzas entre trabajadores urbanos, estudiantes y campesinos, que intentó compensar deficiencias en los estímulos materiales al trabajo colectivo. Por último, están las consideraciones finales que sintetizan las tensiones entre la emancipación social del campesino y las exigencias de la productividad en la revolución.

Sabotajes patronales y lucha de clases en el campo

Desde 1967, con la aprobación de las leyes de reforma agraria y sindicalización campesina, los propietarios demostraban creciente agresividad. Antes de las elecciones de 1970, fueron inúmeras situaciones de violencia propietaria contra el campesinado y los funcionarios de la reforma agraria. Para poner ejemplos, en enero de 1968, un patrón en Longaví atacó a balazos a dos funcionarios del Instituto de Desarrollo

Agropecuario (INDAP) que visitaban su fundo para asesorar campesinos a crear un sindicato y golpeó a los trabajadores (*La Nación*, 1968, 25 enero). En La Ligua, mismo año, los propietarios de la hacienda Santa Marta de Longotoma bloquearon caminos para inviabilizar reuniones de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) con campesinos; un mayordomo golpeó a pedradas a un trabajador y los patrones cortaron el agua de los campesinos (*La Nación*, 1968, 5 marzo). En 1970, dos asesinatos fueron emblemáticos de las tensiones de clase. En abril, la muerte de Hernán Mery, funcionario de la CORA, mientras expropiaba un fundo, conmovió la sociedad chilena (Avendaño, 2017, p. 316). En julio, el líder mapuche Moisés Huentelaf fue asesinado por propietarios durante una *corrida de cerco* en Cautín (Marín, comunicación personal, 20/04/2017).

Los campesinos respondieron a la violencia patronal con organización sindical, huelgas y tomas.

Sindicalización Campesina, Huelgas y Tomas (1967-1973)

Año	Campesinos sindicalizados	Huelgas	Tomas
1967	50.309	693	9
1968	71.721	648	26
1969	103.643	1.127	148
1970	140.293	1.580	456
1971	253.531	1.758	1.276
1972	279.628	796	307
1973	313.700	316	–

Fuentes: Loveman, 1976, p. 264; Saavedra, 1975, p. 205; Huerta, 1986, p. 337; Gómez, 1981, p. 11; Gómez, 2002.

El triunfo de Salvador Allende fue impulsado, entre otras fuerzas, por la exigencia campesina de aceleración de la reforma agraria. Rápidamente, la batalla de la producción anunciada por Allende se transformó en un eje clave de la guerra política. El sabotaje fue una de las estrategias patronales para frenar la revolución, crear un

clima de caos económico y promover la "profecía autorrealizable" del desabastecimiento. Entre 1970 y 1973, el sabotaje actuó en tres frentes: el trabajo directo de dañar los cultivos; los partidos de oposición suprimiendo presupuestos de las instituciones del agro responsables del fomento productivo; y la militancia de denuncia contraria al sector reformado, que acusaba la reforma agraria de arruinar la producción. Veremos algunos ejemplos a continuación.

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) denunciaba las tomas como causantes del caos productivo en Cautín. Aunque los partidos de izquierda divergían sobre las tomas, unieron voces para defender su capacidad de aumentar la producción. Cuando el Ministerio de Agricultura (Minagri) se instaló en Temuco, Chonchol "desmintió contundentemente una serie de falsedades diseminadas por los latifundistas (...) de que la aplicación de la ley de reforma agraria significaría una inevitable crisis de productividad" (*El Siglo*, 1971, 9 febrero). El ministro garantizaba que las cosechas marchaban bien en la Araucanía durante el *Cautinazo*. También aseguraba la "óptima producción lechera de Temuco" (ídem), demostrando que ni la reforma agraria, ni las tomas auténticamente campesinas generaban crisis productiva.

Luego, autoridades de Santa Cruz (O´Higgins) denunciaron que un latifundista en Chépica había provocado un incendio en su propio cultivo de trigo (*El Siglo*, 1971, 12 marzo). En el mismo mes, centenas de trabajadores rurales de la provincia de Santiago se reunieron para confrontar el sabotaje patronal, junto con solicitar apoyo de las confederaciones y del gobierno (*El Siglo*, 1971, 13 marzo). El gobierno alertaba que "ante el avance rápido, pero profundo y científico (sic) de la reforma agraria los latifundistas han respondido con la disminución de la superficie destinada a la producción" (*El Siglo*, 1971, 3 abril).

En abril, la Federación Provincial Campesina "Por la Razón o la Fuerza", dirigida por Juan Rubilar y Sergio Ergueta (candidatos a regidores por la Democracia Cristiana, DC) provocó una serie de tomas en Llanquihue, en "una campaña sistemática para crear alarma y

dar la impresión de una situación caótica en el país (...) y dañar la imagen de la UP", denunció el Subsecretario del Interior (*El Siglo*, 1971, 5 abril). Fueron 51 fundos tomados por la "derecha de la DC" para crear un "caos artificial" por medio del sabotaje productivo. "En un solo día, hicieron experimentar a la producción lechera una baja de 45 mil litros, lo que provocó incluso el hecho de que el Hospital Regional de Puerto Montt careciera de este alimento imprescindible", registraron (*El Siglo*, 1971, 7 abril).

Otros sabotajes patronales ocurrieron como "autosabotaje". En Buin, nuevos incendios de cultivos fueron provocado por sus dueños (*El Siglo*, 1971, 1 diciembre). En Coltauco (O'Higgins), el propietario Edgardo Schmutzer soltó 70 vacas y caballos para pastar durante días en su plantación de trigo. La destrucción del cultivo representaba el consumo de pan de 240 personas durante un año (*La Nación*, 1972, 12 enero). Hubo casos en que los propietarios de reservas patronales soltaron sus animales para pastar dentro de asentamientos y Centros de Reforma Agraria (CERA) en la noche, destruyendo el trabajo colectivo.

Algunos funcionarios de la CORA también fueron acusados de sabotaje, aunque minoritarios. Dirigentes campesinos del asentamiento Unión Libertad, en Casablanca, pidieron ayuda al Minagri pues fueron hostilizados por funcionarios de la CORA de la DC: "nos cortaron el agua, dejándonos sin riego 50 cuadras de papas, a punto de perderse". Además, recusaban créditos a 250 campesinos filiados a Ranquil en Valparaíso (*El Siglo*, 1970, nov).

Desde principios de 1971, los sabotajes patronales movilizaron autoridades máximas del gobierno: "el plan de sabotaje a la producción agrícola, lanzado por el PN y la derecha de la DC fue denunciado ayer en una conferencia de prensa ofrecida por las más altas autoridades del agro, encabezadas por el ministro Chonchol y los dirigentes agrarios de los partidos de la UP", noticiaba *El Siglo* (1971, 25 de marzo). El ministro anunciaba el Plan de Producción Agraria 1971-1972 como prioridad absoluta del gobierno y convocaba una campaña para frenar el sabotaje.

El poder de consumo de los trabajadores urbanos crecía rápidamente, generando aumento de la demanda alimentaria y una incipiente inflación, contenida con subsidios. El gobierno popular convocaba a los campesinos, junto a los pequeños y medios propietarios, los trabajadores de la CUT, los pescadores, los estudiantes voluntarios, los profesionales del agro y hasta los latifundistas remanentes a la batalla de la producción agraria: "todos van a trabajar", anunciaba (ídem).

A pesar de la tensión productiva, a fines de 1971 predominaba el optimismo del gobierno sobre la agricultura. La productividad agraria había crecido. Sin embargo, la percepción sobre la oferta de alimentos se vio afectada por el crecimiento del consumo, en función de los aumentos salariales, mejorías en niveles de ingreso, reducción del desempleo y otras políticas sociales. Las familias pobres gastaban más del 50% de sus ingresos en alimentos (Gómez y Ribeiro, 1972).

Aumento de la disponibilidad alimentaria per cápita (1970-1972)

Trigo	16,5%
Arroz	21,6%
Azúcar	23,8%
Leche	53,8%
Carne	25,6%
Huevos	13,5%
Papas	8,1%
Grasas	8,6%

Fuente: Chile Hoy, 1972, p. 10.

Analistas de *Chile Hoy* diagnosticaron una "paradoja del abastecimiento". Entre 1970 y 1972, la disponibilidad alimentaria global aumentó 27%, debido al aumento productivo y de las importaciones (ver tabla). Los precios de los alimentos importados alzaron en 8% en 1971 y 41% en 1972. Como era predecible, tal proceso generó un

desequilibrio en la balanza comercial. En 1972, El 45% de las divisas de exportación estaban comprometidas con importaciones agroalimentarias. La revolución necesitaba solucionar el problema con rapidez.

Es importante notar que el sabotaje más eficiente no ocurrió en terreno, sino en el parlamento, por medios indirectos. En los tres años de gobierno popular, fueron votadas tres leyes presupuestarias desfavorables a las instituciones del agro, que vieron sus recursos secuestrados por la oposición (DC y PN). En diciembre de 1970, Jacques Chonchol denunció que el Congreso redujo el presupuesto de la Oficina de Planificación Agrícola (ODEPA), responsable por los planes de producción, en 32%; y del Instituto de Investigación y Capacitación para la Reforma Agrária (ICIRA), que coordinaba el Comité Técnico Nacional de Capacitación Campesina, en 57% (*La Nación*, 1970, diciembre).

El estrangulamiento presupuestario del agro fue peor en 1972. La oposición cortó 10 millones de escudos del Fondo de Fomento Lechero, buscando inviabilizar una de las políticas más populares de Allende, que garantizaba medio litro de leche por niño (*La Nación*, 1972, 1 enero). En el caso del INDAP, el gobierno había aumentado de 120 mil a 250 mil la base de pequeños propietarios con asistencia técnica y crédito, pero su presupuesto fue cortado de 400 para 100 millones de escudos. "Un perjuicio irreparable a los pequeños productores", comentó Chonchol (*La Nación*, 1972, 5 enero). En una marcha de funcionarios públicos en defensa del presupuesto del gobierno, "ha llamado la atención el gran número de funcionarios demócrata cristianos" (*La Nación*, 1972, 5 enero).

La situación del presupuesto de 1972 era tan grave que Chonchol escribió una Carta a los Campesinos Chilenos, explicando que el Minagri disponía de 2,8 mil millones de escudos en 1972, pero la oposición lo cortó en 88%, es decir, 310 millones a menos para INDAP, 50 millones a menos al Fondo de Infraestructura del Minagri, 7 millones a menos a ICIRA, 100 millones a menos para la Empresa de Comercialización Agrícola (ECA) y 551 millones menos para la

Corporación de Fomento (CORFO Agrícola). Aniceto Rodríguez, senador del Partido Socialista (PS), declaró a sus bases: "los campesinos y pequeños propietarios de Linares deben saber que la alianza del PN con la DC en el parlamento mutiló el presupuesto público, especialmente del INDAP" (*La Nación*, 1972, 6 enero).

El sabotaje se repitió en el presupuesto de 1973, cuando fueron mutilados 42% de los recursos de la CORA, obligada a cortar 307 millones del programa de producción del sector reformado y 704 millones de construcciones de escuelas rurales y casas campesinas. Muchos capacitadores de campesinos siguieron trabajando con sueldos retrasados (*La Nación*, 1972, febrero). En respuesta, la CORA anunció que la oposición era responsable por el retraso de 73% de las indemnizaciones a patrones expropiados. La crisis productiva era la "profecía autorrealizable" de la oposición.

La falta de estímulos materiales al trabajo colectivo en el sector reformado

¿Como organizar el trabajo de los campesinos durante el período transitorio de los asentamientos y CERA, de modo a garantizar el aumento de la producción? La Ley de Reforma Agraria y los reglamentos de la CORA previeron que los asentamientos deberían estructurarse sobre relaciones democráticas en su interior, en las cuales la asamblea de asentados elegía una dirección, responsable por la representación administrativa de la unidad, y formulaba planes de producción con base en equipos de trabajo. Sin embargo, la gran mayoría de los campesinos no tenía experiencia en gestión y planificación, no conocía los sistemas de crédito y precios, no conocía la contabilidad de costos de producción, aunque fueran sabios sobre prácticas de cultivos y comportamiento de la naturaleza.

La organización del trabajo en el sector reformado enfrentaba, en primer lugar, el desafío del analfabetismo rural, que en 1970 alcanzaba 26,5% de la población campesina adulta, es decir, 318 mil

personas (Chile, 1989). Más que ello, el analfabetismo funcional rural era inmensurable, pues la gran mayoría de los niños eran sacados de la escuela por los patrones con cerca de 10 años, incorporados como trabajadores no remunerados en las *haciendas*. Nunca más practicaban lectura y escritura. Los procedimientos de gestión cooperativa del asentamiento requerían alfabetización, para leer los folletos sobre derechos laborales y planificación, gerenciar créditos y precios u organizar planes de producción.

Un segundo desafío fue constatado por Paulo Freire (2018) en su exilio en Chile y minuciosamente investigado por los equipos freirianos del INDAP, ICIRA y CORA. Se trataba de superar la presencia real y simbólica del patrón, del mayordomo y de las jerarquías sociales en la vida productiva, que aún manifestaban profundas raíces en la vida campesina. Cuando Freire volvió a Santiago durante el gobierno de Allende, advirtió: "es más fácil liquidar el latifundio en Chile de 1972 que el latifundio cultural" (1972, p. 16). Los trabajadores rurales estaban acostumbrados a recibir órdenes de trabajo y no a tomar decisiones laborales colectivas con autonomía, lo que generó marcas profundas en su subjetividad, afectando las condiciones objetivas de trabajo. La "adherencia al opresor", como conceptualizó Freire, era una de las tendencias encontradas en el campo, que reproducía padrones jerárquicos de producción, más que los padrones autogestionarios sugeridos al sector reformado. El aprendizaje de la "democracia productiva" no era fácil.

La socióloga Maria Edy Ferreira, que trabajó con Freire en ICIRA, alertaba para dos permanencias de la antigua estructura en las subjetividades y aspiraciones del campesinado. En primer lugar, con base en una investigación dialógica con campesinos de Culiprán sobre sus aspiraciones respecto de la propiedad individual y colectiva, Ferreira (1968) señalaba que la fuerza de la producción individual dentro de la propiedad colectiva todavía predominaba. Los campesinos atravesaron décadas luchando para ampliar su producción autónoma en el interior del latifundio y la tendencia era que siguieran buscando su meta individual en el interior del asentamiento. En segundo lugar,

después de realizar entrevistas en 80 asentamientos con 3.164 asentados sobre las tendencias de poder en el sector reformado, Ferreira (1970) avistó que las jerarquías laborales de la hacienda se reproducían subjetivamente en la nueva estructura. En el asentamiento, por lo tanto, las antiguas jerarquías patronales podrían verse reflejadas en la "formación de una oligarquía burocrática constituida por dirigentes campesinos reelectos para cargos de autoridad dentro del asentamiento" (p. 22). Tales desafíos no siempre fueron visualizados por los planificadores de la batalla de la producción.

A pesar de algunos conflictos entre campesinos y funcionarios que sabotearon la producción, en general los organismos del agro estaban alineados con la demanda de la UP (*El Siglo*, 1971, 14 abril). En noviembre de 1971, una reunión general de Jefes de Zonales de la CORA con David Baytelman, vicepresidente de CORA, fijó metas de producción al sector reformado, que debería expandirse en 4 mil hectáreas frutícolas, preservar el ganado en edad reproductiva, ampliar la pecuaria endógena y aumentar la producción lechera. La CORA anunció 8 millones de escudos en infraestructura productiva y social para la batalla de la producción en 1972. En la reunión, se habló de "aprovechamiento máximo de todos los recursos" y "explotación productiva de nuevas y amplas zonas", llevándose en cuenta el carácter colectivo del sector reformado (*El Siglo*, 1971, 24 noviembre). En el Plan Agropecuario de ODEPA para 1972-1973, se planificaba el cultivo de 1.709.000 nuevas hectáreas, siendo 814.000 en el sector reformado (Huerta, 1989, p. 365).

La relación entre técnicos del agro y asentados, sin embargo, no era siempre dialógica, siendo frecuentemente jerárquica, a pesar de los esfuerzos de Rolando Pinto en fortalecer una cultura pedagógica freiriana en la CORA (Pinto, comunicación personal, 23/05/2019). Sobre este punto, Ferreira cuestionaba: "frente a los proyectos de la CORA y planes de gobierno, como el campesino asentado va construyendo las líneas de su propio proyecto? ¿Son orientaciones convergentes?" (Ferreira, 1968, p. 16). Es decir, ¿cómo construir una democracia productiva en el seno de una

subjetividad campesina con fuerte herencia de las jerarquías tradicionales? Los liderazgos de la UP y los funcionarios del agro estaban apurados para aumentar la producción y confiaban en los campesinos para impulsar la estrategia económica revolucionaria. Sin embargo, les presentaban planes de producción no siempre compatibles con la subjetividad campesina.

La territorialidad de la batalla de la producción fue heterogénea: hubo asentamientos que aumentaron su productividad colectiva; otros que disminuyeron los cultivos colectivos y crecieron la producción en los goces individuales; otros aún que redujeron la producción, a consecuencia de conflictos internos o sabotajes externas. Como consta en el *Diagnóstico* de Barraclough y Fernández (1974), el campesino por veces se comportó como un pequeño empresario subsidiado dentro de la propiedad colectiva. "Los incentivos a la producción funcionan prioritariamente al nivel de la micro explotación (goces y talajes), en desmedro de la producción colectiva", constataron (p. 66).

A posteriori, Chonchol (1976) explicó el problema analizando que "la contabilidad de la explotación la llevaban los funcionarios de CORA en oficinas lejanas y sufría de considerable retraso, de modo que al final del año agrícola no se sabía si la explotación había dejado beneficios o perdidas". Además, señaló que como "los adelantos salariales eran iguales para todos (...), los campesinos más esforzados vieron que la mejor manera de aumentar su ingreso era dar más importancia al cultivo individual".

Para solucionar este problema, fue necesario articular dos acciones: primero, crear un sistema diferencial de remuneraciones vinculado al trabajo efectivamente realizado en los cultivos colectivos, es decir, un estímulo material a la batalla de la producción; y segundo, invertir en la capacitación y transformación subjetiva dialógica del campesinado, socializando su economía moral y demostrando en la práctica las ventajas materiales de la economía colectiva. En otras palabras, vincular de manera orgánica la batalla de la producción y la batalla de la capacitación a los incentivos materiales y morales requeridos por la revolución.

En noviembre de 1971, en la Feria Internacional de Santiago (FISA), una de las importantes exposiciones agropecuarias organizadas por la SNA, la CORA y los asentados presentaron por primera vez su stands, compitiendo con la visión de las exposiciones patronales: "una inusitada ofensiva del sector reformado en el corazón de la exposición anual de la SNA sorprende a muchos visitantes" (*El Siglo*, 1971, 4 noviembre), relataba una noticia: "la muestra de la CORA comprueba que el campesino, fuera del régimen feudal tradicional, en propiedades administradas por ellos mismos, logran aumentar la producción y recuperar todos los índices" (ídem).

Según recuerda Manuel Herrera, militante comunista y profesor de campesinos durante la reforma agraria de la UP, hubo asentamientos muy bien sucedidos en la producción, pero también falta de preparación para la producción colectiva. Herrera enseñaba a campesinos del sector reformado de la provincia de Talca y se encontró con asentados que consumieron sus vacas lecheras descontroladamente, sin registro, en asados y fiestas. Cierta vez, supo que dirigentes de un asentamiento mataron un novillo para comer: "Les preguntamos por qué mataron el novillo y nos dijeron: estamos contentos. Bueno, ¿y lo repusieron? No. ¿Para qué lo vamos a reponer?", narró el profesor, que entonces decía: "compañeros, si ustedes mataron un animal del asentamiento, hay que reponerlo" (Herrera, comunicación personal, 27/05/2017). A algunos no les gustaba la advertencia: "Nos liberamos del patrón y ahora tenemos otros patrones", escuchó el profesor.

En San Clemente, Herrera enseñaba sobre la propiedad colectiva e intentaba explicar porqué no se podía gozar individualmente del patrimonio del asentamiento. Decía que el descontrol administrativo ayudaba a la falsa acusación patronal sobre el "caos económico". Al mismo tiempo, los ambiciosos planes de producción de la CORA ni siempre eran firmados en un proceso dialógico junto a los campesinos. El apuro de la batalla de la producción reproducía pedagogías tecnocráticas e "invasión cultural" (Freire, 1969), lo que fortalecía la tesis del "Estado patrón".

Según Gómez (1994), un sistema de remuneraciones diferenciales vinculadas al trabajo realizado, es decir, el estímulo material al cultivo colectivo del sector reformado estaba en proceso de construcción en un acuerdo firmado entre el Minagri, ODEPA y todas las confederaciones en agosto de 1973, incluyendo las de filiación no de la UP. Tal sistema sería fundamental para que el campesino pasara a empeñar su esfuerzo laboral en la producción común. Como funcionario de ODEPA, Gómez trabajaba en esta propuesta cuando llegó el golpe.

Estímulos morales, trabajo voluntario y la prueba de octubre de 1972

Frente la ausencia de estímulos materiales para la producción colectiva, el convencimiento político del campesinado y su articulación con partidos y sindicatos se mostraron fundamentales en la batalla de la producción. Sobre eso reflexionó el profesor de campesinos Manuel Herrera en un testimonio. Aunque fuera un disciplinado comunista, el "profe Herrera" participó de la toma del latifundio San Clemente en 1971. Herrera se empeñaba en explicar a los campesinos que "para Allende, si se expropiaba había que aumentar la producción, y no disminuirla" (Herrera, comunicación personal, 27/05/2017). La toma resultó en el asentamiento Luis Emilio Recabarren, con mayoría comunista, y el asentamiento Manuel Larraín, de la DC.

El profesor relata que hubo rivalidad productiva entre los dos asentamientos: "fue una gran envidia pues la productividad y progreso de los compañeros del asentamiento Recabarren fueron notorios y reconocidos por todo el pueblo. No era común: ellos llegaron a tener una micro, un camión propio, donde trasladaban los productos", rememoró: "en la época de cosecha de papas, las sacaban y no las perdían. Las llevaban directamente a Santiago y se las entregaban a los sindicatos. (...) Estaban dentro de la línea del partido", explicó (Herrera, comunicación personal, 27/05/2017). El PC desarrolló canales propios de crecimiento de la economía popular obrero-campesina,

asegurando que asentamientos comunistas entregasen su producción a sindicatos urbanos, con quienes intercambiaban productos industriales. Tal incentivo material estaba jerarquizado por su contenido político.

Una de las estrategias de la UP para incentivar la producción fue la amistad entre trabajadores urbanos y rurales. Los sindicatos promovieron encuentros de capacitación y entretenimiento para promover la alianza afectiva entre obreros y campesinos, reforzando el sentido moral del esfuerzo productivo. "Jugaron al fútbol, cantaron, bailaron, almorzaron juntos, se transmitieron sus experiencias", relataba un periodista sobre el día de encuentro entre obreros de la Industria Textil El Progreso y campesinos de Melipilla: "obreros textiles y trabajadores agrícolas se confundieron, una vez más, en un abrazo fraternal" (*El Siglo*, 1971, 26 octubre).

Una ceremonia de premios a los obreros más productivos fue una forma de incentivo al campesinado. El interventor de la fábrica, Heriberto Molina, explicaba: "ustedes, compañeros del campo, tienen que producir la tierra. Tienen que sembrar y cosechar papas, porotos, arroz... Todo lo que necesita el pueblo para alimentarse. Nosotros tenemos la misión de producir telas para vestirlos a ustedes (...). Tenemos que trabajar más, elevar la producción" (ídem). El gobierno, los organismos del agro, la CUT, los dirigentes sindicales y los partidos convocaban al campesinado a producir más (*El Siglo*, 1971, 3 noviembre). Si el campesino se vinculaba personalmente al trabajador urbano con amistad y compañerismo, podría enfrentar la tarea productiva con empeño colectivista, conociendo a quienes necesitaba alimentar.

Otra estrategia fundamental para la batalla de la producción fue la alianza campesino-estudiantil. En los trabajos de verano, la presencia de estudiantes en los cultivos y en la construcción de infraestructura rural funcionaba como estímulo moral a los campesinos. Durante los tres veranos del gobierno de Allende, una multitud de jóvenes comprometidos con la revolución se movilizó a zonas rurales para participar de jornadas de alfabetización y trabajos productivos

voluntarios en cuatro tipos de brigadas: salud, educación, construcción civil y agropecuaria.

La participación estudiantil en las brigadas de verano en diciembre de 1970 creció 70% en comparación a 1969. Fueron 5.225 estudiantes catastrados por la Oficina Nacional de Servicios Voluntarios (ONSEV) del Mineduc en el primer verano de la UP (*Revista de Educación*, 1967, 1968, 1970). Los estudiantes organizaron 142 campamentos en 15 provincias. La ONSEV firmó convenios con 28 Centros y Federaciones Estudiantiles, entre ellas la FECH, la FEUC, la FEUTE, la Federación de Estudiantes Secundarios (FESECH), Estudiantes Normalistas (CONFECH) y de Estudiantes Agrícolas (FEDEACH), además de juventudes partidarias. El aprendizaje del trabajo voluntario era una vía de doble sentido: expandía la comprensión práctica de los estudiantes sobre la realidad campesina y permitía al campesinado aprender con los estudiantes sobre sus conocimientos. La ONSEV financiaba El 90% de los costos de los trabajos de verano, como un subsidio público para la solidaridad juvenil (*Revista de Educación*, 1970).

La comunista Francisca Rodríguez todavía recuerda sus experiencias como joven voluntaria en beneficio de los campesinos en la batalla productiva. En el verano de 1972, Francisca se unió a los 2 mil jóvenes en un campamento en Tarapacá para construir un sistema de riego agrícola en el Pampa de Tamarugal. El "dren del Cabildo" era una represa subterránea para irrigar miles de hectáreas. Al terminar el verano, los voluntarios se concentraron en el Estadio Nacional para encontrarse con Allende. Francisca recuerda que fue al acto "con el pecho hinchado porque habíamos construido el dren para los campesinos. La juventud se comprometió totalmente, se hicieron obras magnificas" (Rodríguez, comunicación personal, 14/05/2017). Como joven dirigente del Departamento Femenino del PC y del Frente de Mujeres de la UP, durante los mil días de Allende, Francisca viajó entre campo y ciudad para crear vínculos de solidaridad entre mujeres urbanas y rurales.

Otra voluntaria fue Camila Montecinos, que no era afiliada a ningún partido y participó de las brigadas cuando era estudiante de

agronomía de la U. Chile: "en 1972 estuvimos 3 meses en Rengo, en Rancagua. Después, en el primer semestre de 1973 estuve en el sur, en la zona campesina de Victoria", contó (Montecinos, comunicación personal, 14/05/2017). Aunque no fuera militante de partido, Camila se acuerda de presenciar una solemnidad de filiación de un grupo de campesinos mapuche al Partido Comunista (PC), en un asentamiento de la Araucanía en 1973. Al recibir sus carnés "las personas se emocionaban" (ídem). La presencia de los partidos de la UP en el campo fue creciente y parcela expresiva del campesinado nutría renovada confianza en los voluntarios. No fue casualidad que los sindicatos campesinos afiliados a la UP se expandieron 292% durante el trienio (Barrera, 1973, p. 271; Gómez, 1981, p. 11).

El Siglo relaciona Fidel Castro a la batalla de la producción, 10/11/1971.

El clima de compromiso promovía una mezcla de entusiasmos entre campesinos y estudiantes, sujetos colectivos que pasaron a encontrarse en las concentraciones de apoyo a Allende. El alfabetizador Arnaldo Cáceres, del ICIRA, se acuerda que sus alumnos campesinos recién alfabetizados experimentaron dibujar sus primeras palabras directamente en las pancartas, para llevarlas a las marchas en defensa del gobierno popular (Cáceres, comunicación personal, 29/06/2017).

Otro estímulo moral al campesinado fue la visita de Fidel Castro en noviembre y diciembre de 1971. El líder cubano viajó de Arica a Punta Arenas durante 24 días y dialogó con miles de trabajadores. Allende aprovechó las aglomeraciones provocadas por Fidel para fortalecer la convocatoria a la batalla de la producción. La centralidad de la disciplina laboral para la revolución fue uno de los tres principales asuntos de Fidel Castro en su diálogo con el pueblo chileno de norte a sur. El cubano explicaba que los sacrificios de los trabajadores para la revolución generaban beneficios colectivos, al contrario del sacrificio anterior, bajo coerción capitalista para enriquecer oligarquías (Borges y Vasconcelos, 2019, pp. 246-273).

Por último, un momento decisivo de los estímulos morales para la batalla de la producción fue el paro nacional de octubre de 1972, cuando transportistas y comerciantes privados, responsables por 70% del abastecimiento del país, cruzaron sus brazos en un lockout contra la revolución. Los campesinos fueron presionados a adherir al paro, pero siguieron trabajando en expresiva mayoría. "El paro obedece a un plan financiado por el imperialismo norteamericano, como queda claro en los documentos de la ITT (...), impulsado por los sectores más reaccionarios del país", acusó el campesino Pascual Salinas, afiliado a la Federación Campesina Ranquil (*Chile Hoy*, 1972). Afirmaba que los campesinos no cayeron en la trampa. Efectivamente, fue intensa la movilización del "contra-paro" de los trabajadores rurales, que crearon Comandos Campesinos de emergencia y un Comando Nacional formado por la Ranquil, UOC y Confederación Mapuche: "la línea unificada para afrontar el paro nacional" (Ponce de León, 1972).

Chile Hoy desmintió la versión de *El Mercurio*, que afirmaba que 400 mil campesinos habían paralizado en octubre. Este número era incompatible con el registro oficial y la experiencia vivida por los funcionarios del agro. Según Carabineros y ODEPA, solamente 107 propiedades paralizaron actividades por pocos días, retomándolas rápidamente, en un universo de 239.200 unidades productivas rurales (Bengoa, 1972). Comparativamente, la Dirección del

Trabajo contabilizaba que en 1971 fueron 1.758 propiedades con paros campesinos en favor de la reforma agraria, es decir una adhesión 16 veces mayor. En octubre de 1972, "muchos patrones fueron a los retenes y comisarias a denunciar paros en su fundo sin que estos existieran", según investigó Bengoa (1972): "en solidaridad a los transportistas no pararon más de 4 mil campesinos. Los dos ceros que sobran se los debemos cargar a la cuenta de la desesperación de la oposición" (ídem).

LOS CAMPESINOS TRABAJAN!

500 MIL CAMPESINOS SE ORGANIZAN PARA PRODUCIR MAS

La Nación, 21 de octubre.

La Confederación de Cooperativas Campesinas y la Confederación Libertad también repudiaron públicamente el lock-out. Junto con ellas, otras 27 Federaciones Provinciales Campesinas hicieron lo mismo. En la provincia de Santiago, 30 mil trabajadores agrícolas acusaron el paro de ser "antipatriótico" (*La Nación*, 1972, 16 octubre). Agrónomos del SAG, INDAP y CORA denunciaron al Colegio de Agrónomos, por participar activamente de la sedición. Contra el Colegio, fue creado el Frente Patriótico de Profesionales y Técnicos del Agro (*La Nación*, 1972, 20 octubre). El sector reformado se alió a los pequeños propietarios de modo inédito para enfrentar la situación, conectando diferentes sujetos productivos para obtención de insumos y comercialización de alimentos. Tractores en fila conducidos por campesinos fueron vistos en las rutas para abastecer las ciudades.

El Comando Nacional se reunió con el general Prats, que elogió la conducta campesina (*La Nación*, 1972, 21 octubre). Chonchol dijo que "el paro fracasó debido a la respuesta consciente y productiva de los campesinos, que continúan produciendo y tratando de solucionar los problemas de abastecimiento con los medios que disponen" (*La Nación*, 1972, 16 octubre). Los campesinos además crearon Comités de Vigilancia y Defensa de la Producción, para frenar sabotajes y asegurar que las rutas y ferrovías en funcionamiento no fuesen bloqueadas.

Mientras tanto, Enrique Mellado, presidente de la Triunfo Campesino (dirigida por la DC) declaró que realizaron un paro de 24 horas en solidaridad a los transportistas, pero sin una agenda propia de luchas. La contradicción del discurso de Mellado se hacía evidente cuando constataba: "fuimos siempre duros para exigir que la reforma agraria se hiciera más rápida, más drástica y este gobierno (...) lo ha logrado. Estamos satisfechos", confesó (Chile Hoy, 1972).

Si por un lado el paro patronal de octubre de 1972 generó un caos en la vida económica y política del país, las estrategias de "contra-paro" de los campesinos y trabajadores urbanos aceleraron la relación de solidaridad obrero-campesina. Los comandos y las JAP formaron una alianza urgente, que potencialmente representaba las nuevas formas de economía popular socializada, creando canales directos de intercambio entre trabajadores del campo y de la ciudad. La resistencia productiva del campesinado fue el momento más contundente de los estímulos morales, cuando producción y política se transformaron en una misma acción.

Consideraciones finales

Argumentamos que la batalla de la producción agraria fue un factor fundamental de la lucha de clases en el campo durante la vía chilena al socialismo. A través del aumento de la productividad

agraria, las izquierdas luchaban para demostrar que la propiedad colectiva y autogestionaria del sector reformado correspondía a una forma superior de trabajo y producción, es decir, que era más productiva, justa y eficiente en comparación con el latifundio capitalista.

La batalla de la producción agraria de la UP fue el centro de una guerra política y económica que las oligarquías emprendieron contra la revolución chilena. A pesar de los sabotajes patronales, en 1971, el campesinado logró aumentar la producción agraria, permitiendo una mayor oferta global de alimentos, junto con el incremento de las importaciones. Sin embargo, debido a la paradoja del abastecimiento, la percepción económica sobre la oferta alimentaria no correspondió exactamente a su crecimiento, pues el poder de consumo popular de los trabajadores creció y rápidamente absorbió la oferta alimentaria.

En el ámbito de la organización del trabajo en el sector reformado, es necesario reconocer junto a analistas de la época que no existieron estímulos materiales adecuados para la producción colectiva, una vez que las remuneraciones fijas e iguales del *adelanto* a todos los trabajadores estaban desvinculadas de las jornadas efectivamente trabajadas. Por ello, muchos campesinos siguieron priorizando sus goces individuales y huertos familiares dentro de la propiedad colectiva, haciendo usos inadecuados de insumos y recursos del asentamiento o CERA. Los subsidios gubernamentales, que deberían fomentar la producción común, fueron destinados a incrementar las producciones individuales dentro del sector reformado. Un sistema de remuneraciones diferenciadas y estímulos materiales estaba en construcción entre el gobierno y las confederaciones, cuando vino el golpe.

La batalla de la producción fue exitosa donde hubo convencimiento político del campesinado sobre la solidaridad social con los trabajadores urbanos y apoyo a la revolución. Los estímulos morales ampliaron la consciencia del campesinado sobre la necesidad de la disciplina laboral, a pesar de la ausencia del mayordomo y del

patrón. Los trabajos de verano conectaron a numerosos grupos de estudiantes, entusiasmados con el mundo campesino, que se incentivaban mutuamente al aumento productivo. La visita de Fidel Castro a Chile en 1971 también cumplió un rol pedagógico y fue un fuerte estímulo moral, pues el líder cubano pasó 24 días dialogando con numerosos/as trabajadores/as sobre la disciplina laboral en tiempos de revolución. Otro hecho relevante fue que la mayoría de los campesinos optó por no adherir al paro patronal de octubre de 1972 y siguió trabajando con aún más esfuerzo para compensar los daños, sea por motivos solidarios y colectivistas, o individuales. Esta conducta representó una demostración activa de los estímulos morales al campesinado.

Por último, concluimos que hubo una contradicción entre ausencia de estímulos materiales adecuados a la producción colectiva dentro del sector reformado y la estrategia revolucionaria anclada en la batalla de producción. El desafío de la disciplina laboral campesina en el contexto de ausencia del mayordomo fue subestimado por las vanguardias políticas de la UP y por el gobierno. Hubo un desencuentro entre la prioridad estratégica y los medios para alcanzarla, haciendo necesario un sistema de estímulos materiales diferenciados que no llegó a ser desarrollado en tiempo. Aun así, es posible afirmar que los múltiples estímulos morales garantizaron la disciplina laboral en sectores importantes de campesinos, beneficiados con la reforma agraria, como quedó demostrado en octubre de 1972.

En suma, en el sector reformado, los campesinos necesitaban estar políticamente convencidos de su rol, de la importancia de la solidaridad de clase para alimentar mejor a todo el país y ahorrar divisas para la revolución. La ausencia de estímulos materiales apropiados a la producción colectiva hizo que los estímulos morales cumplieran una función estratégica. Consideramos que las relaciones sociales de producción en el campo y los estímulos a la disciplina laboral del campesinado constituyeron un eslabón importante de la revolución chilena, que articulaba la batalla de la

producción a la batalla de la capacitación dialógica para una economía moral solidaria. Desafortunadamente, el sector reformado no maduró a tiempo de armonizar intereses individuales y colectivos, ya que el proceso de creación popular de la vía chilena al socialismo fue brutalmente interrumpido en septiembre de 1973.

Referencias

Avendaño, O. (2017). *Los partidos frente a la cuestión agraria en Chile, 1946-1973. Representación de intereses, gradualismo y transformación estructural.* Santiago de Chile: LOM.

Barraclough, S. (1970). Sistemas de tenencia alternativos resultantes de reformas agrarias em América Latina, en *Cuadernos de la Realidad Nacional* no 2, Santiago: CEREN, U. Católica.

Barraclough, S. (1971). Reforma agraria: historia y perspectivas. *Cuadernos de la Realidad Nacional* 7, Santiago: CEREN, U. Católica.

Barraclough, S. y J. A. Fernández. (1974). *Diagnóstico de la reforma agraria chilena*. México DF: Siglo XXI.

Barrera, M. (1973). *Chile 1970-1972: La conflictiva experiencia de los cambios estructurales.* Caracas: ILDIS.

Borges, E. C y J. S. Vasconcelos. (2019). Cuba e Chile: diálogos revolucionários para América Latina, en J. Sales, R. Araújo, R. Mendes y T. Silva. *Revolução cubana: ecos, dilemas e embates na América Latina*. Sergipe: Ed. IFS, pp. 246-273. (gratuito online).

CIDA. (1966), *Tenencia de la Tierra y desarrollo socioeconómico del sector agrícola.* Santiago: CIDA.

Chile. (1989). *Indicadores económicos y sociales. 1960-1988*. Santiago: Banco Central de Chile.

Chonchol, J. (1964). *El desarrollo de América Latina y la Reforma Agraria*. Santiago: Editorial del Pacífico.

Chonchol, J. (1976). El campesinado y la política agraria de la Unidad Popular (1970-1973). *Revista Trimestre Económico*, México, Jul-Sep.

Ferreira, M. E. (1968). *Expectativas campesinas y asignación de tierras de Culiprán*. Santiago: ICIRA.

Ferreira, M. E. (1970). *Tendencias del poder entre los campesinos asentados.* Santiago: ICIRA.

Freire, P. (1969). *¿Extensión o comunicación?* Santiago: ICIRA.

Freire, P. (1972). ¿Una dimensión política de la educación? Una conversación con Paulo Freire. *Cuadernos de Educación, Serie Orientaciones (1971-1973)*, 4 (2) 2-25, Santiago: U. Chile.

Freire, P. (2018). *Pedagogia do oprimido*. 65ª ed. São Paulo: Paz e Terra.

Gómez, S. (2002). Organización campesina en Chile: reflexiones sobre su debilidad actual. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 6.

Gómez, S. (1994). *Movimiento campesino, respuesta empresarial y reforma agraria. Una década de profundización democrática en el campo (1964-1973*). Tese de Doutorado em Sociologia, FFLCH/USP, São Paulo.

Huerta, M. A. (1989). *Otro agro para Chile: historia de la reforma agraria en el proceso social y político.* Ediciones Chile-América, CESOC.

Kay, C. y P. Winn. (1972). La reforma agraria en el gobierno da Unidad Popular. *Sociedad y Desarrollo*, 3. Santiago: CESO, Universidad de Chile.

Loveman, B. (1976). *Struggle in the countryside. Political and rural labor in Chile, 1919-1973.* Bloomington: Indiana University Press.

Saavedra, A. (1975). *Capitalismo y lucha de clases en el campo. Chile, 1970-1972*. Madrid: Alberto Corazón Editor.

Fuentes

El Siglo

Campesinos de Casablanca cuentan sus penúrias, Nov/1970.
No hay problemas con cosechas: el momiaje miente de puro miedo, 09/02/1971.
Latifundista incendió intencionalmente hectáreas de trigo, 12/03/1971.
Sabotaje y sedición patronal, denuncian los campesinos, 13/03/1971.
Chonchol: Plan para derrotar el sabotaje momio en la agricultura, 25/03/1971.
Todo Chile se movilizará por el plan de aumento de la producción agrícola, 25/03/1971.
Cómo opera el sabotaje a la producción agrícola, 03/04/1971.
Elementos DC dirigen "tomas" de fundos en Provincia de Llanquihue, 05/04/1971.
Hacen agua planes freístas para crear "caos" artificial, 07/04/1971.
Los culpables de la agitación en Llanquihue, 07/04/1971.
Trabajadores del agro apoyan planes de Gobierno, 14/04/1971.
Frente común para ganar la batalla de la producción, 26/10/1971.
El campesino: primer actor en la lucha por producir más, 03/11/1971.
FISA: Campesinos muestran sus realizaciones en Stands de CORA, 04/11/1971.
Aumento de la producción analizan en CORA, 24/11/1971.
Dueños de fundos queman cultivos, 01/12/1971.

La Nación

A balazos tratan de impedir que se reúnan los campesinos, 25/01/1968.
CORA terminó con atropellos y abusos en Longotoma, 05/03/1968.
Violencia desató latifundista en fundo Santa Marta, 12/04/1968.
Administrador de fundos baleó a campesinos em Puerto Montt, Oct./1970.
Chonchol: Disminución de fondos a organismos agrícolas creará serios problemas, Dic./1970.

Reducción de presupuesto paraliza planes educacionales y agrarios, 01/01/1972.
Reducción de presupuestos: "Perjuicio irreparable para los pequeños agricultores", 05/01/1972.
Movimiento nacional de protesta inician trabajadores del agro, 05/01/1972.
Aniceto Rodríguez: "Los planes de desarrollo del país paralizaran", 06/01/1972.
Corte al presupuesto de CORA dificulta el proceso agrario, Feb./1973.
En Coltauco: Latifundista sabotea producción agrícola, 12/01/1972.
Normalmente se ha trabajado en todo el agro chileno, 16/10/1972.
Rechazo total al paro hacen campesinos y profesionales, 20/10/1972.
¡Los Campesinos Trabajan!, 21/10/1972.

Chile Hoy

Bengoa, José. El paro de los conchencos. Revista Agraria n.1, 25, Dic./1972.
Editorial: Acuerdo con las confederaciones. Revista Agraria n.1, 25, Dic/1972.
Gómez, Gerson & Ribeiro, Iván. Paradojas del Abastecimiento. *Revista Agraria* n.1, 25, Dic/1972.
Ponce de León, Enrique. Los comandos. Revista Agraria n.1, 25, Dic./1972.
Enrique Mellado (Triunfo Campesino). Revista Agraria n.1, 25, Dic./1972.
Pascual Salinas (Ranquil). Revista Agraria n.1, Chile Hoy n. 25, Dic./1972.

Revista de Educación

Cerca de 3 mil jóvenes salen este verano al trabajo voluntario, 3, 1967.
Balance de la labor de estudiantes voluntarios en los trabajos de verano de 1968: nuevos proyectos, 4, 1968.

Lily Vega, Los trabajos voluntarios del verano de 1971, una gran jornada juvenil, 32-33, 1970.

Entrevistas

Arnaldo Cáceres, Santiago, 29/6/2017.

Camila Montecinos, Santiago, 14/05/2017.

Francisca Rodríguez, Santiago, 14/05/2017.

Gustavo Marín, Santiago, 20/4/2017.

Manuel Herrera Castro, San Clemente, 27/5/2017.

Rolando Pinto Contreras, Santiago, 23/05/2019.

Luchas indígenas y territorio

¿Revolución campesina o levantamiento mapuche?

Tensiones en La Araucanía durante la revolución socialista 1970-1973

Fernando Pairican, Marie Juliette Urrutia y Claudio Alvarado Lincopi

> *"El camino es largo, pero es justo seguirlo ¡Mapuche, la tierra es tuya; recupérala y defiéndela! ¡Huitrañe Mapuche!"*
>
> Movimiento Netuaiñ Mapu (*El Diario Austral*, 1971)

Múltiples fueron los discursos de Salvador Allende tras asumir la presidencia, también varios los encuentros con organizaciones mapuche. Muestra de esto fue la invitación para ser parte del II Congreso Nacional Mapuche, realizado a mediados de diciembre de 1970. Pocos días habían transcurrido de su asunción, uno de los pocos líderes socialistas que triunfaban por la vía democrática para construir un gobierno, prometiendo una transición gradual y pacífica al socialismo.

Los mapuche no quedaron ajenos a ese proceso, reunidos en la Confederación Nacional de Asociaciones Mapuche de Chile, encabezada por Antonio Millape Caniuqueo, presidente de la organización

que reunía a comunidades de Victoria, Ercilla, Angol, Purén, Curacautín, Loncoche, Melipeuco, Cholchol, entre otros territorios. Desarrollaron múltiples aproximaciones al gobierno popular, lo que mostraba los deseos de llegar a un acuerdo con las autoridades que prometían conducir a Chile a través de una inédita vía chilena al socialismo.

Ahora bien, estos diálogos no estuvieron desprovistos de reflexiones críticas que develaban el andar particular del movimiento mapuche, dada su especificidad como "nación oprimida". Esto último, uno de los debates más importantes a nivel internacional, como dan cuenta las reflexiones sostenidas por algunos intelectuales y movimientos indígenas a nivel continental. Pues bien, vale preguntarse por estas especificidades: ¿Cuáles fueron los compromisos que la Unidad Popular (UP) asumió con el pueblo mapuche? ¿Cuáles son las razones para asumir los acuerdos planteados en la recordada concentración del 28 de marzo de 1971? ¿Fue exclusiva voluntad del gobierno por la resolución de una necesidad histórica o reacción ante la presión desarrollada por sectores del movimiento mapuche en contexto de la profundización de la reforma agraria? La movilización sucedida en territorio mapuche, que podríamos identificar como un levantamiento, puso en tensión la "vía pacífica" en Wallmapu al hacer uso de las corridas de cerco y tomas de fundos que superaban la tipificación legal para reformar el agro en Chile. Se incubó una tensión "creativa" con la UP, de la que pretendemos reflexionar.

Los levantamientos los entendemos como una continuidad descolonizadora. A lo largo de su proceso histórico se han sucedido distintas etapas de resistencia, desde la llegada del mundo español, los mapuche se levantaron contra la monarquía propiciando un inédito intercambio de diplomacia política que se denominaron Parlamentos. Estos acuerdos marcaron los diálogos futuros en que se basaron, como bien dice Villalobos, las Relaciones Fronterizas, y gestaron una ideología inherente, que a su vez fueron parte de una Tradición y Costumbre en la perspectiva de E. P. Thompson (2019). Esa ideología

de saberse portadores de derechos no significa la pérdida del ser indígena, sino dota a la frontera de una nueva politización y agencia.

Por cierto, este levantamiento mapuche expresado en tomas y recuperaciones por la vía de los hechos tuvo una articulación política con sectores de la izquierda revolucionaria. Esta proximidad y vínculo orgánico se ha presentado como un momento que para la historiografía contemporánea resulta de mucho interés, dada la prefiguración posible que representa esta experiencia como proyecto emancipatorio conjunto. En este trabajo también buscamos reflexionar sobre ello: ¿cuáles fueron los encuentros y desencuentros entre la izquierda revolucionaria y el mundo mapuche? Y todavía más profundo, ¿las tomas de terreno y las corridas de cerco representaron el empuje que los proyectos revolucionarios impulsaron o se tratan más bien de un mecanismo estratégico emergido desde la propia historia del pueblo mapuche? Nuestra hipótesis sostiene más bien la segunda dimensión de la pregunta, creemos que todo ello se trató de un levantamiento que es comprensible bajo la propia historicidad de la sociedad indígena, y es lo que intentaremos demostrar, sin por ello restar importancia a los encuentros y desencuentros coyunturales con la izquierda revolucionaria.

Todos estos interrogantes, que nos invitan a reflexionar en torno a la experiencia de las movilizaciones por recuperación de tierras durante la profundización de la reforma agraria, y que marca un modo particular de vinculación con la experiencia de la UP, se definen también bajo los aspectos históricos relativos a la relación entre el Estado y pueblo mapuche y devela la capacidad permanente de un pueblo por ejercer el reclamo por las usurpaciones antiguas. Entre estas grietas históricas debió circular el gobierno popular, y de ello trata este texto: observar las diversas dinámicas que el movimiento mapuche desarrolló para complejizar y abrir la "vía chilena al socialismo" y cómo eso fue subsumido por el gobierno y la izquierda revolucionaria.

Salvador Allende en Wallmapu

> *"Allende vino e hizo un discurso y quedé contenta de cómo hablaba Allende. Eran discursos que los mapuche jamás en nuestra vida habíamos escuchado".*
>
> Lucy Traipe (Carvajal, 2010, p. 45).

En la mañana en que aterrizó el avión FACH que trasladaba a Salvador Allende, el *Diario Austral de Temuco* daban a conocer que las organizaciones mapuche valoraban la visita del presidente, siempre y cuando cumpla con los acuerdos que se disponía a firmar. Mario Huichalaf, secretario general del Frente Nacional de Organizaciones Mapuche, calificó como un suceso de gran envergadura la visita de la máxima autoridad pues "el Presidente viene a firmar un compromiso que nosotros, los propios mapuche estamos solicitando, pero que lamentablemente no está bien afinado aún". Y agregaba: "si el Presidente aclara situaciones contradictorias con respecto a la autonomía del campesino mapuche, a su futura participación en el proceso de reforma agraria y se compromete a entregar un financiamiento adecuado" (1971, p. 10).

La primera actividad pública de Salvador Allende junto a la comitiva que lo acompañó fue dirigirse hacia las instalaciones de Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en el fundo Trianón, donde cruzó diálogo con el director de Asunto Indígenas, Daniel Colompil. Allí, en las inmediaciones del instituto firmó y dispuso de la instalación de la primera piedra que daría inicio a la construcción del Centro de Capacitación Mapuche, con el cual, se lograría un paso, que Allende señaló como fundamental, "el mapuche –dijo– será incorporado plenamente a la ciudadanía chilena con todos los derechos, para que no se le considere como un ciudadano de tercera o cuarta categoría" (*El Diario Austral*, 1971, p. 1). Además de estos propósitos, el centro se enmarcó en la batalla por la producción que comenzaría a

enfrentar el gobierno a raíz de la campaña del terror que de a poco iba construyendo la oposición (Llanos, 2014). Se volvió urgente incrementar la producción de alimentos para satisfacer la demanda interna y externa del país, sobre todo cuando el boicot internacional, esperaba en palabras de Nixon, asfixiar la revolución socialista. Como en otros momentos de la historia, el territorio mapuche sería una de las zonas de disputas.

Terminada la instalación de la primera piedra, los medios de comunicación destacaron los pies con barro del Primer Mandatario. La lluvia como era habitual en esos meses fue intensa en Cautín. Después de caminar por lo que sería el Centro de Capacitación Mapuche, subió a un automóvil que lo trasladó al centro de Temuco, en específico a la concurrida calle Prat. Allí se instaló un podio para recibirlo en medio de carteles encendidos, estandartes, lienzos rojinegros, *trutrucas* (instrumento musical de viento construido en base al cuerno de vaca o toro que sirve para convocar a reuniones o dar un orden en caso de batalla) y uno que otro *purun* (danza usada en las tradiciones y costumbres que da cuenta del *choike*, ave existente entre el océano Atlántico y Pacífico) al son de aplausos, consignas, guitarras y sonidos de *kultrun*. Aquella concentración se alojó en la memoria de los mapuche que asistieron para escuchar los compromisos y proyectos asumidos por la vía chilena al socialismo.

Entre los puntos centrales del extenso discurso de Salvador Allende, se encontraba el inicio de la modificación integral a la Ley Indígena 14.511, creada en los albores de la década de 1960, además de informar públicamente el rol que tendría el Centro de Capacitación Mapuche de la mano con la campaña por el aumento de la producción, el funcionamiento del Consejo Nacional Campesino, reforzar el Plan de Emergencia anunciado por el ministro de Agricultura en enero del mismo año y, por último, con su característica habilidad discursiva, convencido y con voz decidida, hizo un llamado a la serenidad del pueblo mapuche. Así señaló terminando sus palabras con ensordecedores aplausos:

> Llamar a la tranquilidad a quienes, con premura acelerada, quisieran avanzar más rápido desconociendo las dificultades materiales, técnicas y económicas que tenemos y generando también con índice acusador. Aquellos otros, que pretenden que se detengan las mareas de la historia, que quisieran que nosotros utilizáramos los medios represivos: ¡NO! He venido a decirle al pueblo que unidos marcharemos con la bandera de la patria en nuestros brazos hasta conquistar el porvenir que ustedes con su esfuerzo serán capaces de crear (Ruiz, 1971).

La concentración no fue fácil de dispersar, cientos de mapuche en la ciudad de Temuco tomándose las calles en carretas. Campesinos y trabajadores con herramientas cómo símbolo identitario las alzaban como si fuera la extensión del aplauso, los centros de madres reunidos en conversación en las mismas calzadas. Mapuche sentados sobre el pasto de las plazas, convertidas en el medio perfecto para conversar, mientras los niños jugaban, tal como relataba la prensa y las fotografías que dan cuenta de cuerpo con *makum* o *küpan* (prenda de vestir usada por los hombres tejida en textiles). Otros tantos con chombas, ternos y faldas fueron a recibir al Jefe de Estado, para luego seguir conversando en *trawun* (reunión para debatir los asuntos políticos del pueblo mapuche) sobre aquel anunciado porvenir que, con esfuerzo, serían capaces de crear (Urrutia, 2019).

Si bien los proyectos firmados por el Presidente son fundamentales para comprender la relación entre la vía chilena al socialismo y el pueblo mapuche, es necesario detenerse en el último llamado que hizo el mandatario a la calma del pueblo, un grito por "la serenidad, a unos para que entendieran que hechos aislados de correr cercos y ocupar tierras no solucionaban los problemas, y a los otros, a los patrones para decirles que el proceso social no se detiene" (*El Diario Austral*, 1971, p. 7). Se manifestaba la tensión de las vías de la revolución socialista, lo que Luis Corvalán (2004) denominó los gradualistas y rupturistas.

¿Por qué hacer un llamado a la calma? Como da cuenta el documental de Raul Ruiz "ahora te vamos a llamar compañero", de 1971, se percibe

una frontera, una diferencia y claramente a ojos del cineasta ese otro pueblo con su propia historia. No obstante, se percibe también un giro en las relaciones de poder, un vuelvo en el cual los que están abajo se atreven a increpar a los que se encuentran arriba, como dice Peter Winn en su reminiscencia histórica, "cuando llegué a Chile a comienzos de 1972, encontré un país en medio de una revolución" (2013, p. 9).

En las siguientes páginas trataremos de abordar las razones de este llamado a la calma comprendiendo que serán las movilizaciones de mapuche y campesinos en los campos de la provincia de Arauco, Malleco y Cautín, quienes desataron una lucha directa por la tenencia de la tierras poniendo en tensión la vía chilena al socialismo, y que, para el caso mapuche, responde a una demanda histórica del largo siglo XX de usurpación de tierras. No se trató exclusivamente de una demanda momentánea, sino de una movilización por recuperación de tierras primero de la reducción y luego ancestrales (Correa, 2013). Ahora bien, antes es vital comprender la especificidad histórica de Wallmapu para lograr interpretar mejor el levantamiento mapuche en Cautín durante los mil días gobierno popular.

La reducción: la vía capitalista de la propiedad de la tierra

> *"Consideramos nuestro deber sembrar la luz donde hay opresión y al igual que todos nuestros padres, hijos y hermanos, siempre hemos dicho que si es necesario reiniciaremos la Guerra de Arauco".*
>
> Centro Mapuche y Hogar Universitario de Santiago.
> (*Punto Final*, 1971).

Sobre los mapuche y la UP los principales estudios se han abocado a comprender las recuperaciones de tierras, la agencia mapuche y los conflictos que explicarían las protestas mapuche al

gobierno de Allende y luego la contrarreforma agraria propiciada por la dictadura militar. Aunque para comprender las problemáticas históricas de los mapuche y la UP es necesario separarlas por sus dimensiones geográficas, sobre todo, porque en territorio mapuche, las normativas de Reforma Agraria, dada su visión homogéneamente campesina, no lograba dar cuenta de la especificidad territorial y social de Wallmapu. No obstante, la presión de los mapuche sobre esas tierras determinará el giro por parte del gobierno de Allende, generando una contraofensiva que se sumó a la contrarrevolución contra la experiencia socialista.

¿Por qué fue posible? Fue un resultado de la construcción de Estado de los gobiernos conservadores. Luego de concluida la guerra de Independencia, la construcción de Estado en territorio mapuche comienza a idear, en base a la Constitución de 1833, que no existen un territorio distinto al sur del río Bío Bío, como *sí* lo habían hecho las leyes federalistas de 1828, que a su vez reconocieron el parlamento de Tapihue de 1825. Ambos reconocen la existencia de una soberanía territorial entre los ríos Bío Bío y Cautín. No obstante, luego de la crisis de los gobiernos conservadores, esa misma matriz concluyó en una aspiración hegemónica por parte de la *é*lite chilena, gestando una regeneración colonial que recuperaba lo forjado por los hispanos, pero ahora para concluir la obra de ellos: anexar a la chilenidad el Fütalmapu (país mapuche) (Pairican, 2020).

La década de 1850 es clave. Eran tiempos de revolución capitalista, y en poco tiempo el carbón se transformó en la combustión del modelo, la cordillera de Nahuelfüta llevaba en su seno importantes restos de ella. Una cordillera antigua, que data de los orígenes de la formación de la tierra, desgastada en su relieve por el viento y el mar, pero que daba cuenta en su interior de la existencia de un abundante bosque. Decenios habían transformado en carbón de alta combustión para hacer funcionar maquinarias de la revolución industrial. La Ocupación de La Araucanía pareció ser inevitable a la vista de los líderes mapuche que observaron cómo fueron arribando colonos empresarios y sujetos populares para

ocupar la periferia del Fütalmapu y que a su vez se transformaba en la vanguardia de la expansión colonial chilena. Los mapuche se prepararon para resistir a ello, iniciándose levantamientos armados mapuche entre 1857-1861 (Foerster, 2018; Pairican, 2020).

La provincia de Arauco fue una construcción de Estado de los gobiernos conservadores. Al poco tiempo, familias chilenas del valle central, inquilinos que deseaban convertirse en propietarios y las primeras familias de colonos alemanes comienzan a llegar. Algunos decidieron colonizar las tierras ubicadas al norte del río Bío Bío y solicitaron la construcción de la provincia de Laja en 1848. Otros viajando por la costa en busca del carbón decidieron fundar la provincia de Arauco en 1852 (Foerster, 2008). Fue la primera avanzada de los chilenos de una ocupación que para nada tuvo de "espontánea", como plantearon algunos historiadores fronterizos (Villalobos, 1982).

Entre el río Bío Bío y Malleco se desarrolló la construcción de Estado de los gobiernos conservadores. A los mapuche se les entregaron Títulos de Merced a cambios de aceptar la incorporación de misiones religiosas, especialmente franciscanos. En el imaginario del Estado, los mapuche transitarían a la chilenidad en base a la educación misional, las escuelas serían la base de la creación del nuevo mapuche: el araucano. La construcción de Estado en la provincia de Arauco recuperaba a ese falso mapuche como mito fundador. A los que se sumaron a sus políticas se les permitió perpetuarse en sus tierras con Títulos de Merced, nombrando a un representante, que denominó cacique gobernador. A ello lo hemos llamado una "política indígena" de los gobiernos conservadores (Pairican, 2020).

Entre 1850 y 1861 los mapuche lograron vencer a los chilenos en sus deseos de expansión. La élite chilena decidió suspender las operaciones sobre el territorio mapuche a la espera de recuperarse económicamente, cerrar las diferencias entre las élites y expandir su economía con su soberanía sobre Arauco. Sería desde este lugar, anclado en la costa en que se prepararía el Ejército chileno

encabezado por Cornelio Saavedra para impulsar su proyecto de engranaje colonial mediante la anexión territorial, con tal de sumarse a las lógicas del capitalismo. Para esa fase se hizo necesario atraer colonos, militares y agricultores.

¿En qué consistió la colonización? Se usó del modelo de plantación estadounidense. Tierras en que los agricultores se desarrollarían entorno al trigo, y otro porcentaje de tierras para el ganado. Bajo esta política indígena, se entregaron reducciones de tierras para la sociedad mapuche, dado que el modelo consideró reducir espacialmente al indio, dotándolo de un pequeño espacio interno, donde la lengua, tradiciones y costumbres se perpetuarían en el tiempo. El espacio público sería compartido por confrontaciones de identidad.

Precisamente, las escuelas públicas y los trabajos fuera de las reducciones son los espacios que los mapuche recuerdan como experiencias cruzadas por el racismo. En el exterior, las políticas liberales permitían a los mapuche ingresar a las escuelas públicas y espacios de trabajos compartidos, no existiendo aparentemente una segregación. No obstante, *sí* vivieron experiencias de racismo por el uso de vestimentas tradicionales, hablar en mapuzugún y no comprender los conocimientos de la escuela dominante. Esa disociación entre el espacio público (la escuela garantizada por la República) y el espacio privado (la reducción con la cultura mapuche) marcaría a esas generaciones.

Esa realidad cultural, determinó a los mapuche a crear sus primeras organizaciones que nacieron para defender a la "raza", como era el concepto de la época. En 1910 se crea la Sociedad Caupolicán Defensora de La Araucanía y seguiría la Federación Araucana. Estas organizaciones, que hemos denominado de derechos civiles, buscaron dentro de la institucionalidad abrir espacios de afirmación étnica y revertir el racismo. La educación se transformó en prioridad, lograr acceso a ella sería uno de sus principales objetivos, sobre todo con la finalidad de defender los últimos reductos de tierra de jueces, tinterillos y colonos.

De todos modos, los mapuche sobrevivieron en las reducciones territoriales. En algún momento de su propia historia debieron comprender el significado del "cerco", el mejor ejemplo del nuevo capitalismo que se tradujo en la marca de la propiedad privada. La provincia de Cautín se fue construyendo entre las ideas liberales. Hacia el interior todos podían mantener su propia cultura y hacia el exterior un universo compartido. Podría haber sido un laboratorio de interculturalidad, pero el racismo, como acto de segregación, venció a ese proyecto.

En cuanto al desarrollo económico de la región colonizada, las primeras décadas del siglo XX fueron pujantes, pero ya desde 1930 se estancó. Por supuesto, se culpaba del atraso a esas zonas mapuche que persistían en una vida tradicional (Oyarzún, 2019). Los nuevos gobiernos desarrollistas intentaron mecanizar los campos, los agricultores comenzaron a plantear que buenas tierras estaban mal trabajadas. El racismo se volvía a regenerar, "tierras buenas en personas malas" se convirtió en la consigna para que ambiciosos agricultores corrieran cercos y se apropiaran de los territorios mapuche (Correa, 2013).

En la década del 1960, con las reformas impulsadas por el gobierno de Jorge Alessandri, Eduardo Frei y luego de Salvador Allende, se tensión*ó* la construcción de la propiedad. Mientras el primero miraba el modelo estadounidense de desarrollo, el capitalismo propiciado por las reformas vertidas desde una de las principales potencias, el segundo gobierno recuperaba a su vez ese modelo, pero dotándolos de algunos ejemplos de las reformas agrarias llevadas adelante por México. La tensión política explotó cuando los mapuche decidieron recuperar las tierras usurpadas de la reducción por los agricultores, y luego, sobre ese proceso comenzaron a imaginar la recuperación de las tierras antiguas. Las memorias de las usurpaciones se aglutinaron en una nueva memoria que determinaría los levantamientos de 1970-1971. Las tierras mapuche no serían solo para el que la trabaja, sino también para quienes originalmente les pertenecieron. La UP desempolvó un

conflicto de carácter colonial. A recuperar lo despojado, comenzó a ser la consigna.

Los desalambres de la usurpación: recuperación de tierras mapuche durante la Unidad Popular

> *"No olvides nunca que tu mejor amigo es tu hermano de sufrimiento, aquel que no tiene tierra o tiene muy poca y no sabe cómo va a ser el día de mañana para él, su mujer y sus niños".*
>
> Heriberto Ailío (*El Diario Austral*, 1970).

La movilización mapuche durante la Unidad Popular no solo se enmarcó en la recuperación de tierras de forma directa mediante tomas de fundos o corridas de cercos, ligados o no a movimientos de izquierdas de carácter revolucionarios. Las movilizaciones mapuche articularon múltiples formas de expresión, desde la lucha en las cárceles con prisioneros mapuche que demandaban espacios para desarrollar *nguillatun* (ceremonia que da inicio a la etapa denominada de "abundancia", relacionada con la producción agrícola y en la cual se agradece o se solicita mejor bienestar para el ciclo posterior), reunidos bajo la Unión Mapuche creada en la Penitenciaría de Temuco. Otros con las tomas de la oficina de la Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN) en la misma ciudad, también por dirigentes mapuche que buscan una reforma agraria justa e inmediata. A ellos hay que sumar las movilizaciones y tomas de establecimientos educacionales organizadas por el Frente Universitario Indígena, corte de caminos rurales para impedir el paso de autoridades en las provincias de Arauco y Malleco. La prensa da cuenta de tomas de radios y medios de comunicación locales, organización de congresos nacionales mapuche y por supuesto, la constante disposición de entablar un diálogo con autoridades

institucionales mediante la escritura de cartas enviadas al gobierno y publicadas en periódicos oficiales de la época. Así como también innumerables visitas de dirigentes mapuche a Santiago y Temuco, e incluso la organización de sectores del pueblo mapuche en poblaciones de los principales centros urbanos en Chile.

Se desarrollaron una heterogeneidad de movilizaciones y expresiones organizativas durante los mil días de la vía chilena al socialismo. ¿Cuál fue la característica de las reflexiones que emanaron de movilización mapuche durante la UP en compañía de otros sectores sociales como estudiantes y campesinos chilenos? Lejos de englobar al conjunto de un pueblo, nos permite visibilizar las múltiples formas de la rebelión permanente de los mapuche a lo largo de su historia después de la Ocupación de La Araucanía. Como diría Stern, una "adaptación en resistencia" (1982).

El "desalambrar" concebido como acción directa de recuperación de tierras usurpadas mediante toma de fundos y corridas de cercos, expresaba una forma de hacer política de los mapuche. Nosotros planteamos que luego sería recuperada por los mapuche del movimiento en los albores del siglo XXI, una suerte de "memoria de la rebelión", que se expresa con las primeras recuperaciones de tierras en contexto de la Ley de Reforma Agraria 16.640, las que se gestan a partir del 28 de julio 1967, en Lumaco y Ercilla. Ambas comunidades tuvieron un alto grado de vinculación con la Confederación Nacional Campesina e Indígena de la provincia de Malleco, mediante la ocupación concreta del fundo Reñico, Didaico, Sucesión Moena, Chiguaihue y El Carmen (Correa *et al*., 2005, p. 107). Luego de ser desalojados con fuerzas policiales, comunidades vuelven a ingresar a los fundos levantando casas, trasladando animales, sembrando y volviendo a cercar.

Estas comunidades ya habían sido claves en la resistencia a la expansión del Estado nacional luego de 1862. Desde sus tierras se preparó la resistencia que los militares chilenos denominaron Ocupación de La Araucanía. Esa historia y memoria persistió en los cantos de los mapuche a lo largo del siglo XX, luego fueron

usados como parte de una memoria para la acción política. Por ello, creemos que las recuperaciones de tierras, desarrolladas con anterioridad al gobierno de la UP, durante los sucesos de Lumaco y Ercilla en 1967, fueron una experiencia que resignificaron esas transgresiones permanentes. Una pedagogía para las sucesivas acciones directas que se desarrollarán durante la profundización de la Reforma Agraria. Otra forma de movilización directa considerada como una vivencia histórica, marcará el surgimiento en los meses siguientes del período más álgido de movilización en los campos de Malleco, Arauco y Cautín, nos referimos a la corrida de cercos de la comunidad de los Quinchavil en el sector de Mañío Manzanal de Nueva Imperial, acompañados de comunidades de Lautaro, Carahue y militantes del Movimiento Campesino Revolucionario en mayo de 1970 (Gavilán, 2007; Suazo, 2018).

El objetivo fue correr los cercos, con el único propósito de recuperar 45 hectáreas usurpadas por el fundo colindante (Navarrete, 2018). Muchos de quienes desalambrarán los cercos de Mañío, difundieron el método y experiencia de recuperación de tierras bajo las ideas del *chachay* Quinchavil (*chachay* significa trato cordial a un hombre; también es usado para dar cuenta en las relaciones de parentesco al abuelo o para referirse a los adultos mayores del pueblo mapuche; su uso dependerá de la situación en las relaciones sociales). El *chachay* Quinchavil en una de las reuniones de planificación expresó:

> Miren compañeros y amigos, hace tiempo que se discute respecto a los que tenemos que hacer con nuestra tierra usurpada. Pienso que hay una sola respuesta y es simple: nuestra investigación legal con auténticos planos nos demuestra que hay un error comparado con la realidad. Hay cercos que no están donde la ley los ha reconocido, hay que ponerlos en el lugar adecuado. Siguiendo los planos, tenemos derecho, y el deber incluso, de arrancar el cerco de donde está mal puesto y levarlo hasta el límite estipulado por la ley. Debemos correr el cerco (Bastías, 2016, p. 105).

El desalambre de los cercos adquirió legitimidad en las historias de desposesión territorial del período reduccional (1883-1927), en el recuerdo de los mayores sentados en el banco del Juzgado de Indios, esperando durante décadas la recuperación legal de las tierras usurpadas por colonos y terratenientes que colindaban con las reducciones. Muchos de estos alcanzaron la muerte esperando una respuesta favorable. Porque una cosa es tener el documento y otra tener dinero para comprar alambre y cercar. Esto último para el caso de los colonos fueron parte de los acuerdos con el Estado. Así lo recuerda Jorge Lucshinger en el documental *El Despojo*: "Mis antepasados llegaron invitados y contratados por el gobierno de Chile para que vengan a trabajar la tierra en la zona de La Araucanía donde fueron radicados y se les entrego una superficie de tierras más doscientas tablas, un cajón de clavos, una yunta de bueyes" (El Despojo, 2004).

Los más jóvenes de las comunidades vieron en sus ancianos y ancianas cómo la eterna espera legal estaba acabando con últimos suspiros de los sobrevivientes a la guerra de ocupación militar de fines del siglo XIX. Félix Huentelaf, militante del Movimiento Campesino Revolucionario recuerda por qué decidieron generar estrategias de recuperación directa en Loncoche, señalando que "la gente juntaba platita para ir al juzgado de indios a ver cuándo nos iban a devolver la tierra. Lograban juntar la platita, iban dos o tres que sabían hablar un poco más, volvían y decían: 'nos fue bien, nos recibió el juez y probablemente en medio año nos van a entregar la tierra'. Yo crecí oyendo eso" (Carvajal, 2010, p. 24).

Crecer escuchando y viviendo una historia común, la de que en algún momento los jueces recibirían a los mayores. Pero ese momento, en la historia de los jóvenes Molfinqueo, Quinchavil, Ailío, Huentelaf, Traipe, entre tantas y tantos reconocidos dirigentes mapuche, nunca llegaría. De esta manera, los últimos meses de 1970 y 1971 se desarrolló una notoria alza de recuperaciones territoriales en Lautaro, Ercilla, Malleco, Angol, Victoria, Nueva Imperial, Cholchol, Carahue y Loncoche, entre otros territorios. Cuestión que

explica la visita más recordada de Salvador Allende en la ciudad de Temuco en marzo de 1971, quien, como ya señalamos, hizo un llamado a la serenidad en medio del levantamiento mapuche por las recuperaciones de tierras.

Rosendo Huenuman, militante del Partido Comunista y presidente –para aquel entonces– de la Federación de Trabajadores Agrícolas y Mapuche "Luis Emilio Recabarren", lo planteaba de la siguiente forma: "Nuestra Federación está consciente que los mapuche seguirán luchando por la solución definitiva y estará a la cabeza de las luchas por la recuperación de las tierras usurpadas al pueblo Araucano" (*El Diario Austral*, 1970, p. 9). El mismo Huenuman, recordaba lo que había escuchado desde la comunidad Pailahueque, ante las acusaciones de formación de guerrillas donde se decía: "no tenemos para comer mal podríamos tener dinero para comprar armas, hace decenas de años que venimos siendo tramitados por las autoridades encargadas de dar solución a nuestros problemas y cansados de tanto esperar nos hemos decidido hacer justicia por nuestras manos" (*El Diario Austral*, 1970, p. 9). Entonces, nos preguntamos cómo operó ese llamado a la calma en la variopinta movilización mapuche en Cautín, aquellos que exigían una profundización de la reforma agraria y la recuperación efectivas de tierras usurpadas. Levantamiento mapuche que se llevó a cabo mediante una serie de vinculaciones políticas, incluso, con las izquierdas como el Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Comunista Revolucionario y Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Si bien nuestro propósito no está relacionado directamente con problematizar sobre estas vinculaciones en profundidad, más sí, dar cuenta de las memorias mapuche como proyecto político de recuperación de tierras, valga la pena identificar encuentros y desencuentros entre mapuche y un sector de la izquierda en Chile. De esta manera, será preciso volver sobre esta experiencia al calor de las presentes luchas.

Encuentros y desencuentros entre mapuche y el Movimiento Campesino Revolucionario

> *"No me puse a discutir que el Marx aquí, que el Lenin allá, sino que había injusticia –esto del problema de la tierra– y yo veía por instinto que había que hacer algo y ese algo estaba ahí, en las acciones directas de uno mismo, no esperar soluciones desde arriba".*
>
> Rudencio Quinchavil (Carvajal, 2010, p. 28).

El MIR, el sector que despuntaba por izquierdas al gobierno de la UP, definía las relaciones económicas presentes en Chile siguiendo nociones más heterodoxas, poniendo en tensión la unívoca conflictividad entre la burguesía y el proletariado, construyendo para ello la noción de "pobres del campo y la ciudad", los cuales también tenían una función en el proceso revolucionario por medio de los "frentes de masas" o "frentes intermedios", entre ellos precisamente el Movimiento Campesino Revolucionario.

El trabajo de masas que realizó el MIR se practicó desde un análisis al problema de las clases sociales en el campo, en el que se describió tres segmentos sociales: por un lado, los "grandes y medianos" propietarios, denominados "gran burguesía rural" y caracterizados como empresarios agrícolas con grandes extensiones de tierra. Luego se encontraban los "medianos propietarios", los "comuneros mapuches" y los "pequeños propietarios chilenos"; esta distinción se fundamentaba en el origen de la pobreza y marginalidad. Mientras los pequeños propietarios chilenos "sufrían el proceso expropiatorio económico", los mapuche "además del empobrecimiento económico, se sumaban múltiples actos ilegales, en su contra, protagonizados por los grandes latifundistas, en complicidad con un Estado no solo permisivo, sino impulsor de estas acciones" (Sandoval, 2004, p. 242).

A partir de esta constatación, adquiere legitimidad la propuesta táctica de "corridas de cerco", que bajo presupuestos teóricos del MIR funcionaban de la siguiente manera: se ubicaban grandes latifundios, luego se escogía los que estuvieran rodeados por comunidades mapuche, se investigaba la usurpación de tierras de estos grandes latifundios a comunidades mapuche, luego se hacía propaganda y finalmente se procedía en la noche a correr los cercos. Andrés Pascal Allende, secretario general del MIR entre 1974 y 1985, señala en uno de sus libros que en la organización existía la convicción de que "es a partir de las reivindicaciones económicas y sociales que atañen a la *vida inmediata* de los sectores populares que los revolucionarios pueden contribuir a desarrollar la conciencia de masas" (Pascal, 2003, p. 41). La noción de vida inmediata permite esbozar una interpretación de las corridas de cerco no como resultado de una teorización abstracta, sino de una teorización sobre la realidad concreta y las dinámicas de movilización propias de las comunidades mapuche.

Estos encuentros se veían profundamente conflictuados por el desenvolvimiento de una militancia que construía marcos de realidad sobre la base de lecturas que la mayoría de las veces no consideraba la especificidad indígena. Esta última constatación queda de manifiesto en una serie de memorias sobre el período. Solo como anécdota, es posible observar lo señalado por Julián Bastías Rebolledo, encargado campesino del comité regional del MIR de Concepción en 1968, y miembro del Comité regional del mismo partido entre 1969 y 1973 (Bastías, 2016).

En sus memorias cuenta un acercamiento a la comunidad de Alberto Turín, en donde existía "un conflicto que venía de muchos años atrás y que renacía periódicamente". Fueron donde vivía Alberto Turín y les invitaron a irse a Concepción. En esta ciudad, señala Bastías: "nuestros sociólogos marxistas le dieron cursos de formación política y nuestra visión de la historia de la lucha de clases en Chile (...). Nuestros intelectuales aprovechaban para experimentar nuevas pedagogías de concientización política",

los jóvenes del MIR, bajo las percepciones de la época, buscaron "concientizar" mediante una Escuela de Cuadros a los comuneros mapuche, a quienes además se le regaló revistas y libros. Luego de unos intensos días de concientización política en Concepción, Alberto Turín retornó a su comunidad. Hoy todo esto estaría fuera de cualquier marco de acción militante, sobre todo bajo una realidad ideológica que emerge precisamente de las zonas comunitarias. Pero en aquellas épocas existía la creencia, incluso en amplios sectores revolucionarios, que el saber provenía unívocamente de un sector societal.

El contacto de los miristas en la comunidad fue un profesor, quien luego de unos días de llegado Alberto, envió una correspondencia a Concepción, solicitando a sus compañeros que no mandaran más revistas, ni diarios, porque "Alberto usa todo para hacer fuego y para otras necesidades". Ante esta realidad compleja, relata Julián Bastías en sus memorias, "los ideólogos, sociólogos y consejeros políticos del MIR se apresuraban a volver a citar a Lenin, en donde criticaba la conciencia política de campesinos y pueblos aborígenes" (2016, p. 26). Esta anécdota, a penas un respiro en todo el proceso, devela de igual modo una tensión que la izquierda revolucionaria no logró sobrepasar en aquel contexto: la distancia entre una teorización y una práctica emergida desde lecturas de otras revoluciones y la vida inmediata acontecida en Wallmapu.

Los balances sobre estos vínculos hoy son casi transversales y las memorias son elocuentes. Las comunidades mapuche participaron en las corridas de cerco y tomas de fundos, muchas de ellas organizadas por el MCR, fundamentalmente contra el proceso de usurpación y sus consecuencias en la trama del racismo, lo cual se mantenía activo en la vida inmediata y en las memorias familiares mapuche. Víctor Molfinqueo, en relación con esto, señalaba:

> en mi comunidad existía la sensación de humillación, de atropello, que se iba trasmitiendo de generación en generación (...), entonces nosotros, los jóvenes de las comunidades, sabíamos que había tie-

> rras usurpadas, porque las usurpaciones fueron anotadas en las cabezas de la gente de esa época y después se iba transmitiendo que esa tierra era de nosotros (Carvajal, 2006, p. 92).

Nosotros creemos que acá se incuba un nuevo levantamiento por parte de los mapuche. Lo entendemos como una rebelión de un grupo numeroso de personas contra una autoridad. A su vez, la entendemos como una protesta política que articula, para el caso mapuche, las memorias de la resistencia. Menos de cien años habían pasado de concluida la Ocupación de La Araucanía, las ciudades que se edificaron sobre los ex fuertes militares, las huellas de la conquista y de la resistencia continuaron transmitiéndose a través de la oralidad. Esta constituye las bases de la ideología inherente del pueblo mapuche. Parafraseando al historiador George Rudé, al decir "creencias 'inherente', nos referimos, a que los mapuche concebían poseer derechos territoriales de acuerdo a una tradición de Parlamentos, los cuales garantizaban límites políticos y soberanía. Ahí radica la ideología de la protesta de los subalternos mapuche (Rudé, 1981, pp. 36-37).

Nos arriesgamos, con las distancias que marcaron a lo largo del siglo XX las izquierdas y el movimiento mapuche, a reconocer que esa fractura, si bien vital en momentos, se concilian a la hora que pensamos sobre autonomía, autodeterminación y plurinacionalidad. Es una invitación a preguntar a las izquierdas actuales sobre su real voluntad para comprender las luchas desenvueltas por el movimiento mapuche al fragor de su propia historia, y partir cualquier posibilidad de encuentro, desde el balance desarrollado por Gustavo Marín, secretario del Comité Regional del MIR en Cautín y Malleco de 1970 a 1973, cuando indica:

> lo que nos debilito mucho en la construcción de un verdadero movimiento social mapuche-chileno revolucionario es que no logramos comprender que los mapuche eran y son mapuche, y que no solo eran una clase social, sino que eran y son un pueblo, con una

> historia, con una espiritualidad, con un lenguaje (Carvajal, 2010, p. 88).

Palabras de cierre

Las resistencias y la búsqueda permanente de debate político para construir presente y futuro para el pueblo mapuche ha sido una constante luego de la ocupación militar del siglo XIX. Lejos de una asimilación absoluta, los mapuche iniciaron distintas formas de transgresiones políticas. Algunos salieron de sus reducciones a las ciudades para sobrevivir en base a la proletarización; en esa diáspora se encontraron con otras y otros mapuche tejiendo nuevas articulaciones. Allí muchos y muchas se sindicalizaron, participando desde allí en los devenires políticos contra la explotación y el racismo.

Otros y otras en las reducciones usaron la rebelión permanente expresada en diversas formas: abigeato, desobediencia, organización, tumultos y rebeliones. Y aquel devenir, bajo la vía chilena al socialismo, no fue desatendido. Las corridas de cerco y las tomas de terreno se multiplicaron durante la Unidad Popular, develando un ímpetu de recuperación por parte del movimiento mapuche, impulso fraguado en la memoria del despojo, allí se escarchó el fragor por desmontar la estructura colonial sostenida, sobre todo, en la desposesión del territorio. Esto trajo tensiones con la "vía pacífica", las corridas de cerco comenzaron a representar un dolor de cabeza para la estructura burocrática, fue la manifestación en los campos de Wallmapu de lo que Peter Winn ha denominado las tensiones entre la "revolución por arriba" y la "revolución por abajo" al interior de la UP.

Estos procesos de recuperación por la "vía de los hechos" durante el gobierno popular se construyeron en general bajo el armazón de nuevas estructuras orgánicas, que emergieron de la vinculación con sectores de la izquierda revolucionaria. Estos encuentros

fueron tejiéndose en el andar de la apabullante contingencia política, y lograron construir lazos fundamentales mediante jóvenes militantes de izquierda que penetraron los campos de Wallmapu y se comprometieron con los procesos de recuperación territorial. Aunque claro, las lecturas del momento no siempre alcanzaron a dar el ancho, muchas veces no se comprendió en el momento que tras esos "campesinos" había un pueblo, con añoranzas de un pasado soberano que se buscaba reconstruir.

Del mismo modo, el gobierno popular generó sus iniciáticas aproximaciones al mundo mapuche bajo un lente campesinista, sin reconocer su particularidad como pueblo oprimido, esto sobre todo bajo una legislación de reforma agraria que se sostenía solo en la consigna "la tierra para quien trabaja", cuando desde la sociedad indígena había además una demanda que se sintetizaba mediante el llamado "a recuperar la tierra". Si bien ambas afirmaciones buscaban terminar con la gran propiedad rural, sus profundidades estratégicas no se dirigían hacía semejantes destinos. La primera resumía el proyecto socialista para el mundo rural, la segunda frase, en cambio, se incubaba en el proyecto histórico mapuche, en una trayectoria particular de las luchas por la tierra en Wallmapu, y es desde allí sostenemos que las recuperaciones acontecidas entre 1970 y 1973 son posibles de establecer como otro hito más de los levantamientos mapuche durante el siglo XX.

No obstante, creemos que el gobierno popular buscó comprender estas tensiones. Como ocurre en toda revolución, los tiempos se aceleraron, y en pocos años se logró avanzar como nunca antes en la historia de Chile sobre los reclamos de tierra de la sociedad mapuche. Con ello, la Unidad Popular representó un momento de tensiones creativas que impulsaron al gobierno a construir políticas específicas para un pueblo oprimido, algo que no había acontecido anteriormente con tanta profundidad.

Así, la experiencia de los mil días de Allende sin duda debe ser visitada las veces que sean necesarias para abrir reflexiones para la gestación de nuevos vínculos entre la institucionalidad, la

sociedad chilena y el pueblo mapuche. Bastantes aprendizajes, de encuentros y desencuentros, son posibles de sacar en aquella poderosa coyuntura histórica, que demuestra posibilidades de vinculación futura si logramos advertir las sinuosidades de las luchas que articulan en el caso mapuche la recuperación territorial y la búsqueda por derechos colectivos como pueblo, cuestiones que hasta hoy tienen trascendental actualidad. Misma trascendencia aferrada a la larga memoria mapuche cobran sentido en las palabras pronunciadas por Netuiñ Mapu en el *eluwün* (funeral) de Francisco y Ramón Cheuquelen, quienes fueron asesinado en la recuperación del fundo Huilío en Nueva Imperial en noviembre de 1971 y con las que comenzamos estas letras: "el camino es largo, pero es justo seguirlo ¡Mapuche, la tierra es tuya; recupérala y defiéndela! ¡Huitrañe Mapuche!".

Referencias

Bastías, J. (2016). *Memorias de la lucha campesina: Mapuches, mestizos y estudiantes.* Santiago: LOM.

Carvajal, A. (2010). *A desalambrar. Historias de mapuches y chilenos en la lucha por la tierra.* Santiago: Ayun.

Correa, M. (2010). *Las Razones del Ilkun/enojo. Memoria, despojo y criminalización en el territorio de Malleco.* Santiago: LOM.

Correa, M., R. Molina y N. Yáñez. (2005). *La reforma agraria y las tierras mapuches: Chile 1962-1975*. Santiago: LOM.

Corvalán, L. (2004). *Los Partidos políticos y el golpe de Estado del 11 de septiembre. Contribución al estudio del contexto histórico*. Caracas, Venezuela: Ediciones Universidad Bolivariana.

Foerster, R. (2018). *¿Pactos de sumisión o actos de rebelión? Una aproximación histórica y antropológica a los mapuche de la costa de Arauco, Chile*. Santiago: Pehuén Editores.

Gavilán, V. (2007). *La nación mapuche. Puelmapu ka* Gulumapu. Santiago: Ayun.

Huamanga hasta 1640. Alianza Editorial.

Llanos, C. (2014). *Cuando el pueblo unido fue vencido. Estudios sobre la vía chilena al socialismo.* Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

Navarrete, J. (2018). *Movimiento Campesino Revolucionario*. Santiago: Ediciones Escaparate.

Oyarzun, F. (2019). *La metáfora del "cinturón suicida" como una expresión de la reconfiguración del colonialismo chileno. Temuco, 1940-1953* [tesis de licenciatura, Universidad Alberto Hurtado].

Pairican, F. (2020). *Toqui. Guerra y tradición en el siglo XIX*. Santiago: Pehuén Editores.

Pairican, F. (2014). *Malon. La rebelión del movimiento mapuche*. Santiago: Pehuén Editores.

Pascal, A. (2003). *El MIR, Una Experiencia Revolucionaria*. Ediciones Cucaña.

Rudé, G. (1981). *Revuelta popular y Conciencia de clase*. España: Editorial Crítica.

Ruiz, R. (1971). *Ahora te vamos a llamar hermano.*

Sandoval, C. (2004). *Movimiento de Izquierda Revolucionara, 1970-1973. Coyunturas, Documentos y Vivencias*. Santiago: Ediciones Escaparate.

Stern, S. (1982). *Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española*

Suazo, C. (2018). *¡Nadie nos trancará el paso! Contribución a la historia del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) en la provincia de Cautín, 1967-1973*. Santiago: Londres 38 Espacio de Memoria.

Thompson, E. P. (2019) *Costumbres en Común.* Ediciones Capitán Swing.

Urrutia, M. (2019). *El desalambre de los kuyfikeche. Una aproximación a las corridas de cerco en el Fundo Nehuentúe, 1971* [tesis de licenciatura, Universidad Santiago de Chile].

Villalobos, S. (1982). *Relaciones fronterizas en la Araucanía*. Santiago: Ediciones Universidad Católica de Chile.

Winn, P. (2013). *La revolución chilena*. Santiago: LOM.

Movimiento Campesino Revolucionario

Luchas mapuche, política de clase y 'proyecto socialista' durante el gobierno de la Unidad Popular (Cautín, 1970-1971)

Jaime Navarrete Vergara

Introducción

Este estudio analiza la experiencia social y política del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) durante la llamada 'vía chilena al socialismo' (1970-1973), particularmente en la provincia de la Cautín. Describe brevemente la relación entre sectores del campesinado mapuche y la política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), cuyos antecedentes históricos se vincularon directamente con el llamado "problema indígena" del siglo XX, y dieron vida al mismo MCR. Para ello, se identifica el contexto histórico general que cobijó la relación entre diversas luchas mapuche, la política de clase definida por la izquierda chilena y el 'proyecto socialista' que impulsó el gobierno de Salvador Allende Gossens desde 1970. A continuación, se establece el vínculo entre un sector del campesinado mapuche y el MIR chileno, pues de esta confluencia organizacional surgió un particular 'frente rural' de lucha: el MCR. Luego, se reseña

su experiencia social y política al calor de la confrontación clasista suscitada tras el triunfo de Allende y la Unidad Popular (UP). En tal sentido, el estudio se centra sintéticamente en la relación entre el MCR y el 'Gobierno Popular', especialmente en el desarrollo de los Consejos Comunales Campesinos, experiencia de 'poder popular' que protagonizarían miles de campesinos mapuche y trabajadores agrícolas organizados tras las banderas de lucha del MCR.

Cuestión mapuche y reforma agraria (1967-1973)

A lo largo del siglo XX, la cuestión mapuche se caracterizó por un conflicto intermitente entre comunidades reduccionales y propietarios agrícolas (nacionales y extranjeros). Tras la ocupación de la Araucanía por parte del Estado chileno, el pueblo mapuche fue arrastrado a un proceso forzado de *campesinización* que transformó radicalmente sus modos de existencia. Así, por ejemplo, la 'radicación de indígenas' (1884-1931) se orientó a *reducir* en pequeñas extensiones de tierras al conjunto de las familias mapuche originarias, formando las llamadas 'comunidades reduccionales'. Este 'régimen reduccional' de la tierra, aunque reconocía el carácter colectivo de la propiedad mapuche, expresó una de las formas que adoptó el colonialismo chileno en la región de la Araucanía. Este proceso de 'radicación de indígenas' –que no fue sino la institucionalización del despojo territorial del pueblo mapuche– originó aproximadamente 3.048 reducciones con título de merced reconocidos por el Estado a través de una legislación particular. En la provincia de Cautín, por ejemplo, se crearon cerca de 2.900 de estas comunidades rurales, cobijándose en dicha provincia los principales y más dramáticos conflictos entre familias mapuche y determinados empresarios agrícolas. Durante las primeras décadas del siglo XX, el Estado chileno logró reducir al pueblo mapuche a 1/5 de su territorio histórico (500.000 hectáreas) (Bengoa, 1985; Pinto, 2001).

Entre 1931-1961, el Estado chileno impulsó una política que, si bien reconocía el carácter (jurídico) de la propiedad colectiva de la

tierra mapuche, tendía a su división en propiedades individuales. El espíritu de esta legislación fue funcional al propósito de 'liberalizar' las tierras indígenas en un determinado (y especulativo) mercado de tierras. La Ley 4.111 de 1931, tal como han mostrado algunas investigaciones, fue contradictoria y sujeta a los vaivenes de los grandes propietarios terratenientes de la región, particularmente los llamados Juzgados de Indios, instancias tendientes a resolver los problemas de constitución y división de las comunidades mapuche. El entramado burocrático anclado a la ley de 1931 configuró una compleja red de poder regional vinculada al "poder latifundista". Así, por ejemplo, cerca de 700 comunidades quedaron afectas a su división entre 1932-1948, al mismo tiempo que se revelaría dramáticamente el papel del empresariado agrícola sobre los jueces locales y de indios que presionaban por la realización de compra-venta de tierras mapuche y división de comunidades, todo ello a través de fraudes notariales y procesos irregulares de contratación (Bengoa, 1985; Pinto, 2000; Mallon, 2004; Correa *et al*., 2005).

Hacia la década de 1960, bajo el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez (1958-1964), el mal llamado "problema indígena" comenzó a asociarse con los conflictos generales del agro por medio del drama que vivían los pequeños propietarios agrícolas, 'afuerinos', 'medieros' y otros campesinos sin tierras. Puesto que la comunidad reduccional mapuche se fue transformando a lo largo del siglo XX, hacia el período de la reforma agraria podía constatarse que esta era parte integral de una *vasta* clase trabajadora rural en la Araucanía, aunque portara un "régimen de propiedad" distinto y una situación relativamente más "favorable" que la de otros trabajadores sin tierras. Su empobrecimiento sostenido desde la década de 1930 arrastró a grandes sectores de la sociedad rural mapuche a un proceso incipiente de proletarización (agrícola). Muchos comuneros mapuche comenzaron a vender su fuerza de trabajo en las grandes propiedades rurales de la Araucanía. En otras palabras, su economía rural de subsistencia le había llevado a inscribirse en determinadas relaciones sociales de producción. El Informe CIDA de 1966 señaló –respecto a los

mapuche– que "la escasez de tierra y capital de explotación, la falta de asistencia técnica y crediticia accesible y el bajo nivel cultural han provocado un desarrollo insuficiente, que con respecto a la mano de obra se ha traducido en una emigración que llega al 15% en los últimos 10 años" (CIDA, p. 167). Hacia la década de 1960, las comunidades territoriales mostraban dramáticamente la crisis general del campesinado mapuche: usurpación de tierras, pobreza rural, 'trabajo racializado', migración campo-ciudad, desempleo, exclusión, etc. (Mallon, 2004).

Tras la crisis de la Corporación Araucana (CA), la principal organización de referencia política en el movimiento mapuche, diversas asociaciones locales comenzaron a confluir en torno a un programa común que reivindicaba la restitución de un cierto "patrimonio territorial" y una legislación alternativa a la política de división de tierras (comunitarias). En 1964, Allende y distintos dirigentes mapuche de la Araucanía firmaron el llamado "Pacto de Cautín". En este, dirigentes socialistas y comunistas se comprometían a incorporar las demandas del movimiento mapuche al programa del Frente de Acción Popular (FRAP) y, por tanto, a la restitución de sus tierras usurpadas, ley indígena, acceso a salud, educación y vivienda, entre otras demandas de igual urgencia. En 1969, Allende y la UP ratificarían este acuerdo en el I Congreso Nacional Mapuche y definieron sus principales elementos, a saber: la restitución del "patrimonio territorial" y una nueva ley indígena que protegiera sus tierras comunitarias, ampliación de la cabida territorial, acceso a salud y vivienda, becas estudiantiles, insumos agrícolas (tecnología, créditos), etc. (Foerster y Montecino, 1988, cap. IV). Durante el II Congreso Nacional Mapuche de 1970, que había reunido a los más importantes dirigentes locales y a los personeros del 'Gobierno Popular', las organizaciones volvieron a plantear su preocupación por la situación de la sociedad rural mapuche y su deseo de articularse al 'proyecto socialista' liderado por Allende.

La historia social y política de la Ley Indígena de 1972 ha sido escasamente estudiada por los historiadores chilenos. Sin embargo,

cabe constatar que Allende se orientó a recoger esa demanda y despachó rápidamente un proyecto de ley al Congreso Nacional que cristalizaría en la Ley Indígena de 1972, cuya normativa permitió restituir tierras mapuche, ampliar la cabida territorial de la comunidad y reconocer la identidad cultural de los indígenas (Samaniego y Ruiz, 2009). No obstante, esta ley no logró definir con claridad sus derechos políticos y territoriales, particularmente frente al colonialismo y el Estado chileno (Mallon, 2014). Aun así, frente al "liderazgo mapuche urbano", un sector del campesinado mapuche que provenía de las mismas comunidades territoriales en conflicto había comenzado a tomar *para sí* la iniciativa y protagonismo de la movilización (Martínez, 2009). Lo hizo desde la acción directa, presionando a los funcionarios estatales a través de las llamadas 'corridas de cerco' y 'tomas' de fundo para recuperar sus tierras ancestrales. Tal como se había señalado, el auge de dirigentes mapuche de extracción rural fue estimulado por la emergencia del proceso de reforma agraria, el cual convidaba por primera vez al campesinado como actor colectivo deliberativo (Mallon, 2009; Martínez, 2009).

Por su parte, la reforma agraria abierta por el gobierno de Eduardo Frei Montalva en 1967, aunque estaba orientada a un tipo particular de trabajador agrícola, el inquilino, influyó de igual modo en la problemática territorial mapuche. Diversos dirigentes mapuche, ahora provenientes cada vez más de las mismas comunidades en conflictos territoriales, demandaban su incorporación a las nuevas políticas agrarias y organizaron acciones directas tendientes a presionar por la restitución de sus tierras usurpadas. Así, la reforma agraria permitió que un sector del campesinado mapuche estableciera determinadas relaciones y alianzas sociopolíticas con el resto de los trabajadores agrícolas no-mapuche y otras organizaciones partidarias (DC, PC, PS, MAPU, MIR), y que –al mismo tiempo– se revelara con cierta complejidad una cultura y solidaridad rural que fue fundamental en la formación del MCR (Mallon, 2009). Así, por ejemplo, minifundistas, campesinos sin tierras, 'afuerinos', 'medieros', comuneros mapuche, entre una diversidad de trabajadores rurales,

comenzaron a presionar al gobierno de Frei Montalva por su incorporación democrática al proceso de reforma agraria. El ciclo 1967-1970 de luchas campesinas transformó a la reforma agraria en un verdadero conflicto de clases (Marín, 1973).

Sin embargo, el proceso se profundizaría todavía más durante la llamada 'vía chilena al socialismo' (1970-1973). En cierto modo, el Programa Agrario de la UP no había propuesto una ruptura radical con los lineamientos generales del proyecto agrario impulsado por la DC entre 1967-1970. En realidad, la política rural del 'Gobierno Popular' se orientó por el reordenamiento de algunos lineamientos a partir de los siguientes objetivos, a saber: a) modernización de la estructura productiva del agro; b) eliminación del latifundio; c) creación de nuevas formas de explotación y de propiedad de la tierra; y d) participación del campesinado en las políticas rurales. Sin crear una legislación alternativa, se abocó a implementar los mecanismos institucionales que le permitieron dinamizar particularmente la política de expropiación de tierras, cuyo objetivo se orientaba a socavar la estructura rural latifundista, tal como se había propuesto en la ley de reforma agraria de 1967. Y mientras no se dictara una nueva ley indígena, el gobierno de Allende se abocaría a solucionar la dimensión rural del "problema indígena" a través de la legislación agraria de Frei (Correa *et al*., 2004).

"Dos cauces se juntan": el campesinado mapuche y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria

Tal como se adelantó previamente, hacia la década de 1960 la situación general del campesinado mapuche se había hecho crítica. El proceso agrario abierto por Frei Montalva desde 1967 activó la organización y lucha de un nuevo actor colectivo mapuche: la 'comunidad reduccional'. Aunque diversos dirigentes se habían reunido en la Confederación de Sociedades Mapuches –la cual entregaría finalmente el 'proyecto de ley indígena' al Presidente Allende en 1970–, un

sector importante de las comunidades comenzó a sobrepasar el liderazgo tradicional mapuche (Martínez, 2009; Mallon, 2009). En este proceso, campesinos mapuche comenzaron a articular sus demandas históricas a las fuerzas políticas populares y progresistas. Paulatinamente, ante las escasas respuestas otorgadas por los juzgados de indios a efecto de restituir sus tierras usurpadas, los dirigentes mapuche que provenían de comunidades rurales se orientaron por una estrategia de acción directa. En las provincias de Arauco, Malleco y Cautín las 'tomas' de fundo mostraron una nueva forma de acción colectiva (Correa *et al*., 2005). El apoyo de la militancia de izquierda y la 'juventud universitaria' no se hizo esperar. Entre 1967-1970, al calor de la reforma agraria demócrata cristiana, se desarrolló un proceso particular de confluencia social, política y orgánica entre un sector del campesinado mapuche y la militancia regional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), especialmente en la provincia de Cautín (Navarrete, 2017, pp. 46-84). Allí surgió, como *simbiosis organizacional* de esa relación, el MCR.

Desde su fundación en 1965, el MIR había definido un programa socialista y una determinada estrategia insurreccional, la cual cuestionaba categóricamente los lineamientos políticos y estratégicos de la llamada 'izquierda tradicional' (Palieraki, 2014). Así fue que, en el marco de la reforma agraria, el MIR criticó la ley demócrata cristiana de 1967, al señalar que se marginaba de su acceso a las grandes mayorías del campesinado, considerando que se orientaba exclusivamente al inquilino, es decir, a un tipo particular de trabajador rural (Huerta, 1988). Bajo ese marco de referencia, el MIR tenía un lineamiento que reivindicaba la incorporación de todos los trabajadores rurales al proceso de reforma agraria, sin distinción social. Esa perspectiva política, programática e ideológica fue clara:

> El MIR ha aprobado en su Congreso de Fundación (1965) un programa revolucionario integral que plantea la REFORMA AGRARIA como objetivo de la revolución chilena socialista. Ha señalado como objetivo la nacionalización del suelo y la expropiación sin indemni-

> zación de los latifundios. Ha sostenido que la Reforma Agraria será realmente drástica, masiva y acelerada en cuanto las propias masas campesinas insurrectas se lancen a la conquista de la tierra, transformando así el proceso en algo resonante y dinámico. Sabe que la "entrega de la tierra a quienes trabajan" no vendrá por obra y gracia de reformas legales burguesas o por los canales de la "vía pacífica" y parlamentaria, sino que será el resultado de una lucha extra-parlamentaria de los propios campesinos que asegurarán la plenitud de sus derechos y un auge de la producción cuando sean asesorados por los técnicos y la fraternidad proletaria afianzada en la conquista del poder político y en la transformación socialista, bajo las normas de una planificación de la vida naciona" (*Estrategia*, 1966, p. 8).

Tal como se señaló previamente, la reforma agraria había comenzado a estimular la organización y lucha del campesinado mapuche y, por tanto, al MIR le correspondió inscribir su política de clase en este contexto específico. La posición del MIR respecto a la cuestión mapuche, cuya centralidad descansaba sobre las definiciones clasistas de la política marxista, ignoró su especificidad histórica y cultural. Aunque diversas memorias militantes han insistido en que el MIR habría reconocido la particularidad del "problema indígena" *in situ*, la organización no logró articular los derechos políticos, territoriales y culturales del pueblo mapuche a un determinado programa de lucha con carácter socialista (Gavilán, 2007; Marín, 2009; Bastías, 2009). El problema particular de usurpación de tierras mapuche, que hundía sus raíces en la instauración de colonialismo chileno en La Araucanía, fue homologado por el MIR a los problemas generales del minifundio, es decir, al drama de los pequeños propietarios agrícolas (mapuche y no-mapuche) y otros campesinos empobrecidos y sin acceso a tierras. En última instancia, el MIR desarrolló una lectura política de clase común al conjunto de los trabajadores agrícolas. Esta posición fue contradictoria respecto al campesinado mapuche, pues al mismo tiempo que abría un espacio de lucha para los comuneros indígenas (bajo un "frente de clase" articulado al MCR), el MIR no logró vincular sus derechos políticos y territoriales a un

programa socialista más integral y de cuestionamiento del colonialismo chileno.

Con todo, el MIR se había abocado a definir una línea particular de "inserción social". Se trataba de una línea de inserción que tenía estrecha relación con su 'estrategia insurreccional', es decir, con el plan general de lucha armada, cuyo eje estratégico habría de desenvolverse en las zonas rurales del país ('guerra rural de guerrillas'). En tal sentido, el MIR se orientó por un "plan de intervención táctica" que tuvo por propósito crear futuras "bases políticas campesinas" que lograsen sostener una cierta experiencia guerrillera en el campo (Palieraki, 2014). Así, sectores del Comité Regional de Concepción y Cautín se abocaron a la tarea de apoyar las luchas campesinas del nuevo ciclo político, estableciendo contactos específicos en las zonas rurales de Arauco y Cautín. Entre 1967-1970, un grupo especial del Comité Regional del MIR en Cautín logró establecer una "base territorial" en determinadas comunidades mapuche, particularmente en las comunas de Carahue, Nueva Imperial, Cunco y Lautaro, tras un sostenido proceso de confianza y afinidad política que se había originado al elaborar una estrategia de acción acorde sus intereses y conflictos. Hacia 1969-1970, dirigentes mapuche provenientes de estas comunidades propusieron al MIR una estrategia de movilización directa para recuperar las tierras por la vía de los hechos. En este contexto fue que surgieron las llamadas 'corridas de cerco', una forma particular de acción colectiva que comenzaron a impulsar campesinos mapuche con el objetivo de remover los deslindes de sus reducciones hacia los límites originales que indicaba el título de merced y así comprobar la misma usurpación territorial. En este contexto, la militancia del MIR chileno se abocó a apoyar tales movilizaciones (Cárcamo, 2015; Navarrete, 2018; Suazo, 2018), creando las condiciones para la emergencia de una plataforma territorial que se proponía coordinar el conjunto de las luchas comunitarias mapuche.

Movimiento Campesino Revolucionario: política de clase y 'proyecto socialista'

Tras el triunfo de Allende en 1970, los dirigentes mapuche que comenzaban a organizar las 'corridas de cerco', apoyados por militantes urbanos del MIR, se convocaron a discutir el nuevo escenario político que involucraba el ascenso de un 'Gobierno Popular'. En tal contexto, decidieron estructurar orgánicamente esta incipiente plataforma de coordinación territorial. Así se fundó el MCR, cuyo manifiesto inaugural sintetizó las principales conclusiones de ese encuentro:

> 1. El Movimiento Campesino Revolucionario es la organización de campesinos que luchan por la tierra de manera decidida y consciente.
>
> 2. Esta organización campesina surgió de la lucha. Allí está su raíz. En su origen estaba formada por mapuche que por las noches desarrollaban las corridas de cerco para recuperar las tierras usurpadas. Pero hoy día todos los campesinos sin distinción de raza, sexo, edad, religión o partido político, están presentes en las filas del Movimiento Campesino Revolucionario.
>
> 3. En consecuencia, para ser miembro del Movimiento Campesino Revolucionario se requieren dos condiciones: a) ser campesino, b) estar totalmente dispuesto a luchar por la tierra y a terminar con el latifundio.
>
> 4. Los pequeños colonos y asalariado agrícolas luchan en el seno de su sindicato por el aumento de sus salarios. Los pequeños propietarios luchan en el seno de los comités para obtener créditos baratos. El salario y el crédito son útiles pero insuficientes. Son solo migas. El Movimiento Campesino Revolucionario marcha a la cabeza mostrando el camino, abriendo la brecha, diciendo a todos los campesinos y obreros agrícolas: ¡Hay que lucha por la tierra!
>
> 5. El Movimiento Campesino Revolucionario lucha para terminar con el poder de los propietarios terratenientes y de la burguesía agra-

ria. Los campesinos organizados en el Movimiento Campesino Revolucionario luchan para terminar con todos aquellos que mantienen el monopolio de la tierra y que son responsables del hambre, del frío, del saqueo, de la cesantía, en una palabra, de la explotación.

6. Luchando por la tierra, los campesinos organizados en el Movimiento Campesino Revolucionario se instalan al lado de los obreros, pobladores, estudiantes y soldados formando así una alianza revolucionaria poderosa obrero-campesina que permita a las fuerzas populares pasar a la ofensiva para tomar el poder y construir el socialismo en Chile.

7. Haciendo la revolución, el Movimiento Campesino Revolucionario avanza hacia la formación del hombre nuevo, un hombre de conciencia socialista que no busca la explotación de sus compañeros. Un hombre nuevo que parte del principio que ¡La tierra es un bien debe pertenecer a todos los trabajadores!

8. Este manifiesto ha sido aprobado por el Primer Congreso del Movimiento Campesino Revolucionario de Cautín, que tuvo lugar en Temuco, en septiembre de 1970.

¡Tierra o muerte!
¡Nadie nos trancará el paso!".

(MCR, "Manifiesto inaugural", 12 de septiembre 1970)

Tras el ascenso del 'Gobierno Popular', las movilizaciones mapuche por la recuperación de sus tierras usurpadas entrarían en un nuevo ciclo reivindicatorio. Tal como se dijo previamente, la reforma agraria había abierto las puertas al creciente protagonismo de comunidades rurales en detrimento de los viejos líderes mapuche urbanos y así fueron tomando un liderazgo inusitado mediante las 'corridas de cerco' y otras 'tomas' de fundo que demandaban la ampliación de la cabida territorial y su emergente participación en la 'vía chilena al socialismo'. En efecto, las comunidades reduccionales no solo se abocarían a la demanda por la restitución de sus tierras usurpadas, sino que también a exigir derechos políticos, territoriales y culturales que

ampliaban sustancialmente las reivindicaciones económico-sociales del resto de los trabajadores agrícolas no-mapuche de la región.

Sin embargo, esta articulación entre las luchas mapuche y la política de clase impulsada por la izquierda chilena también reveló una alianza social y política que las comunidades mapuche impulsaron junto a otros sectores específicos del campesinado. Así, por ejemplo, el 'congreso constituyente' que dio vida al MCR mostraría esa alianza, advirtiendo que esta organización "estaba formada [al comienzo] por mapuche que por las noches desarrollaban las corridas de cerco para recuperar las tierras usurpadas. Pero [que] hoy día todos los campesinos sin distinción de raza, sexo, edad, religión o partido político, están presentes en las filas del Movimiento Campesino Revolucionario" (Ibíd.). Víctor Molfinqueo, quien saliera electo parte de la directiva política nacional del MCR, resumió esa enorme reflexión en las siguientes palabras:

> recuerdo [que] fue un temor, en la formación del MCR, que el nombre fuera Movimiento Indígena Revolucionario y nadie estuvo de acuerdo [...] que fuera así porque no queríamos que este movimiento se transformara en un movimiento indígena. [...] Nosotros decíamos campesinos, porque esta palabra buscaba aliados y nosotros no queríamos que la lucha fuera particularmente indígena [...] porque en el campo hay gente que no es indígena y que igual estaba con nosotros [...], además que esto estaba engarzado en este proceso de Reforma Agraria que se vivía en el país. Nosotros pensábamos que este MCR tenía que expandirse a otras provincias también, no tenía por qué quedarse solamente en las zonas mapuche. Sabíamos que en la zona central no había mapuche, pero que sí había campesinos y que si también necesitaban beneficiarse de la Reforma Agraria. Por eso el nombre era más amplio, buscábamos ampliar, captar otras inquietudes, por eso Movimiento Campesino Revolucionario (Carvajal, 2010, p. 109).

En efecto, la voluntad colectiva mapuche expresada en ese encuentro, en un ciclo emergente de apertura democrática y movilización

popular, se orientó por la formación de un amplio "polo de clase" que habría de convocar a diversos sectores rurales a luchar por su incorporación democrática a la reforma agraria. Esta alianza social y política entre campesinos mapuche, trabajadores sin tierras y militantes urbanos del MIR fortaleció considerablemente el desarrollo del MCR.

El "verano caliente" de 1971

Entre diciembre de 1970 y marzo de 1971, la relación entre el "problema indígena" y la reforma agraria quedó sellada por las revueltas mapuche que organizaron comunidades territoriales con el apoyo explícito del MIR, especialmente en las provincias de Cautín y Valdivia. El auge de las 'corridas de cerco' y una serie de ocupaciones de fundos caracterizaron la experiencia del MCR en esta álgida coyuntura sociopolítica abierta tras el triunfo de Allende. Aunque el MIR había expuesto su deseo de "apoyar críticamente" al 'Gobierno Popular', su defensa de la independencia de la clase trabajadora y la movilización de masas no quedó en entredicho (*Punto Final*, 1970, 13 octubre).

Así, el 16 de diciembre de 1970, la reducción Huenchual, en la comuna de Lautaro, ocupó el fundo "El Vergel", propiedad de Miguel Rioseco Espinoza. El jueves 17 del mismo mes, un centenar de campesinos mapuche ocuparía el fundo "Poco a Poco", del propietario José Daetwyler, también en la comuna de Lautaro. Tres días más tarde, el 20 de diciembre, la comunidad mapuche de Nicolás Ailío, en la comuna de Puerto Saavedra, ocupó el fundo Rucalán, propiedad de Juan Bautista Landarretche, un importante empresario agrícola de la región. A fines de diciembre se desarrollarían una serie de otras 'corridas de cerco' que alteraron el escenario político regional y nacional (*Punto Final*, 1971, 19 enero). Más tarde, el 15 de enero de 1971, en la comuna de Villarrica, se repitió la misma situación, al ocupar terrenos usurpados en manos particulares, acción que fue

apoyada por diferentes activistas urbanos y militantes de izquierda en el marco de los llamados "trabajos de verano" impulsado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC). El 1 de febrero la provincia volvió a presenciar la ocupación de 4 fundos agrícolas por parte de comunidades mapuche, revindicando un total de 560 hectáreas, lo cual comenzaba a inquietar tanto al 'Gobierno Popular' como a los propios terratenientes locales. Todas estas comunidades, tras su coordinación bajo las banderas del MCR, demandaban la restitución de sus tierras usurpadas, una nueva ley indígena y la ampliación de la cabida territorial, al mismo tiempo que denunciaban conflictos laborales y reivindicaban su derecho a la salud, educación y vivienda. (*El Austral*, 21-12-1970, pp. 1 y 8; *El Austral*, 18-12-1970, pp. 1 y 6; *El Austral*, 16-1-1971, p. 7; *El Austral*, 2-2-1971, p. 7).

En febrero de 1971, en medio de este proceso de radicalización popular, el MCR organizó su Primer Congreso Nacional, convocando a campesinos mapuche y trabajadores agrícolas marginados por la reforma agraria. Así comenzó a tomar forma un programa político que cuestionaba la ley agraria demócrata cristiana implementada por la UP. En efecto, demandaban lo siguiente:

> 1. Expropiación de todos los fundos con más de 40 hectáreas de riego básico (HRB).
>
> 2. Expropiación de animales y maquinarias junto con la tierra.
>
> 3. No derecho a reserva de tierra a los patrones.
>
> 4. No pago por la tierra expropiada
>
> 5. Apoyo crediticio a los medianos propietarios.
>
> 6. Elección democrática de los Consejos Comunales Campesinos.
>
> 7. Una nueva ley de Reforma Agraria de carácter revolucionaria (Gavilán, 2007, p. 147; *Punto Final*, 1971, 2 marzo, pp. 10-11).

Esta situación trasladó el centro de los conflictos agrarios a la región de la Araucanía. En efecto, el 3 de enero de 1971, a través de un

comunicado oficial, Allende ordenó instalar el Ministerio de Agricultura en Temuco –capital de la provincia de Cautín– y constituyó una 'Comisión de Restitución de Tierras Mapuche Usurpadas'. Al mismo tiempo, los funcionarios de gobierno se orientaron a promover una solución "en terreno", visitando los diversos fundos ocupados. Efectivamente, la movilización directa de las comunidades reduccionales obligaba al gobierno a entregar una pronta solución, mientras la presión opositora de los propietarios agrícolas exigía aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Aun así, el 5 de febrero de 1971, el ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, señalaba con sinceridad: "A mí me admira que las tomas de fundos no sean más, dada la situación real de pobreza en que viven en la zona. Nosotros hemos planteado que la motivación de muchos de estos conflictos está en el no cumplimiento de las leyes sociales" (*Punto Final*, 1971, 16 febrero, p. 25). Por todo ello, y en exigida coordinación con todas las instituciones orientadas al "problema indígena" (DASIN, IDI, Juzgados de Indios), las autoridades de gobierno comenzaron a planificar junto a los organismos de reforma agraria (CORA, INDAP, ICIRA) una justa y pronta solución a los problemas más sentidos por el pueblo mapuche.

Esta comisión se propuso rápidamente restituir las tierras usurpadas a los 'títulos de merced' y atender la integridad territorial de las comunidades reduccionales, focalizando su labor en las comunas que presentaban mayor nivel de conflictividad. Entre ellas se contaban, por ejemplo, Lautaro, Nueva Imperial, Carahue, Cunco y Loncoche, zonas en las que el MIR-MCR mantenía una presencia relativamente significativa (Steenland, 1977; Mallon, 2004; Navarrete, 2018; Suazo, 2018). Ante la presión de las comunidades y el "apoyo crítico" del MIR respecto de la política *allendista*, la respuesta del gobierno no se hizo esperar. Sin embargo, durante el llamado "verano caliente" de 1971, Allende y Chonchol insistieron en la necesidad de encausar el proceso de transformaciones por la vía constitucional: "El Gobierno reitera su disposición democrática para enfrentar los problemas sociales del país a través [sic] del esfuerzo común y

solidario de todos los sectores afectados, en que se está expresando en una política invariable de contacto directo con ellos; pero reafirma, también, la decisión de actuar con energía ante cualquier intento ilegítimo por provocar desorden, sembrar la intranquilidad y desconocer la ley o la autoridad, actitudes que solo están favoreciendo a los enemigos del Gobierno Popular" (Archivo Regional de la Araucanía, Fondo Intendencia de Cautín, Vol. 286, Circular N° 44, 2-12-1970, pp. 2-3). Así, la decisión gubernamental se inclinó por una atención urgente de la situación, puesto que Allende no contaba con los canales institucionales adecuados (la ley indígena de 1961 se orientaba por la división de las tierras reduccionales), mostrando una voluntad política por atenuar los conflictos entre comunidades mapuche y propietarios agrícolas.

Los difíciles caminos de la 'vía chilena al socialismo': el caso de los Consejos Comunales Campesinos

El 21 de diciembre de 1970, Allende anunció la creación del Consejo Nacional Campesino (CNC), organismo cuyo objetivo sería asesorar al Ministerio de Agricultura y la CORA en la planificación de las políticas agrarias: "Quiero [...] destacar la importancia que para nosotros tiene la creación del Consejo Nacional Campesino. [...] Frente a una realidad injusta a la que, con una auténtica y profunda Reforma Agraria, nosotros pondremos término y con ello, la presencia del campesino será activa en la vida de Chile" (*El Siglo*, 1970, 22 diciembre, p. 8). Según el historiador Hugo Cancino, esta iniciativa no era sino la voluntad del 'Gobierno Popular' por "inscribir la movilización y participación campesina en el proceso de reforma agraria dentro de los marcos de su proyecto programático-estratégico" (Cancino, 1988, p. 163). Allende dispuso que su constitución se realizara a través de instancias regionales y provinciales, practicando una inédita descentralización de la política estatal nacional. Así fue que el 21 de diciembre de 1970, Allende y Chonchol firmaron por

decreto la creación de los Consejos Campesinos. Específicamente, los Consejos Campesinos Provinciales y Comunales se abocarían a: 1) Los planes de desarrollo rural, producción agropecuaria y reforma agraria; 2) Las políticas generales en materia de precios, créditos, comercialización, tributación y otras, en relación con el desarrollo de la producción y la reforma agraria; 3) Los programas y presupuestos de los organismos públicos, semifiscales y de administración autónoma del sector agrícola; 4) Las políticas generales en materia social y económica del sector laboral campesino" (Affonso, 1972, p. 150). Allende decidió organizar el CNC considerando solo dos representantes de las principales organizaciones sindicales del agro, a saber: a) las Confederaciones Campesinas ("Triunfo Campesino", "Ranquil", "La Libertad"; "Conf. Nacional de Asentamientos Eduardo Frei", "Conf. Nacional de Cooperativas Campesinas", y pequeños agricultores); b) la Confederación de Asentamientos; c) la Confederación de Cooperativas Agrícolas y la de pequeños propietarios. Este decreto presidencial marginaba, en la práctica, a vastos sectores del campesinado.

El 15 de enero de 1971, en la misma ciudad de Temuco, y dada la presencia allí del ministro Chonchol, se formó el Consejo Provincial Campesino de Cautín. Esta forma "legal" de constitución de los CCC ("por decreto") se impuso en medio de las revueltas campesinas y mapuche a partir de los lineamientos ya mencionados (dos representantes sindicales por organización campesina). Así, el despliegue de los funcionarios gubernamentales comenzaría a expresar algunas de las tensiones centrales que se comenzaron a suscitarse entre la UP y los movimientos social-populares en el marco de un 'gobierno de los trabajadores'. Aquí pueden encontrarse una de las problemáticas más interesantes de la 'vía chilena al socialismo', a saber: el carácter de la participación política popular en el proceso de cambios liderado por Allende (Cancino, 1988). En tal sentido, el historiador Peter Winn se refirió al ciclo 1970-1973 a partir de las tensiones entre una "revolución desde arriba" y una "revolución desde abajo", es decir, entre los lineamientos impulsados por el gobierno de la UP y la voluntad

del movimiento de masas por ampliar su participación en la toma de decisiones políticas (Winn, 2004). Por tal motivo, el caso del campesinado mapuche, al calor de la reforma agraria y la discusión de una nueva ley indígena, ilustraba significativamente la propulsión histórica del movimiento popular chileno. En efecto, el carácter que adoptaría el CNC desencadenó, especialmente en la provincia de Cautín, una revuelta social sin precedentes. Pues lo que allí se había decretado, en realidad, no era sino la exclusión social y política de vastos sectores del campesinado respecto del proceso agrario nacional: trabajadores no sindicalizados, desempleados, 'afuerinos', 'medieros' y, sobre todo, comuneros mapuche (Cancino, 1988).

En efecto, al día siguiente, el 16 de enero, en la comuna de Lautaro, se formó el Consejo Comunal Campesino "desde las bases", planteando una impugnación a los lineamientos del 'Gobierno Popular' y la constitución del CPC de Cautín. Puesto que "los Consejos Comunales y Provinciales Campesinos llamados "legales" o "por decreto" fueron organizados verticalmente por los funcionarios de los organismos del agro, INDAP o ICIRA, quienes convocaban a los dirigentes de las confederaciones y sindicatos agrícolas a constituirlos", más de mil campesinos mapuche y trabajadores agrícolas organizados tras el MCR desafiaron la constitución "por decreto" del CPC de Cautín (Cancino, 1988, p. 163). Organizados en grupos de 80 a 100 personas, todos reunidos en el Liceo Municipal de Lautaro, los campesinos debatieron sus problemas más urgentes e inmediatos para presentar un "pliego popular". Este proceso de constitución particular de los CCC ("desde las bases") comenzó a inaugurar una incipiente práctica de *democracia directa y popular* que complicó al 'Gobierno Popular'. Vicente Mariqueo –militante mapuche y funcionario de la CORA durante ese período– se refirió a la emergencia de esa 'creación popular' en los siguientes términos:

> Las elecciones se hacían por votación directa, a estas elecciones asistía la mayoría absoluta de los campesinos, yo estuve presente [...] en las elecciones en algunas comunas de la provincia de Cautín, eran enormes multitudes campesinas que acudían a elegir a sus dirigen-

> tes y a tomar parte en las discusiones por la búsqueda de soluciones a sus problemas. Una vez realizadas las elecciones se hizo notar de inmediato que surgía una organización de nuevo tipo, con nuevos dirigentes, todos líderes naturales que conocían el problema de la explotación (Mariqueo, 1979, p. 180).

Tal como se ha señalado, este acto de autonomía política y de clase representaría "la tentativa más importante realizada hasta la fecha de transformar rápidamente la participación popular subordinada en una participación popular ejecutiva y autónoma, planteando directamente el problema del poder popular como problema real de práctica política, como cambio sustantivo de calidad del proceso democrático chileno" (Cantoni, 1972, pp. 89-92). Así se fueron revelando las características principales de esta emergente "revolución desde abajo", cuyo ímpetu reflejaba la autonomía de una base social no subordinada a los lineamientos partidarios del 'Gobierno Popular'. En este contexto, campesinos mapuche y trabajadores agrícolas organizados por el MCR plantearon enfáticamente:

> No queremos consejos que estén amarrados por arriba.
>
> Porque no vamos a imaginar a ningún alto ejecutivo, a ningún alto funcionario, a ningún alto dirigente que venga a estar encima de nosotros.
>
> Porque los consejos son la herramienta de todos los obreros del campo y todos los campesinos.
>
> Que sean los consejos los que decidan los fundos que hay que expropiar, los créditos que hay que conseguir, las máquinas que hay que controlar.
>
> O sea, los consejos deben estar encima de la burocracia de los funcionarios y no seguir más explotados y humillados por el rico.
>
> ¡LOS CONSEJOS SON HERRAMIENTA PARA LUCHAR CONTRA LOS PATRONES, LA HERRAMIENTA PARA CONQUISTAR EL PODER! (*El Miliciano*, 7, agosto de 1972).

De este modo, al calor de la movilización rural en la provincia de Cautín, las distintas fuerzas políticas de izquierda se abocaron a intervenir en la coyuntura social y política suscitada por las revueltas mapuche, generando un debate político y estratégico que caracterizó al conjunto de la 'vía chilena al socialismo'.

Para el MIR, la incorporación democrática de ese sector mayoritario de campesinos pobres era fundamental para constituir una 'fuerza social revolucionaria' que sostuviera el proceso de transformaciones socialistas. Andrés Pascal Allende, por ejemplo –miembro de la Comisión Política del MIR–, señaló a ese respecto:

> Las reformas impulsadas desde el gobierno, que eran profundas y eran avanzadas, debían apoyarse en la movilización social ofensiva, para lo cual [...] había que profundizarlas. En tal sentido, el Programa de la UP era insuficiente [...] La Reforma Agraria, limitada a fundos de más de 80 hectáreas, favorecía a 50.000 inquilinos y medieros y dejaba sin acceso a la tierra a 95.000 obreros permanentes, a 190.000 minifundistas y a 360.000 trabajadores agrícolas ocasionales y desocupados. [...] No se trataba solamente de aumentar la base de apoyo electoral del gobierno popular. Para el MIR era necesario construir una base de poder popular organizada desde abajo, una democracia directa y participativa, y también defender el proceso desarrollando una política activa para ganar apoyo en sectores de las Fuerzas Armadas y crear condiciones de autodefensa del movimiento popular (Pascal Allende, 2013, pp. 226-227).

Por su parte, el PC se mostró en desacuerdo frente a la constitución de los CCC "desde las bases". Para la dirección política comunista era fundamental la conducción del proceso a partir de una política gubernamental centralizada en las esferas estatales: "[El PC] definía a los CCC como organismos asesores del gobierno y de las instituciones del agro [...] la participación campesina controlada verticalmente se mantendría dentro de los límites de permisibilidad necesarios para impedir el desborde del programa agrario" (Cancino, 1988, p. 188). Sin embargo, la creciente movilización popular había logrado

descentralizar rápidamente la actividad política tradicional, exigiendo una nueva relación entre el gobierno y los trabajadores agrícolas. Incluso, determinadas bases campesinas vinculadas al PC en la provincia de Cautín se mostraron renuentes a la subordinación partidaria. Cuando se discutió la política de expropiación de tierras, militantes campesinos del PC plantearon la necesidad de reducir el límite normativo de las 80 HRB, incluso sugiriendo eliminar el "derecho a reserva" de los patrones (*El Siglo*, 1971, 11 enero, p. 6).

El PS, por su lado, se orientó por la defensa de las experiencias embrionarias de 'poder popular' y cuestionó la burocratización de las instituciones agrarias, abocándose a fortalecer la organización de los trabajadores y sus diversas formas de acción colectiva en el marco de las revueltas mapuche. Así, apoyaron las movilizaciones agrarias y defendieron la constitución de los CCC "desde las bases", razón por la cual un sector de sus militantes estableció ciertas afinidades con el MIR y determinadas organizaciones políticas, en lo relativo a constituir un cierto "polo revolucionario" que contrarrestara la ofensiva patronal y terrateniente (Cancino, 1988, pp. 168-169; Pinto, 2005, pp. 30-32). Por tales motivos, exigieron que la UP "se defina claramente como un gobierno que está en la trinchera del pueblo, en la trinchera de los trabajadores y no como un gobierno que hace equilibrios entre los trabajadores y ciertos sectores de la burguesía" (*Tierra Socialista*, 1971, mayo). Considerando que el PS apoyaba la elección democrática y directa de los delegados que debían representar a los campesinos en el CNC, convergiendo de este modo con los planteamientos impulsados por el MIR y el MCR, los dirigentes comunistas se abrieron a un cierto diálogo con los campesinos movilizados.

Finalmente, en marzo de 1971, y con vistas a la realización del Primer Congreso Provincial Campesino de Cautín, pudo apaciguarse la tensión. Coincidiendo con la visita de Allende a Temuco y otras comunas de la provincia, distintos dirigentes de base impugnaron el carácter del CPC, al cuestionarse su constitución y funcionamiento, con lo cual se logró disolverlo y formar uno sobre la base de dos representantes por cada CCC ("por decreto" y "desde las bases"). Esta

fórmula de 'Consejos Ampliados' (o "mixtos") se desarrollaron fundamentalmente en la provincia de Cautín, constatándose una participación y funcionamiento de más del 80% de los CCC reconocidos por el Ministerio de Agricultura. Así, el 'Gobierno Popular' canalizó la ola de movilización campesina al mismo tiempo que logró amortiguar nuevas formas de radicalización popular (*El Austral*, 1971, 28 marzo, pp. 1, 3, 5-8 y 10). En adelante, sobre todo hacia 1972-1973, la ofensiva de las clases dominantes y, particularmente, los terratenientes, obligarían a un cierto reflujo del movimiento campesino. Sin embargo, de acuerdo con la normativa entonces vigente, la UP había logrado cumplir a cabalidad su programa agrario, al expropiar la mayoría de los fundos que superaban las 80 HRB. Hacia 1973, Allende había devuelvo al pueblo mapuche al menos 198.000 hectáreas usurpadas, es decir, el 85% de las tierras expropiadas (Correa *et al*., 2005, p. 208). En este contexto, el desarrollo de los CCC de Cautín, especialmente aquellos formados "desde las bases", se caracterizó por las continuas polémicas y debates sostenidos con el gobierno de Allende, el cual a medida que se afianzaba un bloque social anti-UP en las zonas rurales, dejó cada vez más entrampados a los campesinos organizados por el MCR, cuya alianza crítica con un sector del gobierno comenzó a debilitarse. Las distintas posiciones políticas, programáticas y estratégicas al interior de la izquierda complejizaron esa experiencia, no obstante, contribuyeron al fortalecimiento de un actor colectivo largamente postergado por el Estado chileno: el campesinado mapuche.

Referencias

Affonso, A. (1972). Esbozo histórico del movimiento campesino chileno. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales*, 3.

Archivo Regional de la Araucanía, Fondo Intendencia de Cautín, Vol. 286, Circular N° 44, 2-XII-1970, pp. 2-3.

Barraclough, S., A. Affonso, S. Hernández, H. Zemelman, S. Gómez y J. Bengoa. (1973). *Chile: Reforma Agraria y Gobierno Popular*. Chile: Ediciones Periferia.

Bastías, J (2009). *Memorias de la lucha campesina. Cristiano, mestizo y tomador de fundo*. Santiago: LOM Ediciones.

Bengoa, J. (1985). *Historia del pueblo mapuche. Siglos XIX y XX*. Santiago: SUR Ediciones.

Cancino, H. (1988). *La problemática del poder popular en el proceso de la vía chilena al socialismo, 1970-1973*. Dinamarca: Aarhus University Press.

Cantoni, W. (1972). Poder popular en el agro chileno. *Cuadernos de la Realidad Nacional*, 11.

Carvajal, A. (comp.). (2010). *A desalambrar. Historias de chilenos y mapuches en la lucha por la tierra*. Colombia: Ayún.

Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola. (1966). *Tenencia de la tierra y desarrollo socio-económico del sector agrícola*. CIDA.

Correa, M., N. Yáñez y R. Molina. (2005). *La reforma agraria y las tierras mapuches. Chile, 1962-1975.* Santiago: LOM Ediciones.

El Austral, 18 de diciembre de 1970, pp. 1 y 6.

El Austral, 21 de diciembre de 1970, pp. 1 y 8.

El Austral, 16 de enero de 1971, p. 7.

El Austral, 2 de febrero de 1971, p. 7.

El Austral, 28 de marzo de 1971, pp. 1, 3, 5-6, 7-8 y 10.

El Miliciano, N° 7, agosto de 1972.

El Siglo, 22 de diciembre de 1970, p. 8.

El Siglo, 11 de enero de 1971, p. 6

Estrategia, 1966, Año I, N° 2, p. 8.

Foerster, R. y S. Montecino. (1988). *Organizaciones, líderes y contiendas mapuches (1900-1970).* Centro de Estudios de la Mujer (CEM).

Gavilán, V. (2007). *La Nación Mapuche. Puelmapu ka Gulumapu*. Colombia: Ayún.

Huerta, M. A. (1989). *Otro agro para Chile. Historia de la reforma agraria en el proceso social y político*. CISEC-CESOC.

Loveman, B. (1976). *Struggle in the countryside. Politics and rural labor in Chile, 1919-1973*. Bloomington, IN: Indiana University Press.

Mallon, F. (2004). *La sangre del copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno, 1906-2001.* Santiago: LOM Ediciones.

Marín, J. C. (1973). Las tomas (1970-1972). *Marxismo y Revolución*, 1.

Marín, G. (2009). *Relatos de José Peralta*. Colombia: Ayún.

Mariqueo, V. (1979). *El pueblo mapuche* (*Indianidad y descolonización en América Latina. Documentos de la Segunda Reunión de Barbados*). México DF: Nueva Imagen.

Martínez, C. (2009). Comunidades y redes de participación mapuche en el siglo XX: nuevos actores étnicos, doble contingencia y esfera pública, en C. Martínez y M. Estrada (eds.). *Las disputas por la etnicidad en América Latina: movilizaciones indígenas en Chiapas y Araucanía*). Santiago: Catalonia.

Navarrete Vergara, J. (2018). *Movimiento Campesino Revolucionario (Cautín, 1970-1973).* Santiago: Escaparate.

Palieraki, E. (2014). ¡La revolución ya viene! El MIR chileno en los años sesenta. Santiago: LOM Ediciones.

Pascal, A. (2013). Chile: 1971, en P. Milos (ed.). *Chile 1971: el primer año de gobierno de la Unidad Popular*). Santiago: Universidad Alberto Hurtado.

Pinto, J. (2000). *La formación del Estado y la nación, y el pueblo mapuche. De la inclusión a la exclusión*. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana/ DIBAM.

Pinto, J. (ed). (2005). *Cuando hicimos historia: la experiencia de la Unidad Popular*. Santiago: LOM Ediciones.

Punto Final, 13 de octubre de 1970, Año V, N° 115.

Punto Final, 19 de enero de 1971, Año V, N° 122, pp. 2-7.

Punto Final, 16 de febrero de 1971, N° 124, p. 25.

Punto Final, Año V, N° 125, 2 de marzo de 1971, pp. 10-11.

Steenland, K. (1977). *Agrarian reform under Allende: peasant revolt in the south*. Albuquerque, NM: University of New Mexico Press.

Suazo, C. (2018). ¡Nadie nos trancará el paso! Contribución a la historia del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) en la provincia de Cautín (1967-1973). Santiago: Londres 38, espacio de memorias.

Tierra Socialista, 2, mayo de 1971.

Valdivia, V. (2014). Chile: ¿un país de "excepción"? la Ley de Control de Armas y la máquina represiva puesta en marcha, en J. Pinto (ed.). *Fiesta y drama. Nuevas historias de la Unidad Popular*). Santiago: LOM Ediciones.

Winn, P. (2004). *Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo*, Santiago: LOM Ediciones.

De corridas de cerco al control territorial

Panorámica de la resistencia mapuche durante tres décadas, del Movimiento Campesino Revolucionario a la Coordinadora Arauko-Malleko (1970-2002)

Filip Escudero Quiroz-Aminao y Paula Malhue Torres

a la memoria del Longko Osvaldo Cheuquepan Colipe
que nos dejó en agosto, ahora hace resonar su pifilka desde
wenümapu con sus antiguos guiando el choyke purrun...

Introducción

Para comprender lo que sucede en el mundo mapuche a raíz del mal llamado "conflicto mapuche" es necesario remontarnos al siglo XIX, particularmente al proceso de la invasión militar de la Araucanía, acontecida entre 1861-1883. No obstante, el cronista militar Leandro Navarro ([1909], 2008) sostiene que la ocupación se extendió hasta el año 1887, cuando las tropas dejan el territorio mapuche, lo que permite la inserción desmesurada de colonos extranjeros.

El proceso de despojo territorial dejó en el mundo mapuche una herida colonial irreparable. Esta problemática se conforma por la necesidad de respaldar los intereses económicos y políticos de la clase dominante chilena, mostrando claramente tintes raciales contra la población mapuche. Las violencias coloniales se expanden después de la derrota del Füta Malon (alzamiento general 1881), una derrota colonial propinada por los chilenos "vencedores". El historiador mapuche Héctor Nahuelpán sostiene que "el colonialismo, como fenómeno histórico entrelazado con el capitalismo y como un tipo particular de contradicción diacrónica, no fue desmantelado con la formación de los Estados en Chile y Argentina" (2012, p. 121).

La construcción de los Estados nacionales en América Latina significó una nueva usurpación de la propiedad de la tierra indígena, siendo heredadas las relaciones de poder colonial a las nuevas autoridades, la élite criolla: "la independencia sudamericana se presenta decidida por las necesidades del desarrollo occidental o, mejor dicho capitalista" (Mariátegui, 1994, p. 9). En esta línea, los Estado-nación de Chile y Argentina presentaron elementos constitutivos del estado moderno: soberanía, territorio y población. La sujeción estatal del siglo XIX formalizó reconfiguración de las estructuras coloniales de dominación mediante la imposición institucional y la materialización del carácter expansivo en ámbitos políticos, ideológicos, económicos, sociales, etc. La incorporación forzada de los pueblos indígenas al Estado chileno restableció la condición de subalternidad mapuche y favoreció la emergencia capitalista:

> Habitar históricamente en el Estado y la Nación que habría desmantelado las relaciones coloniales, no significa lo mismo para todas las personas, más aún para aquellos grupos que fueron incorporados forzosamente, despojados de sus territorios y sometido sus cuerpos a una disciplina colonial que legitima la violencia y las jerarquías socio-raciales, bajo las nociones de civilización, progreso o desarrollo" (Nahuelpán, 2012, p. 124).

Las clases dominantes chilenas del siglo XIX forjaron lógicas de exclusión y control hacia los sectores subalternos. Por consiguiente, aparecen en este siglo los primeros discursos de poder que asociaron a los sectores populares e indígenas con imaginarios de barbarie y delincuencia a través de la prensa escrita hacia la opinión pública: "Estigmatizado desde una óptica hegemónica en función de la clase, la etnia, y el género, pasaría a ser representado como un grupo que, a raíz de sus vicios, conductas y costumbres, podía poner en peligro el funcionamiento de la república" (León, 2015, p. 55). La construcción de mecanismos ideológicos (imaginario) permitió la justificación de la violencia política y el despojo territorial mapuche.

Los Estados chileno y argentino tuvieron la oportunidad de no perpetuar la situación colonial hacia los pueblos indígenas a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, el contexto latinoamericano de mediados de siglo propició la continuidad colonial, con ello también de la Araucanía. El colonialismo tardío produce la relación entre "vencedores y vencidos", repercutiendo en las decisiones políticas frente al "problema del indio" durante el siglo XX y comienzos del XXI. En complicidad a las ideas de Nahuelpán, el historiador mapuche José Marimán argumentó:

> En ese proceso constructor de la nación estatal y de una etnia estatal, el Estado chileno –y el argentino también– no solo no abolió las relaciones coloniales y liberó al "indio", sino que más allá de ello continuó forzando la asimilación de las poblaciones étnicamente diferenciadas, para construir con ingredientes culturales europeos hegemónicos la nación chilena del presente (los argentinos hicieron lo mismo de su lado) (2012, p. 45).

Durante la primera mitad del siglo XX, con los procesos de conquista y despojo territorial, el pueblo mapuche germina la problemática (aferrada a no desaparecer) por tierra y territorio. Para la década de 1930, se complica la situación mapuche; el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) da por terminado el proceso de radicación y las disputas por la tierra se acrecientan, comienzan los juicios por

tierra, en muchos casos pasaron décadas de litigios con débiles soluciones por parte del Estado chileno.

La realidad de las comunidades mapuche durante el siglo XX se resume en la continuación del despojo. En primera instancia, la embestida fue conducida a sangre y fuego por los colonizadores. En segunda instancia, la continuación de esta labor prosiguió con los colonos chilenos y europeos, quienes fueron amparados por las leyes de la época. En este contexto se fue acumulando una memoria corta (Braudel, 1986; Rivera Cusicanqui, 2010) en las comunidades mapuche. Posteriormente, en la década de 1960 la panorámica general no cambia en la Araucanía, pese a las reformas agrarias de Alessandri y Frei, la pobreza y el problema de tierras era latente en este espacio. El grave error de la reforma agraria fue no contemplar al pueblo mapuche como sujetos de derecho, ni tampoco concebir al mapuche aparte del campesinado chileno. En este contexto, la vasta problemática mapuche se arraiga en las políticas públicas chilenas, lo que provocó un nuevo alzamiento mapuche en los campos del viejo *Wallmapu* colonizado en el verano de 1971.

La influencia del MIR, la Unidad Popular y el despliegue del Movimiento Campesino Revolucionario en Cautín

Desde el año 1967 comienzan a llegar a las comunidades mapuche estudiantes penquistas vinculados al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que vieron la necesidad de conocer la realidad de las reducciones mapuche. De esta manera, se inició un complejo trabajo político para buscar nuevas formas de obtener militantes, y también, una manera de escuchar las demandas que acarreaban las comunidades mapuche para esos años. Frente a lo anterior Cristian Suazo manifestó:

> En su Declaración de principios (1965), el MIR no se refirió explícitamente a las comunidades indígenas como sector social ni a la

> histórica lucha del pueblo mapuche. (...) los máximos dirigentes e intelectuales del partido para interpretar la lucha de clases en Chile definían al proletariado como el sujeto revolucionario de vanguardia y dejaba al pueblo mapuche fuera de todo análisis (2018, p. 59).

Estos estudios sobre la realidad mapuche en Arauco abrieron la posibilidad de ingresar derechamente a conocer las experiencias políticas y las necesidades económicas que cruzaban a las realidades mapuche en el siglo XX: "El MIR elaboró una definición concreta con respecto a las demandas indígenas, a partir de las relaciones intersubjetivas o interpersonales que sus militantes establecieron con los campesinos mapuche" (Suazo, 2018, p. 62).

El Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) ejecutó un trabajo ideológico significativo en las comunidades mapuche, que buscó militantes para enfrentar el poder patronal del latifundio en los campos de Malleco y Cautín. Debemos añadir que el MCR contó con las herramientas necesarias para efectuar una política revolucionaria y reivindicativa, que abordó la labor de desalambrar. Según Jaime Navarrete:

> Entre mayo-septiembre de 1970, un grupo de comunidades territoriales de Cautín, apoyadas por el MIR, realizó más de 40 corridas de cerco. (...). Por ello, el problema histórico de usurpación constituía el "hecho fundacional" del MCR, revelándose la articulación entre las demandas históricas del movimiento mapuche y el "proyecto clasista" impulsado por el MIR (2018, p. 82).

En este punto, el gran error de la izquierda revolucionaria en aquellos años fue asumir que pueblo mapuche y sus demandas se funden en el campesinado pobre, no reconociendo la autonomía del pueblo, lo que reproduce la situación colonial de dominación en las reducciones mapuche en la década de 1970. Lo anterior se debe al encandilamiento político del MIR-MCR con respecto a la lucha por la tierra, lo cual omitió completamente las problemáticas históricas mapuche. El "proyecto clasista" (Navarrete, 2018) tiene mucho de

esto, el MIR a partir de 1967 trató de comprender y hacer suyas las demandas históricas, para erradicar la situación de extrema pobreza del pueblo mapuche; aunque no logra dar mayor profundidad a estas interrogantes, volviendo a perpetuar el colonialismo y la situación colonial instaurada a fuego desde 1883, respecto a esto Marie Juliette Urrutia expone que:

> Nuestro motivo no es seguir inferiorizando al indígena, sino que visibilizar sus estrategias de agencia para enfrentar la situación de colonizados. Dotar a estas estrategias de dinamismo y heterogeneidad. Además de dar cuenta de otra zona gris de las historias mapuche, la cual se enmarca en la relación entre política de clase, Pueblo Mapuche y memoria histórica (2018, p. 43).

Un aporte relevante del MCR hacia el pueblo mapuche tiene vínculo con la adopción de nuevas estrategias políticas facilitadas por los jóvenes penquistas desde 1967 en las reducciones. Las nuevas herramientas políticas contribuyeron a gestar un cambio de mentalidad mapuche en la década de 1970, pasando desde la categoría subalterna de servidumbre, peonaje y "campesinado", a ser soberanos de las tierras. Un claro ejemplo es lo sucedido en el verano de 1971, donde se producen una gran cantidad de tomas de fundos donde estas acciones del MCR acelerarían la reforma agraria de la UP y su programa político: "el protagonismo de campesinos mapuche, a través de una movilización rural apoyada por el MIR-MCR demostraban una voluntad colectiva por incorporarse al proceso de reforma agraria" (Navarrete, 2018, p. 97).

Sin dudas el MCR fue un acelerante en la reforma agraria de Salvador Allende. El detonante de esta agilización eran las corridas de cercos, este accionar político se vuelve permanente en el tiempo, lo que produce los enfrentamientos entre las reducciones mapuche y los latifundistas (agricultores y colonos). Por lo tanto, las acciones subversivas propinadas por fracciones del pueblo mapuche (sumergido por esos años en la extrema pobreza) dieron un duro revés al latifundio, se comenzó a levantar un pueblo activo a recuperar lo

que por derecho les pertenece, aquel derecho ancestral de la tierra. El destacado dirigente y militante mapuche del MCR: "Heriberto Ailío sostenía en 1970 que habría de estar atentos puesto que algún día se ajustarían "cuentas con todos aquellos que mataron de hambre a tus padres y a tus abuelos" (*Diario Austral de Temuco*, 31 de diciembre 1970, p. 8, en Urrutia, 2018, p. 74).

Las corridas de cerco del año 1971 traerían consigo un gran cambio para la reforma agraria de Allende, principalmente por dos aspectos: el primero, tiene relación con el traslado de la Corporación Reforma Agraria (CORA) a Temuco, rompiendo con el clásico centralismo chileno político; mientras que él segundo se vincula con el triunfo político del MIR-MCR, que permitió la elaboración de una nueva legislación indígena:

> la Ley Indígena 17.729 pone término a la división de las comunidades y a los juzgados de indios, reemplazándolos por el Instituto de Desarrollo Indígena, institución que asume sus funciones, (...), la devolución de tierras usurpadas en un número de 68.381 hectáreas, y en ocasiones la designación de tierras a las familias mapuche que no las poseyeran (Mella, 2007, pp. 61-62).

La Ley 17.729 desataría una contra-violencia latifundista en los territorios reasignados al pueblo mapuche, desplegándose multitudinarios enfrentamientos. Esta realidad prosiguió hasta la llegada de dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, período donde se agudizó la persecución a los dirigentes mapuche militantes de izquierda, así también, aquellos no militantes. Algunos militares pactaron una complicidad con los latifundistas, colaborando a la persecución desmesurada hacia los mapuche, en muchos casos prestando sus dependencias para la realización de estos despreciables actos. Muchos de los mapuche asesinados no figuran en ninguna de las listas de detenidos desaparecidos, debido a que este macabro acto no se realizó en dependencias militares ni en comisarías de carabineros.

Contrarreforma y el movimiento mapuche en la dictadura cívico-militar chilena

Entre los años 1974 a 1979 se desarrolló en Chile, especialmente en la Araucanía, la contrarreforma agraria. A través del mandato militar comenzó la persecución a quienes apoyaron o fueron beneficiados por la reforma y la expropiación de fundos. Galvarino Raiman relata que "del 74 al 78 no hubo ningún movimiento social, no hubo organización, todo neutral, hasta que surgen las primeras organizaciones mapuche, en el año 79" (Correa *et al*., 2010, p.194). Para el pueblo mapuche la contrarreforma agraria significó en primer lugar, una aguda represión de parte de militares en complicidad de latifundistas y patrones, acusando a los mapuche de ser comunistas o parte del proceso de reforma agraria, (muchos de ellos sin tener participación política fueron asesinados o desaparecidos por militares); en segundo lugar, la re-usurpación de las tierras recuperadas y entregadas a los antiguos usurpadores.

El año 1974 la dictadura cívico-militar en Chile emprende la cimentación del primer pilar neoliberal y el más poderoso económicamente, el Decreto de fomento forestal Nº 701. Esta política pública financiaba el 25% del fomento forestal, poniendo a disposición de las empresas los suelos fértiles de *Wallmapu.* Debido al poco interés de los inversores, en 1975 se reformula el Decreto de Ley pasando a financiar el 75% de las plantaciones forestales: "ha sido un actor económico activo en todo el proceso como parte de un modelo de desarrollo que niega al mapuche" (Tricot, 2017, p. 85).

En Chile, las forestales han obtenido privilegios económicos debido a las garantías entregadas por la dictadura cívico-militar. La gran explosión económica de este rubro ha llenado las arcas de la clase empresarial desde 1979, hasta ubicarse en nuestros días como el segundo ingreso económico del país ¿Cuál es el costo? La erosión de los suelos, destrucción de ecosistemas, pérdida de recursos hídricos, incendios. En resumidas cuentas, para el pueblo mapuche la industria

forestal significa pérdida de *lawen* (remedio o medicina), flora y fauna nativa, enfermedades, y la pobreza.

El segundo golpe propinado por la dictadura, el Decreto de Ley 2568, denominada también norma jurídica de división de comunidades mapuche de 1978, trajo consigo variados problemas entre las comunidades. En resumen, si algún miembro de una comunidad solicitaba la división obtenía un título de propiedad individual. Lo anterior produjo, por una parte, la erradicación de la propiedad colectiva de la tierra, y por otra, la homogenización del pueblo mapuche al chileno, sin consulta previa: "la nueva ley implica un nuevo enfoque: en Chile no hay indígenas, son todos chilenos" (Correa *et al*., 2010, p. 194).

La reorganización mapuche, se planta la semilla del movimiento autonomista

En 1979 nacen los Centros Culturales Mapuche, que a contar de 1981 pasan a llamarse Ad-Mapu, una organización mapuche vinculada al Partido Comunista. Durante la década de 1980 se mantuvieron como firmes opositores al DL-2568. Otra de las luchas que libró esta organización fue el rescate de la identidad cultural como su propuesta política. Para los años 1982 y 1983 uno de sus dirigentes históricos, José Santos Millao, declara en una conferencia de prensa que "la autonomía no se trataba de levantar una muralla en la Araucanía, sino de vivir conforme a nuestra cultura, a nuestro estilo, educando a nuestros hijos en nuestra lengua y priorizando los valores de nuestra raza" (Pairican, 2016, p. 67). El mismo Santos Millao, en el año 1983 agrega que "Ad-Mapu estableció la aspiración de construir un proyecto de carácter histórico: la autodeterminación como pueblo" (*El Mercurio*, 8 de octubre de 1982, en Pairican, 2016, p. 67).

Las primeras semillas fueron sembradas por Ad-Mapu y sus dirigencias. Sin duda la organización mapuche no logró su cometido

de erradicar el DL-2568, pero indirectamente quebró la uninacionalidad chilena por medio del rescate cultural en la década de 1980:

> El concepto de "autonomía" y "autodeterminación", emerge como la maduración del mundo indígena y la decisión de tomar un rol político en la sociedad del presente. (...) esta "bandera de lucha", los pueblos indígenas se insertaron en la búsqueda de algo aún más complejo, el derecho a la libre determinación que posibilita un mecanismo "concreto para resolver el conflicto étnico-nacional (Pairican, 2012, p. 18).

En la década de 1990 irrumpe en la escena política el Awkiñ Wallmapu Ngulam o Consejo de Todas las Tierras, quien levantó un interesante programa político. Esta organización muestra una serie de actos que remecen la escena mapuche y chilena. Un claro ejemplo, es la comisión 500 años de resistencia indígena: la creación de la bandera nacional mapuche, la *Wenüfoye* (canelo del cielo), que irrumpió en octubre de 1992 como una muestra de autonomía. El diseño se discutió en Neuquén y Temuco junto a la Confederación Mapuche de Neuquén entre los años 1991-1992.

El panorama político entre el Estado chileno y el pueblo mapuche se estaba tensionando conforme pasaban los años, debido principalmente a la dilatada política indígena de Aylwin, desde el Acuerdo político de Nueva Imperial, realizado el 1 de diciembre de 1989, entre el candidato presidencial Patricio Aylwin y los pueblos indígenas. El presidente se comprometió a diseñar un proyecto de Ley Indígena, la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), sumado al reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Lo primero se cumplió tardíamente, cuando el mandatario se encontraba concluyendo su período: "En las postrimerías de 1993, cuando las elecciones asomaban su cabeza, fue aprobada la Ley Indígena sin reforma constitucional y sin el convenio internacional ratificado" (Pairican, 2012, p. 25). Mientras que José Bengoa refiriéndose a la Ley dice: "Por cierto que el lenguaje se cambió radicalmente, suprimiendo el concepto de "Pueblo" y reemplazándolo por "Etnias", "Culturas" y cualquier forma ambigua y de

ninguna consecuencia jurídica ni nacional, ni internacional (2014, pp. 253-254).

La ley indígena 19.253, publicada el 5 de octubre de 1993, no contempló el reconocimiento de los derechos fundamentales como pueblos indígenas, sino más bien es un proyecto ambicioso que terminó siendo todo lo contrario, como manifiesta Pedro Canales Tapia: "las consecuencias mayores de este fracaso legislativo resuenan día tras día en la vida de miles de comuneros mapuche y sus familias" (1998, p. 51). Las grandes falencias que tuvo esta dilatada ley, discutida por tres años y cercenada en el congreso, fue no reconocer la calidad de pueblo sino de etnia, entregando una connotación menor y superponiéndose el Estado y pueblo chileno sobre las "etnias", estableciéndose una relación vertical entre Chile y los Pueblos Indígenas. Este "fracaso legislativo" evidencia la carencia de voluntad política y de las necesidades de los pueblos indígenas en Chile.

El pueblo mapuche en la siguiente administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) recibiría un segundo golpe, no conforme el Estado con la mediocre Ley Indígena. Sin problemas, se aprueba rápidamente el proyecto hidroeléctrico Ralco en 1997, que afectó derechamente con las comunidades mapuche-pehuenche. A esta situación se anexaba el avance del decreto DL-701, siendo las forestales quienes cada vez ganaban más territorio a las comunidades, lo que materializó un cúmulo de atropellos de la clase política chilena. Sin embargo, fueron contrarrestados con el accionar político mapuche y los ataques a tres camiones madereros de la forestal Arauco en la comuna de Lumaco en 1997.

Con el ataque a los camiones por parte de la Coordinadora Territorial Arauco (antecesor de la Coordinadora Arauco-Malleco), se dan por quebradas nuevamente las relaciones entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, dando inicio a un nuevo escenario de mayores violencias, y de un giro radical en la protesta mapuche, pasando del diálogo hacia acciones directas, en palabras de Filip Escudero, el autor propone que "Desde 1978 se vienen planteando distintas ideas para repensar la autodeterminación del pueblo mapuche; todo este largo

recorrido hasta 1997 se piensa como una gran siembra ideológica" (2019, p. 34).

Lumako y las llamas de la liberación nacional mapuche

En los albores del siglo XXI y al calor del resurgir del movimiento político mapuche lo que significó la articulación de diversas organizaciones que incorporaron el derecho a la autonomía y la autodeterminación: Aukiñ Wallmapu Ngulam (AWNg), y la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM). El referente político de la autodeterminación de Aukiñ Wallmapu Ngulam procedió de la organización Ad-Mapu que proclamó la resistencia al capitalismo neoliberal impuesto por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet: "Esta organización había surgido desde los Centros Culturales Mapuche, colectivo que emergió en oposición al decreto de ley 2.568 de 1979, que rompió los últimos espacios de sociabilidad comunitaria que persistían luego de la Ocupación de La Araucanía" (Pairican, 2014, p. 19).

En este contexto histórico el accionar mapuche estremeció a la comuna de Lumaco en diciembre del 1997, tras la quema de tres camiones de la Forestal Arauco. Los sucesos de Lumaco marcaron el inició de nuevas formas de acción política colectiva en fracciones del pueblo mapuche: "un lento camino al término simbólico del estado subalterno, ayudando a construir un nuevo tipo de militante en la transición democrática: el "mapuchista". (Pairican, 2013, p. 56). Este hecho generó un salto cualitativo en la politización radical mapuche en los inicios de la transición a la democracia que selló:

> una nueva etapa en el movimiento y en la historia del pueblo mapuche, brotando con mayor claridad la utopía autodeterminista. Fue un desarrollo ideológico de un sector del pueblo Mapuche que señaló su anticapitalismo como un eje articulador, y la resistencia, se simboli-

> zó en la irrupción de la violencia política como instrumento para la reconstrucción de lo que llamaron Wallmapu (Pairican, 2013, p. 35)

El accionar político de Lumaco produce otras formas de hacer resistencia a través de la violencia política que se instauró como un mecanismo de autodefensa mapuche contra la represión policial (allanamientos policiales en las comunidades y detención forzada de población mapuche), pero también, es la movilización por tierra y territorio ancestral. La violencia política mapuche emergió para enfrentar a las violencias coloniales ejecutadas por el Estado chileno en *Wallmapu* a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

Posteriormente, a fines del año 1998, las reducciones mapuche-pehuenche del Alto Biobío denunciaron el impacto ambiental del proyecto Ralco de Endesa. En este contexto, las voces de las hermanas Quintremán retuvieron la atención nacional e internacional a través de la lucha y resistencia por la defensa territorial-ambiental pehuenche, que estancó entre 1997 al 2004, el proyecto de la hidroeléctrica Ralco: "nosotros no nos saldremos de nuestras tierras, la tierra es nuestra madre y está viva, nosotros la defenderemos y pelearemos hasta el final por ella, nuestra tierra no tiene precio, nuestro nguillatun no tiene precio" (Pairican, 2014, p. 129).

La vehemencia de las luchas políticas mapuche a fines del siglo XX posibilitó que la Coordinadora Territorial Arauco al término de 1998, diera a conocer sus planteamientos políticos-estratégicos de liberación nacional mapuche autonomista y revolucionaria por la búsqueda de la reconstrucción de *Wallmapu*: "nos dará la calidad de nación para reconstruir todos los demás aspectos de nuestra condición de pueblo" (Pairican, 2014, p. 133). En este escenario político nace oficialmente la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que inició nuevas vías de acción directa para descolonizar el pueblo nación mapuche, y defender el *itrofilmongen* (todas las formas de vida sin excepción), del neocolonialismo estatal y la hegemonía empresarial, mediante la recuperación y control territorial a través de los Órganos de Resistencia Territorial (ORT). Prontamente, diversas comunidades en conflicto

comenzaron a conformar el proyecto político-estratégico de la CAM, con la firme convicción de recomponer el territorio histórico usurpado desde Ocupación de la Araucanía de finales del siglo XIX hasta la expropiación neoliberal del siglo XXI.

El posicionamiento político de liberación nacional de la CAM ha proyectado desde su germinación una confrontación directa hacia el modelo neoliberal, por lo tanto, ha articulado un eje anticapitalista frente aquellas manifestaciones concretas de este sistema económico: las forestales, los agricultores, y los colonos:

> enfrentar la desintegración de su Mundo, una forma de hacerlo fue incorporar a su catálogo de acciones la violencia política, siendo la CAM la primera organización que asumió públicamente, posteriormente se sumarían otras comunidades u organizaciones que adoptarían sus propias vías y métodos de lucha en diferentes territorios (Tricot, 2017, p.88).

Desde 1999 la utilización de la violencia política para la CAM fue en escalada. Esta vía de acción directa permitiría cumplir el objetivo de la liberación nacional dentro del territorio histórico mapuche en manos del mercado capitalista; para lograr su proyecto político rechazaron la vía institucional. En este sentido, las políticas multiculturales iniciadas en el gobierno de Aylwin continuaron con el mandato de Ricardo Lagos (2000-2006) en 2001 a través de la política pública denominada Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas. En palabras del historiador mapuche Filip Escudero, "El Nuevo Mal-trato colonial chileno" (2019) fue una movida política que busco desviar las demandas históricas mapuche. Ricardo Lagos, intentó establecer un equilibrio con las demandas colectivas de los pueblos indígenas bajo el sistema económico neoliberal chileno. Sin embargo, la militarización de *Wallmapu* y la violencia estatal aumentó, evidente con la Operación Paciencia.

La arremetida policial del Estado chileno atacó fuertemente la vía insurrecta de la Coordinadora Arauco-Malleco a través de la Operación Paciencia. La respuesta estatal de Lagos al "conflicto mapuche"

del siglo XXI, se relacionó con la utilización de la contra-violencia política para desarticular el despertar subalterno mapuche. Este maniobrar represivo encarceló y criminalizó a un número considerable de miembros de la CAM capturados bajo el alero del terrorismo. Desde principios de 2002, la creación del imaginario terrorista de la Coordinadora Arauco-Malleco fue un elemento común de los medios de comunicación chilenos y la opinión pública; aquellos realizaron una labor incesante por justificar el actuar policial del Estado en las comunidades mapuche. Posteriormente, dentro del marco de la Operación Paciencia es asesinado por la fuerza policial, Alex Lemun Saavedra de 17 años, un joven mapuche defensor del territorio histórico, quien muere en la recuperación del fundo Santa Alicia en Ercilla en noviembre de 2002, naciendo amargamente el primer mártir del movimiento autonomista mapuche.

Conclusiones

El accionar político mapuche desde fines del siglo XX y principios del XXI, analizado en este documento pasó por tres tiempos y contextos históricos. En el primer tiempo histórico, entre 1970-1973, observamos que la polarización ideológica generada por la guerra fría generó la inclinación de parcialidades del movimiento mapuche a los postulados de la izquierda revolucionaria dirigidos por el MIR. Desde 1967 comenzó un trabajo ideológico que cuajó en 1970 con la formación del MCR, las acciones directas materializadas en las Corridas de Cerco marcaron un precedente histórico que remeció el programa agrario de la UP. Posteriormente, este sueño de libertad mapuche materializada en los movimientos de cercos es truncado por la dictadura cívico-militar chilena, un período de extrema violencia que impregna a las memorias mapuche de lóbregos recuerdos sobre aquel doloroso momento post Ocupación de La Araucanía.

El segundo tiempo histórico tiene relación con la siembra ideológica desde 1978-1997; se entiende de esta forma debido al rescate

cultural y político que establecieron los Centros Culturales Mapuche desde 1979 y Ad-Mapu a partir de 1981. Tomando estas experiencias políticas, el Awkiñ Wallmapu Ngulam desde 1991 y bajo el contexto latinoamericano se generan las primeras experiencias autonomistas del pueblo mapuche.

El tercer tiempo histórico, desde 1997-2002, se vinculó con el accionar político perpetrado en los sucesos de Lumaco, que fragmentó nuevamente las relaciones con el Estado-nación de Chile. A finales de 1998 nace la Coordinadora Arauco-Malleco con idearios político-estratégicos emparentados a las ideas de control territorial y la liberación nacional, pavimentando el camino autodeterminista por medio de acciones directas. El accionar político de la CAM fue violentamente interrumpido por la Ley Antiterrorista y la Operación Paciencia, que en 2002, asesinaría al joven mapuche Alex Lemus. Aquel episodio marcó con sangre mapuche la política del "Nuevo Trato". Hasta nuestros días el Estado chileno sigue cobrando vidas mapuche por no querer solucionar conflictos. En resumen, la poca voluntad política está rodeada por intereses económicos.

Referencias

Bengoa, J. (2014). *Mapuche, colonos y el Estado Nacional.* Santiago: Catalonia.

Canales, P. (1998). Una legislación "winka" para los mapuches. *Revista Mensaje,* 49-51.

Correa, M., y E. Mella. (2010). *Las Razones del ilkun/enojo. Memoria, despojo y criminalización en el territorio mapuche de Malleco.* Santiago: LOM Ediciones y Observatorio de Derechos de lo Pueblos Indígenas.

Escudero Quiroz-Aminao, F. (2019). La otra sangre quría exterminarnos. Querían amansarnos los wingkas...criminalización del movimiento mapuche de cara al siglo XXI (1997-2004). *Revista Contribuciones Científicas y Tecnológicas, 44*(1), 33-41.

León. M. (2017) *Construyendo un sujeto criminal. Criminología, criminalidad y sociedad en Chile. Siglos XIX y XX*. Santiago: Editorial Universitaria.

Mallon, F. (2014). La piedra en el zapato: El Pueblo Mapuche y el Estado chileno, los Pueblos Indígenas y los Estados en América Latina, en C. Barrientos. *Aproximaciones a la cuestión Mapuche en Chile* (págs. 19-41). Valparaíso, Chile: RIL editores.

Marimán, J. (2012). *Autodeterminación. Ideas políticas mapuche en el albor del siglo XXI.* Santiago: LOM Ediciones.

Mariátegui, J. (2007) *Siete ensayos de interpretación de la realidad Peruana*. Lima: Biblioteca Ayacucho.

Mella, E. (2007). *Los mapuche ante la justicia. La criminalización de la protesta indígena en Chile.* Santiago: LOM Ediciones y Observatorio Derechos de los Pueblos Indígenas.

Nahuelpan, H. (2013). Formación colonial del Estado y desposesión en Ngulumapu, en H. Nahuelpán, L. Cárcamo Huechante, S. Huenul, J. Pichinao, P. Mariman, J. Millalen, E. Antileo, F. Curivil, E. Paillan, M. Mora, J. Quidel, M. Calfío y H. Huinca. *Ta Iñ Fijke Xipa Rakizuamelüwün. Historia, Colonialismo y Resistencia desde el País Mapuche* (pp. 119-152). Ediciones Comunidad de Historia Mapuche.

Navarrete, J. (2018). *Movimiento Campesino Revolucionario.* Santiago: Ediciones Escaparate.

Pairican, F. (2012, enero-junio). Sembrando ideología: el Aukiñ Wallmapu Ngulam en la transición de Aylwin (1990-1994). *SudHistoria*(4), 12-42.

Pairican, F. (2013) Lumaco: la cristalización del movimiento autodeterminista mapuche. *Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 17*(1), 35-57.

Pairican, F. (2014). *Malon La Rebelión del Movimiento Mapuche (1990-2013).* Santiago: Pehuén Editores.

Suazo, C. (2018). *¡Nadie nos trancará el paso! Contribución a la historia del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) en la provincia de Cautín (1967-1973).* Londres 38. Espacios de memorias.

Tricot, T. (2017). *Aukan. Violencia histórica chilena.* Santiago: Ceibo Ediciones.

Urrutia, M. J. (2018). *El dealambre de los kuyfikeche Una aproximación a las corridas de cerco en el Fundo Nehuentúe, 1971.* [Seminario de grado para optar al grado de académico de Licenciado en Historia. Universidad de Santiago]. Repositorio institucional – Universidad de Santiago de Chile.

Cambio generacional mapuche y Unidad Popular

José Luis Cabrera Llancaqueo y Pedro Canales Tapia

Introducción

En la década de 1960, dentro de una vorágine de cambio de época global (Mayo 68, movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, entre otros hitos), en Chile se experimentó un extraordinario salto en el proceso de ascenso político de los sectores populares, cuyo inicio se puede encontrar en la génesis del movimiento obrero a fines del siglo XIX. Este proceso alcanzó un punto que resultó decisivo para la historia del país el día 4 de septiembre de 1970, fecha en que triunfa en las elecciones presidenciales el militante socialista Salvador Allende, candidato apoyado por la coalición izquierdista Unidad Popular (UP).

El programa de gobierno de la UP contemplaba medidas profundamente transformadoras, las cuales implicaban el primer paso en la construcción de una sociedad socialista, proceso que se conoció como *la vía chilena al socialismo,* señalando como una particular característica chilena el optar por la fórmula electoral para alcanzar

el poder con un candidato declaradamente marxista. Desde los sectores populares protagonistas de este proceso político, el proyecto también fue llamado la *revolución con sabor a empanada y vino tinto*, aludiendo al alimento y la bebida típicas de las celebraciones patrias chilenas.

En este contexto, se va a producir un cambio político generacional al interior del pueblo mapuche, donde tienen una visibilidad y relevancia jóvenes mapuche que experimentarán un giro estratégico que provocó que las clásicas estructuras organizativas se vieran remecidas por una movilización social generalizada que emergió desde sus comunidades, iniciando una nueva dinámica de alianzas con las fuerzas políticas chilenas en ascenso, dejando atrás el clásico vínculo que las dirigencias políticas mapuche mantenían hasta ese momento con la política conservadora chilena (Foerster y Montecino, 1988).

Este cambio, sin embargo, no se produjo sin tensiones. Destaca el nudo problemático que se produce con la incomprensión de la etnicidad por parte de la izquierda, puesto que la crítica mapuche al proceso de UP sobrepasaba a aquella que cuestionaba la velocidad de la transformación social, lo que se verá claramente reflejado durante la elaboración y puesta en marcha de una de las medidas más emblemáticas del período: la reforma agraria (Correa *et al*., 2005).

Esta crítica elaborada a partir de la etnicidad mapuche es interpretada en este trabajo como un rasgo incipiente de autonomismo político, el que con posterioridad al golpe de Estado de 1973 y la promulgación del Decreto Ley 2.568 sobre la División de las comunidades indígenas de marzo de 1979 (Canales, 2020, p. 93), se consolidará progresivamente como un proyecto político de libre determinación que se mantiene vigente hasta la actualidad (Mariman, 2012; Pairican, 2014; Tricot, 2013).

Con el objetivo de analizar esta trascendental modificación del actuar político mapuche, hemos recurrido a los postulados teóricos de Karl Mannheim (1993) para comprender las variables históricas y sociales que propiciaron el cambio generacional en las dirigencias

mapuche durante la década de 1960. En tal sentido, resulta indispensable consignar que la teoría generacional de Mannheim está compuesta por cuatro conceptualizaciones. Estas son: a) *la posición sociohistórica*, que refiere a un contexto histórico que vincula a sujetos con características comunes; b) *la primera socialización,* que representa un momento determinante en la vida de los individuos que comparten una posición sociohistórica, la cual ocurre fuera del contexto privado durante la juventud; c) *la conexión generacional,* que se produce entre las distintas identidades que conviven al interior de una generación y que difieren en las lecturas sobre el proyecto de esta, puesto que las generaciones no son homogéneas y en su interior se producen unidades generacionales. En el caso de las generaciones políticas, las unidades generacionales suelen coincidir con las organizaciones o partidos políticos que se disputan el liderazgo del proyecto generacional. Las disputas entre unidades generacionales no representan un cambio generacional, puesto que ellas pertenecen a una misma generación al compartir posición sociohistórica y primera socialización; d) *dialéctica de la configuración de la conciencia:* momento en que se produce el cambio generacional, dado que las disputas entre las unidades generacionales se agotan al momento de producirse una nueva posición sociohistórica que configura una nueva generación (Mannheim, 1993).

Estas conceptualizaciones permiten establecer si un hecho sociopolítico se inscribe dentro de una disputa entre unidades generacionales al interior de una generación, o bien si corresponde a un cambio de época que rebasa los límites en que se desenvuelve la generación que está acabando, pudiendo distinguir los nuevos proyectos sociopolíticos que están dando lugar al nacimiento de una nueva generación (Mannheim, 1993).

Ahora bien, a partir de las consideraciones anteriores, en el presente trabajo se aborda la transición generacional que experimenta el accionar político mapuche durante la década de 1960, cuya expresión más álgida ocurrió en 1970 con el llamado Cautinazo, durante el proceso electoral que convirtió a Salvador Allende en presidente

de Chile. Incorporando las perspectivas analíticas generacionales de Mannheim, se analizan las principales actorías políticas mapuche, sus proyectos, su accionar y sus quiebres internos, lo que nos permite comprender como se constituyó el sujeto político mapuche que dio vida a una generación. Para ello fue necesario una red de objetivos que permitió la realización del ejercicio metodológico de operacionalizar la teoría de las generaciones del autor, aplicándola al proceso histórico-político del pueblo mapuche y sus actorías políticas mapuche desde 1910 (Bengoa, 2000; Foerster y Montecino, 1988; Mariman *et al*., 2006), momento en que comienza a articularse la generación que verá su fin en 1970, durante el período eleccionario.

Ahora bien, creemos necesario recalcar que la relevancia del análisis presentado en este artículo está puesta en el proceso político mapuche más que en su matriz teórica, lo que no implica que esta última carezca de importancia. Utilizar a Mannheim podría interpretarse como una perspectiva que se aleja de los planteamientos descolonizadores que ha predominado en los trabajos de historiadores y cientistas sociales mapuche desde la década de 1980, y de los cuales nos hemos nutrido en anteriores trabajos (Cabrera, 2016). Ante ello, solo podemos decir que el proceso de descolonización epistémica está en construcción, por lo que los caminos para alcanzarlo no se encuentran resueltos.

En cuanto a la estructuración del artículo, el enfoque generacional propuesto se divide en dos grandes ámbitos. En primera instancia, son analizadas las experiencias de principios del siglo XX y como estas dieron lugar a la primera generación política mapuche que se formó fuera del ámbito tradicional, en un contexto sociohistórico marcado por las políticas indigenistas y la instalación del Estado desarrollista. En segundo lugar, se analizan los elementos que propiciaron el decaimiento de las formas políticas mapuche de la primera mitad del siglo XX y como estas dieron lugar al quiebre que terminó en una nueva generación a partir del Cautinazo, hecho político que se entremezcla con el proceso histórico del Chile de la UP, y que quedará profundamente marcado en la memoria social de las

generaciones políticas futuras, instalando el germen de un proyecto autónomo que se ha mantenido hasta la actualidad.

Ocupación del *Ngülümapu* y constitución de una nueva generación política mapuche

Distintos han sido los contextos sociohistóricos en que se han desarrollado actorías políticas del pueblo mapuche. Este ha tenido la capacidad de reinventarse y resignificarse en momentos decisivos para su existencia, donde destaca la ocupación militar de su territorio. Esta última fue una de las más dramáticas y tuvo consecuencias para su futuro, puesto que el Estado chileno se vio enfrentado a la encrucijada sobre qué hacer con los mapuche y cómo debían ser considerados en su orden constitucional (Aylwin, 1994; Bengoa, 2000; Mariman, 2006). En este sentido, tras la derrota militar, los mapuche se vieron amenazados por las experiencias ocurridas con otros pueblos indígenas tras la conquista europea, lo que Aníbal Quijano denomina "la colonialidad de las relaciones culturales: que implica la destrucción de la estructura social de los colonizados, despojo de sus saberes intelectuales y de sus medios de expresión exteriorizantes u objetivantes" (Quijano, 2007, p. 123). Finalmente, el Estado optó por otorgar la ciudadanía a los mapuche sobrevivientes, los que jurídicamente se transformaron en chilenos, reduciéndolos al 4,8% de su antiguo territorio (Mariman, 2006; Mariman, 2012; Nahuelpan *et al*., 2013). Lo último marcará profundamente a la generación política mapuche que desarrollará actorías durante la primera mitad del siglo XX, debido a que la ocupación militar desestructuró la sociedad mapuche, incorporándola a la jurisdicción estatal chilena y a la modernidad capitalista, viéndose trastocadas las formas de organización social y los procesos de formación de liderazgos que mantenía. Según la socióloga Ana Millaleo:

> Los roles que se debían desempeñar al interior de la estructura tradicional mapuche se determinaban en la etapa de la niñez, los niños eran observados por los mapuche más ancianos y de acuerdo a sus características y *Kupal* –palabra mapuche que significa familia de origen y/o descendencia– lograban intuir cuál sería su labor al interior de la sociedad mapuche. La observación de los niños con capacidades de liderazgo, respetados y queridos al interior de su grupo etáreo, respetuosos de sus 'mayores', conocedores de su cultura, los ancianos dirían: Ese será un futuro Ñidol (líder) y guiará a su pueblo con sabiduría, es así como después esas cualidades percibidas por los más ancianos serán reforzadas y potenciadas en los niños (2006, p. 14).

Estas formas procedimentales tradicionales fueron sustituidas de forma paulatina tras la ocupación militar, pero sobre todo tras el proceso reduccional que transformó a las pequeñas porciones de tierras denominadas reducciones indígenas en espacios de resistencia cultural, lo que se ha mantenido hasta las actuales comunidades (Bengoa, 2000). No obstante lo anterior, las reducciones quedaron incorporadas en un ordenamiento externo que obligó a los *lof* –palabra mapuche que se refiere a la unidad territorial básica de este pueblo, previo a la guerra de ocupación militar chilena– a relacionarse con agentes sociales, políticos y económicos no-mapuche al interior de un contexto estatal, dejando en claro que la incorporación del territorio mapuche al territorio chileno también significó su incorporación a la modernidad capitalista (Foerster y Montecino, 1988; Pinto, 2000). Dicha imposición, con todos los trastornos que trae consigo para un pueblo derrotado, implicó el despliegue del colonialismo caracterizado por el establecimiento de una relación social dominador/dominado, ideológicamente expresada en la dicotomía sarmientina civilización/barbarie, donde lo indígena era visto como incivilizado y un impedimento para el desarrollo de los países latinoamericanos, pero que en la realidad escondía una motivación económica detrás de la ocupación del territorio mapuche, como lo señala Jorge Pinto Rodríguez:

> Los primeros síntomas de la nueva depresión se notan en 1856, coincidiendo en Chile con una caída de la producción de plata, una contracción monetaria, un período de malas cosechas y la brusca desaparición del mercado californiano y australiano, que tan gravitantes habían sido para la agricultura y la industria molinera. Al factor externo se agregaba, así, un cuadro interno en nada alentador. Los efectos no se dejaron esperar: entre 1857 y 1861, el país experimentaba la primera contracción del modelo exportador (2000, p. 111).

Retomando el análisis generacional, lo descripto por Ana Millaleo da cuenta de una sociedad que tiende a reproducirse a sí misma, donde los ancianos constituyen la fuente de *socialización primaria*. Si bien los mapuche pudieron haber mantenido sus formas de organización social tradicional intactas dentro de las reducciones, esto se vio dificultado por la penetración del orden estatal, como fueron las formas modernas de educación desplegadas por el Estado durante el siglo XIX. Un ejemplo que ilustra este proceso:

> El liceo de Temuco, la máxima expresión de las luces en la Araucanía, nació bajo el imperativo del progreso. La instrucción debía transformar a los habitantes de la zona sin importar su venia y sin reparar en lo apropiado o viable que era el pretender que se formasen a imagen y semejanza de los sectores dirigentes o, para ser más exactos, que lo hicieran según las concepciones que los sectores dirigentes tenían de lo que deberían ser los sectores populares (Donoso, 2008, p. 30).

Recordemos que en 1885 el Estado llevó a cabo la reforma prusiana de la educación, con lo que se dio por finalizada la influencia francesa en este ámbito, inaugurando un perfil más inclinado a la "construcción" de mano de obra en la lógica industrial (Canales, 2017, p. 124). En este sentido, las escuelas vinculadas al territorio mapuche, fueron parte de esta tendencia. También debe incorporarse dentro del mismo proceso de modernización educacional la apertura de Escuelas Normales:

> como *instrumento* [...] del Estado Chileno y de la *Construcción de la República*. En su desarrollo no hubo una escuela normal, sino varias y aquello era demostrativo de sus planes de estudio, entre 1842 y 1974 (año de cierre de estas instituciones) (Comisión de Estudio, 2010, p. 39).

Las Escuelas Normales acogieron una gran cantidad de estudiantes mapuche, donde destacaron las instaladas en el antiguo territorio mapuche: la Escuela Normal de Concepción, fundada en 1854 y entregada a profesoras alemanas en 1885; la Escuela Normal de Victoria, fundada en 1906; la Escuela Normal de Angol, fundada en 1912; y la Escuela Normal de San José de la Mariquina en Villarrica, fundada en 1936. Todas cumplían el rol de *instrumento* del Estado chileno y de la *Construcción de la República*, lo que desde el punto de vista mapuche resultó en una política de asimilación y chilenización. En 1920, por su parte, la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria profundizó aún más el impacto sobre las prácticas culturales de socialización en la organización tradicional mapuche. El testimonio de Augusto Aillapan es revelador con respecto al idioma:

> cuando empecé a entrar al colegio, tendría más o menos 7 u 8 años, ahí empecé en problemas y mis hermanos me enseñaron a hablar el castellano... entre nosotros hablábamos mapudungun, salíamos a un lado, para que no lo escuchara la profesora que era winka (no-mapuche: chileno, extranjero, entre otros)y nos prohibía... después mi madre no aceptaba que le habláramos o que le respondiéramos en idioma castellano, me decía a mí: ¡Qué venís winka aquí, pa' fuera! Entonces era como una calle sin salida (Cabrera y Aillapan, 2013, p. 98).

La combinación de este proceso educativo institucional con las transformaciones políticas y económicas de carácter estructural producidas por la instalación del modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y la construcción del Estado desarrollista a partir de la década de 1930, convirtieron a la ciudad en un polo de desarrollo que provocó el desplazamiento demográfico que también impactó en la organización tradicional mapuche. Muchos mapuche buscaron mejores perspectivas para sus

vidas, abandonaron las reducciones a muy temprana edad y emigraron a los centros urbanos industriales para insertarse al mundo del trabajo asalariado. A partir de este momento se constituyen nuevos sujetos sociales que van a estar más vinculados con los procesos chilenos y actores como los trabajadores industriales o servidores públicos. De esta forma, la *socialización primaria* que describe Millaleo al interior de la organización tradicional mapuche, no encuentra las condiciones de posibilidad para reproducirse y mantenerse como un mecanismo determinante en el proceso de constitución de líderes, puesto que los sujetos y sujetas mapuche ya no se encontraban en un lugar donde podían ejercer autoridad, y se vieron obligados a adaptarse a las ciudades donde los procesos de legitimación de liderazgos son distintos.

Un hito histórico relevante en el cambio de las formas procedimentales tradicionales se puede establecer en 1910 con la fundación de la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía, una experiencia de organización política que se produjo debido al cambio en la *posición sociohistórica*, la cual pasó de la autonomía política a la de ocupación y colonialismo. Además, también cambió la *primera socialización,* puesto que, al decir de Millaleo: "sus dirigentes fueron legitimados por su educación occidental, eran poseedores de un nuevo conocimiento y podían desenvolverse de manera fluida en la política occidental" (2006, p. 19). Si bien esto no implica que la influencia de la *primera socialización* producida al interior de la comunidad desaparezca del todo al proyectarse políticamente fuera de ella, sí cobran mayor relevancia las capacidades y habilidades políticas de carácter moderno occidental al momento de negociar con los agentes no-mapuche. Según Foerster y Montecino, la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía:

> apareció con una postura intermedia: reconocimiento y valoración de la cultura mapuche, e incorporación gradual de la etnia a los valores occidentales. Sin embargo, para todas las organizaciones los problemas más importantes fueron la defensa y la ampliación del

> territorio indígena, el no pago de contribuciones y, posteriormente la ayuda crediticia del Estado para el desarrollo de su economía. Asumieron también la lucha por la dignificación del mapuche, lo que implicaba su acceso a la educación (1988, p. 14).

Claramente queda expresada una posición sociohistórica marcada por los procesos de inclusión de los mapuche a la institucionalidad chilena. Los sujetos que se encuentran en esta posición son mapuche cuya *primera socialización*, al decir de Mannheim, *con otros* y *contra otros*, se dio en escuelas que desarrollaban prácticas pedagógicas modernas, donde las dosis de memoria se mantienen al reconocerse como mapuche, mientras que las dosis de olvido aparecen al romper con la *socialización primaria* que se daba en la comunidad. La dimensión política está presente en el proyecto de futuro, en la búsqueda por *ser parte del Estado y así lograr una mejor integración a la sociedad chilena.* Ahora bien, también se produce la *conexión generacional* al activarse distintas identidades y diferentes lecturas de la realidad que pugnan entre sí por la orientación del proceso histórico de la generación. Ejemplo de esto último es lo que ocurre al interior de la Sociedad Caupolicán cuando define participar en el sistema político institucional con el fin de alcanzar sus objetivos:

> En 1916 asumió la presidencia de la organización el profesor Manuel Manquilef (nacido en Pelal en mayo de 1887), imprimiéndole un nuevo matiz: no sólo se demandará educación para el mapuche sino que se dará cuerpo a las exigencias indígenas para superar sus problemas, planteando la constitución de su propiedad. En diciembre de ese año Manquilef fue invitado a participar, en Santiago, en el Congreso Católico Araucanista. El discurso que hizo en la Catedral fue muy publicitado por la prensa. En uno de sus párrafos decía, respecto a los mapuches: 'No es necesario que le prometan más tierras, sino que la que les disteis no se la deis obligándolo a litigar' (Foerster y Montecino, 1988, p. 22).

La pugna entre unidades generacionales queda claramente establecida, al generarse el quiebre que trajo consigo la elección como

diputado de Arturo Huenchullan. Una unidad generacional que se enfrenta a las posiciones iniciales de la Sociedad Caupolicán, asumiendo una posición más beligerante que se impone y reorienta el accionar político de la organización. Además, podemos identificar que las pugnas se llenan de contenido al operar el eje *inclusión a la sociedad chilena/defensa de la identidad étnica,* lo que vuelve más complejo el análisis generacional dado que las críticas se diversifican y se expanden al plano ideológico, como es el caso de la Unión Araucana que "surge como una respuesta a referentes como la Sociedad Caupolicán, que de algún modo se tornaron amenazantes para algunos sectores eclesiásticos y que evidentemente veían en estas organizaciones la instrumentalización de la izquierda de las demandas mapuche" (Millaleo, 2006, p. 22). En este sentido:

> Su presidente fue Antonio Chihuailaf, pero su política, sus programas y dirección recayeron en el prefecto apostólico de la Araucanía Guido Veck de Ramberga... el objetivo fue el bienestar económico, intelectual, moral y social, pero además combatir 'los grandes males que afligían al mapuche, y que eran la ignorancia, el alcoholismo, la poligamia, la inseguridad en la posición de los terrenos, el atraso agrícola y su desunión (Millaleo, 2006, p. 22).

El caso de la Unión Araucana sigue manteniendo el patrón de desarrollar la *primera socialización* en espacios pedagógicos occidentales. Sin embargo, el hecho de que esta fuera promovida por la Iglesia Católica, introduce lo que Mannheim recoge de Pinder y que denomina la *no contemporaneidad de lo contemporáneo.* La formación católica era distinta a la formación laica, por lo que la *primera socialización* de quienes pertenecían a la Unión Araucana se muestra antagónica frente a la de la Sociedad Caupolicán. La inclusión a la sociedad chilena va a estar marcada por la evangelización, como queda en evidencia en las conclusiones del Parlamento de Coz Coz, de 1907. Para el capuchino Sigifredo de Frauenhäsel, involucrado en dicha reunión, este parlamento debía:

> a) demostrar que el mapuche no había desaparecido; b) instalar el tema indígena en la opinión pública, presentándolo como un problema que Chile debía resolver; c) desbaratar la imagen del indio carente de virtudes para presentar otra que lo acercara a los cánones del hombre civilizado; y, d) mostrarse a sí mismo como los grandes defensores de un pueblo que había sido violentado (Pinto, 2012, p. 169).

Las experiencias de la Sociedad Caupolicán y la Unión Araucana dan cuenta de lo que Foerster y Montecino (1988) denominan el primer período de organizaciones mapuche, influenciadas por las políticas indigenistas del Estado. Pese a las pugnas por la orientación del proyecto generacional, ambas organizaciones comparten la idea de la incorporación a la sociedad chilena. Si bien la Sociedad Caupolicán reorientó su accionar hacia la defensa de la identidad étnica, sigue promoviendo una inclusión a la sociedad chilena para mejorar las condiciones de existencia, pero manteniendo lo identitario.

Desde la década de 1930, las organizaciones políticas indígenas no quedarán ajenas a los proyectos que disputaban la hegemonía político-social, más aún cuando el período desarrollista inició un proceso de expansión democrática que permitía la entrada de actores hasta entonces invisibilizados por las estructuras oligárquicas. Destacaron en este sentido, dirigentes que llegaron incluso a ser diputados, como Manuel Manquilef y Venancio Coñoepan (Canales, 2012, p. 111), entre otros. Muchos migrantes mapuche que llegaron a los polos de desarrollo se sumaron a las demandas del creciente Movimiento Obrero o a las luchas del Movimiento de Pobladores (Antileo y Alvarado, 2018, 2020). Sin embargo, la identidad indígena es invisible dentro de estos proyectos, por lo que la inclusión a la sociedad chilena no aseguró un mejor bienestar. Al mismo tiempo, el Estado mantuvo las políticas de corte indigenista que invisibilizaban las demandas étnicamente distintivas del pueblo mapuche, promoviendo soluciones que solo mitigaban sus condiciones de pobreza, al mismo tiempo que producían relaciones de asistencialismo y paternalismo.

Utilizando las directrices teóricas de Mannheim, es posible establecer que desde el cambio generacional cristalizado en la fundación de la Sociedad Caupolicán, hasta la década de 1960, actuó la misma generación política mapuche. Esto a raíz de que las organizaciones políticas mapuche del período como la Sociedad Caupolicán, la Federación Araucana o la Unión Araucana representan unidades generacionales que compartían un proyecto político similar, el que se puede definir como *inclusión a la sociedad chilena con defensa de la identidad,* generándose disputas por acercar el proyecto generacional hacia uno de los dos polos. Vale decir, hacia la incorporación del mapuche en la sociedad o direccionarlo hacia la defensa de la identidad étnica. La unidad generacional que puede alejarse de este esquema es la Federación Araucana presidida por Manuel Aburto Panguilef, con su planteamiento sobre la República Indígena de 1931 (Menard, 2013). Sin embargo, dicha idea es más bien la expresión de una defensa identitaria en un nivel mayor.

Cambio generacional mapuche y Cautinazo

El año 1970 cierra el período de acción política de la generación mapuche de la primera mitad del siglo XX. Desde fines de la década de 1950 y durante la de 1960 es posible constatar un cambio en la *posición sociohistórica,* marcada por el avance de los sectores populares al interior de la izquierda política y en el conjunto del sistema político chileno (Moulian, 2008). Lo último influyó sobre la *primera socialización* de los jóvenes mapuche, quienes van a experimentar un giro y comienzan a desarrollar una estrategia de vinculación con los sectores sociales y fuerzas políticas que estaban en alza, además de proyectar su acción desde las comunidades, las que protagonizaron la masiva toma de terrenos a la que se dio el nombre de Cautinazo (Correa et *al*., 2005; Navarrete, 2018; Suazo, 2018). Un ejemplo emblemático al respecto, fue Moisés Huentelaf, mapuche y dirigente del Movimiento Campesino Revolucionario, asesinado por el poder

patronal en octubre de 1971, en un proceso de movilización en el fundo Chesque, comuna de Loncoche (Navarrete, 2018, p. 119).

Las movilizaciones mapuche en los predios de Cautín comenzaron a labrarse durante el período electoral de 1970. El Cautinazo marca un punto de inflexión respecto a las formas con las que se venía desarrollando la acción política mapuche desde principios de siglo. Si antes las distintas organizaciones se habían constituido en una posición *sociohistórica* que marcó a una generación política cuya *primera socialización* se dio en la escolarización occidental y su proyecto de cambio social se orientaba hacia la integración a la sociedad chilena; en 1970, la *socialización primaria* (Millaleo) y la *primera socialización* (Mannheim) se vincularon, posibilitando una acción política en clave de movilización que surgió desde el interior de las propias comunidades, con el fin de incidir con demandas específicas del pueblo mapuche durante el proceso electoral, más específicamente en el programa de la UP, ya que:

> El documento de 'Las primeras cuarenta medidas' del programa de la UP no explicitaba ninguna política relativa a los mapuche. Y en su propuesta respecto a la Reforma Agraria, conocido como los '20 puntos' señalaba en su punto 5º: 'a través de una nueva concepción jurídica se buscará la integración y colaboración en una acción unitaria de los distintos tipos de organizaciones de campesinos: de asalariados, de empleados, medieros, afuerinos pequeños y medianos, etc. Esto implica la complementación de las tareas de los sindicatos, asentamientos, cooperativas campesinas, comunidades indígenas y otros tipos de organización de pequeños agricultores, con los comités de pequeños agricultores (Toledo, 2005, p. 33).

Ante esta coyuntura, la acción política comenzó a desplegarse poniendo énfasis en la recuperación de tierras, desplazando a un segundo plano el objetivo político que había caracterizado la demanda mapuche hasta la década de 1960, es decir, la integración a la sociedad chilena. El caso de Juan de Dios Coliqueo de Vega Larga, comuna de Lautaro, es decidor. Mapuche seguidor de Venancio Coñoepan, litigante de tierras

con un colono por largos años, a fines de la década de 1960, decidió ser parte de un proceso de recuperación de tierras, animado por sus hijos y por un hecho fundamental: creía ser un hombre honorable, siempre respetuoso de la ley y la institucionalidad, por lo cual no sería apuntado con el dedo ni catalogado de terrorista, una vez iniciado el proceso de recuperación de tierras en la cual se había decidido embarcar (Bengoa, 1999, p. 117).

> Después de la elección de septiembre de 1970, en la macro región sur se desplegaron múltiples movilizaciones mapuche que antecedieron a la toma de posesión de Allende. El episodio fue conocido como 'el Cautinazo', y fue un hito político, que instaló en la agenda del nuevo gobierno la prioridad de la restitución de las tierras usurpadas a los mapuche. El gobierno de Allende asumió explícitamente una 'Política de Restitución de Tierras Usurpadas', consistente en tres programas concretos: a) Convenio CORA-Dirección de Asuntos Indígenas; b) Juicios de Restitución; y c) Restitución por la vía administrativa o extra-judicial (Toledo, 2005, p. 33).

Las masivas movilizaciones demostraron la capacidad de incidencia política que podían tener los mapuche (Navarrete, 2018; Suazo, 2018). De hecho, pese al reconocimiento explícito del gobierno de Allende que menciona Víctor Toledo, el proceso de movilizaciones y tomas de predios no se detuvo con la instalación del nuevo gobierno, lo que obligó al Presidente a trasladar a la zona al ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, para asumir la problemática durante todo el mes de diciembre de 1970 y enero de 1971. El Cautinazo apuntó a cuestionar el programa de reforma agraria de la UP, el cual debió modificarse para incorporar un ítem respecto a tierras mapuche usurpadas, transformándolo en un hecho político que incidió en la evolución del proyecto que se pretendía implementar.

Las motivaciones del Cautinazo, no obstante lo anterior, muestran la tensión entre la izquierda política y los pueblos indígenas, lo que no era una realidad chilena exclusivamente, sino que también se repetía en América Latina, más aún cuando el proyecto de la UP se definía

como marxista, una teoría que desde su llegada al continente había mantenido una incapacidad para comprender la problemática de los pueblos indígenas, ofreciendo como solución una variante de la corriente indigenista predominante en los Estados latinoamericanos. De ahí que, respecto a esto último, Toledo señale que "para la izquierda chilena, las comunidades indígenas eran variantes de organizaciones campesinas" (2005, p. 33). Sin embargo, la motivación para que las comunidades se movilizaran a un nuevo nivel, como no lo hacían desde la época de la invasión militar del siglo XIX, era la recuperación de las tierras que el proceso de despojo les arrebató, algo diametralmente distinto al lema de la reforma agraria *la tierra para el que la trabaja*, puesto que desde esa premisa, si las comunidades mapuche no trabajaran la tierra, también era justificable arrebatarlas para hacerlas producir con el trabajo del que sí la merecía.

Podemos afirmar entonces, que el accionar político de las comunidades durante el Cautinazo constituyó el germen de una nueva generación, dado que la vinculación entre *la socialización primaria* y *la primera socialización* se produce al interior de las reducciones mapuche. La vida comunitaria y la ausencia de las dosis de olvido que se producían al dejar la reducción no están presentes; por tanto, *la socialización primaria* "con otros" y "contra otros" se da entre sujetos que compartían la misma vivencia comunitaria. Por otra parte, la toma de terrenos no obedece a una proyección de la transformación socialista de la sociedad chilena, sino a una demanda concreta por tierras que puso a la vista el potencial político del pueblo mapuche y su particularidad identitaria. Es decir, no era lo mismo la toma de un terreno protagonizada por campesinos que una llevada a cabo por mapuche. Los primeros comprendían que su derecho a la tierra era porque la trabajaban (ideológico), mientras que los segundos apelaban a que su derecho radicaba en que las tierras habían sido de ellos y las habían perdido como resultado de la usurpación. Ejemplifiquemos este cambio en la generación política mapuche con el relato que Florencia Mallon presenta sobre la experiencia de la vivencia de la Comunidad Nicolás Ailío durante El Cautinazo:

> Habría sido difícil divisar, en la madrugada del 20 de diciembre de 1970, el pequeño bote que remaba lentamente, en contra la corriente, por el río Imperial. Sentadas entre la niebla espesa de las últimas horas de la noche, con bultos de comida y algunos niños pequeños, un grupito de mujeres y los hombres que remaban pensaban en silencio sobre lo que les esperaba (2004, p. 11).

Añadiendo la autora que la comunidad de Ailío había formado en septiembre un comité para recuperar sus tierras, lo que les preparó para lo que iba ocurrir a partir del 20 de diciembre. La narración pone énfasis, en que:

> el propósito era [...] tomar el fundo Rucalán, propiedad de Juan Bautista Landarretche Mendoza y de su esposa, Violeta Maffei Herrera. Doña Marta Antinao, esposa de don Heriberto Ailío, vicepresidente del Comité Ailío estaba en el bote con su pequeño hijo Martín. Recuerda que también iba con ella una tía de su marido, doña Rosa Ailío, y su madre, doña Juana Ríos. 'Llegamos allá', me explicó, 'Y nos pasamos al predio adentro y ahí nos quedábamos agrupados; había una bodega grande y ahí llegamos' (2004, p. 11).

Concluye Mallon, informando que:

> La mayoría de los ocupantes se quedaron agrupados, un poco apartados de la puerta de casa patronal, mientras un grupo más pequeño, compuesto del presidente del Comité Ailío, don Ricardo Mora Carrillo, don Heriberto y un amigo 'compañero' mirista', caminaron hacia la casa a tocar la puerta. Al poco rato se escuchó la voz de una mujer, seguramente la empleada de la casa, quien preguntaba quién era y qué quería. Don Ricardo Mora le dijo que avisara al dueño que acababan de tomar el fundo. Se esperó en silencio mientras la empleada le iba a avisar a su patrón (2004, p. 11).

El golpe de Estado de 1973 puso fin al Estado desarrollista, al gobierno de Allende y al proceso de trasformaciones estructurales en pos de alcanzar el socialismo, así como a los intentos del pueblo mapuche de recuperar sus tierras y su identidad. Se instaló una dictadura

en extremo autoritaria, encabezada por el general Pinochet, la que introdujo profundas transformaciones económicas y sociales de corte neoliberal, instalando un modelo donde la esfera del mercado tiene una preponderancia sobre las relaciones sociales, el Estado pierde la centralidad y su rol redistributivo, y la sociedad civil y los pueblos indígenas son relegados e invisibilizados.

Este conjunto de cambios también tuvo su expresión en un ámbito profundamente sensible para el pueblo mapuche: las tierras y el territorio, los que recibieron un duro golpe con el Decreto 2.568 de 1979 sobre la división de las tierras comunitarias. Sin embargo, ese mismo golpe producirá una rearticulación y una reorientación de las actorías políticas, que consolidará por completo el cambio generacional iniciado con el Cautinazo, el que se caracteriza por la elaboración de un proyecto político autónomo mapuche que hace propia la idea de la libre determinación de los pueblos.

Conclusión

En el apartado final de esta proposición histórica, proponemos cinco puntos para la reflexión histórica, y asumimos tres ideas para el debate, tanto del movimiento mapuche como de las organizaciones sociales que fueron parte del gobierno de la UP, los que hasta hoy preservan la memoria del proyecto popular y la represión brutal que vivieron luego del golpe de Estado de septiembre de 1973.

Respecto de las ideas para el debate. En primer lugar, consignar que durante los años del gobierno de la UP, el tratamiento de la *cuestión mapuche* asumió un carácter prioritario, a partir de las movilizaciones llevadas a cabo en Cautín. La estadía de Jacques Chonchol en la Araucanía durante el Cautinazo así lo refleja. En segundo lugar, a partir del Cautinazo, la *cuestión mapuche* se levantó como un asunto histórico-estructural, en el cual la lógica colonial, tanto del Estado como de los colonos en su conjunto, creció y se fueron consolidando en un contexto de polarización. Con la dictadura militar, la reconfiguración

del colonialismo chileno no se dejará esperar, como plantea Sergio Caniuqueo. En este contexto, el cambio generacional mapuche asumió varios desafíos: junto con ser el reemplazo de dirigentes que articularon el movimento mapuche hasta la década de 1960, fue la fuerza que echó las bases del proyecto autonómico mapuche, el cual se retomará a partir de 1979 hasta nuestros días. En tercer lugar, proponemos un esfuerzo epistemológico que distinga el accionar del indigenismo en todo el proceso que hemos relatado, cuestión de fondo, si pensamos que en general todos los gobiernos democráticos hasta 1973 en Chile, impulsaron los así llamados intentos por dividir las tierras mapuche al sur del río Bío Bío e invisibilizar la presencia mapuche en las ciudades de manera cada vez más creciente.

En cuanto a los puntos para la reflexión que emergen de este escrito, podemos presentar los siguientes tópicos. En primer término, distinguir desde la óptica de Mannheim, el cambio generacional mapuche que se fue decantando en la década de 1960, con acento en los días álgidos y calurosos del Cautinazo. Sin duda que este cambio fue capaz de remecer la política chilena el verano de 1971. En segundo lugar, remarcar que el cambio generacional, su estilo y proyección, se vivió en un contexto chileno que acentuó la presencia del Estado, de la participación política de las masas (chilenas), por lo cual el accionar mapuche en las tomas y corridas de cerco, no eran previstas como parte del repertorio de movilización. En tercer lugar, sostener que la situación mapuche previa al Cautinazo fue un tiempo incierto para la población que habitaba las antiguas reducciones o comunidades, en gran medida porque la política chilena nunca fue explícita respecto del destino de sus territorios: varias veces hubo intentos de *dividir la propiedad* mapuche, como ya lo indicamos. En cuarto lugar, la Ley Indígena de la UP fue un paso cualitativo en la forma como el Estado asumió su relación con los mapuche; no obstante, el sesgo indigenista no dejó de ser parte de la lógica política. Creemos que la nueva generación de dirigentes mapuche estuvo en el centro de esta encrucijada, lo que se advirtió en los discursos y accionar de estas nuevas dirigencias, sus estilos y pasos. En quinto y último lugar, el

Cautinazo junto con ser un genuino acto mapuche de reivindicación, que rompió con la lógica de la integración al pueblo chileno, según las indicaciones de estudios sobre el tema, fue un momento que condensó la historia mapuche en perspectiva: la reducción se vinculó con la diáspora y esta con las secuelas de la guerra de ocupación de fines del siglo XIX. El despojo, la expoliación y el futuro, fueron el escenario en el cual se erigió el cambio generacional y el accionar de la UP de cara al sueño de la *vía chilena*.

Referencias

Antileo, E. y C. Alvarado. (2018). *Santiago waria mew*. Santiago: Ediciones Comunidad de historia mapuche.

Antileo, E. y C. Alvarado. (2020). *Diarios mapuche*. Santiago: Ediciones Comunidad de historia mapuche.

Aylwin, J. (1994). Los pueblos indígenas de Chile en la transición democrática. *Revista Proposiciones*, 25, 132-143. http://www.sitiosur.cl/r.php?id=643.

Bengoa, J. (1999). *Historia de un conflicto. El Estado y los Mapuches en el siglo XX*. Santiago: Planeta.

Cabrera Llancaqueo, J. (2016). Complejidades conceptuales sobre el colonialismo y lo postcolonial. Aproximaciones desde el caso del Pueblo Mapuche. *Revista Izquierdas*, 26, 169-191. http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2016/n26/7.Complejidades.pdf.

Cabrera Llancaqueo, J. y Aillapan Paillafil, A. (2013). "Machi mongen tani Santiago warria mew. Vida de un machi en la ciudad de Santiago". Grupo de Trabajo Kuifike. Santiago.

Canales Tapia, P. (2012). Diputados mapuche. *Revista Estudios Trasandinos*, 17, 107-117. http://estudioshistoricos.ulagos.cl/index.php/volumen-17/item/36-revista-de-estudios-trasandinos-volumen-17

Canales Tapia, P. (2017). Winka tañi kimün wicharkaey mew. Escuelas chilenas en territorio mapuche, 1883-1930 en B. Silva (ed.). *Historia social de la educación chilena*, tomo 3. Santiago: Ediciones UTEM.

Canales Tapia, P. (2020). La división de las tierras mapuche en la reducción Gallardo Tranamil, 1979-1985. *Revista Diálogo Andino*, 61, 93-103. http://dialogoandino.cl/wp-content/uploads/2020/04/07-CANALES-DA-61.pdf

Miembros de comisión de Estudio. (2010). "Master Maestra". Asociación Nacional de profesores normalista de Chile, Santiago.

Donoso, A. (2008). *Educación y nación al sur de la frontera*. Santiago: Pehuén ediciones.

Foerster, R. y S. Montecino. (1988). *Organizaciones, Líderes y Contiendas Mapuches (1900-1970)*. Santiago: Centro de Estudios de la Mujer.

Mallon, F. (2004). *La Sangre del Copihue. La comunidad Mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno.* Santiago: Lom ediciones.

Mannheim, K. (1993). El Problema de las generaciones. *Revista española de investigaciones sociológicas*, 6, 193-244. http://www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_062_12.pdf

Mariman, J. (2012). *Autoderminación*. Santiago: Lom ediciones.

Mariman, P. (2006). Los mapuche antes de la conquista militar chilena-argentina, en P. Mariman *et al*. *Escucha winka. Cuatro ensayos de historia nacional mapuche y un epilogo de futuro.* Santiago: Ediciones Lom.

Mariman, P. et *al*. (2006). *Escucha winka. Cuatro ensayos de historia nacional mapuche y un epilogo de futuro.* Santiago: Lom ediciones.

Menard, A. (2013). *Libro Diario del Presidente de la Federación Araucana Manuel Aburto Panguilef*. Santiago: CoLibrís.

Millaleo, A. (2006). "Multiplicación, y multiplicidad de las organizaciones mapuche urbanas en la Región Metropolitana. ¿Incremento en la participación mapuche o fragmentación organizacional?" [Tesis de licenciatura, Universidad ARCIS no publicada]. Santiago.

Nahuelpan, H. *et al*. (2013). *Ta iñ fijeke xipa rakizuameluwün. Historia, colonialismo y resistencia desde el país Mapuche.* Santiago: Ediciones Comunidad de historia mapuche.

Navarrete, J. (2018). *Movimiento campesino revolucionario*. Santiago: Ediciones Escaparate.

Pairican, F. (2014). *Malón. La rebelión del movimiento mapuche*. Santiago: Pehuén ediciones.

Pinto Rodríguez, J. (2000). *La Formación del Estado, la Nación y el Pueblo Mapuche. De la inclusión a la exclusión.* Santiago: IDEA-USACH.

Pinto Rodríguez, J. (2012). El conflicto Estado-Pueblo Mapuche, 1900-1960. *Universum. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 27 (1) 167-189. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762012000100009&lng=es&nrm=iso

Quijano, A. (2007). Colonialidad del poder y clasificación social, en S. Castro-Gómez y R. Grosfoguel (eds.). *Giro decolonial, Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del hombre editores.

Suazo, C. (2018). *Nadie nos trancará el paso*. Santiago: Ediciones Londres 38.

Toledo, V. (2005). *Pueblo Mapuche, derechos colectivos y territorio: desafíos para la sustentabilidad democrática*. Santiago: Programa Chile sustentable.

Tricot, T. (2013). *Autonomía*. Santiago: Ediciones CEIBO.

Pueblo mapuche: entre la Unidad Popular y los primeros años de la dictadura cívico-militar (1969-1978)

Sergio Caniuqueo Huircapan

A la memoria de Rosendo Huenuman García, dirigente mapuche, diputado en la Unidad Popular, exiliado y retornado político. Nacido y fallecido en Wallmapu (22 de marzo de 1935-03 de octubre de 2020).

Introducción

El pueblo mapuche es una nación originaria. Su nombre viene de la palabra *mapu*, que significa tierra o territorio y *che*, que significa personas o gente. Históricamente ha tenido presencia en lo que actualmente se conoce como Chile y Argentina. Este pueblo logró una autonomía territorial frente a la corona española, la cual fue reconocida a través del *Sistema de Parlamentos* (León, 1993; Forster, 1996; Mariman, 2002; Contreras, 2005 y 2010; Zavala, 2008 y 2015; Boccara, 2009; Méndez, 2014). Una vez instalada la República de Chile también existe un reconocimiento, en el parlamento de Tapihue,

realizado por el gobierno de Freire en 1925, pero paralelamente se estaban generando procesos de ocupación a través de la instalación de haciendas en los territorios mapuche de Arauco y cercanías de Valdivia. Ya a mitad del siglo XIX, se decretan unidades administrativas que involucraban a las tierras mapuche, para luego hacer una ocupación militar, que en Chile se denominó la Ocupación de la Araucanía (1862-1884), mientras que en Argentina se llamó la Conquista del Desierto o las Campañas del Desierto (1878-1885) (para una mirada al siglo XIX, ver Leiva, 1984; Bengoa, 1996; Pinto, 2000; Hernández, 2003). Ambos movimientos militares tuvieron por objeto tomar por la fuerza los territorios mapuche para imponer la soberanía de sus Estados respectivos. En este escrito nos centraremos en el caso chileno, lo que implicó un proceso de reduccionamiento, en el cual se les entregaron títulos comunitarios, llamados Títulos de Merced, a través del proceso denominado Radicación Indígena (1884-1927); posterior a ello se fijaron leyes indígenas: ley N° 4802, de 1930, y decreto N° 4111, de 1931, que rigen a los Juzgados de Indios y la ley indígena N° 14511, de 1961, que crea los Juzgados de Letras de Indios (Valenzuela y Oliva, 2007). Es en estos espacios donde los mapuche acuden para solicitar justicia ante situaciones como usurpaciones de sus tierras o apropiaciones indebidas. Gran parte del movimiento mapuche trató de intervenir estos aparatos con el fin de salvaguardar sus derechos (Foester, 1983; Foerster y Montecino, 1988; Bengoa, 2002; Mallon, 2004; Caniuqueo, 2006; Samaniego y Ruiz, 2007; Gavilán, 2007).

Si nos preguntáramos cuál ha sido el centro desde donde se ha interpretado la historia mapuche en el último tercio del siglo XX y primeros años del siglo XXI, y luego nos enfocáramos en cómo se ha interpretado el gobierno de la Unidad Popular (UP) y los primeros años de la dictadura cívico-militar (1973 a 1978), nos encontramos con que existe una narrativa de izquierda en la cual se representa y/o releva el proceso de izquierdización del mundo mapuche, como podemos ver en los textos clásicos o representativos que han tenido mayor influencia como Rolf Foerster (1983), Rolf Foerster y Sonia Montecino

(1988), José Bengoa (2002), Augusto Samaniego y Carlos Ruiz (2007) y en el caso mapuche podemos ver a Víctor Gavilán (2007).

El ejercicio que intentamos hacer en este texto es avanzar en una descolonización de la historia mapuche, estableciendo un nuevo centro interpretativo, que tiene relación con el proyecto político mapuche que desde las organizaciones y las bases se intenta definir. Para ello realizaremos cuatro críticas o distinciones generales a estos textos, con el fin establecer puntos críticos que necesitan colocarse en tensión. Podríamos comenzar señalando que al explicar el tránsito del mundo mapuche a la izquierda, a partir de las militancias de líderes del movimiento mapuche, se termina construyendo una imagen donde pareciera ser que el pueblo mapuche se "izquierdizó" y es entendible, pues la historia del período se visualiza a través de los militantes mapuche de izquierda y asimismo las fuentes pesquisadas tratan de caracterizar a las organizaciones y sus líderes. Con esto se aborda tangencialmente la realidad mapuche o reproducen la realidad que representan los mismos militantes mapuche. Asímismo, los investigadores provienen ideológicamente de la izquierda, y ello implica en que se mueven bajo un episteme concreto de interpretación, esto es una constatación que no invalida el valor que tienen estas investigaciones y las aportaciones que realizan al estudio del pueblo mapuche, pero si explican las relaciones con sus sujetos de estudio así como las interpretaciones.

La segunda crítica versa sobre el gobierno de la UP, donde se evita mostrar cualquier contradicción o tensión entre el mundo mapuche y la izquierda; esto es también comprensible porque se trata de dar una continuidad a los ideales a los que aspiró este conglomerado político y que para muchos tiene algún sentido en la actualidad.

Como tercera crítica, está la situación de las violaciones a los derechos humanos, donde el énfasis es hablar sobre la represión política de la dictadura, lo cual termina invisibilizando una serie de expresiones y situaciones mapuche que están ocurriendo dentro de los primeros años de dictadura y que dan cuenta de una capacidad organizativa; con ello no se intenta minimizar o censurar el tema de los

derechos humanos y sus violaciones, por el contrario, es necesario denunciar, pero sin invisibilizar aspectos fundamentales que explican la instalación del mapuche de derecha así como la reorganización de los militantes mapuche de izquierda.

Por último, podemos centrar una crítica en lo que ocurre en 1979 y el surgimiento del decreto de ley 2.568 que propiciaba las liquidaciones de los Títulos de Merced, de carácter comunitario, entregados por el Estado chileno entre 1884 a 1927 y da paso a la propiedad individual, eliminando así la calidad indígena de las tierras y sus ocupantes (Valenzuela y Oliva, 2007, p 304). En esta última crítica, el mundo mapuche aparece de forma reactiva, como si no hubiese existido un proceso de discusión y críticas de años anteriores.

Esto no es un tema nuevo, en estos últimos 10 años ha sido foco de mi preocupación, desarrollando diversas publicaciones y estableciendo un cuerpo de ideas a debatir. Sin embargo, veo que las críticas a las que aludo se siguen manteniendo en la actualidad.

Como una forma de introducir al tema, describiré algunas ideas antes trabajadas para ir estableciendo las particularidades de este trabajo. En el 2006, en mi escrito *Siglo XX en Gulu Mapu: de la fragmentación del Wallmapu a la Unidad Nacional Mapuche. 1880 a 1978*, pude ir construyendo una perspectiva crítica sobre parte del período; en específico mostrar a un movimiento mapuche con un programa propio, donde la izquierda era un aliado circunstancial, pues en un principio parecieran coincidir sin tensión alguna, pero ya a fines de la UP existía fisuras o grietas que se iba ampliando (2006, pp. 181-196). En dicho texto también abordo los primeros años de la dictadura cívico-militar y el proceso de exilio donde, pese a la violencia política, existe una capacidad de articulación en contra de la dictadura, tanto por los militantes mapuche en Chile, como los que se encuentran en el exilio; se reagrupan y se constituyen como expresión política a partir de 1978. En Chile surgen los Centros Culturales Mapuche y luego AD-MAPU, mientras que en el exilio tenemos al Comité Exterior Mapuche.

En un escrito junto a Christian Martínez, *Las políticas hacia las comunidades Mapuche del Gobierno Militar y la fundación del Consejo Regional Mapuche, 1973-1983* (2011), pudimos constatar un apoyo a la dictadura por parte de algunas agrupaciones mapuche desde un primer momento, y al mismo tiempo, un interés por parte de los militares (principalmente desde el ejército), en construir una gobernanza en alianza con algunos grupos de civiles que resultarán estratégicos, y entre ellos, los mapuche resultaban importantes en la discusión sobre lo que iba a ser la Región de la Araucanía y el proceso de subdivisión de comunidades. En ese momento intentaron conformar lo que se llamó el Consejo Regional Mapuche o Indígena, que se oficializó en 1978.

Posteriormente, en otro escrito, *La dictadura y las respuestas organizativas mapuches, 1973-1989* (2014) reviso a dos grupos específicos, el Consejo Regional Mapuche, constituido por mapuche que trabajan con las autoridades militares; y el Comité Exterior Mapuche, conformado por mapuche que se encontraban exiliados en Europa. En ambos casos, estas organizaciones comenzaron a desarrollar un realce por la historia, la lengua y la cultura, y a generar una postura más etnocéntrica, sin dejar de lado sus articulaciones políticas e ideológicas. Pude apreciar en este caso cómo había existido un proceso de reflexión, tanto individual como colectivo y que se venía gestando en una época anterior al golpe; a partir de 1978-1979 se generó un nuevo giro con estas organizaciones, donde se comienzan a deslizar problemáticas como la integración al Estado y la Nación en Chile, ya sea en un proyecto de modernización de derecha o en el camino al socialismo. Si bien no existe una conclusión concreta, sí se puede afirmar que hay una autoafirmación como sujetos sociales.

La influencia de las reflexiones de estos años las hemos estudiado en términos de efectos y propuestas, en la década de 1980. En mi texto *Movimiento mapuche y disputa historiográfica. La obra Kuralaf 1986-1989* (2015) vemos que comienza a consolidarse un revisionismo histórico. La obra de teatro estudiada da cuenta de un nuevo discurso y del aglutinamiento de una generación nueva de militantes

mapuche, que concluyen en la consolidación de un proyecto político propio, basado en la cultura, descentrado de la modernidad estatal y tensionando a ratos a la izquierda, en el contexto de una lucha antidictatorial. De igual forma, en el escrito *TACUM. El grupo de teatro de Ad-Mapu. Un espacio para la práctica anticolonial Mapuche. 1981-1989* (2016) vemos dos grandes corrientes dentro del movimiento mapuche, por un lado, los militantes de los partidos de izquierda con formación tradicional y por otro, los jóvenes militantes, simpatizantes de las ideas de izquierda, pero que ven sus relaciones tensionadas con los partidos. Al mismo tiempo, el arte se muestra como un espacio para poder ir acuñando su nuevo discurso y quehacer político, que se nutre del trabajo en terreno en comunidades.

En el artículo *Cuando la cultura recompone al pueblo, bases de la lucha anticolonial en el período de la dictadura militar 1973-1989 en Gulu Mapu* (2018) damos cuenta que la dictadura generó un proceso reflexivo-creativo, donde nace un proceso por generar una estética y representar lo mapuche, desarrollando una valoración por la lengua y la cultura, además de la historia. En estos escritos nos hemos abocado a buscar una posición mapuche descentrada del Estado y de los partidos de izquierda.

De esta manera, como se puede apreciar, he tratado de generar un cuerpo de ideas que nos ayudarán a discutir a lo largo de este texto. Pero volviendo a la reflexión del período, Rolf Foester y Sonia Montecino señalaron que existían tres procesos para entender a las organizaciones mapuche en el período 1958-1970: la Reforma Agraria, iniciada con el presidente Alessandri; la decadencia de la Corporación Araucana, una de las organizaciones de mayor representación mapuche y que logró representantes políticos elegidos en distintas instituciones estatales; y por último, las movilización de comunidades a partir de la recuperación de tierras (1988, p 285-287). En este sentido, tomamos estos tres ejes, pero desde una perspectiva distinta, intentaremos hacer un recorrido a partir de documentos de archivos estatales, textos de la época y reflexiones mapuche escrituradas entre 1961 y 1979.

Para este texto, como primer objetivo, nos proponemos visualizar aspectos coloniales en la construcción de un relato hegemónico para este período; como segundo objetivo, describir cómo se va construyendo la idea de un proyecto integral mapuche que tense la integración al Estado y la Nación y la construcción de un proyecto político propio.

Nuestra hipótesis es que en este período se fue construyendo una idea de desarrollo mapuche que intenta ser integral. En este ejercicio no hay definición teórica, sino nociones de lo que podría ser, o que podría involucrar dicho desarrollo. También, este proceso implica dos movimientos a grandes rasgos: el primero es la integración al Estado y/o la Nación; y el segundo es la continuidad como sujeto colectivo diferenciado culturalmente. Es por ello que intentaremos mostrar las condiciones que posibilitaron este avanzar, y porqué ya en 1979 el movimiento mapuche comienza a pensar en la consolidación de ser un sujeto social diferenciado étnicamente, donde pareciera ser tener más afinidad en integrarse al Estado que a la nación propiamente tal.

Descentrar el relato único de la reforma agraria, la Unidad Popular y el Movimiento Campesino Revolucionario

Si bien en nuestro texto del año 2006 hicimos una crítica a la izquierda, y visibilizamos una tensión entre las organizaciones mapuche, la Reforma Agraria y la UP, ha sido Florencia Mallon la primera en poner una perspectiva académica crítica acerca del gobierno de la UP para el caso mapuche, y si bien en la historiografía nacional chilena existió un proceso crítico a la gestión de la UP, los últimos esfuerzos han ido en valorar la experiencia de la UP, ya sea en los hechos, como en los valores que encarnaba el proyecto socialista (Mallon, 2009, p. 3), incluso ella se ha planteado en esta línea con su trabajo *La sangre del Copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno, 1906-2001* (2005). En este sentido, Mallon trata de advertirnos los

riesgos de construir una historia centrada en la Reforma Agraria, la UP y el Movimiento Campesino Revolucionario, pues este tipo de relato ensombrecen la historia mapuche, ya que el centro termina siendo la izquierda (2009, p. 6). Estos relatos no logran dimensionar las diferencias que existían al interior de la izquierda ni tampoco las diferencias existentes al interior del mundo mapuche y no contienen una visión crítica del período. Mallon hace una crítica a tres textos: Joanna Crow (2007); Martín Correa, Raúl Molina y Nancy Yáñez (2005); y Rafael Railaf y otros (2006). Hay dos textos publicados en este último tiempo a los cuales podríamos aplicar la misma crítica, Cristian Suazo (2018) y Jaime Navarrete (2018), ambos son excelentes trabajos. Sin duda podríamos hacer un listado mucho más amplio y con diferentes matices a partir de estos últimos 20 años, análisis que por el momento queda pendiente, pues involucra hacer un revisionismo histórico detallado de las teorías, posicionamientos políticos, hipótesis, metodologías, por nombrar algunas de las cuestiones a considerar.

Las críticas metodológicas de Mallon tienen que ver a la autoridad que se da a algunos sujetos como Pablo Neruda o Alejandro Lipschütz, testimonios de militantes como únicas fuentes y cómo las fuentes recopiladas solo dan a conocer la tensión Estado/pueblo mapuche. Esto lleva a que no exista una visión del proyecto autónomo mapuche o una historia mapuche descentrada del Estado y de la izquierda.

Sin dudas, estos textos muestran un protagonismo del mundo mapuche pero, ¿esto se refleja en la historia nacional o en la mirada de los actores de la época? Creemos que no, pues lo mapuche no logró tener un gran impacto, aunque sí comenzaron a ser visibilizados en el último tiempo de la UP.

La construcción del proyecto de desarrollo integral mapuche

Foesrter y Montecino (1988) nos muestran una gran creación de organizaciones mapuche de izquierda y de centro que van construyendo

nuevas alternativas organizacionales entre 1958 y 1970, lo mismo que movilizaciones (pp. 288-332). Víctor Gavilán (2007) presenta de manera sintética parte de estas organizaciones y sus objetivos políticos en el capítulo 8, titulado "Nuevo despertar en Gulumapu (1960-1972)". De manera testimonial, el texto recuerda la recuperación en Arauco, de Pangal Sara de Lebu en 1961, además de hacer un recorrido de algunas recuperaciones de tierras en la década de 1970. Sin dudas estos elementos están presentes en lo que hemos denominado la construcción del proyecto integral mapuche. Concebimos a este proyecto como una construcción que se fue realizando por la propia dinámica interna de las organizaciones, además de factores externos como la reforma agraria y las políticas indígenas; y creemos que dicho proyecto fue tomando fuerza en la década de 1960 y se presenta con mayor coherencia a fines de esta década.

Nuestro hito para este período es el Congreso Nacional Mapuche realizado en 1969. Entre los documentos que encontramos en el Archivo Regional de la Araucanía (ARA), en el fondo Intendencia de Cautín (IC); Volumen 272, está el documento del Congreso Nacional Mapuche del 17 al 20 de diciembre de 1969, el cual define las líneas de acción que son negociadas después con la UP, en marzo de 1970. Asisten 200 delegados de las organizaciones Unión Mapuche de Angol, Federación Indígena de Panguipulli, Federación Araucana de Temuco, Comunas Angol, Los Sauces, Puren, Capitán Pastene, Lumaco, Collipulli, Ercilla, Victoria, Curacautín, Mulchén, Santa Bárbara, Hualpén, Galvarino, Panguipulli y Temuco. Presidente: Antonio Millape Caniuqueo, de Cautín. 1° Vicepresidente: Manuel Antileo Liempe, de Malleco. 2° Vicepresidente: Manuel Cheuque Huenulaf, de Malleco. Secretario general: Nabor Mulato Hernández, de Malleco. Relacionador público: Manuel Cordero Quilape, de Cautín. Director: Guillermo Ñanco Collío, de Biobío. Director: Herminio Hueitra Nail, de Valdivia. Como podemos ver, entre 1958, que es cuando comienzan los primeros desprendimientos de militantes de la Corporación Araucana a 1969, se habían consolidado diversas organizaciones y cada vez con la idea de crear una representación nacional mapuche.

Los puntos acordados de este acuerdo ya lo hemos publicado en un texto anterior (Caniuqueo, 2006).

Si bien algunos antecedentes de movilizaciones mapuche de la década de 1960 los podemos encontrar en Foerster y Montecino (1988), creo necesario abordar algunas situaciones particulares entre 1961 a 1962 y 1964. Nuestras investigaciones en el ARA, en la Intendencia de Cautín nos revelaron dos hechos especiales, que desde 1955 las actividades del Partido Comunista eran seguidas por las policía (Caniuqueo, 2006, p. 185), por ejemplo, en el volumen 140, se encuentra un informe policial sobre la Concentración Pública Asociación Indígena de Chile, del 4 de diciembre 1960. Entre los oradores mapuche están Martín Painemal Huenchual y Eusebio Painemal Huircapan. El informe corresponde a la dirección general de investigaciones 7ª prefectura Temuco. Las palabras de ambos oradores se centraron en criticar al gobierno de Alessandri, pero resulta algo interesante porque si bien hay un discurso sobre la situación económica y social, comienzan poco a poco también a aparecer demandas y tensiones:

> Finalmente manifestó que se presentará un memorándum al Ministro de Obras Públicas a fin de que se construyan habitaciones o se den los materiales necesarios para hacerlo con el objeto de solucionar en parte la desesperanzada situación en que se mantienen numerosos mapuche de esta zona. Así mismo se dirigirán a la autoridad correspondiente para detener la aprobación de algunos artículos de la nueva legislación indígena, que estiman contrarios a los intereses de la raza (Painemal, ARA, IC., 1969, Vol. 140, fj 39).

Hablando sobre la miseria, Eusebio Painemal plantea lo siguiente:

> la situación ha obligado a un gran número de mapuches jóvenes a abandonar sus tierras para buscar fuentes de trabajo en las ciudades y es así como en Santiago solamente las estadísticas señalan la existencia de más de 60.000 indios que se desempeñan en las más variadas actividades. Hizo presente que el trato recibido durante tantos años por parte de los poderosos y la experiencia sufrida ante traidores de la raza como Venancio Coñuepan (ARA, IC., 1969, Vol. 140, fj 40)

El seguimiento que se les hace a los líderes mapuche nos plantea que los funcionarios del Estado canalizan las demandas y estados de las organizaciones a través de tres vías: la prensa, que podemos apreciar en Foerster y Montecino (1988), los registros de policía, como en este caso, así como escritos, como lo que señala el propio Martin Painemal en su alocución.

En esta misma Intendencia encontramos una serie documental en el volumen 165, en las fojas 145-148 y 166-167 sobre la recuperación de tierras de Alto Yupehue por la comunidad de Hueñalihuen, esto en el predio Sucesión Francisco Ulloa Pedreros. En este caso vemos dos políticas indígenas agotadas, la primera, en términos organizacionales mapuche, es la que propugnaba la vieja guardia como Corporación Araucana y la segunda, era la del propio Estado, en términos de resolver los litigios de tierra y tener un control sobre el mundo rural. Los comuneros en las fojas 148-149 dan a conocer sus argumentos sobre la recuperación de tierras. En ellos se hacen acompañar por Juan Tuma, diputado de izquierda, del Partido Democrático Nacional, con el cual hacen las gestiones en el Ministerio de Tierra en Temuco y solicitaban la remensura correspondiente a su Título de Merced y la entrega de un predio fiscal con el que colindan. De hecho, reconocen que solo ocupan las tierras que estaban dentro del Título de Merced original. Con ello, es claro que la recuperación de tierra que buscan se ajusta al Estado de derecho a través de los títulos otorgados por el Estado. El caso es conocido, porque dentro de la estrategia mapuche estaba el dar cuenta de las tomas a través del periódico *El Siglo*. De hecho, este es un factor que moviliza la investigación interna de la policía ante la denuncia de los comuneros por la quema de 4 rucas. Nota aparte, el periódico *El Siglo,* de orientación comunista, es el gran difusor de las situaciones de recuperación o violencias a comunidades mapuche en la década de 1960 y principios de 1970 (Samaniego y Ruiz, 2007). Es interesante que el resto de fojas de la serie documental se distribuye entre las policías de investigaciones y carabineros; sus alegatos son en dos líneas: la primera, establecer de que hay

elementos externos, agitadores de tendencia comunistas, en este caso es Rosendo Huenuman García, de 26 años, comunista y que estuvo trabajando en Lota; se obvia que Huenuman pertenecía a la comunidad de Hueñaliwen, y lo segundo es desmentir que hubo malos tratos o amenazas y que no se quemaron las rucas que se denunciaban. Lo que intentamos establecer, es que la policía trabajaba bajo el relato de un enemigo que hacía agitación y era el organizador de las tomas; en sus escritos se menciona que se encontraron pancartas, panfletos y ejemplares del diario *El Siglo* al interior de las rucas en el predio ocupado. Vemos así que en la policía ya estaba instalado un anticomunismo y queda patente a partir de sus prácticas investigativas y de sus procedimientos policiales. Pero también podemos constatar en el caso mapuche que se llegaba a la conclusión de que las tomas podían tener mayores beneficios que los trámites realizados en los Juzgados de Indios, que con la nueva Ley indígena Nº 14.511, dictada por Alessandri, los terminaba empantanando más. En tanto que en esta recuperación, los mapuche hicieron durmientes para la venta, pudieron obtener dinero para su sustento y de hecho en uno de los informes policiales se insinúa que esta podría ser una práctica a realizar año a año.

En los intentos de consolidar una propuesta de desarrollo integral mapuche, podemos apreciar en 1965, Carta de 8 fojas, al señor vicepresidente de la República don Bernardo Leighton, en las que firman el Movimiento Indígena de Chile, a través de don Juan Huichalaf Antinao, presidente, Temuco; la Sociedad Araucana "Galvarino" de Santiago, a través Remigio Catrileo Quinchao, presidente, Santiago; y Movimiento Universitario Araucano de Temuco, Vicente Mariqueo. Como vemos, la discusión igual involucraba a mapuche de Santiago, de la región y de un grupo que hasta entonces no figuraba en los registros organizacionales, los mapuche universitarios. Las demandas por salud, educación, por tener injerencia en la reforma agraria, la generación de apoyo técnico para la producción, el tema habitacional, por nombrar algunos comienzan a tener mayor fundamento (Caniuqueo, 2006, pp. 187-188). Además debemos

recordar que el 8 de abril de 1964 se realiza el "Pacto de Cautín" entre organizaciones mapuche ligadas a la izquierda y el candidato presidencial Salvador Allende, en las cercanías del cerro Ñielol, que incluye libertad religiosa, educación (incluyendo la manutención del mapudungun y la historia mapuche), la vivienda y la salud, además de la tierra, los aspectos productivos y las instituciones estatales (Samaniego y Ruiz, 2007, pp. 317-321).

Pero lo que se comenzaba a plantear como propuesta integral desde el mundo mapuche, para un sector del Estado, era una amenaza en contra del orden, como respuesta; comenzaron a constituir una inteligencia política, consolidando la idea de un enemigo interno al cual había que vigilar. Adjunta a la carta enviada al vicepresidente Leighton encontramos un memorándum de la Intendencia, sin fecha, probablemente redactada por una de las policías, que individualiza a Vicente Mariqueo Quintriqueo como parte de una estructura llamada Espartaco, de influencia maoísta, que señala "alumno del 1º año de tecnología Agrícola del Centro Universitario, regresó en fecha reciente de China Comunista, después de haber permanecido algunos meses en ese país. Este es el cabecilla de un fuerte grupo de esta tendencia que existe en el Centro Universitario Regional, formado por descendientes indígenas" (ARA, Vol. 218, S/A, 1965), y termina agregando el informe que se están generando otros grupos cercanos a estas tendencia.

Pero las tensiones a la larga comienzan a ser productivas. Ante la radicalización, también un sector del Estado dispone ir abordando, dentro de lo complejo que resultan sus estructuras, una respuesta. En el ARA, intendencia de Cautín, en el volumen 248, encontramos instrucciones para los créditos o préstamos que promovía la ley indígena Nº 14511, esto con fecha 21 de febrero de 1967. Es claro que estos créditos apuntaban en una orientación de la capitalización y por ende de desarrollar un camino hacia la modernidad de algunos indígenas. Mismo caso con el vol. 250, en el informe de la Dirección de Asuntos Indígenas (DASIN) en la cual hay líneas de trabajo como el Censo indígena que comienza en 1962 y termina en 1968, el crédito

agrícola, líneas de producción (se diversifica la agricultura, se promueve la textilería y artesanías mapuche), educación y salud. Las desventajas que poseían estos organismos ligados al mundo indígena eran sus bajos presupuestos y la cobertura de sus programas, que es la queja permanente de las organizaciones. Aún así no podemos desechar los intentos que se trataron de generar; esta misma situación se puede apreciar en la actualidad con los presupuestos institucionales para el mundo indígena. También podemos ver las propuestas de INDAP en el vol. 251, entre sus esfuerzos por abordar la situación mapuche, con planificaciones verdaderamente ambiciosas, desarrolló un instrumento en mapudungun para entrevistarse con usuarios mapuche para el trabajo en terreno. Lo que apreciamos es que los sueños por mejorar la situación de Chile y los mapuche generan un proceso creativo, incluso al interior del Estado. Con esto último, cabría plantearse que si bien existió una radicalización indígena que avanzaba, tenemos a la policía junto a un sector político que veía de forma negativa las movilizaciones, y/o la relación programática por parte de la izquierda. Existe, en este tiempo, también un tercer sector, minoritario e invisibilizado dentro del Estado, que busca generar propuestas para responder al clima del momento, incluso abiertos a abordar las demandas y reivindicaciones mapuche, que ya iban más allá de lo productivo y planteaban un paso a la modernidad teniendo un tipo de salud, educación, vivienda, una diversidad en la producción con instituciones que permitieran la asistencia técnica e incluyendo el tema de la tierras y la reforma agraria.

La tensión entre la UP y el pueblo mapuche

Pero la radicalización mapuche fue en avance. Es así como en 1970 el informe del gobernador de Lautaro, Fernando Teillier Morin, con fecha de 7 de diciembre de 1970, muestra las complejidades que estaba generando esta radicalización. Teillier divide el informe en dos grandes puntos: en rectificación de deslindes de comunidades indígenas

y tomas y ocupación de fundos, el informe que reconoce la situación de extrema pobreza de las comunidades y de los abusos con ellos cometidos señalando:

> existe todo un clima para que los mapuche exijan la solución de su problema básico: la tierra, y es en estas condiciones que entran a jugar otras tendencias políticas tales como el MIR y el MOAC, que sin tener responsabilidades de gobierno aprovechan este caldo de cultivo para aparecer ahora, como los amigos y los libertadores del pueblo mapuche (Teillier, ARA, IC. Vol. 272, 1970).

Si bien Teillier ve un problema con el MIR y el MOAC, señala otros puntos complejos al interior del Estado, principalmente con aspectos burocráticos. Asimismo ocurrió con los representantes de los latifundistas quienes aprovechan con magnificar la situación en la prensa generando un clima más complejo. En otro aspecto también se vislumbra una tensión entre medianos y pequeños productores y en los efectos que se están generando en la producción. Como vemos, la presión lleva a tratar de responder a la demanda más urgente: la tierra, pues es lo que está generando mayor fricción e ingobernabilidad en ese momento y es lo que se puede resolver de manera más práctica y programática.

La efervescencia de la época llevaba incluso a los mapuche a crear organizaciones no partidistas y aunque la gran mayoría de sus directivos sí eran militantes de partidos, sus asociados no lo eran, como es el caso del Grupo Universitario Mapuche, conocido en la década de 1970 como la Federación de Estudiantes Indígena, la cual agrupaban a mapuche de Temuco y Santiago. Roberto Morales identifica a organizaciones como el Partido Mapuche de Chile (PAMACH) (1969-1973), Netuaiñ Mapu (1970-1973), Centro Mapuche de Santiago (hasta 1973) (Morales, 1986, pp. 12-13), añadiendo igual los que hemos ido nombrando. Las posturas mapuche fueron siendo también sumamente diversas, como por ejemplo:

> El movimiento que libere al pueblo mapuche no puede calificarse de comunista o socialista, debe ser un movimiento de carácter étnico unificador del pueblo (...) El marxismo es una concepción científica, y el pueblo mapuche no puede así profesarlo. Es incompatible con la cultura general del mapuche que rinde tributo a espíritus, animales y fuerzas sobre naturales. Aunque muchos mapuche son comunistas o socialistas (Ayllapan y Munizaga, 1971, p. 62).

De esta manera, existían posiciones simpatizantes de las ideas de izquierda pero no necesariamente veían una integración al socialismo. Las posiciones son variadas, algunas integracionistas al Estado y a la nación chilena, otras de buscar un camino propio, otros intentaban establecer una integración al Estado. Es claro que todas estas posiciones eran discutidas por grupos organizados y no por todo el pueblo mapuche.

La capacidad de autoconvocarse y de avanzar en un proyecto integral mapuche fue la gran apuesta, y de hecho, la discusión comenzó a avanzar incluso hacia los derechos colectivos. Las insuficiencias del Estado para dar respuesta a las demandas mapuche, hizo que el gobierno de la UP se ajustara a su programa y limitara las propuestas que iban surgiendo desde el mundo mapuche, que iban a plantearse más allá de la clase social:

> Autodeterminación o Separación; queremos destacar e indicar con esto que el Mapuche podría dirigirse, tomar decisiones, elegir vías o caminos, formar su propia organización política administrativa, etc., todo esto hecho por sí y ante sí, dejando de lado el hecho de que está dentro de un Estado y una Nación. Esto traería aparejado constantemente una separación de hecho del grupo Mapuche, y en definitiva, del resto de la población y más específicamente de la Nación y del Estado chileno. Cabe que esta posibilidad no cabe y no merece mayor discusión (Coronado, 1973, p. 513).

De esta manera, se asumía y se dejaba en claro que las posiciones mapuche más autonomistas estarían fuera de la UP, que el problema no se abordaría en términos de minoría étnica nacional, sino como

clase campesina, y su evolución de conciencia era la de identificarse como clase. La izquierda en mayor o menor medida estuvo de acuerdo con esta definición estratégica. La visión global hacia el mapuche era la de un sujeto que debía integrarse a la nación, es por ello que la ley indígena en el período de Allende tuvo detractores fuera y dentro de la izquierda.

> Yo la defendí en el Parlamento, en marzo del año 1972; había estado dos años. Allí, con nuestros propios ojos vimos como la deformaban aquellos Senadores, los mismos que habían pedido, poco tiempo antes, apoyo a los Mapuche. Ellos la modificaron, pese a todo, ha sido la mejor ley que ha tenido el Pueblo Mapuche (Painemal, 1983, p. 5).

Melillán Painemal, dirigente histórico mapuche y del Partido Comunista, planteaba en retrospectiva cómo la clase política destruía una propuesta que avanzaba hacia un desarrollo integral mapuche. Cabe recordar que en esto no hay una responsabilidad exclusiva del gobierno de la UP, aunque en esta coalición existía una fuerte tendencia a que los mapuche se ajustaran al programa de la UP. También, los partidos y agrupaciones de izquierda reducían todo a un problema de tierra y de pobreza; asumiendo que el principal problema era como el mapuche adquiera la conciencia de clase, en la lógica leninista, es decir, una conciencia de sí y para sí. Bernardo Berdichewsky plantea lo siguiente:

> En la actualidad, las reducciones, mantienen la apariencia de una tenencia colectiva de la tierra que no fue realmente tampoco, una propiedad comunal: Las contradicciones internas y externas del sistema de reducciones..., redujeron de hecho a la población mapuche a un conglomerado de un tipo especial de minifundistas con un sentido obsesivo, pequeño burgués, la propiedad privada territorial (Berdichewsky, 1971, p. 76).

Las tensiones producto de la radicalización de los movimientos sociales, la falta de capacidad y experiencia de los nuevos funcionarios que comienzan a ingresar al Estado, la necesidad de abordar

de manera más sistemática lo que se venía generando a partir del movimiento mapuche, la implementación de la reforma agraria y la necesidad de generar procesos de modernización llevan a estudiar de manera más detallada la situación mapuche. El texto de Berdichewsky se encuentra en esta línea, intenta tener una visión global de la sociedad mapuche, estableciendo los aspectos básicos como la identidad, la situación socioeconómica, cultural, organizacional, como asimismo la relación pueblo mapuche/Estado. Esto principalmente en los procesos de intervención, incluyendo el uso de estudio de casos, informes y participación en los procesos de intervención de los funcionarios estatales. Sin embargo, si bien en múltiples ocasiones hace hincapié en el proceso de conciencia de clase por parte de los mapuche, también propone intervenciones que no atenten contra la organización y cultura, adoptando los procesos intervención dialogantes.

Anterior a Berdichewsky existían intentos de carácter más académicos y teóricos sobre lo que se denominó El problema mapuche. Esto lo podemos ver a partir de algunos escritos como *La Cuestión Mapuche*, de Alejandro Saavedra (1971), quien en 1970 ya había publicado parte de su investigación en la revista universitaria *Cuadernos de la Realidad Nacional*.

El Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria (ICIRA) desarrolla una línea editorial orientada a funcionarios y organizaciones sociales que les permita analizar e intervenir de manera más concreta la realidad social campesina y en esa línea, para el caso mapuche se reeditan los siguientes libros: *Chile: su tierra y su gente* (Jorge Mc Bride, publicado originalmente en 1935, vuelve a ser publicado en 1973), *La propiedad austral* (Ricardo Donoso y Fanor Velasco, reeditado en 1970, un texto proscripto en su primera edición de 1929, al evidenciar el débil sustento legal que tenían los títulos de propiedad en el sur de Chile. Así también el libro *Memorias de un cacique mapuche*, de Pascual Coña con Ernesto de Moesbach, originalmente de 1930 y vuelto a publicar en 1973 como una forma de afrontar el poco conocimiento existente acerca de la realidad

mapuche. Los tres textos publicados originalmente en la década de 1930 habían quedado en el olvido, pero la necesidad de pensar al país hacía el futuro obligaba a ver el pasado.

Volviendo al texto de Saavedra, este utiliza el concepto de subcultura, como efecto de la proletarización campesina y sometimiento a estructuras que no son propias del mapuche, ante las cuales también tiene capacidad de respuesta y de resistencia, pero en lo esencial plantea que los mapuche comparten una situación de clase social en el esquema de producción capitalista, pese a sus particularidades étnicas (1970, pp. 72-74; 1971, pp. 19-21). Hay que clarificar que el concepto utilizado por Saavedra no tiene relación con un juicio de valor, sino una categoría que permite relacionar al campesino mapuche con el campesino chileno al interior de una clase social. Lo étnico no es devaluado, sino se refiere a una particularidad que el grupo puede seguir desarrollando. El autor tiene tal nivel de convencimiento de que los mapuche deben asumir una postura de clase, que en su libro *Los Mapuche en la sociedad chilena actual*, (2002, pp. 62-65) vuelve a instalar el concepto. Sin dudas, este es uno de los puntos de tensiones en la década de 1970 y en la actualidad, si los mapuche debemos subsumirnos en las clases sociales con nuestra diferenciación étnica o debemos optar por ser un sujeto colectivo con derechos y una diversidad social más acentuada.

Por otra parte, la revista *Cuadernos de la Realidad Nacional*, de octubre de 1972, publica un dossier sobre la temática mapuche en la que participan una serie de investigadores como Bernard Jeannot con su texto *El problema mapuche en Chile*, Hugo Ormeño y Jorge Osses con *La nueva legislación sobre indígenas en Chile*, María Ester Greve junto a Sergio Pacheco y José Segura con *La cosmovisión mapuche* y el último texto de Wilson Cantoni, *Fundamentos para una política cultural mapuche*. Los investigadores se ven limitados en cuanto a un saber de carácter aplicado, puesto que tanto desde la UP como desde los partidos de izquierda se tiende a una visión más cercana al concepto de subcultura de Saavedra, ya que el concepto de clase era clave para sus procesos de intervención social y jerarquizaba sus acciones, pues

con ello daban cumplimiento a sus programas políticos. De ahí que informes y datos emanados desde la burocracia estatal o partidista, o de los propios movimientos sean acotados al tema de tierra y la situación social, más que a lo cultural.

Los tres primeros textos sitúan sus objetivos en la política agraria y los elementos que les permitirían un mejor desempeño. De ahí que Jeannot hiciera hincapié en que hay en la sociedad mapuche una marca a considerar, que es la autorrepresentación en términos de significantes, con lo cual el proyecto de la UP no se podía ver como otro proyecto más de dominación. Finalmente, termina retomando el programa de la UP en materia agraria, pero a la hora de plantear lo cultural las definiciones terminan siendo generales, con lo cual se diluye la propuesta de la política cultural (1972, pp. 12-14). Para el caso de Ormeño y Osses, también se sitúan en el plano del agro y de las injusticias que han sufrido los mapuche una vez incorporados por la República. Sin dudas este aspecto es positivo, en el sentido que cambia el giro discursivo explicativo de la situación mapuche, pasando de los españoles como culpables de las desgracias de los indígenas en Chile, e instalando a la República como responsable de la situación estructural mapuche, pero sigue siendo el agro el ámbito central y la conciencia de clase la respuesta. La organizativa mapuche, por su parte, hace una crítica a la ley indígena Nº 14511, de Alessandri, (1972, pp. 23-24) y a los beneficios de la ley indígena que se está discutiendo en ese momento (pp. 25-45).

En el caso de Greve, Pacheco y Segura tenemos la apertura a la cosmovisión como elemento central en la construcción de una nueva política indígena. Esto es relevante porque en este punto, la cultura se transforma en un campo de saber y de poder, donde hay ciertos sujetos que pueden desentrañar, y esto los transforma en sujetos únicos, abriendo un nicho específico para el cientista social. Es por ello que finaliza aludiendo a la frontera étnica que tiene a los técnicos de la reforma agraria y su comprensión real del mundo mapuche (1972, pp. 70-73). Esto será retomado por los mapuche en la década de

1980 para señalar lo lejos que está la sociedad chilena de conocerlos, generándose una frontera étnica.

El texto de Cantoni revela un aspecto interesante, pero que no cobró relevancia para el mundo de la UP, que era el de la conciencia étnica, pues el racismo, por ejemplo, no es solo patrimonio de las clases patronales. De hecho, Cantoni propone un giro, en el cual, al analizar la dinámica del racismo como un elemento visible de la explotación capitalista, nos permite ser conscientes de ello y de su función ideológica en la explotación. Plantea que en un avance al socialismo, se debería valorar la diferencia cultural y construir una convivencia cultural al interior de la sociedad nacional. Esto permitiría hacer coincidir los intereses de la conciencia étnica y la conciencia de clase (1972, pp. 92-95).

Los cuatro textos, en mayor o menor medida, dejan entrever una deuda entre Estado y el pueblo mapuche, también ven de manera auspiciosa el proceso socialista, como una forma de reparar las injusticias vividas, y al mismo tiempo, un espacio de integración a la sociedad nacional. Hay que aclarar que el concepto de sociedad nacional es propio del contexto histórico, referido a la convivencia bajo el Estado, una visión cercana a la multiculturalidad. Pero como lo señala Stuchlik "el cambio en la actitud chilena, no necesariamente causado por el cambio en la cultura mapuche, sino más bien por el cambio en la cultura chilena misma" (1974, p. 27). Lo que nos lleva a pensar que toda esta reflexión también fue posible porque existió una apertura a escuchar la demanda por parte del mundo chileno; sin embargo, esto no significa que la subordinación haya quedado de lado, tanto en la observación, en la investigación y en las propuestas. Se asume al hombre blanco como el responsable del proceso, siendo así el funcionario, el político, el partido o el Estado como quien ayude a generar el proceso de conciencia en el mundo mapuche, pues todos, en menor o mayor medida parten de la idea de intervenir al mundo mapuche.

La mirada mapuche en retrospectiva después del golpe cívico-militar

En trabajos anteriores he mostrado que para el caso mapuche existió un sector organizado que vio con buenos ojos el golpe militar, incluso algunos de los que participaron en el Congreso Nacional Mapuche de 1969 (Caniuqueo, 2006 y 2014; Martínez y Caniuqueo, 2011). En esos escritos dejamos constancia de una ausencia investigativa sobre los mapuche cercanos o colaboradores de la derecha, por un lado, pero también a la situación de los exiliados mapuche a partir de sus particularidades organizativas, y no como parte de la diáspora chilena. Pero lo que nos llama la atención, es una falta de mirada crítica por parte de los militantes de izquierda mapuche al gobierno de la UP. Lo anterior no quiere decir que no hayan tenido opinión o no hayan escrito o hablado sobre ellos, sino que investigativamente esto ha quedado de lado. Tampoco significa que no exista una memoria sobre la UP, ya hemos citado a algunos textos en estas líneas (Samaniego y Ruiz, 2007; Gavilán, 2007; (Railaf *et al*., 2006).

Por otro lado, existen algunos textos testimoniales críticos. Para este apartado me centraré en dos que creo grafican estas reflexiones. El primero es Vicente Mariqueo y su texto "Pueblo Mapuche", presentado en el segundo encuentro de Barbados en 1978, publicado al año siguiente en castellano (Mariqueo, 1979a) y en inglés (Mariqueo, 1979b). El segundo es de Fernando Montupil, titulado "Inche Tati. El Pueblo Mapuche: tradición indómita en Chile", publicado en 1982, en el año del triunfo de la Revolución Sandinista.

> Más allá de la positiva obra realizada en la corta existencia del Gobierno Popular lo cierto es que, como lo dijimos, adolecimos de una política indígena integral y única, ello no por casualidad sino como consecuencias de las debilidades teórico-políticas de la izquierda, de la subsistencia de un extendido oscurantismo político sobre este problema. La relativa indefinición de la izquierda sobre algunos aspectos centrales que debía contener nuestra política socialista de

> integración nacional del mapuche queda de manifiesto desde la presentación al pueblo del Programa Básico de la Unidad Popular (Montupil, 1982, p. 81).

En esta primera parte de la cita se señala la falta de marco teórico-político, cuestión que como vimos, ya en 1973 había sido zanjado; la indefinición de los partidos indicaba de alguna manera que esto no se veía como un problema tan relevante como lo veremos a continuación. Aunque podemos citar algunos textos que trataron de aportar sobre el problema cultural mapuche, podemos darnos cuenta, guardando las proporciones, de la crítica de George Balandier (1970) a los antropólogos y cientistas sociales, en la cual acusaba que para el caso de la descolonización de África, la falta de una teoría política que pudiera encuadrar todas las situaciones emergentes de las transformaciones que provocaba la descolonización. Para el caso mapuche implicaba que cada vez se iban complejizando más sus reivindicaciones y demandas, pasando de derechos individuales a derechos colectivos, resultando estos últimos incomprensibles para ese tiempo, y dando a pensar que ello podía llevar a una secesión (Coronado, 1973).

> De esta manera, la integración tendió a presentarse como un problema difícil y complejo de resolver. Se manifestaron, en los hechos, distintas formas de tratar el problema provocándose divergencia entre los partidos de la izquierda chilena. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, todos sostenían objetivos históricos estratégicos comunes en cuanto a la lucha por la emancipación social plena del campesinado, y por tanto del pueblo mapuche, y de su integración igualitaria en una futura sociedad socialista chilena... Pero el mapuche, además de campesino que asume posición de clase, forma parte de una minoría nacional étnicamente diferenciada y es respecto a esta realidad específica que surgen respuestas distintas e incoherentes; se observó aquí, en el plano de la política cultural, algunas indefiniciones de partidos y organizaciones populares que afectaron sensiblemente la política indígena general del Gobierno en la medida que obstaculizó o desaprovechó la fuerza potencial existente en el campesinado; en suma, ni los partidos de izquierda chilena así como

> tampoco las organizaciones del propio pueblo mapuche supimos señalar con claridad qué destino estructural espera a la minoría nacional mapuche en la futura sociedad socialista, sin entender que aquí también estábamos en presencia de un importante problema estratégico (Montupil, 1982, pp.81-82).

La cita en cuestión revela el hecho de que la izquierda es parte de un esquema colonial, que no logra comprender ni asumir a un pueblo como el mapuche. La preocupación por implementar el socialismo no les deja ver la reproducción colonial que realizan. Al mismo tiempo, revela que los propios mapuche, en su conjunto, no logran crear una propuesta de integración diferenciada, lo que implicaba la necesidad de teorizar políticamente sus demandas, tanto desde la militancia de izquierda como del propio mundo mapuche. La urgencia de resolver problemas pragmáticos, como la recuperación de tierras y los problemas derivados de la pobreza, hacían que la mirada fuera a corto plazo en muchos dirigentes sociales mapuche, pero como había ocurrido durante todo el siglo XX, las formas organizativas tenían dos caras, la que se relacionaba con el Estado y la sociedad civil chilena; y las formas organizativas al interior de las comunidades. Este pudo ser un factor determinante a la hora de implementar las propuestas socialistas.

En 1977, Vicente Mariqueo escribe su reflexión en Inglaterra, para ser presentada en la segunda reunión de Barbados a realizarse ese año, luego de una invitación. Mariqueo trabajaba como jardinero en esa época en Bristol, había tomado cierta distancia de los exiliados chilenos, ya que ve como se reproduce el esquema colonial de la izquierda, que ya habían vivido en Chile, pues pese a tener estudios universitarios, no hubo solidaridad para incorporarlo en círculos universitarios, ni a círculos donde pudiera desarrollarse profesionalmente; con ello se reproduce la racialidad del trabajo tan común en el Chile de esa época a miles de kilómetros de distancia. La invitación lo llevó a una introspección, en un ático de su casa donde reflexionó más de un mes sobre el pueblo mapuche, la UP y el futuro de su

pueblo (Comunicación personal Vicente Mariqueo, 2010). Mariqueo desarrolla un giro discursivo relevante; es una de las primeras veces que el centro del conocimiento pasa del dirigente al *kimche* (sabio), de los libros de historia al anciano de la comunidad. A mi juicio, es la primera vez que la organización interna y cultural es relevada como prioritaria, pues en ella se maneja la historia, lo que le da consistencia al sujeto político y en ella se encuentran parte de las demandas estructurales mapuche.

> [Estos] acontecimientos históricos aún permanecen latentes en las huellas no cicatrizadas en el rostro de nuestra raza, sólo basta visitar a las reducciones y conversar con las personas mayores que pueden dar relatos fidedignos de nuestro acontecer histórico. Los llamados kimche, ellos son nuestros sabios, tienen una enorme capacidad intelectual para retener en sus memorias los hechos más sobresalientes de nuestro pasado histórico (Mariqueo, 1979, p. 138).

Vicente Mariqueo que había militado en la década de 1960 en el Partido Comunista, para luego pasar al maoísmo e integrar el grupo radical Espartaco, terminó en un diálogo con otros mapuche y no mapuche, de diversas militancias, en cuanto a cómo abordar la cuestión cultural mapuche:

> A medida que pasan los años el problema mapuche sigue latente, y contados son los políticos que se hacen algunas autocríticas luego de sus gestiones gubernativas. Bosco Parra, en su calidad de dirigente de la UP y a su honestidad política que le caracteriza, al referirse a nuestro problema mapuche, dice: "Finalmente nos preocupa la subestimación del problema mapuche. Ahí hay una auténtica cuestión nacional no resuelta. Debemos abordarla y darnos cuenta que, a escala chilena, debemos proceder de la misma manera que han usado los países socialistas para afrontar el caso de las minorías nacionales. Actuemos en serio y con originalidad, veremos cómo las tareas de la resistencia se verán reforzadas con energías nuevas, ocultas hasta ahora junto con la verdadera magnitud de la tragedia mapuche" (Mariqueo, 1979, p. 197).

Desde esta perspectiva, la mirada de Mariqueo a fines de la década de 1970 resultaba auspiciosa. La duda era si la izquierda iba abrirse y dejar la tutela sobre los mapuche. En ese momento se entendía bien que la lucha principal de los dirigentes de izquierda era contra la dictadura, y si bien los mapuche de izquierda adscribían a ello, permanecía la insistencia de ser considerados como una minoría diferenciada ante la sociedad chilena y mantener su constitución de sujetos diferenciados a derechos. A su vuelta de Barbados, Vicente Mariqueo junto a su hermano Reynaldo y otros exiliados mapuche, deciden agruparse, para ayudar a los mapuche presos por la dictadura, y también para organizar la ayuda social al pueblo mapuche, lo que los exiliados chilenos interpretaron como un separatismo. Fue Jacques Chonchol, ex ministro de agricultura de Allende, quien los apoyó a dar a conocer su organización.

En Chile los sectores de izquierda, en la misma fecha, trataban de organizarse. El pleno del Partido Comunista fue realizado en agosto de 1977, donde el secretario general Luis Corvalán entregó su informe titulado "La revolución Chilena, la Dictadura Fascista y la Lucha por Derribarla y crear una Nueva Democracia". Participaron 33 militantes destacados, pertenecientes al Comité Central chileno, donde cada uno entregó su evaluación del informe y opinión sobre las condiciones que enfrentaba el Partido Comunista y la sociedad chilena. Rosendo Huenuman, quien había sido diputado en 1973, señalaba en su intervención que: a) que existía una gran cantidad de mapuche víctimas de la represión de la dictadura cívico-militar, b) la capacidad de regeneración de jóvenes dirigentes al interior del mundo campesino y mapuche, c) las enseñanzas que deja la historia mapuche frente a los españoles como reflexiones útiles para la lucha antidictatorial, y d) la necesidad de abordar lo mapuche de manera diferenciada en términos de política cultural y de procesos de desarrollo.

> El Informe de la Comisión Política al Pleno, considera una vez más, una aspiración tan deseada por la gran mayoría de los mapuche en Chile, la conservación de la cultura, idioma, costumbres, establecer

> la gramática mapuche, etc. El reconocimiento legal, en la legislación del Estado, es una inquietud (Huenuman, 1977, p. 140).

Para remarcar su intervención señala, el proyecto de Universidad Mapuche, que quería promover Pablo Neruda, con financiación de la UNESCO, información que le habría sido entregada en una visita realizada al poeta en su casa de Isla Negra, donde asistió Volodia Teitelboim y Gladys Marín. Esto, a su juicio, iba a ser una de las mejores ayudas en la historia como pueblo. Sin duda, para ese tiempo, una Universidad Mapuche significaría dotar de una autonomía intelectual a los mapuche, por lo cual resultaba un proyecto relevante de mencionar y de sostener como aspiración.

Pero no solo los mapuche de izquierda venían cuajando ideas sobre la consideración diferenciada frente al Estado y la sociedad chilena. Las investigaciones de Martin Alonqueo son un ejemplo, ya que con una mirada crítica a la sociedad chilena se planteaba de la siguiente forma:

> Actualmente estoy impulsando y fomentando el folklorismo mapuche, manifestación espiritual y cultural que es totalmente desconocida; pues se conoce al pueblo mapuche a través de sus gestas heroicas que hicieron mellar el filo de las espadas de las huestes españolas en el casco duro de la cabeza del mapuche; pero nunca el contenido interno y la psicología del pueblo. También se conoce a través de los vicios y defectos impuestos por los propios detractores que dicen que somos una tropa de ladrones, borrachos y flojos. Estos son los paños negros con que quieren cubrirnos las propios esquilmadores de esta raza noble que escribiera una página de oro en los anales de la historia de Chile y de América (Alonqueo, 1979, p. 18).

Alonqueo a esa fecha ya estaba jubilado, era cercano a la Democracia Cristiana y a la Iglesia Católica. De hecho, por esa vía, se publicaron en vida y de manera póstuma sus libros. Participó en 1975, en la organización de un encuentro de profesores mapuche, con la autorización de la Intendencia de Cautín, comunicando las resoluciones del encuentro que era un Plan de Desarrollo Integral Mapuche

(Caniuqueo, 2006). Cuando Alonqueo se plantea el tema del folklorismo se está refiriendo a una psicología que caracteriza a un pueblo, en la cual las tradiciones dan a conocer los valores y la visión de mundo que posee ese pueblo. La marcación, o frontera étnica que levanta Alonqueo va en la idea de pensar lo mapuche desde una perspectiva más compleja, si bien lo material es básico, él trata de ir más allá. De igual manera, Alonqueo lucha contra un racismo estructural que se mantiene hasta hoy, con variaciones, pero que se puede manifestar de manera violenta, como en los hechos ocurridos este año en la comuna de Curacautín, el 1 de agosto, en la cual se entonó un cántico racista, por parte de chilenos que decía: *el que no salta es mapuche*, y luego se procedió a desalojar violentamente a un grupo de personas mapuche que tenían tomado un municipio pacíficamente (Caniuqueo, 2020).

Lo que estamos estableciendo es que en el período más álgido de la represión y la violación a los derechos humanos, seguía existiendo una intención de marcar la diferenciación étnica, que iba más allá de la izquierda. Se daba en los sectores del centro, del cual es representante Alonqueo, así como en los sectores de derecha, que es el caso del pastor evangélico mapuche y profesor de historia Sergio Liempi:

> 1. "un edificio moderno de siete pisos –quizás imitando un poco la forma de un rehue– especialmente destinado al funcionamiento de una Academia Mapuche de la Cultura".
>
> Dicho edificio podría tener dos características distintivas:
>
> a) Un MONUMENTO que honre la memoria de nuestros antepasados, el pueblo indómito de América.
>
> b) Donación para el pueblo mapuche por lo que su dirección y actividad deben ser cumplidas y ejecutadas por los hijos actuales de nuestro pueblo mapuche.
>
> 2. Una academia Mapuche de la cultura..., crearía un ambiente propicio para que el hombre mapuche elabore por sí mismo su propio entendimiento del proceso cultural del mundo moderno, capacitán-

> dolo, para interpretar la realidad de nuestra raza autóctona a la luz de dicho acontecer universal. Ahí estaría el aporte que los pueblos nuevos o jóvenes, en cuanto a sistemática de su desarrollo histórico-cultural, pueden hacer en relación a muchos valores básicos lamentablemente decadentes en la actual civilización. Es el caso de la Religión como soporte de los valores humanos fundamentales.
>
> 3. Es un hecho reconocido en la Declaración de Principios del Gobierno Militar de Chile, que la civilización cristiana caído en el contrasentido de ignorar la esencia misma de sus raíces (ARA, Intendencia de la IX Región, 12 de septiembre de 1978).

El documento es el Oficio ORD. Nº 76. ANT. ORD. Nº 60/; CAVE Malleco, Traiguén. La materia a tratar es que se "Solicita confirmación actividades de celebración y hace sugerencias relativas a ella". Este documento está dirigido al Intendente IX Región, coronel de Ejército, don Atiliano Jara Delgado. Liempi adjunta un anteproyecto que se titula Academia Mapuche de la Cultura. En ese tiempo trabaja en Traiguén, donde es director CAVE de Malleco, que era un programa del Ministerio de Educación. El anteproyecto lo trabaja en agosto. Liempi se ha caracterizado por dar un papel relevante a la educación, la historia mapuche y el evangelio, utilizando diversos canales e iniciativas.

En este caso, lo que plantea Liempi no solo es un giro discursivo sino la intervención abierta y simbólica a la ciudad de Temuco, que para ese momento recién pasaba a ser capital regional, uniendo a la provincia de Malleco y Cautín. El plantear un edificio de 7 pisos, en una ciudad que tenía una sola construcción en altura, que tuviera la forma de un rehue, lo que a esa fecha era un quiebre total con las estructuras estéticas coloniales, era algo impensable. La función del edificio, una Academia Mapuche de la Cultura, donde cultura pasaba a ser sinónimo de desarrollo, involucraba un espacio donde el pueblo mapuche se pensara como sociedad y donde los propios mapuche marcarían el ritmo hacia la modernidad, un espacio donde se desarrollaría el saber. Algo muy parecido a lo que veíamos con una

universidad mapuche, en el caso de Huenuman. La visión de monumento juega en el sentido de la memoria del largo plazo. Esto es, la vida autónoma mapuche tensada por la guerra con los españoles y la posibilidad actual de retomar una senda autónoma. Lo religioso, al ser un rehue, hace alusión a los valores que encarnan las visiones espirituales sintetizadas en las religiones, como una forma de establecer un equilibrio y convivencia entre mapuche y chilenos, lo que también implica relaciones políticas entre las autoridades militares y la sociedad mapuche, pues se genera una agencia para ganar mayor autonomía en términos políticos y mejores condiciones de negociación para los mapuche.

Con lo anterior vemos que se avanza a una nueva forma de dar relevancia a la sociedad mapuche, se aprecia que son diversos movimientos que tratan de crear institucionalidades, así como un marco de movilización que permita agenciar un proyecto integral para la sociedad mapuche y como se señalaba anteriormente, en los días más terribles de la represión militar a sus opositores políticos. Esto nos lleva a pensar que la represión no significó un ocultamiento de lo mapuche sino una reorganización en el caso de la izquierda mapuche, y en el caso de los sujetos ligados a la derecha o que se ubicaban en el centro, una oportunidad para replantearse frente al Estado en un período que comprende entre 1974 y 1978.

En este sentido, todos van retomando y agenciando un proyecto de desarrollo integral mapuche, en el cual se tensa el paso a la Nación, por un lado, y trata de generar mejores condiciones para negociar tanto con el Estado como con la sociedad civil chilena, por el otro.

A modo de conclusión

El giro que tiene el movimiento mapuche, sugeridos por Foerster y Montecino (1988), a partir del gobierno de Alessandri, señala tres ámbitos de acción: la reforma agraria, el agotamiento de la Corporación

Araucana como organización aglutinadora de diversas expresiones, y la movilización en torno a la recuperación de tierras como acción directa. Estos tres ámbitos cobran diversas dinámicas, pero a medida que se va avanzado, todos comienzan a tributar a la idea de construir un proyecto de desarrollo integral que va más allá de acceder a la tierra. Hay un tránsito que tiene que ver con acceder a la modernidad, en un primer momento, cubriendo los aspectos básicos como la economía, salud, educación y habitabilidad, para luego, a medida que se avanza, se introducen particularidades que involucran aspectos culturales al interior de las demandas y reivindicaciones. Esto se pesquisa en las propuestas presentadas en ámbitos de poder, como candidaturas presidenciales al gobierno de turno, en alguna instancia burocrática e incluso en la prensa. Este proceso de la construcción de un proyecto integral mapuche no ha sido lo suficientemente visibilizado, ni en su contenido ni en las repuestas por parte del Estado y la sociedad civil chilena.

El proceso de construcción de un proyecto integral mapuche y las nociones que se van integrando a este, al calor de las movilizaciones, si bien los antecedentes se generan en la década de 1960, es en el gobierno de la UP donde estas nociones y el proyecto se tensan con la izquierda, sin lograr resolverse, para que finalmente después del golpe militar, se vuelva a instalar el fenómeno de manera transversal a los mapuche que se encuentran organizados, ya sea en la derecha, centro, como en la izquierda, tanto en Chile como en el exilio, volviéndose un fenómeno global al mundo mapuche. Ello explica que la historia, la cultura y la lengua fueran tema de discusión, no hay propuesta que no haga alusión a estos, y al mismo tiempo se compatibilicen con el desarrollo económico y social que se persigue. La mirada en retrospectiva terminó siendo un aliciente para generar mayor contenido al proyecto que todavía no lograba ser definido.

Este fenómeno no solo es parte del activismo mapuche sino también hay una dinámica a partir de la relación con el Estado y la sociedad civil chilena, pues muchas de las nociones del proyecto político integral se desarrollan en un diálogo a nivel interétnico. Incluso

podemos visibilizar que hay nociones que incorpora la Sociedad Civil y el Estado en sus propuestas, pero esto no se da en un contexto horizontal, hay una relación colonial de carácter asimétrico, y que es necesario estudiar para entender parte del avance que tuvieron las nociones que fueron integrando y definiendo el proyecto mapuche, pero también las resistencias que se generaron, lo cual provocó distanciamientos y reelaboración de esas nociones.

Los mapuche organizados con sus propuestas, un sector intelectual de izquierda con sus análisis, algunos funcionarios estatales, así como algunos militantes chilenos de izquierda fueron concluyendo que: a) el Estado tiene la responsabilidad directa en la situación de pobreza, exclusión política y social, y racismo a nivel estructural que afecta al pueblo mapuche; b) dicha situación debe vislumbrarse desde una perspectiva histórica; c) los mapuche han buscado mantener una representación cultural de sí mismos; d) que tienen una base cultural para situarse como un grupo diferenciado frente a la Nación Estatal; e) que constituyen un sujeto social, y ello sumado a los puntos anteriores implica ser sujetos de derechos, ya sea en lo individual como en lo colectivo, y es esto lo que le da legitimidad a sus demandas y es lo que sustentaba la idea de construir un proyecto de desarrollo integral mapuche. Sin embargo, aquí no hubo un triunfo que maximizar, sino un punto de partida desde la marginalidad, un punto que permitió ir construyendo utopía. La descolonización se sustenta en estas construcciones imperceptibles o invisibilizadas, que con el tiempo se transforman en pilares de movilizaciones que proyectan un futuro.

Referencias

Alonqueo, M. (1979). *Instituciones Religiosas Del Pueblo Mapuche*. Santiago: Ediciones Nueva Universidad. Pontificia Universidad Católica de Chile.

Archivo Regional de la Araucanía (ARA).

Balandier, G. (1970). "El Concepto de 'Situación' Colonial". *Cuadernos del Seminario de Integración Social Guatemalteca*, cuarta serie, 22. Ministerio de Educación, Editorial José de Pineda Ibarra. Guatemala, pp. 7-52.

Bengoa, J. (1996) *Historia del Pueblo Mapuche (Siglos XIX y XX)*. Santiago: Ediciones SUR, 3ª edición.

Bengoa, J. (2002). *Historia de un conflicto: el estado y los mapuches en el siglo XX*. Santiago: Planeta/Ariel.

Berdichewsky, B. *et al*. (1971). *Antropología Aplicada e Indigenismo en los Mapuches de Cautín. Informe del Estudio de terreno en la Provincia de Cautín por el equipo Antropológico a cargo del profesor Bernardo Berdichewsky durante los meses de Enero-Marzo 1971.* Mimeografiado. Julio de 1971. Santiago de Chile.

Boccara, G. (2009) *Los Vencedores. Historia del Pueblo Mapuche en la Época Colonial*. Santiago: Ocho libros editores.

Caniuqueo, S. (2006). Siglo XX en Gulu Mapu: De La Fragmentación del Wallmapu a La Unidad Nacional Mapuche, 1880 a 1978, en P. Marimán *et al*., *Escucha Winka. Cuatro ensayos sobre Historia Nacional Mapuche y un Epílogo sobre el futuro*. Santiago: Lom Editores, pp. 129-217.

Caniuqueo, S. (2014). La dictadura y las respuestas organizativas mapuches, 1973-1989. El caso de dos organizaciones, en C. Barrientos (ed.). *Aproximaciones a la cuestión mapuche en Chile: una mirada desde la historia y las ciencias sociales*. Santiago de Chile: RIL Editores, pp. 43-77.

Caniuqueo, S. (2015). Movimiento Mapuche y Disputa Historiográfica. La obra Kuralaf, 1986-1989, en J. Pinto Rodríguez (ed.). *Conflictos Étnicos,*

Sociales y Económicos. Araucanía 1900-2014. Santiago: Pehuén Editores, pp. 215-246.

Caniuqueo, S. (2016). TACUM. El grupo de teatro de Ad-Mapu. Un espacio para la práctica anticolonial Mapuche, 1981-1989, en P. Canales Tapia (ed.). *ZUAMGENOLU: Pueblo Mapuche en Contexto de Estado Nacional chileno, Siglos XIX y XX*. Santiago: Editorial USACH, pp. 179-204.

Caniuqueo, S. (2018). Cuando la cultura recompone al pueblo: bases de la lucha anticolonial en el período de la dictadura militar 1973-989 en Gulu Mapu. *ABYA-YALA: Revista sobre acesso á justiça e direitos nas Américas* 2 (2), 276-310, 2018.

Caniuqueo, S. (2020). *¿Cómo llegamos a esto? Racismo en Gulu Map*u. Columna de Opinión, medio CIPER Académico. https://www.ciperchile.cl/2020/08/04/como-llegamos-a-esto-racismo-en-gulu-mapu/

Cantoni, W. (1972). Fundamentos para una Política Cultural Mapuche. *Cuadernos de la Realidad Nacional* 14, Octubre. Centro de Estudios de la Realidad Nacional, Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, pp. 74-95.

Boccara G. (2009). *Los Vencedores. Historia del Pueblo Mapuche en la Época Colonial*. Santiago: Ocho libros editores.

Contreras Painemal, C. (2005). "El Koyang y los Parlamentos Un Mecanismo Propio de la Sociedad Mapuche", Tesis para optar al grado de Licenciado en Antropología para optar al título de Antropólogo Social, Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Santiago de Chile.

- (2010). "Los Tratados celebrados por los Mapuche con la Corona Española, la República de Chile y la República de Argentina", zur Erlangung des Doktorgrades eingereicht am Fachbereich Geschichts- und ulturwissenschaften der Freien Universität Berlin Altamerikanistik. Tesis Doctoral. Berlín-Alemania.

Coronado, L. (1973). El problema Mapuche. *América Indígena*, XXXIII (2) Abril-Junio. México, pp. 495-524.

Correa, M., R. Molina y N. Yánez. (2005). *La reforma agraria y las Tierras Mapuches. Chile 1962-1975*. Santiago: Lom ediciones.

Crow, J. (2007). Debates about Ethnicity, Class and Nation in Allende's Chile (1970-1973). *Bulletin of Latin American Research* 26 (3) Jul., pp. 319-338.

Donoso, R. y F. Velasco. (1970). *La Propiedad Austral*. Santiago: ICIRA: Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria.

Foerster, R. (1983). *Vida de un dirigente mapuche. Martin Painemal Huenchual*. Santiago: GIA.

Foerster, R. (1996). *Jesuitas y Mapuches. 1593-1767*. Santiago: Editorial Universitaria.

Foerster, R. y S. Montecino. (1988). *Organizaciones, Lideres y Contiendas Mapuches (1900-1970)*. Santiago: Ediciones CEM.

Gavilán, V. (2007). *La Nación Mapuche. Puelmapu ka Gulumapu*. Santiago: Editorial AYUN.

Greve, M. E., S. Pacheco y J. Segura. (1972). La Cosmovisión Mapuche. *Cuadernos de la Realidad Nacional,* 14, Octubre. Centro de Estudios de la Realidad Nacional, Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, pp. 46-73.

Hernández, I. (2003). *Autonomía o ciudadanía incompleta: el Pueblo Mapuche en Chile y Argentina*. Santiago: Pehuén editores.

Huenuman, R. (1978). Intervención del camarada Rosendo Huenuman. En *El Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Chile 1977*. Santiago: Ediciones Colo-Colo, pp. 135-140.

Intendencia de Cautín.

Intendencia IX Región.

Jeannot, B. (1972). El Problema Mapuche en Chile. *Cuadernos de la Realidad Nacional,* 14, Octubre. Centro de Estudios de la Realidad Nacional, Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, pp. 3-14.

Leiva, A. (1984). *El primer avance a la Araucanía. Angol 1862*. Ediciones de la Universidad de la Frontera. Temuco-Chile.

León, L. (1993). El Parlamento de Tapihue 1774. *Revista Nutram,* 32. Santiago de Chile, pp. 7-57.

Mariman, P. (comp.). (2002). *Parlamento y territorio mapuche*. Instituto de Estudios Indígenas-Universidad de la Frontera y Ediciones Escaparate, Temuco-Chile.

Mariqueo, V. (1979a). El Pueblo Mapuche, en *Indianidad y Descolonización en América Latina. Documentos de la Segunda Reunión de Barbados*. México: Editorial Nueva Imagen, pp. 137-199.

Mariqueo, V. (1979b). The Mapuche Tragedy, en *IWGIA document Chile 1979*. Copenhagen, pp. 5-45.

Martínez, C. y S. Caniuqueo. (2011). Las políticas hacia las comunidades Mapuche del Gobierno Militar y la fundación del Consejo Regional Mapuche, 1973-1983. *Revista Veriversitas*, 1, I, Segundo Semestre, Santiago de Chile. https://www.academia.edu/1465392/Las_pol%C3%ADticas_hacia_las_comunidades_mapuche_del_gobierno_militar_y_la_fundación_del_Consejo_Regional_Mapuche_1973_1983

Mallon, F. (2004). *La Sangre del Copihue. La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno, 1906-2001*. Santiago: Lom ediciones.

Mallon, F. (2009). Descolonizando la Historia Mapuche de la Unidad Popular. *Revista De/rotaR*, 1 (2) Chile, pp. 2-13.

Mc Bride, J. (1973). *Chile: su tierra y su gente*. Santiago: ICIRA.

Méndez, L. M. (2014). Diálogo entre Españoles e Indígenas en los Parlamentos de los siglos XVI y XVII, en L. M. Méndez *et al*. *Coyunturas pasadas y presentes de los pueblos originarios*. Santiago: Cátedra Indígena, Universidad de Chile, pp. 13-81.

Moesbach, E. (1973). *Pascual Coña: Memorias de un cacique mapuche.* Santiago: ICIRA.

Montupil, F. (1982). *Inche Tati. El Pueblo: Tradición indómita en Chile*. Managua-Nicaragua: CIERA Centro de publicaciones.

Morales, R. (1986). Las Organizaciones Políticas Mapuches. *Boletín Informativo Desarrollo y Cambio,* 15, marzo. CAPIDE Centro Asesor y Planificador de Investigación y Desarrollo. Temuco Chile, pp. 1-16.

Navarrete, J. (2018). *Movimiento Campesino Revolucionario*. Concepción, Chile: Ediciones Escaparate.

Ormeño, H. y Osses J. (1972) La Nueva Legislación sobre Indígenas en Chile. *Cuadernos de la Realidad Nacional,* 14, Octubre. Centro de Estudios de la Realidad Nacional, Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, pp. 15-45.

Painemal, M. (1983). Intervención de Melillán Painemal en las Tercera Jornada Nacional de Ad-Mapu. *Revista Huenelfe*, abril. Agrupación Fot'mmapu. Santiago de Chile.

Railaf, R. *et al*. (2006). *A desalambrar: historias de Mapuches y Chilenos en la lucha por la tierra*. Chile: Editorial Ayun.

Samaniego, A. y C. Ruiz. (2007) *Mentalidades y políticas "wingka" pueblo mapuche, entre "golpe" y "golpe" (de Ibáñez a Pinochet).* Madrid, España: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Saavedra, A. (1970). La Cuestión Mapuche. *Cuadernos de la Realidad Nacional*, 5, Septiembre. Centro de Estudios de la Realidad Nacional, Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile, pp. 70-90.

Saavedra, A. (1971). *La cuestión Mapuche*. Santiago: ICIRA.

Saavedra, A. (2002). *Los Mapuche en la Sociedad Chilena Actual*. Santiago: Lom ediciones.

Suazo, C. (2018). *Nadie Nos Trancará El Paso. Contribución a la historia del Movimiento Campesino Revolucionario (MCR) en la provincia del Cautín (1967-1973).* Colección pasado presente. Londres 38, espacio de memorias. Chile.

Valenzuela, M y S. Oliva. (2007). *Recopilación de Legislación del Estado Chileno para los Pueblos Indígenas. 1813-2006*. Santiago: Librotecnia.

Zavala, J. M. (2008). *Los Mapuche del Siglo XVIII. Dinámica interétnica y estrategia de resistencia*. Santiago: Editorial Universidad Bolivariana.

- (2015). *Los Parlamentos Hispano-mapuches. 1593-1803: Texto fundamentales*. Temuco, Chile: Ediciones Universidad Católica de Temuco.

Imperialismo y contrarrevolución

Las derechas en la calle: el boicot a la "Vía chilena al socialismo"

Aníbal Pérez Contreras

Introducción

A cincuenta años del triunfo de la Unidad Popular (UP), reflexionar muy sucintamente sobre la derecha durante el gobierno de Salvador Allende nos permite mirar a contraluz la historia de nuestra propia democracia. Por esto, el presente trabajo busca articular algunas reflexiones sobre su oposición a los mil días de Allende. ¿En qué momento de su desarrollo histórico se encontraban ante la coyuntura de la Unidad Popular? ¿Cómo se explica el asesinato del general René Schneider y cuáles fueron las consecuentes estrategias desde la oposición? Son algunas de las preguntas que proponemos para la reflexión.

En líneas gruesas, la historia de la derecha chilena durante el siglo XX ha sido pensada y analizada desde cuatro grandes conjuntos de trabajos. En un primer grupo, están aquellos que la han visto como un actor defensivo, carente de proyecto y con una actitud instrumental con la democracia, muy propia de su relación de clase

(Moulian y Torres, 2011). De esta manera, liberales y conservadores habrían tenido una actitud pasiva y meramente de contención ante los avances sociales de los sujetos mesocráticos y populares representados políticamente en la izquierda y el centro.

En las antípodas de esta mirada se encuentran los trabajos de Sofía Correa. Desde este enfoque, si bien la derecha representaría a los sectores dominantes chilenos, esta habría tenido una gran habilidad de negociación y cooptación hacia el centro y la izquierda, conteniendo desde el parlamento las reformas propiciadas por sus adversarios ante los embates del proyecto sustitutivo de importaciones. En razón de su propia historia, la derecha mantendría un carácter más homogéneo pues estaría entrecruzada por familias comunes de las élites criollas. Más aún, su apego a la democracia sería más allá de lo instrumental y, conforme avance el tiempo, se convertiría en portadora de un proyecto político propio: el neoliberalismo (Correa, 2004).

Desde una tercera óptica están los trabajos de Verónica Valdivia. Su tesis principal sostiene que la etapa negociadora y de cooptación de la derecha más tradicional habría entrado en ocaso durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en particular ante la derrota electoral de 1965 que los redujo a un 12% de votación junto la arremetida de la Reforma Agraria. De esta forma, desde fines de la década de 1960 y durante el gobierno de la UP, se habría dado paso al nacimiento de una nueva derecha, representada en el Partido Nacional y el movimiento gremialista de la Universidad Católica. Esta nueva derecha, a diferencia de su antecesora decimonónica, habría superado su elitismo histórico abriéndose a la disputa proyectual contra las opciones reformistas y revolucionarias. Sería entonces el parto de una nueva derecha, de combate, militante y portadora de un proyecto histórico: el neoliberalismo (Valdivia, 2008).

Finalmente, desde un cuarto conjunto de enfoques se han ido matizando las propuestas anteriores. Existen desde quienes restringen la noción de nueva derecha para el movimiento gremialista (Boissard 2015; Bohoslavsky, 2012), hasta otros que han hecho hincapié en el plural de las derechas, para diferenciar sus diversas variantes, ya

sea la de raíz tradicional hasta la nacionalista antiliberal (González, 2008; Bustamante, 2014; Pérez, 2014).

El presente ensayo sostiene que el boicot de las derechas hacia el gobierno de la Unidad Popular requiere ser entendido en un marco temporal más amplio, signado por el agotamiento de su variante tradicional –vivenciado durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva tras su fracaso de contener la Reforma Agraria–, y un contexto de movilización de masas sobre las cuales no tenían infraestructura política para competir, obligándolas a su modernización.

En el marco de este proceso, y habiendo ganado las elecciones Allende, el atentado al general René Schneider resultó un punto de inflexión para el proceso de regeneración de las derechas chilenas, así como en la estrategia de oposición al gobierno de la UP. Esto por cuanto, evidenció la disposición que podían tener algunos grupos radicalmente anticomunistas, pero mostró los límites de una acción tipo "putsch", no muy a fin a las tácticas de la derecha tradicional. En razón de ello, y en medio de la modernización y nacimiento de las nuevas derechas, el atentado y su efecto contrario a lo planificado empujó a perfilar una mirada amplia de las estrategias de subversión. En otras palabras, aun manteniendo sus diferencias, implicó un convencimiento en las derechas de que se necesitaba crear condiciones de descontento, movilización de masas y unidad de las Fuerzas Armadas. Por ello, además de los bloqueos institucionales, la derecha se vio en la necesidad de salir a la calle. Los salones ya no eran entonces los únicos reductos donde hacer política.

Réquiem de un general

El triunfo de la UP por el 36,6% golpeó fuertemente a la derecha chilena, la que a través de su candidato obtuvo una derrota por escasa diferencia (1,4%) ocupando el segundo lugar. La posibilidad cierta de que un líder reconocidamente marxista ocupara la primera magistratura de la República encendió las alarmas en las diferentes

expresiones de las derechas, las que en términos muy gruesos diferían en su historia particular, pero las reunía su anticomunismo propio de un contexto de Guerra Fría. Para ellos, un gobierno marxista –aunque fuera por vía electoral– era el límite de la democracia.

En un tono similar –de sorpresa y preocupación– fue la reacción del gobierno de Estados Unidos, quien a través de la CIA había desarrollado un fuerte proceso de intervención en la política nacional. Según se detalla en los archivos desclasificados a través del Informe Church, para las elecciones de 1970, la Agencia habría decidido no apoyar a ningún candidato contundentemente, sino más bien seguir con su campaña de propaganda anticomunista a través de la cadena *El Mercurio*. La opción de la CIA habría sido un apoyo "moderado" a través de la ITT a la candidatura alessandrista, lo que implicó US$ 250 mil para esta y US$ 100 mil dirigidos al Partido Nacional (Uribe y Opazo, 2001, p. 253).

Sin embargo, tras el triunfo de la izquierda el 4 de septiembre el propio presidente Nixon hizo saber al director de la CIA, Richard Helms, que no era aceptable un gobierno marxista en Chile, instruyendo directamente en la formulación de un plan para impedir el acceso de Allende a la presidencia (Uribe y Opazo, 2001, p. 256). De esta forma se puso en marcha el plan FUBELT (Kornbluh, 2003), que tenía por expresión dos estrategias no excluyentes. Track I implicaba que, con la anuencia de Frei Montalva, Alessandri hipotéticamente sería ratificado en el Congreso (vía presión a parlamentarios), para luego renunciar abriendo un nuevo escenario electoral. Por otra parte se encontraba Track II, el que implicaba la organización abierta de un golpe de Estado sin la anuencia de Frei.

En ese marco entonces, un variopinto grupo de nacionalistas comandados por el general (r) Roberto Viaux Marambio –algunos de ellos anclados a la campaña alessandrista– entraron en contacto con miembros de la CIA, luego de que estos sondearan la percepción del plan con más de 21 oficiales de las Fuerzas Armadas (Kornbluh, 2003, p. 261). El grupo de Viaux (protagonista de "tacnazo") era integrado por un heterogéneo colectivo, quienes habrían formado un

movimiento llamado Vanguardia Liberadora Nacionalista (VLN), según lo declararon en el proceso judicial posterior. Conforme pasaron los días, los encargados del plan dieron con la cuestión de Schneider, quien, como general declaradamente constitucionalista, se convertiría en un escollo. Por esto llegaron a la conclusión que se requería sacarlo del escenario.

De esta forma fue articulándose un plan que incluía raptar al Comandante en Jefe del Ejército con el objeto de generar un proceso de conmoción interna que implicara la renuncia del gabinete, manteniéndose solamente los ministros de Hacienda, Andrés Zaldívar, y Economía, Carlos Figueroa. Aquel se encargaría de realizar un discurso previo a la reunión del Congreso Pleno para crear pánico financiero. Al día siguiente, suponía el plan, el presidente Frei saldría al exilio, estableciéndose una junta militar incorporando a los dos secretarios de Estado antes mencionados. El cable secreto de la CIA –desde donde extraemos la información– cerraba señalando dos cuestiones importantes: primero, Viaux sería enviado a Viña del Mar para no levantar sospechas y, segundo, los agentes se reunirían con el general Camilo Valenzuela para pagar US$ 50 mil, precio acordado entre los conspiradores y un número no definido de secuestradores (Kornbluh, 2004, pp. 157-158). Previamente los propios miembros de la agencia reconocían haber ofrecido una suma importante de dinero a Viaux para convencerlo del compromiso, así como para comprar armas e implementos y sobornar generales (p. 53). Este a su vez, había solicitado seguros por US$ 10 mil para la familia de cada integrante a cambio del silencio de la participación de los agentes estadounidense (p. 71).

Ahora bien, este plan de secuestro no dio resultado. Luego de dos intentos fallidos (Schneider, 2010, pp. 112-114), la mañana del 22 de octubre de 1970, el general Schneider era emboscado en el trayecto de su casa hacia la comandancia del ejército. Bajo el intento de secuestro, opuso resistencia, lo que implicó ser baleado por los captores. Estos huyeron del lugar y su chofer logró trasladarlo al Hospital Militar.

El mismo día estallaba la conmoción nacional, en un país no acostumbrado a este tipo de estrategias políticas. El rechazo a la acción fue transversal, generando el efecto contrario al buscado por los conspiradores. Allende era ratificado por el Congreso Pleno el 24 de octubre de 1970 tras la firma del "Pacto de Garantías Constitucionales" y Schneider moría al día siguiente.

Por su parte, los involucrados en el atentado fueron en su gran mayoría declarados reos, salvo dos que huyeron del país: Juan Luis Bulnes y Diego Izquierdo Menéndez. Viaux y sus conspiradores fueron condenados por la justicia, aunque conforme pasaron las sentencias judiciales sus penas terminaron siendo reducidas a su más mínima expresión (García, 1972). Este nunca reconoció la participación de la CIA; sin embargo, la contrastación de fuentes es concluyente. Mientras que los documentos desclasificados decían que sería enviado a Viña del Mar para evitar relaciones públicas, él mismo en una entrevista reconoció que se fue a la misma ciudad, solo que bajo el argumento de evitar el hostigamiento de la izquierda en su casa (Varas, 1972, p. 137). De la misma forma, el coronel (r) Raul Igualt –involucrado en el atentado– describió el mismo relato de Viaux y la agencia (SEPA, 1971, p. 5). Las coincidencias, pensamos, no son casuales. En cuanto a los involucrados que huyeron, volvieron al país tras el inicio de la dictadura militar. Fueron condenados en primera instancia y finalmente absueltos por la ley de amnistía del régimen.

Finalmente, Kissinger se intentó desvincular de este hecho sosteniendo que desde el 15 de octubre de 1970, la orden dada por él fue cancelar el programa FUBLET, esto tanto en sus declaraciones ante la comisión Church, como sus memorias. Sin embargo, hasta hoy no existe documento desclasificado de la CIA que acredite su declaración.

La derecha partidista histórica

En el presente texto hemos querido dejar de manifiesto el concepto de "las derechas" en vez de su singular, esto por cuanto como se verá, han existido diversas versiones y tradiciones en su interior. Para el caso de la coyuntura particular que estamos analizando, dichas vertientes fueron asumiendo tácticas diferentes para avanzar en la oposición contra el gobierno de Allende. Sin embargo, su eje aglutinador fue el anticomunismo histórico que se manifestó en su objetivo de boicot y derrocamiento del gobierno de la UP. Tal y como señala Luis Eduardo González, las estrategias de las derechas fueron diferentes y no ajena de tensiones, sin embargo resultaron siendo complementarias (González, 2008).

Ahora bien, en términos históricos la derecha tradicional chilena –expresada en el Partido Conservador y el Partido Liberal– hacia mediados de la década de 1960 y durante el gobierno de la Unidad Popular, se encontraba en un proceso de modernización en términos de actualización de sus estructuras organizativas, así como el perfilamiento de un nuevo militante: ofensivo y de combate. A decir de Verónica Valdivia, la derecha se encontraba en medio de un parto (2008). Lo anterior, a partir de la dura derrota electoral parlamentaria de 1965. Esto último significó una fuerte limitación para seguir con su estrategia tradicionalmente ocupada en el período, signada por la negociación y cooptación parlamentaria.

Esto obligó a los representantes de la derecha histórica a refundarse en un nuevo partido que diera cuentas de los cambios sociales y políticos del período. Al mismo tiempo, proveer de una estructura moderna y con mayor capacidad electoral para poder competir con sus adversarios de centro e izquierda. En razón de ello, en 1966 se fundó el Partido Nacional, el que incorporó a la derecha tradicional (liberal-conservadora) más grupos nacionalistas representados en figuras como Sergio Onofre Jarpa, Mario Arnello y Jorge Prat. Más aún, en términos ideológicos el partido conciliaba en su interior

elementos provenientes de la tradición histórica, más aspectos propios del nacionalismo radical con preponderancia de estos últimos (Valdivia 2008). En cuanto a su estructura, se dotó a la tienda de una organización más moderna, compuesta por una articulación dual, ya fuese mediante la línea comunal (territorial) o funcional (ligada al trabajo) a fin de poseer anclaje de base para disputar el electorado. Además, los militantes se comprometían a acatar la doctrina, el programa y las resoluciones políticas del partido, así como pagar sus cuotas y prestar ayuda a sus militantes (Estatutos del Partido Nacional, 1966, pp. 2-3). Sus órganos más importantes eran la Mesa Directiva, la Comisión Política y el Consejo General. Este último debía reunirse al menos cada cuatro meses (p. 7). Como se podrá apreciar, era una estructura nueva, para perfilar un militante acorde a los tiempos. La calle se disputaría.

Cabe señalar que durante el gobierno de Frei Montalva, los nacionales recurrieron a una práctica histórica venida de la tradición liberal-conservadora, que fue cooptar al gobierno Demócrata Cristiano (PDC) para moderar los efectos de la reforma agraria. Para ello ofrecieron aprobar la reforma constitucional en la medida que se restringiese a predios que estuvieran sin producción. Sin embargo, la táctica no prosperó y el gobierno aprobó la reforma con votos propios más los de la izquierda. Esta derrota de su variante más histórica sirvió para ir aumentando la influencia de los grupos nacionalistas, que fueron creciendo conforme avanzó el proceso.

Ahora bien, asumido Allende como presidente de la República, la tesis del Partido Nacional sostenía que era institucionalmente incompatible el proyecto socialista con la legalidad vigente. En base a esto, su estrategia podría sintetizarse en cuatro grandes líneas: a) crear un bloqueo institucional contra las propuestas del Ejecutivo así como acusaciones constitucionales contra sus Ministros de Estado, b) impulsar una movilización desde la sociedad civil para masificar el descontento disputando la calle, c) interpelaciones hacia las Fuerzas Armadas para que intervinieran en el proceso político, d) impulsar una alianza con el PDC para aislar políticamente al gobierno. Lo

anterior se fue desarrollando paulatinamente conforme avanzaba el proceso político y la conflictividad se agudizaba. De esta forma, el Partido Nacional transitó desde un proto-rupturismo a un rupturismo (Corvalán, 2016).

Aunque paulatinamente para 1971 se comenzaban a sentir los efectos de la presión económica internacional propiciada por Estados Unidos, desde nuestro punto de vista, el punto de inflexión que marca el inicio de la crisis y aislamiento político de la UP fue el asesinato de Edmundo Pérez Zújovic, el 8 de junio de 1971, llevado a cabo por un efímero y radical grupo autodenominado Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP). Tras este evento, la relación de la DC con la UP se quebró y comienzan a estrecharse lazos con el Partido Nacional. A partir de ello, y conforme avance el conflicto político, se dará pie a una alianza electoral entre el centro y la derecha llamada Confederación Democrática (CODE).

Más aún, en diciembre de 1971 y ante el cierre de la visita de Fidel Castro a Chile, se organizó uno de los primeros actos de masas de la oposición: "la marcha de las cacerolas vacías". Esta convocó a mujeres que se manifestaron contra el gobierno, golpeando ollas en señal de protesta y desabastecimiento. Según Margaret Power, fueron alrededor de cinco mil mujeres (2008, p. 177). Desde nuestro punto de vista, este evento tuvo dos grandes repercusiones. Primero, perfiló una agrupación que vinculó transversalmente a los partidos opositores a la UP, pero "desde abajo", es decir con un perfil ciudadano y de disputa de la calle. Aunque el Partido Nacional promovió la manifestación y solicitó a las Juventudes del Partido que le dieran protección a la marcha, de igual manera en su organización se articuló la oposición transversalmente (2008). De hecho, tras el éxito de la manifestación, en 1972 se organizó "Poder Femenino", una agrupación que proseguía con la dinámica de las "cacerolas vacías", pero con un más dotado nivel de organización, habiendo dirigentas de pobladoras y centros de madres vinculadas a la DC, así como mujeres obreras articuladas con sus patrones, hasta integrantes de las otras ramas de las derechas. Ya para este caso, Elena Larraín señaló haber solicitado

a todos los partidos de oposición integrar a dos representantes mujeres, lo que incorporaba "PN, PDC, el PADENA, Izquierda Radical y Democracia Radical, además de representantes de los gremios, la sección femenina de SOL, Patria y Libertad, Javiera Carrera, UNAFE, Unión Cívica Democrática, Unión de Mujeres Libres, y mujeres empresarias y profesionales sin afiliación" (p. 194).

Por otra parte, una segunda consecuencia relacionada con el evento pasó al plano político institucional, pues el Partido Nacional elaboró una acusación constitucional contra el ministro del interior José Tohá, debido al enfrentamiento entre la policía y los manifestantes que protegían la marcha. Esta vez, la acusación rindió frutos pues contó con los votos de la DC. Con esto, comenzaba el aislamiento político del gobierno. La derecha, lejos de atemorizarse por la fortaleza social de la izquierda, salió a enfrentarla a la calle. Más aún, también en el plano institucional se producía uno de los conflictos más relevantes entre el Ejecutivo y el Parlamento. A principios de 1972 la oposición levantaba el proyecto Hamilton-Fuentealba que buscaba contener el proceso estatizador del gobierno. Dicho proyecto dejó en términos jurídicos un bloqueo al gobierno, que postuló enviarlo al Tribunal Constitucional para que resolviera la competencia del veto presidencial puesto por Allende, mientras que la oposición insistía en su rechazo por mayoría simple.

Para 1972, los efectos del desabastecimiento comenzaron a sentirse y la presión de la oposición generaba efectos. A mediados de 1972, el Partido Nacional en su Consejo General de La Serena acordó el objetivo de poner fin al gobierno de Allende antes de 1976, es decir, impedir que terminara su período democrático. Al mes siguiente, se producía el paro nacional del comercio, con el cual la oposición lograba aglutinar de mejor manera a esa franja de sectores medios. Mientras que en la izquierda, algunos llamaban al diálogo, otros se atrincheraban para "agudizar las contradicciones".

En septiembre del mismo año, el Partido Nacional en su consejo de Panimávida llamó a paralizar completamente el país para provocar el "desenlace final", promoviendo la "resistencia civil" (González,

2008, p. 266). Finalmente, en octubre de 1972 se producía el paro de camioneros que se prolongó por más de tres semanas. Era uno de los gremios más poderosos del país, por la labor estratégica que ocupan dada la geografía de Chile. Estos recibieron el apoyo de las organizaciones de mujeres, quienes se encargaban de llevarle comida a los camioneros en paro (Power, 2008), así como de toda la oposición "por abajo". Tal y como señalamos, por la base, en la calle, las distinciones y tradiciones entre las derechas no se entorpecían, sino más bien se complementaban. Como es sabido, la respuesta de Allende fue incorporar miembros de las Fuerzas Armadas al gabinete, tanto como un gesto político y como un mecanismo de contener a posibles oficiales golpistas.

Tras el éxito del paro de camioneros, al año siguiente la estrategia del Partido Nacional fue lograr los 2/3 necesarios en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 para destituir constitucionalmente a Allende. Sin embargo, la UP logró el 44% de los votos y, por tanto, la estrategia institucional se vio entorpecida. Por esto en mayo de 1973 las huestes de Sergio Onofre Jarpa llamaban abiertamente a la desobediencia civil. Las manifestaciones a favor y en contra del gobierno se hacían cada vez más frecuentes, con la consecuente dosis de polarización y violencia callejera.

En junio de 1973 se produjo el "Tanquetazo", un intento de golpe militar promovido por Patria y Libertad que fue repelido y controlado por el general Prats. Ante esto, el Partido Nacional, tomó palco y prefirió no pronunciarse en un "evento confuso" (González, 2008). Para agosto se convocaba a un paro nacional de los gremios, mientras diputados del Partido Nacional junto a la DC aprobaban un proyecto de acuerdo de la cámara que declaraba la ruptura del Estado de derecho por parte del gobierno. Desde el 6 de septiembre, el llamado era a la realización de paros seguidos hasta llegar al paro total. Sin embargo, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas dieron el golpe de Estado destituyendo al presidente electo. Tiempo después, el Partido Nacional se autodisolvía, declarando haber cumplido su

deber, respaldando a la junta militar y con esto la clausura del sistema democrático.

Las derechas antiliberales

En términos generales, lo que denominamos "derechas antiliberales" son más bien formaciones políticas en clave de movimientos que, en comparación con la derecha tradicional (liberales y conservadores) han tenido vidas mucho más efímeras, pero no por ello menos importantes, sobre todo en coyunturas de alta conflictividad, como la que estamos analizando. Su relación con la historia de la derecha tradicional tendió a ser tensa y crítica, al considerarla como pasiva y oligárquica. Mientras que, para liberales y conservadores, estos grupos tendieron a ser vistos como "filo-fascistas". Desde nuestra óptica, las diferencias y críticas siguieron manifestándose incluso en medio del boicot al gobierno de la Unidad Popular, sin embargo sus estrategias diversas, reflejo de distintos diagnósticos y tradiciones, fueron funcionalmente complementarias.

Un primer movimiento, expresión de esta derecha antiliberal, fue el Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPYL), cuyos referentes indiscutibles fueron Pablo Rodríguez Grez y Roberto Thieme. Tal y como lo ha señalado Constanza Vega (2017), la importancia del FNPYL radicó en su operatividad para producir actos subversivos, así como de articulación con sectores de las Fuerzas Armadas. Con un enfoque que fue incorporando la violencia política callejera como parte de su repertorio, así como una estructura de perspectiva paramilitar, el FNPYL desarrolló una serie de operaciones de sabotaje de obras civiles para provocar descontento e ingobernabilidad, además del enfrentamiento urbano con la izquierda. A esto se le agregaba la formación de sus militantes en defensa personal, internación de armas desde Argentina y la creación del "Frente de Operaciones", que como expresión de la disposición del contingente, tenía por objeto preparar paramilitarmente a militantes para que se sumaran al

sector nacionalista del ejército en una posible guerra civil. Todo lo anterior emulando el ejemplo de España en 1936 (Salazar, 2007, p. 99).

Distante de la estrategia del Partido Nacional, la tesis del FNPYL fue la del "alzamiento focalizado". Esta se basaba en el supuesto de que al lograr un levantamiento militar de un sector del ejército, el resto de las Fuerzas Armadas se sumarían. La expresión de esto fue el "Tanquetazo" de junio de 1973. Tras su fracaso, diversos líderes buscaron asilo y otros como Thieme, simularon su muerte en un accidente aéreo. Lejos de desistir en sus tesis, en enero de 1973, Pablo Rodríguez Grez criticó la estrategia del Partido Nacional, llamando a pasar de la "resistencia civil" propiciada por estos a la "ofensiva civil". Para eso, formaba la escuadra "Héctor Castillo Fuentealba", en honor a un militante muerto en uno de los tantos enfrentamientos con sus opositores. Finalmente, tras los resultados de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973 y el fracaso de la destitución de Allende, Patria y Libertad señaló la tesis del "empate institucional", ante lo cual la única salida era la intervención de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, en una línea retórica similar a lo anterior, es posible identificar a otros dos movimientos nacionalistas: el grupo Tacna, ligado al sector de Roberto Viaux, y el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista (MRNS), cuyo líder más conocido era Ramón Callís. Ambos movimientos carecían de una base social que les permitiera competir con las otras expresiones. Por ello, su estrategia era el llamado a las Fuerzas Armadas. En el caso del MRNS, una vez que Allende fuera ratificado, su tesis fue: "Lo dijimos, la democracia liberal ha muerto" (*El Mercurio*, 6 de octubre de 1970, p. 17). En base a lo anterior, el movimiento a través de sus revistas desplegó toda una retórica hacia el convencimiento de las Fuerzas Armadas en su debida ruptura del orden demoliberal. Al igual que el grupo Tacna, la tesis planteada sostenía que la lealtad de estas era con la nación y no con el Estado, por tanto era su obligación intervenir (*Forja*, agosto de 1972, pp. 16-17).

Finalmente, el último referente importante fue el movimiento gremialista de la Universidad Católica. Liderado por Jaime Guzmán e influenciado –al igual que el MRNS– por el tradicionalismo antiliberal irradiado por el sacerdote Osvaldo Lira, este movimiento más laxo que los demás y de tinte más estudiantil, se sumó a la movilización de masas contra el gobierno de la UP. A grandes rasgos, desde el corporativismo profesado, la tesis principal de Guzmán planteaba la idea del "poder gremial" como la estrategia más fructífera para enfrentar a la izquierda. En este sentido, Guzmán en su rol de profesor universitario, logró aglutinar a importantes líderes estudiantiles tras su influjo ideológico y así enfrentar el proceso de "desnaturalización de la universidad". Para este intelectual, la nación se expresaba en los gremios, quienes como cuerpos intermedios, eran el recurso último de salvación del influjo marxista.

En la práctica, desde el movimiento gremial con los estudiantes de la FEUC, fueron aglutinándose alrededor de las movilizaciones opositoras. Guzmán cuestionó al Partido Nacional, considerando a los partidos actores secundarios. Además se distanció de Patria y Libertad por la retórica y uso de la violencia política, aunque nunca los cuestionó públicamente. Tras el paro de octubre de 1972, la estrategia gremialista alcanzó ribetes nacionales. Desde los estudiantes, recolectaron comida para los camioneros complementándose con los otros actores sociales. Para Guzmán, los "comandos gremiales" mostraban su capacidad e influencia en la disputa a la izquierda.

Más aún, tras la huelga de los mineros de El Teniente en abril de 1973 y su marcha desde Rancagua a Santiago, el movimiento gremialista ofreció la Universidad Católica como albergue. Finalmente, entrado 1973, ampliaron su política de recolección de firmas para la renuncia de Allende (González, 2008, p. 288). De igual manera, estas no fueron necesarias, pues, el 11 de septiembre el golpe militar consolidaba el boicot general.

Conclusión

Para comprender el desarrollo de las derechas durante los mil días de Allende, es necesario tener presente dos cuestiones fundamentales. Primero, su variante tradicional se encontraba en un proceso de modernización tras el agotamiento de su repertorio convencional. En este escenario, la salida ofensiva comandada mayormente por los sectores nacionalistas en su variante partidaria se volvió hegemónica privilegiando la confrontación. En segundo lugar, el marco de Guerra Fría fue determinante tanto en la aglutinación anticomunista en las distintas expresiones de las derechas y la DC, así como en la intervención de la CIA. Lejos del estilo "putsch" fracasado en el atentado a Schneider, el juego del boicot y aislamiento al gobierno copando la calle resultó complementario para sus objetivos en las diversas expresiones. Así, el golpe militar no se dio por sí solo, sino en medio de un terreno fértil de aislamiento político del gobierno, movilización social de oposición y violencia callejera.

Referencias

Bohoslavsky, E. (2012). ¿Qué es lo nuevo de la nueva derecha en Chile? Anticomunismo, corporativismo y neoliberalismo", 1964-1973. *Historia Unísonos*, 16(1), 5-14.

Boisard, S. (2015). La nueva derecha chilena y la impronta de los años 1960: ¿ruptura o continuidad? Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Questions du temps présent, mis en ligne le 11 juin 2015, consulté le 04 septembre 2020. http://journals.openedition.org/nuevomundo/68009; https://doi.org/10.4000/nuevomundo.68009

Bustamante, F. (2014). La construcción del enemigo en sus usos lingüísticos del integrismo católico en la justificación del golpe de estado en chile. El caso de las revistas Fiducia y Tizona, 1965-1973. *Revista Persona y Sociedad,* 1, 57-83.

Correa, S. (2004). *Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX.* Santiago: Editorial Sudamericana.

Corvalán, L. (2016). *Los partidos políticos y el golpe del 11 de septiembre*. Santiago: Editorial USACH.

El Mercurio, 6 de octubre de 1970, p. 17.

García, P. (ed). (1972). *El caso Schneider, operación Alfa.* Santiago: Quimantú.

González, L. (2008). Las derechas durante el gobierno de Salvador Allende. *Mapocho,* 64, 259-265.

Kornbluh, P. (2003). *Los EE.UU. y el derrocamiento de Allende. Una historia desclasificada.* Santiago: Editorial B Chile.

Kornbluh, P. (2004), *Pinochet, los archivos secretos.* Buenos Aires: Editorial Crítica.

Moulian, T. e I. Torres. (2011). *Discusiones entre honorables: triunfos, fracasos y alianzas electorales de la derecha en Chile 1938-2010*. Santiago: Ediciones Akhilleus.

Partido Nacional. (1966). *Estatutos del Partido Nacional*. Santiago: Impresiones El Imparcial.

Pérez, A. (2014). Religiosidad, imaginario y cultura política: El caso del MRNS. *Cultura y religión*, 1, 262-288.

Power, M. (2008). *La mujer de derecha. El poder femenino y la lucha contra Salvador Allende 1964-1973*. Santiago: DIBAM Ediciones.

Revista Forja, agosto de 1972, pp. 16-17.

Revista SEPA, semana del 9 al 15-II-1971.

Salazar, M. (2007) *Roberto Thieme. El rebelde de Patria y Libertad*. Santiago: Editorial Mare Nostrum.

Schneider, V. (2010). *General Schneider. Un hombre de honor un crimen impune*, Santiago: Ocho libros editores.

Valdivia, V. (2008). *Nacionales y gremialistas. El "parto" de la nueva derecha política chilena, 1964-1973.* Santiago: LOM Ediciones.

Varas, F. (1972), *Conversaciones con Viaux.* Santiago, Chile: Editorial Eire.

Vega, C. (2017). "En Chile no pasarán!: el movimiento Patria y Libertad en su lucha anticomunista contra la unidad popular, 1970-1973". Tesis magíster en historia, Universidad de Chile.

El rol de Estados Unidos en el derrocamiento del presidente Allende, según el Informe Church

Luis Corvalán Márquez

La intervención estadounidense en Chile es muy antigua. Aquella culminó con el golpe del 11 de septiembre no es más que un eslabón de una larga e ininterrumpida cadena. El informe del Senado de los Estados Unidos, *Acciones encubiertas en Chile*, más conocido como Informe Church, nos proporciona antecedentes sobre aquella verificada entre 1963 y 1973. Apoyándonos en él nos concentraremos en el lapso que va entre 1970 y septiembre de 1973.

La intervención estadounidense entre 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 1970

Apenas cuatro días trascurrido desde el triunfo electoral de Salvador Allende, esto es, el 8 de septiembre, Henry Kissinger, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, se reunió con el Comité 40, que era el organismo encargado de autorizar las actividades de la CIA y su financiamiento. En la reunión se resolvió encomendar a

esta que evaluara los pro y los contra de organizar un golpe en Chile con ayuda estadounidense. "Igualmente se resolvió encargar a la Agencia que evaluara los problemas involucrados en organizar en el futuro una oposición (interna) eficaz contra Allende" (Opaso, 1990, p. 152).

A la semana siguiente, el 14 de septiembre, el Comité 40 volvió a reunirse. Analizó entonces los problemas que existían para involucrar a los militares a dar un golpe. Ante ello la reunión se concentró en el análisis de una opción política encaminada a impedir el ascenso de Allende. Se trató de lo que el Informe Church denominó como "maniobra Rube Goldberg", que consistía en lograr que el 24 de octubre, el Congreso Pleno eligiera como presidente a la segunda mayoría, esto es, a Jorge Alessandri, quien a continuación renunciaría dando así paso a nuevas elecciones en las que Eduardo Frei levantaría su candidatura, la cual concitaría el apoyo de la derecha. Así se impediría que Salvador Allende asumiera la primera magistratura.

Al día siguiente, 15 de septiembre, tuvo lugar en la Casa Blanca otra reunión en la que participó el presidente Nixon, el asesor para asuntos de seguridad, Henry Kissinger, el director de la CIA, Richard Helms y el procurador general John Michel. En ella, el presidente planteó que "un gobierno de Allende en Chile no era aceptable para Estados Unidos". Bajo tales supuestos procedió a ordenar a la CIA que tomara medidas para "impedir que (Allende) accediera al poder. No importan los riesgos involucrados –dijo– 10.000.000 de dólares disponibles; más si es necesario; trabajo a tiempo completo, los mejores hombres que tengamos: plan de acción: hacer que la economía aúlle; 48 horas para el plan de acción", ordenó Nixon (Opaso, 1990, p. 152).

El golpe en Chile debía ser organizado por la CIA utilizando dos vías paralelas, las que recibieron el nombre de Track I y Track II. Track I comprendía todas las acciones clandestinas aprobadas por el Comité 40, incluyendo 250.000 dólares para sobornar a parlamentarios que debían participar en el Congreso Pleno donde, según la maniobra Rube Goldberg –también conocida como "maniobra

Frei"– debían elegir a la segunda mayoría (Alessandri). También se consideraban operaciones económicas y de propaganda. Mientras que las actividades de Track II, "estaban dirigidas a promover de manera activa y estimular a los militares chilenos para que se movilizaran en contra de Allende" (Opaso, 1990, pp. 161-162). Es decir, a que dieran un golpe.

No obstante, ya el 20 de septiembre el Comité 40 dio por fracasada Track I, en tanto que la CIA seguía impulsando Track II, la vía militar. Sin embargo, este curso de acción pronto se topó con un problema fundamental. A saber, la actitud constitucionalista del comandante en jefe del ejército, general René Schneider. Tal cosa llevó a la CIA a concluir que, si se buscaba dar un golpe, no quedaría más que dividir al ejército estableciendo contactos con eslabones más bajos dentro de la jerarquía militar. Todo en medio de intensas campañas de propaganda verificadas a través de la prensa, organizadas y financiadas por la CIA, que sostenían que el ascenso de Salvador Allende sería perjudicial para Chile.

En tales circunstancias, desechada la vía política, "la CIA elaboró un programa de acción inmediata que contemplaba tres partes: a) recolectar inteligencia sobre oficiales de mentalidad golpista; b) crear un clima de golpe mediante propaganda, desinformación y actividades terroristas con el fin de provocar a la izquierda para ofrecer un pretexto para el golpe (Cable 611, Central CIA a Santiago, 7/10/70); y c) Informar a los oficiales de mentalidad golpista que el gobierno de Estados Unidos les brindaría todo su apoyo durante el golpe, salvo su intervención militar directa" (Cable 762, Central CIA a Santiago, 14/10/70) (Opaso, 1990, pp. 170-171).

Siguiendo este curso de acción, entre el 5 y el 20 de octubre de 1970 "la CIA tuvo 21 contactos con oficiales claves de los militares y policía (Carabineros) de Chile. A los chilenos que se sentían inclinados a ejecutar un golpe de Estado –dice el Informe Church– se les aseguró que habría un apoyo decidido, al nivel más alto del gobierno de Estados Unidos, tanto con anterioridad, como después del golpe" (Opaso, 1990, p. 71). Algunos de los uniformados con que la CIA tuvo

contactos, junto con manifestarse dispuestos a jugarse por el golpe, hicieron ver a la CIA que la premisa era sacar de en medio al general Schneider.

Otro de los problemas que entonces la CIA tuvo que resolver fue el relativo al líder uniformado que encabezaría el golpe. Al respecto, el 10 de octubre, la estación santiaguina de la Agencia informaba a su sede central que "por un proceso de eliminación" había llegado a la solución Viaux". De este modo, la CIA ponía sus ojos en el mismo general que en octubre de 1969 había encabezado el llamado "tacnazo", un velado intento de golpe en contra del ex presidente Eduardo Frei. Viaux –ya retirado– ahora conspiraba para impedir que Salvador Allende asumiera la presidencia de la República.

Una vez que el general Viaux fuera contactado por la CIA, dice el Informe Church, como "muestra del apoyo de Estados Unidos" a sus planes golpistas, la oficina central autorizó se le entregasen 20.000 dólares en efectivo y una promesa de 250.000 en seguros de vida para él y sus asociados (Opaso, 1990, p. 188). El Informe agrega que, con fecha 13 de octubre, la estación local de la CIA informó a la central que "Viaux pretendía secuestrar a los generales Schneider y Prats dentro de las próximas 48 horas con el fin de precipitar el golpe" (Opaso, 1990, p. 188).

Mientras que el 15 de octubre, con el objeto de evaluar la situación en Chile se reunieron en la Casa Blanca Henry Kissinger, el general Thomas Haig y Thomas Karamassines. El memorándum de la reunión señala que en ella "se decidió que la Agencia debía hacer llegar un mensaje a Viaux advirtiéndole respecto de cualquier acción precipitada". En esencia el mensaje debía afirmar: "hemos revisado sus planes y, basándonos en su información y en la nuestra, hemos llegado a la conclusión de que sus planes para un golpe no pueden tener éxito en estos momentos. De fallar, pueden reducir sus capacidades para el futuro. Mantenga sus recursos humanos. Nos mantendremos en contacto. Llegará el momento en que usted, junto con todos sus otros amigos, pueda hacer algo. Continuarán recibiendo nuestro

apoyo" (Opaso, 1990, p. 190). El 17 de octubre Viaux recibió el mensaje respondiendo que el golpe se llevaría a cabo de todas maneras.

Al día siguiente, el 18 de octubre en la noche, la estación local de la CIA recibió de parte del general Valenzuela una detallada información del golpe que se programaba. En un documento desclasificado el año 2000, su contenido consta de manera íntegra. En algunas de sus partes decía:

> El general Schneider será invitado a una fiesta en una casa VIP del ejército al atardecer del 19 de octubre a las 21:30 horas. Cuando arribe a la casa VIP, Schneider será raptado. Schneider será llevado en aeroplano y volará a (TARJADO).
>
> Valenzuela anunciará en una junta de generales que Schneider había desaparecido y que el general Prats sucedería a Schneider como comandante en jefe interino.
>
> (CASI UNA LÍNEA TARJADA) mantener (TARJADO) a Carabineros lejos del área de la casa VIP para asegurar que el rapto no será interferido.
>
> El 20 de octubre el gabinete renunciará. Solo Zaldívar (Ministro de Hacienda) y Figueroa (de Economía) permanecerán en sus cargos.
>
> Todos los otros puestos del gabinete serán dados a miembros de las fuerzas armadas y policía.
>
> El 21 de octubre Frei renunciará a la presidencia y dejará Chile.
>
> El 22 de octubre, una Junta encabezada por (NOMBRE TARJADO) será instalada (UNA LÍNEA Y MEDIA TARJADA.

Más adelante, el plan decía que "los militares no admitirán estar involucrados en el rapto de Schneider del que serán culpados los izquierdistas. Casi inmediatamente los carabineros iniciarán investigaciones por Schneider por todo Chile, usando esta investigación como pretexto para irrumpir en las poblaciones controladas por los comunistas. Líderes extremistas de izquierda y de derecha serán cogidos y despachados a través de las fronteras" (Kornbluh, 2004).

En cumplimiento de este plan, los días 19 y 20 de octubre hubo intentos fracasados de rapto de Schneider. El día 22 –dice el Informe Church– en las primeras horas de la mañana "la CIA entregó ametralladoras y municiones al grupo que había fracasado en el intento del 19 de octubre". Ese mismo día el general Schneider sufrió un intento de rapto. Al ofrecer resistencia fue mortalmente herido.

El mismo día 22, la estación local de la CIA informaba a la central sobre estos acontecimientos. Decía al respecto: "en cualquier caso es importante tener en cuenta que la operación en contra de Schneider fue concebida y ejecutada por encargo de altos oficiales de las fuerzas armadas. Sabemos que el general Valenzuela estuvo involucrado. Estamos también casi seguros que el almirante (NOMBRE OMITIDO), el oficial del ejército y el oficial naval estaban al tanto y también involucrados" (Opaso, 1990, pp. 197-198).

El fallido rapto, lejos de contribuir a la consecución de los objetivos de los complotadores, terminó estimulando un reagrupamiento de las instituciones armadas en torno a sus sectores constitucionalistas, ahora personificados en el general Carlos Prats. Con ello se marcó el fracaso de Track II. Dos días después, el 24 de octubre, el Congreso Pleno se reunía y proclamaba a Salvador Allende como presidente de la República. El mandatario asumió el cargo el 4 de noviembre.

La intervención estadounidense entre noviembre de 1970 y septiembre de 1973

Luego del fracaso de Track I y Track II, Estados Unidos debió redefinir su estrategia frente a la situación del país. La nueva estrategia tendrá como objetivo derrocar al gobierno chileno.

La redefinición de la estrategia estadounidense

Con el fin de dirimir el tema, el 6 de noviembre, presidido por Richard Nixon, se reunió en la Casa Blanca el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). Con anterioridad, Henry Kissinger había elaborado un memorando en el cual aconsejaba al presidente Nixon una política orientada al derrocamiento de Salvador Allende. En él sostuvo que "un gobierno marxista exitoso elegido en Chile tendría un impacto y aún un valor permanente para otras partes del mundo, especialmente en Italia; la difusión imitativa de un fenómeno similar en todas partes –agregó– tendría, a su vez, un significativo efecto en el balance mundial y en nuestra propia situación en él" (Kornbluh, 2004).

En la mencionada reunión del CSN se examinaron una serie de posibles medidas conducentes al derrocamiento de Salvador Allende, comprobándose sus limitaciones. El memorando de la reunión dice que el planteamiento que finalmente se impuso fue el del subsecretario de Estado John Irwin quien, refiriéndose al presidente Allende, dijo: "el problema es cómo producir su caída. Yo –agregó– cuestionaría nuestra capacidad para hacerlo". Y agregó: "las fuerzas internas son la única manera. La cuestión es cómo influir en las fuerzas internas para crear las condiciones para el cambio". Más adelante añadió: "seremos hostiles solo si podemos estar seguros de que tendremos un efecto significativo sobre las fuerzas internas haciendo que dañen a Allende e impidan su consolidación... Esto, sostuvo, puede significar que tengamos que hacer cosas que no querríamos hacer" (Kornbluh, 2004).

Cabe precisar que los estrategas estadounidenses entendían por "fuerzas internas" a todas aquellas susceptibles de ser usadas y opuestas al gobierno de Salvador Allende: partidos políticos, organizaciones gremiales, medios de comunicación, fuerzas armadas, entre otras. A la utilización de las "fuerzas internas", la estrategia de derrocamiento de Salvador Allende sumó las "presiones económicas" desde el exterior. Estas debían contribuir a generar un panorama caótico en el país, de crisis económica y descontento social,

que serían el pre requisito para que las "fuerzas internas" –civiles y militares– derrocaran a Allende. Todo, sin embargo, debía quedar velado por "una cara fría, pero correcta" por parte del gobierno estadounidense.

La reunión del CSN terminó con una desordenada intervención de Richard Nixon en la que sostuvo que el gobierno de Salvador Allende ponía en peligro el control estadounidense sobre el conjunto de América Latina y que, si no se lo derrocaba, esta podría intentar independizarse de Estados Unidos. Al respecto, dijo: "si dejamos que los potenciales líderes de Sud América piensen en que se pueden mover en la dirección de Chile y seguir su camino, estaremos en problemas. Quiero insistir sobre esto y sobre las relaciones militares, pongan más dinero en ello", sostuvo. "América Latina no se nos ha ido y queremos mantenerla", indicó en otra parte (Kornbluh, 2004).

La materialización de la estrategia estadounidense

La arriba descripta estrategia que definiera la cúpula del poder en Estados Unidos con el propósito de derrocar a Salvador Allende se llevó rigurosamente a la práctica, según veremos a continuación.

Las acciones encubiertas

El Informe Church dice que "luego del fracaso de Track II, la CIA volvió a montar su red y se mantuvo en estrecho contacto con oficiales militares chilenos. En septiembre de 1971 –agrega– una nueva red de agentes estaba en su lugar y la oficina recibía informes casi diarios de nuevas conspiraciones golpistas. La oficina y la Central comenzaron a explorar maneras de utilizar esta red" (Opaso, 1990, p. 93).

Los partidos opositores al gobierno de Salvador Allende fueron –junto a los militares– un elemento fundamental entre las "fuerzas internas". Fue en función de que cumplieran el rol que la estrategia estadounidense les asignara que, a los primeros se les entregara un abundante apoyo financiero. No obstante, los aportes que hicieron

no se repartieron por igual entre estos: beneficiaron principalmente al Partido Demócrata Cristiano (PDC) y al Partido Nacional (PN), en ese orden.

El PDC era una pieza fundamental en la estrategia estadounidense. Ello debido a que era el partido más grande del país, tanto desde el punto de vista electoral como por su influencia cultural, su presencia en los movimientos sociales y considerable representación parlamentaria. Sin su apoyo la derecha no podría crear las condiciones de ingobernabilidad requeridas para que los militares llevaran a cabo el derrocamiento de Salvador Allende. La CIA, consciente de esta realidad, destinó al PDC un apoyo financiero sustancialmente más alto que el que proporcionó a los demás partidos. Estos recursos, ciertamente, eran destinados a su sector conservador.

Consciente del peso y de la importancia del PDC, la CIA tempranamente se propuso el objetivo de que confluyera con el PN formando una oposición unida con una perspectiva golpista. El Informe Church sostiene al respecto que "durante los años de Allende, la CIA trabajó para lograr una oposición unificada". Y agrega: "el significado de esta operación puede ser ponderado al ver que los dos principales elementos opuestos al gobierno de la Unidad Popular (UP) eran el PN, conservador, y el reformista PDC, muchos de cuyos miembros habían apoyado las principales políticas del nuevo gobierno" (Opaso, 1990, p. 78). Esto último –la simpatía de un sector del PDC por el gobierno de la UP– constituyó un problema fundamental para la CIA. Dirigida por su sector progresista, en el PDC, al asumir Allende había primado el criterio de que había que apoyar todas las medidas del gobierno de la UP que coincidieran con el programa presidencial de Radomiro Tomic, las que eran muchas, cuestión que, como dijimos, representaba para la CIA un problema mayor. ¿Cómo alinear al PDC con la derecha golpista? Este fue el problema que la agencia estadounidense debió resolver.

De hecho, el problema fue resuelto a comienzos de julio de 1971, cuando fue asesinado el ex ministro de Interior del gobierno de Eduardo Frei, Edmundo Pérez Zújovic. Este asesinato fue

probablemente llevado a cabo por la misma CIA utilizando a los efectos a un grupúsculo llamado "Vanguardia Organizada del Pueblo", el que, sin antecedente alguno en la política chilena, luego del crimen desapareció. Estos acontecimientos permitieron que el sector conservador del PDC, bajo el liderazgo del ex presidente Frei, se convirtiera en la fuerza fáctica al interior de la colectividad, manejando a la militancia de base mediante mecanismos emocionales y acusando al gobierno de instaurar un "clima de odios", el que habría originado el crimen de Pérez Zújovic. Fue consecuencia de tal evolución que el PDC, bajo el control –si no formal al menos fáctico– de su sector conservador, pasó a jugar el rol de verdadera "fuerza interna", en el sentido que los estrategas estadounidenses daban al concepto. Más aún luego que muchos militantes del sector progresista de la colectividad renunciaran en masa, formando la Izquierda Cristiana, que se unirá a la UP.

Como resultado de esto, la DC terminó convergiendo con el PN –tal como, según el Informe Church, se lo había propuesto la CIA– materializando así la estrategia de ingobernabilidad que debía permitir a los militares irrumpir materializando el golpe. Los paros patronales y la cooptación de la pequeña y mediana burguesía e importantes sectores medios en favor de ello, representaron otros tantos pasos en esa dirección.

Estados Unidos financió abundantemente toda esta actividad desestabilizadora. "En una serie de decisiones, desde 1971 hasta 1973 –dice el Informe Church– el Comité 40 autorizó casi cuatro millones de dólares para partidos políticos de la oposición chilena. La mayor parte de este dinero –añade– fue al PDC, pero una parte sustancial fue destinada al PN (Opaso, 1990, p. 40). En otra parte, el Informe Church sostiene que antes de las elecciones municipales de abril de 1971 y de la elección parlamentaria de julio se entregó dinero a todos los partidos de la oposición. En noviembre de 1971 fueron aprobado fondos para fortalecer al PDC, PN y grupos disidentes". Y añade: "fondos de la CIA financiaron a los partidos de oposición en tres

elecciones de 1972 y en las elecciones parlamentarias de 1973" (Opaso, 1990, pp. 77-78).

Los fondos que la CIA entregaba a las "fuerzas internas" para que materializaran la estrategia de la cúpula estadounidense no solo debían servir para financiar elecciones y propaganda contraria a la UP, sino también para crear ingobernabilidad. Así lo da a entender el Informe Church cuando dice que "el dinero entregado (por la CIA) a los partidos (opositores a la UP) no solo sirvió para apoyar a candidatos durante las elecciones, sino que permitió también que los partidos mantuvieran una campaña antigubernamental durante los años del gobierno de Allende, alentando a los ciudadanos a manifestar su oposición de distintos modos" (Opaso, 1990, p. 78). Parte de esos dineros pasaban a los gremios que organizaban los paros.

En esa perspectiva el financiamiento estadounidense a las "fuerzas internas" fue permanente y sistemático. El Informe Church dice sobre el punto que para el período 1970-1973 registra periódicas entregas de dinero al PDC por parte de la CIA. El detalle es el siguiente: "el 13 de noviembre (de 1970) el Comité 40 aprueba 25.000 dólares para apoyar a los candidatos de la Democracia Cristiana; el 22 de marzo (de 1971), el Comité 40 aprueba 185.000 dólares adicionales para apoyar al PDC; el 10 de mayo (de 1971) el Comité 40 aprueba 77.000 dólares para la compra de una imprenta para el diario del PDC. La imprenta no se compra –añade el Informe– y los fondos son utilizados para apoyar el diario; el 26 de mayo (de 1971) el Comité 40 aprueba 100.000 dólares para ayuda de emergencia que permita al PDC pagar deudas de corto plazo" (Opaso, 1990, p. 136). Y así sucesivamente.

El Informe Church también registra aprobaciones de fondos por parte del Comité 40 para la oposición chilena en su conjunto. Así, el 28 de enero de 1971 –dice el Informe– "el Comité 40 aprueba 1.240.000 dólares para la compra de estaciones de radio y diarios, y para apoyar a candidatos en las elecciones municipales y otras actividades políticas de los partidos opuestos a Allende". El 16 de julio de 1971 –añade el Informe– "el Comité 40 aprueba 150.000 dólares para

apoyar partidos de oposición". El 5 de noviembre del mismo año –agrega– "el Comité 40 aprueba 815.000 dólares para apoyar partidos de oposición y para inducir un quiebre en la coalición de la Unidad Popular". El 16 de junio de 1972 "el Comité 40 aprueba 46.500 dólares para un candidato en una elección chilena". El 26 de octubre de 1972, "el Comité 40 aprueba 1.427.666 dólares para apoyar a partidos políticos de oposición y organizaciones del sector privado con miras a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973". El 12 de febrero de 1973 "el Comité 40 aprueba 200.000 dólares para apoyar a los partidos de oposición en las elecciones parlamentarias" (Opaso, 1990, p. 138).

Según documentos desclasificados con posterioridad, en agosto de 1973 el Comité 40 aprobó la entrega al conjunto de las fuerzas opositoras la suma de un millón de dólares adicionales. Ello con el fin de sufragar los gastos asociados a las medidas finales que debían dar paso al golpe. El Informe Church sostiene que "además de financiar partidos políticos, el Comité 40 aprobó vastas sumas de dinero para sostener medios de comunicación opositores y así continuar con una agresiva campaña de propaganda" (Opaso, 1990, p. 78).

Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación fueron uno de los instrumentos más importantes en los propósitos de llevar a cabo el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. En esta perspectiva, el Informe Church dice que "la CIA gastó un millón y medio de dólares (US$ 1.500.000) para apoyar a *El Mercurio*, el principal diario del país y el más importante canal de propaganda en contra de Allende. De acuerdo con los documentos de la CIA –continúa el Informe– estos esfuerzos tuvieron un rol significativo en la creación de las condiciones para el golpe militar del 11 de septiembre de 1973" (Opaso, 1990, p. 78).

Según el mismo informe, la CIA paralelamente financió abundantemente otros medios. Sobre el punto sostiene que "la operación de propaganda más importante de la CIA financió una gran variedad de actividades. Se elaboraron varias revistas de circulación nacional y un gran número de libros y estudios especiales. Se elaboró material para colocación en la cadena de *El Mercurio*, (lo que significaba

una circulación diaria de más de 300 mil ejemplares), en diarios de partidos de oposición; en dos periódicos semanales; en todas las radioemisoras controladas por los partidos de oposición, y en varios programas de televisión, de tres canales distintos" (Opaso, 1990, p. 79).

La otra fuerza interna a la que Estados Unidos prestó una importancia fundamental fue las Fuerzas Armadas. En efecto, "durante todo el transcurso de la administración de Allende –dice el Informe Church– Estados Unidos mantuvo *contacto estrecho* con las fuerzas armadas chilenas, a través de la CIA y los agregados militares" (Opaso, 1990, p. 76). En otra parte el informe es aún más categórico: sostiene que durante el gobierno de la UP "los Estados Unidos mantuvieron contactos de inteligencia con los militares chilenos, incluyendo oficiales que estaban participando en conspiraciones golpistas" (Opaso, 1990, p. 24).

Más adelante el Informe Church sostiene que "la red de inteligencia (que la CIA había montado al interior de las Fuerzas Armadas) siguió informando durante los años 1972 y 1973 sobre actividades conspirativas. Durante 1972 –agrega– la oficina continuó monitoreando el grupo que podía organizar un golpe exitoso, y dedicó una cantidad sustancialmente mayor, en tiempo y en esfuerzos, para infiltrar(lo) (en comparación) a lo dedicado a los grupos anteriores). Este grupo –dice el Informe Church– había llamado la atención de la oficina en octubre de 1971. En enero de 1972, la CIA (lo) había infiltrado exitosamente... y estaba en contacto con su líder a través de un intermediario" (Opaso, 1990, pp. 96-97).

Presiones económicas desde el exterior

En relación con este punto, el Informe Church dice que "es imposible comprender el impacto de las acciones encubiertas (llevadas a cabo por la CIA y a las cuales nos hemos referido más arriba) sin estar al tanto de las presiones económicas (externas) que las acompañaban" (Opaso, 1990, p. 84). Dichas presiones alcanzarían una considerable eficacia ante el hecho de que la economía de Chile era altamente dependiente de

los factores externos. "Washington, para arruinar a la economía chilena y potenciar las acciones de las "fuerzas internas", contaba con dicha debilidad. Bajo tales supuestos fue que elaboró su estrategia económica frente al gobierno del presidente Allende. Esa estrategia –dice el Informe Church– "fue diseñada al más alto nivel del gobierno de los EE. UU. y coordinada por equipos de trabajo inter-agencias" (Opaso, 1990, p. 86). Un elemento central de la misma contemplaba que "los Estados Unidos haría uso de su posición predominante en instituciones financieras internacionales para (impedir) el flujo de nuevos créditos multilaterales u otro tipo de ayuda financiera a Chile" (Opaso, 1990, p. 87).

Las cifras dan cuenta de lo sucedido, sostiene el *Informe Church*. La ayuda bilateral estadounidense (que era) de 35 millones de dólares en 1969, (cayó) a 1.5 millones en 1971. Los "créditos del Banco de Exportación e Importación de los EE. UU., que habían alcanzado un total de 234 millones de dólares en 1967 y 29 millones de dólares en 1969, bajaron a cero en 1971. Los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) –en el que EE. UU. tenía el equivalente a un poder de veto– y que habían totalizado 46 millones en 1970, bajaron a 2 millones en 1972" (Opaso, 1990, p. 87).

El otro frente que abrió Estados Unidos con el fin de arruinar la economía chilena fue la relativa a su deuda externa. Washington se esforzó para que no fuera renegociada. Esa deuda, una herencia de las obligaciones adquiridas por los gobiernos de Alessandri y Frei –dice el Informe Church– era la segunda más alta... *per cápita* del mundo. A pesar de esto –añade– en 1972 y 1973, durante las negociaciones del Club de París sobre la deuda externa de Chile con las principales naciones acreedoras, Estados Unidos fue el único país que se negó a considerar la renegociación de los pagos de la deuda externa chilena, condicionándola al progreso de las indemnizaciones a las compañías cupríferas estadounidenses. El Informe Church agrega que "Estados Unidos también ejercieron presión sobre cada uno de los otros acreedores para que no renegociaran la deuda externa chilena en forma conjunta" (Opaso, 1990, pp. 90-91).

Las presiones mencionadas fueron desastrosas para la economía chilena, más aún cuando coincidían con los paros prolongados que los gremios patronales y la pequeña burguesía organizaban por doquier. El Informe Church sostiene que "el efecto combinado de la negación de créditos externos y de las huelgas del cobre fue devastador para las reservas internacionales de Chile" (Opaso, 1990, p. 76). Mientras que paralelamente los partidos opositores, que no podían haber ignorado los negativos efectos de ese verdadero bloqueo económico, lejos de rechazar la intervención en contra de su propio país, acusaban al "gobierno marxista" de conducir a Chile al desastre, con lo cual no hacían sino cumplir con la misión que los estrategas norteamericanos le habían asignado en tanto "fuerzas internas".

El golpe

Después de haber instaurado la ingobernabilidad en el país, los partidos opositores, culminando su ofensiva final, el 22 de agosto de 1973, utilizando su mayoría parlamentaria, lograron que el Congreso aprobara una resolución llamando a las Fuerzas Armadas a que restauraran el orden constitucional supuestamente quebrado por el gobierno. Antes habían conseguido la renuncia de la cúpula constitucionalista del ejército. Dos semanas después vendría el golpe el que, más allá de satisfacer los intereses de ciertos sectores de las fuerzas internas –básicamente del gran capital– fundamentalmente marcaría el triunfo del gobierno estadounidense que se había valido de ellas.

Conclusiones

La intervención que entre 1970 y 1973 Estados Unidos llevó a cabo en Chile fue masiva y planificada. Esa planificación se dio en los niveles más altos, constituyendo su finalidad, primero, impedir el ascenso de

la izquierda chilena al gobierno y después, cuando esos intentos fracasaron y Salvador Allende asumiera la primera magistratura, crear las condiciones requeridas para su derrocamiento. Dicha estrategia les otorgó un rol fundamental a las llamadas "fuerzas internas" –las que, apoyadas de manera encubierta por Estados Unidos– y usando a su favor la crisis económica inducida por las presiones económicas externas implementadas por este, cumplieron rigurosamente el papel que la estrategia de ese país les asignara.

Referencias

Corvalán, L. (2012). *La Secreta Obscenidad de la Historia de Chile Contemporáneo*. Santiago de Chile: Ceibo Ediciones.

Kornbluh, P. (2004). *Pinochet y los Archivos Secretos.* Barcelona: Editorial Crítica.

Opaso, C. (comp. y traduc.). (1990). *Senado de los Estados Unidos, Acciones encubiertas en Chile, en Frei, Allende y la mano de la CIA.* Santiago: Editorial Ornitorrinco.

Chile, 1970-2020: revolución, golpe, dictadura y... ¿revolución?

Xabier Arrizabalo Montoro

"Ustedes que ya escucharon la historia que se contó,
no sigan allí sentados pensando que ya pasó,
no basta solo el recuerdo, el canto no bastará,
no basta solo el lamento, miremos la realidad
(...)
Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear
Tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar".

Luis Advis, Cantata de Santa María de Iquique, 1969.

El período de gobierno de la Unidad Popular (UP), que se inicia el 3 de noviembre de 1970, acaba de forma trágica con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. La decantación por el golpe por parte de las clases dominantes en Chile, bajo la tutela del imperialismo estadounidense, tenía como objetivo liquidar el proceso político en curso. Un proceso de tal intensificación de la lucha de clases que deviene revolucionario, como se expresa por ejemplo en la conformación de los cordones industriales y su coordinación, embrión de un poder no

burgués, de un poder obrero y popular. Es decir, un proceso que amenazaba de forma directa sus privilegios.

Más allá de esto, las clases dominantes tenían un plan de fondo, para el que desde el año 1955, se habían ido formando cuadros de la Universidad Católica de Chile en la Universidad de Chicago (en el terreno militar, específicamente represivo, el imperialismo estadounidense había formado a los militares chilenos en la siniestra Escuela de las Américas, en concreto en técnicas de tortura, etc.). Este plan es muy sencillo de resumir, considerando la crisis latente que ya enfrenta el proceso de acumulación capitalista, a escala mundial, desde finales de la década de 1960, que se concreta en la declaración de inconvertibilidad dólar-oro pronunciada por Nixon el 15 de agosto de 1971 y que estalla apenas unas pocas semanas después del golpe, en octubre de 1973, con la abrupta subida del precio del petróleo. El plan consiste en eliminar todos los obstáculos para disparar el grado de explotación laboral, directa e indirectamente, así como para saquear los recursos naturales del país.

Sin embargo, que las clases dominantes en Chile se decanten por el golpe no implica la garantía de su triunfo. Por consiguiente, hay una pregunta elemental que, sin embargo, no suele estar en el centro de la discusión: ¿por qué triunfó el golpe? La existencia de un proceso revolucionario en curso encamina la respuesta: obviamente el golpe triunfó porque no triunfó la revolución. Pero, entonces, ¿por qué no triunfó la Revolución chilena?

En el presente texto se aborda de manera sintética esta cuestión, con el objetivo de aportar elementos para la comprensión de la secuencia completa que atraviesa el último medio siglo de la historia de Chile. De cara, a su vez, a extraer todas las enseñanzas posibles para la situación actual, caracterizada por una profunda explosión social que se extiende ya por un año, pese a la brutal represión del régimen heredero de la dictadura, pese a las limitaciones impuestas por la pandemia y su gestión, pese a todo. Para ello, en primer lugar, se documenta la efectiva existencia de un proceso revolucionario, especialmente en los años 1972 y 1973, en respuesta directa de la clase

trabajadora y los sectores populares a las limitaciones infranqueables que va revelando la vía institucional y la brutal respuesta de las clases dominantes, incluso a los avances sociales más elementales. En segundo lugar, se analizan los factores que actúan en favor de ella, así como también sus obstáculos, tanto en términos de aquellos elementos que existen y la bloquean como aquellos otros que, por su ausencia, ocuparán un lugar importante en la derrota. Como siempre en el análisis social, el elemento determinante es la actuación de los sujetos en conflicto, esto es, la expresión política de las clases enfrentadas. En concreto, el punto de partida del texto es la acción política de la clase trabajadora chilena luchando por sus aspiraciones.

No es una caracterización muy extendida la de "Revolución chilena" para referirse a los acontecimientos acaecidos durante el período 1970-1973, sobre todo en su parte final. No es extraño, considerando que la historia la escriben los vencedores o, en su caso, los derrotados que quieren ocultar su responsabilidad en la derrota. Sin embargo, lo que importan son los hechos. ¿Había una revolución en Chile entonces? Para verificarlo, hay dos elementos teóricos a considerar.

En primer lugar, que una revolución no es solamente el hecho insurreccional, por importante que resulte: ni la Revolución Francesa es el 14 de julio de 1789, ni la Revolución Rusa triunfante es el 7 de noviembre de 1917 (25 de octubre por el viejo calendario juliano que regía en Rusia), sin menosprecio de la relevancia de las tomas de la Bastilla y del Palacio de Invierno. Una revolución es un proceso más amplio, que no puede ser encerrado en el tiempo y en el espacio, dada la continuidad de los procesos sociales y dado el contenido mundial de la acumulación capitalista. Y por tanto de la lucha de clases que preside todo, aunque presente formas nacionales, tal y como Marx y Engels explican en 1848 en el *Manifiesto del Partido Comunista*: "por su forma, aunque no por su contenido, la lucha del proletariado contra la burguesía empieza por ser una lucha nacional" (Marx y Engels, 1848, p. 289). Por eso, ellos mismos hablan expresamente de "revolución permanente" ya desde mediados del siglo XIX, en *La sagrada familia* (1845).

En segundo lugar, ¿qué se debe entender por revolución? Por su contenido cuestionador del orden vigente, por parte de las clases dominadas, entendemos por revolución la plena irrupción en la vida pública de las masas sometidas para tomar las riendas de su vida de forma directa, avanzando en la constitución de órganos de poder propios; de modo que se apunte, al menos, una perspectiva transitoria de doble poder (aunque su decantación esté por resolverse, su mera presencia ya denota la efectiva existencia de un proceso revolucionario en curso).

En relación con el primer aspecto (la imposibilidad de acotar una revolución espaciotemporalmente, desligándola de lo que supone la noción marxista de revolución permanente), el proceso chileno forma parte de una tendencia a escala mundial que ya se ha ido verificando, especialmente a lo largo de la década de 1960, y que en América Latina toma cuerpo con el triunfo revolucionario cubano en 1959, aunque no solo. En términos históricos, todos los acontecimientos efectivamente revolucionarios acaecidos en Chile, sobre todo en 1972 y 1973, solo pueden comprenderse como la culminación de un enorme ascenso de la lucha de clases durante la década previa, ligado a su vez a una larga y profunda tradición organizativa de la clase obrera chilena y otros sectores de la población trabajadora como el pequeño campesinado y los pueblos originarios, entre otros. Una tradición que incluye desde la existencia de ilustrados y utopistas como la Sociedad de la Igualdad de Santiago Arcos y Francisco Bilbao o las tentativas de falansterios de Ramón Picarte, hasta la conformación de grandes partidos de masas, que culminan en el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), junto con otras organizaciones como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Y pasando por la gran central sindical que acaba siendo la Central Única de Trabajadores (CUT) creada en 1953. Con figuras tan emblemáticas, incluso internacionalmente, como las de Clotario Blest o, especialmente, Luis Emilio Recabarren.

Intensificación de la lucha de clases, triunfo de la UP y primeros pasos en la vía institucional

Ahora toca detenerse en el segundo aspecto, el que define de forma directa el carácter revolucionario de un proceso, en este caso el chileno. Para ello, presentamos su recorrido partiendo del 4 de septiembre de 1970, fecha de las elecciones presidenciales que gana la candidatura de la UP encabezada por Salvador Allende, pero enfatizando precisamente que esa fecha culmina una fase que viene de lejos y, a su vez, abre una nueva. ¿Qué significa el resultado de estas elecciones? Nueve años antes, en agosto de 1961, el presidente estadounidense John F. Kennedy promueve la Alianza para el Progreso en la Conferencia de Punta del Este, Uruguay: se trata de la respuesta del imperialismo a la explosividad social que amenaza su dominación, como se ha plasmado en Cuba con el triunfo de la Revolución en 1959. El contenido declarado de esta alianza es aportar fondos para el despliegue de políticas sociales que alivien esa explosividad.

En Chile, el programa de la candidatura presidencial de la Democracia Cristiana (DC) en 1964, liderada por Eduardo Frei Montalva, encarna perfectamente esta orientación. Asimismo, su trayectoria posterior muestra sus límites infranqueables: las políticas reformistas no se concretan en reformas sustantivas y, de hecho, lo poco que se hace resulta completamente estéril para desactivar la mencionada explosividad. Más bien lo contrario: revelando los límites del reformismo –sin apenas reformas– estas políticas ponen de manifiesto que la solución a los padecimientos de la gran mayoría pasa por una perspectiva de ruptura.

La prueba más concluyente de todo esto fue el resultado electoral de 1970. El triunfo de Allende expresaba la magnitud del proceso de movilización en curso, puesto que va a permitir la proclamación de un gobierno que declara expresamente el objetivo del socialismo: "las fuerzas populares unidas buscan como objeto central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el

poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo" (Programa de Gobierno de la Unidad Popular, 17 de diciembre de 1969). Pero esta proclamación presidencial se hace al precio de un acuerdo constitucional de garantías con la DC, por el que esta, expresando los intereses de las clases dominantes, pretende encorsetar al nuevo gobierno de cara a que sus políticas queden estrictamente contenidas dentro de los límites del orden burgués. Y, por tanto, subordinando el programa de la UP a dicho orden. El conflicto está servido, por consiguiente, entre los intereses de la mayoría y esos límites tan estrechos. Es la llamada "Vía Chilena al Socialismo".

Durante el primer tiempo del gobierno, la política de estímulo económico rindió frutos y el producto aumentó un 9% en 1971, con la incorporación de 200.000 trabajadores más. En paralelo, hay una serie de medidas en campos como la salud o la enseñanza, que palían efectivamente las consecuencias de la desigualdad crónica de la sociedad chilena. También se avanza en la reforma agraria, apenas iniciada previamente, y el colofón a todo esto es la nacionalización del cobre aprobada en julio de 1971.

El balance de la primera fase del gobierno de la UP deja ver con nitidez cuatro hechos. En primer lugar, que inicialmente había margen para medidas de progreso social sin que todavía se afectaran de forma frontal los intereses de las clases dominantes. En particular, a través de la movilización de la capacidad instalada ociosa, es decir, infraestructuras productivas ya instaladas pero que no están en funcionamiento. En segundo lugar, la otra cara de ese margen: existía, sí, pero tenía límites estrictos. En términos económicos se trataba de lo que coloquialmente puede formularse como "dar de comer a las masas" y, simultáneamente, "poner los medios para que coman cada vez más y mejor". Es decir, aumentar el consumo de las masas sin desatender el proceso de acumulación. La única vía acaba siendo, más pronto que tarde, limitar el consumo de los sectores privilegiados y una intervención directa del Estado en la actividad productiva, mediante las expropiaciones. En tercer lugar, que las clases dominantes

no solo no iban a permanecer de brazos cruzados, sino que se verificaría, cada vez más, la amenaza de Nixon pronunciada en la reunión del 15 de septiembre de 1970 con Kissinger, entonces consejero de Seguridad Nacional, y Helms, director de la CIA, de "hacer aullar de dolor a la economía chilena" (Kornbluh, 2008). Conviene precisar que se refería, en realidad, a hacer aullar de dolor a la mayoría de la población chilena, dado que las clases dominantes harán de la guerra económica contra ella un medio de negocio económico (mediante el acaparamiento, la especulación, el contrabando y el estraperlo, etc.) y también de negocio político (intentar debilitar el apoyo popular al gobierno). En todo momento el imperialismo estadounidense tutela la acción de la burguesía y la oligarquía chilenas. Antes de la asunción presidencial de Allende ya consideró un posible golpe a través del Comité 40. Era la posición de Kissinger, quien afirmaba: "no veo por qué tenemos que mantenernos al margen y observar a un país convertirse en comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo". Durante toda su presidencia hubo hostigamiento, incluso promoviendo algunos intentos de golpe, teledirigiendo no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a otras organizaciones como la paramilitar Patria y Libertad (Kornbluh, s.f.; Church, 1975).

El cuarto hecho es la voluntad inequívoca de la clase trabajadora para luchar por sus legítimas aspiraciones. Las movilizaciones no solo no cejan en todo el período sino que, al contrario y más allá de vaivenes de corto plazo, se mantendrán y extenderán hasta el final; además, también utilizan la palanca electoral, pese a sus limitaciones, de modo que el apoyo a la UP en las distintas convocatorias posteriores a la presidencial de 1970 se mantiene muy por encima del obtenido entonces (en las elecciones municipales de abril de 1971 la UP obtiene el 49% y en las legislativas de marzo de 1973, pese a la situación tan complicada, el 43%). Respecto a la lucha electoral, la clase trabajadora tenía conciencia acerca de las posibilidades que aportaba desde hacía mucho tiempo:

> con este eficaz empleo del sufragio universal entraba en acción un método de lucha del proletariado totalmente nuevo, método de lucha que se siguió desarrollando rápidamente. Se vio que las instituciones estatales en las que se organizaba la dominación de la burguesía ofrecían nuevas posibilidades a la clase obrera para luchar contra estas mismas instituciones (Engels, 1895).

Dicho de otro modo, el balance de esta primera fase revela ya los límites de la vía institucional. Porque se topa frontalmente con que la lucha de clases no solo no se contiene, sino que, al contrario, se agudiza más. Nadie está satisfecho: las clases dominantes indignadas por lo poco perdido y, sobre todo, atemorizadas por poder perder más e incluso todo. La clase trabajadora y los sectores populares exigiendo que el gobierno cumpla las medidas de su programa, que satisfaga efectivamente el mandato recibido en las urnas y en las calles, las fábricas, los centros de trabajo y estudio, las poblaciones.

Antes de proseguir corresponde efectuar una precisión importante. Lograr el gobierno no es en modo alguno lograr el poder, ni controlar el Estado. El Estado burgués es mucho más que el gobierno: "el poder del Estado moderno no es más que el comité encargado de administrar los negocios comunes de toda la clase burguesa" (Marx y Engels, 1848, p. 282). Es decir, es la principal expresión institucional de la superestructura de la sociedad capitalista, expresando por tanto las relaciones de poder, de dominación, de este tipo de sociedad. En consecuencia, es ilusoria la pretensión de que dentro de dicho Estado se puede consolidar una gestión política que cuestione los intereses de las clases dominantes. Que el golpe de Estado se ejecute desde órganos del Estado verifica ese carácter ilusorio referido. Sin dudas, el hecho de que la chilena sea una formación social dependiente, subordinada, dominada por el imperialismo, tiene implicaciones profundas al respecto, las cuales se revelan precisamente en esa tutela por parte del imperialismo estadounidense, como ya se ha señalado.

Límites de la vía institucional, respuesta de las clases dominantes y ascenso revolucionario

Ante este estado de cosas los acontecimientos se suceden. Se recrudecen los ataques de la burguesía y la oligarquía, siempre bajo la tutela del imperialismo estadounidense y con el apoyo de las instituciones del Estado. Promueven el boicoteo sistemático de las actividades económicas, añadiendo a las mencionadas prácticas de acaparamiento, otras acciones como los cierres patronales como el de los camioneros de octubre de 1972. Buscan también, abiertamente, el amedrentamiento de la clase trabajadora, con organizaciones paramilitares incluso, como Patria y Libertad.

El resultado de esta orientación de las clases dominantes logra dañar seriamente las bases económicas. En particular, provoca que se dispare la inflación, lo que supone, entre otras cosas, un deterioro de la capacidad de consumo de las masas. Hay que tener presente en todo momento que en Chile rige plenamente la ley que regula la acumulación capitalista, la ley del valor, ante lo que los contrapesos que finalmente le pone el gobierno son muy limitados (nada que ver, claro, con situaciones como la soviética, por ejemplo, donde se había establecido el monopolio estatal del comercio exterior, además del carácter obrero del Estado como resultado de la expropiación del capital y el latifundio).

De hecho, el gobierno de la UP renunció a desplegar lo que sí habría podido ser un contrapeso importante: la llamada Área de Propiedad Social (APS) que el programa de la UP definía por oposición al Área de Propiedad Privada, que eran los "sectores... en que permanece vigente la propiedad privada de los medios de producción" (Programa de gobierno de la Unidad Popular, 1969). Proponía también el Área de Propiedad Mixta, integrada por las "empresas que combinen los capitales del Estado a los particulares" (ibídem). La APS se formulaba así: "el proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante,

formada por las empresas que actualmente posee el Estado más las empresas que se expropien" (ibídem). En concreto estaría integrada por:

> la gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral; el sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros; el comercio exterior; las grandes empresas y monopolios de distribución; los monopolios industriales estratégicos. En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel (ibídem).

En un primer momento se listaron 91 empresas para integrar la APS. Pero mientras se procedía o no a llevarlo a cabo, los trabajadores emprendieron numerosas expropiaciones e intervenciones. Antes del paro patronal de octubre de 1972 ya había 167 empresas intervenidas y en diciembre, 202. Pero el gobierno, que no había promovido esta política, ordena su devolución a los antiguos dueños. Incluso en enero de 1973 lanza el Plan Prats-Millas (del Comandante en Jefe del Ejército y el dirigente del PC recién nombrado Ministro de Economía) con el que se pretende reducir el número a 49. Sin embargo, la APS llegó a incluir 235 empresas industriales y 350 en total.

Esta política regresiva se había acelerado tras el cónclave de la UP en Lo Curro, en junio de 1972, que significa un punto de inflexión decisivo por la forma en que se resuelve el enfrentamiento de las dos posiciones antagónicas que se plantean. Una estaba ligada a ciertos sectores del PS, entre otros, y se identificaba en especial con la figura del ministro de Economía hasta entonces, Pedro Vuskovic. Apostaba por avanzar en la formación del APS, aumentar la carga tributaria a la burguesía, intensificar la política de control de precios, promover el control obrero de la producción y suspender el pago de la deuda externa, buscando fuentes de importación distintas de Estados Unidos.

La otra, dirigida por el PC y el sector allendista del PS entre otros, proponía restablecer la confianza de la burguesía en el gobierno, bloqueando las expropiaciones y tratando de asegurarle un margen de ganancia al capital, rechazando el control obrero de la producción y, por tanto, reentronizando al mercado; es decir, buscaba relanzar el proceso capitalista de acumulación. El corolario político de esta posición era la invitación a la DC para que entrara en el gobierno, objetivo expreso del PC (ironías de la historia, sería en 2009 cuando por fin se juntaran DC y PC, mediante la entrada de este en la coalición PS-DC, la llamada Concertación, estandarte de la transición a ninguna parte que sucedió a la dictadura, respetando el marco institucional impuesto por ella).

La UP se decanta por la segunda opción, impulsada sobre todo por el PC, plenamente comprometido con la defensa del orden burgués y, por tanto, contrario a todo avance revolucionario; en la línea de los partidos estalinistas en otros momentos históricos, como por ejemplo en la Revolución española de la década de 1930 (Broué y Témime, 1962; Morrow 1937). Su concreción en la orientación de pactar con las clases dominantes era especialmente reaccionaria en un contexto presidido por un elevadísimo grado de movilización de la clase trabajadora y los sectores populares. Porque además, era inviable y por tanto, conducía a que la clase trabajadora quedara desarmada. En efecto, la burguesía, la oligarquía y el imperialismo nunca podrían haber depositado confianza en el gobierno de la UP, porque pese a todas las contradicciones detrás de él estaban las masas, cada vez más movilizadas, que verificaban cada día la necesidad de seguir avanzando y trataban de poner los medios para lograrlo.

El frenazo a la constitución del APS tenía una gran importancia, porque, como se ha explicado, era la única vía para impulsar el proceso de acumulación, de modo que, eludiendo el boicot, se hiciera posible mejorar las condiciones de vida de las masas. La cuestión de la propiedad es obviamente decisiva y remite de forma directa a la base misma del poder. También ocurre esto con otros aspectos y en especial el de las armas. El gobierno de la UP respalda la Ley de Control

de Armas del 21 de octubre de 1972, al amparo de la cual los militares allanan decenas de industrias y poblaciones. Ante ello, el muy limitado avance de la clase trabajadora en el terreno de su autodefensa se verificará dramáticamente en el momento del golpe.

El carácter revolucionario del proceso

Planteamos al principio una doble consideración acerca de la efectiva existencia de un proceso revolucionario en Chile. La primera ligada a la noción marxista de revolución permanente, que permite entender el proceso chileno más álgido (1972-1973), como parte de un curso más amplio tanto en el espacio como en el tiempo. Ya lo hemos argumentado, considerando su integración en una dinámica mundial que, en América Latina, tiene como referencia fundamental el triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Corresponde ahora completar la explicación concentrándola en la propia definición de revolución en el período mencionado. A saber, la plena irrupción en la vida pública de las masas sometidas, con el objetivo de gobernar su destino de forma directa y consciente, avanzando la conformación de órganos de poder propios, al menos embrionariamente, lo que apunta una situación de doble poder. Obviamente no es condición necesaria el triunfo de la revolución para hablar de su existencia, puesto que si no sería imposible hablar de revoluciones derrotadas, no se podría hablar de la alemana de 1918-1919 y 1922-1923 o de la española de la década de 1930.

A lo largo de 1972, ante la continuidad y extensión de la movilización de la clase trabajadora y los sectores populares, se consolidan plenamente dos orientaciones. Por un lado, la de guerra abierta por parte de las clases dominantes, con hechos como el paro patronal de octubre que se añade a todas las prácticas de boicot económico. Una orientación que apunta ya a un escenario de golpe de Estado (efectivamente intentado el 29 de junio de 1973). Por otro lado, la defensa del orden burgués por parte del gobierno de la UP, bajo la

hegemonía del PC y el sector allendista del PS. En este sentido, la resolución del cónclave de Lo Curro el 5 de junio es concluyente y se profundiza con medidas como la conformación de un gabinete cívico-militar del 3 de noviembre de 1972 u otras como las ya mencionadas del freno al APS o la Ley de Armas entre otras.

En efecto, la movilización de las masas no solo no afloja, sino que se relanza. Son innumerables los episodios de huelgas y manifestaciones (algunas tan masivas que llegan a acercarse al millón de participantes, más del 10% de la población total del país). Sin embargo, esto es solo una parte de la enorme implicación de la clase trabajadora en la vida política, actuando en el terreno que le es propio, que no es el de la institucionalidad burguesa. Y actuando así la dinámica del movimiento se dispara. Como explicaba en 2016 Guillermo Orrego, dirigente del Cordón Industrial Vicuña Mackenna en López y Yáñez (2016):

> éramos, éramos valiosos, éramos valiosos, en realidad mira los sindicatos, la CUT, los Cordones Industriales demostraron que los trabajadores, si tuviéramos las condiciones digamos de desarrollo, absolutamente que se nos entregara ese poder popular al cual gritábamos al viento, seríamos indestructibles.

La clase actúa como el ser vivo que es guiado por su instinto de supervivencia. Porque la orientación golpista de las clases dominantes y la inacción seria al respecto por parte del gobierno de la UP preparan el terreno para la destrucción de todo, como efectivamente acaba ocurriendo a partir del 11 de septiembre. Y adonde conduce el instinto de supervivencia es a la conformación de formas organizativas que suplan la ausencia efectiva para tal labor de las viejas organizaciones de la clase trabajadora. Porque estas, supeditando las aspiraciones legítimas de las masas al objetivo prioritario de sostener el orden institucional, están traicionando de hecho dichas aspiraciones. Esas formas organizativas van mucho más allá de toda formalidad, poniendo el foco en primera instancia en la supervivencia material, lo que de forma inmediata plantea el problema

de la democracia en toda su profundidad, que es el problema de la propiedad.

Frente a la contemporización del gobierno, la clase trabajadora toma las riendas de un número mayor de empresas, que además van coordinándose entre sí gracias a su control obrero, frente al enfrentamiento competitivo que las conducía bajo su propiedad burguesa. Esta coordinación se constituye con los Cordones Industriales, órganos de frente único que agrupan a trabajadores de distintas organizaciones, sobre una base profundamente democrática asentada en mandatos representativos siempre revocables y que tenderán a centralizan en una coordinadora:

> sus líderes eran elegidos en los talleres, no nombrados por el gobierno, y podían cambiarse muy rápidamente si su línea política no gustaba a la base, simplemente por decisión de la asamblea de trabajadores de cualquier fábrica de cambiar su delegado al cordón. Las reuniones del cordón mismo eran completamente abiertas. Cualquiera que lo deseara podía asistir a ellas y hablar, aun cuando sólo los delegados podían votar (Roxborough, O'Brien y Roddick, 1979, pp. 249-250).

Se trata por tanto de embriones de un poder no burgués, de un poder obrero que, como decíamos, apunta hacia una posible situación de doble poder:

> si la burguesía no es ya la dueña de la situación en su fábrica, si no es ya enteramente la dueña, de ahí se desprende que tampoco es ya enteramente dueña de su Estado. Esto significa que el régimen de dualidad de poder en las fábricas corresponde al régimen de dualidad de poder en el Estado (Trotsky, 1931).

Su orientación programática lo muestra con claridad. De la reunión de febrero de 1973 que exige la retirada del Plan Prats-Millas, sale la siguiente tabla reivindicativa, que da buena prueba del grado de conciencia de los trabajadores:

1. Lucha para que todas las empresas de productos de primera necesidad, del sector socializado, pasen al control directo de los trabajadores (...);
2. Lucha por la expropiación inmediata de las grandes empresas privadas de distribución;
3. Expropiación de las propiedades agrícolas de más de 40 hectáreas (de regadío), confiscación de la tierra y de su explotación;
4. Constitución de un control obrero de la producción y un control popular de la distribución. Los trabajadores decidirán sobre qué será producido para el pueblo, la reinversión de la ganancia y los locales en los que serán puestos a la venta los alimentos. Para eso, llamamos a la constitución inmediata de comités obreros de vigilancia en todas las empresas del sector privado;
5. Lucha para implantar un comando obrero en todas las empresas del sector socializado;
6. No restitución de ninguna empresa, ni las del sector de la construcción, ni las otras empresas que están bajo el control de los trabajadores. Retirada inmediata del proyecto Millas (...);
7. Poder de sanción de las JAP [Juntas de Abastecimiento y Control de Precios] y de los comandos comunales. Control de lo que se suministra a los comerciantes, castigo a los que no venden, esconden y especulan con los productos. Cierre de sus puntos comerciales y venta directa en los barrios populares. Los obreros de los cordones industriales se movilizarán para hacer efectivo ese poder (...);

Convocamos a los trabajadores a constituir comandos industriales, por medio de los cordones, y comandos comunales, único medio para que la clase obrera disponga de un organismo eficaz de acción, capaz de movilizarla y proponerle nuevas tareas.

Consideramos que controlar los medios de producción y de distribución significa consolidar el proceso, significa crear una nueva economía en manos de la clase obrera, significa caminar hacia delante. Es

> por eso que nos oponemos a todo tipo de concesión a la burguesía (...) (O Trabalho, sin fecha).

Y no son solo los Cordones Industriales, pese a su máxima relevancia. Son también estas Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP), creadas por el gobierno en abril de 1972, como agrupamientos vecinales de trabajadores para velar por un abastecimiento adecuado, que respetara el control de precios frente a la especulación. Pero que rápidamente son apropiadas por la clase trabajadora para doblegar la guerra económica de la burguesía. En particular los Cordones Industriales y las Juntas de Abastecimiento y Precios... de lo que estamos hablando es de órganos de control obrero de la producción y la distribución. Esto es, de embriones de formas estatales no burguesas. También lo son, entre otros, los Comandos Comunales, que eran organizaciones de las poblaciones, levantadas apelando a la construcción de fuerza territorial.

La agudización del conflicto ha llevado a las clases dominantes a decantarse por el golpe que pueda imponer una dictadura militar títere del imperialismo estadounidense. Ante ello y la falta de respuesta consecuente por parte del gobierno que declaraba apostar por el socialismo, la clase levanta en los hechos la bandera del socialismo. Decide ir hasta el final. Es una situación sin vuelta atrás, que se refleja, con sus formas particulares, en el viejo dilema socialismo o fascismo. Como cuando en 1936 la clase obrera española se defiende del golpe fascista por los medios que le son propios, es decir, mediante las expropiaciones, la colectivización... mediante la revolución.

Hay un testimonio que recoge con toda claridad este dilema y, con él, la efectiva existencia de un proceso revolucionario como uno de sus dos polos. Se trata de la Carta que el 5 de septiembre de 1973, seis días antes del golpe final, le dirige a Allende la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales (conjuntamente con el Comando Provincial de Abastecimiento Directo y el Frente Único de Trabajadores en conflicto):

> ha llegado el momento en que la clase obrera organizada en la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales, el Comando Provincial de Abastecimiento Directo y el Frente Único de Trabajadores en conflicto ha considerado de urgencia dirigirse a usted, alarmados por el desencadenamiento de una serie de acontecimientos que creemos nos llevará no sólo a la liquidación del proceso revolucionario chileno, sino, a corto plazo, a un régimen fascista del corte más implacable y criminal (Cordones Industriales, 1973).

Plantean certeramente el carácter revolucionario de la situación:

> sabemos que en la historia de las revoluciones siempre han habido momentos para replegarse y momentos para avanzar, pero sabemos, tenemos la certeza absoluta, que en los últimos tres años podríamos haber ganado no sólo batallas parciales, sino la lucha total (...) En octubre (1972) (...) nadie puede negar la tremenda potencialidad revolucionaria demostrada por el proletariado, y le dio una salida que fue una bofetada a la clase obrera, instaurando un Gabinete cívico-militar (...) Lo que faltó en todas estas ocasiones fue decisión, decisión revolucionaria, lo que faltó fue confianza en las masas, lo que faltó fue conocimiento de su organización y fuerza, lo que faltó fue una vanguardia decidida y hegemónica. Y el 4 de septiembre, en el tercer aniversario del Gobierno de los trabajadores, mientras el pueblo, un millón cuatrocientos mil, salíamos a saludarlo, a mostrar nuestra decisión y conciencia revolucionaria" (ibídem).

Y consecuentemente señalan la forma de evitar el dantesco escenario que se avecina:

> consideramos no solo que se nos está llevando por el camino que nos conducirá al fascismo en un plazo vertiginoso, sino que se nos ha estado privando de los medios para defendernos. Por lo tanto le exigimos a usted, compañero Presidente, que se ponga a la cabeza de este verdadero Ejército sin armas, pero poderoso en cuanto a conciencia, decisión, que los partidos proletarios pongan de lado sus divergencias y se conviertan en verdadera vanguardia de esta masa organizada, pero sin dirección (ibídem).

Esta Carta tiene un enorme contenido político, no solo por revelar que el golpe era más que previsible, sino también porque contribuye a refrendar la caracterización del proceso en curso como revolucionario. Pero a su vez deja ver asimismo la limitación de la Coordinadora que pide que se ponga a la cabeza de ese proceso a quien no tiene ninguna voluntad revolucionaria. Es decir, pone de manifiesto la ausencia de un núcleo político revolucionario organizado como tal, que tenga la suficiente fuerza como para impulsar el proceso.

Derrota de la revolución, triunfo del golpe y dictadura

Los acontecimientos se desarrollan vertiginosamente en las últimas semanas. Del lado de las clases dominantes, que nunca han dejado de dominar las instituciones del Estado, de su Estado, el 29 de junio se pone en marcha el Tancazo, un intento de golpe de Estado que fracasa, pero avisa y no las desalienta. El 7 de agosto detienen en Valparaíso a los marineros que se oponen al golpismo y son torturados salvajemente. El 17 de agosto se reprimen las bases campesinas mapuche en Temuco. El 23 de agosto, la Cámara de Diputados aprueba la declaración de que Allende ha quebrantado gravemente la Constitución, apuntando a la intervención de las Fuerzas Armadas. El mismo día que Augusto Pinochet es nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas por Allende, en sustitución del general Carlos Prats. El 31 de agosto, el regimiento Tacna de las fuerzas armadas –y por tanto del Estado– asalta la empresa expropiada INDUGAS, preludio de más allanamientos de empresas de los Cordones Industriales. El gobierno duda, contemporiza, busca acuerdos, considera la opción de un plebiscito sobre su propia continuidad. Es la misma orientación que cuando el 24 de julio Allende hacía un llamamiento al consenso que mantenga un "poder popular subordinado a las instituciones". Es la orquesta del Titanic.

La clase trabajadora sigue actuando en su terreno: extiende las ocupaciones de empresas, amplía los Cordones Industriales, el 29 de

junio reclama el cierre del Congreso, ante su complicidad con el golpe. El 18 de julio se reúne por vez primera la Coordinadora Provincial de los Cordones Industriales, tras el llamado desde INDUGAS solo dos días antes. El 24 de julio se celebra una gran reunión de la Coordinadora de los Cordones en el Teatro Caupolicán. El 4 de septiembre hay una manifestación de apoyo al gobierno de cientos y cientos de miles de personas.

El 11 de madrugada comienza el golpe, que triunfa rápidamente pese a algunos intentos heroicos de resistencia (Leiva y Garcés, 2005). ¿Por qué ha triunfado? La respuesta es inmediata, obvia: el golpe triunfa porque la revolución no se ha impuesto, porque finalmente ha sido derrotada. Igualmente resulta obvio que el golpe triunfa por el apoyo del imperialismo estadounidense, hasta el punto de que su diseño se lleva a cabo en gran medida en la propia embajada estadounidense, tal y como ya se ha referido.

Las comparaciones pueden ser muy fecundas para el análisis social, aunque también son riesgosas si se olvida que solo pueden ser analogías, no identidades: "el marxismo exige de nosotros que tengamos en cuenta con la mayor precisión y comprobemos con toda objetividad la correlación de clases y las peculiaridades concretas de cada momento histórico" (Lenin, 1917, p. 24). Con esta cautela, la experiencia soviética es una buena referencia comparativa. Desde el punto organizativo, las enseñanzas de la Revolución Rusa son principalmente dos, por otra parte compartidas en otras experiencias, comenzando por la propia Comuna de París. Por un lado, la necesidad de órganos de frente único que agrupen al conjunto de los miembros de la clase trabajadora, con independencia de su adscripción partidaria o de que no la tengan, órganos plenamente democráticos, lo que supone la plena libertad de discusión, y sobre la base de ella, la plena unidad de acción, es decir, el centralismo democrático (que es lo contrario al centralismo burocrático). Por otro lado, la necesidad de un partido obrero revolucionario, independiente de todo compromiso con todas y cada una de las instituciones de las clases dominantes.

El triunfo de la Revolución de febrero de 1917 en Rusia no condujo a la destrucción del estado burgués y oligárquico que encarnaba el zarismo, porque en los sóviets la mayoría estaba en manos de los partidos reformistas (mencheviques y eseristas, del Partido Socialista Revolucionario), haciendo posible así la componenda del gobierno provisional. Pero antes de octubre del mismo año ya había cambiado la mayoría en los sóviets. Era bolchevique y esto sí permitió que la insurrección triunfal de octubre estableciera el primer Estado obrero u obrero y campesino de la historia, salvando la breve experiencia de la mencionada Comuna de París entre marzo y mayo de 1871 (Lenin, 1911).

En Chile existían esos órganos de frente único, aunque ciertamente no tenían la misma implantación que en Rusia, donde además la experiencia de los sóviets había tenido el preludio del ensayo general de la revolución de 1905. Pero el problema se concentraba en el otro factor, en la ausencia de un núcleo político revolucionario con la suficiente fuerza para impulsar el partido obrero de masas, carente de todo compromiso institucional, que pudiera poner en el centro el papel decisivo a cumplir por la clase trabajadora, sin menospreciar la importancia de otros sectores; como en la propia Rusia, donde la clase trabajadora integraba a unos 10 millones de personas, frente a los 100 millones de campesinos, pero cuyo peso político le asignaba ese papel central (Arrizabalo, 2018, p. 66).

La posición del PC ya ha sido señalada. Se trataba de una orientación de defensa a ultranza de la institucionalidad burguesa, una apuesta por la "democracia burguesa", que no era solo muy reaccionaria con el enorme grado de movilización de las masas, sino que además era suicida para la clase trabajadora, por su inviabilidad en un contexto presidido por la ausencia de toda posibilidad de "vuelta atrás" (la lucha de clases es como la pasta dentífrica que, una vez sacada del tubo, resulta imposible volver a meterla sin romper el tubo). Bajo la fórmula del etapismo, un supuesto desarrollo por etapas ineludibles que defiende que el desarrollo capitalista es lo que tocaba entonces, no hay una posición teórica en primera instancia (que

además sería mecanicista, idealista, profundamente antimarxista, negadora de la caracterización teórica del imperialismo de Lenin, del desarrollo desigual y combinado de Trotsky, de la revolución permanente de Marx y Engels). Hay una coartada que se formula como una teoría; coartada para ocultar su orientación contrarrevolucionaria, enmarcada en la línea política de colaboración con el imperialismo, plenamente consolidada en la URSS desde 1945, con los acuerdos de Yalta y Potsdam, aunque ya apuntada antes. La orientación de buscar un pacto con la dirección de la DC, representante de las clases dominantes, significaba atar de pies y manos a la clase trabajadora para luchar por sus intereses.

El caso del PS presenta algunas singularidades, pero su orientación dominante de apuesta por el frente popular lleva al mismo desarme de la clase trabajadora que la del PC. Partido con una fuerte presencia de la orientación socialdemócrata, mantenía, sin embargo, su autodefinición como marxista. Se caracterizaba por contener corrientes con planteamientos muy diferentes, que se expresan con toda claridad en el contexto revolucionario: desde el sector liderado por Allende, completamente subordinado a la orientación del PC de defensa de la institucionalidad burguesa y oligárquica, hasta los sectores cuyos miembros e incluso dirigentes tienen una activa participación en los Cordones Industriales, pero sin romper con la subordinación a la institucionalidad burguesa que imponía la dirección del partido. Y pasando por los que defendían la lucha armada. ¿Podría haber desempeñado un papel análogo, salvando todas las distancias, al del partido bolchevique en Rusia? Este se encontraba vacunado por la experiencia de la bancarrota de la Segunda Internacional en 1914, cuando la mayoría de las direcciones de los partidos obreros, y en primer lugar el alemán, cerraron filas con sus burguesías respectivas, orientando la actuación de las organizaciones creadas por la clase trabajadora no a la defensa de sus intereses, sino a la defensa de los intereses de cada burguesía nacional frente a las demás. Apenas hubo devaneos reformistas en la dirección bolchevique, salvo la posición de la dirección interior en marzo de 1917, liderada por Kaménev

y Stalin, que depositaba ilusiones en el supuesto reformismo del gobierno provisional (lo que es desmontado en Lenin, 1917). Pero la correlación de fuerzas en la dirección del PS estaba lejísimos de un escenario siquiera similar. Incluso algunos sectores que habían participado en el PS, como una parte importante de la dirección y cuadros del MIR, lo habían abandonado, dificultando la perspectiva de que se articulara en el partido una orientación revolucionaria que fuera dominante en el partido.

En última instancia, la orientación de frente popular que inspira la UP ya revela, desde el principio, su alcance inevitablemente limitado. Aunque la presencia de organizaciones burguesas se limitaba prácticamente al Partido Radical, pese a que el PC, como hemos consignado, reclamaba la incorporación de la Democracia Cristiana. Excepto por la mención a los anarquistas, se aplica aquí fielmente la frase de Trotsky respecto al caso español:

> políticamente, lo más sorprendente es que el Frente Popular español no tenía paralelogramo de fuerzas: el lugar de la burguesía estaba ocupado por su sombra. Por mediación de los estalinistas, socialistas y anarquistas, la burguesía española ha subordinado al proletariado sin ni siquiera molestarse en participar en el Frente Popular (Trotsky, 1937).

¿Y el MIR? Desde la escisión cupular de julio de 1969 se había acabado de decantar hacia una orientación que no ponía el foco en la lucha de la clase obrera, sino en los pobres del campo y la ciudad: "esto solo será resuelto por un enfrentamiento entre los pobres del campo y la ciudad con los dueños del poder y la riqueza" (MIR, 1970, p. 32) y la lucha armada como un referente clave. Es decir, *de facto* desconsideraba el lugar central de la clase obrera en una perspectiva revolucionaria que hiciera posible la destrucción del Estado burgués y la creación de un Estado obrero, en el momento en que los Cordones Industriales se desarrollaban, expresando el elevado grado de explicitación de la lucha de clases, con elementos inequívocamente revolucionarios ganando terreno en ella. Pero el MIR defendía la

subordinación de los Cordones Industriales a los Comandos Comunales, aunque estas formas organizativas eran muy limitadas para disputar el poder frente a las posibilidades de los Cordones, gracias al papel que puede desempeñar la clase trabajadora, incluyendo también su efecto de arrastre del resto de sectores populares oprimidos. Por ejemplo, es la clase obrera organizada quien ordena esto: "en Indura, ubicada también en el Cordón Cerrillos, los obreros amenazan con despedir a todos los técnicos y profesionales que adhieran al paro patronal. Rápidamente estos se integran a sus labores, impidiéndose así la paralización de la fábrica" (*Chile Hoy*, 20, 27 de octubre de 1972; citado en Mujica, 2013).

Obviamente esto no significa menospreciar la aportación combativa de los trabajadores del campo y de otros sectores oprimidos. Supone tener en cuenta la gravitación económica y política de la clase obrera, que le permite liderar un proceso revolucionario, que sin duda precisa integrar a los demás sectores oprimidos, como se ilustra en la actuación del Cordón Industrial Cerrillos-Maipú:

> se acordó por parte de los participantes, redactar un documento conjunto que expresara la necesidad de profundizar la alianza obrero-campesina en la perspectiva del Poder Popular (...) en esta perspectiva se explica la necesidad de no devolver ninguna industria, ampliar el área social, crear nuevos canales de distribución popular y profundizar la reforma agraria y el control del campesinado en las decisiones del agro (*La Aurora de Chile*, 1973, citado en Castillo, 2010).

Prueba de su lugar muy limitado en la clase trabajadora es que la candidatura promovida por el MIR en las elecciones de la CUT del 30 y 31 de mayo de 1972, el Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) obtiene solamente el 1,8% de los votos, frente al 31,8% de la candidatura del PC; el 27,1% del PS y el 27,0% de la DC; incluso el MAPU (4,7%) y el Partido Radical (4,0%) más que duplican el apoyo que recibe el MIR (Vidales, 1974; Furci, 1984).

Es decir, el MIR no podría haber desempeñado, por tanto, un papel análogo al del partido bolchevique en la Revolución Rusa, porque

su orientación no era la que adoptó este desde abril de 1917, que no solo impugnaba la política de ilusiones reformistas, sino que plantea cómo organizar a la clase obrera en torno a la defensa incondicional de sus reivindicaciones:

> explicar a las masas que los soviets de diputados obreros son la única forma posible de gobierno revolucionario y que, por ello, mientras este gobierno se someta a la influencia de la burguesía, nuestra misión sólo puede consistir en explicar los errores de su táctica de un modo paciente, sistemático, tenaz y adaptado especialmente a las necesidades prácticas de las masas (Lenin, 1916).

Lo que estaba en juego era la ruptura con el Estado burgués, que no puede realizarse de una forma genérica, difusa, sino a partir del único sujeto que podía dirigir ese proceso, la clase obrera organizada de forma independiente y en alianza con otras clases también dominadas. Pero esta no era la orientación del MIR, no tanto por algunas ambigüedades respecto al gobierno y el propio Estado chileno, sino sobre todo por su desconsideración del lugar central de la clase obrera. En definitiva, en Chile no existía un partido revolucionario, ni siquiera en curso, comparable al partido bolchevique en Rusia en 1917, que pudiera desempeñar el papel decisivo para el triunfo de la revolución que había jugado aquel en los órganos de frente único que eran los sóviets (Arrizabalo, 2018, pp. 64-85).

Por el contrario, lo que sí hay en Chile son organizaciones poderosas cuya actuación contra la revolución va a ser un obstáculo importante, como se expresa con claridad en la ya citada carta de los Cordones Industriales. Las direcciones de estas organizaciones tienen una enorme responsabilidad histórica en lo que aconteció a continuación. Frente a lo que podría haber acontecido, ligado a las enormes posibilidades de la planificación democrática de la producción y la distribución, en la perspectiva de la socialización general de los medios de producción. En la estela de lo que Marx explicaba ya hace más de 150 años:

> con hechos, y no con argumentos, vienen a demostrar que la producción en gran escala y puesta en consonancia con los progresos de la ciencia moderna puede organizarse sin necesidad de que exista una clase de patronos que emplee a una clase de "brazos"; que, para dar frutos, los medios de trabajo no necesitan ser monopolizados como medio de dominación sobre y de explotación contra el trabajador mismo, y que el trabajo asalariado, como en su día el trabajo del esclavo y el trabajo del siervo, es solamente una forma social transitoria y subordinada, destinada a desaparecer ante el trabajo asociado, que cumple su función con el brazo vigoroso, el espíritu ágil y el corazón contento (Marx, 1864).

18 de octubre de 2019: ¿de nuevo se abre un proceso revolucionario?

La secuencia cronológica golpe de Estado → dictadura → "neoliberalismo" no explica la causalidad entre estos planos. Conviene precisar que se entrecomilla "neoliberalismo" para marcar distancias con la peligrosa fetichización de este término que, identificado como capitalismo salvaje, abre la ficticia ilusión de que podría haber otro capitalismo, civilizado, con rostro humano e incluso progresista (Arrizabalo, 2014, pp. 371-388). La secuencia mencionada no explica la causalidad porque no es que primero se diera el golpe de Estado, del que emanó la dictadura como podría haber surgido cualquier otro régimen. Y tampoco es que la dictadura impusiera la brutal política económica como si hubiera podido aplicar otra. La secuencia explicativa es, más bien al contrario: la política que necesita el capital financiero es tan destructiva que para imponerla se requiere una dictadura, que se instaura a través del golpe de Estado. La formación de cuadros chilenos en la Universidad de Chicago desde 1955 ya denota la intencionalidad de poner en marcha una auténtica contrarrevolución, cuya necesidad para las clases dominantes se dispara ante el desarrollo del proceso revolucionario que se ha explicado en los apartados anteriores.

El contenido de la política de la dictadura es conocido: se trata de utilizar el terror para eliminar todas las conquistas obreras y democráticas arrancadas a lo largo de decenios de lucha, de cara a disparar el grado de explotación laboral y facilitar el pleno saqueo de los recursos naturales. Su resultado es demoledor en términos económicos y sociales, desvelando que toda la retórica de un supuesto milagro económico chileno es simple propaganda (Arrizabalo, 2020).

La aceptación del marco institucional diseñado por la dictadura, en torno a la mal llamada Constitución de 1980 (en realidad una suerte de Carta otorgada) por parte de las direcciones de las principales organizaciones que decían representar los intereses de la mayoría tiene una consecuencia asimismo demoledora: el mantenimiento de toda la obra destructiva de la dictadura no derrotada (de forma análoga a los casos brasileño y español). Esto se aprecia en la supervivencia de entramados tan dañinos como la liquidación de la seguridad social y la consecuente imposición de un sistema de ahorro forzoso para las pensiones (capitalización individual y gestión privada), es decir, que el salario devengado durante la vida activa pero reservado para el período final de jubilación pase entre medias por la forma de capital, cuyo resultado es la ausencia de salario de vejez (pues la pensión solo alcanza, en promedio, el 33% del último salario para los trabajadores y el 25% para las trabajadoras). Incluso simbólicamente –y más que simbólicamente– el perfil de los dirigentes que conducen la inacabable transición ilustra bien su continuidad con la dictadura: por un lado, la figura del siniestro Patricio Aylwin, dirigente de la DC procedente de la Falange, activo defensor del golpe en 1973 y después, partidario hasta el final de la impunidad para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. Por otro lado, los gestores de la política económica que fueron formados en universidades estadounidenses casi sin excepción (una es Carlos Ominami, que estudió en Francia, donde se reorientó políticamente para convertirse en "hombre de Estado", de este Estado).

Aunque la expresión "Chile despertó" no defina estrictamente la realidad, pues nunca estuvo dormido, no seremos nosotros quienes

cuestionemos la formulación acuñada por el pueblo chileno que combate por sus derechos. En todo caso, lo importante es la caracterización del enorme movimiento que estalla el 18 de octubre de 2019, conectado con antecedentes tan importantes como las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011 entre otras. O las promovidas por la Coordinadora No+AFP, que en 2017 sacó a las calles de todo el país a más de dos millones de personas, más del 10% de la población total de 18,4 millones.

A pesar de todas las dificultades, de la criminal represión que revela el parentesco directo del régimen actual con la dictadura, de las restricciones que provoca la pandemia... a pesar de todo un año después la movilización se mantiene, rechazando todas las viejas direcciones políticas que son cómplices del régimen y constituyendo órganos de frente único, como los cabildos. Cierto que no existe el partido revolucionario que pueda ayudar a decantar efectivamente la balanza del lado del triunfo revolucionario. La revolución no se puede comprender en un plano estrictamente nacional y el año 2019 ha conocido la explosión revolucionaria en Argelia y multitud de estallidos sociales. Y puesto que la revolución es la irrupción de las masas en la vida pública, para tomar las riendas de su vida de forma directa, entonces, ¿alguien puede seriamente negar que tiene todo el sentido la discusión en torno a si en Chile nuevamente está en curso un proceso revolucionario o que puede llegar a serlo? Y, por tanto, la necesidad de constituir un núcleo revolucionario que pueda impulsar la representación política de las masas oprimidas para abrir la posibilidad del triunfo de la revolución.

La situación actual a escala mundial es de la máxima gravedad. La pandemia del coronavirus no es la causante de la crisis, sino al revés, es la expresión de la "crisis crónica" del capitalismo y las políticas que la acompañan, por más que efectivamente la pandemia haga aflorar y dispare esta crisis latente. Las exigencias de la rentabilidad se revelan cada día más incompatibles no con que las condiciones de vida de la mayoría mejoren en paralelo a los avances científicos y técnicos, sino simplemente con preservar las condiciones conquistadas

por decenios de lucha. El capitalismo no es reformable y por eso la explosividad social no deja de acrecentarse. Para que la explosividad abra una salida verdaderamente digna de este nombre, la clase trabajadora, a diferencia de las clases dominantes, no tiene nada que perder con el conocimiento y aprendizaje de las enseñanzas de su mejor historia. En particular, de la heroica experiencia que culminó en Chile entre los años 1970 y 1973, a cuyos protagonistas de base rendimos homenaje.

Referencias

Allende, S. (1971). *La vía chilena hacia el socialismo.* Madrid: Fundamentos.

Arrizabalo, X. (2020). *Milagro o quimera: la economía chilena durante la dictadura.* Segunda edición. Madrid: IME.

Arrizabalo, X. (2018). *Enseñanzas de la Revolución rusa (Interpretación marxista de la experiencia soviética a través de sus textos).* Madrid: IME.

Arrizabalo, X. (2014). *Capitalismo y economía mundial* Madrid: IME-ARCIS-UdeC.

Banco Central de Chile. (1989). Indicadores Económicos y Sociales 1960-1988, Santiago.

Broué, P. y E. Témime. (1962). *La Revolución y la Guerra de España.* México DF: Biblioteca Actual.

Castillo, S. (2010). Sociabilidad y organización política popular: Cordón Industrial Cerrillos-Maipú (Santiago, 1972). *Cuadernos de Historia*, 32. Santiago: Universidad de Chile.

Church, F. (1975). Acción encubierta en Chile, 1963-1973. http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html

Colectivo Tarea Urgente. (2016). *Cordones Industriales.* Documental de A. López y V. Yánez. https://www.youtube.com/watch?v=2_AA7-__I8I.

Coordinador Provincial de Cordones Industriales. (1973). Carta al Presidente Allende. www.archivomuseodelamemoria.cl/uploads/2/7/277179/000001.pdf.

Cordones Industriales. (1973). www.archivomuseodelamemoria.cl/uploads/2/7/277179/000001.pdf

Engels, F. (1895). Prólogo, en K. Marx. *Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850*. www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/francia/francia1.htm.

Furci, C. (1984). *El Partido Comunista de Chile y la Vía al Socialismo.* Santiago: Ariadna Ediciones. https://books.openedition.org/ariadnaediciones/488#tocto1n2.

Kornbluh, P. (2008, 10 de septiembre). Desclasifican nuevas conversaciones entre Nixon y Kissinger para derrocar a Allende. https://www.ciperchile.cl/2008/09/10/desclasifican-nuevas-conversaciones-entre-nixon-y-kissinger-para-derrocar-a-allende/.

Kornbluh, P. (s/f). Chile and the United States: Declassified Documents Relating to the Military Coup, September 11, 1973. *National Security Archive Electronic Briefing.* Book No. 8. https://nsarchive2.gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB8/nsaebb8i.htm

Marini, R. M. (1976). El reformismo y la contrarrevolución: estudios sobre Chile. *Serie Popular ERA*, 37, México.

La Aurora de Chile. (1973). Consejos Campesinos y cordones industriales. Poder Obrero-Campesino, 19, Santiago.

La Botz, D. (2017). The Communist International, the Soviet Union, and their impact on the Latin America Workers' Movement. *Tensões Mundiais/World Tensions*, 13 (24), Universidade Estadual de Ceará, Fortaleza.

Leiva, S. y M. Garcés. (2005). *El Golpe en la Legua: los caminos de la historia y de la memoria.* Santiago de Chile: Lom.

Lenin, V. I. (2009) [1917]. *Las tesis de abril.* Madrid: Fundación Federico Engels.

Marx, K. (1864). Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de Trabajadores, en K. Marx y F. Engels. (1988). *La Internacional.* México: FCE.

Marx, K. y F. Engels. (1978). *La Sagrada Familia o crítica de la crítica crítica (Contra Bruno Bauer y compañía).* Colección Obras de Marx y Engels, vol. 6). Barcelona: Crítica-Grijalbo.

Marx, K. y F. Engels. (1988). *Manifiesto del partido comunista.* México DF: FCE.

MIR. (1970). Declaración pública: el MIR a los obreros, campesinos, pobladores, estudiantes y soldados en MIR. (1968-1970). Con todas las fuerzas de la historia, Documentos del MIR 1968-1970, Ediciones Segunda Independencia. http://www.partidodelostrabajadores.cl/wp-content/uploads/2010/06/MIR_documentos.pdf.

Morrow, F. (1976). Revolución y contrarrevolución en España. Bogotá: América Continental.

Mujica, D. (2013). Cordones industriales. Cronología comentada. *Folletos de la Biblioteca de Historia Obrera.* Santiago: Ediciones Museo Obrero Luis Emilio Recabarren.

Trabalho. (sf). "A tragédia da 'Unidade Popular' no Chile". *Mimeo*.

PET. Indicadores económicos y sociales. Series anuales. 1960-1989, Serie de Indicadores Económico-Sociales, Santiago, julio 1990.

Roxborough, I., P, O'Brien y J. Roddick. (1979). *Chile: el Estado y la revolución.* México DF: Editorial El Manual Moderno.

Trotsky, L. (1931). El control obrero de la producción. www.marxists.org/espanol/trotsky/1930s/08_31.htm.

Trotsky, L. (1937). Lección de España: última advertencia, en *La Revolución española (1930-1939).* www.posicuarta.org/pdf/LecEspLT.pdf.

Unidad Popular. (1969). *Programa básico de la Unidad Popular*. https://www.marxists.org/espanol/allende/1969/diciembre17.htm

Valenzuela, H. (2008). *Historia del movimiento obrero chileno.* Santiago: Quimantú.

Vidales, C. (1974). *Contrarrevolución y dictadura en Chile.* Bogotá: Ediciones Tierra Americana.

Vitale, L. (s/f). *Interpretación marxista de la historia de Chile,* 3 tomos. Santiago: Lom.

Vuskovic, P. *et al*. (1975). *El golpe de Estado en Chile.* México: FCE-UNAM.

Estados Unidos, Escuela de las Américas y la cuestión militar en Chile

Pablo Ruiz y Robert Austin H.

Presentación

Como secretario de Estado en Washington durante la década de 1950, John Foster Dulles solía afirmar que "los Estados Unidos no tienen amigos; tienen intereses". Este capítulo tiene un doble enfoque. En primer lugar, indaga la historia de un organismo militar-pedagógico estadounidense –la Escuela de las Américas– clave desde fines de la Segunda Guerra Mundial en imponer, aumentar y proteger aquellos intereses, entendidos como un conjunto económico, geopolítico y cultural. Sostenemos que la Escuela de las Américas (cualquiera sea su encarnación) constituye la punta de lanza instructora y regidora de una red de organizaciones estatales de la superpotencia, que depende de las propias Fuerzas Armadas estadounidenses como respaldo de última instancia en caso de intervención militar directa. Dicha red jugó un papel trascendental dentro de las Fuerzas Armadas de Chile durante la época de la Unidad Popular (UP), que sigue impidiendo el desarrollo socioeconómico del país hasta nuestros días.

Paralelamente, en honor al quincuagésimo aniversario del triunfo de la UP como expresión de variadas luchas históricas y emancipatorias, a 47 años desde la imposición de una dictadura fascista por una alianza del imperialismo y la oligarquía nacional, vale preguntarse cuándo comenzó a fraguarse la posibilidad de que los militares pudieran dar un golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973. Nuestra hipótesis propone la interdependencia de ambos enfoques en el desarrollo del terrorismo de Estado a través del continente, a partir del golpe de Estado en Brasil en 1964 pero especialmente en Chile, como mecanismo indispensable del control político económico de la gran mayoría de los países del continente latino y caribeño americano. Simultáneamente sostenemos la contingencia y fragilidad de tal mecanismo, no por un idealismo descendido de las nubes de manera hegeliana, sino basada en la historia de rebeldía al interior de las fuerzas armadas chilenas a través del siglo XX, del estilo ejemplificado en la sublevación inspiracional del acorazado Potemkin en la Rusia zarista de 1905. Nos interesa también explorar, aunque brevemente, el enlace potencial entre dicha historia en Chile y el surgimiento de la resistencia armada nacional desde inicios de la década de 1980.

El Contexto Posguerra

El terrorismo de Estado como fenómeno moderno surgió y se consolidó a través de América Latina durante las décadas posguerra, vinculado a las doctrinas de la Seguridad Nacional, basada en la idea de la existencia de un "enemigo interno" y la contrainsurgencia, todas producidas dentro del complejo militar-académico-industrial del poder hegemónico en la región, y movilizadas únicamente en sus intereses (Menjívar y Rodríguez, 2005; López y Rivas, 2012). La militarización masiva de la investigación por parte del Pentágono en las universidades estadounidenses durante la era de la posguerra también ha asegurado su alistamiento sistémico en la agenda imperial

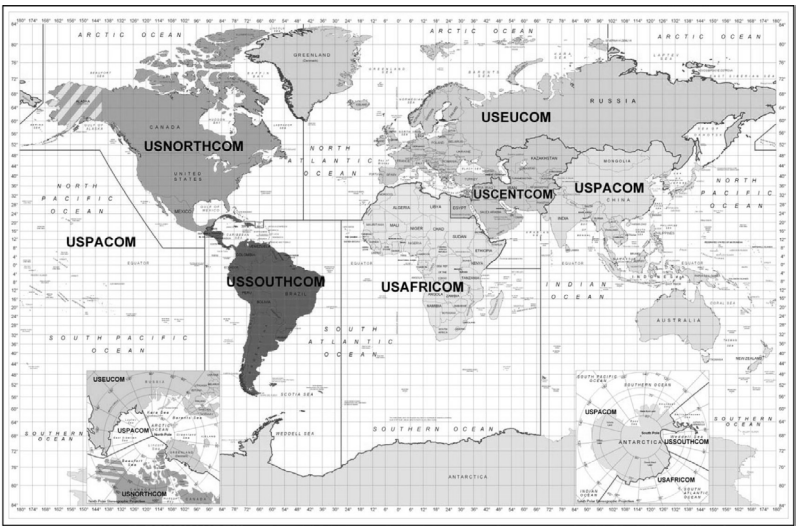
del complejo (Nocella *et a.l*, 2010, passim). En su obra destacada sobre la Guerra Fría Cultural, Saunders (2001, pp. 134-135) observa que:

> El uso de las fundaciones filantrópicas fue el camino más conveniente de transferir grandes sumas de dinero a los proyectos de la Agencia (CIA) sin alertar a los destinatarios sobre su origen. A mediados de la década de 1950, la intrusión de la CIA en el campo de las fundaciones fue masiva... La financiación de la CIA estuvo involucrada en casi la mitad de las subvenciones otorgadas por estas 164 fundaciones en el campo de las actividades internacionales durante el mismo período.

Dichas fundaciones eran, y siguen siendo, omnipresentes en la investigación universitaria, patentemente vinculados al capital transnacional, ejemplificadas por las fundaciones Ford, Rockefeller, Rothschild, Rand y Carnegie (Austin, 2006). Un estudio realizado por dos ex agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) señaló que a fines de la década de 1960, había "cientos de profesores y administradores en más de cien campus" contratados en secreto por la CIA (Marchetti y Marks, 1974, pp. 59-60). Su menú de lectura es algo común: desayuno con *La Voz de América* (radio de la CIA), almuerzo con la revista para mercenarios *Soldier of Fortune*, y cena con la revista empresarial *Forbes*.

A partir de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), el aparato estatal-militar de Estados Unidos dividió el mundo en siete zonas de dominio (ver mapa), las cuales formaron la base de sus operaciones militares y la subordinación del mundo no comunista al bloque hegemónico capitalista. Conocidas por sus siglas en inglés, comenzaron con SOUTHCOM (establecida en 1941), concebido por el régimen del presidente Roosevelt como un ensayo para la expansión mundial del imperialismo estadounidense, a base de su ocupación del Canal de Panamá y la consolidación de ahí del control sobre su patio trasero, América Latina y el Caribe (Allende, 1975; Gandásegui, 2015; Yao, 2020). Le siguieron PACOM, para los océanos Pacífico e Índico y LANTCOM, para el Océano Atlántico (ambas establecidas en 1947); luego EUCOM, para Europa, Unión Soviética y África (1952); todas las

anteriores precediendo a la Unidad Popular. Eventualmente se juntaron con CENTCOM, para Asia Centro-Sur y Medio Oriente (1983); finalmente, AFRICOM (2007), en pos de delimitar e influenciar lo que los colonos occidentales solían describir en lenguaje racializado como el continente oscuro (Harding, 1899; Jones, 2010).



Fuente: Departamento de Defensa, EE.UU. https://archive.defense.gov/ucc/

El establecimiento de SOUTHCOM –dedicado a imponer, aumentar y proteger el conjunto de intereses económicos y geopolíticos estadounidenses– luego abrió paso en 1946 a la fundación del Centro de Adiestramiento Latinoamericano del Ejército de Estados Unidos, ubicado en Fuerte Amador, Panamá, pasando a llamarse la Escuela de Las Américas (en adelante SOA, por su sigla en inglés) en 1963. La SOA, junto con la CIA, como frente de inteligencia militar clandestino, la Agencia Estadounidense de Información (USIA, por su sigla en inglés) como difundidora de la cultura hegemonizante, y las propias Fuerzas Armadas estadounidenses, son componentes del Sistema Interamericano que simultáneamente vincula, complementa y sobrepasa a tales instituciones como SOUTHCOM; el Tratado

Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, también conocido como el Pacto de Río, 1947); la Conferencia de Ejércitos Americanos; las escuelas militares nacionales; la Oficina Estadounidense de Formación Policial; y los programas para financiamiento militar latinoamericano MAP (Programa de Ayuda Militar, desde 1950) e IMET (Instrucción y Educación Internacional Militar, desde 1976). Fue, y sigue siendo, un sistema destinado a integrar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con las latinoamericanas, subordinadas las últimas (Lisón, 2004; Gill, 2004, pp. 78-85; Kohan, 2012).

La SOA –conocida comúnmente como "Escuela de Asesinos" (Nelson-Pallmeyer, 1997)– fue reempaquetada después de su expulsión de Panamá en 1984 y desde el año 2001, por las protestas continuas de SOA Watch (2020), se pasó a llamar el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Materia de Seguridad (WHINSEC, por su sigla en inglés), en Fuerte Benning, Estados Unidos. Pero su historia ignominiosa como formadora de torturadores, violadores, militares y paramilitares asesinos demuestra un enorme costo económico directo para los pueblos de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, el caso de Chile demuestra que sus Fuerzas Armadas recibían unos 83.931.000 de dólares entre 1950 y 2000 del programa MAP. A cambio, el Estado chileno –léase el capital fiscal del pueblo– invirtió 200.172.000 de dólares en bienes y adiestramiento militares estadounidenses en el mismo lapso, sin tomar en cuenta el efecto multiplicador de dicha inversión para la consolidación de los intereses del imperio (Lisón, 2004). Se percibe entonces una transferencia deficitaria masiva al detrimento de Chile. Dicho costo, a pesar de la propaganda imperialista, no toma en cuenta el costo seguramente multibillonario que Estados Unidos deberá pagar por concepto de indemnizaciones por la miseria humana e infraestructura social afectada cuando haya justicia popular.

Como señaló en su texto contemporáneo Ramírez Necochea (1965, pp. 74-75), "La Segunda Guerra Mundial provocó una gigantesca expansión económica de los Estados Unidos", quedándose refrendada su supremacía económica. Agrega Rouquié (1984, pp. 146-147) que:

> En general, la guerra acrecienta la dependencia económica de los países del continente en relación a la gran nación del Norte y el control político de Washington sobre los destinos de las naciones latinoamericanas. En 1945 se inicia una nueva era en las relaciones hemisféricas, fruto de las nuevas relaciones de fuerzas internacionales y en los cambios en las estructuras de la dependencia financiera y económica. En efecto, en el período entre guerras y sobre todo a partir de la gran depresión, Estados Unidos reemplaza a los países europeos, todos atrapados en graves dificultades financieras, como primer inversor en el continente.

Se fortalecía entonces la relación de Estados Unidos con América Latina basada en los beneficios que percibe el imperio: "De ella obtenía abundantes y variados beneficios económicos, incuestionables ventajas políticas y aún algunas de carácter militar. Ella seguía desempeñando, por otra parte, un papel de primera importancia en su seguridad" (Ramírez Necochea, 1965, p. 131). Rouquié (1984, p. 148) matiza la observación anterior, aseverando que:

Al sobrevenir la paz, Estados Unidos monta un sistema de seguridad hemisférico basado en una compleja red de pactos multilaterales y bilaterales ... Las bases del sistema militar habían quedado sentadas durante la guerra con la creación del *Inter-American Defense Board* (Junta Interamericana de Defensa). En 1947, el Tratado Interamericano de Defensa Recíproca, firmado en Río de Janeiro, sienta los principios de la solidaridad colectiva frente a una agresión extra continental ... pero el artículo 6 del TIAR prevé el caso de 'una agresión que, sin (ser) un ataque armado, (podría) poner en peligro la paz de América', con lo cual se amplía el concepto de defensa hemisférica.

Sin embargo, América Latina no se había convertido todavía en una prioridad en materia defensiva para Estados Unidos. Es la época de la Guerra en Corea (1950-1953) y a pesar de haber derrocado a Árbenz, en 1954 en Guatemala, por declararlo como una "amenaza comunista" para Latinoamérica –en realidad era para proteger los intereses de la United Fruit Company estadounidense, cuyos inversionistas principales incluían al mismo secretario de Estado John Foster Dulles y su

hermano Allan, entonces director de la CIA (Bulmer Thomas, 1988, pp. 140-1437; Vitale, 1999, pp. 372-373)– "el comunismo no es, a los ojos del gobierno estadounidense, un peligro inminente en la región" (Rouquié, 1984, p. 148). De todas maneras, Ramírez Necochea (1965, pp. 183-185) señala que en este período, Estados Unidos estuvo "complementando su acción diplomática y sus abiertas intervenciones en los asuntos internos y externos de las repúblicas latinoamericanas... en la década de 1945-1955 el imperialismo norteamericano realizó substanciales penetraciones en los terrenos militar y cultural". Sus objetivos eran:

1. Crear en América latina un vasto continente con entrenamiento y armas que pudiera actuar como reserva de las fuerzas norteamericanas ante cualquier contingencia bélica que se suscitara ...
2. Proteger la invulnerabilidad de su territorio y de su más inmediata y valiosa zona de influencia incrementando y subordinando a su dirección superior la totalidad de las Fuerzas Armadas del hemisferio. Con ello consolidaba militarmente la hegemonía económica y política que ya detentaba ...
3. Mantener quieta la sujeción a las repúblicas latinoamericanas, evitando que en ellas prosperarán movimientos populares democráticos y antiimperialistas. Por tanto, consideraban de vital necesidad que las Fuerzas Armadas de estas repúblicas custodiaran segura y severamente el orden económico, social y político que convenía al imperialismo y del cual deriva la posición ventajosa que había conseguido ...
4. Obtener un nuevo poder que les brindara la posibilidad de dirigir la vida política de las repúblicas latinoamericanas, particularmente la de aquellas en que las Fuerzas Armadas tienden a excederse en sus funciones, y a comportarse como activo elemento político.

Indudablemente lo que cambió la situación fue y sigue siendo la Revolución Cubana: "la aparición de un estado socialista a doscientos

kilómetros de La Florida aparece como una grave amenaza para la hegemonía estadounidense en el continente". De esta manera, bajo la administración de Kennedy se introdujeron modificaciones que se tradujeron, entre otras cosas, en un fortalecimiento de los vínculos "entre el Pentágono y los ejércitos latinoamericanos y darán un fuerte tinte político a su colaboración" (Rouquié, 1984, p. 149). De ahí –frente al crecimiento exponencial en la influencia popular de la Revolución Cubana en América Latina, África, Asia y Medio Oriente– los constantes atentados en contra del territorio soberano cubano por terroristas entrenados, financiados y abastecidos de una variedad impresionante de armamentos por la CIA, la SOA, y grupos exiliados cubanos con estrechos vínculos a ambas instituciones. Como observa el mismo autor (1984, p. 149), "la ayuda militar, que comprende el adiestramiento de militares latinoamericanos, donaciones de material excedente o usado y créditos para la compra de equipos, alcanza apenas los 450 millones de dólares para el período 1953-1962". Pero solo entre 1963 y 1967 alcanza a 488 millones de dólares.

El doble currículum de la SOA

Por el balance de fuerzas global desde 1945 a 1990, en particular la hegemonía creciente de Washington, poco se sabía de las operaciones de la SOA y lo que hacían sus graduados, obligándonos a una proyección del papel que jugaba el entrenamiento que brindaba Estados Unidos en Panamá, a las tropas latinoamericanas.. Solo desde la década de 1990 se ha sabido que la dirección curricular de la SOA contrasta tan diametralmente con la práctica histórica de sus egresados que nos revela dos currículos, uno oficial y otro oculto. El primero, que por razones estratégicas y propagandísticas es el que goza de exposición y disponibilidad pública fáciles desde fines de la Guerra Fría, es el currículum oficial. El segundo, que se encuentra principalmente en la historia testimonial. De acuerdo a SOA Watch (2020), "en 1996, la prensa norteamericana dio a conocer la existencia de los

Manuales de Entrenamiento, y que eran utilizados en la academia militar, que aconsejaban 'aplicar torturas, chantaje, extorsión y pago de recompensa por enemigos muertos'".

Fue la práctica de sus graduados, involucrados en graves crímenes de derechos humanos, y después la revelación de los "manuales" que confirmaron que el entrenamiento que daba la SOA incluía técnicas de tortura, infiltración, listas de prohibidos, asesinatos, y vigilancia social. La historia testimonial de los sobrevivientes da cuenta de las tácticas de comando, guerra psicológica, inteligencia militar, y la coordinación antisubversiva, en la "Operación Cóndor", de los servicios de seguridad de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, entre otros. Todo lo anterior responde a las políticas de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la Contrainsurgencia y de la idea del "enemigo interno". Incluso, los soldados aprenden cánticos doctrinarios, uno cuyo refrán es que: "No importa si la guerra destroza nuestras trincheras. Soy cadete, soy comando. Listo para matar montones de terroristas".

Asimismo, los graduados en la SOA, al mismo tiempo de entrenarse militarmente, se forman en la cultura dominante estadounidense (mal llamada "americana"). Según un oficial de la SOA, los límites de aquella cultura se definen por las visitas provistas por la SOA al Mundo Disney y el billonario anfiteatro del deporte profesional (Nelson-Pallmeyer, 1997, p. 21; Dorfman y Mattelart, 1972). La supuesta superioridad civilizadora del Occidente subraya la ideología SOA, resumida a fines del siglo XIX por el senador estadounidense Albert Beveridge como "la misión de nuestra raza... para establecer un sistema donde el caos reina... en medio de salvajes y pueblos seniles" (Hofstadter, 1965, p. 176). Los manuales disponibles tienden a presentarse como asépticos, desafiando los límites de lo creíble. También se muestran contradictorios, al mismo tiempo de hablar del Derecho Internacional Humanitario señalan que la "autoridad debe aplicar la violencia para justificar sus amenazas" al prisionero (SOA, 1999, pp. 63-65).

Serviría contrastar el testimonio de un prisionero político, durante una interrogación en el campo de concentración de Tejas

Verdes en Chile (Valdés, 1974, pp. 35-36), para darse cuenta de que las técnicas usadas tuvieron su raíz en el entrenamiento proporcionado por la SOA a militares latinoamericanos. Quizá lo más cercano que el currículum oficial llegue al currículum oculto sea cuando el Manual de Interrogación (SOA, 1999, p. 122) anuncia que "La fase interrogativa es la fase que 'verdaderamente hace al interrogador', solemos decir así, puesto que de nada vale el hacer efectuado un excelente 'Planeamiento y Preparación' y un estupendo 'Plan de Acercamiento', si durante la 'Fase Interrogativa', no la aprovechamos al máximo para así obtener la mayor información posible".

La comprensión pública del currículum oculto aumentó debido al testimonio de Joseph Blair, mayor (en retiro) del Ejército estadounidense, quien se desempeñó en la SOA como instructor mayor en logística, siendo también designado como especialista en asuntos militares latinoamericanos durante 12 años. Sus primeros estudios sobre la región comenzaron mientras sirvió como asesor al embajador estadounidense en Vietnam, William Colby, luego director de la CIA. Desde Guatemala, según Blair, estuvo vinculado a los Contras en Nicaragua, grupo mercenario clandestinamente apoyado por el régimen del presidente Ronald Reagan en la década de 1980, oficialmente como barricada anticomunista (Richter, 2010). Blair se ha autodenominado anticomunista y a favor de la SOA durante la era de la Guerra Fría, justificación cuyo plazo "se venció al caerse el muro de Berlín".

Al leer en la prensa las constantes denegaciones por oficiales del ejército estadounidense respecto a conocimiento de las violaciones de derechos humanos cometidos por egresados de la SOA –práctica de larga data posguerra, ensayada por la CIA, denominada "la mentira plausible" (McCoy, 2005)– Blair inició sus denuncias. Aseveró que la SOA "no tiene currículum que podría cambiar los valores o las perspectivas políticas de ninguna persona en Latinoamérica". Los manuales clasificados de la SOA (es decir, sin circulación pública) –todos escritos en castellano, el idioma oficial de la

SOA– enseñan el interrogatorio con violencia, la "neutralización", la tortura, la encarcelación injusta, la extorsión y el asesinato. El currículum, continúa Blair, solo confirma la disposición vigente de los militares latinoamericanos cursando programas, y no ofrece ningún curso serio de derechos humanos; a pesar de un curso intitulado "derechos humanos" diseñado durante la Guerra Fría, que dura solo cuatro horas, y mecánicamente imparte los contenidos de la Convención de Ginebra (SOA, 1997).

Los instructores han sido principalmente altos oficiales de las fuerzas armadas latinoamericanas, redondeando el ambiente pedagógico de intercambio cotidiano entre militares de cada parte de la región. Blair agregó que durante su estadía en la SOA, fue conocimiento común entre todos los militares latinoamericanos que la misma SOA es el mejor lugar en la región para lavar su dinero de narcotráfico, y cualquier dinero ganado ilegalmente en su país de origen. De hecho, Blair recordaba haber llevado rutinariamente a los ingresados a uno de los dos bancos en el terreno de la SOA, para que depositaran entre 25 y 35 mil dólares, en efectivo. Sin dudas, aseveraba, "ese dinero era dinero de drogas".

El destacado cineasta Costa-Gavras (1973) comprobó que presos políticos latinoamericanos fueron utilizados durante las sesiones de entrenamiento práctico de tortura en Panamá, siendo el objetivo perfeccionar la técnica de extracción de información sin causar la muerte de "la fuente". Luego el ex comandante de la SOA, el coronel Nicholas Andreacchio, corroboró tales afirmaciones sobre el entrenamiento para torturar en 1983, en el punto álgido de las atrocidades cometidas por el ejército salvadoreño contra civiles, al señalar que la "formación en derechos humanos" era esencialmente "enseñar a los suboficiales que era más valioso en términos de inteligencia mantener vivos a los presos que matarlos" (citado en McClintock, 1985, p. 335). Demoraría hasta 1996, cuando el presidente estadounidense Clinton se vio obligado a publicar una versión censurada de los manuales de capacitación, para que el *New York Times* comentase que "los estadounidenses ahora pueden leer

por sí mismos algunas de las lecciones nocivas que el Ejército de los Estados Unidos enseñó a miles de militares y policías latinoamericanos en la Escuela de las Américas" (citado en Brown, 1998).

Aproximaciones a la cuestión militar y el papel de Estados Unidos

A 50 años del triunfo de la Unidad Popular y 47 años desde el golpe de Estado, es necesario preguntarse ¿cuándo comenzó a fraguarse la posibilidad de que los militares pudieran dar un golpe de Estado en Chile? Vale recordar que, entre 1890 y 1970, hubo 23 sublevaciones y masacres militares en Chile, a costa de miles de vidas de trabajadores urbanos y rurales (Salazar, 2013). Tampoco fueron ajenos los enlaces históricos con militares represivos del continente, por ejemplo, tan temprano como 1927, las Fuerzas Armadas chilenas ofrecían becas para que militares de distintos países latinoamericanos estudiasen en su Academia Militar (Sin autor, 1927). Sabemos que el golpe de Estado contra Salvador Allende no fue obra solo de los militares chilenos sino que contó con la complicidad del gobierno de Estados Unidos quienes dieron financiamiento a la prensa dominante, al gremio de transportistas, entrenamiento a los militares en la SOA, e incluso entregaron armas, por parte de la CIA, a grupos de civiles y militares para que realizaran atentados y sabotajes, con el claro objetivo de crear ingobernabilidad. Así lo reveló el Informe en el Senado de Estados Unidos (1975), "Acción Encubierta en Chile 1963-1973", también conocido como Informe Church, como otros informes desclasificados posteriormente (Kornbluh, 2013).

Uno de los libros pioneros más útiles para esta reflexión es *El libro negro de la intervención norteamericana en Chile*, de Armando Uribe (1974). Ahí se recuerda el "Plan Camelot", proyecto del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que se intentó aplicar en Chile entre 1964 y 1965 para determinar, desde las ciencias sociales,

en qué circunstancias los militares podrían alzarse en armas contra el poder constituyente. Estos datos fueron completados para el análisis de inteligencia y la toma de decisiones, siendo vitales para saber cómo "crear las condiciones" necesarias en conseguir el golpe de Estado de 1973.

También vale recalcar como antecedente –incluso como un "ensayo" de quienes ya consideraban la necesidad de un golpe militar y que actuaban en las sombras de la ingeniería del caos– el "tacnazo" que ocurrió el 21 de octubre de 1969, en pleno gobierno demócrata cristiano del presidente Eduardo Frei Montalva. Un grupo de oficiales liderados por el general de Brigada Roberto Viaux intentó sublevarse contra el gobierno, sin éxito. En la misma larga trayectoria de ensayos militares dirigidos a preservar la hegemonía imperialista figuraba el atendado en contra del comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el general constitucionalista René Schneider, el 22 de octubre de 1970. Su asesinato, organizado por el mismo general Viaux y, al parecer, el general Camilo Valenzuela, tomó lugar a unas seis semanas después del triunfo electoral de la UP del 4 de septiembre, pero dos semanas antes de la inauguración del nuevo presidente, programada para el 4 de noviembre. La CIA envió a Santiago los armamentos usados por los asesinos en la valija diplomática de la Embajada de Estados Unidos en Chile, siendo su objetivo original el secuestro de Schneider, para así precipitar un golpe de Estado e impedir la asunción de Allende a la presidencia (Corvalán, 2011). Otro ensayo similar fue el "tanquetazo", del 29 de junio de 1973, contra el palacio presidencial de La Moneda, que fue atacado por el Regimiento de Blindados N° 2 de Santiago. También, como antecedente de la causa, ya los presidentes Jacobo Árbenz (1954), en Guatemala, y João Goulart (1964), en Brasil, habían sufrido golpes de Estado.

La SOA jugó entonces, y todavía juega, un rol fundamental para el adoctrinamiento y la subordinación de los militares chilenos a las políticas del imperio. Operando en conjunto con el Servicio Australiano de Inteligencia Secreta (ASIS, por su sigla en inglés)

para sabotear el trienio de la Unidad Popular (Toohey y Pinwill, 1989), la CIA también envió a sus agentes a Chile para asistir en la formación de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta de la dictadura), manteniendo una estrecha relación con Manuel Contreras, director de la DINA (Dinges y Landau, 1980; Dinges, 2015). Previo al golpe, fueron entrenados en la SOA los torturadores chilenos Miguel Krassnoff, Álvaro Corbalán, Carlos Herrera Jiménez, Armando Fernández Larios, Fernando Lauriani, Odlanier Mena y Manuel Provis, entre otr@s (SOA Watch).

En 1967, Contreras realizó el curso de posgrado de Estado Mayor en Fort Benning, Estados Unidos, uno de los cursos más apreciados por los militares. Pero, según el revisor anónimo del texto vigente, "Contreras fue alumno de los cursos de inteligencia en Fort Huachuca (Arizona), establecimiento especializado en esa época donde se preparaban a altos oficiales latinoamericanos en técnicas y métodos para llevar 'felizmente a término' sus funciones". Como director de inteligencia, Contreras lideró también la reunión en Santiago, el 25 de noviembre de 1975, entre los jefes de inteligencia de los ejércitos de varios países de América Latina. Dicha reunión fue central en la conformación de la Operación Cóndor o el "Pacto Criminal", como siempre nos recuerda el Premio Nobel Alternativo paraguayo Martin Almada (McSherry, 2005).

Se sabe, adicionalmente, por los documentos desclasificados en Estados Unidos, que la CIA tenía pleno conocimiento de los operativos del Plan Cóndor y que Alejandro Fretes Dávalos, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Paraguay, le dijo al entonces embajador de Estados Unidos en Paraguay, Robert White, que en Panamá, el Ejército de Estados Unidos disponía de instalaciones de comunicaciones que fueron "empleadas para coordinar información de inteligencia de los países del Cono Sur" (Dandan, 2015).

Autocrítica

"Vacío Histórico" fue el concepto que se acuñó en un Pleno del Comité Central, de agosto de 1977, dentro del Partido Comunista de Chile (PCCh), como autocrítica sobre la ausencia de una estrategia político-militar en su más amplio sentido en el trabajo partidario. En el artículo "Lo militar en la política del Partido", de la revista clandestina *Principios* (1981) del PCCh, Camilo González señala que "Lo militar ha constituido por décadas un verdadero vacío histórico en el movimiento popular. Este vacío histórico, junto con otros importantes problemas, explican las causas fundamentales de la derrota de la pasada revolución chilena".

En el artículo citado hay tesis que es importante reflexionar, aun en estos tiempos, sobre lo común a todos los caminos de una revolución social: "1) Todos son siempre violentos. 2) Todos los caminos exitosos son siempre de masas. 3) Todos se asientan en la construcción de una correlación político-militar de fuerzas a favor de la revolución social y 4) Todos los caminos revolucionarios deben culminar en la generación de una crisis nacional revolucionaria y la toma del poder por las fuerzas democráticas" (*Principios*, 1981). A todo lo anterior, hay que sumarle la necesidad de una dirección única o colectiva que coordine, oriente, y proponga caminos certeros, para que nuestros pueblos puedan alcanzar el poder y erradicar las injusticias sociales impuestas por la clase y la élite dominantes. Vale agregar que no basta la rebeldía ni la protesta, si los que nos gobiernan seguirán en el poder. Con Allende se intentó la vía pacífica al socialismo y en la dictadura se utilizaron "todas las formas de lucha" para derrotarla.

Los planteamientos anteriores no son anacrónicos. Basta recordar lo que aconteció del 18 de octubre del 2019 en adelante, en Chile. El "Estallido social" es la demostración más clara que cuando un sistema no quiere escuchar el clamor de su pueblo, y no corrige enormes y persistentes desigualdades sociales, tarde o temprano

se enfrentará a la insurrección de las masas. Es de esperar que el sistema democrático popular que nazca desde una nueva Constitución política ayude a erradicar las injusticias sociales que todavía vive el pueblo chileno por el egoísmo de unos pocos que se adueñan de todo y manejan el poder a su beneficio (Salazar, 2019; Rodríguez, 2020). Pero volvamos al tema.

Es evidente que en los años que duró la Unidad Popular muchos creyeron, con ingenuidad, la premisa que "las Fuerzas Armadas son constitucionalistas"; subestimaron a las Fuerzas Armadas y olvidaron las lecciones de la historia sobre lo peligroso que puede ser la reacción interna y el imperialismo estadounidense. Lo militar, como continuación de la política, es un arte donde no pueden caber la ingenuidad ni la improvisación. Por eso la importancia del análisis histórico, de la formación de la militancia, y del trabajo político. En esos años, con los datos que se conocen, solo el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) tenía un trabajo político-militar incipiente dentro de las Fuerzas Armadas, en especial en la Armada de Chile, y consideraba importante desarrollar esta tarea dentro de la acción política revolucionaria (Torres, 2012).

Magasich (2008) emplea la historia testimonial para conocer más esta experiencia, aprender de sus lecciones y errores. Se relata que cientos de marinos constitucionalistas intentaron denunciar la conspiración en marcha contra Salvador Allende como de oponerse al golpe de Estado, pero fueron descubiertos por la inteligencia militar y brutalmente neutralizados. De hecho, Magasich (2010) demuestra que dicha intervención no fue un caso aislado, sino con antecedentes desde la crisis constitucional política de 1925:

> se produce una revuelta poco conocida pero de gran trascendencia en la historia de ese país. Cinco años antes, había sido electo Presidente el liberal Arturo Alessandri, quien encarna los proyectos de reforma a un Estado en bancarrota después de la caída del precio del salitre. Pero las reformas son bloqueadas por la mayoría conservadora del Senado, hasta que los militares manifiestan su impa-

> ciencia. El Presidente sale del país con permiso por seis meses, y el poder queda en manos de generales y almirantes llevados al poder por los reformistas, pero que finalmente se revelan conservadores. El viernes 23 de enero de 1925, los militares reformistas contraatacan: encabezados por Carlos Ibáñez y Marmaduque Grove ocupan La Moneda y arrestan a la Junta de Gobierno conservadora. Desde Santiago, el nuevo gobierno dirigido por un "Comité Revolucionario" pide el regreso del presidente Alessandri para que proponga una nueva constitución.

Que al final haya fracasado la rebeldía es menos importante que su simbolismo de largo plazo. Igual lo es la insurrección organizada en la mitad de la flota chilena anclada en el puerto de Coquimbo, en septiembre de 1931, cuando el gobierno baja sus salarios, por tercera vez, desde la crisis económica mundial estallada en 1929. Otra revuelta surge en el puerto de Viña del Mar, 30 años más tarde, esta vez en contra de la alimentación de los marinos de bajo rango y los de estación común y corriente (Magasich, 2010). El hilo conductor de las insurrecciones de 1925, 1931 y 1961 es esencialmente la cuestión de clase: con pocas excepciones, los oficiales son conservadores y hasta golpistas, parte de las clases dominantes; mientras las tropas actúan con cierta militancia en pos de defender sus condiciones laborales, vinculando su causa con movimientos sociales y luchas reivindicativas populares. Son, en la gran mayoría, de familias de las clases obrera y campesina.

El golpe militar de 1973 encontró a las fuerzas de izquierda prácticamente sin un plan de acción que pudiera hacer frente o revertir el golpe de Estado, por debilidad o por ausencia de un trabajo político-militar hacia las Fuerzas Armadas y de Orden conformadas en su mayoría por personas de estratos bajos pero con un mando militar subordinado a la élite y la ideología dominante.

Es importante insistir en que nada fue "espontáneo" entonces sino planificado. Tampoco fue casual que muchos de los peores violadores de los derechos humanos en Chile hayan sido graduados en la tristemente célebre "Escuela de Asesinos", en la SOA,

donde se inoculaba el anticomunismo y se enseñaba la guerra contrainsurgente, psicológica, de la información, y se alentaba la tortura y el crimen. El golpe de Estado venía siendo considerado desde mucho antes de la Unidad Popular, por parte de Estados Unidos, como consecuencia de los cambios sociopolíticos que se estaban desarrollando en Chile y en América Latina, dispuesta a avanzar en una reforma agraria y social más radical en busca de la justicia social.

Es importante decir que el tema militar no es un asunto que se reduzca al problema de las armas. La tarea militar se subordina al trabajo político; es como el ajedrez, requiere inteligencia, saber mover las piezas y ganar. Ojalá sin disparar un solo tiro. Es muy importante, por lo mismo, que las nuevas generaciones estudien el tema militar y las experiencias de resistencia que dio el MIR, encabezado por Miguel Enríquez, y del FPMR, liderado por Raúl Pellegrín (Guadichaud, 2015; Rojas, 2011; Durán, 2011).

Conclusiones interinas: los nuevos tiempos

Chile sigue sometido a una interminable "transición a la democracia", determinada por la Constitución de 1980 nacida del terrorismo de Estado, impuesta por la dictadura de Pinochet con motivo de institucionalizar el sistema neoliberal (Cademártori, 2000; Agacino y Madrigal, 2003). Argumentamos que una nueva Constitución que rescate lo revolucionario del trienio de Allende es necesaria y urgente, como primer paso en avanzar hacia una democracia participativa popular, que no solo se reduzca al acto de votar, donde se oriente la política del Estado bajo los derechos humanos en función de construir un Chile justo para todas y todos. Entre otros temas, la carta fundamental debe declarar a Chile como territorio de paz, debe promover la fraternidad, hermandad y unidad de los pueblos de América Latina; debe prohibir el entrenamiento extranjero en la SOA y/o de cualquier país que no respete los derechos humanos

y la autodeterminación de los pueblos; y debe prohibir las bases militares extranjeras. Asimismo, las Fuerzas Armadas deben cambiar, democratizarse, depurarse, y ajustarse a una nueva cultura donde sean realmente respetuosas del pueblo.

Chile sigue enviando tropas a la renovada Escuela de las Américas, ahora llamada WHINSEC. Desde la fundación de la SOA, más de 6.500 militares o agentes de fuerzas de seguridad chilenos han recibido entrenamiento ahí, y, en total, más de 85.000 militares y fuerzas de seguridad de toda América Latina se han entrenado en Panamá y, desde 1984, en la base militar de Fort Benning. Argumentamos que Chile debe retirar a sus tropas de la SOA o de cualquier otra academia militar o policial de países como Estados Unidos, Colombia (Villar y Cottle, 2011) o Israel (Bahbah, 1986; Al Jazeera, 2003) donde no hay pleno respeto a la autodeterminación de otros pueblos. Estados Unidos no ha firmado diversos tratados regionales e internacionales de derechos humanos. Es importante recordar, que tanto Israel como Estados Unidos no firmaron, por ejemplo, el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional.

Desde el año 2018, el régimen neoliberal del presidente Sebastián Piñera ha alcanzado niveles de compra de armamentos a Israel no vistos desde la dictadura de Pinochet (Sin autor, 2020). Por ejemplo, a raíz del estallido social antineoliberal de octubre del 2019, Carabineros de Chile gastaron 10.700 millones de dólares en comprar a Israel vehículos militares lanza agua blindados ("guanacos"), lanza gases y de transporte de última generación, solo entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 (González, 2020). La estrategia ampliamente usada por militares y carabineros durante dicho estallido de mutilar a los manifestantes, incluso atacando a los ojos con balines de goma, se asemeja a las prácticas de la Fuerzas Armadas de Israel en contra de manifestantes en los Territorios Palestinos Ocupados (Alvarado, 2019). Vale anotar que Estados Unidos continúa hasta nuestros días, financiando el entrenamiento de militares chilenos en Colombia (Department of Defense y Department of State, 2019, pp. 400-401), fortaleciendo relaciones entre las

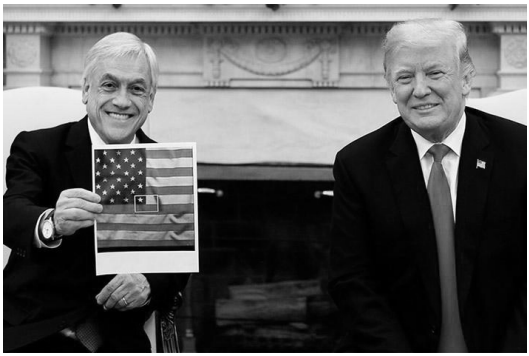
fuerzas armadas de los tres países mediadas desde hace décadas por la SOA (Gill, 2004, p. 78). Desde "La Violencia" a raíz del asesinato del presidenciable Jorge Eliécer Gaitán en 1948, Colombia ha ganado notoriedad para brutales torturas, asesinatos y masacres militar y paramilitar a serie en contra de civiles, calificados por Gómez-Suárez (2010) como genocidio.

¿Soberanía o subordinación?

Actualmente, la relación de las Fuerzas Armadas con Estados Unidos sigue siendo plena. Es tanto así que el embajador de ese país, Alejandro Wolff, inauguró, en abril del 2012, una base militar financiada por el Comando Sur, en el Fuerte Aguayo, Concón (cerca del puerto naval de Valparaíso), supuestamente para entrenar a policías y militares para operaciones de paz en "zonas urbanas". En las imágenes que mostró la embajada estadounidense entonces, se veía una pequeña ciudad y a los militares reduciendo, a punta de fusiles, a civiles y, dentro de ellos, a una persona con pañuelo palestino; los mismos estereotipos que se siguen utilizando en la criminalización de las personas y de la protesta social.

Vale recordar un hecho pintoresco. En septiembre de 2018, el presidente Sebastián Piñera se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca. En la ocasión, Piñera llevó una imagen donde aparecía la bandera de Estados Unidos de forma destacada; mezclada en ella se veía más pequeña la bandera chilena. Si bien esto causó risas, como otras vergüenzas que nos ha hecho pasar el actual Presidente, este hecho es más profundo porque constata, y no es para la risa, que hay políticos, miembros de las Fuerzas Armadas, de la élite, que no sienten, ni tienen, en lo más profundo de su pensamiento, un sentido

auténtico de patriotismo que haga poner por encima de regímenes imperialistas extranjeros los intereses y la soberanía de nuestro país.



Fuente: Diario *La Tercera*, Santiago de Chile, 28 de septiembre de 2018. https://bit.ly/32Mala5.

Más recientemente, en 2019, se realizaron las competencias "Fuerza Comando" auspiciadas por el Comando Sur y los ejercicios navales UNITAS, los mismos encaminados por la marina estadounidense en tiempos del golpe del 11 de septiembre de 1973. Viajó a Chile el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien recomendó al presidente Piñera no hacer negocios con la empresa china Huawei, ya que "presenta riesgos a los ciudadanos de tu país", dijo Pompeo a CNN Chile (2019). Curioso, cuando la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y todas sus agencias de inteligencia han sido comprobadas reiteradamente de espionaje a nivel global (Agee, 1975; Mattelart, 2010; Blum, 2013; Agee, Galarza y Herrera, 2014).

Al recordar los 50 años de la época de la Unidad Popular, vale anotar al mismo tiempo que sigue privilegiándose la doctrina de destino manifiesto de Estados Unidos. En estas últimas décadas, los golpes de Estado han mutado sus formas, pueden ser suaves (Paraguay, Brasil) o duros (Honduras, Haití y Bolivia), vía Congreso o vía militar, o una mezcla de ambos, incluso usarse el sistema judicial. Pero siguen desarrollándose, atentando contra la soberanía y democracia

popular de los pueblos caribeño y latinoamericanos. También sigue el entrenamiento en la SOA, el espionaje, las bases militares de Estados Unidos en América Latina, los ejercicios militares conjuntos, acompañados del uso de la prensa capitalista para construir las narrativas necesarias para legitimar los golpes de Estado y justificar la intervención de Estados Unidos.

En contraste, frente a la hegemonía e injerencia estadounidenses, el monopolio de fuerzas represivas arriba analizadas no ha podido borrar la memoria de los cientos de chilenos y chilenas que realizaron un trabajo militar de resistencia contra el gobierno de Pinochet, ni tampoco de los militares y carabineros patriotas y leales a su pueblo que no traicionaron su juramento. A pesar de la dureza de la dictadura, reteniendo así para las nuevas generaciones, el legado luchador que se ve de nuevo en el octubre chileno.

Foto: Alejandro "Mono" González.

Referencias

Agacino, R. y M. Madrigal. (2003). "Chile Thirty Years after the Coup: Chiaroscuro, Illusions, and Cracks in a Mature Counterrevolution". *Latin American Perspectives* 30 (5) 41-69.

Agee, P. (1975). *CIA Diary: Inside the Company*. Harmondsworth: Penguin Books.

Agee, P., J. Galarza Zavala y F. Herrera Araúz (2014). *La CIA contra América Latina. Caso especial: Ecuador*. Quito, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. https://bit.ly/35wUkq8

Al Jazeera. (2003). Israel's Latin American trail of terror. https://www.aljazeera.com/archive/2003/06/2008491463219614.html

Allende, S. (1975). *Discursos*. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.

Alvarado, S. (2019, 13 de diciembre). Doctrina y armas israelíes presentes en las protestas en Chile. https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2019/12/13/doctrina-y-armas-israelies-presentes-en-las-protestas-en-chile.html

Austin Henry, R. (2006). El Buen Vecino Global: Intervención Estadounidense en Culturas Nacionales, 1945-2000 en *Imperialismo Cultural en América Latina: Historiografía y Praxis.* Santiago de Chile: Ediciones CECATP. http://www.rebelion.org/docs/210698.pdf (2016).

Bahbah, B. (1986). *Israel and Latin America: The Military Connection*. New York: St. Martin's Press.

Blum, W. (2013). The National Security Agency (NSA): The Only Part of the Government that Really Listens to What You Have to Say. http://www.globalresearch.ca/national-security-agency-the-only-part-of-the-government-that-really-listens-to-what-you-have-to-say/5358869

Brown, B. (1998). School for Scandal: Report from Fort Benning. *Commonweal*, CXXV (21) 10-11.

Bulmer Thomas, V. (1988). *The Political Economy of Central América since 1920.* Melbourne: Cambridge University Press.

Cademártori, J. (2001). *Chile: El Modelo Neoliberal*. Santiago de Chile: CESOC.

CNN Chile. (2019, 12 de abril), Pompeo advierte sobre Huawei: 'Poner información en esa infraestructura china presenta riesgos a los ciudadanos de tu país'. https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/mike-pompeo-entrevista-cnn-huawei-china_20190412/

Corvalán Márquez, L. (2011). Las acciones encubiertas norteamericanas entre el 4 de septiembre y el 4 de noviembre de 1970, según el informe Church y otros documentos desclasificados por los EE.UU. *Tiempo Histórico* (2), 117-132.

Dandan, A. (2015, 10 de julio). Los crímenes de la represión que no reconoció fronteras. *Página 12.* https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-276783-2015-07-10.html

Department of Defense y Department of State. (2019). *Foreign Military Training Report. Fiscal Years 2018 and 2019. Joint Report to Congress (Volume I), Unclassified.* https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/12/FMT_Volume-I_FY2018_2019.pdf

Dinges, J. (2015). La historia no contada de Manuel Contreras y la CIA. *El Mostrador*. https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/08/14/la-historia-no-contada-de-manuel-contreras-y-la-cia/

Dinges, J. y S. Landau. (1980). *Assassination on Embassy Row.* Nueva York: Pantheon.

Dorfman, A. y A. Mattelart. (1972). *Para Leer al Pato Donald: Comunicación de Masas y Colonialismo*. México D.F.: Siglo XXI.

Durán, P. (2011). *Memoria Armada de los 80's*. Santiago de Chile: Editorial Latinoamericana.

El Mostrador. (2015, 8 de agosto). Libro de Manuel Salazar relata cómo nacieron vínculos del "Mamo" con Estados Unidos. https://www.

elmostrador.cl/noticias/pais/2015/08/08/libro-de-manuel-salazar-relata-como-nacieron-vinculos-del-mamo-con-estados-unidos/

Gandásegui (H), M. A. (2015). Militarismo y Bases Aeronavales en Panamá. *Tareas* (151) 5-26.

Gavras (Costa-Gavras), K. (1973). *Etat de Siége*. París. Escrito por Franco Salinas. [También (1989), *State of Siege*. Nueva York: Axon video.

Gill, L. (2004). *The School of the Americas: Military Training and Political Violence in the Americas*. London: Duke University Press.

Gómez-Suárez, A. (2010). US-Colombian relations in the 1980s: political violence and the onset of the Unión Patriótica genocide en M. Esparza, H. R. Huttenbach y D. Feierstein (eds.). *State Violence and Genocide in Latin America: The Cold War Years*. Nueva York: Routledge, pp. 152-165.

González, T. (2020, 11 de mayo). Plan Ubilla': los más de $10.700 millones que gastó Carabineros en renovación de vehículos post estallido. https://radio.uchile.cl/2020/05/11/plan-ubilla-los-mas-de-10-700-millones-que-gasto-carabineros-en-renovacion-de-vehiculos-post-estallido/

Guadichaud, F. (2015). Legado y presente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). https://rebelion.org/legado-y-presente-del-movimiento-de-izquierda-revolucionaria-mir/

Harding, W. (1899). *War in South Africa and the Dark Continent from Savagery to Civilization*. Chicago, IL: University of Chicago Press.

Hofstadter, R. (1965). *The Paranoid Style in American Politics and Other Essays*. Nueva York: Monthly Review Press.

Informe en el Senado de EE.UU. (1975). *Acción Encubierta en Chile 1963-1973*. http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/encubierta.html

Jones, J. E. (2010). *In Search of Brightest Africa: Reimagining the Dark Continent in American Culture, 1884-1936*. Athens, Ga: University of Georgia Press.

Kohan, N. (2012). *Simón Bolívar y La Manzana Prohibida de la Revolución Latinoamericana*. Trinchera: Buenos Aires.

Kornbluh, P. (2013). The Pinochet File: A Declassified Dossier on Atrocity and Accountability. Nueva York: The New Press.

Lisón, C. B. (c. 2004). La Asistencia Militar de Estados Unidos en América Latina: Permanencias, Discontinuidades e Intereses. *Revista Fuerzas Armadas y Sociedad*, 20 (2) 109-140.

López y Rivas, G. (2012). *Estudiando la Contrainsurgencia de Estados Unidos: Manuales, Mentalidades y Uso de la Antropología*. México DF.: Semilla Rubí, Comunicación Gráfica.

Magasich Airola, J. (2008). *Los que dijeron No. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973*. Santiago de Chile: Lom Ediciones (2 tomos).

Magasich, J. (2010). Estudio comparativo de las revueltas navales acontecidas durante el siglo XX. *Cuadernos de Historia* (33) 109-136.

Mattelart, A. (2010). *The Globalization of Surveillance: The Origin of the Securitarian Order*. Cambridge: Polity Press.

Marchetti, V. y J. Marks. (1974). *The CIA and the Cult of Intelligence*. Londres: Jonathan Cape.

McClintock, M. (1985). *The American Connection*, Vol. 1: *State Terror and Popular Resistance in El Salvador*. London: Zed.

McCoy, K. E. (2005). Trained to Torture? The Human Rights Effects of Military Training at the School of the Americas. *Latin American Perspectives*, 32 (6): 47-64.

McSherry, J. P. (2005). *Predatory States: Operation Condor and Covert War in Latin America*. Maryland, MD: Rowman & Littlefield.

Menjívar, C. y N. Rodríguez. (2005). State Terror in the U.S.-Latin American Interstate Regime. En C. Menjívar y N. Rodríguez. (2005), When

States Kill: Latin America, The U.S., and Technologies of Terror. Austin, TX: Universidad de Texas, pp. 3-27.

Nelson-Pallmeyer, J. (1997). *School of Assassins: The Case for Closing the School of the Americas and for Fundamentally Changing U.S. Foreign Policy.* New York: Orbis.

Nocella, A., S. Best y P. McLaren (eds.). (2010). *Academic Repression: Reflections from the Academic Industrial Complex*. Baltimore, MD: AK Press.

Principios. (1981, diciembre). 60 años de Lucha. http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0016980.pdf

Radio FIDES. (2018). Trump se reúne con Piñera y dice que a Chile no le falta costa ni océano. https://www.radiofides.com/es/2018/09/28/trump-se-reune-con-pinera-y-dice-que-a-chile-no-le-falta-costa-ni-oceano/

Ramírez Necochea, H. (1960). *Historia del Imperialismo en Chile*. Santiago de Chile: Editorial Austral.

Ramírez Necochea, H. (1965). *Los Estados Unidos y América Latina (1930-1965)*. Santiago de Chile: Editorial Austral.

Richter, R. (c. 2010). *School of Assassins* (video). Nueva York. http://richter-videos.com/SchoolofAssassins/

Rodríguez, M. (2020). El rol de la Izquierda Revolucionaria en el Chile actual (Entrevista). https://www.laizquierdadiario.cl/El-rol-de-la-Izquierda-Revolucionaria-en-el-Chile-actual

Roitman, M. (2020). Chile, 11 de septiembre de 1973: la ruta del golpe cívico-militar. https://blogs.publico.es/dominiopublico/34359/chile-11-de-septiembre-de-1973-la-ruta-del-golpe-civico-militar/

Rojas Núñez, L. (2011). *De la Rebelión Popular a la Sublevación Imaginada*. Santiago de Chile: LOM.

Rouquié, A. *El Estado Militar en América Latina.* Buenos Aires: Emecé Editores, 1984.

Salazar, G. (c. 2013). Los militares chilenos no han hecho otra cosa que aplastar siempre al mismo sector de la nación. https://www.gamba.cl/2018/09/gabriel-salazar-los-militares-chilenos-no-han-hecho-otra-cosa-que-aplastar-siempre-al-mismo-sector-de-la-nacion1/

Salazar, G. (2019). El «reventón social» en Chile: una mirada histórica. https://www.ciperchile.cl/2019/10/27/el-reventon-social-en-chile-una-mirada-historica/

S/A. (1927, 6 de abril). La creación de 18 becas en la Escuela Militar para ofrecerlas a países americanos. *La Nación*, Santiago de Chile, p. 10.

S/A. (2020). De Israel al Wallmapu: 'Piñera ha sido el Presidente que más tratados ha firmado con Israel después de Pinochet'. http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108064

SOA (1997). *Course Catalogue.* Fuerte Benning, GA.

SOA, 1999. *Manual de Estudio: Interrogación*. Fuerte Benning, FF.AA. de EE.UU. https://soaw.org/wp-content/uploads/2020/04/5-SOA-Interrogacion.pdf

SOA Watch, Listado de graduados de la Escuela de las Américas. http://graduados.soaw.org/

Stonor Saunders, F. (1999). *Who Paid the Piper? The CIA and the Cultural Cold War.* Londres, Granta.

Toohey, B. y W. Pinwill. (1989). *Oyster: The story of the Australian Secret Intelligence Service*. Melbourne: William Heinemann.

Torres Gutiérrez, O. (2012). *Democracia y Lucha Armada: MIR y MLN-Tupamaros*. Santiago de Chile: Pehuén.

Uribe, A. (1974). *El Libro Negro de la Intervención Norteamericana en Chile.* Siglo XXI editores. http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0014902.pdf

Valdés, H. (1974). *Tejas Verdes: Diario de un Campo de Concentración en Chile.* Barcelona: Editorial Ariel.

Villar, O. y D. Cottle. (2011). *Cocaine, Death Squads, and the War on Terror: U.S. Imperialism and Class Struggle in Colombia*. Nueva York: Monthly Review Press.

Vitale, L. (1999). *Historia Social Comparada de los Pueblos de América Latina* (Tomo III). Punta Arenas: Ediciones Plaza.

Yao Villalaz, J. (2020). Intervención de Estados Unidos en Panamá". https://www.voltairenet.org/article210721.html#nh2

Sobre los autores, las autoras y compiladores

Sobre los autores y las autoras

Claudio Alvarado Lincopi Licenciado en Historia por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de la Plata, doctor en Arquitectura y Estudios U.rbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Investigador del Centro de Estudios Interculturales Indígenas (CIIR).

Xabier Arrizabalo Montoro Profesor de la Universidad Complutense y director del Diploma "Análisis crítico del marxismo: el método marxista y su aplicación al estudio de la economía mundial actual". Autor de los libros *Capitalismo y economía mundial*, *Enseñanzas de la Revolución rusa* y *Milagro o quimera: la economía chilena durante la dictadura.*

Roberto Ávila Carrera Profesor de Educación General Básica y licenciado en Educación, mención Ruralidad y Desarrollo Local, magíster en Sociología Latinoamericana. Desarrolló docencia en educación básica pública y privada con especial énfasis en la infancia rural y urbana en contextos de pobreza. Los autores agradecen la colaboración de Ramiro, compañero internacionalista, quien nos facilitó el texto Cuba-Chile.

Matías Ayala Munita Ph.D. (Cornell University). Profesor-investigador, Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile. http://comunicacionesyhumanidades.uft.cl/cuerpo-docente-literatura/item/ayala-mat%C3%ADas. Es autor de los libros de ensayos: *Lugar incómodo. Poesía y sociedad en Parra, Lihn y Martínez* (2010), *La poesía de Oscar Hahn. Anacronía, fantasmas, visualidad* (2018) y *Poéticas de lo viviente, lo animal y lo impersonal* (2020).

Fabián Cabaluz-Ducasse Académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC). Doctor en Estudios Latinoamericanos, por la Universidad de Chile. Sus ámbitos de interés son las pedagogías críticas, la educación popular y el pensamiento pedagógico latinoamericano.

José Luis Cabrera Llancaqueo Es doctor. Docente diplomado Pueblos Indígenas en América Latina y Chile, Instituto de Estudios Avanzados (IDEAS), Universidad de Santiago de Chile (USACH). Miembro del Grupo de Trabajo Kuifike. E mail: correojlcabrera@gmail.com.

Pedro Canales Tapia Es doctor. Coordinador diplomado Pueblos Indígenas en América Latina y Chile, Instituto de Estudios Avanzados, USACH. Académico, Dpto. de Historia, USACH. Miembro del Grupo de Trabajo Kuifike. E mail: pedro.canales@usach.cl.

Sergio Caniuqueo Huircapan Investigador adjunto, Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas. Proyecto CONICYT/FONDAP 15110006. Programa Doctoral, Ciencias Sociales, Universidad de la Frontera. Becario Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, Chile. Un borrador fue desarrollado en el programa referido. Agradezco los comentarios de Yéssica González, Olga Ruiz, Álvaro Bello, Jaime Flores y Karen Vásquez.

Orlando Caputo Economista, Universidad de Chile, investigador del Grupo de Trabajo "Economía Mundial y Crisis" (CLACSO). Fue

representante de Allende del Comité Ejecutivo y gerente general de Corporación del Cobre (CODELCO), institución que se hizo cargo de las empresas de la Gran Minería de cobre nacionalizadas. Al momento del golpe militar de 1973, era gerente general de Andina, una de las empresas nacionalizadas.

Sandra Castillo Soto Licenciada en Historia y profesora de Historia y Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Ha investigado temas relacionados con el mundo sindical y popular durante la década del 1970. Entre sus trabajos: *Cordones Industriales. Nuevas formas de sociabilidad y organización política popular durante el gobierno de Salvador Allende (Chile, 1970-1973)* y *Aquí va la clase obrera hacia el triunfo: La Central Única de Trabajadores durante la Unidad Popular (Chile, 1970-1973)* (tesis sin publicar).

Jacques Chonchol Nació en 1926; es agrónomo y fue ministro de Agricultura del gobierno de la Unidad Popular. Anteriormente, fue vicepresidente del INDAP y formuló la Ley de Reforma Agraria 16.640. Fue militante de la DC, del MAPU y de la Izquierda Cristiana. Con el golpe del 11, se ocultó en una embajada y se exilió en Francia, donde vivió hasta volver a Chile en la década de 1990. Este artículo fue publicado por primera vez en la revista *Trimestre Económico*, México, Jul-Sep./1976. Reproducido con permiso del autor.

Luis Corvalán Márquez Profesor titular en el Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso; doctor en Estudios Americanos y magíster en Historia. Se ha dedicado a la historia política y de las ideas en Chile y en América Latina.

Márcia Cury Historiadora brasileña y doctora en Ciencia Política. Actualmente realiza investigaciones sobre luchas sociales en Chile, como becaria posdoctoral, Programa de Posgrado en Historia, Universidade Estadual de Feira de Santana (Brasil), con financiamiento

CAPES. Se agradece a Héctor Orellana por la revisión de la traducción al castellano.

Ximena de la Barra Arquitecta y cientista social chilena. Participó en el gobierno de Salvador Allende, en el primer ayuntamiento democrático de Madrid, enseñó en la Universidad de Columbia de Nueva York y fue funcionaria de alto nivel de Naciones Unidas durante 15 años. Autora y activista social.

Filip Escudero Quiroz-Aminao Investigador y profesor de Historia y Ciencias Sociales, licenciado en Educación, Universidad Viña del Mar. Miembro del Trokiñ Peyepeyen y del Podcast La Hora del Nütram. E-mail: escudero.filip@gmail.com.

Manuel Fernández Gaete Profesor de Historia y Geografía, máster en Historia. Sus investigaciones se centran en la Historia Reciente de Chile y América Latina, especialmente la militancia armada en las décadas de 1960 y 1970, la violencia política durante la transición democrática y la historia sociopolítica de la región de Concepción.

Graciela Galarce Economista, Universidad de Chile, investigadora del Grupo de Trabajo "Economía Mundial y Crisis" (CLACSO). Se desempeñaba como economista en el Banco Central de Chile al momento del golpe.

Catalina Ganga-León Psicóloga, Universidad de Chile. MSc. Social Policy and Public Health, Utrecht University. Su campo de estudio se ha centrado en la psicología social del trabajo, las desigualdades de género en los trabajos de cuidados y el análisis comparativo de políticas públicas.

Luis Garrido Soto Licenciado en Historia, Universidad Alberto Hurtado, 2013. M.A. (Sociología, 2018) y Ph.D© en Sociología en SUNY-Binghamton. Autor, *La "vía chilena" al socialismo: Un itinerario*

geohistórico de la Unidad Popular en el sistema-mundo (Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2015) y varios artículos sobre la Unidad Popular en el capitalismo histórico (https://binghamton.academia.edu/LuisGarrido).

Franck Gaudichaud Doctor en Ciencias Políticas, catedrático en Estudios Latinoamericanos, Universidad Toulouse 2-Jean Jaurès, Francia. Autor de varios artículos y libros sobre América Latina, incluyendo: (ed.) *Los gobiernos progresistas latinoamericanos del siglo XXI. Ensayos de historia del tiempo presente (1994-2018)* (2019); *Las fisuras del neoliberalismo maduro chileno. Trabajo, democracia protegida y conflictos de clases* (2015).

Taeli Gómez Francisco Abogada, doctora en Ciencias Filosóficas de la Universidad de La Habana, Cuba. Académica titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de las Universidad de Atacama, Chile. Coordinadora y creadora del Programa para la Enseñanza Integral del Derecho+Complejidad (PEID+C). Trabaja la complejidad en la educación y el derecho. Correo: taeli.gomez@uda.cl

Paula Malhue Torres Investigadora y profesora de Historia y Ciencias Sociales. Licenciada en Historia, Universidad de Artes y Ciencias Sociales. Cursando magíster en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Diplomada en Pueblos Indígenas en Chile y América Latina, IDEA-USACH. E-mail: paula.malhue@usach.cl.

Jaime Navarrete Vergara Doctorando en Historia, Universidad de Santiago de Chile (USACH). Becario CONICYT/ANID. Correo: jaime.navarrete.vergara@gmail.com

Luis Osandón-Millavil Académico del Departamento de Estudios Pedagógicos, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus ámbitos de interés son el currículum

escolar, la educación ciudadana y los idearios pedagógicos desde un enfoque histórico-cultural.

Kemy Oyarzún V. Escritora de ensayos, profesora titular del Departamento de Literatura y presidenta de ACAUCH. Fundadora de CEGECAL y *Revista Nomadías*. De sus ensayos destacan *Polifonías del cuerpo: Género y Literatura* (Lom, en prensa), *Ideologemas de la postdictadura en Chile* (Cuarto Propio, en prensa) y *Tinta Sangre* (Cuarto Propio, 2014).

Fernando Pairican Doctor en Historia, posdoctorante del Centro de Estudios Interculturales Indígenas (CIIR). Académico USACH y Alberto Hurtado. Director de la Colección Pensamiento Mapuche Pehuén Editores.

Sandra Palestro Contreras Socióloga, feminista. Integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Eugenia Palieraki Profesora de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Cergy-Pontoise, Francia. Sus intereses de investigación actuales se enfocan sobre los vínculos políticos y la circulación de ideas, prácticas, y activistas revolucionarias entre América Latina y la cuenca mediterránea. Su última monografía es ¡La revolución ya viene! El MIR chileno en los años sesenta (Chile: LOM Ediciones, 2014).

Aníbal Pérez Contreras Doctor en Historia, Universidad de Santiago de Chile. Investigador responsable proyecto FONDECYT Posdoctoral Nº 3200032, ICSO, Universidad Diego Portales.

Patricio Quiroga Z. Dr. en Historia, Universidad Erich Weinert, Alemania. Correo electrónico: Patricioquir@gmail.com

Leonora Reyes-Jedlicki Académica del Departamento de Estudios Pedagógicos, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la Universidad de Chile. Es doctora en Historia por la Universidad de Chile. Sus ámbitos de interés son la historia de la educación, movimientos sociales y políticas educativas en Chile y América Latina.

Felipe Rodríguez Ulloa Psicólogo, Universidad de Chile. Magíster en Ciencias Sociales, mención Estudios de la Sociedad Civil, Usach. Se ha especializado en metodologías de investigación participativas y temáticas relativas a la psicología clínica y social-comunitaria, desempeñándose como funcionario público de la salud y docente universitario.

Juan Rubio González Psicólogo, licenciado en Psicología, magíster en Investigación Psicológica, diplomado en Pensamiento Complejo y en Psicología Educativa. Trabaja los procesos psicológicos, educativos y de enseñanza-aprendizaje, desde el paradigma científico de la Complejidad y el enfoque Histórico-Cultural. Correo: jj.rubio.72@gmail.com

María Olga Ruiz Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Investigadora y académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de La Frontera. Sus líneas de investigación son: historia reciente del cono sur latinoamericanos, la militancia revolucionaria setentista desde una perspectiva político-cultural y los estudios de género.

Pablo Ruiz Periodista chileno, defensor de derechos humanos, y editor del sitio https://www.derechoalapaz.com/. También es integrante del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch) https://soaw.org/inicio-2/, movimiento fundado por el ex sacerdote Roy Bourgeois, en Estados Unidos en 1990.

Carlos Ruiz Encina Sociólogo y doctor en Estudios Latinoamericanos, Académico de la Universidad de Chile y presidente de Fundación Nodo XXI

Isabel Torres Dujisin Doctora en Historia, profesora asociada, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile. Investiga Historia del Tiempo Presente, Historia Política, Historia Conceptual. Publicaciones recientes: "The role of forensic anthopology in the identification of missing detainees in Chile" en *Forensic Anthropology Teams in Latin America* (2020). Presentación, *La última catástrofe. La historia, el presente, lo contemporáneo*. de Henry Rousso. Ed. Gallimard y Ed. Universitaria. Santiago (2018).

Marie Juliette Urrutia Integrante del Trokiñ Peyepeye, licenciada en Historia por la Universidad de Santiago de Chile, estudiante de la Maestría en Antropología Social en CIESAS Sureste, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

Faride Zerán Profesora titular de la Universidad de Chile, periodista, escritora. Premio Nacional de Periodismo.

Sobre los compiladores

Robert Austin Henry Doctor en Historia Latinoamericana (La Trobe). Su investigación se enfoca en la historia postcolonial y neocolonial, a partir de la Guerras por la Independencia. Ha trabajado en Chile, México, Cuba y Venezuela periódicamente desde 1978, en varias universidades. Es autor o coautor de 70+ publicaciones académicas, entre ellas 10 libros; y 70+ publicaciones en revistas populares. Ver https://sydney.academia.edu/RobertAustin. Se le negó la entrada a Chile en 1997, por presunta participación en la fuga de prisioneros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de la Cárcel de Alta Seguridad en Santiago, capturado elocuentemente por el protagonista

Ricardo Palma Salamanca en su libro *El Gran Rescate*. Esto, lamenta, no es cierto. Correo: r.austin@sydney.edu.au

Viviana Canibilo Ramírez Vivió 25 años en el combativo barrio de La Legua en Santiago de Chile, hasta 1979. Participó en el programa de trabajo voluntario de la Unidad Popular; y es egresada de la Universidad Técnica del Estado, 1973-78 (con honores). Se desempeñó como profesora de Castellano y Economía Doméstica en escuelas secundarias públicas durante 35 años en Australia, abogando por la latinoamericanización curricular de Castellano. En 2018 el gobierno cubano la premió por su solidaridad vitalicia con la Revolución Cubana. Con Robert Austin H. es coautora intelectual del proyecto vigente, entre otros proyectos editoriales, más el archivo "ALAS" de solidaridad con América Latina y el Caribe, 1970-2020, Biblioteca Estatal de NSW, Sídney. Ver https://independent.academia.edu/VivianaRam%C3%ADrez8. Correo: vrcanibilo@gmail.com

Joana Salém Vasconcelos Doctora en Historia Económica por la Universidad de São Paulo (USP), con una tesis sobre la reforma agraria chilena y las pedagogías campesinas para transformación económica. Hizo una pasantía doctoral en la Universidad de California, Irvine (UCI). Tiene un Máster en Desarrollo Económico por la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), que resultó en el libro *História agrária da revolução cubana: dilemas do socialismo na periferia* (2016). Investiga las reformas agrarias en América Latina con enfoque en Cuba y Chile. Es asociada al Centro de Estudios de Historia Agraria de América Latina (Chile) y editora de Latin American Perspectives (EUA). Es activista de educación popular en la Rede Emancipa (Brasil). Correo: joana.salem@gmail.com. Ver https://fflch.academia.edu/JoanaSal%C3%A9m

LA VÍA CHILENA AL SOCIALISMO
50 AÑOS DESPUÉS

La vía chilena al socialismo. 50 años después representa un hito historiográfico y un extraordinario ejercicio de memoria que ilumina, desde una multiplicidad de lecturas, la experiencia de la Unidad Popular y el gobierno de Salvador Allende.

CLACSO presenta un escrito donde se entrelazan historias y memorias para construir una aproximación crítica y comprometida de uno de los acontecimientos más impactantes del siglo XX latinoamericano. Más de 80 autores y autoras confluyen con sus trabajos para producir una gran reflexión histórica sobre las izquierdas latinoamericanas que invita a pensar alternativas para el futuro de nuestros pueblos, renovando las luchas por sociedades más justas y humanas.

OCHOLIBROS

CLACSO
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais